



INSTITUTA  
DE LA  
JURISPRUDENCIA  
DE LA CAPITAL



INSTITUTA  
DE LA  
**JURISPRUDENCIA**



ESTABLECIDA POR LAS  
EXMAS. CÁMARAS DE APELACIONES DE LA CAPITAL

DE LA  
REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR EL

DR. J. J. HALL

(ABOGADO)

Comprende los tomos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22

de la Serie 5ª, Jurisprudencia Civil;

9, de la Serie 3ª, Jurisprudencia Comercial y Criminal;

1, 2, 3, 4 y 5, de la Serie 5ª, Jurisprudencia Comercial y Criminal.

---

TOMO IX



BUENOS AIRES

FÉLIX LAJOUANE Y C.ª EDITORES ••

143 - CALLE PERÚ - 143

1904







1<sup>a</sup>. **Abandono**—El domicilio del matrimonio á los efectos de seguir el juicio de divorcio, no es el que fija el marido después del abandono, sino el que tenía el matrimonio antes de producirse la separación—Civ., t. 22, p. 461, S. 5<sup>a</sup> (tom. 69).

**Abandono**—Véase: *Contrato de locación*, 11; *Domicilio*, 15; *Domicilio del matrimonio*, 1; *Divorcio*, 34 y 39.

1<sup>b</sup>. **Abandono del hogar**—Conyugal, para ocurrir á la justicia en demanda de divorcio, no importa una causal que permita la separación judicial de los esposos—Civ., tom. 14, pág. 336, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 61)

1<sup>c</sup>. **Abandono paterno**—Si el accidente en que se funda la demanda por indemnización de daños y perjuicios es debido al abandono que los padres hayan hecho del menor, no cabe responsabilidad contra el autor—Civ., tom. 9, pág. 226, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

1<sup>d</sup>. **Abandono voluntario**—Justificado el abandono vo-

---

1<sup>a</sup>. Este caso es exactamente igual al resuelto en el verb. *Domicilio*, 15.

1<sup>b</sup>. Es necesario que se note el propósito de faltar á los deberes conyugales, de eludir las obligaciones que el matrimonio impone para que se reconozca en el abandono una causa de divorcio, y tales circunstancias en manera alguna surgen del hecho de salir la esposa del hogar marital para promover en seguida demanda de divorcio por causales que la ley considera admisibles.

1<sup>c</sup>. Art. 51 de la Ley de Mat. Civ. y 602 á 604 de Proc.

1<sup>d</sup>. Arts. 51 de la Ley de Mat. Civ. y 602 á 604 del Cód. de Proc.



luntario de la esposa, debe fijarse la suma que por alimentos debe pagar el marido—Civ., t. 9, pág. 143, Ser. 3ª (tom. 56).

2ª. **Abandono voluntario**—El convenio sobre separación de hecho y la consiguiente ausencia del marido sin mandar alimentos, importan abandono voluntario—Civ., tom. 21, pág. 347, Ser. 3ª (tom. 68).

3. **Abandono voluntario**—El convenio sobre separación de hecho y la consiguiente ausencia del marido sin mandar alimentos, importan abandono voluntario—Civ., tom. 22, pág. 416, Ser. 3ª (tom. 69).

1. **Abogado**—Los autos que importen una corrección disciplinaria para el abogado, son apelables—Com., tom. 1, página 108, Ser. 3ª (tom. 36).

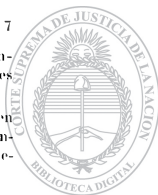
2ª. **Abogado**—El abogado del síndico puede válidamente

2ª. Esta cuestión no fué materia de resolución en la Cám., solo se presentó el argumento como concurrente en la solución de otras cuestiones con que el punto tenía atinencia. El principio consagrado en el sumario es exacto. Con efecto, el marido está obligado á vivir en una misma casa con su mujer, dice el art. 51 de la Ley de Mat., y á prestarle todos los recursos que le fueran necesarios; y el art. 53 de la misma ley dispone que la mujer está obligada á habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia, y que faltando á esa obligación, el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias, con derecho para negarle alimentos. Resulta de estas disposiciones, que es recíproca la obligación de vivir en un mismo hogar, con esta diferencia: que el esposo puede pedir las medidas judiciales necesarias para que el matrimonio se conserve en su integridad. El marido, que es la parte fuerte de esta unión, que tiene la representación exterior de la familia, que administra el patrimonio, que actúa solo en la escena civil, no puede ni debe consentir acto alguno que implique una transgresión á los preceptos que rigen el matrimonio, y procediendo de distinta manera, abdica la investidura que la ley le ha conferido, deserta de sus deberes, y según los casos, incurre hasta en lo que la ley califica de abandono voluntario y malicioso del hogar.

3. Tampoco este punto de derecho fué materia de resolución especial, sino que incidentalmente se desarrolló el principio en el curso de la exposición de la doctrina, como concomitante para resolver otros puntos de derecho sometidos á la resolución de la Cám.

1. Art. 53 del Cód. de Proc.

2ª. La disposición del art. 1361, inc. 6ª del Cód. Civ. se refiere á los



comprar en remate judicial bienes de los deudores del concurso; la prohibición de la ley solo se refiere á los litigantes—Com., tom. 2, pág. 112, Ser. 5ª (tom. 37).

3. **Abogado**—Los honorarios de abogado y procurador en el escrito del fallido pidiendo la quiebra, son de cargo del concurso, con privilegio general—Com., tom. 4, pág. 396, Serie 5ª (tom. 39).

4. **Abogado**—Los honorarios del abogado del síndico, solo pueden ser regulados de oficio en la oportunidad que el Código determina—Com., tom. 5, pág. 225, Ser. 5ª (tom. 40).

5. **Abogado**—Cuyos honorarios se regulan en la condenación en costas, carece de personería para interponer apelación—Civ., tom. 10, pág. 402, Ser. 5ª (tom. 57).

6. **Abogado**—El abogado y procurador deben usar estam-

bienes que estuviesen en litigio; es decir, sujetos á juicio contencioso ante los tribunales.

3. Los trabajos practicados por el apoderado y abogado del fallido para presentarlo en quiebra, son en interés común de todos los acreedores y en cumplimiento de una obligación que la ley impone, teniendo precisamente en cuenta ese interés. Por lo tanto, el importe de dichos trabajos goza del privilegio establecido por el inc. 1º del art. 1499 del Cód. de Comercio.

4. La oportunidad está fijada en los arts. 1567 y 1568 del Cód. de Com.

5. Entre el letrado que patrocina á una parte y la contraria no existe ningún vínculo de derecho con motivo del pleito. En tal concepto, el letrado carece de personería para reclamar de sus honorarios cuando la parte contraria á la que patrocina ha sido condenada al pago de las costas. La condenación en costas de una de las partes da derecho á la contraria para reclamarlas, pero ningún derecho acuerda á su letrado, que no es parte en el pleito y que solo tiene derecho contra su cliente. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cám. en varias resoluciones. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Abogado*, 1; tom. 4º, mismo verb. núm. 1, y *Honorarios*, 7.

6. La estampilla que deben usar los abogados y procuradores equivale á la patente que deben pagar por razón de su profesión. El impuesto es, pues, personal; de manera, que aunque defiendan á una persona que tiene privilegio para no usar el papel sellado, no pueden ellos acogerse á ese privilegio, ni el sello de actuación equivale á la estampilla.



pillas, aun cuando la parte á quien representan no esté obligada al uso de papel sellado—Civ., tom. 10, pág. 417, Serie 5ª (tom. 57).

**Abogado**—Véase: *Honorarios*, 4, 6, 9, 19, 23, 27, 31, 36 y 38; *Honorarios del abogado*, 1; *Divorcio*, 28.

1ª. **Abogados**—Los abogados y procuradores que prestan sus servicios á la Municipalidad, tienen derecho á cobrar honorarios á la parte condenada en costas, aun cuando perciban sueldo del erario municipal—Civ., t. 11, p. 249, S. 5ª (t. 58).

2ª. **Abogados**—El hecho de no usar estampilla los abogados ó procuradores, no enerva su derecho á cobrar honorarios: deben ser simplemente obligados á la reposición—Civ., tom. 11, pág. 249, Ser. 5ª (tom. 58).

1ª. **Absolución del reo**—Si la prueba no es plena, debe absolverse al procesado—Crim., t. 1, p. 246, S. 5ª (tom. 36).

2. **Absolución del reo**—Debe absolverse al acusado como autor del delito, si no resulta prueba en su contra—Crim., tom. 1, pág. 372, Ser. 5ª (tom. 36).

**Absolución del reo**—Véase: *Acusado*, 2.

1ª. **Abuela**—El derecho á la tutela que la ley confiere á la

1ª. El art. 62 del apéndice al Cód. de Proc. establece qué cuando haya condenación en costas, no se hará cargo alguno por la defensa del litigante que haya vencido, si sus escritos no estuviesen firmados por abogados de la matrícula. Esta es la única limitación impuesta por la ley. Cualquiera otra causa que resulte en estos casos no es bastante para que el vencedor no abone las costas de su contrario.

2ª. Por la misma razón aducida en el número precedente.

1ª. La prueba producida consistía en declaraciones sumamente inciertas, á las cuales faltaban el requisito del art. 358 del Cód. de Proc.

1ª. Los jueces al dar ó confirmar la tutela legítima deben proceder con un criterio discrecional, con arreglo á la letra de los arts. 391 y 392 del Cód. Civ., no acordando el cargo sino al pariente que por sus bienes ó buena reputación fuese idóneo para ejercerla, salvo que alguna causa aconseje la separación del orden establecido en el art. 390. Por este artículo, la tutela corresponde á la abuela: solo constando la existencia de algún hecho que implique incapacidad ó falta de idoneidad por parte de la abuela para ejercer el cargo, puede separarse del orden allí establecido. Se alegó en el caso del sumario que la avanzada edad,



abuela sobre los nietas, solo puede negársele par causas fundadas—Civ., tom. 10, pág. 395, Ser. 5ª (tom. 37).

**1. Abuso de autoridad**—El que ejerce autoridad para detener puede cometer el delito de abuso de la misma, pero no el de usurpación—Crim., t. 4, pág. 279, Ser. 5ª (tom. 39).

**2. Abuso de autoridad**—No puede conceptuarse reite-

era un obstáculo á ese nombramiento, pero la Cám. dijo que esa causal no era bastante, cuando como lo había comprobado en este caso el juez, *de visu*, á pesar de la avanzada edad de la abuela, el espíritu conserva todo su vigor. La Cám. comprobó efectivamente que la abuela gozaba de toda la amplitud de sus facultades intelectuales y de la salud compatible con su edad.

1. El acusado era el Gefe de Policía. Los hechos imputados los siguientes: 1º Haber detenido á varias personas, sin ponerlas á disposición del juez competente! 2º Haber allanado el domicilio de una de ellas sin las formalidades prescriptas por la ley. Estos dos hechos están espresamente previstos por el art. 243 del Cód. Pen. y calificados de abuso de autoridad. No había, pues, imputación alguna del delito de usurpación de autoridad, desde que los dos hechos referidos, que eran los únicos que surgían del proceso, no daban lugar á esa calificación, sino á la de abuso, dados los términos espresos de los inces. 2º y 3º del art. citado del Cód. Pen.

2. En el caso de la nota precedente, los hechos imputados demuestran que no hay concurrencia de los delitos de usurpación y abuso de autoridad. Pero además de las prisiones que se efectuaron hubo un allanamiento; por esto ¿habrá reiteración de delito? Todas las constancias del sumario, que contenía una minuciosa enumeración de los cargos que resultaban contra el acusado, demostraban acabadamente que los distintos hechos cuya ejecución se atribuía á éste, respondían al único propósito de descubrir á los autores de un homicidio perpetrado, y en tales condiciones, aun cuando se trata de distintos hechos, la doctrina de los más reputados tratadistas enseña que no hay más que un solo delito: «Siempre que varios hechos, punibles aisladamente, están ligados entre sí por la unidad de concepción y de objeto, su reunión no constituye más que un solo delito.»—Haus, tom. 1º, número 376.—El mismo autor en el número siguiente agrega: «Una persona puede cometer varios hechos de la misma naturaleza, de los cuales es punible cada uno, considerando aisladamente.» Si estos hechos, más ó menos numerosos, son la ejecución sucesiva de una misma resolución criminal, no forman más que una sola infracción, porque la unidad de concepción y de objeto entraña la unidad del delito. Tales son, desde luego, las infracciones que se componen de cierto número



ración del delito de abuso de autoridad, la prisión de diversas personas en virtud de una sola causa —Crim., tom. 4, página 279, Ser. 5ª (tom. 39).

**Abuso de confianza**— Véase: *Hurto*, 4.

1. **Acarreador**—Las disposiciones reglamentarias de las empresas de transportes, no obligan á los cargadores, aun estando aprobadas por el Poder Ejecutivo, si no han sido publicadas en el Registro Oficial ó llevadas á su conocimiento por convenio especial que debe justificar el acarreador—Com., tom. 1, pág. 38, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Acarreador**—El acarreador es responsable por los da-

---

de hechos delictuosos que el autor ha repetido varias veces para realizar un solo y mismo proyecto criminal.» Carrara en su *Corso di diritto criminale*, tom. 1º, núm. 537, desarrollando la misma doctrina, concluye así: «La unidad de determinación de ley violada y de acción, constituye el delito único aunque haya pluralidad de actos.» Puede establecerse, pues, de acuerdo con la doctrina de estos autores, que en el caso que nos ocupa no hay concurrencia de delitos, sino un delito único.

1. La existencia de esas disposiciones reglamentarias no había sido legalmente probada por el demandado, pues ni ella constaba de la carta de porte, ni se había exhibido el reglamento que contenía esa estipulación. Solo se comprobó que por un decreto de 8 de Julio de 1887, el P. E. había aprobado un reglamento de la empresa, pero ni éste figuraba en el Registro Oficial, ni se había probado de otra manera que dicho reglamento hubiese sido debidamente publicado, y menos que contuviese la cláusula que la empresa invocaba en su defensa. Es evidente, entonces, que en esas condiciones, es absolutamente imposible atribuir fuerza obligatoria alguna á dicho reglamento.

2. La demanda reconocía por causa la ejecución negligente de un contrato de transporte de animales, y tenía por objeto obtener la indemnización de los perjuicios sufridos y la devolución proporcional del flete pagado. La negligencia del acarreador se hacía consistir en haberse retardado la conducción de los animales cerca de diez horas más de lo necesario, y en no haberse empleado las diligencias convenientes para la buena conservación de aquéllos, circunstancias que habían ocasionado la muerte de una parte de los animales, sin que hubiese constancia en autos de las causas que produjeron ese resultado. Estaba también probado que los vagones que conducían la carga, estuvieron demorados algunas horas en una estación, pero como no había antecedente alguno acerca de la distancia que media entre el punto de embarque y el de destino, no ha podido establecerse que hubiese habido retardo en los tér-



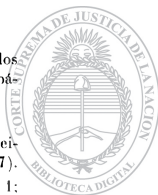
ños y perjuicios que sufran los animales á su cargo, imputable á descuido ó negligencia de sus empleados—Com., t. 1, pág. 38, Ser. 5ª (tom. 36).

### 3. **Acarreador**—La empresa de transporte demandada

minos del art. 187 del Cód. de Com. No sucedía lo mismo en cuanto á la falta de todo cuidado por parte de la empresa, porque ese fué un hecho perfectamente comprobado en autos, y que la misma empresa demandada reconoció categóricamente. Ahora bien, partiendo de estos tres hechos conocidos: pérdida de los animales; ignotancia sobre las causas de la muerte; y falta de todo cuidado por la empresa, es el caso de preguntar ¿tiene ésta responsabilidad legal por los perjuicios sufridos por el destinatario de esos animales? La cuestión no ofrece duda de ninguna especie ante los preceptos clarísimos y terminantes con que el Cód. de Com. ha legislado la responsabilidad de los acarreadores, por pérdidas ó averías de las cosas transportadas. Según los arts. 169, 172, 173 y 177, el acarreador solo está exento de la responsabilidad que establecen los arts. 162 y 179 y siguientes, cuando las pérdidas ó averías provienen de vicio propio de las cosas, fuerza mayor, caso fortuito, ó hecho del remitente ó destinatario. La prueba de cualquiera de estas circunstancias, no mediando estipulación contraria, corresponde al acarreador, puesto que en el silencio de la carta de porte se presume que las cosas han sido recibidas en buen estado—arts. 172 y 175.—Aplicando, pues, estas disposiciones, tenemos que no habiéndose hecho salvedad ni reserva alguna por la empresa, al tiempo de recibir los animales, debe presumirse que fueron embarcados en buen estado, y que la muerte provenía de falta imputable al acarreador, desde que por su parte no justificó, ni siquiera alegó que ese accidente fuese debido á alguna de las circunstancias que excluyen su responsabilidad. Es verdad que la Empresa ha pretendido que el transporte se convino en las condiciones que fija su reglamento, y que según éste, tratándose de animales, la Empresa no tiene responsabilidad alguna por los accidentes que puedan sufrir durante el viaje, porque es obligación del cargador hacerlos cuidar por sí mismo. Pero la existencia de esta condición del contrato no ha sido legalmente probada por el demandado como se ve en el sumario precedente.

3. Se trataba de una cuestión sobre carga que había sido transportada por los ferrocarriles de C. y R. y B. A. y R. Estableciéndose en el art. 2155 del Cód. Civ., que la evicción procede en los casos de subrogación legal, subrogación que el art. 171 del Cód. de Com. acuerda espresamente en favor de los acarreadores subsiguientes por todos los derechos que como acarreador pudiera tener con relación al cargador, los acarreadores anteriores. La ocasión de hacer valer esos derechos, puede legalmente presentarse cuando se trata de contestaciones judiciales entre cargadores y acarreadores por causa del transporte. En





por el cargador, tiene derecho para citar de evicción á los acarreadores anteriores ó subsiguientes—Com., tom. 1, página 94, Ser. 5ª (tom. 36).

**Acarreador**—Véase: *Cargador*, 1.

1ª. **Accidente**—Si resulta casual, procede el sobreseimiento definitivo—Crim., t. 4, pág. 362, Ser. 5ª (tom. 37).

**Accidente**—Véase: *Abandono paterno*, 1; *Conductores*, 1; *Daños y perjuicios*, 6 y 43; *Indemnización*, 2.

1ª. **Acción**—No procede la formación de incidentes, aun cuando sean varios los querellantes, si la acción se funda en el mismo hecho—Crim., tom. 3, pág. 49, Ser. 5ª (tom. 38).

2. **Acción**—El ejecutante no puede cambiar su acción contra otro de los obligados, en tanto no justifique la insolvencia del deudor—Com., tom. 5, pág. 268, Ser. 5ª (tom. 40).

3. **Acción**—Cualquiera que sea la calificación que las partes den á la acción deducida, los jueces solo pueden sentenciar con arreglo á las disposiciones del derecho que rigen los actos reconocidos—Civ., tom. 17, pág. 421, Ser. 5ª (tom. 64).

**Acción**—Véase: *Contrato*, 2 y 19; *Bolsa*, 2; *Mandamiento*,

art. 2108 del Cód. Civ. hace espresamente obligatoria la comparecencia al juicio, previa citación de evicción.

1ª. Art. 434 del Cód. de Proc. Crim.

1ª. La querella fué promovida contra dos individuos como responsables del mismo hecho. Por esta razón, sean cuales fueron las defensas ó excepciones que los querellados puedan hacer valer en su favor, tal circunstancia no autoriza á romper la continuidad de la causa, ni puede legalmente invocarse para obligar al querellante á seguir diversos procesos—ley 12, tít. 1º; ley 8ª, R. C.; Tejedor, Parte 2ª, núm. 419—máxime cuando ambos querellados habían contestado la querella, sin formar artículo de previo y especial pronunciamiento, limitándose por el contrario á alegar sus defensas como razón general de oposición.

2. Se trataba de la ejecución de una letra de cambio. Si bien el portador puede dirigir su acción contra cualquiera de los obligados á su cargo, una vez intentada contra algunos de ellos no puede ejercerla contra los demás sino en caso de insolvencia del demandado—art. 669, Cód. de Com.

3. De acuerdo con la jurisprudencia.—Véase: Inst., tom. 1º, verbo *Utilidad*, núm. 1842.



4; *Calumnia*, 3 y 4; *Costas*, 6 y 10; *Incompetencia*, 1; *Injurias*, 5; *Lauda*, 1; *Prueba testimonial*, 2; *Aceptación*, 1; *Defraudación*, 11; *Escritura pública*, 1 y 2; *Excepción de prescripción*, 2; *Mandato*, 3; *Sociedad*, 4; *Acciones liberadas*, 1; *Aceptante*, 1; *Acreedor prendario*, 3; *Domicilio*, 2; *Daños y perjuicios*, 6; *Contrato de compraventa*, 6; *Contrato de locación*, 4; *Diligencias judiciales*, 1.

1<sup>a</sup>. **Acciones**—Declarada en oportunidad la caducidad de las acciones, debe ser desechada toda demanda de los socios sobre integración, después de liquidada y disuelta la sociedad —Com., tom. 5, pág. 388, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 40).

1<sup>b</sup>. **Acción ejecutiva**—La fianza separada de la obligación principal, no puede fundar una acción ejecutiva —Com., t. 5, pág. 242, Ser. 5<sup>a</sup>, (tom. 40).

1<sup>c</sup>. **Acción eschuyente**—Los acreedores que no han dedu-

1<sup>a</sup>. No existiendo la sociedad desaparece el objeto de la obligación: esto es, las acciones de dicha sociedad.

1<sup>b</sup>. El documento era una simple fianza otorgada á favor del acreedor en garantía de un crédito. De él no resultaba que la fianza fuese solidaria y, por consiguiente, la acción contra el fiador no procede sino después de hecha escusión en todos los bienes del deudor —art. 2042, Código Civ. —Contra esta conclusión se argumentaba con el carácter mercantil de la fianza, pero si bien en tal caso ella sería solidaria, tal carácter no resultaba del documento mismo y necesitaría ser acreditado por otro género de pruebas. En tales condiciones, el documento no puede dar lugar á un juicio ejecutivo, porque éste solo procede cuando se funda en un título que tiene fuerza suficiente para constituir por sí mismo plena probanza —Caravantes, tom. 3<sup>o</sup>, núm. 1101.

1<sup>c</sup>. En un juicio seguido contra una sucesión se procedió á ejecutar una sentencia á fin de obtener el cobro de un crédito. Vendidos algunos bienes se pidió la entrega de los fondos, la que fué ordenada por el juez previa conformidad de partes: hubo oposición á esa entrega fundándose en que: «no se había pagado aún un solo peso por los gastos que había ocasionado la tramitación de la testamentaria; que los gastos de justicia hechos en el interés de la sucesión y por consiguiente, tanto de los acreedores como de los herederos, tienen privilegio general sobre todos los bienes inmuebles que constituyen el haber testamentario —art. 3879, inc. 1<sup>o</sup> del Cód. Civ. —Siendo esto así, y no pudiendo establecerse, sin previa liquidación del haber testamentario, si existen ó no fondos sobrantes para el pago de los acreedores, es incuestionable que estos no pueden exigir la entrega del todo ni de parte de su crédito.

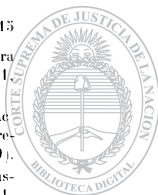


eido acción excluyente, carecen de derecho para oponerse á la ejecución de sentencia que ordena el pago de deudas de la testamentaria—Civ., tom. 22, pág. 447, Ser. 5ª (tom. 69).

### 1. Acción contra el liquidador—Corresponde á la ju

Aun en la suposición de que el haber testamentario alcanzase para el pago de los gastos causídicos, existen otros créditos que siempre tendrían privilegio sobre el de los ejecutantes por ser simplemente quirografario.» Conferido traslado, la parte lo evacuó; estableciendo lo infundado de la oposición. «Basta leer estos autos para convencerse de que por parte de los encargados de liquidar la testamentaria no se ha hecho absolutamente nada, y si no hubiera sido por este juicio, en el cual se ha provocado la liquidación de parte del caudal testamentario, puede tenerse la seguridad de que se encontraría en las mismas condiciones del principio, desde los largos años que se inició el juicio. Recién ahora, cuando se trata de cobrar trabajos que no han redundado en beneficio común, es que deducen oposiciones á la ejecución de un crédito en que se ha tenido la paciencia de gestionarlo durante tanto tiempo. Según la disposición del art. 527 del Cód. de Proc., sin estar reintegrado completamente el ejecutante, no podrán aplicarse las sumas realizadas á otros objetos, á menos que sea para las costas de la ejecución ó para pago de otro acreedor que haya sido declarado preferente por ejecutoria. Este no es el caso, y la disposición del artículo mencionado es completamente aplicable ahora, mucho más cuando se trata del cumplimiento de una sentencia, no existiendo ejecutoria ninguna que declare preferente á otros créditos. Es un absurdo pretender que espere que la testamentaria haya sido liquidada, lo que no podría fundarse en precepto alguno legal; por el contrario, existe la disposición de que los acreedores puedan ejercer los derechos y acciones de su deudor, como lo determina el art. 1196 del Cód. Civ., lo que se ha hecho en este caso. Además, existe el hecho curioso de que en el escrito que contestó, sus firmantes no ejercen la representación de la testamentaria, sino que vienen á gestionar sus propios intereses. Demandan el pago de los gastos causídicos que ellos han devengado y manifiestan que existen otros créditos que tendrán privilegio sobre el que se ejecuta. Tanto en uno como en otro caso, la testamentaria no puede tener interés en discutir la preferencia de créditos ajenos, y el postulante no es el representante de otros acreedores privilegiados para defender sus intereses. Si ningún acreedor de los que se pretenden privilegiados tiene ejecutoria en su favor, como lo determina el art. 527 del Cód. de Proc., entonces no queda otro camino que mandar continuar la ejecución de la sentencia, ordenando la entrega de los fondos como ha sido solicitado.» Por los fundamentos de esta petición se resolvió de acuerdo con lo pedido en él.

1. A un liquidador de una sociedad comercial, no puede reconvenir-



jurisdicción ordinaria, el conocimiento de las acciones contra el liquidador por mal desempeño de su cometido—Com., t. 1, pág. 149, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Acción pauliana**—Si se deducen conjuntamente acción pauliana y reivindicatoria, no procede el embargo preventivo de los bienes—Com., t. 4, p. 407, Ser. 5ª (tom. 39).

1ª. **Acción personal**—Solo procede contra los socios, justificada la inexistencia de bienes de la sociedad—Com., t. 1, pág. 194, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Acción posesoria**—El constructor de la obra, carece de derecho para deducir acciones posesorias contra el propietario—Civ., tom. 22, pág. 467, Ser. 5ª (tomo 69).

1ª. **Acción reivindicatoria**—El defraudado carece de ac-

sele por mal desempeño de sus funciones sino ante el Juez de Comercio. Aunque la cuestión hubiera de ser resuelta por árbitros, es ante el Juez de Comercio donde debe constituirse el tribunal arbitral.

1ª. Tratándose de dos acciones distintas y excluyentes, una de las dos debe desaparecer. No siendo posible saber si la que quedará en pie es la de reivindicación, falta la base indispensable para decretar el embargo preventivo solicitado.—art. 447, Cód. de Proc.

1ª. Art. 443 del Cód. de Com.

1ª. El actor contrató la obra como simple empresario, encargando la construcción á otros albañiles. Habiendo sido desposeído de la obra dedujo el interdicto de recobrar. Con arreglo á los arts. 2487, Cód. Civ., y 581, inc. 1ª, Cód. de Proc., las acciones posesorias solo corresponden á los poseedores de inmuebles. El empresario no había tenido la posesión de la obra materia del interdicto. El art. 2351, Cód. Civ., estatuye que habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí ó por otra, tenga una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad; y de autos no constaba que el actor hubiese tenido la casa bajo su poder, con el ánimo de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad; resultando más bien que su rol se limitó á prestar sus servicios como locador de los mismos.

1ª. El art. 2765 del Cód. Civ., no era aplicable al caso por no constar de la causa que los objetos vendidos hubiesen sido perdidos ó robados, condición que sería necesaria para que fuese procedente la acción de reivindicación, aunque ellos se encontraren en poder de un tercero poseedor de buena fe. Los arts. 2766 y 2767 del Cód. citado exceptúan expresamente los casos en que los objetos ó cosas sustraídas provengan de un abuso de confianza, violación de un depósito ó algún acto de en-



ción reivindicatoria contra los terceros de buena fe compradores en remate público de los objetos que dieron origen al delito — Civ., tom. 3, pág. 404, Ser. 5ª (tom. 38).

**2. Acción reivindicatoria**— Los muebles motivo de una acción reivindicatoria, no pueden ser vendidos como del concurso sin previa resolución del juicio — Com., tom. 5, página 325, Ser. 5ª (tom. 40).

**3. Acción reivindicatoria**— Si los muebles materia de la acción fuesen vendidos, el derecho subsiste sobre el producido — Com., tom. 5, pág. 325 Ser. 5ª (tom. 40).

**4. Acción reivindicatoria**— Debe rechazarse la acción

---

gaño ó estafa que haya hecho salir la cosa del poder del propietario, determinando el segundo que la acción de reivindicación no es procedente contra el poseedor de buena fe que hubiese pagado su valor.

2. Arts. 1518 y 1519 del Cód. de Com.

4. La reivindicación, dice el art. 2758 del Cód. Civ., es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la que el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica contra aquel que se halla en posesión de ella. Al establecer la ley que se trata de una acción que nace del dominio, es evidente que el que la intenta debe probar que legalmente es dueño de la cosa que procura reivindicar, no solo por haberse operado la transmisión del derecho por un acto jurídico, sino también por habersele hecho tradición de la cosa ó por habersele puesto en posesión de la misma. Sin la reunión de estos dos elementos, no existe el derecho de propiedad en el reivindicante, y no es consiguientemente admisible la acción reivindicatoria — arts. 3265 y 2758 del Cód. Civ. — En virtud de estas razones, debe observarse, que la prueba del actor no puede reducirse á demostrar que se le ha transmitido por contrato el derecho al terreno controvertido, sino que debe extenderse á comprobar que se le ha puesto en posesión de él, pues de otra manera, ni habría derecho de dominio ni acción reivindicatoria. Esta prueba es fácil cuando la persona que se encuentra en posesión de la cosa, carece de título para acreditar su derecho de poseer, porque entonces le basta al reivindicante presentar su título si es de fecha anterior á la posesión del demandado ó exhibir el de sus antecesores hasta conseguir que haya prioridad á la posesión de que se trata — arts. 2789 y 2790 del Cód. Civ. — En estos casos la ley le favorece con la presunción de que es dueño, y toca al demandado demostrar que su posesión es bastante para haber adquirido el dominio por la prescripción, por cuanto carece de otro título. Pero en el presente caso, el demandado era poseedor, y había exhibido título de dominio sobre el

reivindicatoria entre linderos, si el actor no justifica haber

terreno que se discutía, por cuya razón la presunción legal le es favorable. El art. 2792 del Cód. Civ. lo releva de la prueba, fundándose en el conocido principio de derecho: *in pari causa melior est conditio possidentis*. Y nótese, que la circunstancia de que el título del actor sea de fecha anterior al que presente el demandado, no es una razón para que deje de ser aplicable al caso el artículo referido. Para convencerse de esto basta recordar la doctrina de Pothier, que el codificador recuerda en la nota del art. 2792 á que se alude: «La escuela de los proculayanos, dice, sostenía, que en el caso del artículo, debía preferirse al del título más antiguo, que hubiese tomado primero posesión de la heredad; pero prevaleció la escuela de los sabinianos que enseñaba que debía preferirse al que tenía la posesión de la cosa.» En tal concepto, y dados los antecedentes espuestos por las partes en la demanda y contestación, toca al actor demostrar que ha sido despojado de su posesión por el demandado; y de no acreditar el despojo, le tocaría probar que él ó sus antecesores tienen prioridad, en la posesión del terreno discutido, á los antecesores del demandado, por cuanto éste invocaba en su apoyo la prioridad de sus enajenantes en la posesión de que se trata. Así queda planteado el punto que propiamente se discutía en este caso, y que debía ser materia de la prueba, pues los demás elementos que exige el ejercicio de la acción intentada, están claramente cumplidos y no fueron tampoco controvertidos. Con los títulos de propiedad presentados, la parte actora acreditó que tenía derecho á poseer la estensión del terreno que le confieren los títulos; lo que real y positivamente no es materia de la discusión. El demandante, en efecto, espuso en la demanda que el demandado carecía de título sobre el terreno en cuestión y que había sido despojado por éste. Por su parte el reo sostuvo, que el actor no ha tenido posesión del terreno aludido, porque «el posee actualmente la que tenía su enajenante á título de propietario, según lo demuestran sus títulos.» Como se ve, la cuestión no versaba sobre el derecho de poseer, que es á lo que se reducen los títulos del propietario; la controversia se refiere al hecho de la posesión misma que es indispensable para la procedencia del juicio petitorio. Es verdad que de los títulos exhibidos, resultaba que la venta hecha al actor fué judicial y que se le dió posesión del terreno en la forma en que lo ilustran los testimonios; pero de aquí no resulta la demostración del despojo que se atribuye al demandado, ni tampoco es ésta una circunstancia para que legalmente importe la prioridad de la posesión del actor. Para que el acto del Juzgado á que se alude, ordenando la entrega de la posesión del terreno vendido produjera efectos legales y fuera capaz de destruir la presunción con que la ley favorece la posesión actual del demandado, habría sido preciso que se hubieran llenado los recaudos de forma que prescribe el art. 568 del Cód. de Proc., porque la posesión





tenido la posesión y el demandado solo posee la extensión que expresen sus títulos—Civ., l. 19, pág. 333, Ser. 3ª (tom. 37).

se conserva solo *animus*, y no es admisible, que porque el oficial de justicia estienda la diligencia de posesión sin haberse prevenido al que pudiese poseer, como lo manda el art. 368 ya citado, se declarara que ha perdido la posesión. Un temperamento semejante, importaría dejar al poseedor sin garantía de ninguna especie ú obligarlo á que tuviera constante atención en los inmuebles que no ocupa, pero que posee solo ánimo—art. 2445 y concordantes del Cód. Civ.—Por eso es, que el artículo 2383 establece: que para juzgarse hecha la tradición de los inmuebles, no estando el adquirente en la simple tenencia de ellos, es necesario que el inmueble esté libre de toda otra posesión, y sin contradictor que se oponga á que el adquirente la tome, lo que no constaba en la entrega de la posesión á que aludía el actor, precisamente por no haberse cumplido con la publicidad que manda el art. 368 del Cód. de Proc. Además, el art. 2453 establece: que la posesión se pierde por el hecho de un tercero, cuando sea desposeído el poseedor ó el que tiene la casa por él, siempre que el que lo hubiese arrojado de la posesión la tome con ánimo de poseer. Como se ve, pues, la ley exige que haya reconocimiento por parte del poseedor, de los actos del tercero, porque así resulta del texto de los artículos referidos, y de los casos análogos previstos en los arts. 2456 á 2460. Ilustrando el codificador el art. 2453, no queda ninguna duda de la mente de la ley. En esa nota se recuerdan los ejemplos de Pothier, con el propósito de aclarar el sentido del artículo: «Somos desposeídos, dice, y perdemos la posesión de una heredad, cuando es echado de ella el que poseía por nosotros, aun antes de que tengamos noticia del hecho.» «Se juzga que somos arrojados de nuestra heredad, no solo cuando por fuerza se nos obliga á salir, sino también cuando estamos ausentes se nos impide por la fuerza entrar en ella. Y aun basta para juzgarnos arrojados de la heredad propia, saber que otros la ocupan con intención de usar de la violencia para impedirnos entrar y nos abstenemos por esto de volver á ella.» Si el demandante hubiera acreditado que al darle la posesión judicial de la fracción del terreno sabía el antecesor del demandado la posesión que adquiría, y éste hubiese permanecido inactivo, entonces la diligencia judicial invocada, podría producir efectos legales. Pero, en este caso, no se demostró esos extremos, de modo, que la posesión del causahabiente del demandado que era anterior, según resulta de las escrituras, se presume legalmente subsistente, porque el demandado posee actualmente é invoca la posesión de su antecesor, y porque está relevado de la prueba en virtud de lo mandado en los arts. 2363 y 2792. La diligencia de posesión de referencia, no es más que una simple formalidad para hacer efectivo lo convenido en el acto jurídico celebrado, pero no puede servir para afectar ó menoscabar los derechos de terceros, cuan-



5. **Acción reivindicatoria**—Si la cosa mueble no ha sido robada ni perdida, aun cuando se haya obtenido por un abuso de confianza, no procede acción reivindicatoria—Civ., tom. 13, pág. 405, Ser. 3ª (tom. 60).

6. **Acción reivindicatoria**—Para que la acción reivindicatoria pueda prosperar, el reivindicante debe justificar que ha tenido la posesión a título de dominio y que la ha perdido—Civ., tom. 14, pág. 96, Ser. 3ª (tom. 61).

7. **Acción reivindicatoria**—Para que pueda prosperar, el demandante debe justificar la posesión y su pérdida—Civ., tom. 15, pág. 344, Ser. 3ª (tom. 62).

de estos están ajenos a la diligencia y ni siquiera son llamados a que ejerzan sus derechos.

5. Arts. 2442, 2758, 2765 y 2766 del Cód. Civ.

6. Art. 2758 del Cód. Civ.

7. El actor comprobó por medio de la competente escritura pública haber adquirido en el año 1892 el inmueble materia de la reivindicación. Se hacía necesario para resolver sobre la procedencia de la acción deducida, si se habían llenado los requisitos exigidos por el art. 2758 del Cód. Civ. La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual «el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella.» No basta simplemente que se acompañe una escritura de propiedad ó de compraventa, es indispensable también que el reivindicante acredite que ha tenido la posesión de la cosa y que ha perdido esa posesión. De autos no aparecía en manera alguna comprobado tal extremo, ni siquiera se había intentado prueba alguna á este efecto; pues lejos de esto, la actora en su alegato reconoció la posesión por más de veinte años del demandado, diciendo «que para adquirir la propiedad de un inmueble, cuando no se tiene título, es necesaria la prescripción treintenaria.» El dominio es el derecho real, en virtud del cual una cosa se encuentra sometida á la voluntad y á la acción de una persona—art. 2506—y como la acción de reivindicación nace del dominio—art. 2758—es indispensable que se pruebe ese dominio; esto es, que la cosa que se trata de reivindicar esté sometida á la voluntad y acción del reivindicante, prueba que, como se ha dicho, no se había presentado. Los arts. 2778 y 2779, carecen de aplicación al caso, desde que falta la base de la prueba de la posesión. Por otra parte, el demandado demostró la prescripción que alegó. En efecto justificó con la escritura correspondiente, que en el año 1870 compró el terreno materia de la acción, el que fué mensurado, siendo la





**8. Acción reivindicatoria**—Para que esta acción, dirigida contra el que tiene buena fe y justo título, pueda pros-

mensura judicialmente aprobada; dicha mensura importa ejercer actos de posesión—art. 2351 Cód. Civ.—y por lo tanto, es fuerza concluir que se han llenado los requisitos del art. 3999, tanto más, cuando no se objetó ni se hizo observación alguna á la posesión alegada, ni á la mensura; posesión que databa, cuando menos, desde 1870, fecha del auto aprobatorio de la misma, habiendo transcurrido más de veinte años hasta la fecha en que se entabló la demanda de reivindicación.

8. Entre todas las defensas que los demandados acumularon como otras tantas fuerzas dirigidas á enervar la acción del demandante, surgía como predominante, después de la prescripción que también se opuso, la nulidad del título con que vino al juicio. Probada la nulidad del título, la acción del reivindicante quedaría destruida, puesto que ella tendría por cimiento un acto nulo; y los actos nulos ningún efecto producen—arts. 1050 y 1056, Cód. Civ.—Tal circunstancia da á este punto el carácter de previo, dentro del orden de ideas en que las cosas se habían colocado. La primera tarea será entonces dilucidar lo relativo á la validez ó nulidad del título. El título del actor consistió en un pacto de quota-litis que celebró con una sucesión, el que le daba derecho á la mitad de la finca materia de la acción reivindicatoria. Semejante contrato es nulo ante nuestro derecho, y mal podía hacer prosperar la acción instaurada. El pacto de quota-litis es fulminado de nulidad por los arts. 66 y 70 del Apéndice del Cód. de Proc., puesto que prescriben espresamente que será nulo y sin ningún efecto todo pacto por el cual el abogado ó procurador venga á hacerse partícipe ó á tener interés directo en el resultado del pleito. Es cierto que el art. 1952, Código Civ., dispone que la retribución al mandatario puede consistir en una cuota de dinero, ó de los bienes que el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato, hubiese obtenido ó administrado, pero hace excepción respecto de los mandatarios judiciales, quienes deben sujetarse, en cuanto á su remuneración, á lo que dispongan los Códos. de Proc. que compete dictar á las provincias, con sujeción al art. 67, inc. 11, art. 104 de la Const. Nac. Encontrándose la Capital equiparada á una provincia, á los efectos de darse leyes procesales, es incuestionable que el caso de que se trata se hallaba regido por nuestro Cód. de Proc. En el curso del debate se citaron y opusieron á esa conclusión diversas disposiciones de la legislación española, pero no es dado á los jueces apelar á legislaciones extrañas para decidir de un caso espresamente previsto por el derecho positivo patrio, como sucede con el pacto de quotálitis, que repudian y condenan nuestras leyes. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al enjuiciamiento civ. y com. en todo lo que sean contrarias á la presente, dice el art. 814 del Cód. de Proc. Luego, á *contrario sensu*, quedan vigentes las que no sean contra-

perar, debe ser precedida previamente de la de nulidad del acto jurídico por el cual adquirió el dominio—Civ., tom. 22, pág. 229, Ser. 5ª (tom. 69).

**Acciones civiles**—Véase: *Personería*, 2.

**Acciones conservatorias**—Véase: *Concurso*, 6.

rias. Esto último debe entenderse que es para los casos no legislados ó no previstos por el Cód. Lo que el legislador ha querido, es que los vacíos del Cód. fueran suplidos por la legislación que le sirvió de antecedente, en cuanto no contrariaran su espíritu y tendencia. No por haberse celebrado el pacto de referencia en país extranjero, es menos aplicable nuestra ley procesal. El art. 1209, Cód. Civ., estatuye que los contratos celebrados fuera de la Rep. que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, serán juzgados, en cuanto á su validez, por las leyes de la Rep. El contrato de iguala celebrado por el actor en el Paraguay, como lo fué, debía ser ejecutado en territorio del Estado, era un hecho constante de autos. De consiguiente, él cae en cuanto á su validez, bajo el imperio de las leyes de la Rep. Sostuvieron los apellados que en la fecha en que se formalizó el pacto de iguala en el Paraguay, no regía el Cód. de Proc. actual, pues eso tuvo lugar en 1879; deduciendo de ahí que el actor no transgredió ninguna ley ejecutiva. La validez de un contrato celebrado fuera de la Rep., para ser ejecutado dentro del territorio del Estado, no debe juzgarse por las leyes de la Rep. con relación al momento en que ese contrato trata de ejecutarse. Es en la oportunidad de ejecutarse el contrato que los magistrados de la Rep. deben decidir si es válido ó nulo con arreglo á las leyes vigentes. Las razones que informa el art. 1209 son de la esencia del derecho público, puesto que tienden nada menos que á salvaguardar el principio de la soberanía. El estado, en cuyo seno pudiera violarse impunemente sus leyes mediante la ejecución de contratos celebrados fuera de su territorio, abdicaría por eso solo su soberanía. Aplicando esta doctrina al caso ocurrente, se tiene que el año de 1887, en que el contrato de iguala se puso en ejecución con la demanda, ya regía el Cód. de Proc. que declara nulos los pactos de ese género. En todo caso, las disposiciones citadas del Cód. de Proc. son leyes de orden público y vanamente se ampararía un litigante en el hecho de que estas no existían en la fecha en que se otorgó el pacto, porque ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público—art. 3ª, Cód. Civ.—Existen en este Cód. disposiciones análogas, como las contenidas en los arts. 1361, 1341 y 1342, que patentizan aun más la nulidad de que se trata. Nótese que esa nulidad es absoluta y que cualquier demandado puede alegarla á causa de tener interés en hacerlo—arts. 1038 y 1047.





1<sup>o</sup>. **Acciones criminales**—La comisión liquidadora de una sociedad anónima, tiene personería para continuar las acciones criminales en que sea parte la sociedad—Crim., tomo 2, pág. 179, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 37).

1. **Acciones liberadas**—Si la sociedad anónima ha sido disuelta y liquidada, debe rechazarse la acción del iniciador tendente á la entrega de acciones liberadas, haya ó no tenido existencia legal—Com., tom. 5, pág. 388, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 40).

**Accionistas**—Véase: *Directorio*, 1; *Quiebra*, 7.

1<sup>b</sup>. **Aceptación**—La falta de aceptación del giro telegráfico

1<sup>o</sup>. La comisión liquidadora es á quien corresponde finalizar los negocios pendientes, sean de la naturaleza que fueren, puesto que la ley no distingue—arts. 435 y 422, párrafo último, Cód. de Com. Segovia, nota 1535.—La circunstancia alegada de que se haya retirado al Banco su personería jurídica, no puede obstar á que se continúen por los representantes del mismo las acciones criminales y civiles que en la medida de la capacidad de derecho se habían intentado cuando revestía aquella calidad, siendo aplicable al respecto la misma doctrina del artículo 422 y nota 1535 citado.

1<sup>b</sup>. En 2 de Abril de 1893, un comerciante de Valparaíso entregó en la caja del Banco Internacional de Santiago de Chile, por un giro telegráfico á cargo del Banco de Londres y Río de la Plata de esta Cap., la cantidad de 410 libras esterlinas al cambio de 12 % equivalente á la suma de siete mil ochocientos setenta y cuatro con noventa y nueve pesos chilenos = 7874.99.—El dador se presentó á cobrar el giro pretendiendo que el Banco debía pagarle la suma de 410 libras esterlinas, pero éste manifestó por medio de su gerente, que tenía instrucciones de pagarlo en el equivalente de las 410 libras esterlinas al cambio á que el Banco compre letras á 90 días sobre Londres, menos su comisión de 1 1/2 %.. Aquél no aceptó el pago en esa forma, y á nombre de Sáinz Illos, de esta plaza, hizo protestar contra el Banco por falta de pago. Así se hizo constar con documentos acompañados. Con ellos el tenedor entabló demanda por cobro ejecutivo de las 410 libras, contra el Banco de Londres y Río de la Plata, alegando que éste había aceptado el giro por esa suma, y que por consiguiente, estaba obligado á pagarlo sin descuento de ningún género. Sin más requisito, el juez libró mandamiento: el gerente del Banco de Londres y Río de la Plata depositó en el Banco de la Nación, en bulto cerrado y lacrado la suma reclamada, reservándose manifestar por escrito lo ocurrido al respecto; pidió posteriormente se le citara de remate para oponer excepciones, y una vez citado invocó la nulidad de la ejecución, por violación de las formas legales, y las de



inhabilita al tenedor para dirigir su acción contra el girado, cualesquiera que hayan sido las razones en que se funda y

falsedad é inhabilidad de título en que se funda la acción. Oído el ejecutante, el juez llamó autos y rechazó las excepciones mandando llevar adelante la ejecución. Apelada esa sentencia y substanciado el recurso en forma legal, la Cám. la revocó fundándose en que el juicio ejecutivo es un procedimiento especial que se halla autorizado siempre que se cobre una cantidad de dinero *en virtud de un título que tenga aparejada ejecución*—art. 466, Cód. de Proc.—Sin título que revista esa cantidad, no hay juicio ejecutivo posible. Por ello, el art. 471 manda que el juez examine cuidadosamente el instrumento con que se deduce la acción, y dispone que libre el mandamiento si hallare que es de los comprendidos en el art. 465. En el presente caso, el título invocado por el ejecutante era un *giro telegráfico*, que no acompañó ni con su demanda, ni lo presentó después, ni se halla comprendido entre los del art. 465 citado. Los documentos acompañados tampoco llevaban en sí aparejada ejecución. Uno de ellos era un certificado expedido por el contador del Banco Internacional de Santiago de Chile el día 17 de Abril, en el cual se hacía constar que en 2 del mismo, el girante entregó en la caja de ese Banco, por un giro telegráfico sobre Buenos Aires, la suma de 787½ con 99 pesos, por el equivalente de 410 libras esterlinas al cambio de 12 ¾, comisión de 1 º y cablegrama. «Ese certificado no tiene valor por no estar legalizado, y no es el giro telegráfico cuyo pago se reclama ejecutivamente. El otro documento era otro certificado del mismo contador expedido en doce del mismo mes, atestiguando el mismo hecho; estaba legalizado, pero tampoco es el giro. Por último; el testimonio del protesto formulado contra el Banco de Londres y Río de la Plata, por falta de pago de la suma de 410 libras esterlinas, y lo que esa escritura comprueba es que el Banco no aceptó ni estuvo dispuesto á pagar el giro sino por la suma que expresó y con arreglo á las instrucciones que dijo haber recibido. Esa escritura tampoco es el giro ni en ella se halla este transcrito, y bien examinada no podría por lo mismo ser estimada como una acta de protesto en forma—art. 717, inc. 1º, Cód. de Com.—En el contrato de cambio, sea cual fuere la forma en que se celebre, el tomador no adquiere derecho ni acción alguna contra el girado mientras éste no se constituya deudor suyo, por medio de la aceptación del giro ó orden de pago expedida por el librador, porque hasta entonces el contrato es para *él res inter alios acta*; y si alguna pudiera ejercitar por falta de aceptación, tendría que hacerlo en nombre del librador si tuviera su representación ó en el propio si éste le hubiera hecho cesión de sus derechos—arg. de los arts. 589, 621, 622, 617, Cód. de Com. y 1199, Cód. Civ. El ejecutante afirmó al deducir su demanda, que el Banco de Londres y Río de la Plata aceptó el giro por las 410 libras esterlinas. Si así hubiera sido, debería



aun cuando confiese tener fondos—Com., tom. 4, pág. 424 Ser. 3.<sup>a</sup> (tom. 39).

1. **Aceptante**—Solo procede acción entre girante y aceptante de la letra, justificando la existencia del contrato que

de haber presentado la constancia de tal aceptación, pero lo contrario resulta de la escritura de protesto acompañada. Como el mismo ejecutante lo reconoce en su escrito, el giro telegráfico que no expresa fecha para su pago debe ser abonado á la vista ó sea á su presentación, porque es aplicable en tal caso por identidad de razón y analogía de circunstancias lo dispuesto en los arts. 609 y 610, Cód. de Com., no estando expresada en la letra la época del pago, se entiende pagadera á la vista, es exigible en el acto de su presentación. Por ello el protesto de los documentos concebidos en esa forma prueba á la vez estos dos hechos: falta de aceptación y falta de pago. Ahora bien, la escritura de protesto acompañada por el ejecutante prueba plenamente que el gerente del Banco de Londres y Río de la Plata, solo estaba dispuesto á aceptar y pagar el giro por el equivalente de las 410 libras esterlinas al cambio á que el Banco compraba letras á 90 días sobre Londres, menos la comisión de 1 4/5 %, en lo cual el Banco estaba en su derecho—art. 643, Cód. de Com.—y que el actor no consintió la aceptación y pago en esa forma, resultando de ahí que ningún vínculo jurídico ligó al Banco con ellos para que puedan estos exigirle el pago del giro, porque ese vínculo solo podía surgir de la aceptación de aquél no consentida por ellos. Las precedentes consideraciones demuestran concluyentemente que este juicio se inició y siguió sin presentación del título fundamental de la acción deducida, y por consiguiente, que se han violado las formas que la ley establece para autorizarlo. Siendo esto así, el ejecutado ejerció un derecho perfecto al resistir el pago y oponerse á la prosecución del juicio, alegando la nulidad de la ejecución; eran de poco momento y más especiosos que sólidos los distingos y consideraciones que se adujeron en la sentencia apelada para rechazar la defensa del Banco. Si la ley permite alegar la nulidad de la ejecución, y el vicio que la motiva es anterior á la fecha de la citación de remate, ninguna razón obsta á que el ejecutado la alegue juntamente con las demás excepciones que crea deber oponer; y si alega nulidad, la resolución que sobre ella corresponde dictarse, por la naturaleza misma de dicha defensa, debe ser previa al pronunciamiento de aquéllas, aunque todas hayan de ser consideradas en un mismo acto.

1. Como fundamento de la demanda se alegó, que en 1882 el Banco de la Prov. de Bs. Aires descontó una letra por 200,000 pesos de la moneda antigua corriente, con el giro del demandante y aceptación del demandado; que el producido de este descuento se distribuyó por igual



hacia divisible la responsabilidad y el pago íntegro verificado por el accionante—Com., tom. 5, pág. 152, Ser. 5ª (tom. 40).

**2. Aceptante—**De una letra, la admisión de una letra

las partes entre girante y girado, pero, por no haber sido abonada dicha obligación á su vencimiento, el Banco acreedor se presentó cobrándolo en el concurso posteriormente formado al actor, donde previa su verificación, fué íntegramente satisfecho por éste. En mérito de lo espuesto, éste demandó á aquél por la mitad del importe total de la letra. El demandado contestó desconociendo los hechos asserados por el actor y pidiendo que se recibiese la causa á prueba á fin de que éste lo justificase. Dada esta negativa, incumbía al actor probar: primero, el percibo, por parte del demandado, de la suma correspondiente; y segundo, que el mismo actor había pagado esa suma que correspondía ser satisfecha por el demandado. Respecto del primer punto, solo se produjo como prueba la compulsa de los libros del mismo actor, prueba ineficaz contra el demandado, pues no se justificó en manera alguna que éste tuviese la calidad de comerciante, circunstancia que el actor debió también acreditar, ya que el art. 63 del Cód. de Com. requiere para que los libros de los comerciantes hagan fe en juicio á su favor, que la cuestión verse entre comerciantes y en hechos de su comercio. En cuanto al segundo punto, lo único que resultaba de la prueba rendida por el actor, es, que no fué éste sino otra persona quien pagó íntegramente la referida letra descontada al actor y al demandado. Siendo pues, éste quien pagó al Banco y se subrogó en sus derechos, el actor no pudo invocar como un título propio dicho pago para exigir personalmente su reembolso del demandado.

2. El Banco Sud Americano entabló demanda ordinaria contra Lanús, cobrándole el importe de dos letras, firmadas en su favor por éste como girante y por Viñales como aceptante; manifestó en su demanda que Viñales tenía en favor del Banco dos deudas que no pudo satisfacer á su vencimiento; y para cuya novación obtuvo del señor Lanús la firma en las dos letras que acompañaba y que aceptó como perfectamente garantidas; que vencidas esas letras no fueron protestadas, que fueron refundidas y renovadas en una sola con la única firma de Viñales, la cual á su vencimiento fué nuevamente renovada en igual forma y está protestada contra su firmante Viñales por falta de pago. Contestando la demanda Lanús niega acción al Banco para exigir el pago de las letras alegando: Que él firmó esas letras como simple garante ó fiador de Viñales, y que la prórroga del plazo y renovación de las letras concedidas á éste por el Banco, sin su conocimiento, extinguió la obligación; que la refundición de ambas letras con la sola firma de Viñales, importó novación de la obligación anterior, y extinguió la que sobre él pesaba; y finalmente, que la falta de protesto y aviso por parte del Banco había



con la sola firma del aceptante, produce la caducidad de las

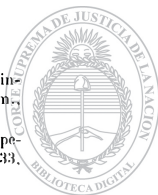
perjudicado la letra y hecho caducar sus acciones contra el demandado. El demandado aunque deudor solidario como firmante de las letras, no lo era en calidad de fiador, sino de girante, y aun cuando al contestar la demanda alegó que su responsabilidad no era de principal obligado, sino subsidiaria ó de garantía, no quiso por eso afirmar que lo fuera en la calidad que lo quiso asignar. Tampoco puede sostenerse que la renovación y refundición de las letras hecha con uno solo de sus firmantes y por menor cantidad importe novación. Parecen explícitos al respecto los arts. 812, 814 y 815, Cód. Civ. . . . Las estipulaciones y alteraciones de la primitiva obligación que no hagan al objeto principal ó á su causa, como respecto al tiempo, lugar ó modo del cumplimiento, serán consideradas como que solo modifican la obligación, pero no que la extinguen. La delegación por la que un deudor da á otro que se obligue hacia el acreedor *no produce novación si el acreedor no ha declarado espresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo*. A falta de esta declaración *expresa* de exoneración, dice el doctor Segovia, uno y otro deudor quedarían obligados—Nota 12, tít. de la novación.—Según esos arts. y el 817, la novación se opera ó por transformación de la obligación, propiamente dicha, ó por cambio de deudor, ó por cambio de acreedor, pero en estos dos últimos casos, es esencial que el acreedor acepte al nuevo deudor y desobligue espresamente al anterior, ó que el deudor consienta el contrato de sustitución de acreedor, habrá simple delegación: faltando el del deudor, no habrá sino cesión de derechos. En el caso actual, ni existió declaración expresa por parte del Banco, ni propiamente sustitución de deudor. Lo que medió, pues, no fué delegación ni sustitución, sino supresión de un deudor. Se prorrogó la obligación sin cambiar su objeto ni su causa, renovando su título por menor cantidad en virtud de pago parcial, lo que importa simple variación en el modo de cumplirla. No ha ocurrido, pues, transformación de obligación en las condiciones requeridas para que haya renovación. Pero la omisión del protesto de las letras y su renovación y consolidación en una con la única firma del aceptante y sin conocimiento del girante de aquéllas, produce la caducidad de dichas letras y de las acciones que de ellas pudieran haber surgido contra dicho girante—art. 667, Cód. de Com.—El tenedor que no hace protestar la letra en tiempo y forma regular por falta de pago, dice ese artículo, pierde todo derecho contra el librador y endosante, y solo lo conserva contra el aceptante, salvo el caso prevenido en el art. 621 en que también lo conserva contra el librador y contra aquel por cuya cuenta se giró la letra. El art. 621 se refiere al caso en que el librador no tuviera provisión de fondos, al vencimiento de la letra, en poder de la persona á cuyo cargo estaba girada y que ésta se encontraba en uso de su crédito. El Banco comprobó, por confesión del demandado, que éste no tenía provisión de fondos, alegando



anteriores no protestadas, ni por consiguiente, notificado el protesto al girante—Com., tom. 1, pág. 9, Ser. 3.<sup>a</sup> (tom. 36).

esa circunstancia para acogerse á la escepción del art. 666; pero esa circunstancia es puramente aparente. La provisión existió, desde que el Banco descontó las letras, porque la provisión es la suma ó valores que existen en poder del aceptante para responder al pago de la letra, y esa suma, en este caso, fué entregada por el mismo Banco y éste no lo negó. El señor Viñales, dice el demandante, tenía en el Banco que representa, dos deudas que no pudo satisfacer á su vencimiento, y para cuya renovación obtuvo del señor Lanús la firma de las dos letras acompañadas, que el Banco aceptó como perfectamente garantidas. Siendo ese el origen de las letras, ¿cómo puede pretender el Banco la aplicación de los arts. 621 y 667 contra el librador? ¿qué contrato ó qué negligencia que no fuera la simple garantía de la deuda de Viñales había celebrado el Banco con Lanús para considerarse acreedor suyo? Es cierto que éste garantizó la deuda firmando como girante, y que esa forma de garantía lo constituía en codendor solidario, pero ¿se sigue de ahí que éste estuviera obligado á hacer provisión de fondos cuando ya el mismo Banco la había hecho entregándola al aceptante? Pero eso importaría obligar á hacer tal provisión dos veces. No es posible prescindir de la especialidad del título. Las letras que nuestros Bancos descuentan son préstamos hechos al aceptante que es el principal obligado, con la garantía del librador, que solo con ese fin firma la letra. La responsabilidad de éste es subsidiaria y por la forma en que fué dada, el Banco ó tenedor de la letra debe ser celoso de observar las formalidades que la ley prescribe para salvaguardar sus derechos, pero no lo autoriza á exigir del librador el cumplimiento de obligaciones que no tienen causa ni razón de ser, dado el origen del título y de su compromiso. En efecto, el fundamento de la escepción contenida en los arts. 667 y 621, reposa en el principio de justicia y equidad que prohíbe enriquecerse con lo ajeno. Si el tenedor de la letra ha entregado el importe de ella al librador, ó es acreedor suyo, la omisión del protesto por no haber pagado el aceptante, no puede autorizar á éste — el librador — á declararse exonerado de restituir lo recibido ó pagar su deuda; y si en vez de remitir fondos el aceptante para que cumpliera su mandato, los continuó reteniendo, tal omisión ningún perjuicio le ocasionaría, y la resistencia á pagar la letra sería injustificada; pero ese fundamento no existe en casos como al actual, porque el librador nada ha recibido ni debe al Banco ni al aceptante de la letra por otro título, causa ú origen que la letra misma. No es aplicable en el caso la escepción de los artículos citados. Por otra parte, el art. 598 del Cód. de Com. establece que la letra de cambio es una orden escrita, revestida de las formalidades establecidas por el mismo Cód. y el art. 599, enumera como uno de esos requisitos, la enunciaci6n de si se ha expedido por primera, segunda,





**Aceptante**—Véase: *Excepción de caducidad*, 1.

1<sup>a</sup>. **Aclaración**—La aclaración de un auto, solo puede interponerse en el perentorio término que la ley fija—Com., tom. 3, pág. 59, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

2<sup>a</sup>. **Aclaración**—De resoluciones interlocutorias, puede pedirse aclaración en cualquier tiempo—Civ., tom. 9, pág. 333, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

**Aclaración**—Véase: *Diligencias de prueba*, 3.

1<sup>a</sup>. **Acreeedor**—El juez de la ejecución no puede autorizar al acreedor para intervenir en el juicio en que existen bienes embargados al deudor—Com., t. 9, p. 120, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2<sup>a</sup>. **Acreeedor**—Los acreedores de la sociedad tienen privilegio sobre los personales en caso de concurso, si todos los bienes deben considerarse sociales—Civ., tom. 11, pag. 122, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

---

tercera ó más vías, no siendo una; y agrega, faltando esta declaración se entiende que cada uno de los ejemplares es una letra distinta. Las cuestionadas habían sido giradas por vía *única*, y la otra, renovación de aquéllas, lo fué también como *única*. Es legalmente imposible que la firma del girante esté en una letra y la del aceptante en otra distinta, porque la aceptación debe hacerse por escrito en la misma letra—artículo 639—tampoco es posible considerar vigente la aceptación de las letras, primero, porque según lo expresaba el demandante, fueron ellas renovadas en una, con la firma única del aceptante, y protestada ésta por falta de pago; ni aplicar á las tres letras la prescripción del inc. 5<sup>o</sup>, art. 599, porque una fué firmada en renovación de las otras; luego, la consecuencia lógica de todo ello es que la renovación de una letra inutiliza ó invalida la anterior y que las obligaciones y derechos del tenedor deben sujetarse á las constancias del nuevo título, que es el único que puede invocarse en lo sucesivo.

1<sup>a</sup>. Art. 222 del Cód. de Proc.—La ley 3<sup>a</sup>, tit. 22, Part. 3<sup>a</sup>, dice: «Este ha de fazer solamente en aquel día que dió la sentencia.»

2<sup>a</sup>. El término perentorio de 24 horas para pedir aclaración de una sentencia definitiva no es aplicable á las interlocutorias, porque la prohibición solo se refiere á aquélla. Por el contrario, la ley 2<sup>a</sup>, tit. 22, Part. 3<sup>a</sup>, admite la doctrina del sumario.

1<sup>a</sup>. La Cám. dijo que un juez no puede autorizar al acreedor para intervenir en un juicio seguido ante otro juzgado. ¿Por qué? La Cám. no lo dice. ¿Cuál es el objeto del art. 1196 del Cód. Civ.?

2<sup>a</sup>. Art. 1714 del Cód. Civil.



3. **Acreeedor**—Que tiene en garantía un crédito contra un tercero, está obligado á depositar judicialmente el documento en que consta la deuda—Civ., l. 20, p. 338, S. 3ª (l. 67)

3. El actor se presentó demandando la exhibición dentro de 24 horas, de un pagaré dado en prenda ó su secuestro judicial, bajo apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de los daños y perjuicios. El demandado dijo: que cuando el actor le pagase lo adeudado, no tendrá inconveniente en devolver el documento de referencia, pues antes no se le puede exigir, pudiendo por el contrario, usar del derecho de retención. Según resultaba de las peticiones de la demanda, el juicio tenía propiamente por objeto compeler al demandado á que exhiba ó deposite judicialmente el pagaré otorgado contra un tercero, que se le había dado en garantía de su crédito contra el actor, al solo efecto de que éste pudiese cobrarlo del deudor, y pagarle al demandado lo que le adeudase, con la preferencia que le acuerda la garantía constituida en su favor. La parte demandada, al contestar la demanda, se opone á las peticiones de su contrario, fundándose en una doble consideración: la 1ª que no está obligado á restituírle el pagaré dado en garantía de su crédito hasta tanto no se le abone su valor, de acuerdo con el derecho que le confiere el art. 3229 del Cód. Civ.; la 2ª, en que la acción carece de base, porque no hay contrato de prenda, desde que ésta no se ha llevado á cabo notificando al deudor del pagaré dado en garantía, que es uno de los recaudos de la prenda, según así resulta de lo dispuesto en el art. 3209. La primera consideración opuesta, no puede obstar al progreso de la acción. La demanda, en efecto, no tiene por objeto exigir la restitución del pagaré dado en garantía de la deuda, sino simplemente el depósito judicial del mismo, con el fin de que el actor pueda cobrar su importe y solventar el crédito del demandado. En tal virtud, si bien es cierto que el acreedor prendario no está obligado á restituír el pagaré, es de observar que no se le reclama la restitución de la garantía, y que, por consiguiente, esta parte de su defensa puede considerarse extraña á los propósitos de la acción instaurada. No hay, por otra parte, disposición legal alguna que impida al deudor emplear todos los medios á su alcance para cumplimentar su obligación, siempre que no afecte el derecho del acreedor, y en tal concepto, no habría razón alguna que se oponga á las peticiones del demandante, desde que, como se ha dicho, con el depósito judicial del pagaré, no se va á afectar la garantía del acreedor, ni se va á desprender éste de la misma, sino que simplemente se efectúa el depósito judicial del documento de crédito para gestionar el cobro de su importe y poder el deudor solventar el crédito del demandado. De no ser así quedaría librado á la voluntad del acreedor mantener la obligación ó vinculación del actor, durante largo tiempo y sin fundamento alguno, con perjuicio de éste, que tendría que estar abonando intereses mientras no dispusiera



**Acreeedor**—Véase: *Auto de quiebra*, 1; *Competencia*, 5; *Concordato*, 1; *Fianza*, 4 y 17; *Juicio ordinario*, 1; *Cesión*, 1; *Compensación*, 1; *Costas*, 7; *Inhibición*, 4; *Daños y perjuicios*, 2; *Quiebra*, 10; *Cláusula penal*, 1; *Concurso*, 12; *Honorarios médicos*, 1; *Gastos*, 4 y 7; *Herederos inhibidos*, 1; *Exposo sobreviviente*, 1; *Herederos*, 10; *Intimación de pago*, 1; *Privilegio*, 3; *Hipoteca*, 10.

1. **Acreeedores**—El hecho de ser algunos de los testigos presentados para reconocer la autenticidad de documentos, acreedores de la parte demandada, no es una tacha que invalide sus declaraciones—Civ., t. 11, p. 310, S. 5ª (tom. 58).

de otros recursos, estraños á la garantía, con que solventar la obligación ya vencida, pudiendo de esta manera arribarse á las ulterioridades que están escluidas con objeto de garantizar al acreedor, y que además no podrían ser amparados ni por los principios jurídicos, ni por las disposiciones de la ley. Tampoco obsta á la prosecución de la demanda, la consideración fundada en el art. 3209 del Cód. Civ., de que no hay contrato de prenda, porque no se ha hecho la notificación al deudor del pagaré dado en garantía de sus derechos. En primer lugar, es de observar que el crédito que constituye la garantía dada por el dendor prendario á su contraparte, no es de los comprendidos en el art. 3209, porque es un pagaré á la orden, susceptible de endoso. Verdad es que en esta clase de documentos hay que hacer el endoso para que la prenda produzca sus efectos con relación á terceros, ó en otros términos, para que el acreedor prendario goce de los privilegios que le acuerda el derecho real de prenda con respecto á los demás acreedores del dendor; pero es de observar que de la falta de este requisito, si bien pueden prevalecerse los terceros estraños al convenio, no pueden hacerlo las mismas personas que lo han celebrado, para quienes basta la existencia del convenio que establece la garantía y la entrega de la cosa al acreedor, para que dicho convenio produzca sus efectos—nota al art. 3209.—Pero hay más; admitiendo que el convenio adolezca de condiciones intrínsecas para que pueda producir entre las partes los efectos de una garantía prendaria, es de observar que siempre sería un convenio por el que el actor le ha entregado al demandado en garantía de su crédito un pagaré contra un tercero, que si bien da derecho al acreedor para no restituirlo mientras no se le pague el crédito, no lo autoriza para resistirse al depósito judicial á los efectos expresados en las peticiones de la demanda.

1. Porque con sus declaraciones no hacen sino disminuir la solvencia del deudor en perjuicio de sus créditos. Esta es la interpretación que la sana crítica da al inc. 5º del art. 207 del Cód. de Proc.



**Acreeedores**—Véase: *Nulidad*, 1; *Concordato*, 3; *Consignación*, 4; *Defraudación*, 11; *Excepción de cosa juzgada*, 1; *Embargo*, 10; *Bienes*, 8; *Costas*, 39; *Arraigo*, 11; *Fianza*, 8; *Juicio testamentario*, 1; *Gastos de justicia*, 2; *Sociedad*, 6; *Acción escluyente*, 1; *Gastos causídicos*, 1; *Quiebra*, 6.

1. **Acreeedor hipotecario**—El acreeedor hipotecario no puede alegar la nulidad del remate practicado en el concurso del deudor, si consta que lo consintió tácitamente—Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 5ª (tom. 57).

2. **Acreeedor hipotecario**—Aun cuando el acreeedor hipotecario compre el inmueble, el martillero debe cobrar la comisión por arancel—Civ., t. 11, p. 331, Ser. 5ª (tom. 58).

3. **Acreeedor hipotecario**—Que ha concurrido á la verificación de créditos no puede exigir se resuelva si estaba obligado á ello—Civ., tom. 20, pág. 299, Ser. 5ª (tom. 67).

1. El acreeedor hipotecario alegó que no había podido procederse á la venta del bien sin requerirse previamente el consentimiento del fallido y de los acreeedores, especialmente el suyo, atenta la hipoteca que á su favor reconocía el bien vendido. La venta se había ordenado en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 735 del Cód. de Proc., que ordena que se proceda inmediatamente á la venta de los bienes del concurso, si la mayoría de los acreeedores no disponen lo contrario. La ley, al ordenar la venta de todos los bienes del concurso, no hace distinción alguna entre los que están y entre los que no están hipotecados, desprendiéndose del espíritu y letra de los arts. 761 y 763, que en esa venta también están comprendidos los bienes hipotecados. La venta se ordenó con las formalidades prescriptas por el art. 736, debiendo tomarse las dos terceras partes de la tasación aprobada, sin que tenga importancia alguna el monto de la deuda que garante el inmueble hipotecado. El acreeedor carecía de derechos para oponerse á la liquidación del concurso.

2. De acuerdo con lo establecido en el arancel de 2 de Junio de 1860 que está en vigencia y que acuerda una comisión de 2 % . Si el acreeedor hipotecario adquiere el inmueble en la venta, debe ser considerado como un tercero y sujeto á las mismas obligaciones.

3. Porque la resolución tendría que recaer sobre un punto resuelto ya de hecho, quedando la solución de la cuestión como un punto meramente doctrinario, sin aplicación á caso práctico alguno, lo que no es del resorte de los tribunales.



**Acreeedor hipotecario**— Véase: *Consignación en pago*, 1; *Hipoteca*, 1 y 2; *Concurso especial*, 1; *Privilegio*, 3.

1. **Acreeedor prendario**—El privilegio general que la ley concede á los gastos de justicia, no afecta á los acreedores prendarios—Com., tom. 1, pág. 197, Ser. 5ª. (tom. 36 ).

2. **Acreeedor prendario**—El acreedor prendario está obligado á tener á disposición del dendor los objetos dados en prueba; si dispone de ellos antes del vencimiento se hace posible en los daños y perjuicios causados—Com., tom. 5, página 89, Ser. 5ª (tom. 40 ).

1. Si bien tienen privilegio general, según el art. 1499 del Cód. de Com., los créditos por gastos para la seguridad de los bienes, administración de la cosa fallida y demás diligencias judiciales ó extrajudiciales en beneficio común, verificados con la debida autorización, tal privilegio no tiene lugar respecto de aquellos créditos para cuya seguridad y libre ejercicio no era necesaria la declaración de quiebra, respecto de los cuales solo tienen privilegio las cosas que se retirasen especialmente á ellas. El acreedor prendario, el locador garantido suficientemente con las cosas introducidas por el inquilino y para quienes la administración de la quiebra es más bien un embarazo que un auxilio, no ceden al privilegio por los gastos generales de la quiebra; y si únicamente á los gastos especiales á que la realización de los bienes afectados á su privilegio diere lugar—arts. 3889, Cód. Civ.; 1449, inc. 1ª, 582 y 1500, inc. 3ª, Cód. de Com., Segovia, nota 4778.

2. En 10 de Mayo de 1890, S. recibió en préstamo de R. P. y Cª, la cantidad de 120,000 \$ m. n. e. l., que debía devolverla el 30 de Set. del mismo año. En prenda y garantía, S. entregó 4,000 acciones de la Empresa «Muelles y Depósitos de Catalinas» de valor nominal de 100 \$ cada una. R. P. y Cª, fueron declarados en quiebra en 5 de Julio de 1890, y este estado de quiebra subsistía en 30 de Set. de 1890, fecha del vencimiento de la obligación de S. Cuando se declaró la quiebra y se entregaron al Síndico del concurso los libros, papeles y bienes de R. P. y Cª, no se encontraron entre ellos las 4,000 acciones que en prenda había entregado S.; no las tenía por lo tanto en su poder, el síndico del concurso al vencimiento de la obligación de S. Este alegó y probó que luego de declararse la quiebra de R. P. y Cª, vió al síndico para liquidar el negocio pagando los 120,000 \$ y recibiendo las 4,000 acciones que había dado en prenda. Alegó asimismo que tenía el derecho á anticiparse al vencimiento del contrato. Las 4,000 acciones valían en aquella época una suma mayor que los 120,000 \$ adeudados por S., y desde luego, es natural, es lógico, que ocurrida la quiebra de su acreedor tratase de



**3. Acreedor prendario**—Para que proceda la acción de daños y perjuicios del deudor contra el acreedor prendario por la falta de entrega, debe existir promesa de consignación ó por lo menos intimación judicial—Com., tom. 5, pág. 89, Ser. 5ª (tom. 40).

sustraer dichas acciones de las eventualidades del concurso, operación muy sencilla, porque se podía haber verificado entonces con un cambio de acreedor. No había duda alguna, por lo tanto, de que S. trató de hacer uso de ese derecho. Pero resulta que las acciones no existían en poder del síndico, al cual debían haber sido entregadas, y por lo tanto, no fué posible realizar la operación. Al vencer el plazo del documento, la situación era la misma: el síndico, único representante legal en aquella fecha de R. P. y Cª—art. 1412 del Cód. de Com.—no tenía las acciones ni los medios de adquirirlas, y los fallidos que habían faltado al deber de entregarlas al síndico—art. 1402, Cód. de Com.—no adoptaron las medidas convenientes para la devolución de la prenda y el cobro del pagaré, lo que podrían haber gestionado con intervención del síndico y en virtud de las facultades otorgadas por el art. 1403 del Cód. de Com. Desde luego, el deudor S. no podía quedar obligado indefinidamente por una deuda con prenda, cuando ésta no se le devolvía por el acreedor y estaba expuesta á disminuir su valor. No es necesario examinar la prueba respecto á si el acreedor prendario dispuso ó no de las acciones que había recibido en prenda. El hecho de no haberlas entregado al síndico de su concurso importa prueba suficiente, muy especialmente cuando ese acreedor no tenía libros regulares, como lo ha confesado y consta de los autos del concurso, á pesar de la importancia de las transacciones que realizaba. Y para saber si pudieron R. P. y Cª. disponer de las acciones recibidas en prenda, basta recordar las prescripciones del art. 588 del Cód. de Com. y las prácticas y usos comerciales de esta plaza, que se establecieron por un informe de la Bolsa de Com. y de los principales Bancos.

3. En el caso precedente el deudor prendario dedujo reconvenção por daños y perjuicios. No se hizo lugar á ella porque es indudable que si la cosa dada en prenda valía más que el importe de la deuda que garantía, y el deudor que estuvo dispuesto á pagar no pudo rescatar la prenda por culpa del acreedor, tendría derecho á ser indemnizado de los perjuicios sufridos consistentes en la diferencia entre el valor de la prenda y el importe de la deuda. Sin embargo, en este caso se trata de acciones cuyo precio se había modificado de una manera considerable en poco espacio de tiempo. A fines de Junio y en Julio de 1890, valían las acciones, al rededor de 33 % de su valor nominal, pues aunque no existía en autos otra prueba positiva del precio indicado, sino la declaración de un corredor, el hecho era notorio y



4. **Acreedor prendario**—El acreedor prendario que en la fecha del vencimiento de la obligación no pudo entregar la prenda, carece de derecho para obligar al deudor á su recepción con posterioridad—Com., t. 5, p. 89, S. 5ª (tom. 40).

**Acreedor privilegiado**—Véase: *Embargo preventivo*, 28.

1ª. **Acreedor testamentario**—Puede pedir la conformidad del heredero para el pago; no está obligado á iniciar juicio—Civ., tom. 20, pág. 136, Ser. 5ª (tom. 67).

1ª. **Acto**—El poder especial para un acto determinado caduca por el fallecimiento del mandante, si antes no se hubiese cumplido el mandato—Civ., t. 11, p. 300, S. 5ª (t. 58).

**Acto**—Véase: *Delito*, 2; *Excepción de falta de personería*, 4; *Prueba*, 1; *Notificación*, 3; *Depositario*, 7; *Escritura pública*, 1.

1ª. **Acto administrativo**—Para que un acto administra-

fácil de determinar, pero el deudor no practicó en aquella época las diligencias indispensables para consagrar y establecer su derecho. No solamente no hizo consignación judicial de la suma adeudada, sino que tampoco se presentó al juez del concurso ofreciendo hacerla en el acto que se le devolviese la prenda. Desde luego, no existía la intimación legalmente hecha al acreedor prendario, al síndico que lo representaba, para la entrega de la prenda en la época mencionada; y desde luego, no puede decirse que dicho acreedor incurrió en mora. La fecha que corresponde establecer para la entrega de la prenda, es la del vencimiento de la obligación, 30 de Set. de 1890. Ahora bien: en esa fecha, las acciones valían menos de 22 % de su valor nominal, y por lo tanto, el precio de las 4,000 acciones caucionadas no alcanzaban á cubrir los 120,000 \$ de la deuda. Por consiguiente el deudor no sufrió legalmente perjuicios por esta causa, y no era procedente la reconvenção deducida.

4. Véanse las dos notas precedentes.

1ª. Porque si el heredero se manifestase dispuesto á abonar la deuda, serían inoficiosas las actuaciones concernientes á la demanda.

1ª. Art. 1963, inc. 3ª del Código Civil.

1ª. Las partes litigantes convinieron en que las relaciones jurídicas entre ellas preexistentes, arrancaban de una concesión para la construcción y explotación de un ferrocarril acordada por el Gob. Nac. El art. 111, inc. 4ª de la Ley Org. de los Trib. de la Capital dispone que corresponde á la competencia de los jueces federales «las cuestiones que se suscitan



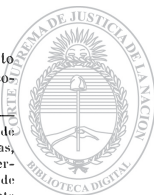
tivo pueda formar fuero, la cuestión debe versar sobre el acto mismo; las cuestiones sobre los contratos á que ha dado origen corresponden á la jurisdicción comercial—Com., tom. 2, pág. 36, Ser. 5ª (tom. 37).

**Acto de administración** — Véase: *Excepción de defecto legal*, 8.

---

entre particulares teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional. Tratándose de la transferencia de una concesión para construir y explotar una vía férrea, destinada naturalmente al transporte de personas y cosas, de una manera permanente y con fines de lucro, no puede dudarse que tal acto se halla comprendido en la prescripción del art. 8º, inc. 5º, Cód. de Com. A un contrato de esta naturaleza, no es aplicable lo dispuesto en la primera parte del art. 452 del Cód. de Comercio, pues aunque en realidad un ferrocarril sea un inmueble, en el caso no se trataba de constituir derecho real alguno sobre un determinado bien de esa especie, sino simplemente de la cesión de los derechos personales que la respectiva ley del Congreso acordó al empresario para constituirlo y explotarlo como un medio comercial de transportes, no entrando en consecuencia el carácter inmobiliario de la vía férrea sino como un elemento secundario que no despoja al acto de la calidad mercantil que le atribuye su objeto principal ya espresado. Estas ideas se hallan conformes con la propia jur. de la Cám. de lo Com., que en el caso de Landau con Minvielle, declaró que un contrato de cesión de una concesión de ferrocarril, es comercial, como lo es también el originario, porque la constitución y explotación de un ferrocarril es un negocio que constituye una empresa de transportes que debe considerarse mercantil—Ser. 2º, tom. 4º, pág. 39. — Los autores y la jurisprudencia francesa y belga apoyan esta misma tesis; y así dice Massé: «la explotación de un camino de hierro teniendo por objeto menos la explotación de un inmueble que la de una empresa de transportes, puede ser objeto de comercio, propiamente dicho, no solamente cuando se trata de explotarlo, sino también cuando se trata de construirlo» — números 1384 y 1385.—Namur, en el núm. 77 del tom. 1º de su obra *Le Code de Com. Belge*, sostiene más especialmente aun, que un empresario ó una sociedad concesionaria de un camino de hierro es justiciable ante los tribunales de Com., por razón de la cesión que haga de todo ó parte de los derechos resultantes de la concesión que le ha sido otorgada. Véase también Dalloz, núms. 185 y 186, verb. act. de Com., y fallos de las Cortes francesas que registra. Estas consideraciones bastan para demostrar que subjetiva como objetivamente, el derecho transferido de que se trata, es un acto de comercio, y que por consiguiente, procede su juzgamiento por la jurisdicción y legislación comerciales.





**1. Acto de comercio**—Si por el contrato social, su objeto era ejecutar actos de comercio, la sociedad se conceptúa comercial.—Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

1. Se trataba de la construcción de un ferrocarril. Un contrato de esta naturaleza, como en general, la construcción de toda clase de obras, está comprendido dentro del concepto doctrinario del acto de comercio, tal como lo define el doctor Segovia, de acuerdo con la mayoría de los autores, y especialmente con Vidari—tom. 1º, núms. 22 y 34—«Acto de comercio, dice aquel autor, es todo acto jurídico ejecutado con un propósito actual de especulación, que importe una mediación directa entre el procurador y consumidor, y cuyo resultado inmediato es realizar ó activar la circulación de la riqueza.» Ahora bien: todos los distintos elementos que según esta definición caracterizan el acto de comercio, aparecen reunidos en la construcción de obras; y para justificar este aserto, no habrá nada más eficaz que la siguiente transcripción de la relación Mancini, sobre el proyecto de Cód. de Com. para Italia. Fundando la conveniencia de suprimir la condición del suministro de materiales para que se consideren comerciales las empresas de construcción, dice la referida memoria: «En verdad, á la luz de los principios económicos y de los hechos, es difícil encontrar la razón en cuya virtud deba considerarse acto de comercio al de un empresario teatral que contrata el trabajo de algunos cantantes ó músicos para dar un espectáculo público; y acto civil, el de un empresario que habiendo contratado la excavación de un canal ú otra obra cualquiera, sin obligación de suministrar los materiales, emplee con tal fin el trabajo del número necesario de obreros. Ni uno ni otro suministra á su comitente ningún material comprado con intención de revenderlo, pero ambos ejecutan ciertamente un acto de comercio, porque también el trabajo humano, sea intelectual ó mecánico, constituye un elemento de riqueza, un factor de la producción que puede ser objeto de los contratos, y porque ambos tratan juiciosamente de ganar la diferencia entre el precio de compra del concurso individual y del trabajo de los contratantes ú operarios, y el precio de reventa constituido por él, correspondiente al espectáculo ó á la excavación que han sido los objetos de los respectivos contratos.» Este carácter de acto de comercio que la doctrina espuesta, sostenida también por Vidari—tam. 1º, núm. 53—atribuye á la construcción de obras, aun cuando no haya suministro de materiales, es también aceptado por otras autoridades cuando concurre la última circunstancia—Bravard Veyrieres, tom. 6º, pág. 346; Badarride, tom. 1º, núm. 38; Alauzet, tom. 8º, núm. 2980; Nougier, tom. 1º, pág. 479; Dalloz y autores que cita, V. *Acte de Commerce*, núms. 203 y siguientes.—También ha sido sancionada en muchos casos por la jur. francesa é italiana, encontrándose en aquella, resoluciones que declaran comerciantes á los constructores de ferrocarriles—Dalloz, R., año 1869, parte 1ª,



**2. Acto de comercio**—La construcción de ferrocarriles ó de obras públicas en grande escala, suministre ó no los materiales el empresario, se conceptúa acto de comercio—Com. tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

**Acto de comercio**—Véase: *Préstamo hipotecario*, 1; *Jurisdicción*, 1.

**1ª. Actos de comercio**—Para que el mutuo ó préstamo se considere comercial, debe justificarse que tuvo lugar entre comerciantes y por actos de su comercio—Com. tom. 5, página 293, Ser. 5ª (tom. 40).

**Actos de comercio**—Véase: *Libros de comercio*, 6.

**1ª. Acto doloso**—Si por interés propio el damnificado por

---

pág. 370.—Conviene observar de paso, que si en la doctrina y jur. francesa no hay completa uniformidad á este respecto, se debe en mucha parte á los precedentes legislativos que hacían dudosos la solución de la cuestión en el terreno de la ley. Como esos antecedentes no existen entre nosotros, la aplicación de la doctrina espuesta puede hacerse sin los temores é incertidumbres que manifiestan algunos escritores de esa nación. Examinadas, pues, las empresas de construcciones con arreglo á la teoría pura, su carácter comercial no puede ser dudoso. Tampoco puede serlo ante el derecho positivo, especialmente cuando el constructor suministra materiales, como sucedía en el caso presente. Las operaciones que entonces realiza son compras y ventas de cosas muebles con el fin de lucrar, que son los actos especialmente previstos por los incs. 1º y 2º del art. 8º, Cód. de Com.

2. Véase la nota precedente.

**1ª.** El contrato de préstamo fué celebrado con el objeto de establecer un negocio, por consiguiente, demostrándose que el deudor demandado es comerciante habría un mutuo comercial—art. 558 del Cód. de Com.—y el conocimiento de la causa, correspondería al fuero mercantil. En estos términos estaba concebida la vista del fiscal de la Cámara Dr. Segovia, la misma que sirvió de fundamento al Tribunal para resolver la cuestión en el sentido del sumario.

**1ª.** El art. 4030 del Cód. Civ., dice así: «La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violación, intimidación, dolo, error ó falsa causa, se prescribe por dos años, desde que la violencia ó intimidación hubiese cesado, y desde que el error, el dolo ó falsa causa fuese conocida.» Es un principio en derecho procesal, que la prueba incumbe al litigante que afirma un hecho pertinente al caso en litigio. Y concretando al punto materia del sumario, puede hacerse valer la opinión del doctor

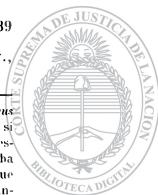


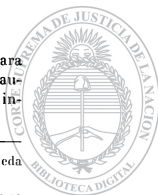
un acto doloso estaba obligado á conocerlo, debe justificar ple-

Segovia, quien comentando el art. 4030, se espresa en estos términos: relativamente á la prueba que corresponde al accionante de nulidad: «Al que opone la acción de nulidad corresponde probar el momento en que la fuerza cesó, ó en que fué conocido el error, el dolo, la simulación ó la falsa causa, en cuanto le interese para demostrar que se halla dentro del término de dos años, puesto que al actor y al reo, respectivamente, corresponde la prueba de los hechos en que funda su acción y escepción.» Dados los antecedentes relativamente á la nulidad alegada por el actor y al dolo en que éste la funda, parece que toda la dificultad que puede ofrecer la solución del punto, estriba en la inteligencia que corresponde dar á la disposición del art. 4030 del Cód. Civ., para determinar á cual de las partes incumbía la prueba del *dies a quo* de la prescripción. Dicho art., que tiene por antecedentes las disposiciones análogas de la ley 7ª, tít. 13, Part. 3ª, art. 1304, Cód. francés, y arts. 1184 y 1185 del proyecto de Goyena, establece que la acción de nulidad de los actos jurídicos por dolo, error, etc., se prescribe por dos años, desde que el dolo, error, etc., fuese conocido. Según esto, ¿á quién corresponderá producir la prueba de ese conocimiento del dolo ó error á que se refiere el citado artículo? Esta cuestión ha sido contradictoriamente resuelta por los dos ilustrados comentadores de nuestro Cód. Civ., doctores Segovia y Llerena. La opinión del primero, impone el *onus probandi* al que alega la nulidad, mientras que el doctor Llerena, conforme con Chardon — tom. 1º, núm. 53 — la hace pesar sobre el que opuso la escepción de prescripción; porque dice: «Al que entabla la acción de nulidad, como demandante, le incumbe probar que ha sufrido error, dolo, violencia, etc.; y como el demandado se escepcionara con la prescripción, que importa una confirmación tácita del acto anulable, con la cual se hace desaparecer el vicio que el actor ha probado existir en la formación del acto, es natural que á él le corresponda probar que esos vicios han desaparecido por efecto de la prescripción. Por otra parte, al que alega la prescripción corresponde probarla; esto es un principio inconcuso en derecho.» Véase el art. 4030, Cód. Civ. Pero, desde luego, debe advertirse que no es solamente la prueba del dolo la que debe suministrar el actor, sino también la de todos aquellos hechos ó circunstancias necesarias para la admisibilidad ó procedencia de su acción, y sin las cuales su demanda no podría prosperar sin surtir los efectos que se propone. Así, él debe probar no solamente los hechos constitutivos del dolo ó vicio impugnado, sino también que se halla en tiempo hábil para hacer valer el derecho que la ley le acuerda por medio de la respectiva acción de nulidad, justificación que en el caso debía necesariamente referirse á la existencia de la causa legal que motivó la tardía instauración de la demanda, es decir, que recién dentro de los dos últimos años tuvo conocimiento del dolo que atribuye á su contrario. Por

namente la fecha en que pretende haberlo conocido—Civ., tom. 13, pág. 349, Ser. 5ª (tom. 60).

otra parte, la vieja regla de Ulpiano, *onus probandi encumbit actori: reus in exceptioe actor est*, es de estricta aplicación al caso presente, pues si bien el demandado al oponer la prescripción se convirtió en actor respecto de ella; el actor, á su vez, alegó un nuevo hecho que importaba una escepción que enerva y deja sin efecto la escepción contraria: que era la suspensión de la prescripción durante los cuatro ó cinco años anteriores al juicio. En este caso, al demandado vuelto á convertirse en actor le es aplicable la regla antes citada. No puede ser obstáculo á esta solución ni el carácter negativo que para el demandante tenga la proposición, ni las mismas dificultades que pueda ofrecer tal género de comprobación, pues aparte de que en todo caso, de lo que se trata es de una de esas negativas que los antiguos doctores llamaban *negativam proquam*, es decir, generadoras de una afirmación, como lo es el conocimiento del dolo dentro de los dos últimos años que el mismo actor alegó en su demanda; aparte de esto, la prueba de ese hecho debiera siempre corresponderle, teniendo en cuenta, como lo declaraba la Corte de Casación de Francia en un célebre caso citado por Dalloz—*Obligations*, núm. 2948:—1º, que este hecho, del conocimiento reciente del dolo, le es personal; 2º, que él constituye una escepción establecida en interés suyo; 3º, que por ese medio tiende el actor á quitar al demandado el beneficio de la prescripción que ampara su situación actual; y finalmente, porque las mismas dificultades de la prueba antes recordadas, no pueden ser causa bastante para producir un efecto tan extraordinario como el de invertir la posición de las partes en el proceso y perpetuar arbitrariamente el plazo que la ley ha limitado á un período determinado. Obsérvese todavía que, como lo hace notar Laurent—tom. XIX, núm. 55—esta dificultad de la prueba sería todavía mayor para el demandado, desde que él no podía saber tan bien como el actor cuando llegó éste á descubrir el dolo ó vicio por él incriminado, prueba que, además, le sería á éste fácil producir por presunciones ó cualesquier de los otros medios autorizados por la ley—arts. 1190 y 1191, Cód. Civ.—Esta solución es, por otra parte, la que también ha merecido de la jur. nacional y extranjera, como puede verse en el fallo de esta Cám. que se registra en el tom. 8º, Ser. 1ª, pág. 523, y sentencia ya recordada de la Corte Francesa de Casación de 26 de Julio de 1825. Ella es también la que tiene en su apoyo la opinión casi uniforme de los autores franceses, según puede verse en Laurent, lugar citado, donde plantea *in terminis* la cuestión y la resuelve en idéntico sentido, como lo hacen también Vazeille, *Traité des prescriptions*, tom. II, núm. 564; Dalloz, *Obligations*, núms. 2947 y 2948; Aubry et Rau, tom. XII, pág. 281, nota 36; y Duranton, tom. XII, núm. 536. No produciendo el actor la prueba que le incumbe producir para demostrar la causa interruptiva de la





1. **Acto ilícito** — La concurrencia de culpa no basta para absolver al autor de un acto ilícito de daños y perjuicios causados: solo permite una disminución proporcional de la indemnización—Civ., tom. 11, pág. 71, Ser. 3ª (tom. 58).

prescripción opuesta de contrario, la excepción del demandado queda en pie con toda su fuerza y vigor.

1. En el juicio seguido con motivo de un accidente ferroviario se constató de una parte que la empresa había infringido las disposiciones legales y reglamentarias que rigen en materia de ferrocarriles al no colocar las barreras, que según aquellas deben establecerse en los pasos á nivel, á lo que se agregaba la falta de precauciones con que los empleados de su dependencia procedieron en el momento de producirse el accidente, todo lo cual determina responsabilidades en los términos de los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. De la otra parte se comprobó que los padres del menor no le dedicaban la vigilancia necesaria, á tal punto, que debido á ese descuido ó negligencia, la víctima imprudentemente se encontraba en un paraje en el cual, según los mismos reglamentos antes invocados, no era permitido detenerse. Todos los autores determinan que esta concurrencia de culpas no tiene más alcance que disminuir las responsabilidades pecuniarias. Así Laurent, en su obra *Principios del derecho civil francés*, comentando el art. 1382 del Cód. Civ. francés, que concuerda con el 1109 del nuestro, al ocuparse del conflicto de culpas que resulta comunmente cuando ocurren accidentes, se espresan de la siguiente manera: «Nosotros no admitimos la la irresponsabilidad sino cuando la imprudencia haya sido la sola causa del accidente. Es necesario no olvidar que el rigor de la ley en materia de cuasidélito, tiene por fin salvaguardar la vida de los hombres. La consecuencia más natural de la falta no es la de exonerar de toda responsabilidad al autor del hecho perjudicial, sino disminuirla de tal manera que los daños ó intereses á indemnizar sean en proporción al grado de la culpa, y ésta disminuye cuando el daño es imputable en parte á la falta de quien lo experimenta. Según el art. 1111 del Cód. Civ., el hecho que no cause daño á la persona que lo sufre, sino por una falta imputable á ella misma, no impone responsabilidad alguna. Como se ve, este artículo solo exonera de responsabilidad cuando el daño es ocasionado únicamente por una falta de la misma persona que lo sufre, pero no cuando también hay falta en el autor del hecho. Así, pues, como en todo caso lo más favorable para la empresa sería la existencia de culpa en las dos partes, resulta que la disposición citada del Cód. Civ., no puede ser invocada por el demandado para eximirse de su responsabilidad. Esta interpretación del art. 1111, que surge claramente del texto espreso de la ley, es la misma que resulta de los principios que rigen en esta materia, como lo enseña Laurent cuando dice: «El



2. **Acto ilícito**—A los efectos civiles el acto ilícito existe aun cuando no haya dolo, con tal que pueda imputarse á su autor culpa ó negligencia—Civ., t. 11, pág. 92, Ser. 5ª (t. 68).

3. **Acto ilícito**—La absolución del procesado en el juicio

aforismo, no recibe aplicación cuando se puede imputar una falta á aquel por cuyo hecho ha tenido lugar el daño, aun cuando la parte dañada sea también culpable de imprudencia. No se debe perder de vista el principio fundamental en esta materia, de que la falta más leve es una causa de responsabilidad; de ahí se sigue que la imprudencia de la víctima no borra la falta del autor, á menos que aquella sea la única causa del daño sufrido. Si no lo es, queda una falta á cargo del autor, de la que es responsable, por leve que sea. Aquel que por su hecho cause un daño, ha debido tomar todas las precauciones para evitarlo; si no lo ha hecho, ha cometido una falta, y queda, por lo tanto, sometido á una acción de daños y perjuicios » -- tom. 20, núm. 487.

2. Esta cuestión ha sido largamente debatida en la Cám., pudiendo decirse que el resultado favorable ó desfavorable de todo pleito que se inicie fundado en los arts. 1102, 1103, 1109, 1110 y 1111 del Cód. Civil constituye una verdadera lotería judicial. La opinión de este Trib. está completamente dividida. Véase: Inst., tom. 8º, verb. *Absolución del acusado*, 1. De los cinco miembros de que se compone la Cám. de lo Civil, tres sostienen que la sentencia criminal no hace cosa juzgada para lo civil á los efectos de las responsabilidades civiles que entraña el acto ilícito: estos son los Dres. González del Solar, Molina Arrotea y Giménez. Los otros dos piensan lo contrario, y son los Dres. Díaz y Gelly. Recusadosin causa á uno de los que forman la mayoría, se integró el Tribunal con un miembro de la Cám. Crim., formándose una mayoría en sentido contrario, pues casi todos los de este último Trib. opinan que las resoluciones de lo criminal hacen cosa juzgada para lo civil.

3. Esta cuestión, como todas las otras que tienen análogos fundamentos, fué resuelta por la mayoría de la Cám. La minoría sostuvo el principio contrario, es decir, que la acción era improcedente. «El actor», decía la minoría, «demanda por indemnización de daños y perjuicios, fundado en la culpa ó imprudencia que pretende medió de parte del cochero de la empresa Tranways Ciudad de Buenos Aires, en el accidente desgraciado que ocasionó la muerte del niño José Manuel Calaza. La argumentación de la demanda y toda la prueba producida, tienden á establecer ese extremo, invocándose, entre otras disposiciones legales, los arts. 1109 y 1113, Cód. Civ. El art. 1109, dispone: «Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil.» La culpa ó negligencia es, pues, el antecedente necesario



criminal, no lo exime de la responsabilidad que la ley civil im-

para que proceda la responsabilidad; y es por eso que el demandante para hacerla efectiva sobre la empresa, se propone demostrar la culpabilidad de su dependiente, el cochero. Ahora, del testimonio agregado resulta que el cochero fué procesado por la culpa ó imprudencia que se le imputó en el hecho de la muerte del menor, y que fué absuelto por el Juez del crimen, con la particularidad de que el fiscal afirma, basado en la prueba relativa, que la culpa ó imprudencia estuvo más bien de parte de la víctima. Así, pues, tenemos que una sentencia ejecutoriada en lo criminal, ha declarado inculpable al cochero. Después de esa decisión en el juicio criminal, ¿será permitido volver en el civil á imputar y probar la culpabilidad del cochero? Pienso que no, en presencia de la terminante disposición del Cód. Civ. en su art. 1103, que prescribe: «Después de la absolución del acuerdo no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución.» Y bien, el hecho principal sobre el cual ha recaído la absolución en el juicio criminal, es el mismo que forma la materia del presente litigio; esto es, la culpa ó imprudencia del cochero. El codificador, en su nota al art. 1103 citado, se expresa en estos términos: «Si el Trib. criminal, reconociendo que el hecho existe y que Pedro es el autor, ha declarado que no le es imputable, y que no hay culpabilidad en él, no se podrá establecer contra él esta misma culpabilidad ante la jurisdicción civil.» Es esto último, sin embargo, lo que se ha tratado de hacer en el actual juicio. El demandante se ha esforzado en constatar la culpabilidad del cochero, porque solo á esa condición eran aplicables los arts. 1109 y 1113 del Cód. citado. La responsabilidad de la empresa tiene que presuponer la culpabilidad del dependiente, pues de lo contrario no regiría el art. 1113 citado. De lo que dejo espuesto, se desprende que existe cosa juzgada sobre la inculpabilidad del cochero ó dependiente de la empresa y que por lo mismo no puede ya discutirse ó contestarse en esta jurisdicción ese mismo hecho, de acuerdo con el precepto del art. 1113 citado.» Este fué el voto del Dr. Díaz, de acuerdo con la opinión del Dr. Gelly. La mayoría dijo: «Los señores vocales preopinantes, entienden que el fallo del inferior debe revocarse en razón de haber sido absuelto el conductor por los Tribs. del Crimen, absolución que no permite, de acuerdo á lo dispuesto en el art. 1103 del Cód., volver en lo civil á imputar y probar su culpabilidad, de la misma manera que después de condenado en el juicio criminal—art. 1102—no se puede contestar en el juicio civil la existencia del hecho ni imputar la culpa del procesado. Estas apreciaciones son, en mi concepto, erróneas y nos llevarían, según he tenido oportunidad de decirlo en otros acuerdos, hasta confundir los efectos y los caracteres de los delitos del derecho criminal con los caracteres y los efectos de los cuasidelitos. El autor de un hecho puede ser absuelto por la ley penal, sin

pone para los actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio—Civ., t. 12, pág. 114, Ser. 5ª (t. 59).

que por ello se afecte en lo mínimo sus responsabilidades ante la ley civil, porque esta última castiga hasta la culpa leve, los actos y las omisiones que carecen de sanción para la primera. Los Tribs. del Crimen, observa Segovia, sobre el art. 1103, no están llamados á estatuir sobre la existencia de hechos considerados no como que presentan los caracteres de un delito de derecho criminal, sino como que ofrecen los caracteres de un delito de derecho civil, de un cuasidelito, ó de cualquier otro acto capaz de enjendrar, bajo el punto de vista del derecho civil, cualesquiera consecuencias legales. Según el objeto y la naturaleza de la institución de estos Tribs., sus decisiones dejan entera é intacta la cuestión de saber si en un caso dado se ha cometido ó no un delito de derecho civil ó un cuasidelito, si los hechos imputados al procesado ó al acusado le son imputables en relación á las consecuencias civiles que se considera derivar de ellas, y si son bastantes para autorizar una demanda por daños y perjuicios ó una acción ó excepción de nulidad, ó cualquiera otra reclamación de interés civil, y cuáles son las personas sobre las que debe recaer, bajo el punto de vista del derecho civil, el perjuicio resultante de un hecho punible. Por otra parte, la jur. de este Trib. ha fijado la verdadera inteligencia del art. recordado, declarando que la absolución del procesado ante lo criminal, no basta para liberarlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio, sin que pueda calificarse como delitos previstos y penados por el Cód. Criminal—causa LV, pág. 29.—Uno de los señores camaristas, espresaba en aquella causa, que la sentencia pronunciada en el juicio criminal no podía hacer cosa juzgada en el presente juicio, por la sencilla razón de que allí el demandado fué el cochero, y en éste el demandado era la empresa. Aunque haya identidad de objeto en ambos juicios, puesto que en el criminal se pidió á más de la pena el pago de daños y perjuicios, no hay identidad de partes, que es un requisito indispensable para que la excepción de cosa juzgada sea precedente. Lo juzgado en el juicio criminal, decía otro de los señores vocales, fué el delito de derecho criminal, siguiendo los daños y perjuicios la suerte de aquel juicio. No se ha tratado, pues, allí, de resolver absolutamente sobre responsabilidad civil, independiente de la responsabilidad criminal. No se ha tenido en vista un delito de derecho civil ó el daño causado por culpa ó negligencia. Como la doctrina espuesta ha sido desarrollada en numerosas resoluciones, en las cuales he tenido ocasión de emitir juicio, no abundaré en mayores consideraciones para fundar mi voto, debiendo solo agregar que la misma Compañía, espresando agravios, declara que no sostendrá que la absolución decretada ante la justicia criminal sea por sí sola bastante para determinar la responsabilidad civil, aunque sí cree







4. **Acto ilícito**—Justificada la culpa ó negligencia del autor de un acto ilícito, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios—Crim., tom. 12, pág. 214, Ser. 5ª (tom. 69).

5. **Acto ilícito**—La apropiación de un bien particular por la Municipalidad importa un acto ilícito y la responsabilidad por los daños y perjuicios causados, aun cuando lo abandone nuevamente—Civ., tom. 20, pág. 121, Ser. 5ª (tom. 67).

---

firmeemente que es un antecedente que no debe despreciarse, ya que por su medio se trata de investigar la falta punible, que es el fundamento también de la responsabilidad civil.

4. En este caso no hubo disidencia por cuanto nada se dijo respecto á si el caso había sido materia de resolución ante los jueces del crimen.

5. Para la eficacia de la acción de daños y perjuicios, es indispensable, con arreglo á la ley, que se justifique, no solo la existencia del acto ilícito, sino también el dolo, culpa ó negligencia imputable al agente, pues no probándose estas circunstancias, no hay responsabilidad por las consecuencias del hecho, por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia constante de nuestros Tribs., para que la acción de daños y perjuicios, producidos por un acto ilícito que no puede ser calificado de delito, sea procedente, es indispensable que se justifique conjuntamente, no solo la existencia del perjuicio, sino también el derecho á ser indemnizado, sin que pueda apreciarse como tal el agravio moral que el acto ha inferido. Comprobado el daño y justificada la responsabilidad de la Mun., el derecho del actor para reclamar la indemnización de daños y perjuicios es incuestionable, puesto que los arts. 1076, 1077, 1109, 1113 y 1192 del Cód. Civ. fundan suficientemente el derecho de pedir la indemnización que se reclama y la obligación de satisfacerla en que está la Mun. Habrá daño, dice el art. 1068, siempre que se causare á otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, directamente en las cosas de su dominio, ó posesión ó indirectamente por el mal hecho á su persona ó á sus derechos ó facultades; el art. 1109 prescribe que todo el que ejecuta un hecho por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación de daños y perjuicios, obligación que pesa también sobre la Mun., haciéndola responsable por los daños que causaren los que están bajo su dependencia, según así lo determina el art. 1113 del Cód. citado; siendo en consecuencia, procedente la acción instaurada en mérito del derecho que le acuerda el art. 1122 del mismo Cód., cuando establece que las personas damnificadas por los dependientes ó domésticos pueden perseguir directamente ante los Tribs. civiles á los que sean civilmente responsables del daño, sin estar obligados á llevar á juicio á los autores del hecho.



**Acto ilícito** — Véase: *Daños y perjuicios*, 10, 31 y 42: *Costas*, núm. 93.

**1<sup>a</sup>. Acto ineludible** — Si se justifica la repetición del ataque de la víctima, es presunción de la ley que el homicidio perpetrado sin testigos ha sido un acto ineludible, y en consecuencia procede la escepción de legítima defensa — *Crim.*, tom. 1, pág. 267, Ser. 5<sup>a</sup> (tom 36).

**1<sup>b</sup>. Acto jurídico** — La detención por orden de juez competente no importa la falta de libertad en que la ley permite

1<sup>a</sup>. El Camarista, cuyo voto sirvió de fundamento á la cuestión, dijo: «Las circunstancias especiales del hecho me deciden á pensar que en el presente caso existe justificada la causa eximente de legítima defensa alegada por el reo. Mediante la confesión indivisible de éste, se acredita que Perez lo agredió dos veces antes de ser herido, y que Lencina se limitó en esas ocasiones á desarmar á su injusto agresor. Ahora bien; este antecedente, lejos de considerarlo como presunción en contra del último, me induce á pensar que si en el tercer ataque lo hirió, fué porque la necesidad de la defensa se lo exigía. No puede pedirse mayor prudencia y moderación á un hombre, que limitarse á desarmar á su injusto agresor; y cuando encontramos que esa ha sido la conducta observada dos veces por el procesado, me parece que lo racional es creer que si por fin se decidió á herir, fué porque las circunstancias habían cambiado y ya no podía echar mano con éxito del recurso anterior. ¿Por qué suponer que la cólera ó el deseo de venganza movieron el brazo del reo? ¿No encuadra más dentro del espíritu de la ley —art. 13 del Código de Proc.— y aun dentro de los mismos antecedentes del hecho, inclinarse del lado de la suposición que acabo de enunciar? ¿El tercer ataque no ha podido llevarse en forma distinta de los anteriores y en condiciones tales que pusieron realmente en peligro la vida de Lencina? En cuanto á la ebriedad de Perez no era, según se desprende de la declaración de los testigos, la ebriedad letárgica que paraliza las fuerzas físicas. De ese estado no puede, pues, sacarse presunción alguna en contra del procesado. Pero aun admitiendo que la embriaguez lo hiciera tambalear, el ataque de un ébrio en esas condiciones puede ser extremadamente grave en un momento dado.

1<sup>b</sup>. El principio es que los actos jurídicos para ser válidos deben ser practicados con discernimiento, intención y libertad —art. 900 del Código Civ. — y que se presume la falta de libertad cuando los agentes los han ejecutado por fuerza ó miedo. De los hechos relacionados en la demanda se desprendía claramente que al firmar la escritura no lo hizo por la fuerza, bastando para demostrarlo el hecho de haberse firmado en el Departamento de Policía, donde estaba detenido por orden del

fundar la nulidad de un acto jurídico—Civ., tom. 22, pág. 148, Ser. 3ª (tom. 69).

Juez de Instrucción. El ejercicio de la fuerza en tales condiciones es imposible, á no ser que se produzca por los mismos agentes de la autoridad pública, bajo cuya custodia se encuentra el detenido, ó con su complicidad, lo que no se alegó por éste. La demanda atribuye la falta de libertad con que decía haber procedido el actor, no á la fuerza, sino al miedo que su prisión se prolongase indefinidamente, y de comprometer y aun de perder todos sus bienes. Habrá intimidación, dice el art. 937 del Cód. Civ., cuando se inspire por uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave, en su persona, libertad, honra y bienes, ó de su cónyuge, ó descendientes ó ascendientes, legítimos á ilegítimos. Son varias, como se ve, las circunstancias que la ley requiere para que la intimidación pueda anular los actos jurídicos, siendo evidente que el vendedor no se encontraba comprendido en ninguna de ellas, y mucho menos en todas juntas, como se requiere para que la manifestación de su voluntad sea viciada por falta de libertad. En primer lugar, se requiere que la intimidación sea el resultado de injustas amenazas, que no se han probado, ni puede razonablemente presumirse que las constituyan una querrela criminal presentada ante el juez competente, puesto que precisamente la intervención de ese magistrado es en garantía de los derechos de las personas que son parte en el juicio. No hay intimidación por injustas amenazas, dice el art. 939, cuando el que las hace se redujese á poner en ejercicio sus derechos propios, y el comprador al querrellarse criminalmente contra el vendedor por defraudación y por estafa, no había hecho más que ejercitar un derecho, si creía tenerlo, sin que los jueces puedan entrar á apreciar y á resolver si lo tenía ó no, por no ser de su resorte ni de sus atribuciones. Es ante la misma jurisdicción criminal que el vendedor debió hacer valer sus acciones hasta obtener la correspondiente declaración, si es que creía tenerlas después de aceptar el auto de sobreseimiento, dictado en mérito del convenio, y en cumplimiento del cual el acusado otorgó la escritura pública que después se impugnó como nula. En segundo lugar, no bastan las amenazas injustas para que haya intimidación, sino que también se requiere que ellas produzcan un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave. Si la querrela instaurada era injusta, fundadamente, no debía temer el querrellado que su prisión se prolongase indefinidamente, que sería el mal inminente y grave que decía lo intimidó, y por el contrario, deber suyo era provocar la resolución judicial que lo declarase inculpable, y no obtener esa declaración mediante la entrega de bienes por vía de transacción, para venir en seguida ante los Tribs. civiles á alegar la nulidad, fundada, en definitiva, en el temor que le inspiraban los procedimientos de la justicia de instrucción. Según lo dispuesto por el art. 938, la





**2. Acto jurídico**—La declaración de nulidad de un acto jurídico vuelve las cosas al estado que tenían antes de que tuviera lugar el acto, pero no anula *ipso facto* los actos válidos

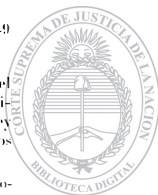
intimidación no afectará la validez de los actos sino cuando por la condición de la persona, su carácter, hábitos ó sexo pueda juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una fuerte impresión. La prueba producida no justificó tampoco ninguno de los extremos legales necesarios para que exista la intimidación, y en su mayor parte esa prueba tuvo por objeto acreditar hechos no articulados, la que el Juzgado desestimó, con arreglo á lo que dispone el art. 108 del Cód. de Proc.

2. El art. 1051 del Cód. Civ. dispone, que todos los derechos reales ó personales transmitidos á terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado á ser propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual. Dicho art. no es más que una enunciación doctrinaria, un principio general, sujeto á restricciones, como lo demuestra desde luego, el art. 1057, al dar por sentado que hay casos en que no es posible demandar contra terceros los efectos de nulidad de los actos. Entra en la economía de nuestro Cód. el sistema de las generalizaciones, ó sea de la enunciación de principios generales, sin perjuicio de las limitaciones que luego se introducen y que hacen inaplicables á diversos casos especiales la regla general. Nos suministra un ejemplo de esto el art. 1184 del Cód. Civ., el cual prescribe que deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad. Los actos nulos ningún efecto producen—arts. 1038, 1050 y 1056—y sin embargo, los arts. 1185, 1187 y 1188 acuerdan efecto á los contratos privados sobre transmisión de inmuebles, fallando en tales casos la regla general y primando las escepciones que envuelven las últimas disposiciones citadas. No sería un criterio prudente aquel según el cual se tomara el art. 1051 á la letra, y en concepto de que su aplicación era ineludible desde que se tratara de un acto anulado. El está restringido en cuanto á su aplicación á diversos casos especiales. ¿La nulidad de que habla el art. 1051, es relativa ó absoluta? Parece que la nulidad relativa no está comprendida en el art., sino en cuanto se refiere á las consecuencias entre partes ó adquirentes de mala fe. Así resulta de la disposición del art. 1046. Sus términos son estos: «Los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados, y solo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulase.» Si los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados, y si solo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulase, es lógico concluir que los efectos de la nulidad declarada de un acto, no pueden alcanzar á los terceros adquirentes de buena fe. Vendido un inmueble por acto anulable y transfe-



que de él hayan nacido ejecutados por terceros que requieren otras tantas declaratorias para fundar derechos contra ellos — Civ., tom. 22, pág. 229, Ser. 3ª (tom. 69).

rido el dominio por el adquirente A., á un tercero de buena fe, la sentencia anulatoria no lo afectaría á éste, puesto que el título de A. se tiene por válido mientras no se dicte la sentencia que lo anule. Desde que los actos anulables se reputan válidos, mientras no sean anulados, no teniéndose por nulos sino desde el día que se dicte la sentencia que los anulase, es evidente que la sentencia anulatoria no puede tener efecto retroactivo para dejar sin efecto transacciones anteriores. Se afirma que el art. 1051 es comprensivo solamente de la nulidad absoluta, y que esta misma no siempre cae bajo su imperio. Anulado el acto, hay acción contra terceros, en algunos casos, como estos: si es sucesor universal del transmitente, en razón de que éstos continúan y representan la persona del difunto, de manera que su título no es más que el título de su autor si obtuvo la cosa á título gratuito, si la cosa ha sido adquirida á título oneroso, pero con mala fe, pues ésta no puede ser favorecida por las leyes, si el poseedor hubo con buena fe y justo título, pero la obtuvo de un enajenante de mala fe, pero no contra los dos sino en caso de excepción. Fuera de las precedentes hipótesis, no prevalece sin limitación la acción que deriva del acto anulado. Constituyen una elocuente demostración de esta tesis la acción pauliana, que solo alcanza al tercero cómplice en el fraude y á un segundo adquirente, si también tuvo mala fe — arts. 968 y 970 — la acción de revocación de una donación que no puede dirigirse contra terceros por las enajenaciones hechas por el donatario, antes de serle notificada la demanda — art. 1866 — la acción de revocación de las enajenaciones que hubiese hecho el heredero declarado indigno de suceder, lo que únicamente compete cuando el adquirente es de mala fe — arts. 3309 y 3310 — la acción de nulidad contra las enajenaciones hechas por el poseedor de la herencia que solo competiría si el tercero con quien hubiese contratado hubiera tenido mala fe — arts. 3429 y 3430 — la acción de nulidad del copermutante que obtuvo la nulidad, no va hasta terceros, sino cuando estos adquirieron por título gratuito — arts. 2129 y 2130. — Todas estas disposiciones y otras que pudiera citarse, están demostrando que la acción que autoriza el art. 1051, se detiene en presencia de la buena fe, ó del título oneroso, ó ante ambos; y que solo procede contra los poseedores actuales de mala fe. Para que el art. 1051 fuese aplicable, necesitarían ser poseedores de mala fe. El art. 4010, define el justo título, diciendo que es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez. El título mediante el cual en el caso que nos ocupa se transmitió el dominio, estaba revestido de todas las solemnidades requeridas por la ley, las que tienen por fin transmitir el dominio de inmuebles.



**Acto jurídico**— Véase: *Cosa juzgada*, 4.

1<sup>a</sup>. **Actos jurídicos**— Siendo la partida de bautismo el justificativo de un hecho y no de un acto, su validez ó nulidad no depende de la existencia de formalidades que la ley reputa indispensables para la existencia de los actos jurídicos —Civ., tom. 11, pág. 134, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

1<sup>b</sup>. **Actos civiles**— La prueba de que una sociedad co-

En este caso él es título justo. La posesión será legítima, dice el artículo 2355, cuando sea el ejercicio de un derecho real constituido en conformidad á las disposiciones de este Código. Finalmente, el art. 2356 determina que la posesión es de buena fe, cuando el poseedor se creyese legítimo poseedor, aunque fuere por error de hecho. Una prescripción concordante, la del art. 4006, añade que la buena fe es la creencia, sin duda alguna, del poseedor, de ser el exclusivo señor de la cosa. Si los poseedores actuales tienen justo título y su posesión es legítima, es natural que se hayan creído y se crean los únicos señores de la cosa, y entonces son poseedores de buena fe, puesto que dicha posesión no es viciosa, pudiendo aun ampararse de la presunción favorable á ellos que contiene el art. 2362, el cual los declara poseedores de buena fe, mientras no se pruebe lo contrario. Me limitaré á observar por vía de refutación, que el art. 2777 concede acción contra el actual poseedor de buena fe que por título oneroso hubiese obtenido la cosa de un enajenante de mala fe. Viniendo ahora al terreno de las disposiciones del Cód. referentes á la reivindicación, que son las pertinentes, conviene detenerse delante del art. 2778, que ha sido puesto por el legislador, á mi juicio, como una de tantas limitaciones á los efectos aparentemente absolutos del art. 1051. En su primera parte se lee: «sea la cosa mueble ó inmueble, la reivindicación compete contra el actual poseedor, aunque fuese de buena fe, que la hubiese tenido del reivindicante por un acto nulo ó anulable.» De este texto se deduce claramente que el dueño de un inmueble transmitido por un acto nulo ó anulado, puede reivindicarlo del comprador aunque sea de buena fe, pero no de un tercer adquirente también de buena fe. La inteligencia que se asigna á este art., tiene su justificación en su propio texto, en la doctrina desenvuelta sobre los poseedores de buena fe y en la necesidad de estabilizar las transacciones sociales, evitando la justa alarma que se apoderaría de los espíritus si llegara á prevalecer la teoría contraria, negándose todo amparo al derecho de los terceros poseedores de buena fe.»

1<sup>b</sup>. Existiendo á favor del carácter comercial de la sociedad, la presunción legal de que el acto que ejecuta es comercial, corresponde al que desconoce esa calidad, la prueba de que no obstante esa presunción la sociedad se dedica exclusivamente á objetos civiles, y que por lo tanto,



mercantil solo ha ejercido actos civiles, corresponde al que afirma el hecho — Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

1ª. **Actos prohibidos** — Carece de acción el que por medio de un acto simulado ejecuta actos prohibidos por la ley, y los tribunales deben declarar su nulidad aun cuando resulte plenamente justificado que la simulación no tuvo por objeto propósitos inmorales — Civ., t. 18, pág. 35 Ser. 5ª (tom. 65).

**Actor** — Véase: *Contrato de compraventa*, 2; *Costas*, 1, 18, 25 y 31; *Liquidación*, 2; *Demanda*, 4 y 5; *Acción reivindicatoria*, núm. 4.

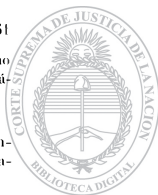
**Actuaciones** — Véase: *Nulidad*, 6.

1ª. **Actuaciones nulas** — El error de un cargo no puede fundar la nulidad de actuaciones posteriores — Com., tom. 1, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 36).

**A cuenta** — Véase: *Recibo á cuenta*, 1.

no puede ser considerada mercantil, en virtud de que al que alega un hecho nuevo en juicio le corresponde su prueba.

1ª. El presidente de una sociedad anónima celebró con la sociedad que él presidía, y por interpósita persona, un contrato de arrendamiento de un inmueble de la misma sociedad. El presidente cometió un acto contrario á la moral y á las buenas costumbres, y contra la ley que declara insanablemente nulos tales hechos. El art. 405, Cód. de Com. antiguo igual al 337 del vigente, considera á los directores de las sociedades anónimas como mandatarios de ellas, y el 191 del ant. y 207 del vigente, declara aplicables á los negocios comerciales las disposiciones del Código Civ., en cuanto no esté modificado por el Cód. de Com. La ley civil en sus arts. 37, 1361 y 1513 establece la nulidad del contrato de la naturaleza del que motivó esta cuestión. De acuerdo con estas disposiciones legales es evidente que el presidente de una sociedad no puede celebrar con la misma contrato alguno de arrendamiento sobre los propios bienes de ella. Cuando se lleva á cabo un acto por personas á quienes la ley, por razones de orden público, les prohíbe ejecutarlo, se produce una nulidad absoluta, no susceptible de confirmación, que puede y debe ser declarada de oficio por los Tribs., según es doctrina corriente y ha sido establecido por la misma Cám. de lo Civ. en el caso análogo que se registra en el tom. 4º, Ser. 2ª, pág. 254. Si el presidente practicó por interpósita persona un acto terminantemente prohibido por la ley, no puede ser admitido á probar que el celebrado entre otros, consecutivo del primero, entraña una simulación — arts. 950 y 960 del Cód. Civ. — *Quod nullum est, nullum producit effectum*.



1<sup>a</sup>. **Acumulación**—Si no existe identidad de partes, no procede la acumulación de espedientes—Civ., tom. 18, página 95, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

**Acumulación**—Véase: *Delito*, 2; *Demanda*, 1.

1<sup>b</sup>. **Acusación**—Las costas son de cargo del que se compromete al pago, aun cuando se resuelva á su favor la acusación—Crim., tom. 9, pág. 92, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2. **Acusación**—Si el querellante reconoce no ser propietario legal de los objetos defraudados, debe desecharse la acusación—Crim., tom. 9, pág. 102, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

3. **Acusación**—Solo puede resolverse, sobre la inexistencia de calumnia, al dictar sentencia definitiva; contestada la acusación debe recibirse á prueba—Crim., tom. 9, pág. 110, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

4. **Acusación**—Si la acusación no se ha resuelto por existir cuestiones prejudiciales, en tanto ellas no sean resueltas,

1<sup>a</sup>. La acumulación solo procede cuando hay identidad de objeto, de personas y cuando la sustanciación es idéntica. En el caso que nos ocupa se quiso acumular un juicio ordinario á otro de carácter ejecutivo. No es posible esto, pues la tramitación de uno y otro juicio es distinta y no está sujeta á los mismos trámites.

1<sup>b</sup>. En una demanda por injurias, la parte acusada se retractó en el juicio verbal á que se convocó á los litigantes, comprometiéndose á abonar las costas de la contraria. En virtud de la retractación, el juez sobreseyó en el juicio sin pronunciarse sobre las costas. El acusador pidió regulación de los honorarios de su abogado á lo que se opuso el querellado, por cuanto la sentencia no le había impuesto las costas. Se resolvió que no obstante ese silencio de la resolución, las costas eran á cargo de quien se comprometió á abonarlas, por cuanto esto es conforme con lo dispuesto en los arts. 493 y 496 del Cód. de Proc. Crim.

2. El querellado comprobó que la defraudación reconocía como fundamento la sustracción de cosas de propiedad del mismo querellado. Solo hay defraudación cuando una persona se apodera de la cosa ajena contra la voluntad de su dueño.

3. El art. 178 del Cód. Pen. determina que el reo de calumnia queda libre de pena si prueba la imputación; por lo tanto, el trámite de la prueba es de estricto derecho.

4. El Juez del crimen resolvió que de conformidad al art. 17 del Código de Proc. Pen., se trataba de una cuestión prejudicial, cuyo conoci-





no procede declaración de haber sido calumniosa —Crim., tom. 9, pág. 299, Ser. 3ª (tomo 25).

5. **Acusación** — Determinando el modo y forma en que pueden remitirse expedientes judiciales á la comisión investigadora en caso de acusación de magistrados ante el Congreso Nacional —Crim., tom. 9, pág. 443, Ser. 3ª (tom. 25).

miento competía á la jurisdicción civil, y en consecuencia, se declaró incompetente; esta resolución fué consentida y ejecutoriada. Si, del delito de estafa no puede conocerse, porque él dependía de una cuestión prejudicial, tampoco puede conocerse del mismo delito como acusación de calumnia, porque para que esos hechos sean calumniosos ó no, es necesario la decisión previa de la cuestión prejudicial sobre si había ó no un acto lícito. El art. 17 citado, dice terminantemente, que no podrá iniciarse juicio criminal antes que haya sentencia ejecutoriada en la cuestión prejudicial.

5. Según enseña Cushing, en la Ley y Práctica de las asambleas legislativas, siempre se ha considerado atribución de estas asambleas y de las comisiones investigadoras que nombran, examinar testigos y hacer traer papeles y documentos, de la misma manera que pueden hacerlo las Cortes de derecho. Este principio es el que debe aplicarse al caso, y remitirse á la comisión investigadora, los mismos expedientes y documentos que se remitieran, por ejemplo, á la S. C. de J. Nac., en caso de que ella lo solitaria para el mejor esclarecimiento de algún asunto sometido á su jurisdicción. Así, si se trata de una causa criminal en sumario, parece que no podría ser remitida, porque acaso se dificultara la investigación de un delito ó se detuviera privada de su libertad á alguna persona, mayor tiempo del que la ley lo permite. Con las reservas del caso, podría, sí, remitirse testimonio de las piezas pertinentes. Cuando se trate de causas en estado de plenario, siempre que la dilación momentánea no perjudique el estado del asunto, podrían remitirse con la recomendación de pronta devolución. En las causas comerciales, sería excepcional que se produjera un agravio irreparable; así es, que por regla general, deberán remitirse, resistiendo tan solo el envío en los casos en que fuera necesario completar diligencias para seguridad de los bienes ó de índole probatoria. En una palabra: deben remitirse los papeles y expedientes solicitados por la comisión en los mismos casos en que son pedidos *ad effectum videndi* por un tribunal de derecho que ejerce jurisdicción en el radio de la Cap. En su consecuencia la Cám. dispuso: 1º Que los jueces remitan á la comisión de la Cámara de Diputados los expedientes terminados ó paralizados que esta comisión solicitare. 2º Que los expedientes en tramitación, de que la comisión desee instruirse, sean puestos á su disposición en las respec-



6. **Acusación**—No procede la condenación en costas, daños y perjuicios al querellante, si el Ministerio Fiscal hizo suya la acusación—Crim., t. 3, pág. 268, Ser. 5ª (tom. 38).

7. **Acusación**—La falta de comparecencia del querellante de adulterio para absolver posiciones, no basta para darlo por desistido de la acusación—Crim., t. 5, p. 223, S. 5ª (t. 40).

8. **Acusación**—La calificación denigrante sin concretar

tivas oficinas, lo mismo que los procesos criminales en estado de plenario. 3º Que los mismos jueces debían mandar expedir los testimonios que la comisión les pidiera ó permitirle sacarlos. 4º Que respecto de los sumarios pendientes entre los jueces de instrucción, se procediese á su examen con la reserva determinada por los leyes.

6. Los acusadores particulares comprobaron que habían sido víctimas de un delito. Sus derechos fueron reconocidos por el Agente Fiscal, quien pidió pena para el procesado; y la resolución les había sido favorable en parte, aun cuando no reconocía como autor del delito al acusado. Estas consideraciones son suficientes para eximir de la condenación en costas al acusador, no obstante los términos imperativos del art. 144, Cód. de Proc. Crim., porque ante la prescripción del artículo 145 siguiente al 144, solo debe regir en la causas entre partes, desde que no es posible hacer recaer sobre el acusador particular la responsabilidad de un juicio que no se formó por su acusación solamente, sino también por la acusación conjunta del Ministerio Público que la hizo suya, pidiendo pena para el acusado y sobre el cual no debe sin embargo pesar la condenación en costas, sino en el caso de excepción establecida en el art. 145.

7. La citación se hizo bajo apercibimiento de darse por abandonada la querrela. Este apercibimiento solo está establecido por la ley para el caso en que se deje de instar el procedimiento durante un término dado—art. 174 del Cód. de Proc. Crim.—En consecuencia, él no procede fuera del caso referido, y mucho menos, para la falta de comparecencia á una absolución de posiciones cuyo acto no tiene la menor analogía con el abandono del procedimiento y tiene una sanción distinta, la de darlo por confeso—art. 619, Cód. Civ.—La razón del apercibimiento prescripto por el art. 174 del Cód. de Proc. Crim., es la pretensión de renuncia de la acción fundada en el hecho de no instar el procedimiento, y esa razón no alcanza al acto de que se trata, puesto que no puede ser indicio de abandono la falta de comparecencia á absolver posiciones, cuando por otra parte, se sigue diligentemente la tramitación de la causa.

8. Los epítetos materia de la acusación fueron los de estafador y plotador. Dichas palabras, si bien pueden autorizar una acusación por



el hecho, importa una injuria, pero no puede fundar una acusación por calumnia—Crim., t. 5, pág. 249, S. 5ª (tom. 40).

**Acusación** — Véase: *Tribunales ordinarios*, 1; *Auto*, 1; *Bienes testamentarios*, 1; *Denunciante*, 1; *Editor*, 3; *Presunciones*, 1; *Publicación*, 1; *Denuncia*, 2; *Recusación*, 29.

1ª. **Acusación calumniosa**—Da derecho al ofendido a cobrar una indemnización por daños y perjuicios—Civ., t. 11, pág. 92, Ser. 5ª (tom. 58).

1ª. **Acusación fiscal**—El agente fiscal no puede pedir en plenario, diligencias de prueba para fundar su acusación—Crim., tom. 9, pág. 95, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Acusación fiscal**—La competencia del juez debe resolverse por la denuncia del damnificado y acusación fiscal,

injurias, no pueden considerarse como calumniosas, desde que ellas no envuelven la imputación de un hecho concreto que pueda dar lugar al ejercicio de la acción pública, requisito esencial para la existencia de delito de calumnia—art. 171, Cód. Pen.

1ª. Art. 1090 del Código Civil.

1ª. Elevada una causa a plenario, el Fiscal pidió se designaran dos peritos para que contestaran estas dos cuestiones: 1ª Si el acusado era moralmente responsable de su acción; 2ª Si podría hacerse efectiva la responsabilidad legal procediendo con perfecta justicia. El juez dijo que estando expedido el informe solicitado por el Ministerio público, y atento lo dispuesto en el art. 457 del Cód. de Proc. Crim., «vuelva nuevamente en vista a dicho funcionario a sus efectos, sin perjuicio de solicitar las diligencias que estime convenientes en el término de prueba.» Apelada la resolución, la Cám. la confirmó diciendo: «Que según el sistema de nuestra legislación, el llamamiento de peritos, como su designación, corresponde ante todo al Juez de instrucción y al de sentencia —arts. 260 y 322, Cód. de Proc.—y que aun el derecho acordado secundariamente durante el plenario a las partes por el art. 366, queda subordinado a la apreciación del juez. Que en este caso se han producido dos informes, cumpliéndose así las disposiciones de los arts. 260 y 261 del Cód. de Proc. Que siendo el informe pericial uno de los muchos medios de prueba establecidos por nuestra legislación, la apreciación de su valor jurídico, como de su procedencia, y necesidad de su ampliación debe quedar librada soberanamente al juez de la causa, quien está llamado a hacer su clasificación legal en la oportunidad debida.»

2. Lo que determina la competencia de los jueces del crimen, es la naturaleza del delito acusado y la pena pedida contra el reo.



sin perjuicio de lo que de la prueba resulte—Crim., tom. 9, pág. 528, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Acusación fiscal**—Aun cuando la acusación fiscal pida el mínimum de la pena, no procede la escarcelación bajo fianza—Crim., tom. 1, pág. 191, Ser. 5ª (tom. 36).

1. **Acusado**—Por calumnia, puede nombrar quien lo presente en juicio—Crim., t. 9, pág. 65, Ser. 3ª (tom. 25).

3. Según el art. 376 del Cód. de Proc. en lo Crim., la escarcelación bajo fianza no procede sino cuando el hecho que motive la prisión tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo *máximum* no exceda de dos años de prisión, ó una y otra conjuntamente. En el caso del sumario, el hecho que motivó la prisión fué el de disparo de arma de fuego, previsto y penado en el art. 99 del Cód. Pen. con prisión cuyo *máximum* excede de este término, y por consiguiente, la escarcelación no procedía.

1. Esta cuestión ha sido resuelta contradictoriamente por esta Cámara. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Acusado*, 2; tom. 3º, verb. *Acusador*, 1, cuya nota estudia estensamente la cuestión. Nuestro Cód. de Proc. resuelve el caso, aunque no contiene disposición alguna que limite en causas por calumnia la facultad que las leyes generales acuerdan á las partes para hacerse representar en juicio por medio de procurador. Si bien la 6ª, tít. 1º, Part. 7ª, prescribía que el acusado «por sí mismo se debe escusar del yerro quel ponen»; tal rigor fué derogado en la práctica, según lo espone el doctor Tejedor en su *Curso de Derecho Criminal*, 2ª parte, núm. 138, estando hoy completamente abolida en la misma España, pues por el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, se exige que la querella se interponga por medio de procurador. Y aparte de esto, los prácticos han entendido generalmente que aquella prohibición se limitaba á las causas que se exceptúan y enumeran en la ley 12, tít. 5º, Part. 3ª, la cual dice: «Pleytos y ha, en que pueden ser dados Personeros, e otros en que non..... Mas sobre pleyto sobre que pueda venir sentencia de muerte, ó perdimento de miembro, ó desterramiento de tierra para siempre, quier sea movida por acusacion ó en manera de riepito, non deue ser dado Personero; ante dezimos, que todo ome es tenuto de demandar o de defenderse en tal pleyto como este, por sí mismo, e non por Personeros.» Tapia Febrero Ref., tom. 8º, lib. 8º, cap. 1º, núm. 5; Escriche, verb. *Acusador*; y Gregorio López en la glosa de esta ley. Como se ve, esta prohibición de nombrar apoderado en causas criminales, se limitaba á los delitos graves expresamente enumerados en la misma ley, y que no es posible darles siquiera el alcance que pretende Gomez—Var. Res., tom. 3º, cap. 1º, núm. 13—hasta comprender á todo delito en que hubiera de imponerse pena corporal, pues como dice Gregorio López, comentando dicha ley



2. **Acusado**—Si otro pudo ser el autor de la defraudación, el acusado debe ser absuelto —Crim., tom. 9, pág. 99, Ser. 3ª (tom. 25).

12, de sus términos se deduce *à contrario sensu*, que debe admitirse la representación procuratoria. Véase la glosa de esta ley y las *Vistas fiscales* del doctor Cortés, tom. 3º, págs. 431 y 434. De conformidad con esta doctrina, la Cám. ha declarado repetidas veces que era permitida la representación por apoderado, de querellante y querellado en causas de calumnia ó injuria, teniendo para ello en cuenta «que el juicio de calumnia se halla equiparado al juicio común ordinario, en el que no procede la prisión preventiva, y cuya tramitación depende exclusivamente de la voluntad de las partes interesadas, siendo secundario el interés público; que por consiguiente, *no existe inconveniente legal alguno para que en esta clase de juicios el acusado se haga representar por persona debidamente autorizada*, y que las leyes que pudieran invocarse en contrario *se refieren á casos especiales*, como lo ha declarado la Cám. en algunos fallos—Ser. 2ª, tom. 3º, pág. 451.—Se agregaba á esto: «Que si bien es cierto que la jurisprudencia de esta Cám. ha declarado que son necesarios poderes especiales para querellarse por calumnia, es también verdad que ha reconocido que un poder general otorgado con posterioridad á la iniciación del juicio, y con facultad para proseguir las causas criminales pendientes, era bastante para dar la representación sin ser necesario un poder especial—Ser. 2ª, tom. 2º, pág. 591.—A estas consideraciones se agrega, la de que el Cód. de Proc. considera como juicios especiales las querellas por calumnias ó injurias, sobre cuyo procedimiento legisla en el tít. 1º, Ser. 2º, lib. 1º, estableciendo en el art. 596 la prohibición de decretar la detención ó prisión preventiva del procesado, fuera del caso allí previsto.

2. Según resultó de la indagatoria del procesado, él era vendedor de boletos de abono del ferrocarril, cuyo importe él recibía, como asimismo cobrador del mismo ferrocarril; y tanto las cantidades recibidas por boletos como por cobranzas, las depositaba en una caja de lata ó zinc, cuya cerradura ó llave era sumamente ordinaria. Esta caja era tomada todas las noches sin que se le permitiese contar el dinero, y guardada en caja de fierro grande, de la que él no tenía llave, sino el gerente ó el secretario, y éste aparecía como denunciante en nombre de la empresa. Con motivo de pequeños déficits notados anteriormente, por repetidas veces pidió á sus superiores una caja segura donde depositar tanto el dinero de los boletos que vendía, cuanto el de las cantidades que cobraba, sin haberlo obtenido. En la pieza donde estaba la caja de zinc referida, entraban y salían empleados todo el día, y ni un cortaplumas se podía dejar sin que se perdiese. Aun cuando reconocía que existía un déficit de 500 pesos de un mes, como el anterior, él no



3. **Acusado**—Aun cuando el sobreseimiento sea provisional, el acusado no puede obligar al querellante á la prosecución del juicio—Crim., t. 1, pág. 151, Ser. 3ª (tom. 36).

**Acusado**—Véase: *Sobreseimiento definitivo*, 1; *Absolución del reo*, 2; *Calumnia*, 2; *Escarcelación*, 12; *Excepción de*

era culpable, porque él no había dispuesto de dicho dinero, y suponía que dadas las condiciones de la caja en que diariamente guardaba el dinero, la que se abría con cualquier llave, lo hubiesen sustraído otros que él no podía determinar. Esta declaración del procesado sobre la calidad de la caja, sobre el hecho de que ella era guardada en otra grande de fierro todas las noches, sobre el hecho de que había pedido otra caja segura á la empresa, y hecho presente los peligros de la que tenía, así como respecto á que en la pieza donde la caja de zinc estaba, entraba y salía todo el público y empleados del ferrocarril de infima condición, estaban comprobados por las declaraciones de testigos. Todos ellos depusieron que el procesado era una persona honesta y de buenos antecedentes. En contra de esas declaraciones que confirmaban la confesión del demandado, no intentó siquiera probar nada la empresa, ni hubo pruebas ordenadas de oficio. Se está, pues, en el caso previsto por el art. 318 del Cód. de Proc., y la confesión debe considerarse indivisible. El delito de defraudación, como todo delito, tiene como elemento esencial la voluntad criminal, esto es, lo que distingue el *delito* de la *falta*; en el caso, aunque pudo haber negligencia culpable en el empleado, no hay delito de defraudación, porque no se comprobó la voluntad de defraudar por su parte, ni que él fuera el autor de la defraudación: dados los antecedentes del proceso, bien podían ser otros los autores de ella y en consecuencia se pronunció su absolución.

3. La fijación de un término para que el acreedor presente las pruebas que convengan á su derecho, después de decretado el sobreseimiento provisional de la causa, importa la reapertura del sumario. Terminado éste por sobreseimiento provisional, su reapertura solo procede cuando aparezcan nuevos datos ó comprobantes respecto del delito ó la persona de su autor—art. 436, inc. 2º, Cód. de Proc.—Por consecuencia, no reconociendo ese fundamento el pedido del querellado, la improcedencia de la reapertura del sumario, que es lo que en definitiva se solicitaba, resultaba de los propios términos de la disposición citada del Cód. de Proc. Por otra parte, habiéndose juzgado ya que los elementos de prueba acumulados no autorizan el sobreseimiento definitivo, es evidente que esa resolución no podría ser modificada, aun cuando el querellante no presentase ninguna otra prueba, lo que está demostrando también la improcedencia del pedido que ha dado lugar al recurso interpuesto.



*minoridad*, 1; *Fianza*, 3; *Querellante*, 2; *Costas*, 12 y 15; *Calumnia impresa*, 1; *Custodia*, 1; *Encubridor*, 2; *Lesiones*, 5; *Sumas*, 1; *Sobreseimiento*, 3.

1<sup>a</sup>. **Acusado por calumnia**— Si el delito no fué cometido por la prensa, la retractación del acusado por calumnia no debe publicarse por los diarios á su costa—Crim., tom. 1, pág. 115, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

2. **Acusado por calumnia**— La retractación del acusado por calumnia, aun antes de entrar al juicio, lo hace pasible de las costas causadas al acusador—Crim., tom. 1, pág. 115, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

**Acusador**— Véase: *Acusado*, 2; *Injurias*, 5; *Hermanos*, 1; *Sobreseimiento provisional*, 2.

1<sup>b</sup>. **Administración**—No importando la petición de he-

1<sup>a</sup>. La manifestación hecha por el acusado en el respectivo juicio de conciliación, importó una verdadera retractación de la calumnia acusada. Según lo dispuesto en el art. 595 del Cód. de Proc., en cualquier estado del juicio en que el querrellado ofreciese retractación de una manera pública, se sobreseerá en la causa, debiendo satisfacerse por el mismo las costas causadas. Con arreglo á esta prescripción y sin perjuicio de la responsabilidad civil á que se refiere la segunda parte del mismo art., la parte querrellada está obligada al pago de las costas originadas con motivo de la querella. No habiendo hecho éste, la imputación acusada por medio de la prensa, no es de aplicarse al caso lo dispuesto en el art. 184 del Cód. Pen., y la publicación requerida por el art. 595 del Cód. de Proc., se encuentra satisfecha por la publicidad que tienen los actos judiciales.

2. Véase la nota precedente.

1<sup>b</sup>. Esta cuestión fué resuelta por mayoría en la Cám., constituida en Trib. de interlocutorias. El principio consagrado en el sumario se funda en que el art. 328 del Cód. Civ. establece que el padre y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos sobre sus hijos. Esta amplitud de representación solo se halla limitada por la disposición contenida en el art. 336, según la cual los padres naturales no tienen la administración ni el usufructo de los bienes de sus hijos. Es indudable entonces que los padres naturales tienen el derecho de representar en juicio á sus hijos con arreglo al principio consagrado por el art. 274. Se niega á la madre natural personería para estar en juicio fundado en que ella no tiene la administración de los bienes de sus hijos y en que la acción de



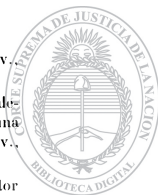
rencia un acto de administración, la madre natural tiene personería para deducirla — Civ., t. 10, pág. 426, Ser. 5ª (tom. 37).

## 2. Administración — La facultad de administrar importa

petición de herencia es un acto de administración; debiendo en consecuencia, nombrarse un tutor especial á los menores, para que asuma su representación. Toda la cuestión se reduce á saber si la acción de petición de herencia es efectivamente un acto de administración de los bienes de los menores. Esta acción no es en modo alguno un acto de administración; por esto presupone necesariamente la posesión de la herencia, circunstancia que no concurría en el presente caso. La administración es la dirección, el gobierno y cuidado que uno tiene á su cargo de los bienes de una herencia, y administrador, es el que cuida, dirige y gobierna los bienes de otro — Escribe, verb. « Administración » y « Administrador ». — Deduciéndose la acción de petición de herencia, la madre no dirige, gobierna, ni cuida los bienes de sus hijos, que aun no los tienen, ni ejerce, por consecuencia, ningún acto de administración en sentido legal. Según el sistema de nuestro Cód. Civ., los padres naturales tienen como los legítimos una patria potestad de todo punto amplia en cuanto ella redunda en beneficio de los hijos — art. 328 — y limitada únicamente en todo lo que ella tiene de útil para los padres — art. 336 del Cód. — La minoría, dijo: « Que si bien el art. 328 del Cód. Civ., confiere á los padres naturales todos los derechos de los legítimos en cuanto á la persona del menor, el art. 336 les priva de todos los que son referentes á la administración de sus bienes. Que tratándose de la representación legal de los menores en actos relativos á sus bienes, los hijos naturales tienen su representante en el tutor especial que designa el art. 397 del Cód. Civ., para el caso en que el menor no tenga padre con facultad de administrar sus bienes. Que el presente juicio versa sobre petición de herencia en que los menores persiguen la entrega de sus bienes. Por consiguiente, la representación en juicio no es referente á condiciones personalísimas de los menores, en cuyo caso procedería la representación de los padres naturales, sino á su herencia; y quien no tiene la administración de ellos no puede hacer esa parte de administración que es su gestión » — Véase la causa CCLIV de los fallos de la S. C. P.

2. Se trata de un poder otorgado en Londres por el directorio de una empresa ferroviaria, á su gerente, para administrar. El poder no contenía la facultad espresa de percibir sumas de dinero, pero contenía facultades amplias y sin limitación, hallándose consignadas por cláusulas separadas las facultades para la realización de los actos jurídicos que requieren poder especial, lo que, no dejaba duda del derecho que asistía al apoderado para solicitar la entrega de los fondos y percibirlos. La administración del ferrocarril recibía diariamente, como es notorio,





la de percibir, aun cuando no exista cláusula especial—Civ., tom. 11, pág. 28, Ser. 3ª (tom. 58).

3. **Administración**—La entrega de fondos á los herederos mayores, hecha por el administrador, no importa una irregularidad que faculte correcciones disciplinarias—Civ., tom. 11, pág. 35, Ser. 3ª (tom. 58).

4. **Administración**—El mandato conferido por el tutor para administrar los bienes, es suficiente para intervenir en demandas contra el menor—Civ., t. 11, p. 395, S. 3ª (t. 58).

en virtud del mandato, considerables sumas de dinero como consecuencia natural de ese mandato. La misma cantidad de que se trataba debió ser recibida por empleados sujetos á la dependencia inmediata del apoderado, y como el deudor no cumplió su obligación, fué necesario ocurrir á los Tribs. para obtener el pago. En este caso ¿con qué razón legal pudiera negárseme la entrega? Según una de las cláusulas del poder se facultaba al mandatario hasta para vender los bienes raíces de la empresa, que importan millones de pesos, y recibir su precio, de donde resulta que no puede abrigarse la menor duda de que el ánimo de los mandantes fué también autorizar al mandatario para recibir las sumas que re le adeudaran por cualquier concepto, aunque para efectuar el cobro haya habido que seguir juicio, tanto más, si se tiene en cuenta que el mismo poder contenía la facultad para ocurrir á los Tribs. en defensa de los intereses de la empresa. Los arts. 1872 del Cód. Civ. y 17, inc. 2º del Cód. de Proc., justifican lo resuelto en el sumario. Siendo la percepción de fondos un acto de administración, y teniendo en vista la amplitud de facultades era procedente esa resolución.

3. Los actos que motivaron el aperebimiento no ocasionaron trastorno ni obstruyeron en modo alguno el orden regular del juicio, pues las partes á quienes pudieron perjudicar no formularon queja ni reclamo alguno, no siendo el caso, en consecuencia, de ejercitarse la facultad que acuerda el art. 52 del Cód. de Proc.

4. El cargo le había sido discernido al tutor con todas las facultades que la ley acuerda para el desempeño de mismo, entre las que se cuenta como muy principal la de administrar los bienes pertenecientes á los pupilos. Ejercitando el tutor tal facultad, confirió un poder amplio á un tercero, por una de cuyas cláusulas quedaba éste facultado para ejecutar todos los actos que fuesen necesarios para la buena administración de los bienes, entre los que debe incluirse los que sean menester practicar en juicio como actor ó demandado en lo que á los bienes concierna, toda vez que para ello la ley no requiere un poder especial, según el art. 1881 del Cód. Civ.



5. **Administración**—El marido solo puede ser privado de la administración de bienes de la sociedad conyugal con causa justificada—Civ., tom. 15, pág. 129, Ser. 5ª (tom. 62).

6. **Administración**—Los fondos adjudicados a los menores, deben ser entregados al padre para su administración—Civ., tom. 16, pág. 332, Ser. 5ª (tom. 63).

7. **Administración**—Procede el nombramiento de admi-

5. El art. 74 de la ley de Mat. Civ., autoriza a la mujer para pedir que se haga inventario de los bienes del matrimonio, y se pongan a cargo de otro administrador cuando la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas ó disipación de los bienes. Surge de esta disposición, que para solicitar tales medidas no basta afirmarse, por la parte que las pide, que ha llegado el caso preciso de adoptarlas para que el juez pueda deferir á ellas sin más trámite: es necesario que se demuestre cómo es verdad que la conducta del marido hace temer enajenaciones fraudulentas. Si la mujer pudiera privar al marido de la administración de los bienes de la sociedad conyugal, sin otra formalidad que la de espresar que, á su juicio, éste disipa dichos bienes, no habría garantía alguna para el administrador y las cuestiones á que daría lugar la facilidad del procedimiento serían interminables. No basta que la esposa tenga motivos fundados para dictar medidas en el sentido espresado; requiérese algo más: que demuestre que la conducta hace fundados sus temores. Esta es la doctrina que se desprende de los arts. 186, 211, 1276, 1277, 1294 y 1295 del Cód. Civ. También esta es la jurisprudencia sentada en casos análogos. Véase: tom. 2º, pág. 508, Ser. 1ª Jur. Civ.; Inst., tom. 1º, verb. *Administrador*, núm. 115 y tom. 2º, verb. *Separación de bienes*, núms. 2, 5 y 6.

6. Así lo tiene resuelto la Cám. de una manera constante. Véase: tom. 3º, pág. 81, Ser. 3ª; 1ª, pág. 308, Ser. 1ª; 9ª, pág. 232, Ser. 4ª; 10, pág. 416, Ser. 6ª; 14, pág. 135, Ser. 4ª. El Juez de 1ª Inst. sostuvo una tesis hasta cierto punto contraria á la del sumario, diciendo que «si bien es cierto que el art. 293 del Cód. Civ. confiere al padre la administración de los bienes de sus hijos, el art. 297 establece una fiscalización minuciosa del juez en todos los actos de la misma. Que este precepto legal no podría cumplirse, y se violaría el espíritu de la ley, si se le entregara el dinero para que lo administre libremente, sin indicarse el destino que se le va á dar. Que por otra parte, el hecho de no entregársele no le impide el goce del usufructo, pues las rentas producidas en el Banco le corresponden y tendría derecho de reclamarlas. Por ello, hágase saber á la parte que no puede hacerse lugar á su petición, sin que indique previamente el destino que se propone dar á esos fondos.»

7. La esposa se presentó diciendo, que iniciado el juicio de divor-



nistrador de los bienes de la esposa, si se justifica la mala administración del marido—Civ., t. 19, p. 8, Ser. 5ª (tom. 66).

**8. Administración**—La falta de pago de pequeñas deu-

rio que sigue su tramitación judicial, el esposo continúa, como es natural, con la administración legal de los bienes de la sociedad conyugal, los cuales siendo todos de la exclusiva propiedad de su representada, consistían en valiosas casas y sumas de dinero, cuyas rentas percibe el administrador, sin que las destine á satisfacer los gastos y necesidades más apremiantes de la vida conyugal, y antes por el contrario, malgasta esas rentas en hacer una vida de abandono completo y elegancia que contrasta con la miseria en que mantiene á la dueña de esos bienes. Por estas fundamentales consideraciones é invocando el art. 74 de la ley de Mat. Civ., pidió al señor juez se sirviera retirar la administración que conservaba el marido, ordenando se haga inventario de los bienes y se les entregue á un administrador que el juez nombraría. El señor Fiscal Dr. Naveira, dijo que: «las cuentas presentadas constituían la prueba anticipada de una sucesión de hechos de la vida íntima de los esposos. De dichas cuentas resultaba, que el esposo, administrador legal de los bienes de su esposa, no se preocupaba de pagar las pequeñas cuentas de los gastos diarios y ordinarios de la vida, dando á las rentas que esos bienes producen una aplicación bien distinta. Estaba probada, pues, su mala administración; existía pleito pendiente entre ambos, y ante los ojos de la ley y de la moral esos bienes estarían mejor bajo la administración de un tercero responsable, ajeno á las miserias de la vida privada de ese matrimonio, y aun creía que sería el medio más fácil para llegar á la conclusión de ese juicio, privando al esposo de la administración de los bienes. El juez no hizo lugar á lo pedido, porque el art. 74 de la ley de Mat. autoriza á la mujer para pedir al juez que entiende en el juicio de divorcio, que se haga inventario de los bienes del matrimonio, y se pongan á cargo de otro administrador, ó que el marido dé fianza de ellos cuando la conducta del esposo haga temer enajenaciones fraudulentas ó disipación de los bienes. Si bien la ley acuerda la medida preventiva antes expresada, á objeto de asegurar y proteger los intereses de la mujer, es preciso que se comprueben las causales que autorizan á solicitarla. La comprobación rendida en el incidente no justificaba los extremos de la ley, pues de ello no surgía que el marido tratase de enajenar fraudulentamente los bienes de la mujer, ni justificase con suficiencia y claridad que el esposo disipaba los bienes del matrimonio. La Cám. revocó esta resolución fundándose en que, «de conformidad con lo dispuesto por el art. 74 de la Ley de Mat., y siendo un deber del Trib. adoptar las medidas que sean conducentes á la mejor seguridad de los bienes é intereses de la esposa» procedía lo dispuesto en el sumario.

8. Este sumario está comprendido en el número precedente.



das, importa mala administración del esposo—Civ., tom. 19, pág. 8, Ser. 5ª (tom. 66).

9. **Administración**—Procede el embargo sobre créditos de la esposa, si el marido ha sido privado de la administración—Civ., tom. 19, pág. 11, Ser. 5ª, (tom. 66).

10. **Administración**—Al esposo, en ejercicio de la administración de los bienes de la esposa, debe expedírsele certificado sobre ese punto—Civ., t. 20, p. 194, Ser. 5ª (tom. 67).

11. **Administración**—La esposa puede pedir la entrega de una parte de sus fondos propios depositados judicialmente, aun cuando el marido continúe como administrador—Civ., tom. 20, pág. 248, Ser. 5ª (tom. 67).

**Administración**—Véase: *Rendición de cuentas*, 3; *Fondos*, núm. 2.

1. **Administrador**—Debe removerse al socio adminis-

9. Como en el caso espresado en el núm. 7, el marido fué privado de la administración de los bienes de la esposa; se resolvió asimismo que el cobro de un crédito hipotecario, constituido á favor de la esposa, correspondía al administrador y no al marido; y de acuerdo con el precepto del art. 60 de la Ley de Mat. Civ., procedía su embargo.

10. El marido que había sido separado de la administración, fué re-puesto por mandato judicial. En este caso la expedición del certificado implica el ejercicio de un derecho legalmente establecido.

11. La Cám. ordenó la entrega «teniendo en cuenta la situación de los cónyuges y destino con que se solicitaron los fondos.» Los esposos seguían juicio de divorcio; y los fondos eran para cambiarse de casa la esposa.

1. El art. 1684 del Cód. Civ., aplicable á las cuestiones comerciales, según el art. 307 del Cod. de Com., autoriza la suspensión inmediata del socio administrador y el nombramiento de uno provisorio, sea ó no socio, cuando hubiese peligro en la demora. Este peligro concurría en el caso que nos ocupa, pues así lo revelaba manifestamente la discordia reinante entre los socios, sus recíprocas desconfianzas y sus gravísimas disidencias. La enemistad existente entre los socios, palmariamente comprobada en autos, podía conducir fácilmente á extremos perjudiciales para el que se encuentra alejado de la administración; y este temor, bien justificado por las razones espuestas, es el que la ley requiere que desaparezca, mediante el nombramiento de un administrador provisorio que ofrezca garantías de imparcialidad para todos. El art. 1735, inc. 1º del Cód. Civ.,



trador, si las circunstancias de la causa demuestran la necesidad de tal medida—Com., t. 4, pág. 405, Ser. 5ª (tom. 39).

2. **Administrador**—Corresponde á los jueces la designación del administrador, si no existe acuerdo de partes—Civ., tom. 22, pág. 378, Ser. 5ª (tom. 69).

**Administrador**—Véase: *Contrato verbal*, 1; *Firma social*, 2; *Obligación*, 4; *Sociedad conyugal*, 1; *Embargo preventivo*, núm. 29.

1<sup>a</sup>. **Administrador de bienes**—No procede el nombramiento de administrador de los bienes del matrimonio, si no se justifican plenamente los extremos de la ley—Civ., tom. 9, pág. 330, Ser. 5ª (tom. 56).

1. **Adulteración**—Aceptada la escepción de falsedad por adulteración de cifras, procede la ejecución por lo que reconozca adeudar el ejecutado—Com., t. 5, p. 337, S. 5ª (t. 40).

**Adulteración**—Véase: *Escepción de pago*, 9.

1<sup>b</sup>. **Adulterio**—Para que el juicio civil de divorcio suspenda el proceso criminal, el actor en el primero debe ser el mismo querellante—Crim., t. 9, pág. 390, Ser. 3ª (tom. 25).

---

suministra un argumento poderoso en favor del nombramiento de un administrador provisorio en estos casos. Dicho art. autoriza, en efecto, la esclusión de un socio cuando perdiera la confianza de los otros por insolvencia, perpetración de algún crimen, mala conducta, *provocación de discordia entre ellos u otros hechos análogos*. Es evidente que si tales causas pueden dár lugar á la esclusión de un socio, con mayor razón deben ser bastantes para autorizar la remoción de administrador, hecho que no tiene en manera alguna, la gravedad de aquel.

2. Corresponde á los jueces el nombramiento de las personas que han de desempeñar cargos relacionados con los intereses de los litigantes, cuando éstos no se ponen de acuerdo en su designación.

1<sup>a</sup>. Así lo exige el art. 74 de la Ley de Mat. Civ.

1<sup>b</sup>. El art. 126 del Cód. Pen. establece que pendiente un juicio de divorcio por adulterio, no podrá intentarse la acción penal. Se comprende que se trata de evitar un pronunciamiento que podría ser contradictorio; pero esto mismo indica que debe entenderse la prohibición legal en el sentido de que sea la misma parte que ha deducido la acción de adulterio, la que haya promovido el juicio de divorcio, alegando la misma causal, y sobre todo, que el juicio de divorcio se funde precisamente en la causal indicada.



2. **Adulterio**—El esposo no está obligado á hacer manifestación sobre los honorarios del defensor de la esposa acusada de adulterio, sin previa resolución que lo declare responsable—Crim., tom. 1, pág. 209, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Adulterio**—El cómplice de adulterio sin circunstancias, debe ser penado con dos años de destierro—Crim. t. 1, pág. 319, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Adulterio**—La acusada por adulterio, debe ser recluida en la casa de ejercicios—Crim., t. 2, p. 53, Ser. 5ª (tom. 37).

5. **Adulterio**—La concurrencia de testigos que declaran en sentido contrario sobre la existencia del adulterio, permite el sobreseimiento provisional—Crim., tom. 3, pág. 354, Serie 5ª (tom. 38).

6. **Adulterio**—La conducta irregular de la esposa, cometiendo adulterio, importa una injuria grave é ilícita al esposo, y aun cuando se encuentre justificado que hubo conciliación, debe aceptarse como circunstancia atenuante—Crim., tom. 4, pág. 19, Ser. 5ª (tom. 37).

7. **Adulterio**—Justificados los hechos que hagan presumir la existencia del adulterio, debe decretarse prisión preventiva—Crim., tom. 4, pág. 402, Ser. 5ª (tom. 37).

8. **Adulterio**—Para justificar el adulterio basta la demos-

2. El art. 65 del apéndice al Cód. de Proc., se refiere á las cuestiones sobre honorarios entre el abogado y el litigante á quien defiende, lo que no sucede en este caso. Cuando ocurre cuestión sobre quién debe pagar los honorarios, ésta es resolución previa. Véase: tom. 97, pág. 240; tom. 4º, pág. 215, Ser. 4ª; tom. 8, pág. 49, Ser. 1ª. En contra, véase: tom. 18, pág. 47, Ser. 6ª, todo de la Jur. Civ.

3. Arts. 52 y 112 del Cód. Pen.

5. La duda, en caso de existir, debe interpretarse en favor del procesado, como lo establece el art. 13 del Cód. de Proc., correspondiendo en consecuencia el sobreseimiento.—art. 435 del Cód. de Proc. Crim.

7. Art. 366 del Cód. de Proc. Crim.

8. Tratándose de un hecho tan difícil de probar como el adulterio, por las precauciones que generalmente se toman para ocultar el delito el que pretende cometerlo, la prueba privilegiada ó de presunciones era considerada en la antigua legislación como suficiente para justificar el



tración de hechos que lo hagan presumible, sin que sea indispensable la justificación del acto material—Civ., tom. 17, pág. 83, Ser. 5ª (tom. 64).

**Adulterio**—Véase: *Acusación*, 7; *Divorcio*, 9, 26 y 38.

1. **Afirmados**—La falta de justificación sobre la propiedad de la finca embargada para el pago de afirmado, no puede fundar la excepción de falta de personería—Civ., tom. 9, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Afirmados**—Si se justifica la interpelación privada he-

adulterio. Las presunciones, decía un célebre jurisconsulto, son testigos mudos colocados por la Providencia en el camino que siguen los culpables, para revelar la existencia de sus faltas ó de sus crímenes. No importa, que unos testigos revelen la existencia de las relaciones culpables de la demandada con un hombre, mientras que los otros declaren sobre sus relaciones con otro hombre, porque con esto, lejos de probar contradicción entre ellos, se probaría la costumbre arraigada de delinquir por parte de la esposa adúltera sin distinguir personas. En esta clase de juicios, los medios de investigación son ámplios, y no están sujetos á aquellas restricciones y rigorismos preceptuados para la prueba por las leyes de forma. Se comprende, en efecto, que tratándose de demostrar hechos que se producen en el hogar ó en la vida íntima, y que, por consiguiente, escapan al conocimiento detallado de otras personas, no es posible que sean justificados con todas aquellas restricciones exigidas por una crítica severa. Ante esta imposibilidad, la ley se concreta á requerir la demostración de los hechos por el conjunto de los elementos de que pueden disponerse, y declara eficaz la prueba, siempre que de las agrupaciones de los medios probatorios surja la demostración de la verdad. La prueba en el juicio de divorcio es privilegiada, y por consiguiente, son admisibles toda clase de pruebas, sin más restricción que la confesión ó juramento de los cónyuges, ya sea para evitar que las personas puedan ser compelidas á declarar contra sí mismo, ya para prevenir que el divorcio quede librado á la voluntad ó al cálculo de los cónyuges. Y aun esta prueba es admitida cuando ella está corroborada por otros medios probatorios.

1. Que no conste que sea propietario no quiere decir que en realidad no lo sea, y aunque así fuera, tal circunstancia solo autorizaría á deducir la excepción de inhabilidad de título, pero de ningún modo la opuesta de falta de personería, que solo puede fundarse en la incapacidad para estar en juicio.

2. El ejecutado consideró que la cuenta no era hábil para promover la ejecución, porque la ley de 1º de Oct. de 1888 que rige la mate-



cha al propietario para el pago de afirmado, no procede la fijación de cuotas después de vencido el máximo de término que para ello podían acordarle — Civ., tom. 14, pág. 19, Ser. 3ª (tom. 61).

### 3. **Afirmados**—El cobro de afirmados es ejecutivo aun

ria, establece que los empedrados deben abonarse en doce mensualidades, por partes iguales, ó á la presentacion de la cuenta, con descuento del ocho por ciento, y que solo para el cobro de estas cuotas acuerda la ley acción ejecutiva á las cuentas visadas por la Intendencia Mun. Es exacto que los arts. 4º y 5º de la ley aludida, establecen que sean abonadas en la forma espresada, y que su cobro por la vía ejecutiva se haga por el importe de las cuotas. Además de existir el texto claro de la ley que así lo establece, fácil es comprender que el legislador, al requerir que los propietarios carguen con estos gastos del municipio, haya querido establecerles condiciones cómodas de pago. Pero si bien es verdad que la ley de 1888 exige el cobro parcial de las cuotas, también lo es que cuando se haya interpelado al deudor para que abone la cuenta y éste se rehusa á solventarla, dejando transcurrir los doce meses sin pagarla, puede el acreedor exigir el valor total del crédito. De que la ley, en efecto, haya dado plazos al deudor en estos casos, no se deduce que pueda ampararse de ellos cuando están vencidos, impidiendo así el ejercicio del derecho del acreedor, porque entonces gozaría de plazos mucho mayores que los que le acuerda la ley, menoscabando los derechos del acreedor y desconociendo el precepto legal que lo beneficiaba. Por otra parte, el acreedor que interpela al deudor para el pago de la cuota y deja transcurrir las doce mensualidades, cobrando después el total de la cuenta por la vía ejecutiva, no contraría la ley, porque es evidente que el derecho que se le acuerda puede ejercerlo, ó bien por las cuotas separadamente, ó bien por el todo, con tal de que haya interpelado al propietario para el pago y hayan transcurrido los plazos con que la ley lo beneficia. En este caso constaba por confesión del ejecutado que se le cobró la cuenta, un año antes y que rehusó abonarla, considerando que el deudor de ella era su antecesor en el dominio de la finca. Se observó también por el ejecutado, que la Mun. es la encargada de señalar los distintos plazos en que deben abonarse las cuotas, porque así lo establecían las leyes de 1891 y 1892, subsistiendo sobre este punto, no obstante la vigencia de la ley de 1888. No es exacto este argumento. La ley de 1888 ha preceptuado que los pagos deben ser hechos en doce mensualidades y no en los que fije la Mun., y de lo dispuesto en el art. 40 surge que las mensualidades empezarán á correr desde la presentación de la cuenta.

3. Las cuentas visadas por la Intendencia tienen fuerza ejecutiva, ya se trate de afirmados mandados ejecutar por la Corporación Mun., ó de





cuando la Municipalidad no haya contratado su construcción limitándose á conceder el permiso para que lo contratasen los vecinos—Cív., tom. 17, pág. 214, Ser. 3ª (tom. 64).

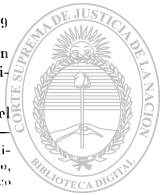
**Afirmados**—Véase: *Cuotas*, 1; *Excepción de inhabilidad de título*, 14; *Excepción de falta de personería*, 23; *Inhabilidad de título*, núm. 4.

1. **Agente de la autoridad**—La amenaza de llamar á un agente de la autoridad no importa coacción—Crim., t. 9, pág. 98, Ser. 3ª (tom. 25).

**Agente de la autoridad**—Véase: *Homicidio*, 8.

afirmados contruidos por empresas particulares, que son los dos casos previstos ó autorizados por la ley núm. 2328 de 1º de Oct. La única diferencia visible que podría señalarse en uno y otro caso, sería solo relativa á la personería para gestionar el cobro, incumbiendo en el primero á la misma Mun. y en el segundo á la empresa constructora. En cuanto á las formalidades ó procedimientos no hay distinciones, conservando el carácter ejecutivo que le da el art. 5º de la citada ley. Para demostrarlo basta recordar los términos del art. 6º que dice: «Cuando los afirmados sean contruidos por empresas particulares, quedará á cargo de las mismas el cobro de las cuotas que correspondan á los propietarios, y cuando estos sean hechos por la Mun., ó con materiales municipales, lo ejecutará ésta.» La ordenanza de Agosto de 1889 y decreto reglamentario de Nov. de 1891, no modifican la situación legal del propietario. El art. 7º de la ley de 1888 declara que la Mun. determinará el orden y forma en que deben efectuarse los trabajos de afirmados. La ordenanza y decreto de la referencia tienen su antecedente en esta ley, y á su texto y á su espíritu deben ajustarse sus cláusulas, como en realidad se ajustaban. Así, la ordenanza se limita á autorizar á la Intendencia para dar permiso á los propietarios que quieran pavimentar los frentes de sus propiedades dentro de las condiciones que enumera, y el decreto reglamentario de la misma, detalla las formalidades á que deben sujetarse, siendo fácil de constatar que en ninguno de sus pasajes podrá señalarse una excepción á los términos de la ley ya mencionada de Oct. de 1888. Por el contrario, y como información concordante podría mencionarse la condición 6ª del art. 9º del decreto, según la cual los contratistas presentarán á la Intendencia las cuentas á cobrar para el debido control y visación.

1. El querrellado había amenazado al querellante con hacerlo llevar preso. Esto no puede constituir el delito de coacción previsto por el art. 171 del Cód. Pen., pues el solo importa hacer intervenir á un agente de la autoridad en su carácter de tal, y el amenazado bien podía hacer intervenir al mismo agente en protección suya.



1. **Agente fiscal**—El parentesco entre Agente fiscal y un vocal de la Cámara, no es causa de excusación en materia criminal—Crim., tom. 9, pág. 48, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Agente fiscal**—El reconocimiento hecho por parte del

1. El Agente fiscal no es parte personalmente interesada en el juicio, pues solo actúa como representante de la acción pública: siendo, por otra parte, distintas las personas que representan al bien público en 1ª y 2ª instancia. Además, esa causal no está entre las enumeradas en el art. 75 del Cód. de Proc. Crim.

2. El Agente fiscal en su acusación, reconoció expresamente que el procesado se encontraba en completo estado de ebriedad, en el momento de efectuar el hecho. Elevada la causa en apelación, el Fiscal de la Cám. negó categóricamente la existencia de ese estado, y el defensor del reo sostuvo, con tal motivo, que si no rindió la prueba de ese hecho, fué por razón del reconocimiento formulado por el Agente fiscal, circunstancia que impedía considerar como hecho controvertido el referente al grado de la ebriedad alegada. Ahora bien: ¿ese reconocimiento es suficiente para que el hecho se considere definitivamente eliminado del debate? ¿Las opiniones y juicios del Agente fiscal ligan de tal modo á los demás magistrados que entienden en la causa, que los inhabilita para discutir con su manera de apreciar los hechos y el derecho? Decididamente no. Desde luego, el art. 467 del Cód. de Proc. Crim., dispone: que la causa será recibida á prueba *en todos los casos*, y este precepto que marca la diferencia existente entre las causas civiles y las criminales, está revelando con toda claridad, que la prueba debe producirse sin tener en cuenta la conformidad ó disconformidad de las partes sobre los hechos pertinentes. Es verdad que el mismo art. autoriza la renuncia del trámite de la prueba, pero esto no importa otra cosa que la conformidad de que la causa se falle con arreglo á las constancias del sumario, que en tal caso se toman como elementos de prueba suministrada por las mismas partes. Tenemos en segundo lugar, las disposiciones de los arts. 460, 461 y 462 del mismo Cód., que informan con toda precisión sobre el verdadero espíritu del legislador en esta materia. Según esos arts., el pedido de sobreseimiento por parte del Agente fiscal, no obliga al juez cuando entiende que debe llevarse la causa adelante, sino en el caso que, consultado el Fiscal de la Cám., este funcionario opine también por el sobreseimiento. Tales disposiciones demuestran que el Agente fiscal no tiene en los juicios criminales las facultades amplísimas que corresponden al demandante en las causas civiles, y que no depende de su sola voluntad la terminación de los juicios. Demuestran que el reconocimiento que él formule de hechos que puedan dar lugar al sobreseimiento, tales como la locura, la legítima defensa, la embriaguez completa é involuntaria, etc., no es irrevocable,

**Agente fiscal, de una causa de justificación, no es obligatorio para los jueces, y la defensa, que pretenda hacerla valer, debe**

y que por el contrario, esos hechos pueden ser colocados en tela de juicio no obstante su reconocimiento por el Agente Fiscal. De estos mismos arts. resulta una consideración decisiva para la resolución de esta cuestión. La ley no quiere evidentemente, según lo que resulta de las disposiciones citadas, dejar en manos del Agente fiscal el derecho exclusivo para imponer el sobreseimiento. ¿Querrá darle la facultad de imponer la absolución? Si su propósito manifiesto es no acordarle aquel derecho, es lógico suponer que tampoco quiere darle esta facultad, ya que en sus efectos y consecuencias son enteramente idénticos, la absolución y el sobreseimiento cuando es definitivo. Pues bien: si una lógica nos conduce á esta conclusión, tenemos necesariamente que aceptar también que el reconocimiento de una causa de justificación por parte del Agente fiscal, no es obligatorio para el juez, porque de otro modo resultaría que aquel tendría en su mano, por un reconocimiento de ese género, el medio de hacer obligatoria la absolución. Estas facultades de los Tribs. del Crimen, y estas restricciones de las que corresponden al acusador público, son consecuencia directa de la misma organización judiciaria establecida por la ley, que no ha querido confiar solamente al Min. Fiscal el enjuiciamiento y castigo de los culpables, y ha dado á los jueces, conjuntamente con aquél, la representación de la causa pública — arts. 179 y 182, Cód. de Proc. Crim. — La acción pública, dice el doctor Tejedor — tom. 2º, núm. 20 — no depende de esos magistrados — refiriéndose á los fiscales — y no está en sus manos dejar sin castigo un hecho que presente los caracteres del delito. — Mangín, en su obra sobre la Acción Pública, tom. 1º, núms. 26 y 32 — ocupándose de este mismo punto, y á pesar de que la legislación francesa no confiere á los Tribs. del Crimen la facultad de perseguir de oficio á los delinquentes, dice lo siguiente: « Pero si la acción pública es independiente de los Tribs., es solamente cuando se trata de intentarla, pues una vez formada, queda completamente librada á ellos. Cualquiera que sea la opinión del Min. Público, no liga á los jueces, ellos deben resolver con la más grande independencia. » D'Aguesseaux, citado en dicho párrafo, por el mismo escritor, se expresa en estos términos: « Los jueces no están obligados á seguir las conclusiones del Min. Público y conformar á ellos sus decisiones. Pueden suplirlas, modificarlas y aun decidir en contra de lo pedido por los procuradores fiscales, cuando se crean obligados á ello por las reglas de la justicia y por el celo que deben tener por el interés común de la sociedad. Así, cuando se dice que todos los jueces son en cierto modo procuradores generales, es una expresión que significa que tienen el derecho de hacer de oficio lo que estimen que el procurador general ha debido hacer. » Como complemento de estas ideas, véase lo que dice el mismo Mangín en el núm. 32 citado:





probarla plenamente si no resulta de autos—Crim., tom. 2, pág. 338, Ser. 5ª, (tom. 37).

3. **Agente fiscal**—Debe dictaminar si existe infracción a la ley de sellos y el monto de multa en que han incurrido las partes—Com., tom. 4, pág. 410, Ser. 5ª (tom. 39).

4. **Agente fiscal**—Está obligado á determinar la existencia y monto de la infracción á la ley de papel sellado, en los documentos presentados en juicio—Com., tom. 5, pág. 185, Ser. 5ª (tom. 40).

5. **Agente fiscal**—El que ha intervenido en el incidente debe conocer en el espediente, cualquiera que sea el nuevo

«En tanto que el Min. Público guarda silencio, hay la presunción legal que el orden público no ha sido turbado, pero desde que ha introducido su queja, ya no es á él, sino á los Tribs., á quienes corresponde decidir si la queja era ó no fundada. Es permitido, sin duda, al Min. Público, reconocer que los cargos resultantes de la instrucción son insuficientes para establecer la existencia del delito y la culpabilidad del procesado; puede aun reconocer que se ha engañado, pero tales declaraciones no son más que la espresión de su opinión personal, ni tienen más autoridad que sus requisiciones para pedir la prisión ó la condenación del procesado.» Las precedentes consideraciones demuestran, pues, que los jueces pueden desconocer los hechos aceptados por el Min. Fiscal, y que en consecuencia, no es posible legalmente sostener que en mérito de un reconocimiento de ese género, quede definitivamente excluido del debate y de la prueba el hecho sobre que versa. Esta fué la opinión del Camarista Dr. Saavedra, á la que la Cám. se adhirió.

3. El art. 49 de la Ley de Papel sellado de 1894 no establece que sea el juez y el secretario quien deba determinar en los casos de infracción, la multa en que se haya incurrido, sino que el secretario dé cuenta al Trib. cuando observe infracción á la Ley de Sellos para en seguida ser pasada la causa al Agente fiscal á fin de que pida lo que corresponda. Esa disposición se considera cumplida poniendo la nota de *no corresponde* por el secretario, lo que importa dar conocimiento al juez, como lo dispone aquel art., de haberse infringido la ley, después de lo cual, el juez confiere la vista á que aquel art. citado alude. Aparte de esto, la práctica constante é invariable de nuestros Tribs. es precisamente esta.

4. De acuerdo con el caso precedente.

5. Se aplica por analogía el procedimiento observado, cuando un juez previene en el conocimiento de una causa, aunque sea incidentalmente.



motivo que obligue esa intervención—Civ., t. 11, pág. 407, Ser. 5ª (tom. 58).

6. **Agente fiscal**—Su negativa á dictaminar acerca de la multa en que se ha incurrido por infracción á la Ley de Papel sellado, no autoriza al juez á pasar los autos á otro fiscal, ni á dirigirse en queja al Ministro de Justicia—Com., tom. 4, pág. 185, Ser. 5ª (tom. 40).

**Agente fiscal**—Véase: *Acusación fiscal*, 1; *Disparo de arma de fuego*, 1; *Escarcelación*, 6; *Sentencia*, 3; *Sentencia correccional*, 1; *Sobreseimiento provisional*, 2; *Denunciante*, 1; *Apercibimiento*, 2; *Papel sellado*, 8 y 10.

1. **Agentes fiscales**—Solo son recusables por las causas y en los casos determinados por la ley—Crim., tom. 4, página 286, Ser. 5ª (tom. 39).

---

6. Este sumario ha sido omitido en la publicación de los fallos y tiene por fundamento el hecho que cuando dentro del propio poder judicial existen los recursos suficientes para suprimir la desinteligencia sobrevenida entre determinados funcionarios, el recurso de los juicios de instancia Inst. para ante el P. E., no puede ser sino inconveniente. Los jueces carecen de facultad para prescindir de un Agente fiscal, y nombrarle su reemplazante, pues semejante autoridad reside en el P. E. y no está acordada al juez por ley alguna.

1. No hay más causas de recusación y escusación que las determinadas por la ley, estando designadas las que se refieren á los fiscales en el art. 76 del Cód. de Proc. Crim. En dicho art. se dice: que son causas de recusación para los fiscales, entre otras, las del inc. 4º del art. 75, debiendo entenderse que la causa de recusación que consiste en haber intervenido anteriormente como fiscal, se refiere á instancias diferentes, pues de lo contrario deberían intervenir en una misma causa tantos fiscales como diligencias se practicasen ó resoluciones se dictasen de las que requieren su intervención, sucediendo lo contrario, que el representante del Min. Público que ha intervenido desde el principio, es el mismo que continúa hasta la terminación de la causa en la misma instancia, cualesquiera que sean las resoluciones que recaigan durante su secuela, de acuerdo ó en contra de sus dictámenes, sin hacer distinción entre el sumario y el plenario. Tampoco había llegado el caso excepcional á que se refieren los arts. 460 y 462 del mismo Cód., porque para que el Agente fiscal fuese reemplazado en la forma que el segundo de esos arts. determina, sería necesario que dicho funcionario persistiese en pedir el sobreseimiento, que no hubiese acusador particular, que el Juzgado opinase de distinto modo que el Agente fiscal, y que el



# 1. **Agravación de pena** — No existe reincidencia á los efectos de la agravación, si los delitos, aunque del mismo gé-

Fiscal de 2ª Inst. dictaminase que correspondía llevar adelante los procedimientos. Hasta el momento de la recusación no se había dictado ninguna resolución que obligase al Agente fiscal á formular acusación ó pedir que pasase á otro la causa, pudiendo no hacer lo primero si no encuentra mérito para ello, en cuyo caso continuaría el proceso con el acusado particular, y si no lo hubiese, se procedería con arreglo á lo dispuesto en el art. 460. Si bien es indiferente que intervenga uno ó otro de los funcionarios que tienen la representación del Min. Público, se requiere una causa legal para escluir al que le corresponde intervenir en razón del turno.

1. Delito de la misma especie no es lo mismo que delito igual al anterior en el concepto jurídico. Para convencerse de ello basta leer en la pág. 196 del Proyecto de Cód. Pen., confeccionado por el doctor Tejedor, los siguientes conceptos: «Si la reincidencia es castigada con una pena más severa que la primer falta, es porque se considera como una presunción legal de un hábito criminal en el agente. Así, el delincuente que ya condenado por hurto comete otro, se reputa justamente más culpable que la primera vez. ¿Pero este hábito del delito es igualmente manifiesto cuando el delincuente ya condenado la primera vez por rebelión es procesado por un hurto, ó si perseguido por una falsificación comete después un atentado contra el pudor? Para que la reincidencia sea una presunción de perversidad, es preciso que haya conexidad en los delitos que la constituyen. Porque ¿cómo presumir la incorregibilidad del ladrón, por el hecho de entregarse después á actos de rebelión ó violencia, ó del condenado político, porque comete en seguida falsificación ó hurto? ¿Cómo hacer concurrir dos crímenes de naturaleza distinta para formar con ellos un hábito?» Surge de las ideas contenidas en los párrafos transcritos, que la distinción que se ha querido hacer para que un delito anterior sea computado como agravante del delito posterior, es que sea de la misma naturaleza; y para dar una idea de los que no lo son se ponen en contraposición el hurto con la rebelión, la falsificación con un atentado al pudor. Pero tratándose de heridas, que como decía la Ley de Partida, es *carrera de muerte é non sabe el que la faze á quanto puede llegar*—Ley 26, tit. 13, Part. 2ª—no es posible sostener que la que mata, porque el resultado se le llama homicidio, constituye delito de distinta especie que la que no mata, porque al resultado se le llama lesiones. En el caso que nos ocupa se sostuvo que el reo no podía ser castigado como homicida porque la muerte fué causada á consecuencia de no haber sido bien atendido el herido, pues las lesiones por sí solas no eran suficientemente graves para ocasionar la muerte. Se resolvió que hubo homicidio. La circunstancia de que la herida haya sido mal atendida desde el principio, y de que



nero—homicidio y lesiones corporales—no sean de la misma especie—Crim., tom. 1, pág. 360, Ser. 5ª (tom. 36).

como se dijo que los dos viajes que hizo la víctima desde la Comisaría al Hospital, interrumpieron el trabajo de reparación que se había comenzado á operar, no son bastantes para desvirtuar la conclusión terminante á que arribaron los facultativos, de que la muerte haya sido determinada por la herida recibida. Por lo demás, la Cám. ha resuelto ya en otros casos, considerándola incorporada á nuestra actual legislación penal, la doctrina que resulta de la nota al art. 205 del Cód. Pen. anterior, que sobre este punto, decía: «La disposición de la ley tiene el objeto de proscribir las estrañas opiniones que en esta materia reinaban, y no admite, como ciertos autores, que deba distinguirse si la herida cuidada á tiempo y convenientemente, habría sido susceptible de cura. Hay homicidio desde que se establezca que la perturbación letígera introducida en el organismo, es la consecuencia necesaria del acto vulnerante. Poco importa que esta perturbación del organismo se determine solo por causas secundarias, mediatas ó inmediatas. Desde que estas causas se produzcan, según las leyes físicas orgánicas, hay homicidio, sin que haya necesidad de investigar si el resultado mortal se ha producido siempre en casos iguales ó si no se ha producido más que rara vez; si hubiese sido posible prevenirlo por los recursos del arte, ó si habría sido imposible, etc.» Se alegó contra el reo la circunstancia agravante de reincidencia prevista por el inc. 2º del art. 84 del Cód. citado. Sin embargo, ésta no concurre en el caso presente. La ley exige, como se ha visto, que el nuevo delito sea de la misma especie que el anterior: por más análogas que haya entre el homicidio y las lesiones corporales, pienso que no puede establecerse que sean delitos de la misma especie. Sin duda pertenecen al mismo género—delitos contra las personas—y aun son de una especie análoga como se dirigen á fines semejantes y revelan el mismo género de corrupción; pero esto no basta para caracterizar la reincidencia que supone delitos de la misma especie, según el testo y la doctrina de nuestra ley. La nota del proyecto del doctor Tejedor al art. 179, demuestra cual es el verdadero pensamiento del legislador sobre esta materia, y la doctrina que en ella se establece es la misma de nuestro Cód. actual, si se tiene en cuenta los términos de la ley que puso en vigencia á éste, y las resoluciones de esta Cám. al respecto. Esa nota dice lo siguiente: «No basta, pues, que los dos crímenes sean del mismo género, ni que sean de una especie análoga. Es preciso que sean de la misma especie. Así, el hurto simple, la retención y el fraude, son crímenes de la misma familia, por cuanto todos se dirigen contra la propiedad del otro, y son castigados muchas veces con penas idénticas; pero la ley no reconoce en ellos crímenes de la misma especie. Luego, el ladrón que comete un acto de fraude no es pasible de las penas de la reincidencia, como tampoco, si después de haber sido conde-



# 1. **Agravio** — El agravio moral causado por el calumniador no puede ser demandado, en tanto no se justifique el

nado por hurto, comete un homicidio ú otro crimen contra las personas.» La cita de la opinión contraria de Chauveau, que se hace en la misma nota, y las opiniones que éste manifiesta en el art. 197 del tom. 1.<sup>o</sup> de su obra, demuestran aun más que la doctrina de nuestra ley, no permite considerar como delitos de la misma especie, el homicidio y las lesiones corporales.

1. En principio, todo delito del derecho criminal hace nacer la obligación de reparar el perjuicio causado, comprendiéndose en la indemnización debida, la del agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir á la persona, molestándola en su seguridad personal, ó en el goce de sus bienes, ó hiriendo sus afecciones legítimas. Esta es, indudablemente, la doctrina consagrada, como regla general, por nuestro Cód. Civ. en los arts. 1077 y 1078. Pero cuando se trata del delito de calumnia «el ofendido *solo* tiene derecho á exigir una indemnización pecuniaria, *si probase* que por la calumnia ó injuria le resultó algun *daño efectivo ó cesación de ganancia apreciable en dinero*» — art. 1089.—Las palabras subrayadas, demuestran, con toda claridad, que en los delitos de calumnia, el legislador establece una limitación á la regla consignada en el art. 1078 en lo que se refiere á la obligación de indemnizar el agravio moral. El adverbio *solo*, la condición de *probar el daño efectivo*, y hasta la exigencia misma de que éste sea *apreciable en dinero*, constituyen otros tantos elementos de persuasión de que en los casos de calumnia ó injuria, el ofendido no puede solicitar reparación civil del agravio causado, ya sea material ó moral sino en tanto que pruebe que ha sufrido un daño efectivo. En otros términos, si el ofendido no prueba haber sufrido daño efectivo ó cesación de ganancia apreciable en dinero, el ofensor no está obligado á indemnizarle perjuicios de otra naturaleza que no sean susceptibles de prueba. No hay duda que esta doctrina conduce en la generalidad de los casos á la impunidad civil del calumniador, porque el agravio moral quedaría de hecho eliminado de toda indemnización, siendo así que, como surge del art. 1099, él solo puede constituir el fundamento de la acción acordada al ofendido. No se concibe agravio moral más intenso que el que causa al ofendido la calumnia de que sea víctima, pues ella «cubre de sombras, aunque pasajeras, la reputación de un juez, empaña, aunque momentáneamente, el honor de un hombre honrado, espone á la maledicencia pública el nombre de un padre de familia, turba la tranquilidad de un hogar formado al calor de los más nobles ideales, sembrando en él la desolación y el espanto al ver escarnecido y vilipendiado el buen nombre del padre, que es el de los hijos» — palabras testuales del acusador en el caso que motivó este fallo. — Todo esto es exacto, y nadie puede poner en duda la magnitud del agravio moral que puede inferir la calumnia, pero no es me-





daño que pecuniariamente haya sufrido la víctima — Civ., tom. 17, pág. 258, Ser. 5ª (tom. 64).

**Agravios**— Véase: *Encubridor*, 2.

1ª. **Alambrados**— Justificado que el cerramiento de la heredad es completo, los linderos que hayan construido á su costa los alambrados, tienen derecho á exigir del propietario la parte que proporcionalmente les corresponda—Civ., t. 17, pág. 144, Ser. 5ª (tom. 64).

1ª. **Albacea**— Al practicarse la regulación de honorarios del albacea, puede de oficio aclararse por qué concepto se hace — Civ., tom. 9, pág. 322, Ser. 5ª (tom. 56).

1ª. **Alegato**— Debe agregarse la prueba antes de alegarse si la demora no es imputable á la parte — Com., tom. 9, página 417, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Alegato**— El término para alegar es común, pudiendo

---

nos exacto que es necesario comprobar que como consecuencia de la calumnia, la víctima haya sufrido daño efectivo ó cesación de ganancia apreciable en dinero, base indispensable para poder establecer legalmente la responsabilidad civil del calumniador. No basta, en efecto, demostrar el agravio moral para que por sí solo surja el daño efectivo, y mucho menos su importancia, á los efectos de su apreciación pecuniaria. En resumen, la ley que determina la responsabilidad civil del calumniador, es terminante, y si se prestara á alguna duda, bastaría observar el carácter penal que reviste para aplicar en su interpretación la regla de derecho: *Odia restringit, et favores convenit ampliare*.

1ª. Arts. 2742 y 2744 del Cód. Civ.

1ª. Aunque esa aclaración no sea solicitada por ninguna de las partes interesadas, pues ella puede hacerse como un medio de establecer el criterio con que se procede al fijar la comisión llamada á regular. La minoría de la Cám. sostuvo que la aclaración ó prevención era improcedente por cuanto no había sido solicitada y los jueces no pueden proceder de oficio.

1ª. Última parte del art. 118 del Cód. de Proc.; argumento de la Ley 2ª, tit. 16. Lib. XI, Nov. Rec.

2. La Cám. dijo al resolver este caso: «Considerando respecto á la prórroga del término para alegar: que al verificarse se hizo dentro del término, pues siendo este común, como ha sido declarado por ambas Cams. en respectivos casos, cuando se solicitó la prórroga, el término no estaba vencido. Esto sentado, es evidente, que estando dentro del tér-



las prórrogas concederse si lo fueren antes del vencimiento — Com., tom. 4, pág. 261, Ser. 5ª (tom. 39).

3. **Alegato** — El término para alegar se interrumpe en virtud de petición para la agregación de las posiciones — Civ., tom. 9, pág. 365, Ser. 5ª (tom. 56).

4. **Alegato** — El vencimiento del término para alegar, basta para dar por decaído el derecho — Civ., t. 11, pág. 16, Ser. 5ª (tom. 58).

5. **Alegato** — El simple vencimiento del término para alegar, hace perder el derecho á presentar escrito — Civ., tom. 11, pág. 42, Ser. 5ª (tom. 58).

6. **Alegato** — El término para alegar empieza á correr

---

mino podía pedir prórroga y que mientras devolviera el expediente, que es lo único á que lo obliga el art. 213, bajo pena de perder el derecho de alegar, no lo pierde pudiendo presentar el alegato mientras esté dentro del término comprendido en la prórroga y aun fuera de él, en tanto que no le haya sido acusada rebeldía desde que el plazo para alegar no es un término fatal.

3. Si bien el término legal de seis días para alegar por parte del demandado, debe computarse desde el vencimiento de los seis días de que el actor dispone para ejercitar su derecho — art. 213 del Cód. de Proc. — esto no obstante, no debe reputarse como que corre el término, sino desde la fecha de la agregación de las posiciones, por cuanto la solicitud anterior de agregación y á la que se hizo lugar, vino á interrumpirla cuando aun no estaba vencido el término.

4. Esta resolución es una de tantas confirmadas *por sus fundamentos*. Es doctrina ya aceptada y consagrada hasta el cansancio, que el término para alegar no es perentorio: que solo lo es el término para que el actor devuelva los autos á Secretaría. Véase el núm. 2. El término para alegar no es perentorio ni fatal, pues los términos perentorios no pueden prorrogarse — art. 42 del Cód. de Proc. — Si el término para alegar fuese perentorio no sería prorrogable. Por consiguiente, no siendo perentorio el término, para que la parte pierda el derecho á presentar su alegato, se requiere la acusación de rebeldía. — art. 45 del Cód. de Proc. — Es un error de *los fundamentos* aducidos por la Cám.

5. En este caso el actor devolvió el expediente después de vencidos los seis días. Ya se ha visto que el término para devolver el expediente es perentorio.

6. Esto no se resolvió así. Se dijo que el término para alegar empieza á correr desde el día siguiente á la notificación. La parte contraria pre-



desde que se pasan los autos á secretaría—Civ., tom. 11, página 410, Ser. 5ª (tom. 58).

7. **Alegato** — La prórroga del término para alegar, solicitada y concedida después de vencido, no basta para admitir el escrito, si existe oposición — Civ., tom. 11, pág. 410, Ser. 5ª (tom. 58).

8. **Alegato** — Debe agregarse el alegato presentado dentro del término á un escribano público por estar cerrada la secretaría—Civ., tom. 14, pág. 106, Ser. 5ª (tom. 61).

9. **Alegato** — No procede la devolución del alegato pre-

---

tendió sostener contra la ley y la práctica constante, la teoría de que el término para alegar principia á correr recién después de tres días de aquel en que haya sido notificada la providencia que manda poner los autos en la oficina á los efectos del art. 213 del Cód. de Proc. Argüía para ello, que esa providencia puede ser reclamada, y que por eso no puede producir sus efectos sino después de estar ejecutoriada, pudiendo también pedirse que se practique alguna diligencia pendiente; pero esos argumentos no son procedentes, porque todos los términos corren desde el día siguiente al de la notificación. Cuando un litigante crea que la providencia no es ajustada á ley, y que no puede correr el término que señala, debe apelar de ella dentro del término de ley. Pero si ha consentido la providencia, el término se cuenta desde el día siguiente á la notificación; eso es constante en los términos. A admitir la teoría contraria, á todos los términos habría que agregarse el correspondiente para apelar; así no sería de nueve días el término para contestar una demanda, sino que sería de doce ó de catorce; el término ordinario de prueba no sería de cuarenta días, sino de mayor; el término para oponer excepciones después de la citación de remate, no sería de tres, sino de seis; y así, en cuanto á los demás términos, lo que es notoriamente contra la ley y jurisprudencia.

7. La prórroga se concedió sin perjuicio de «si estuviese dentro del término», como es de práctica, y de consiguiente, no debe aprovechar esa prórroga pedida fuera de término.

8. De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 7º, verb. *Actuario*, núm. 2.

9. El actor presentó su alegato después de vencidos los seis días que la ley acuerda para alegar: la parte contraria le acusó rebeldía inmediatamente de vencidos los seis días. No se hizo lugar á la rebeldía, porque el término de doce días es común para las partes, solo que cada una tiene derecho á retener en su poder por seis los autos.



sentado antes de vencido el término—Civ., tom. 18, pág. 68, Ser. 5ª (tom. 65).

10. **Alegato**—Presentado después del término, debe ser devuelto—Civ., tom. 20, pág. 139, Ser. 5ª (tom. 67).

11. **Alegato**—Deben agregarse antes de alegar las pruebas producidas fuera del término, si la demora no es imputable a la parte—Civ., tom. 20, pág. 233, Ser. 5ª (tom. 67).

**Alegato**—Véase: *Posiciones*, 38 y 60; *Auto apelable*, 3; *Diligencias de prueba*, 10; *Término*, 6.

1 **Alegatos**—Las diligencias no practicadas sin culpa de la parte, deben serlo antes de los alegatos—Com., tom. 4, pág. 261, Ser. 5ª (tom. 39).

**Alevosía**—Véase: *Homicidio*, 14.

1ª. **Apelación**—La pena impuesta en la sentencia no puede ser modificada en contra del reo si el Ministerio fiscal no interpuso recurso de apelación—Crim., tom. 9, pág. 176, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Apelación**—La oposición del ejecutado a la aprobación de tasaciones no es susceptible del recurso de apelación—Com., tom. 4, pág. 409, Ser. 5ª (tom. 39).

3. **Apelación**—No procede el recurso de apelación contra providencias dictadas para mejor proveer—Com., tom. 5, pág. 184, Ser. 5ª (tom. 50).

4. **Apelación**—No procede recurso de queja si no se ha

10. Se acusó la correspondiente rebeldía, antes de la presentación del alegato.

11. Última parte del art. 118 del Cód. de Proc.

1ª. Art. 693 del Cód. de Proc. Crim.

2. Art. 505 del Cód. de Proc.

3. Esta cuestión de procedimiento ha sido resuelta en sentido contradictorio, pero casi siempre de acuerdo con el sumario. Nosotros la impugnamos como contraria a la ley y perturbadora de los principios de igualdad que deben regir los pleitos.—Véase Inst., tom. 8 verb. *Inapelable*, núm. 2.

4. Se refiere al recurso de hecho que la ley acuerda en caso de apelación denegada—Arts. 234, 235 y 271 del Cód. de Proc.



interpuesto apelación — Civ., tom. 10, pág. 353, Ser. 5ª (tom. 57).

5. **Apelación**—El recurso de apelación interpuesto contra un auto á dictarse, carece de eficacia — Civ., tom. 10, página 353, Ser. 5ª (tom. 59).

6. **Apelación** — No pudiendo fundarse la apelación de resoluciones definitivas, el escrito que infringe la ley debe ser devuelto — Civ., tom. 11, pág. 32, Ser. 5ª (tom. 58).

7. **Apelación** — Las medidas dictadas contra el comprador, no son apelables por el ejecutado — Civ., tom. 15, pág. 159, Ser. 5ª (tom. 62).

8. **Apelación** — Los tribunales no deben resolver el punto en apelación si de hecho ha cesado la controversia — Civ., tom. 20, pág. 197, Ser. 5ª (tom. 67).

**Apelación** — Véase: *Auto absolutorio*, 1; *Sentencia*, 3 y 6; *Pena correccional*, 1; *Abogado*, 5; *Ministerio de menores*, 1; *Recurso de revocatoria*, 1.

1. **Apercibimiento** — Procede siempre que se falte á los respetos debidos al juez — Crim., tom. 3, pág. 314, Ser. 5ª (tom. 38).

2. **Apercibimiento** — Los términos irrespetuosos contra el agente fiscal, hacen procedente el apercibimiento como corrección disciplinaria — Civ., tom. 20, pág. 218, Ser. 5ª.

**Apercibimiento** — Véase: *Posiciones*, 11; *Defensor*, 2.

---

5. Porque los que las leyes acuerdan son para reparar agravios causados por providencias dictadas. Las providencias futuras no causan agravio.

6. Art. 227 del Cód. de Procedimientos.

7. Porque no causan agravio al ejecutado, pues ellas tienden á hacer efectivas las sanciones dictadas contra el comprador, prevenidas y autorizadas por las leyes que rigen el caso.

8. Las controversias doctrinarias sin aplicación á caso alguno pendiente, no son del dominio de los tribunales, los que no pueden pronunciarse sino sobre casos que reclamen su decisión para las ulteriores del juicio.

1. Art. 75 de la Ley org. de los Trib., de 1886.



1. **Alimentos**—La pensión alimenticia debe ser proporcionada al caudal del alimentario y á la condición social del que la solicita—Civ., tom. 10, pág. 229, Ser. 5ª (tom. 37).

2. **Alimentos**—El derecho de percibir alimentos el hijo natural puede justificarse por información sumaria, sin que sea indispensable que haya obtenido el reconocimiento del padre, ó de los jueces en su defecto—Civ., tom. 11, pág. 269, Ser. 5ª (tom. 58).

3. **Alimentos**—La falta de intervención del pretendido

1. Se pidió la cuota mensual de \$ 1,000, por vía de alimentos y litis-espensas para el juicio de divorcio que la esposa seguía contra el marido. Se comprobó que el alimentario gozaba de una fortuna de 600,000 pesos. En atención á esto se fijó en 1,000 por una sola vez para las litis-espensas y en 400 mensuales la cuota alimenticia—Arts. 602 y 604 del Cód. de Proc.

2. Teniéndose presente la naturaleza y objeto del juicio de alimentos, y atento lo que prescriben los arts. 375 del Cód. Civ. y 602 y 603 del Cód. de Proc., la persona que pide alimentos puede justificar su título sumariamente, aun cuando se trate de un hijo natural que no hubiese obtenido su reconocimiento, ya sea por su padre ó por los jueces. Esta doctrina ha sido consagrada en el caso publicado en el tom. 4, pág. 166, Ser. 2ª. Por otra parte, la naturaleza sumarisima del juicio no puede admitir discusión alguna sobre el derecho á percibir alimentos, una vez justificados los extremos admitidos por la ley—art. 602, Cód. de Proc.—Cualquiera reclamación sólo puede deducirse en juicio ordinario, debiendo entre tanto suministrarse como lo dispone el art. 607. Es en ese juicio ordinario, donde puede contradecirse la calidad de hijo natural, bastando para ordenarse el suministro de alimentos, que se pueda presumir verosímil la filiación invocada, la que puede resultar de una información producida en forma. La prueba que se requiere en estos casos no es precisamente la que sirve para constatar la paternidad ó la filiación, sino una información sin citación ni otra formalidad, que haga probables los hechos que invocan como fundamento de la acción.

3. De acuerdo con el número precedente. La S. C. N. se ha pronunciado en un sentido contrario al sumario en el caso que corre publicado en el tom. 21, pág. 38, Ser. 2ª—tom. 30 de la numeración general.—Nosotros pensamos que tanto esta resolución como la del núm. 1, interpretan el Cód. de Proc. en un sentido demasiado estrecho y contrario á las leyes que rigen la defensa en juicio de las acciones y derechos. El art. 603 y los demás correlativos del título XX del Cód. de Proc., no establecen en manera alguna que el demandado por alimentos no pueda ser oído en este juicio por más sumario que él sea. Lo único que



## padre natural en el juicio sumario de alimentos no vicia de

no permite es que se discuta el derecho que pueda tener el alimentado al percibo de los alimentos, como tampoco permite discusión acerca del monto fijado por el juez. A este respecto la ley sólo acuerda el recurso de apelación para ante el Superior y únicamente al efecto devolutivo. No habiendo en el título «Del juicio de alimentos provisorios y litespensas» disposición alguna que establezca terminantemente que el demandado no es parte en esta clase de juicios, los jueces no pueden privarle del derecho de defensa, porque ello importaría privar al individuo de uno de los derechos más sagrados conquistado por la sociedad. No es posible sostener que en el juicio de alimentos el demandado no es parte, y por consiguiente, es menos posible admitir que no pueda siquiera contrarrestar por medios probatorios evidentes, que los extremos exigidos por el art. 602 del Cód. de Proc. y que el actor trata de constatar por medio de pruebas falsas, no concurren en cualquier caso sometido a la decisión judicial. Y no es posible sostener esto, porque tal doctrina estaría en pugna con los principios fundamentales de la justicia, con los dictados de toda conciencia honrada: estaría así mismo en contradicción con las leyes que le han precedido en vigencia, y con el propio texto de la Const. Nac. Con efecto, el título XX de nuestro Cód. de Proc. reconoce como fundamento la doctrina consagrada por la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1881. Recorriendo el título XVIII de dicha Ley se ve que ella acuerda el derecho sagrado de la defensa en esta clase de juicios; y el art. 1611 establece que: «Presentada en forma la demanda, el juez acordará convocar á las partes á juicio verbal, el que se celebrará con arreglo á las disposiciones prescriptas para el que ha de tener lugar en el interdicto de retener ó de recobrar, y en él se admitirán las pruebas que aquéllas propongan relativas á los extremos expresados en el art. 1609 que no resulten justificados por los documentos acompañados á la demanda». Al estudiar Reus este título de la Ley Española dice: «Si tenemos en cuenta la misión que este juicio está llamado á cumplir en las relaciones jurídicas, se comprenderá inmediatamente que el legislador ha obrado con el mayor acierto, estableciendo el juicio sumarísimo para la declaración previa de alimentos provisionales, pues sin reunir tal condición de sumarísimo el juicio en que este reconocimiento se hace con la mayor facilidad, produciría este retraso fatales consecuencias que en realidad vendría á hacer poco menos que inútil la declaración y reconocimiento de tal derecho. Las imperiosas necesidades de la vida que este juicio viene á satisfacer, no pueden de manera alguna esperar período alguno, sino que en muchas ocasiones podría ser semejante dilación motivo bastante de producir la muerte, y ante semejante consideración entendemos que el legislador ha demostrado un criterio de alta imparcialidad y sabia doctrina, estableciendo esta importante modificación, dejando para otro procedimiento más au-



nulidad la sentencia que, aprobando la información, fija la pensión alimenticia—Civ., tom. 11, pág. 269, Ser. 5ª (1. 58).

plio y detenido, la determinación de los demás detalles que pueden ser reconocidos y debatidos sin peligro ni daño tan evidente y poderoso como el de dar ó no el alimento y los medios indispensables para la existencia; todo lo cual, como que no puede menos de hallarse de una manera somera, ha de permitir que los jueces tengan en su poder los recursos suficientes para negar ó conceder lo que en la demanda se pide, caso de que no queden satisfechos ó les parezcan incompletos los títulos y derechos en que se funde el demandante para hacer esta reclamación ante los tribunales. Únicamente nos resta consignar que es preciso en los jueces llamados á poner en práctica el presente título de la Ley de Enjuiciamiento, estremado esmero para distinguir cuándo y hasta dónde pueden ser aplicables los procedimientos sumarísimos que aquí se establecen, y cuándo no deben ser por tales procedimientos resueltos, pues las facilidades que el legislador concede para cosas determinadas, y que nosotros hemos aplaudido, no deben servir para reclamaciones verdaderamente temerarias en que se pueda sorprender la buena fe de los tribunales de justicia, aprovechándose de un procedimiento que por sus circunstancias y condiciones no permite á la parte demandada los recursos y los medios de defensa que en otra clase de juicios cualquiera. Decimos esto porque como por desgracia no hay todavía en todos los casos aquella elevada ilustración é imparcial criterio, condiciones esenciales é indispensables para descansar tranquilo en el goce de nuestros legítimos derechos, sabiendo que éstos nunca serán interrumpidos ni negados, no es posible desconocer, teniendo en cuenta tales circunstancias, lo peligroso de establecer estos procedimientos sumarios, arma poderosa contra arbitrarias conductas, cuando son reclamaciones aplicadas, pero origen también de las más tremendas injusticias cuando se ponen en práctica con ignorancia ó ligereza». Véase *Ius*, Ley de Enjuiciamiento Civil, tom. 3, pág. 357. Hemos dicho asimismo que no dándose intervención en este juicio al demandado, se vuelve en contra del precepto constitucional que rige el caso. Con efecto, el art. 18 de la Const. Nac., enumerando las garantías establecidas en beneficio de todos los habitantes de la Nación, dice entre otras cosas, que nadie puede ser sentenciado sin ser oído: que «es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos». No es posible dudar un sólo momento que la doctrina contenida en el sumario es contraria á este precepto constitucional, ó mejor dicho hablando en el tecnicismo jurídico, tal doctrina es repugnante á la Constitución. Pero admitamos por vía de hipótesis, que ella esté de acuerdo con las disposiciones del Cód. de Proc. Resultaría en este caso que como esta ley reglamentaria, estaría en pugna con el precepto claro y terminante de nuestra Carta Fundamental, que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio; esa ley, digo, no podría aplicarse por





4. **Alimentos**—El pago de los honorarios y gastos es de cargo del alimentario, aun cuando no exista condenación—Civ., tom. 15, pág. 59, Ser. 5ª (tom. 62).

5. **Alimentos**—La fijación de alimentos, es asunto de familia—Civ., tom. 15, pág. 140, Ser. 5ª (tom. 62).

dos razones: 1ª Porque el art. 28 de la Const. establece que los principios, garantías y derechos por ella establecidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten en su ejercicio. 2ª Porque el art. 31 dice: «esta Constitución... y demás leyes, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse á ella no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes provinciales». Resulta claro y evidente que aún dado el caso en que nuestro Cód. de Proc. estableciera clara y categóricamente que el demandado no es parte en el juicio, esa ley no podría ser aplicada porque es repugnante á la Const. Esta doctrina ha sido consagrada especialmente en reiteradas sentencias dictadas por la S. C. N., entre las cuales se puede citar la que corre publicada en el tom. 21, pág. 38, Ser. 2ª; tom. 30 de la numeración corrida. En el caso citado decía aquel alto Tribunal: «resultando que el auto en que se impone á don José Camogli la obligación de suministrar alimentos provisionarios al menor cuya paternidad se le atribuya se funda exclusivamente en el mérito de las informaciones de testigos que corren en autos: que dichas informaciones han sido producidas sin citación del interesado, y por consiguiente no puede producir efecto alguno en su perjuicio, se declara nulo y de ningún valor el auto recurrido; y devuélvase para que el Juez de Sección, procediendo con arreglo á derecho, provea lo que corresponda». El fallo revocado, ó mejor dicho, las actuaciones anuladas por la S. C. N., había aprobado una información ofrecida para acreditar el caudal del alimentario y el derecho del alimentado fijando en consecuencia la suma correspondiente que debía entregarse por vía de alimentos con declaración de que las costas eran á cargo del demandado.

4. La obligación de sufragar los gastos causados para obtener la consagración judicial del derecho á exigir alimentos, es una consecuencia de la misma obligación de abonarlos: esto está en la naturaleza propia de la obligación.

5. De acuerdo con el espíritu de la Ley 35, tít. 2, Part. 3ª, los casos de habilitación de feria son aquellos que tienen por único objeto amparar los intereses ó derechos de los que justifiquen ó demuestren la necesidad de dictarse aquellas medidas que dado su carácter de urgentes, pueden causar perjuicios si no se practican inmediatamente.

6. **Alimentos**—Careciendo los hijos adulterinos del derecho á indagar la paternidad, debe rechazarse la información para exigir alimentos, que no tenga por objeto haber sido reconocidos voluntariamente—Civ., tom. 17, pág. 370, Ser. 5\* (tom. 64).

7. **Alimentos**—No justificado el monto del caudal por el demandante, la pensión alimenticia á los hijos naturales debe ser proporcionada al confesado por el obligado — Civ., tom. 19, pág. 403, Ser. 5\* (tom. 66).

6. Esta resolución fué dictada tomando por base los fundamentos aducidos por el Agente Fiscal Dr. Naveira, quien se expidió así: «Sólo puede pedir alimentos, quien tenga por la ley derecho á exigirlos, debiendo justificar el título en cuya virtud los pide, pudiendo hacerse esta justificación por instrumento público ó por información de testigos—arts. 602 y 603 del Cód. de Proc.—Ahora bien, para que el juicio proceda contra el titulado padre adulterino, y desde que la paternidad se imputa á un hombre casado, en cuyo caso los hijos son adulterinos, debe probarse que éste hizo un acto voluntario de reconocimiento, como lo ordena el art. 343 del Cód. Civ., y lo tienen establecido la S. C. N. y la Cámara de Apelaciones. Esa prueba debe presentarse con la demanda, ya sea acompañando instrumentos del reconocimiento público ó privado, ó bien por información de testigos. Documentos de reconocimiento no se han presentado, y la información que se propone, no tiende á demostrar que el padre adulterino lo ha reconocido—á los efectos de la pensión alimenticia,—sino que tiende á probar que el demandado es el padre de los menores y V. S. debe saber que la paternidad y maternidad adulterina no pueden indagarse, por disponerlo así el art. 341 del Cód. Civ. La observación que hace el señor Asesor de Menores, no es atendible, pues la disposición del art. 607 del Cód. de Proc. no es aplicable al caso *sub judice*, ni puede modificar las disposiciones de los arts. 341 y 343 del Cód. Civ. El Agente Fiscal, en el solo interés de la ley y de la moral, se opone á la admisión de la información propuesta, desde que tiene por objeto indagar la paternidad de hijos adulterinos, y niega también personería á la señora por no haber probado que sea madre de los menores que indica; y que, en consecuencia, se encuentra en ejercicio de los derechos que acuerda la patria potestad.» Esta doctrina viene á corroborar la sostenida por nosotros en el núm. 3.

7. El criterio judicial necesita ser asesorado por pruebas que las partes deben acumular en autos. Si el juez no tiene más base para su resolución que la confesión del alimentario, no le queda otro recurso que fijar la cuota de acuerdo con esa prueba constante de autos.





8. **Alimentos**—No procede fijación de alimentos si existe señalada la pensión aun cuando se inicie nueva demanda de divorcio—Civ., tom. 19, pág. 411, Ser. 5ª (tom. 66).

9. **Alimentos**—Justificado que el hijo adulterino ha llegado a la edad requerida por la ley, cesa la obligación del padre de pasarle alimentos—Civ., tom. 20, pág. 25, Ser. 5ª (tom. 67).

10. **Alimentos**—Las cantidades fijadas para alimentos y litisexpensas deben ser proporcionadas a los recursos del alimentado—Civ., tom. 20, págs. 178 y 229, Ser. 5ª (tom. 67).

11. **Alimentos**—Siempre que se justifique la necesidad, el padre natural debe alimentos a sus hijos mayores de dieciocho años—Civ., tom. 21, pág. 47, Ser. 5ª (tom. 68).

12. **Alimentos** — Si la filiación resulta adulterina, no pueden exigirse alimentos en juicio sumario a los herederos legítimos del padre—Civ., tom. 21, pág. 327, Ser. 5ª (t. 68).

13. **Alimentos**—La esposa separada de hecho por largo

---

8. El hecho de iniciarse nuevo juicio de divorcio, no autoriza a solicitar y fijar nuevos alimentos, por no ajustarse ello a la letra ni al espíritu del art. 68 de la Ley de Mat. que gobierna la cuestión, siendo así que si se accediese a la fijación de una nueva cuota, quedaría sancionado que corresponde iniciar tantos juicios sobre alimentos cuantos sean los instaurados sobre divorcio, principio que no puede aceptarse legalmente, desde que la ley no acuerda el derecho a los alimentos, fundado en el hecho de la iniciación del pleito de divorcio, sino entre otras razones de orden moral, principalmente, en la necesidad que tenga de ellos el alimentado, y esa necesidad se halla satisfecha con la fijación anterior de la cuota.

9. Art. 343 del Cód. Civ.

11. El art. 331 del Cód. Civ. dispone que los padres deben prestar alimentos a sus hijos naturales hasta la edad de 18 años y siempre que los hijos se hallen en condiciones de no poder proveer a sus necesidades. Probada la imposibilidad de subvenir a su propia alimentación la obligación subsiste aún después de la edad marcada, por cuanto es una obligación impuesta por la naturaleza entre los que dan y reciben la existencia, que es más sagrada cuando se pide en casos de infortunio.

12. De acuerdo con la doctrina contenida en el art. 344 del Cód. Civ.

13. Se dejó establecido que los esposos habían vivido separados de



tiempo no puede exigir alimentos en juicio sumario—Civ., tom. 22, pág. 50, Ser. 5ª (tom. 69).

14. **Alimentos**—La prescripción del derecho al cobro de las cuotas alimenticias, no corre durante la tramitación de la causa—Civ., tom. 20, pág. 25, Ser. 5ª (tom. 67).

15. **Alimentos**—La ley al no admitir discusión sobre el derecho á percibir alimentos, no ha prohibido apreciar si ella acuerda ó no el derecho invocado —Civ., tom. 21, pág. 327, Ser. 5ª (tom. 68).

16. **Alimentos**—Una vez dictada la sentencia fijando la cuota alimenticia, el alimentario puede apelar no sólo respecto de la suma fijada, sino también respecto de la falta de

---

hecho durante veinte años, y al parecer esa situación había sido aceptada por la esposa, puesto que no se produjo protesta alguna por parte de ella. Siendo esto así, y cualquier que haya sido el origen de esa separación, la esposa no puede fundar en ese hecho anormal y extraño á las relaciones jurídicas de los esposos, su derecho á pedir alimentos en juicio sumario. El art. 51 de la Ley de Mat. Civ. autoriza á la mujer á pedir judicialmente que el marido le suministre los alimentos necesarios, cuando él falta á la obligación que el mismo artículo le impone, de vivir en una misma casa con su mujer y á prestarle todos los recursos que le fuesen necesarios. El art. 53 impone á la mujer la obligación correlativa de habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia. Cuando la mujer falta á esta obligación, el marido tiene derecho á negarle alimentos. Concurriendo una separación de hecho voluntaria entre actor y reo, no hay términos hábiles para concluir que la esposa haya cumplido con la obligación que sobre ella hace pesar el art. 53, ley citada, ni por consecuencia que su esposo haya faltado á la obligación que le impone el art. 51.

15. Hay que distinguir el derecho á *percibir* los alimentos, del derecho á *ser alimentado* por aquel á quien se piden los alimentos. Sobre el derecho á percibir no se admite discusión—art. 607, Cód. de Proc. —Pero el derecho á ser alimentado, es decir, el título que se invoca para ello debe justificarse—art. 602, inc. 1ª, ibid. Así, en el caso que nos ocupa se justificó el carácter de hijo adulterino pero no se demostró la imposibilidad de subvenir á sus necesidades que exige como condición el art. 343 del Cód. Civ. También este caso consagra el principio sostenido por nosotros en el núm. 3.

16. Es una consecuencia del principio sentado en el sumario precedente y de acuerdo con el núm. 3.



derecho para solicitarlos — Civ., tom. 21, pág. 327, Serie 5ª (tom. 68).

**Alimentos**—Véase: *Abandono voluntario*, 1 y 2; *Pensión alimenticia*, 4, 5 y 6; *Gastos*, 5 y 6; *Nulidad*, 43; *Embargo*, 17.

1. **Alimentos provisorios**—Aun cuando sólo se haya justificado aproximadamente el caudal del alimentario, procede la fijación de pensión durante el juicio de divorcio—Civ., tom. 9, pág. 21, Ser. 5ª (tom. 56).

2. **Alimentos provisorios**—Puede fijarse para alimentos a la esposa el total de lo que producen sus bienes propios — Civ., tom. 9, pág. 88, Ser. 5ª (tom. 56).

3. **Alimentos provisorios**—Justificado el derecho y el caudal, procede la fijación de pensión alimenticia a la esposa demandante por divorcio — Civ., tom. 9, pág. 176, Ser. 5ª (tom. 56).

4. **Alimentos provisorios**—Para que proceda la fijación

---

1. Como la fijación de la cuota alimenticia en este caso no causa estado, su fijación procede aunque sea deficiente la prueba del caudal del alimentario, pues puede ser modificada en el correspondiente proceso ordinario que la parte que se considere agraviada puede iniciar de acuerdo con el precepto del art. 607 del Cód. de Proc.

2. Este caso está de acuerdo con lo resuelto en verb. *Alimentos*, n° 2, tom. 8 de la Inst. Puede verse la nota, donde combatimos esta doctrina por considerarlo contraria a los principios legales que rigen el caso.

3. Artículos 51 y 68 de la Ley de Mat. de 1889, y art. 602 del Cód. de Proc.

4. El hijo natural de un padre fallecido se presentó pidiendo alimentos a los parientes de éste, y esponiendo que la madre natural había tenido relaciones amorosas con el pretendido padre, de cuyas relaciones había nacido el menor; que la madre carecía de bienes para mantener a su hijo, y que por la circunstancia de haber fallecido el padre del menor, que voluntariamente había cumplido con esta obligación, era necesario requerir judicialmente la prestación alimenticia de los hermanos del causante, actualmente en posesión de sus bienes; que en uso de los derechos que le confieren los arts. 330, 331 y 375 del Cód. Civil, concordantes con la Ley 7ª, tit. 19, Part. 4ª, solicitaba que se condenara a los mencionados herederos al pago de una pensión mensual para alimentos del menor, como también a las expensas del juicio, todo



de cuota alimenticia no basta justificar el título con que se

previa declaración de los testigos que presentaba y que debían declarar al tenor del interrogatorio que igualmente acompañó. Los ministerios popular y fiscal se opusieron al progreso del juicio, fundándose en que no se trataba de un hijo natural reconocido, ó declarado tal por sentencia judicial, por cuya circunstancia era estemporáneo el procedimiento, mientras que no se resolviera en el juicio ordinario correspondiente la filiación natural que invocaba el menor. El juzgado mandó recibir la información sin perjuicio de resolver en la oportunidad de dictar sentencia la procedencia ó improcedencia de la petición. Después de recibida la información de testigos, el representante del menor y los ministerios públicos, insistieron en sus peticiones. Antes de apreciar la prueba de los extremos invocados para solicitar la prestación de alimentos, debía resolverse si ella era ó no procedente, tratándose de un hijo natural que no había sido reconocido por su padre como tal, y que habiendo fallecido éste, no se había declarado esa filiación en el juicio ordinario correspondiente. Este punto ha sido diversamente apreciado, motivando variaciones en la doctrina, y aun diversas opiniones en ilustrados jueces de nuestra magistratura. En el fallo contenido en el tomo 5º, pág. 432, ser. 1ª de la Jur. Civ., sostuvo el doctor Zavalia, que para la procedencia del juicio de alimentos, debía demostrarse sumariamente el reconocimiento de la filiación natural por parte del padre hacia el hijo, ó que debía justificarse la declaración judicial de la filiación, caso de que los padres se negaran al reconocimiento. Una interpretación contraria, agregaba el doctor Zavalia, nos conduciría á un extremo peligrosísimo, pues nada sería más fácil que establecer las relaciones de filiación natural por medio de testigos, en un juicio en que no es oído ni citado siquiera el presunto padre, que no tiene medio alguno de defensa, y que cuando menos lo piensa, es notificado de una sentencia en que se le condena á pagar alimentos y litisespesas como padre de un hijo natural de quien ni noticias tiene tal vez; sentencia que no es apelable sino en el efecto devolutivo, lo que es verdaderamente monstruoso. El doctor Abel Bazán, en el mismo fallo citado, se aparta de la opinión anterior, manifestando que no era necesario, para la procedencia de la acción de alimentos, el reconocimiento de la filiación del padre al hijo, ó la declaración previa de ésta, hecha por el juez en juicio contradictorio. «La obligación de que se trata, decía el doctor Bazán, no depende de la voluntad de los padres que quieran ó no reconocer á sus hijos, sino de la ley que les impone esa obligación, por el hecho sólo de haberles dado el ser, ó sea por la calidad de tales hijos, que es el título que estos deben justificar en forma especial y por los medios probatorios que las leyes han prescripto para obtener el cumplimiento de aquella obligación. La forma para esta justificación es la del procedimiento sumario, según el art. 373 del Cód. Civ.; y sin la audiencia



exige, debe probarse igualmente la obligación del demandado —Civ., tom. 9, pág. 179, Ser. 5ª (tom. 56).

del demandado con arreglo al art. 603 del Cód. de Proc. Los medios probatorios, permitidos al efecto, están expresamente determinados en el artículo citado del Cód. de Proc., cuando dice: Estas justificaciones pueden hacerse por medio de documentos, por información sumaria de testigos, sin citación ni otra solemnidad, ó bien por posiciones que se pidan á quien se pretende obligar á suministrar alimentos. Basta leer este artículo, para comprender que es del todo arbitraria y opuesta á sus claros términos, la restricción que se pretenda hacer de los medios probatorios en el juicio sumario de alimentos, al reconocimiento que los padres hagan de ella, ó á la sentencia de los jueces que lo hayan declarado de antemano, desde que está expresamente permitido por el artículo ya mencionado, que la justificación del título, que en este caso es la filiación, se puede hacer por sumaria información de testigos, sin citación ni otra solemnidad; y cuando por otra parte, el art. 375 del Cód. Civ., autoriza á los jueces á decretar la prestación de alimentos provisorios desde el principio de la causa, ó en el curso de ella, según el mérito que arrojen los hechos». Como se ve, pues, á juicio del doctor Bazán, no debe restringirse la acción de alimentos á la prueba del reconocimiento de la filiación, ó á la justificación de la declaración judicial que defiera á tal filiación, sino que basta la prueba de la filiación misma, en el juicio sumario, y por los medios probatorios que la ley autoriza. Esta conclusión ha sido aceptada por el doctor Sauze en el fallo contenido en el tom. 4, pág. 169, Ser. 2ª, de la Jur. Civ. Este magistrado, después de recordar la pertinente aplicación de los arts. 375 del Cód. Civ. y 603 del Cód. de Proc., y la Ley 7ª, tít. 19, Part. 4ª, arriba á la siguiente conclusión: «... Ahora bien; si por otro lado, el art. 607 del Cód. de Proc., dada la índole de este juicio sumarísimo, ordena que no se admita discusión alguna sobre el derecho á percibir los alimentos ni sobre su entidad, dejando cualquier reclamación sobre esos puntos para ser ventilada en juicio ordinario, fluye forzosamente, no sólo el derecho de intentar la prestación de alimentos sin subordinarla á la *promoción previa de un juicio ordinario sobre la filiación*, sino lo que es más, que la prueba del título no haya de ser concluyente, bastando que á manera de lo preceptuado para los embargos preventivos, y sin que esto importe prejuzgamiento, por confesión expresa ó ficta resulten, probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado». Después de estos precedentes y teniendo en cuenta las disposiciones legales que rigen el punto, parece que no es necesario subordinar esa acción al reconocimiento de la filiación natural, ó al resultado del juicio contencioso que lo declare tal, sino que es bastante acreditar en la forma de la ley el hecho de la filiación misma y los demás recaudos legales para que el juicio de alimentos pueda prosperar, sin perjuicio de



1. **Alquiler**—De casa, tiene privilegio sobre los gastos de justicia, salvo los indispensables para la realización de las existencias—Com., tom. 5, pág. 266, Ser. 5ª (tom. 40).

que el obligado, si no se considera tal, pueda hacer su reclamación de lo pagado en el juicio ordinario correspondiente. Se comprende que esta solución pueda prestarse á ulterioridades abusivas, pero ella surge del texto de los arts. 375 del Cód. Civ., 603 y 607 del Cód. de Proc., y ya estaba establecida por la Ley 7ª, tit. 19, Part. 4ª, que aun cuando se refería á la acción del hijo en contra del padre, no hay razón para concretarla á ese solo caso, excluyendo aquella en la que el demandado fuera otro que el padre.—Llerena, tom. 1, pág. 263.—La obligación alimenticia prestada á una persona ligada por vínculos de sangre y sin las condiciones de poder satisfacer necesidades apremiantes de la vida, debe atenderse con toda urgencia y prioridad, dejando para después el esclarecimiento completo y prolijo del derecho que se invoca. Así lo ha querido la ley, inspirada por razones de derecho natural, y pensando que se produciría un mal mayor en dilatarla, que en exigirla con los recaudos que requiera, dejando á salvo el derecho de los obligados para discutir la procedencia ó improcedencia de ella. Pero en la información rendida se hablaba de los hermanos del padre del menor pero no se demostró que esos hermanos fuesen herederos del causante, ni tampoco que éstos fueran precisamente las personas que expresaba la demanda. Estas deficiencias de la información impidieron el progreso de la acción, pues no es posible obligar á los hermanos á que cumplan con la obligación alimenticia, sin haberse demostrado que ellos sean herederos del causante, padre del menor. Hay, por último, á este respecto, una consideración que se reputó decisiva, y es, que el mismo representante del menor se encargó de demostrar que las personas demandadas no eran herederas del causante, desde el momento que atribuía á su representado el carácter de hijo natural, y á aquellos el de hermanos, y cuando es elemental que el hijo natural excluye de la herencia del padre á los hermanos del mismo—art. 3385 y concordantes del Cód. Civ.—En tal concepto, es evidente que las premisas de la demanda son contrarias á la conclusión, por cuya razón, si bien el menor que se titula hijo natural del causante puede ejercer los derechos que crea tener en contra de los procedentes de los bienes quedados por fallecimiento, en juicio contradictorio, no puede compelerlos á que le presten alimentos deduciendo la acción á que hacen mérito los arts. 375 del Cód. Civ., y 602 del Cód. de Proc.

1. El crédito cuyo pago se reclamaba, provenía de alquileres, los que gozan del privilegio especial establecido por el art. 3883 del Cód. Civ. Dicho crédito se encuentra comprendido, por consiguiente, entre los que indica el aparte 2º del inc. 4º, art. 1499 del Cód. de Com., y respecto de





2. **Alquiler**—Aun cuando por el monto del alquiler mensual corresponda el asunto al juez de primera instancia, debe deducirse acción ante la justicia de paz, si el total no pasa de la cantidad que la ley determina para fijar jurisdicción—Civ., tom. 16, pág. 345, Ser. 5ª (tom. 63).

3. **Alquiler**—Las demandas por distintos meses de alquiler pueden seguirse ante distintos jueces—Civ., tom. 18, pág. 90, Ser. 5ª (tom. 65).

1. **Alquileres**—Del bien hipotecado, pertenecen al deudor ó su concurso, que los hayan percibido, hasta la fecha en que sobre ellos se trabe embargo—Com., tom. 1, pág. 201, Ser. 5ª (tom. 36).

---

los cuales no son privilegiados los gastos judiciales, sino en cuanto se refiere especialmente á ellos—art. 1533, Cód. de Com.

2. La suma reclamada en la demanda fué de 500 pesos m'n, provenientes de dos mensualidades de alquiler. El inc. 1º del art. 13, de la Ley de justicia de paz, atribuye á ésta el conocimiento de todos los asuntos cuyo monto no exceda de la cantidad expresada. Si bien es verdad que el inc. 2º del mismo artículo excluye de la competencia de aquella las demandas por alquileres, cuando el alquiler mensual es mayor de 200 pesos, es sobreentendido que esta disposición es aplicable solamente cuando la suma total que se cobra pasa de 500 pesos, porque de otra manera no se armonizaría con el inc. 1º cit., que establece la regla general de competencia con relación á la cantidad. En apoyo de esta interpretación puede decirse también que el espíritu de la ley es ampliar la jurisdicción de la justicia de paz en los juicios por alquileres, desde que pueden conocer de todos aquellos que en el precio de la mensualidad no exceda de 200 pesos, aunque haya un número ilimitado de mensualidades vencidas. En este mismo sentido se ha pronunciado la Cámara en el caso de Grasso de Rivera con Britos de Rodríguez, fecha 6 de Marzo de 1894.

3. Porque la falta de pago de cada una de las mensualidades pueda dar lugar á una demanda distinta, independiente la una de la otra sin conexión ni continencia alguna.

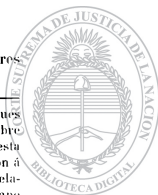
1. El art. 3110 del Cód. Civ., sólo hace extensivo el derecho que da la hipoteca á los accesorios, mientras estos se conserven unidos á la principal, especificando en seguida, que los alquileres no percibidos garantizan el crédito hipotecario. Tal disposición, que se armoniza con la del art. 3157, que deja al deudor hipotecario el ejercicio de todos sus derechos de propietario, reconoce por fundamento el que los frutos civiles, como los alquileres, son un accesorio de la cosa principal, mientras se



## 2 Alquileres — La escusión de los bienes del fiado es in-

conservan como un derecho inherente á ella y siguen por lo tanto la suerte de la misma; pero una vez que han sido cobrados y percibidos dejan de ser una accesión y se convierten en una cosa distinta de la principal, sin relación de derecho con ésta. Tratándose de los alquileres percibidos por la masa, esos alquileres dejan por ese hecho de ser un accesorio de la casa hipotecada; y no puede decirse que el cobro de alquileres se haga para los acreedores, porque sin que medie la adjudicación, el fallido no pierde la propiedad de sus bienes, aunque haya sido privado de su administración. La percepción de alquileres hecha por el síndico, aunque no verificada por el fallido, es hecha para éste, que es propietario de los bienes de la quiebra, aunque el acto se verifique en beneficio y seguridad de los acreedores. Aun en el caso de que el recibo de alquileres se hiciera para los acreedores como propietarios siempre ese acto se consideraría hecho para la masa, y no para el beneficio de un acreedor privilegiado sin una disposición espresa de la ley que la autorizara. En todo caso, resultaría que los alquileres percibidos habrían dejado de ser una accesión sin haber entrado al dominio del acreedor hipotecario; no pudiendo por lo tanto ser afectados legalmente al pago del crédito hipotecario. En cuanto á los alquileres no percibidos, la disposición espresa del art. 3110, establece la afectación de ellos al crédito hipotecario, debiendo entenderse que dicha afectación se hace efectiva desde el día que el acreedor la reclame, pudiendo antes de eso, el deudor ó quien sus derechos represente, ejercitar legítimamente el acto de poseedor de buena fe del percibo y apropiación de alquileres. No puede por otra parte admitirse que sea necesario el embargo previo de los alquileres debidos, porque la afectación al crédito en ese caso no procedería ya de un derecho establecido como un privilegio por el art. cit. del Cód. Civ., sino de las leyes generales que rigen los juicios y las ejecuciones.

2. El actor se presentó diciendo que había arrendado una casa de su propiedad por el alquiler de 500 pesos mensuales y por un término que venció el 30 de Abril de 1891; que el inquilino desalojó la casa antes de esa fecha, pero que el propietario no tomó posesión de ella sino después de vencido el término de la locación; que desde antes se había visto obligado á demandar al inquilino ante el Juzgado de Paz respectivo por cobro de alquileres, sin resultado alguno, lo que demostraba la insolvencia de aquél; que en vista de esto, constando de las cartas que acompañaba que el demandado se había constituido en fiador del inquilino, lo demandaba por el pago de la suma de \$1,133 pesos, que importaban los alquileres adeudados hasta la expresada fecha del término de la locación, y pedía se le condenara á abonarlo con sus intereses y las costas. Contestando á la demanda el fiador espuso, que la verdadera fecha de la carta fianza presentada como prueba del contrato de la lo-



dispensable para responsabilizar al fiador por los alquileres adeudados—Civ., tom. 10, págs. 55, Ser. 3ª (tom. 57).

cación entre el locador y locatario, era la de 7 de Enero de 1890, pues esa carta se refería a la que él había pasado á aquél en 23 de Diciembre de 1889 constituyéndose en fiador del inquilino; que en virtud de esta carta él no había garantido el cumplimiento del contrato de locación á tiempo determinado que se celebró con posterioridad á su fianza, relativa tan sólo al alquiler mensual convenido en una locación á tiempo indeterminado; que dadas las condiciones de su fianza él no estaba obligado á abonar sino el alquiler mensual que dejara de abonar el inquilino mientras éste ocupase la casa, como que desalojada ésta concluye la locación á plazo indeterminado, por lo cual reconociendo la demanda que el inquilino desalojó la casa antes del 30 de Abril de 1891, no habría razón para cobrarle los alquileres hasta esta fecha, á mérito de un contrato en que él no había intervenido; que siendo el alquiler pagadero por mes, el locador debió avisarle desde el primer mes que dejó de abonar el alquiler, sin conceder á éste prórrogas para el pago, que extinguen la fianza con arreglo al art. 2046, Cód. Civ.; que por otra parte, la fianza se había extinguido también porque debido á la negligencia del propietario en hacer valer su privilegio sobre los muebles introducidos en la casa, se había hecho imposible la subrogación del fiador en esos privilegios, según lo dispuesto por el art. 2043; que finalmente la demanda no había sido precedida de la escusión de los bienes del deudor, conforme al art. 2012, pues no basta á este efecto la afirmación de que el inquilino es insolvente. La fianza constante de la carta presentada se refería al alquiler mensual de una casa, sin que de sus términos pudiese desprenderse relación alguna con el contrato de locación á plazo determinado que posteriormente y sin intervención del fiador celebraron locador y locatario, como lo reconoció aquél absolviendo posiciones. En tales condiciones, es manifiesta la intención del fiador de garantizar simplemente el pago del alquiler mensual en una locación á plazo indeterminado, que debe juzgarse hecho por el tiempo fijado al precio—art. 1507, Cód. Civ.—para concluir cuando cualquiera de las partes lo quisiese (art. 1604, inc. 2ª). Que fundándose la demanda en ese contrato con prescindencia de la ocupación de la casa por el inquilino, se pretendía extender la obligación del fiador fuera de los límites de la convención, en contra de lo prescripto por el art. 1197, cuando nada autorizaba presumir que la fianza otorgada comprendiese la del contrato posteriormente celebrado sin su intervención, de manera á ser aplicable el art. 1198. Basta á este respecto tener presente los diversos efectos de una locación á plazo fijo y de otra á plazo indeterminado, de las cuales se derivan los efectos también diversos de contrato accesorio de fianza. Exigiendo el art. 2012, la escusión de los bienes del deudor para que proceda la demanda contra el fiador, aun dándola por



3. **Alquileres**—Para la fijación de daños y perjuicios procedentes de la rescisión de un contrato de locación, debe tenerse en cuenta la disminución del alquiler mensual que perciba el locador—Civ., tom. 11, pág. 82, Ser. 5ª (tom. 58).

4. **Alquileres**—Al fiador por alquileres que alega la rescisión del contrato de locación corresponde la prueba—Civ., tom. 11, pág. 114, Ser. 5ª (tom. 58).

5. **Alquileres**—El locatario, aun cuando haya desalojado la finca, es responsable de los alquileres en tanto el locador no pueda disponer de la propiedad por existir subarrendatarios—Civ., tom. 13, pág. 187, Ser. 5ª (tom. 60).

6. **Alquileres**—Es improcedente la ejecución por alquileres aun cuando exista contrato por escritura pública; si por

---

probada suficientemente, ó suponiéndola innecesaria por la ausencia del deudor—art. 2013, inc. 5º—ó por tener éste sus bienes fuera de la jurisdicción de este Juzgado (art. 2014), sería de admitirse la negligencia imputada al acreedor en la escusión y que resultaba de autos; lo cual basta para exonerar de responsabilidad al fiador, conforme al art. 2018. Por la misma razón son aplicables los arts. 2043 y 2046, que declaran extinguida la fianza cuando, como en el presente caso, debiendo cobrarse el alquiler mes á mes, se ha demorado efectuarlo y se han concedido esperas con perjuicio del fiador.

3. Sin embargo esa diferencia no puede considerarse como el valor exacto ó invariable de la indemnización á satisfacerse, porque el precio de la locación varía según los tiempos y está principalmente sujeto á la ley de la oferta y la demanda.

4. La rescisión del contrato alegada por el fiador puede y debe considerarse como el hecho nuevo sobre el cual versó primordialmente la litis; hecho nuevo alegado por el fiador para eliminar su responsabilidad por la obligación accesoria contraída por la fianza. No comprobándose este extremo se impone la responsabilidad del fiador, en presencia del art. 1896 del Cód. Civ.

5. Es con el desalojo completo de la cosa, que concluye la locación y cesa la responsabilidad del locatario por los alquileres—arts. 1556 y 1596 y argumento del 1611 del Cód. Civ.

6. El ejecutado, además de otras defensas que opuso y que fueron desestimadas, sostuvo que la suma estipulada por el arrendamiento de las fincas enumeradas en una escritura que se presentó, había quedado disminuída en virtud de haberse vendido algunas de ellas, percibiendo su importe el ejecutante, lo que había dado motivo á una quita obliga-



hechos posteriores de los contratantes no puede ordenarse el pago de cantidad líquida—Civ., tom. 14, pág. 300, Ser. 5ª (tom. 61).

**7. Alquileres**—Después del desalojo no procede juicio ejecutivo para el cobro de los alquileres—Civ., tom. 19, pág. 17, Ser. 5ª (tom. 66).

**8. Alquileres**—El contrato de locación no basta para dar

toria, no existiendo propiamente cantidad líquida que pudiese establecer un título ejecutivo. Se constató que el precio se fijó por la locación de todas las propiedades; se demostró asimismo que varias de esas propiedades fueron vendidas con anterioridad á la ejecución, percibiendo su importe el ejecutante; y no aparecía, por otra parte, de la escritura, que no obstante esas ventas debiera continuarse pagando el mismo arrendamiento. En tal situación, deja de existir la cantidad líquida que la ley indispensablemente requiere para el progreso de la ejecución, desde que admitir lo contrario importaría declarar que habiendo desaparecido la relación de derecho entre el locador y locatario, con respecto á varios de los inmuebles, fuera lícito, empero, cobrar la totalidad de los arrendamientos por un contrato parcialmente fenecido.

7. El juicio ejecutivo es un procedimiento de excepción establecido para casos especialmente determinados por la ley. Siendo esto así, las disposiciones pertinentes tienen que aplicarse estrictamente, cuidando de no ir más allá de los casos concretamente previstos. De los términos claros é inequívocos del art. 4578 del Cód. Civ., se desprende que la acción ejecutiva que acuerda, es contra el actual locatario, pero no contra el que ha dejado de serlo. El art. 466 del Cód. de Proc. estatuye lo mismo en el 2º inc., puesto que dispone que el demandado debe manifestar si es locatario en el momento que se le requiere. No siendo el demandado actual locatario, no procede contra él acción ejecutiva, por más que el crédito que se cobre proceda de alquileres, pues es indiscutible que el inc. 7º del art. 465 del Cód. de Proc. está limitado por el art. 466 del mismo Cód. y 4578 del Cód. Civ.

8. El actor se presentó por medio de apoderado diciendo que tenía alquilada al demandado, una casa de su propiedad por la suma de 500 pesos m n mensuales, como lo acreditaba el contrato que acompañaba. Que el inquilino habíase atrasado en el pago de alquileres, adeudando una cantidad que no podía precisar con exactitud, por ausencia y enfermedad de su poderdante, pero que no bajaría de siete meses, protestando limitar su reclamo á la suma que correspondiera, según la fecha del último recibo que debía exhibir el demandado. La acción del propietario por cobro de alquileres, sólo procede por la vía ejecutiva, á condición de que el demandado se reconozca locatario, y que del úl-



fuerza ejecutiva para el cobro de alquileres si al iniciar el juicio no se determina cantidad líquida exigible —Civ., tom. 19, pág. 376, Ser. 5ª (tom. 66).

9. **Alquileres**—El locador tiene derecho á cobrar del locatario los deterioros causados en el inmueble pero no los alquileres del tiempo que transcurra hasta la refacción—Civ., tom. 20, pág. 16, Ser. 5ª (tom. 67).

10. **Alquileres**—La negativa del carácter de locatario impide el cobro ejecutivo de los alquileres—Civ., t. 20, p. 170, Ser. 5ª (tom. 67).

11. **Alquileres**—Procede el embargo de los alquileres del inmueble hipotecado.—Civ., tom. 20, pág. 290, Serie 5ª (tom. 67).

12. **Alquileres**—La ejecución por alquileres sólo puede prosperar por los indiscutibles, los aumentados sin consentimiento de todos los interesados, hacen procedente la inhabilidad de título—Civ., tom. 21, pág. 23, Ser. 5ª (tom. 68).

---

timio recibo que éste exhiba pueda evidente y claramente inducirse la verdad y exactitud del reclamo del actor. Sólo dentro de estas condiciones los alquileres son un título que traiga aparejada ejecución, según resulta del art. 466 del Cód. de Proc., debidamente interpretado. El locador mismo se había manifestado inseguro sobre el monto é importancia de los alquileres adeudados, según resultó de su misma exposición. En tales condiciones, no puede hacerse lugar á la vía ejecutiva, que constituye un procedimiento escepcional, sólo admisible dentro de los términos estrictos de la ley, que lo ha creado y reglamentado.

9. La obligación de reparar los perjuicios está establecida en los arts. 1561, 1562, 1563 y 2881 del Cód. Civ. No se hizo lugar al pago del alquiler que había dejado de percibir, porque el propietario demoró las reparaciones, siendo, de las consecuencias de esa inacción, sólo responsable el propietario.

10. No se instruyó la acción con documento alguno que acreditara el carácter de propietario invocado por el actor. El art. 466 del Cód. de Proc., rige el caso.

11. Art. 3110 del Cód. Civ.

12. El aumento de alquiler sin consentimiento de todos los interesados, es como si no existiera, pues para ellos es *res inter alios acta*, que no les perjudica ni les beneficia. Para que el juicio ejecutivo pueda prosperar se requiere que haya cantidad líquida y exigible.



13. **Alquileres**—Justificado el precio del arrendamiento y la época del desalojo, el inquilino está obligado al pago de los alquileres que no justifique haber abonado—Civ., t. 22, pág. 283, Ser. 5ª (tom. 69).

14. **Alquileres**—Vendida la finca por un primer hipotecario, no puede subsistir el embargo de los alquileres del segundo—Civ., tom. 22, pág. 400, Ser. 5ª (tom. 69).

**Alquileres**—Véase: *Depositario*, 2; *Contrato de locación*, 10; *Embargo preventivo*, 25; *Excepción de litispendencia*, 11; *Hipoteca*, 1; *Excepción de falta de personería*, 20; *Locación*, 11.

1. **Amenazas**—No basta justificar la existencia de amenazas indeterminadas para que exista delito—Crim., tom. 9, pág. 438, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Amenazas**—De muerte, procede la escarcelación en la querrela por amenazas de muerte si solo se causaron lesiones—Crim., tom. 9, pág. 42, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Amenazas**—Aun cuando el delito de amenazas tenga origen en un juicio criminal no debe considerarse incidente de aquél—Crim., tom. 5, pág. 237, Ser. 5ª (tom. 40).

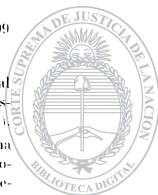
**Amenazas**—Véase: *Agente de la autoridad*, 1.

13. Comprobado el vínculo de derecho en virtud de la locación, el locatario debe acreditar el pago del alquiler, porque al alegar el pago trae al juicio un hecho nuevo cuya prueba incumbe al que lo aduce.

14. Art. 3110 del Cód. Civ.

1. Esto no fué lo resuelto por la Cám. en el caso de referencia. Sólo se dijo que las declaraciones de los testigos no constituyan prueba plena de la constatación de las amenazas, atento lo dispuesto en el art. 306 del Cód. de Proc. Crim., según el que, para que las declaraciones de los testigos haga plena prueba, es necesario que sean contestes en el hecho, lugar y tiempo. La querrela fué rechazada por falta de prueba de las amenazas, pero no porque ellas fuesen indeterminadas.

2. De los antecedentes no se desprendía que el encausado, al profetizar las amenazas, hubiese tenido el propósito formal de matar al amenazado, sino más bien el de lesionarle ó causar cualquier otro mal contra su persona. En tal concepto no debe considerarse el delito como amenazas de muerte, debiendo aplicarse tan sólo como de lesiones, cuya pena permite la escarcelación, de acuerdo con el principio del artículo 376 del Cód. de Proc. Crim.



**Amistad**—Véase: *Recusación*, 9.

1<sup>a</sup>. **Amparo de la libertad**—La jurisdicción correccional no puede conocer en el recurso de amparo de la libertad restringida por vigilancia policial—tom. 9, p. 5, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

1<sup>b</sup>. **Ampliación**—Si la ampliación á la demanda no se ha tramitado con arreglo á derecho, la sentencia no puede pronunciarse sobre ese punto—Civ., tom. 16, pág. 255. Serie 5<sup>a</sup> (tom. 63).

2. **Ampliación**—En tiempo, de la demanda hace innecesario el pronunciamiento sobre la falta de personalidad—Civ., tom. 20, pág. 188, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

**Ampliación**—Véase: *Bienes embargados*, 2.

**Animales**—Véase: *Acarreador*, 2.

**Anotaciones**—Véase: *Pagos á cuenta*, 1.

**Anuncios**—Véase: *Interdicto de retener*, 1.

1<sup>o</sup>. **Apelable**—Para el ejecutante son apelables todos los

1<sup>a</sup>. El recurso de *habeas corpus*, está escludido de la jurisdicción correccional, según disposición de los arts. 617 y 618 del Cód. de Proc. Crim.

1<sup>b</sup>. Debe imprimirsele la misma tramitación que á la demanda, observando lo dispuesto en los arts. 77 y 82 del Cód. de Proc.

2. Entablada una demanda, se opuso la escepción de falta de personería; después de evacuado el traslado de la escepción, el actor amplió la acción; con esa ampliación desapareció la causa de la escepción opuesta. El juez falló la articulación, declarando la procedencia de la escepción, y teniendo en cuenta que el inconveniente habia quedado salvado con la ampliación, ordenó que se contestara directamente la demanda. Apelada esta resolución fué revocada por la Cám. fundándose en que la ampliación fué formulada antes de la contestación, en cuyo caso debe aquella considerarse como parte integrante de la misma.—Estevez Sagni, 226.—Que en presencia de esa ampliación carece de razón de ser la escepción opuesta.

1<sup>o</sup>. Según lo tiene resuelto la jurisprudencia, la disposición del artículo 505 del Cód. de Proc., sólo es aplicable al ejecutado, pues el juicio ejecutivo ha sido instituido en favor del acreedor á fin de ser pagado de su crédito á la brevedad posible. No pudo entrar jamás, en la mente del legislador, perjudicar al acreedor limitando las apelaciones, precisamente cuando lo que ha querido es beneficiarlo. Pueden verse, de





autos del juicio ejecutivo que agravien su derecho—Com., tom. 9, pág. 123, Ser. 3ª (tom. 25).

2ª. **Apelable**—El auto que no hace lugar á la devolución de un escrito es apelable—Civ., tom. 17, pág. 330, Ser. 5ª (tom. 64).

3ª. **Apelable**—El auto que hace obligatoria la manifestación sobre honorarios, es apelable—Civ., tom. 17, pág. 383, Ser. 5ª (tom. 64).

**Apelable**—Véase: *Auto apelable*, 1; *Abogado*, 1.

1. **Apoderado**—El procesado no puede nombrar procurador ó apoderado para el juicio criminal—Crim., t. 3, p. 366, Ser. 5ª (tom. 38).

2ª. **Apoderado**—El apoderado con facultad especial está obligado á absolver posiciones—Civ., tom. 9, p. 377, Ser. 5ª (tom. 56).

3ª. **Apoderado**—La citación para absolver posiciones, no

---

acuerdo con esta resolución los casos que corren publicados en la Inst., tom. 8, verb. *Apelable*, 1; tom. 5, verb. *Autos inapelables*, 1; tom. 3, verb. *Juicio ejecutivo*, 1; tom. 4, verb. *Inapelable*; tom. 1, verb. *Apelaciones*, 183.

2ª. Porque causa gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva.

3ª. En un juicio de divorcio, el abogado de la esposa se presentó cobrando sus honorarios al marido, y solicitó que ésta hiciera la manifestación de práctica, respecto de la cuenta presentada, bajo apercibimiento de procederse á la regulación. El esposo, considerando que no estaba obligado á hacer esa manifestación, apeló del auto: la parte contraria sostuvo que ese auto era inapelable por no ser la oportunidad para discutirse el derecho á cobrarlos. Se resolvió declarando la apelabilidad del auto porque trae gravamen irreparable—art. 226 del Cód. de Proc.

1. Según la clase de delito de que se trate. Véase Inst., tom. 6, verb. *Apoderado*, núms. 5 y 12; tom. 3, verb. *Calumnia*, 3, y *Acusado*, 1; tom. 4, verb. *Apoderado*, 2.

2ª. El poderdante se encontraba ausente del lugar del juicio en cuyo caso es de aplicarse el art. 136 del Cód. de Proc.

3ª. El art. 40 del Cód. de Proc. establece que toda persona que litigue, sea por su propio derecho, sea en representación de tercero, debe constituir en el primer escrito que presente, su domicilio legal dentro



puede hacerse en el domicilio legal del apoderado—Civ., t. 10, pág. 331, Ser. 5ª (tom. 37).

4. **Apoderado**—Consentido el auto que admite la personería del apoderado, no puede discutirse si investía ese carácter cuando presentó el escrito—Civ., t. 11, p. 13, Ser. 5ª (t. 58).

5. **Apoderado**—El dolo ó fraude cometido por el apoderado que otorgó la hipoteca, no puede ser tenido en consideración al ejecutarse judicialmente la obligación—Civ., t. 11, pág. 224, Ser. 5ª (tom. 58).

6. **Apoderado**—Deben cumplirse las diligencias pedidas

---

de un radio de veinte cuadras del asiento del juzgado. El art. 12 dice que el domicilio una vez constituido, se reputará subsistente para todos los efectos legales, mientras los interesados no hayan designado otro. Si el apoderado constituye domicilio, sólo para él lo constituye, no para su poderdante: si éste lo constituye, ese domicilio subsiste para todos los efectos legales. Este principio general tiene su excepción en el art. 136, cuando el interesado estuviere fuera del lugar en que se sigue el juicio, en cuyo caso las posiciones deben ser absueltas por el apoderado si estuviere facultado al efecto y lo consintiese la parte contraria. No siendo esto posible se dará comisión al juez del lugar donde se encuentre. La ley no exige que tanto el poderdante como el apoderado fijen domicilio legal. Si éste tiene su domicilio constituido y no aquél, lo correcto es que la parte sea directa y personalmente citada en su domicilio.

4. Un apoderado se presentó contestando á nombre de su principal una demanda de que se había conferido traslado. Esa presentación se hizo sin acompañar el poder, pero indicando que el testimonio se encontraba ante otro juzgado á cuyo efecto solicitó se librara el correspondiente oficio. Se sostuvo que no habiéndose acompañado el poder no debió tenerse por parte al apoderado; pero como el auto en que se ordenaba el libramiento del oficio había quedado ya consentido, se resolvió que la oposición era improcedente.

5. El dolo cometido por el apoderado, no puede ser alegado por el poderdante, pues este vicio sólo podría dar lugar á que se tache como inhábil el título; pero la inhabilidad, según jurisprudencia de la Cám. de lo Civ., debe resultar de la forma esterna del título mismo. Cuando esa forma esterna del título no adolece de vicio alguno el título es hábil no obstante que la causa de la obligación sea ilícita, ó que ella sea sin causa. Esto debe discutirse en juicio ordinario.

6. Porque la otra parte puede suministrar los datos necesarios para el diligenciamiento.



por exhorto aun cuando no se presente apoderado de una de las partes—Civ., tom. 11, pág. 352, Ser. 3ª (tom. 58).

7. **Apoderado**—El apoderado no está obligado á declarar el domicilio del que debe absolver posiciones—Civ., tom. 11, pág. 372, Ser. 3ª (tom. 58).

8. **Apoderado**—El apoderado común nombrado de oficio debe ser designado entre los representantes nombrados por las partes—Civ., tom. 17, pág. 379, Ser. 3ª (tom. 64).

9. **Apoderado**—El auto que nombra un apoderado común no causa agravio si está consentido el que hacía la intimación—Civ., tom. 17, pág. 379, Ser. 3ª (tom. 64).

**Apoderado**—Véase: *Rendición de cuentas*, 1; *Rebelría*, 7; *Apoderado*, 4 y 7.

1. **Apoderado general** — Con facultad de intervenir en causas criminales, puede representar al acusado por calumnia si el poder es de fecha posterior á la querrela—tom. 9, pág. 65, Ser. 3ª (tom. 25).

**Apoderado general**—Véase: *Juramento estimatorio*, 1.

7. A este respecto hay jurisprudencia contradictoria; pero hoy ésta se ha inclinado en contra del sumario. Esta se funda en que si se obliga á la parte á denunciar el domicilio de su principal, sería obligarla á facilitar á la contraparte los medios de producir la prueba. Pero el juzgado no debe llamar autos para sentencia hasta tanto no se hayan absuelto las posiciones. De acuerdo con el sumario. Véase: Inst. tom. 8, verb. *Domicilio*, núms. 8 y 18; tom. 4, verb. *Posiciones*, núm. 2075. En contra. Véase: Inst., tom. 7, verb. *Posiciones*, 29, *Domicilio del poderdante*, 1, *Apoderado*, 10; tom. 5, verb. *Domicilio*, 4. Los que sostienen esta tesis dicen que no hay inconveniente alguno legal en que el representante del absolvente manifieste el domicilio de éste si lo sabe, desde que tal manifestación no puede causar daño á su parte. La indicación del domicilio favorece el desenvolvimiento natural del juicio, fin á que deben atender principalmente los tribunales.

8. La ley 18, tit. 5º, Part. 3ª, dice textualmente así: «E si non se acordaren, tome el Juez *qual della* entendiase que lo hará mejor». Un extraño no puede ser nombrado. Véase Inst., tom. 5, verb. *Apoderado unico*, núm. 4.

9. Porque el segundo auto es una consecuencia del primero.

1. Véase la nota del verb. *Acusado*, núm. 1.



**Apremio**—Véase: *Testigos*, 18.

**Apropiación**—Véase: *Intención criminal*, 1; *Depositarío judicial*, 3.

**Aproximación sexual**—Véase: *Delito de violación*, 1.

**Arancel**—Véase: *Acreedor hipotecario*, 2.

1. **Árbitros**—Antes del nombramiento de árbitros para justipreciar los servicios, debe en juicio ordinario justificarse su prestación—Com., tom. 1, pág. 160, Ser. 5ª tom. 36.

2. **Árbitros**—Deducida excepción de incompetencia por corresponder el asunto a la decisión de árbitros, el auto que ordena la formación del tribunal no causa agravio al demandado—Com., tom. 3, pág. 38, Ser. 5ª tom. 38.

3. **Árbitros**—Las cuestiones entre socios deben ser resueltas por árbitros—Com., tom. 3, pág. 321, Ser. 5ª t. 38.

4. **Árbitros**—Debe determinarse por árbitros el precio de la locación de servicios si no se estipuló al contratarlos. Civ., tom. 9, pág. 56, Ser. 5ª tom. 56.

5. **Árbitros**—No procede condenación en costas al locador de servicios si manifiesta su conformidad, en que el precio lo determinen árbitros—Civ., t. 9, p. 56, Ser. 5ª t. 56.

1. No pueden designarse árbitros para determinar el precio de trabajos no comprobados; esta comprobación es previa a la estimación, porque ella sería inútil si después resultaren improbados los servicios.

2. Entablada una demanda ante la jurisdicción ordinaria, el demandado opuso la excepción de incompetencia, alegando que el conocimiento de la causa correspondía al fuero arbitral. El juez entonces convocó a la parte a juicio verbal para constituir el tribunal arbitral. El excepcionante apeló, y concedido el recurso, la Cám. declaró que la resolución no le causaba agravios pues por ella se llevaba el asunto a la jurisdicción competente según la propia excepción alegada.

3. Art. 448 del Cód. de Com.

4. Art. 1627 del Cód. Civ.

5. No hay temeridad ni malicia de parte del litigante. Siendo de tenerse presente que al someterse el demandado al precio que determinen árbitros ajusta su conducta al ministerio de la ley art. 1627 del Cód. Civ.

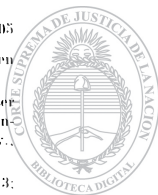


6. **Árbitros**—El juramento ante escribano es requisito ineludible para el ejercicio de árbitros; su omisión importa la inexistencia legal de jurisdicción para resolver las cuestiones sometidas al tribunal—Civ., t. 9, p. 154, Ser. 5ª (t. 36)

7. **Árbitros**—Declarada y consentida la improcedencia del

6. Los arts. 776 y 799, inc. 3ª, del Cód. de Proc., establecen la formalidad del juramento para los árbitros en general al instalarse y dar comienzo á sus funciones. Según esas prescripciones, los jueces árbitros ó arbitradores deben aceptar el cargo bajo juramento. Así, la formalidad del juramento es previa á las funciones que les son propias á aquéllos. Más aun, es el juramento que les da el carácter, la investidura de jueces. Nuestras leyes orgánicas y procesales exigen la formalidad del juramento para el ejercicio de todo acto jurisdiccional relacionado con la administración de justicia. Cuando se trata de árbitros, pues, es indispensable que presten juramento en forma para poder entrar á llenar su cometido, satisfaciendo de ese modo una exigencia de la ley, y prestando una garantía de imparcialidad á los interesados. En el número 172 de su *Tratado de Procedimientos civiles*, el doctor Esteves Sagú se expresa en estos términos: «El juramento es indispensable en todo el que haya de ser juez ó ejercer actos administrativos de justicia; es una garantía que presta la religión y la honradez al hombre en sociedad. Si es verdaderamente próbido y firme, nada le hará zozobrar, y la garantía se duplica; si es débil, su conciencia debe imponerle, y la religión sostenerle. Aunque no fuera más que esto, ¿qué mejores fundamentos habría?» Aplicando estas disposiciones legales y principios doctrinarios recordados, tenemos que si el laudo con que se inicia una ejecución ha sido dictado sin que el árbitro prestara juramento previo, ese laudo es insuficiente y nulo. Ese fallo no puede ser causa de obligación, puesto que no llegó á tener la investidura de arbitrador, ni por consecuencia la jurisdicción necesaria para decidir de los puntos disidentes ó controvertidos que forman la materia del compromiso. Si el arbitrador dictó el fallo cuando aun no tenía jurisdicción para hacerlo, es evidente que esa decisión no es un fallo en el sentido legal, ni puede entenderse incluida entre las sentencias que enumera el art. 535 del Cód. de Proc. Ese laudo no es un título bastante para sustentar una ejecución. El laudo es nulo, es como si no existiese, y ningún efecto legal puede producir.

7. El actor se presentó solicitando la constitución de un tribunal arbitral para dirimir cuestiones sociales: el demandado espuso que la sociedad no existía ya por haber sido declarada estinguida en virtud de sentencia dictada por juez competente, existiendo en consecuencia cosa juzgada al respecto. No eran aplicables los arts. 1777 del Cód. Civ., y 448 y 449 del Cód. de Com., por cuanto la desconformidad entre los socios no



juicio arbitral, la demanda debe deducirse ante el juez en turno—Civ., tom. 17, pág. 386, Ser. 5ª (tom. 64).

8. **Árbitros**—Cuando el precio de los servicios deba ser determinado por árbitros, éstos deben tener en cuenta la condición social y pecuniaria de locador y locatario — Civ., tom. 21, pág. 160, Ser. 5ª (tom. 68).

**Árbitros**—Véase: *Locación de servicios*, 8; *Sentencia*, 13; *Nulidad*, 48.

1ª. **Área**—Debe devolverse al comprador la parte proporcional del precio depositado, si el vendedor no puede integrar el área estipulada en el contrato — Civ., tom. 22, página 130, Ser. 5ª (tom. 69).

1. **Área vendida**—Deducida demanda sobre integración del área vendida ó devolución proporcional del precio, el ofrecimiento del demandado para cumplir lo primero no importa el cumplimiento que impida al juez resolver la cuestión propuesta — Civ., tom. 13, pág. 56, Ser. 5ª (tom. 60).

1ª. **Arma de fuego**—El disparo de arma de fuego, aun cuando no cause lesiones, debe ser penado con dos años de prisión, si no existen circunstancias—Crim., tom. 1, pág. 65, Ser. 5ª (tom. 36).

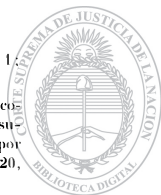
---

era respecto de lo que constituía el capital y forma de su distribución, sino por falta de derecho en el actor para entablar su acción. En mérito de esto se declaró improcedente la constitución del tribunal arbitral y que debió el juez ventilar en el correspondiente juicio ordinario. Esta resolución quedó consentida. Después quiso el actor que el mismo juez continuara entendiendo en el juicio ordinario, á lo que no se hizo lugar porque no estaba de turno. Era evidente que era á ese juez que debió recurrir por cuanto la demanda anterior había terminado con la sentencia dictada.

8. Como asimismo la naturaleza de los servicios prestados y demás antecedentes ó circunstancias que concurren para determinar equitativamente el importe de los servicios que deben estimarse.

1ª. Art. 1345 del Código Civil.

1ª. El tiro hirió á la víctima, por consiguiente hubo lesión. Pero la pena de uno á tres años de prisión que el Cód. Pen. fija para el disparo de arma de fuego es aplicable aunque se causen lesiones siempre que el hecho no importe un delito mayor.



**Arma de fuego**—Véase: *Disparo de arma de fuego*, 1; *Homicidio*, 9; *Disparo*, 1, 2, 3; *Disparo intencional*, 1.

1. **Arquitecto director**—De la obra, tiene derecho á cobrar comisión sobre el precio total, siempre que el presupuesto fuese aumentado, ya sea por obras adicionales ó por encarecimiento de materiales de construcción—Civ., tom. 20, pág. 345, Ser. 5ª (tom. 67).

1ª. **Arras**—Si la suma entregada tenía por objeto garantizar el cumplimiento del contrato, debe considerarse señal ó arras—Civ., tom. 19, pág. 173, Ser. 5ª (tom. 66).

1ª. **Arraigo**—El arraigo del juicio no puede pedirse después de trabado el pleito—Com., tom. 3 pág. 73, Serie 5ª (tom. 38).

---

1ª. Ante los términos claros y precisos en que está concebido el art. 1202 del Cod. Civ., es indudable, que cuando se celebra un contrato entregándose una señal para asegurar el contrato ó su cumplimiento, quien la dió puede arrepentirse del contrato, esto es, dejando de formalizarlo con arreglo á la ley, ó puede dejar de cumplirlo una vez llenados todos los requisitos necesarios para su existencia legal perdiendo la señal. En el boleto se decía que la cantidad entregada era en calidad de garantía de la compra, y no á cuenta del precio. Si se dió esa cantidad en garantía, fué para asegurar el contrato ó su cumplimiento, esto es, en señal, como resulta del significado de las palabras en el uso general y aun en el tecnicismo legal. El hecho de celebrarse un contrato mediando una cantidad de dinero como señal, ó lo que es lo mismo, reservándose la parte el derecho de no cumplirlo, perdiendo esa cantidad ó volviéndola doblada respectivamente, es lo mismo que si al contraerse la obligación se hubiese convenido que si ella no se cumpliese, se pagaría cierta suma de dinero, y en tal caso, la obligación se satisface en definitiva, entregando la suma convenida (art. 522). La estipulación de arras ó señal en los contratos, no es más que una cláusula penal convenida, y en tal caso, la pérdida ó devolución doblada entra en lugar de la indemnización, aunque se pruebe que ella no es suficiente; ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, aunque pruebe que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno—arts. 652, 653 y 656.—

1ª. El art. 85 del Cód. de Proc., califica espresamente de excepción dilatoria la de arraigo del juicio, y por consiguiente sólo puede ser alegada en la forma y oportunidad señalada en los arts. 83 y 86 del mismo Cód., pues el término para oponer esta clase de excepciones es perentorio, de nueve días.



2. **Arraigo**—El monto de la fianza de arraigo debe ser fijado por el Juzgado—Com., tom. 4, pág. 393, Ser. 5ª (t. 39).

3. **Arraigo**—El que litiga con carta de pobreza debe arraigar el juicio por simple caución juratoria—Civ., tom. 9, pág. 328, Ser. 5ª (tom. 56).

4. **Arraigo**—Esta fianza sólo responde por las costas del juicio—Civ., tom. 11, pág. 425, Ser. 5ª (tom. 58).

5. **Arraigo**—La ausencia del demandante después de iniciado el juicio no hace procedente el arraigo no pedido en oportunidad—Civ., tom. 13, pág. 282, Ser. 5ª (tom. 60).

6. **Arraigo**—El pedido de arraigo debe sustentarse como previo, aun cuando se oponga contestando á la demanda sin formar escepción—Civ., tom. 13, pág. 283, Serie 5ª (t. 60).

7. **Arraigo**—Si el actor tiene su domicilio en la jurisdicción del juez, no procede el arraigo del juicio—Civ., t. 13, pág. 283, Ser. 5ª (tom. 60).

8. **Arraigo**—Procede el arraigo del juicio si del poder

2. Art. 85 del Cód. de Procedimientos.

3. La carta de pobreza fué acordada al esposo para litigar en un juicio instaurado á nombre de la esposa. Como en este caso la litigante era ésta, y la carta había concedídose al esposo, el demandado alegó que dicha carta no amparaba á la esposa y si únicamente al marido. Se declaró que el esposo podía litigar á nombre de su mujer por cuanto la autorización había sido dada precisamente para el pleito iniciado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 601 del Cód. de Procedimiento, el arraigo debe en este caso limitarse á la caución juratoria.

4. Así lo tiene consagrado la jurisprudencia. Véase Inst., tom. 8, verb. *Arraigo*, núm. 1; tom. 7, mismo verb., núm. 3.

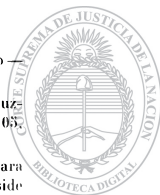
5. Véase el núm. 1.

6. El arraigo es siempre de previo pronunciamiento, pues si sólo se resolviese al dictar sentencia, sería inútil é ineficaz. La naturaleza misma de la escepción indica que es de carácter previo aunque se oponga al contestar la demanda.

7. Si el demandado no tiene domicilio en la Capital, dice el art. 85 del Cód. de Procedimientos.

8. Siempre que el actor no justifique que ese domicilio quedó sin efecto por haberlo cambiado. La aseveración del otorgante del poder, de





consta el domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado — Civ., tom. 14, pág. 210, Ser. 5ª (tom. 61).

9. **Arraigo**—La fianza de arraigo es potestativa del Juzgado si no se justifica la oposición—Civ., tom. 15, pág. 105, Ser. 5ª (tom. 62).

10. **Arraigo**—La universalidad del juicio no basta para modificar la procedencia del arraigo, si el demandante reside fuera de la jurisdicción del Juzgado—Civ., tom. 16, página 334, Ser. 5ª (tom. 63).

11. **Arraigo**—El acreedor que ocurre al juicio universal, no está obligado al arraigo del juicio—Civ., tom. 16, p. 382, Ser. 5ª (tom. 63).

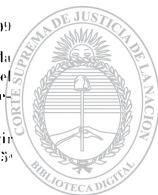
---

que tiene su domicilio en un lugar determinado, es una confesión que releva á la parte contraria de toda prueba.

9. De acuerdo con el núm. 2.

10. Esta resolución está en abierta contradicción con el número 11 siguiente. Las dos resoluciones fueron dictadas contradictoriamente por el Dr. Garay como Juez de 1ª Instancia y las dos confirmadas por la misma Cám. de lo Civ. «por sus fundamentos». No sólo el mismo juez dictó las dos providencias contradictorias, sino que la Cámara no quiso ser menos, pues los mismos camaristas doctores Gelly, González y Giménez confirmaron por sus fundamentos estas resoluciones que sentaban principios jurídicos tan diametralmente opuestos. Para estos camaristas, la excepción de arraigo procedía en el caso del sumario pues ella no se desvirtúa porque el actor está obligado á ocurrir á entablar su acción ante el juez necesario, por el carácter universal que tiene el juicio sucesorio, desde que la ley no establece excepción al respecto. Sin embargo, en el caso del núm. 11, la excepción era procedente porque tratándose de un juicio universal la parte se ve obligada á ocurrir al juez de la sucesión en virtud del llamamiento por edictos que es de práctica formular en el juicio universal de sucesión, y porque la parte había constituido domicilio legal en esta Capital en su escrito de presentación. No puede decirse que estas razones sean bastantes para determinar un cambio tan radical en el modo de pensar de un magistrado, pues á nadie escapa la puerilidad del argumento. Lo peor del caso es que las dos resoluciones contradictorias se dictaron por la Cámara con pocos días de intervalo: la del sumario fué dictada con fecha 8 de Junio de 1894 y la otra con fecha 23 del mismo mes y año. Ambas confirmaciones contradictorias fueron resueltas *con costas*.

11. Véase la nota precedente.



12. **Arraigo**—Aun cuando el poder se otorgue fuera de la jurisdicción, no procede el arraigo si del mismo consta que el otorgante reside en la capital—Civ., tom. 18, pág. 96, Ser. 5ª (tom. 65).

13. **Arraigo**—La ausencia accidental no basta para exigir el arraigo del demandante—Civ., tom. 18, pág. 132, Ser. 5ª (tom. 65).

14ª. **Arraigo** — Procede solicitar informe sobre libre disposición de bienes del fiador de arraigo — Civ., tom. 19, pág. 127, Ser. 5ª (tom. 66).

14<sup>b</sup>. **Arraigo** — El auto que no hace lugar á que se indague si el fiador aceptado puede disponer libremente de sus bienes, es apelable—Civ., tom. 19, pág. 127, Ser. 5ª (tom. 66).

15. **Arraigo**—No procede si el cesionario tiene su domicilio en la jurisdicción del juzgado, aun cuando fuera procedente contra el cedente—Civ., tom. 21, pág. 309, Ser. 5ª (tom. 68).

16. **Arraigo**—No procede el arraigo si el demandante tiene su domicilio en la capital, aun cuando desempeñe un empleo fuera de ella—Civ., tom. 21, pág. 361, Ser. 5ª (tom. 68).

**Arraigo**—Véase: *Fiador*, 1; *Fianza*, 5; *Excepción de arraigo*, 1.

**Arras**—Véase: *Contrato*, 43.

**Arrendamiento**—No procede licitación para el arren-

12. En el poder se invocaba por el otorgante su carácter de vecino de la Capital federal y que sólo accidentalmente se hallaba en el lugar del otorgamiento.

13. De acuerdo con la doctrina contenida en los arts. 92 y 99 del Cód. Civ.

14ª. Porque esta medida tiende á procurar la efectividad de la garantía acordada al litigante con la fianza que se le acuerde.

14<sup>b</sup>. Porque causa gravamen irreparable.

15. La acción interpuesta lo fué en nombre propio y en carácter de cesionario, y no como mandatario del cedente. El art. 85 del Cód. de Proc. se refiere al domicilio del actor: siendo el cesionario el verdadero actor la justicia de la resolución surge clara.



damiento de bienes testamentarios si existen propuestas ventajosas—Civ., tom. 10, pág. 413, Ser. 5ª (tom. 57).

**Arrendamiento**—Véase: *Desalojo*, 1; *Alquileres*, 13; *Ser morientes*, 1; *Impuestos*, 2.

1. **Arresto**—Las reiteradas faltas de respeto al Tribunal, deben ser corregidas disciplinariamente con veinte días de arresto—Civ., tom. 19, pág. 122, Ser. 5ª (tom. 66).

1. La Cám. impuso al autor de esta obra el máximo de la pena que autoriza el Cód. de Proc. y la ley org. de los Trib., que es de veinte días de arresto—arts. 53 y 54 del Cód. de Proc. y 107 de la ley org.—Para demostrar y patentizar este Tribunal el odio que profesa y la tirría que abriga por las críticas bien justas que formulamos en esta obra por los fallos inconsultos y parciales que dicta, no tiene empacho en ejercitar su venganza imponiendo toda clase de penas y correcciones disciplinarias con motivo de cualquier pretexto que se le presenta. No hay caso en que este Tribunal haya impuesto á un letrado el máximo de la pena si se exceptúa la que se nos impuso en el caso del sumario. Los apercibimientos más injustos, las multas más arbitrarias y los arrestos más irritantes se decretan contra nosotros sin tener siquiera asomo de razón. Y para que no se pueda juzgar de la injusticia patente cometida, se manda siempre textar las palabras ó las frases que motivan la pena; de esa manera este Trib. borra y hace desaparecer el cuerpo del delito. Las represalias más inconfesables se ejercen contra nuestra pobre persona en el ejercicio de su profesión de abogado. Se nos apercibe, se nos imponen multas, arrestos por las causas más nimias. Los expedientes que defendemos como abogado se eternizan en la Cám. al estremo que actualmente está en apelación un juicio sobre cobro ejecutivo de honorarios desde hace año y medio! Es inútil pedir pronto despacho: la justicia no ha sido hecha sino para los allegados y amigos de este Tribunal de principio de siglo. Un juicio ejecutivo en apelación durante año y medio: es todo lo que se puede decir de la ecuanimidad de los miembros que componen este Tribunal. Y no contentos estos señores con vengarse en esta forma tan cómoda para ellos y tan deprimente para la majestad de la justicia que escarnecen, van hasta exigir del Fiscal de lo Criminal que entable acusación contra él por delitos imaginarios. Hoy pende en contra nuestra una acusación de la Cám. por desacato que dice hemos cometido contra sus miembros. Todo esto es causa para que la justicia de nuestro país haya bajado donde hoy se encuentra, debatiéndose en los bajos fondos de los sentimientos más reprobados y de las pasiones menos levantadas. Mientras la justicia en nuestro país esté administrada por hombres como éstos, llenos de pasiones y prejuicios, ella no pasará de ser una irritante parodia de lo que la verdadera justicia debe ser.



**Arresto**—Véase: *Mandato*, 6.

1<sup>a</sup>. **Asamblea**—La falta de cumplimiento, por parte del gerente ó directorio de una sociedad anónima, de las resoluciones de una asamblea, no puede ser calificada como delito—Crim., tom. 9, pág. 435, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

**Asamblea**—Véase: *Directorio*, 1; *Impuestos*, 1.

1<sup>6</sup>. **Asegurador**—La prueba de la existencia de culpa ó fraude en el contrato de seguro, es en todos los casos á cargo del asegurador—tom. 1, pág. 20, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

2. **Asegurador**—La cantidad fijada en la póliza del seguro forma prueba plena con respecto al asegurador, siendo de su cargo la prueba en contrario—tom. 1, pág. 20, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

3. **Asegurador**—El desconocimiento por parte del ase-

1<sup>o</sup>. Al resolver esta cuestión la Cám. dijo: «Considerando que los hechos en que funda el actor su querrela, no constituyen el delito de estafa ó defraudación previsto por los arts. 202 á 207 del Cód. Pen. Que este hecho, consistente en haber entregado en caución el directorio de la Sociedad Territorial La Plata acciones que se habían mandado inutilizar, disponiéndose que «no podían ser de nuevo lanzadas á la plaza sino por disposición expresa de la asamblea de accionistas», fué aprobada por una asamblea de accionistas en que de él se dió cuenta, explicando las causas que lo habían motivado, según resulta del libro de actas. Que aunque tal aprobación no existiese, el hecho, en sí mismo, no está comprendido en los casos previstos por los arts. 202 á 207 del Cód. Pen. Que el querellante no ha probado, ni ha intentado probar, que él hubiera sido defraudado, lo que era una condición esencial para que existiere un delito.—Chauveau Adolphe, tit. 5, pág. 333.—

1<sup>6</sup>. Art. 541 del Cód. de Com.

2. Art. 520 del Cód. de Com. La interpretación que debe darse á este artículo, es que la póliza hace plena fe con respecto al asegurador, del capital existente en el acto del siniestro.

3. La Cám. al resolver esta cuestión dijo: «Los daños y perjuicios alegados por el demandante consistentes en las dificultades que sufrió en su industria y en sus negocios, ni son estimables, ni serían en ningún caso de cargo de la compañía aseguradora. Pero no sucede lo mismo respecto de los gastos necesarios para la conservación de los objetos asegurados que fueron salvados del incendio con avería. El gerente de la compañía ordenó su conservación y cuidado; aunque no lo hubiera ordenado era indispensable hacerlo así, y la circunstancia de haber



gurador del importe de los objetos salvados, le hace pasible de los daños y perjuicios que su conservación cause al asegurado para su avalúo judicial — tom. 4, pág. 5, Ser. 3ª (tom. 39).

4. **Asegurador**—Los daños y perjuicios causados al asegurado por el desconocimiento del valor de las mercaderías salvadas, que haga el asegurador, no pueden ser otros que los necesarios para su conservación — tom. 4, pág. 5, Ser. 3ª (tom. 39).

**Asegurador**—Véase: *Costas*, 11.

1ª. **Asesor de menores** — Aun cuando por error intervenga un asesor de menores, los autos corresponden al que se encontraba en turno — Civ., t. 13, p. 80, Ser. 5ª (t. 60).

**Asientos**—Véase: *Comerciantes*, 1.

**Asistencia**—Véase: *Desistimiento*, 3.

1ª. **Asistencia facultativa**—Reconocida la asistencia facultativa, el número de visitas confesadas estrajudicialmente puede ser probado por testigos—Civ., tom. 17, pág. 400, Serie 5ª (tom. 64).

---

sido rechazado el reclamo del actor, obligaba más todavía á la conservación de tales objetos. A tal punto se ha comprendido así, que después de las repetidas gestiones del asegurado, la compañía ha manifestado su conformidad en su tasación, y exigiendo además que se determinase el valor de tales objetos antes del incendio. Los gastos necesarios para la conservación de esos objetos, son una consecuencia necesaria de la obligación de conservarlos, que debe pesar sobre la compañía aseguradora, muy especialmente porque el asegurador tiene derecho de llevarse los objetos averiados y adquirir su propiedad pagando el seguro ó substituyéndolo por otros nuevos y en las condiciones en que estaban antes del siniestro».

4. Como son el alquiler del local en que se depositan y los gastos de conservación y cuidado de los mismos.

1ª. Porque si un asesor que no está á le turno interviene, y lo hace por error, ese hecho no crea ningún derecho ni obligación. La ley que señala el orden del turno no puede ser alterada por un mero error de hecho.

1ª. Porque el reconocimiento de los servicios prestados importa un principio de prueba por escrito—arts. 138 y 180 del Cód. de Proc.



**Asistencia facultativa**— Véase: *Médico*, 1; *Honorarios*, 20.

**Ataque**—Véase: *Acto ineludible*, 1; *Excepción de legítima defensa*, 1.

1<sup>a</sup>. **Atentado á la autoridad**—Causando lesiones, debe ser penado con año y medio de prisión si las circunstancias se compensan—Crim., tom. 4, pág. 145, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 39).

1<sup>b</sup>. **Atentado con armas**—El atentado con armas á la autoridad debe ser castigado con un año de prisión—Crim., t. 9, pág. 462, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2. **Atentado con armas**—El atentado con armas á la autoridad, causando lesiones, debe ser castigado con dos años de prisión—Crim., tom. 9, pág. 465, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

1<sup>c</sup>. **Atenuación de la pena**—La paralización de la causa por un tiempo que no baste para la prescripción, permite atenuar la pena—Crim., tom. 4, pág. 65, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>d</sup>. **Audiencia**—Las medidas compulsivas contra los tes-

1<sup>a</sup>. Habiéndose cometido por el procesado el delito de atentado á la autoridad con armas y el de lesiones leves, producido con ocasión del primero, corresponde por lo dispuesto en el art. 87 del Cód. Pen. considerar esta segunda infracción como circunstancia agravante de la primera. Por el certificado que enumeraba las entradas policiales del procesado, éste era reincidente en el delito de lesiones, lo que conforme al inc. 20, art. 84 del Cód. Pen., agrava la penalidad. En presencia de la circunstancia atenuante de la ebriedad y las dos agravantes referidas, el Juzgado consideró justo compensarlas, no tomándolas en cuenta para la alteración de la pena en su término medio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52. Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 235, corresponde la pena de un año y medio de prisión.

1<sup>b</sup>. Hubo una circunstancia atenuante por lo que el tribunal fué de opinión de aplicar el mínimum de la pena fijada en el art. 235 del Cód. Pen.

2. El reo cometió dos delitos: el de atentado con armas y desacato á la autoridad. Se le condenó á dos años de prisión de acuerdo con los arts. 234 y 235 del Cód. Pen. y 87 del Cód. de Proc. Crim.

1<sup>c</sup>. De acuerdo con la doctrina del art. 83, inc. 9, del Cód. Pen.

1<sup>d</sup>. Los testigos estaban citados para un día determinado, bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública: no habiendo incurrido



tigos, sólo pueden decretarse el día de la audiencia señalada—Civ., tom. 10, pág. 380, Ser. 5ª (tom. 37).

2. **Audiencia**—Justificada la causal que impidió á la parte concurrir á la audiencia señalada para los testigos debe fijarse nuevo día—Civ., tom. 11, pág. 376, Ser. 5ª (tom. 58).

3. **Audiencia**—Si la causal se hace presente el día y hora de la audiencia, no basta para suspenderla—Civ., tom. 20, pág. 310, Ser. 5ª (tom. 67).

**Audiencia**—Véase: *Desistimiento*, 1; *Querellante*, 4; *Posiciones*, 15; *Escarcelación*, 18.

1ª. **Ausencia**—La ausencia del citado á absolver posiciones suspende el pronunciamiento de la sentencia—Civ., tom. 11, pág. 393, Ser. 5ª (tom. 58).

**Ausencia**—Véase: *Separación de hecho*, 1; *Término*, 14; *Divorcio*, 35; *Domicilio*, 7.

1ª. **Ausencia del citado**—La ausencia del citado á absol-

en desobediencia puesto que la audiencia no se había realizado aun, no procedía hacerse efectivo el apercibimiento decretado.

2. Se justificó con certificado médico que la no comparecencia fué debida á enfermedad, de la esposa de la parte, que le impidió salir de su casa. Como la autenticidad del certificado no fué impugnada se dió por suficiente á los efectos de comprobar la causal alegada. La causal fué desechada por el Juez de 1ª Instancia como insuficiente para excusar la no celebración del acto. Los testigos habían comparecido: si la parte hubiese dejado el interrogatorio en Secretaría su ausencia no habría sido óbice á la declaración del acto. Luego la audiencia no tuvo lugar debido á culpa exclusiva de la parte. La Cám., sin embargo, en su afán de introducir el caos en la jurisprudencia, consideró bastante causal la alegada, y revocó la resolución del Inferior.

1ª. No siendo posible practicar la notificación del que debe absolver posiciones por ignorar las partes la residencia del absolvente, debe esperarse á que esta medida sea factible, pues de lo contrario se infringiría la igualdad de la defensa en juicio. Esta es la jurisprudencia establecida por la Cám. Véase tom. 4, pág. 330, Ser. 2ª, Jur. Civ.; y tom. 9, pág. 374, Ser. 5ª, *id. id.*

1ª. Porque la prueba de posiciones puede ser evacuada hasta la citación para la sentencia. Llegado á ese estado de la causa, si el absolvente no puede ser citado por cualquier motivo se suspende la secuela sin fallarse la causa.



ver posiciones no interrumpe la secuela de la causa—Civ., tom. 9, pág. 374, Ser. 3ª (tom. 56).

1ª. **Ausencia temporal**—Del esposo, no basta para conceder venia á la esposa para un acto determinado—Civ., tom. 16, pág. 355, Ser. 5ª (tom. 63).

1ª. **Ausentes**—Sólo se consideran incapaces los ausentes declarados tales con presunción de fallecimiento—Com., t. 9, pág. 341, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Ausentes**—El Ministerio de Menores no es parte en los juicios seguidos contra ausentes representados por el Defensor—tom. 9, pág. 341, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Ausentes**—Sólo debe darse intervención al defensor de ausentes después de reconocida la firma en rebeldía.—Com., tom. 5, pág. 235, Ser. 5ª (tom. 40).

4. **Ausentes**—No deben llamarse autos en tanto comparezca el ausente que debe absolver posiciones—Civ., tom. 10, pág. 363, Ser. 5ª (tom. 57).

1ª. Porque si está ausente bien puede dar poder para que se le represente durante su ausencia. La ausencia temporaria alegada era por causas políticas.

1ª. En contra. Véase Inst., tom. 1º, verb. *Ausente*, núm. 231. Puede verse asimismo el tom. 2º, verb. *Ausente*, núm. 2, en cuya nota impugnamos la doctrina hasta entonces triunfante, hoy derogada, siguiendo nuestra opinión. En el caso que nos ocupa triunfó el sano principio gracias á una luminosa vista del Fiscal de la Cám., doctor Marengo, cuya erudita esposición consigna los principales fundamentos aducidos por nosotros en la nota del verb. *Ausente*, núm. 2, del tom. 2º de la Inst. El doctor Marengo amplía en parte la argumentación producida por nosotros: y así cita á Laurent, tom. 1º, parágrafo 116; Aubry y Rau, tom. 1, parágrafo 147; Marcadé, tom. 4, pág. 222. Puede verse asimismo Inst., tom. 6, verb. *Ausentes*, núms. 3 y 4; y tom. 7, verb. *Ausente con presunción de fallecimiento*, núms. 2 y 3.

2. Véase la nota precedente.

3. Y aun después de reconocida no procede su intervención, se ha dicho en otro caso. — Véase Inst., tom. 7, verb. *Defensor de ausentes*, núm. 3.—La nota de este verb. puede consultarse como fundamento de la resolución contenida en el sumario.

4. De acuerdo con la jurisprudencia. Véase verb. *Ausencia del citado*, 1; y *Ausencia*, núm. 1.





**Ausentes**—Véase: *Mandamiento*, 3; *Domicilio*, 7.

1<sup>a</sup>. **Autenticación**—El reconocimiento de la firma del causante por el representante de los herederos, con poder bastante hace innecesaria su autenticación—Civ., tom. 10, pág. 405, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 57).

**Autenticación**—Véase: *Contrato*, 36; *Quiebra*, 4.

1<sup>b</sup>. **Autenticación de documentos**—En los juicios de divorcio no procede reconocimiento ni autenticación de documentos emanados de los esposos—Civ., tom. 9, pág. 363, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

1<sup>c</sup>. **Autenticidad**—El dictamen de peritos calígrafos sobre la autenticidad de la firma del causante, y la compulsa de los libros del Banco forman prueba plena para responsabilizar á la testamentaria—Civ., tom. 11, pág. 181, Ser. 5<sup>a</sup> (l. 58).

2. **Autenticidad**—La autenticidad del documento en que se funda la demanda puede justificarse por medio de testigos—Civ., tom. 11, pág. 310, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

**Autenticidad**—Véase: *Documento al portador*, 4; *Acred-*

1<sup>a</sup>. El apoderado de todos los herederos reconoció como auténtica la firma del causante y pidió que se tuviese por reconocido el crédito para ser abonado con los primeros fondos que entraran. En consecuencia la prosecución de los trámites para obtener su autenticación fué considerado innecesario.

1<sup>b</sup>. El art. 70 de la Ley de Mat. parece así establecerlo y la Cám. en el caso del sumario así lo interpretó al resolver el punto. Sin embargo, está en el espíritu y en la letra de esta Ley que tanto el reconocimiento de cartas como la confesión de los cónyuges son elementos de prueba que deben tomarse en consideración en esta clase de juicios.—Véase Inst., tom. 8, verb. *Divorcio*, núms. 6<sup>b</sup> y 14<sup>b</sup>. Cuando la ley ha exceptuado la confesión ó el juramento de los cónyuges de los medios probatorios admisibles en estos juicios, no ha proscripto esa prueba de una manera absoluta, sino que se ha establecido para evitar que el divorcio se declare por mutuo consentimiento de los esposos.

1<sup>c</sup>. Art. 178 del Cód. de Proc. y 63 del Cód. de Com.

2. La prueba testimonial es suficiente medio probatorio para acreditar la autenticidad de documentos, pues así lo preceptúa el codificador para los más importantes actos, admitiendo como supletoria el coitejo de letras—nota del art. 1033 del Cód. Civ., y ley 119, tít. 18, Part. 3<sup>a</sup>.



*dores*, 1; *Cotejo de firmas*, 1; *Boleto de compraventa*, 2; *Firma*, 9 y 12; *Boleto privado*, 3.

1<sup>a</sup>. **Auto**—El que deniega diligencias antes de contestar la acusación, es inapelable—Crim., tom. 2, pág. 82, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 37).

2. **Auto**—El auto que ordena se practique una liquidación es inapelable—Com., tom. 2, pág. 91, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 37).

**Auto**—Véase: *Abogado*, 1; *Comerciante*, 2; *Ausentes*, 4; *Demanda contestada en rebeldía*, 1; *Demanda ordinaria*, 1; *Concurso*, 4; *Escarcelación*, 8; *Embargo*, 4; *Inapelable*, 2; *Quiebra*, 5; *Aclaración*, 1; *Arbitros*, 2; *Escep. de incompetencia*, 4; *Pensión alimenticia*, 1; *Depositario*, 8; *Escrito*, 2; *Recusación*, 7; *Apelación*, 5; *Nulidad*, 14, 17; *Apoderado*, 4; *De oficio*, 5; *Liquidación*, 5; *Oblación de precio*, 1; *Obligación*, 7.

1. **Auto absolutorio**—El lesionado que no querrela, no puede apelar del auto absolutorio — Crim., t. 9, pág. 84, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

1<sup>b</sup>. **Auto apelable** — El que deniega medidas probatorias es apelable—Civ., tom. 9, pág. 324, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

2. **Auto apelable**—Para el ejecutante todos los autos son apelables en el juicio ejecutivo—Civ., tom. 10, pág. 421, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 57).

3. **Auto apelable**—El auto que manda devolver el alegato es apelable—Civ., tom. 14, pág. 106, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 61).

1<sup>a</sup>. Porque antes de contestar la acusación no pueden pedirse ni ordenarse medidas probatorias.

2. Porque no está comprendido entre los autos espresamente declarados apelables—art. 505 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>. Todo auto en que se admita ó deniega una diligencia de prueba causa gravamen irreparable para uno ú otro de los litigantes.

2. Porque la inapelabilidad de los autos en estos juicios ha sido establecida en beneficio del acreedor, siendo evidente que él puede renunciar á ese beneficio. Esta es la jurisprudencia constantemente establecida por la Cám. Véase Inst., tom. 8, verb. *Auto inapelable*, 2, y *Apelable*, 1.

3. Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos. La minoría sostuvo la tesis contraria fundándose en que el alegato no es una formali-



**Auto apelable**—Véase: *Poseción del propietario*, 1; *Apelable*, 3; *Interdicto*, 3.

**Auto definitivo**—Véase: *Notificación*, 7; *Revocatoria*, 1.

1ª. **Auto de quiebra**—Procede su revocatoria si antes de consentido, el deudor paga al acreedor ejecutante— Com., tom. 1, pág. 97, Ser. 5ª (tom. 36).

**Auto de quiebra**—Véase: *Quiebra*, 6, 7 y 8; *Incapacidad*, 2.

1ª. **Auto inapelable**—El auto que desecha los escritos del ejecutado por no tener domicilio constituido, es inapelable— Com., tom. 4, pág. 304, Ser. 5ª (tom. 39).

2. **Auto inapelable**—Los autos para mejor proveer son

dad ó trámite indispensable en el juicio, de tal manera que los litigantes pudieran considerarse agraviados de una manera irreparable en sus derechos por el hecho de ser privados de la presentación de ese escrito. Por último se alegó asimismo la jurisprudencia sentada por la Cám. en los casos que corren publicados en el tom. 5, pág. 381, serie 1ª; tom. 6, pág. 483, serie 2ª. La mayoría cuyo voto triunfó en el caso del sumario dijo que es indiscutible el derecho de los litigantes para exigir que en los debates judiciales se les coloque en pie de perfecta igualdad, lo que no sucedería si alguno de ellos pudiera ser privado del ejercicio de la facultad acordada en el art. 213 del Cód. de Proc., que autoriza la presentación de escritos alegando sobre el mérito de la prueba. Si bien ese escrito no es esencial en el juicio, no puede desconocerse que es un medio de defensa importante, como que ofrece á las partes la oportunidad de ampliar los razonamientos de la demanda ó de la contestación, de fijar la atención del juez sobre el valor de la prueba rendida y de aducir las consideraciones de derecho que el pleito totalmente sustentado puede sugerirle. Bajo este punto de vista, es indudable que el auto por el cual se deniega la agregación del alegato, causa gravamen.

1ª. El acreedor se presentó en tiempo y forma pidiendo revocatoria del auto de quiebra, dando explicaciones sobre el estado de sus negocios y oblando la cantidad adeudada al acreedor que solicitó su quiebra. Las partes renunciaron á las pruebas, dándose así por aceptadas las explicaciones dadas por el deudor y sin que se hubiese presentado ningún otro acreedor.

1ª. Si no constituye domicilio legal, la parte no debe ser oída, art. 11 del Cód. de Proc. En tal caso el escrito debe ser devuelto y esa providencia no es apelable, art. 505 del Cód. de Proc.

2. A este respecto se puede decir que hay jurisprudencia contradic-



inapelables—Civ., tom. 14, pág. 273, Ser. 5ª (tom. 61).

**Auto inapelable**—Véase: *Habilitación de horas*, 1; *Prueba*, 10 y 20; *Papel sellado*, 1; *Transacción*, 4; *Inapelable*, 1, 5 y 6.

1ª. **Autor**—De la publicación, al editor del diario le basta indicar el nombre y domicilio del autor de la publicación acusada; no está obligado á justificar su aserto—Crim., tom. 9, pág. 37, Ser. 3ª (tom. 25).

**Autor**—Véase: *Cómplice*, 1; *Homicidio*, 2; *Cómplice*, 2; *Sumario*, 1.

**Autoridad**—Véase: *Atentado con armas*, 1 y 2; *Abuso de autoridad*, 1 y 2; *Diligencia de prueba* 5.

1ª. **Autorización**—Para justificar la autorización de firmar á ruego, procede la prueba testimonial cualquier que sea el valor del contrato ú obligación—Civ., tom. 12, página 224, Ser. 5ª (tom. 59).

**Aval**—Véase: *Escusación*, 2.

1. **Avaluación**—Si por la clase y número de los objetos hurtados su valor resulta evidente, la falta de avaluación no basta para modificar la sentencia—Crim., tom. 9, pág. 250, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Avaluación**—Si el juez de instrucción y el de sentencia omitieron el avalúo de los objetos hurtados, la Cámara

toria, pero se puede afirmar que ella se inclina en el sentido del sumario. Esa jurisprudencia es equivocada como hemos tratado de demostrarlo en otros casos. Véase *Inst.*, tom. 8, verb. *Inapelable*, n° 2; tom. 7, verb. *Diligencias de prueba*, 10; tom. 3, verb. *Auto inapelable*, 1; y tom. 4, verb. *Mejor proveer*, 1.

1ª. El editor de un diario sólo está obligado á dar el nombre y domicilio de la persona autora de la publicación acusada. Mientras no se niegue la existencia real de esa persona, ó ésta una vez citada, no desconozca la verdad de la declaración hecha por el editor, éste no está obligado á tomar parte en el juicio y demostrar la exactitud de su declaración.

1ª. En el caso no son de aplicación los arts. 1191 y 1193 del Cód. Civ. por cuanto se trata aquí de un contrato escrito.

puede fijar su valor aproximado por las constancias del expediente—Crim., tom. 9, pág. 477, Ser. 3ª (tom. 25).

**Avaluo judicial**—Véase: *Asegurador*, 3.

**Avisos**—Véase: *Comprador*, 1; *Interdicto de retener*, 1; *Remate judicial*, 14.





**Banco**—Véase: *Cheque*, 1; *Escusación*, 8.

1. **Banco Hipotecario Nacional**—Puede vender directamente los bienes afectados, aun cuando el deudor haya sido declarado en quiebra—Com., tom. 3, p. 5, Ser. 5ª (tom. 38).

1. La ley org. de 24 de Set. de 1886, faculta á este establecimiento para proceder por sí y sin forma de juicio, á la venta de los bienes hipotecados en caso de falta de pago, en los términos que previenen los arts. 46, 50 y 51. Por el art. 53 se le faculta así mismo para aplicar el producto de la venta al pago de lo que se le adeude por capital, intereses, comisión y gastos, debiendo, si hubiese sobrante, entregarlo al deudor ó sus sucesores declarados en juicio, ó colocarlo en el Banco á premio por cuenta de su dueño, si no se presentase á recibirlo. Según los términos del art. 65, «los jueces bajo ningún pretexto» podrán suspender ó trabar el procedimiento del Banco para la venta en remate de las propiedades hipotecadas, á menos que se tratase de tercera de dominio. Disposición tan clara, explícita y prohibitiva, no supone otra excepción sino la que ella misma determina, y debe ser extensiva, por lo tanto aún á los casos que por fallecimiento del deudor, ó por su quiebra, ó cesión de bienes, se hubiese iniciado juicio sucesorio ó de concurso de acreedores, tanto más, cuanto que el art. 53 citado, prevé el caso en que el deudor no exista ó se halle incapacitado para recibir el sobrante que pudiera resultar á su favor, y manda que en tal caso, sea entregado á sus sucesores declarados en juicio. Las prescripciones de los arts. 1381 y 1387 del Cód. de Com., que declaran la universalidad del juicio de quiebra, no pueden primar sobre las disposiciones citadas de la ley org. á pesar del carácter de orden público que se le puede atribuir á aquéllos, porque si es cierto que las convenciones de los particulares no pueden dejar sin efecto leyes de esa naturaleza, arts. 5 y 24, Cód. Civ.; ley 45, D. de Reg. juris, también lo es que ellas como todas las leyes, son



1. **Bienes**—El pedido de moratorias suspende la ejecución de bienes, pero no la tramitación de las ejecuciones—Com., tom. 3, pág. 374, Serie 5ª (tom. 38).

2. **Bienes**—No es necesaria la existencia de bienes embargados para la citación de remate—Com., tom. 4, pág. 249, Ser. 5ª (tom. 39).

3. **Bienes**—Indebidamente tasados por los peritos no pueden obligar el concurso para el pago de honorarios—Com., tom. 4, pág. 263, Ser. 5ª (tom. 39).

---

derogables por las especiales, pues la regla es que en la colisión de una ley general con una especial, debe tener prelación la especial en los casos que ella comprende: *in toto jure, generi per speciem derogatur; et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.*—L. 80, Dig. de juris. -- La facultad del Banco para proceder, según lo dispuesto en los arts. 50, 51 y 53 citados, facultad que el deudor debe reconocer en la escritura de préstamo, no nace del contrato sino de la ley, única que podría crear tal privilegio—art. 3876, Cód. Civ.—y siendo especial la ley que la acuerda, debe prevalecer, según la regla recordada, sobre los preceptos generales del Cód. de Com.—*lex quae specialiter disponit in caso de quo agitur,*—dice Pothier; *proccedit legi quae generalem regulam continet,* Pandectar Justinianae, L. 50, tit. 17, núm. LXXVII.

1. Si bien puede ordenarse la suspensión de los procedimientos ejecutivos después de presentada la petición de moratorias—art. 1586, Cód. de Com.,—tal medida no puede privar a los acreedores de ejercer derechos meramente conservatorios, como ser embargos de bienes, que responden sólo al propósito de obtener una garantía, mientras dura el juicio de moratorias, y no al de hacer efectivo inmediatamente el cobro del crédito.

2. Es hoy jurisprudencia constante establecida tanto en la Cám. Civ. como en la Com. La jurisprudencia anterior era contraria al sumario.—Véase Inst., tom. 8, verb. *Bienes embargados*, 4 y 6; tom. 7, mismo verb. núms. 8 y 9; *Citación de remate*, 1 y 2; tom. 6, verb. *Bienes embargados*, 3 y 7; *Citación de remate*, 2.

3. El que gestionaba el cobro de sus honorarios, había tasado en unión con otra persona las existencias del negocio de una casa fallida: al practicar esa tasación tasó también un terreno, que resultó no pertenecer al concurso. No constaba que el interesado hubiera sido nombrado para tasar dichos bienes, ni constaba que hubiere aceptado el cargo en legal forma. El apoderado del síndico había obtenido autorización para practicar el inventario y avalúo de las existencias de la casa sin comprender el terreno tasado. Esta tasación no correspondía practicarse



4. **Bienes**—La substracción de bienes pertenecientes á la sociedad puede constituir delito y debe, en consecuencia, formarse sumario por querrela del socio — Crim., tom. 4.º, pág. 322, Ser. 3.ª (tom. 39).

5. **Bienes**—Los bienes adquiridos por el viudo por la

porque el inmueble no pertenecía al concurso y porque aún perteneciendo á él, no correspondía ser tasado en aquel estado del juicio. Sólo se regularon los honorarios por el avalúo del negocio, como había sido ordenado.

4. La Cám. tomó como fundamento el dictamen del fiscal Dr. Segovia, quien dijo que «debía iniciarse y adelantarse en el sumario, porque de él aparecerá si existe realmente un hurto de cosa común ó la defraudación ó apropiación indebida prevista en el art. 203, inc. 6.º del Cód. Pen. Por los simples datos de la querrela no es posible averiguarlo y de aquí la necesidad de tomar declaración al querrellado y practicar las demás diligencias del caso antes de pronunciarse sobre la existencia ó inexistencia de un delito en el hecho denunciado.»

5. Esta es una cuestión completamente nueva en nuestros tribunales por cuyos motivos trataremos de relatarla con la escrupulosidad posible. Don A. P. Z., fué casado en primeras nupcias con doña M. L. A., de cuyo matrimonio nacieron dos hijos: don Pedro Agustín y don Carlos Enrique. Por fallecimiento de la señora de Z., sus dos hijos heredaron dos casas. Pero después falleció el menor don Carlos Enrique, y su padre, viudo, fué declarado su único heredero adjudicándosele la casa que había heredado de su señora madre; la que á su vez la hubo por herencia de sus padres. En 1889, después de terminado el juicio testamentario del menor don Carlos Enrique, su padre pasó á segundas nupcias. Durante esta segunda unión conyugal, el padre fué demandado por cobro de un crédito comercial, y en el correspondiente juicio ejecutivo se trabó embargo sobre la casa que heredó del hijo, denunciada por el acreedor ejecutante como del deudor ejecutado. Cuando estaba para venderse este inmueble, el menor sobreviviente dedujo tercera de dominio excluyente, pidiendo que se declarase que ese bien, por razón de las segundas nupcias del padre, había dejado de ser de propiedad de éste para serlo del hijo en virtud de la disposición del art. 237 del Cód. Civ., y que no pudo trabarse embargo en ella, por ser el ejecutado solamente un usufructuario de la finca, cuya propiedad había pasado al menor. Como se ve se trataba de la interpretación ó de la explicación del citado art. 237 del Cód. Civ., que ha pasado en iguales términos al 115 de la ley de matr. civ. vigente. Ese artículo dispone: «que el viudo ó viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio pase á ulteriores nupcias, está obligado á reservar á los hijos del primer matrimonio ó á sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que





## herencia de los hijos del primer matrimonio, no son ejecu-

por testamento ó ab-intestado hubiese heredado de alguno de ellos, conservando sólo durante su vida el usufructo de dichos bienes». En virtud de esta disposición, por el hecho de contraer un segundo matrimonio, pierde el viudo la propiedad de los bienes, y conserva solamente el usufructo. Desde que es usufructuario, es evidente que no es propietario, puesto que el usufructo es «el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece á otro»—art. 2807 del Cód. Civ.—, y la consolidación, es decir, la reunión de la propiedad y del usufructo en una misma persona lo extingue según derecho—art. 2928, Cód. Civ.— El usufructo establecido por el art. 237, se rige por los principios generales de todo usufructo—art. 2816, Cód. Civ.—y por lo tanto, es esencial en él que el usufructuario no puede ser el nudo propietario de la cosa usufructuada. Desde luego, habiendo establecido el Código que el cónyuge viudo tendrá solamente el usufructo de los bienes reservables, es evidente que la mera propiedad pasa, en el caso previsto y desde ese mismo momento, á los hijos del primer matrimonio. Se argumenta que lo dispuesto por el Cód. no establece sino una obligación de parte del padre de reservar ciertos bienes, obligación personal y que sólo sería exigible á su muerte. Se olvida, para sostener esta doctrina, la naturaleza del usufructo y los derechos que él crea. El usufructo es un derecho real—art. 2807, Cód. Civ.,—cuya condición esencial es que afecta una cosa ajena, *nemini sua res servit*; el usufructuario no tiene la propiedad de la cosa sujeta al usufructo—art. 2810, Cód. Civ.,— y ésta corresponde al nudo propietario que, como tal, tiene en ella un derecho real y perfecto—arts. 2916 y 2917—limitados tan solamente por los derechos del usufructuario. Y estos derechos reales nacen por ministerio de la ley, arts. 2816 y 237, desde el momento en que se produce el hecho que los motiva, el segundo matrimonio del causante, y continúan en esa forma hasta que extinguido el usufructo se reúne á la propiedad; solamente se hace entonces dueño absoluto de la cosa. Estos principios jurídicos del Cód. Civ. son los mismos que siempre han regido en nuestra legislación. Por el derecho romano se establecía la usuabilidad de bienes por las Novelas 2, tit. 26 y 98, cap. 1º; y respecto del usufructo y de las relaciones entre el nudo propietario y el usufructuario, no pueden ser más explícitas las disposiciones de las Instituciones de Justiniano: *Jus alienis rebus utendi*, se definía el usufructo — l. 2ª, tit. 4º, — y para demostrar que el nudo propietario es el que tiene únicamente la propiedad durante el usufructo, basta recordar las últimas palabras de ese título: *Cum autem finitus fuerit usufructus revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudo proprietates dominus incipit plenam in re habere potestatem*. En el derecho español las leyes 26, tit. 13, part. 5ª; 23, tit. 11, part. 4ª, y la conocida ley 15 de Toro, han sancionado la misma doctrina sobre los bienes reservables, y sobre el usufructo, legislan en

## tables por obligaciones nacidas después de contraer segun-

idéntico sentido en otras leyes, 20 y 22, tit. 31, part. 3ª, prescribiendo la segunda como debe cuidar la cosa el usufructuario «de manera que finque salva é segura é sin embargo á *aquel cuya es*». La jurisprudencia de los tribunales españoles no sólo ha consagrado estos principios, sino que ha declarado que las enajenaciones hechas, por un viudo, de los bienes reservables, sólo serían válidas mientras no incurriese en el caso de la ley, porque si después de hacerlo se casase, adquirirían á su muerte los hijos el pleno dominio de los bienes reservables y el derecho para ejercitar, las acciones á él consiguientes, contra sus poseedores. —Escríbe, anotado por Caravantes, vol. 2, pág. 102—. Los que impugnaron esta doctrina alegan: 1º, que el dominio de los muebles reservables no pasa á los hijos del primer matrimonio ó á sus descendientes legítimos sino después de la muerte del padre ó madre que contrajo nuevas nupcias; 2º, que la ley que establece las reservas, sólo impone al cónyuge viudo una obligación para hacerse efectiva después de su muerte; 3º, que el hijo ó sus descendientes legítimos no tienen acción alguna por razón de los bienes reservables durante la vida del padre, pues las disposiciones sobre ellos pertenecen al derecho de las sucesiones y sólo pueden hacerse efectivas cuando éstas se abran. La primera proposición es inexacta. Las segundas nupcias modifican substancialmente los derechos del cónyuge que las contrae con relación á los bienes que hubiese heredado de los hijos del primer matrimonio, y producen *ipso facto é ipso jure*, la desmembración del dominio, convirtiendo á aquél de propietario que era en mero usufructuario. La verdad de ello se demuestra por los propios términos del art. 237, Cód. Civ., y por los precedentes legales de ese precepto, tanto de nuestra antigua legislación como de la romana. Por los términos de ese artículo, porque según ellos, desde que se celebra el segundo matrimonio el cónyuge viudo queda obligado á reservar la propiedad á los hijos del primer matrimonio, ó á sus descendientes legítimos y él se convierte en simple usufructuario conservando sólo durante su vida el usufructo de dichos bienes, dice el artículo. Si conserva sólo el usufructo, pierde el dominio, porque si éste continuara incorporado á su patrimonio, no conservaría sólo el usufructo. Se ha dicho que según los precedentes de nuestra antigua legislación y de las leyes romanas que ella siguió también, perdía el cónyuge viudo el dominio de los bienes por el hecho de las segundas nupcias, y lo prueban las leyes 3 y 5, § 2, y 6, § 3, tit. 9, lib. 5ª, Código Romano; y 26, tit. 13, part. 5ª. «Empieza la obligación de reservar, dice Gutierrez Fernández, desde que marido y mujer contraigan segundas nupcias», y en seguida agrega: «Los efectos de esta reserva son los siguientes: 1º, el perder el cónyuge sobreviviente la propiedad de los bienes, quedándose sólo en la clase de usufructuario». En tal sentido hemos visto espresarse las leyes que hablan de esta obligación: «el con-





das nupcias, pues el heredero forzoso adquiere el dominio

yuge, dueño antes de casarse, desde que se casa, pierde así el dominio, teniendo solamente el uso».—Códigos, lib. 3º, cap. 6, § final, art. 4º.—El mismo autor cita más adelante dos sentencias del Tribunal Supremo de España, para corroborar con la jurisprudencia la inteligencia dada á las leyes de su país, que fueron también nuestras. Los anotadores de las partidas Sanponts y Barbá, Martín de Eixcalá y Ferrer y Subirana se espresan en igual sentido «de los bienes sujetos á reservas pierde la propiedad el cónyuge que pasa á segundo matrimonio, cuya propiedad adquieren al momento los hijos del primero: dicho cónyuge retiene únicamente el usufructo» y citan en apoyo de su aserto la ley 3, Cód. de Secund. Nupt. y Nov. 2, cap. 2. También Ant. Gomez en el Comentario á la ley 15 de Toro, sostiene esa tesis. Pero no es sólo por los términos del art. 237, Cód. Civ., por la naturaleza y esencia del usufructo, y por precedentes de nuestra ley actual, que se demuestra el error de la proposición principal, y la verdad de lo contrario. Los efectos de la muerte del cónyuge viudo ó la de sus hijos del primer matrimonio, son elementos no menos eficaces de demostración, porque si ocurre lo primero, los hijos no heredan al padre en los bienes reservables, sino que el usufructo se extingue por su fallecimiento y el dominio pleno comienza en el hijo, no por herencia, porque el usufructo no es transmisible por tal título (art. 2920), sino por derecho propio, por consolidación de aquel derecho con el de la nuda propiedad. Si ocurre lo segundo, se realiza lo inverso; la obligación de la reserva desaparece al punto, y la nuda propiedad se consolida en el usufructuario, pero tampoco por herencia, sino por consolidación: consolidación del dominio en el primer caso, consolidación del usufructo en el segundo—arts. 2928 y 2929—. Glosando, Gregorio López, las palabras de la ley 26, tit. 13, part. 5ª, en las que se declara que «las arras é las donaciones que el marido finado le viesse dado á—la mujer que contrae nuevo matrimonio—, en salvo fincan á sus hijos» la explica así: «y las adquieren los hijos como preferidos á la madre y no en calidad de herederos de ella; de ahí es que no se imputan á la legítima materna». Se arguye así mismo que el dominio no puede adquirirse según nuestro Cód., sino por los medios establecidos por la ley, siendo indispensable la tradición de la cosa, tradición que los hijos no pueden obtener sino después de la muerte de su padre ó madre; pero á ello debe observarse, que si bien esa es la regla general, la excepción no la deroga ni es inconciliable con ella. También en la legislación romana y española, regía el mismo principio, y sin embargo, en la sucesión en línea recta descendente y la de los bienes reservables, no tenía aplicación *traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferentur*, decía la ley 20 citada de Part., en tanto que la ley 23 D, de ad. vel. admit. possess. prescribía: *Cum heredis instituti sumus adita hereditate omnia quidem jura ad nos transeunt*. Las disposiciones relati-

desde la verificación del segundo matrimonio — Com., t. 5, pág. 73, Ser. 5ª (tom. 40).

vas á los bienes reservables han sido citadas anteriormente, y esos mismos principios y escepciones han pasado á nuestra legislación actual, según puede verse en los arts. 577, 3410 y 3420. Por lo demás, el Código ha declarado espresamente que los derechos reales se adquieren y se pierden según las disposiciones del mismo relativas á los hechos ó á los actos por medio de los cuales se hace la adquisición ó se causa la pérdida de ellos—art. 2503—, y uno de esos hechos ó actos son las segundas nupcias, en cuanto afecta á los bienes que el cónyuge que las contrae hubiese heredado de alguno de los hijos de su primer matrimonio, según resulta de los arts. 237 y 2816. Se sostiene así mismo que la ley que establece las reservas, sólo impone al cónyuge viudo, una obligación para hacerse efectiva después de su muerte, pero tal proposición no es menos inexacta. La obligación existe, nace de la ley, pero precisamente existe durante la vida del cónyuge y cesa con ella; no es una obligación que deba cumplirse después de la muerte del obligado, sino que es lo contrario lo que dispone la ley; la obligación *cesa*, dice el art. 237, y si en vez de morir primero los hijos ó descendientes en cuyo beneficio han sido conservadas las reservas, según nuestro Cód., muere el padre ó madre obligados á reservar, la obligación *cesa también* por confusión—art. 862, Cód. Civ.—la confusión respecto de las obligaciones personales y la consolidación respecto á los derechos reales de propiedad y usufructo, son los medios legales que ponen término á aquellos y á la desmembración del dominio que surge del segundo matrimonio. Por último se sostiene, como otro de los principales fundamentos, que el hijo ó sus descendientes legítimos no tienen acción ninguna por razón de los bienes reservables durante la vida del padre, pues las disposiciones sobre ellos, pertenecen al derecho de las sucesiones y sólo pueden hacerse efectivas cuando éstas se abran. Es exacto que las leyes sobre bienes reservables corresponden al derecho sobre sucesiones, puesto que es sólo después de la muerte del cónyuge que contrajo nuevas nupcias ó la de sus hijos ó descendientes del primer matrimonio, que los derechos de aquéllos ó de éstos quedan irrevocablemente determinados; pero no lo es que sólo después de la muerte del padre ó madre tengan los hijos acción sobre dichos bienes. Demostrado como queda que el cónyuge viudo es mero usufructuario, y que la nuda propiedad reside en los hijos, desde que aquéllos contraen nuevas nupcias, queda por lo mismo demostrado que éstos tienen todas las acciones que nacen del dominio compatible con sus obligaciones, y así lo dispone el art. 2916, Cód. Civ., entre ellos se le reconoce espresamente el de ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa—art. 2917—, y no puede serle desconocido el de deducir tercería de dominio para oponerse á la enajenación de los bienes y reclamar el levantamiento del embargo en cuanto afecte sus derechos, ó sea á la nuda propiedad de





## 6. Bienes — Es procedente la escepción de incompetencia

dichos bienes, que es á lo que el tercerista limitó sus pretensiones.

6. Esta cuestión ha sido resuelta en el sentido más contradictorio imaginable por nuestros tribunales. Los que sostienen la doctrina contenida en el sumario dicen que el punto capital de la cuestión está reducido á determinar si la acción que se ejerce en la ejecución de una hipoteca es real ó personal, puesto que si es personal corresponde su conocimiento al juez del domicilio, y si es real al de la situación de los bienes, como lo establece el art. 4º del Cód. de Proc. En efecto; la base de la ejecución es la hipoteca, la ejecución misma no tiende sino á procurar el cobro del crédito con la venta de las propiedades hipotecadas, es decir, que se trata de hacer efectiva la garantía hipotecaria, y no de reclamar simplemente el crédito, con independencia de esta garantía. Es indudable que la hipoteca es un derecho real, porque así lo establecen terminantemente los arts. 2503, inc. 5º, y 3108 del Cód. Civ., con sus notas explicativas. Laurent, en el tom. 6, núms. 72 á 77, luego de establecer las diferencias entre derecho real y derecho personal, dice en la pág. 96: «Las acciones no son otra cosa que los derechos ejercidos en juicio, tienen, pues, los mismos caracteres que los derechos de donde nacen, ó para mejor decir, con los cuales se confunden.» El mismo autor en el tom. 30, núm. 173, tratando de la hipoteca, dice: «que lo que caracteriza á los derechos reales y personales, es que los primeros son absolutos y se ejercen sobre la cosa ó contra la cosa en cualquier mano en que ella se encuentre, mientras que los personales suponen un acreedor que tiene acción contra la persona. Que el derecho del acreedor hipotecario se realiza por la venta forzosa del inmueble, que está afectado á su crédito, teniendo preferencia sobre su precio á los otros acreedores. Que este es el fin de la hipoteca y su efecto esencial». Los caracteres de la acción real, dice el *Diccionario enciclopédico hispano-americano*. V. *Acciones reales*, nacen de los del derecho que la origina. Cuando el derecho es independiente de toda relación personal y se le puede ejercitar sin consideración á los actos de los demás hombres, la acción para hacerlo valer en juicio es real. Los derechos reales reconocen por fundamento la cosa; no hay persona obligada, pero todos tienen obligación de respetarlos y reconocerlos, y contra todos los que los desconozcan ó detenten se les puede reclamar en juicio. Se establece entre el hombre y la cosa una relación directa, sin intermediarios, sin actos de los demás hombres. *Los medios de hacer efectivos estos derechos por la vía judicial, es lo que llamamos acciones reales.*» Reus, dice, en el tom. 1, pág. 57, de su obra sobre procedimientos: «*Acción real* es la que nace de algunos de los derechos que llamamos reales; esto es, del dominio... prenda ó hipoteca.» En análogo sentido se expresa Carvantes en el tom. 1, pág. 242 de su *Tratado sobre enjuiciamiento*. El doctor Llerena, comentando el art. 2756 del Cód. Civ., dice:

si los bienes hipotecados se encuentran fuera de la jurisdic-

«*Todo derecho real se reclama por medio de una acción real. Todos los derechos reales de que habla el art. 2503, pueden dar lugar á acciones reales.*» Los sostenedores de esta doctrina dicen, apurando la tesis, que el Cód. Civ., en el tit. 11 del lib. 3º, define lo que debe entenderse por acciones reales, que son la reivindicación, la acción confesoria y la negatoria, y no tratándose en la ejecución hipotecaria de ejercitar ninguna de ellas, es evidente que la acción no es real. Basta observar, á este respecto, que las acciones á que se hace referencia son las que nacen del derecho de propiedad, como espresamente hace constar el art. 2757, del Cód. Civ., mientras que en el caso del sumario, se trataba de hacer efectivo el derecho real de hipoteca ejercitando la correspondiente acción hipotecaria, no siendo tampoco extrañas á este derecho real de hipoteca, las acciones confesoria y negatoria en los casos que indican los arts. 2796, inc. final, con su nota explicativa del doctor Segovia y el art. 2801 del Cód. Civ. Por consiguiente, si la hipoteca es un derecho real y se trata de hacerla efectiva, es evidente que no puede instaurarse sino la acción real correspondiente. Y en tal virtud, cuando se ejercitan acciones reales sobre inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto en el inc. 1º del art. 4º del Cód. de Proc., es juez competente el del lugar donde están situados los bienes. Es indudable que el derecho de hipoteca es un derecho real, como terminantemente lo establece el art. 2503, inc. 3º, Cód. Civ. Es de doctrina corriente que á todo derecho real corresponde una acción también real. En el derecho personal, *jus ad rem*,—relación de persona á persona,—la acción es necesariamente real. Cuando el sujeto activo de un derecho real busca hacerlo efectivo ante la justicia, iniciando el procedimiento del caso, ejercita, á no dudarlo, una acción real por su naturaleza. En efecto, Mackeldey, en su *Tratado de derecho romano*, párrafo 202, enseña: que acción real es la que se deriva de la propiedad y de los derechos reales. El jurisconsulto Ortolán sustenta el mismo principio en su *Generalización del Derecho Romano*, núm. 97, aduciendo gran acopio de consideraciones que evidencian su exactitud. Escribhe define la acción real, diciendo: que es la que nace de algunos de los derechos llamados reales, esto es, del dominio pleno, ó de la prenda é hipoteca, verb. *Acción real*. El derecho de hipoteca es real; luego, la acción en virtud de la cual lo hace valer el actor, es también real. Los sostenedores de la doctrina contraria argumentan diciendo que la ejecución de un préstamo garantido con hipoteca es una acción eminentemente personal porque se demanda la devolución de una cantidad entregada—art. 2240, Cód. Civ.—Las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, y basta decir que el juicio ejecutivo sólo tiene por objeto obtener el pago de una suma de dinero para comprender que en esta clase de



ción del Juzgado — Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 5ª (tom. 57).

juicios no se trata de obtener la declaración judicial de la existencia, plenitud y libertad de ningún derecho real. Si efectivamente se ejercitase una acción real, tendríamos que una vez vendida la cosa hipotecada habría concluido el derecho del acreedor por más que el precio obtenido no alcanzase á cubrir el crédito reclamado, lo que es inadmisibles. La hipoteca es un accesorio que garante la obligación principal, y el acreedor la estipula para asegurar el pago de su crédito. Es exacto que la hipoteca es un derecho real—art. 2503, inc. 3º, Cód. Civ.—y es exacto también que á todo derecho real corresponde una acción real; pero en la ejecución de un crédito hipotecario no se trata de hacer declarar la existencia, plenitud y libertad de la hipoteca; tal derecho no se niega, ni se observa por ningún deudor hipotecario: la prueba más acabada es que ni se busca ni se pretende tal declaración, la tenemos en que tal derecho real desaparecería por la sola voluntad del deudor, pagando su deuda al hacerse la intimación ó durante la secuela del juicio, lo que no podría ser así si se ejercitase una acción real para hacer declarar la existencia de un derecho real también. El hecho de estar garantido un préstamo con hipoteca constituida sobre un inmueble, no modifica ni varía la naturaleza de la acción ejercitada que es siempre personal, como que la hipoteca es una obligación accesorias de crédito que garante. En un juicio ejecutivo nunca puede ejercitarse una acción real desde que sólo puede tener por objeto el cobro de una cantidad de dinero—art. 161 del Cód. de Proc.—No es exacto que el art. 3108 del Cód. Civ. diga que la obligación hipotecaria es una obligación real, sino que la hipoteca es un derecho real; y no hay obligaciones reales, porque no hay obligación que corresponda á derechos reales—art. 197. De acuerdo con el sumario puede verse el caso anotado en la Inst., t. 6, verb. *Competencia*, 5. En contra. Véase Inst., tom. 4, verb. *Préstamo hipotecario*. La doctrina consagrada en el sumario que comentamos carece de eficacia actualmente ante la jurisprudencia: todos los camaristas opinan hoy que el préstamo garantido con hipoteca es una obligación personal y que por consiguiente cae bajo la sanción del art. 4, inc. 3º del Cód. de Proc. Los casos que á continuación se detallan establecen la exactitud de lo que se deja espuesto. El domicilio de los contratantes determina la jurisdicción para el juicio de devolución de un préstamo garantido con hipoteca—tom. 111, pág. 366. El Dr. Posse como juez de 1ª Inst., falló el caso en el sentido del sumario: la Cám., compuesta de los doctores Giménez, Gelly y Molina Arrota, confirmó el fallo *por sus fundamentos*. La hipoteca debe ejecutarse en el domicilio del deudor y no en el lugar en que esté situado el inmueble hipotecado—t. 94, p. 336. Fallo del Dr. Mendez Paz, confirmado *por sus fundamentos* por los camaristas González del Solar, Gómez y Díaz. Aun cuando la deuda se encuentre garantida con hipoteca, el juez competente ante el cual debe exigirse





7. **Bienes**—La oposición del tercero que niega tener en su poder bienes del ejecutado, debe sustanciarse como tercería del ejecutante—Civ., tom. 10, pág. 355, Ser. 5ª (tom. 37).

8. **Bienes**—Los acreedores por gastos de entierro tienen privilegio sobre los de la sociedad aun cuando todos los bienes sean sociales—Civ., tom. 11, pág. 122, Ser. 5ª (tom. 58).

9. **Bienes**—El mandato conferido por el tutor para administrar los bienes, es suficiente para intervenir en demandas contra el menor—Civ., tom. 11, pág. 395, Ser. 5ª (tom. 58).

10. **Bienes**—El demandante que reside en el extranjero, no puede dar fianza de arraigo con los bienes recibidos, en prenda, del demandado—Civ., tom. 11, pág. 425, Ser. 5ª (tom. 58).

---

el pago es el del domicilio del deudor si no existe convenio sobre el lugar á efectuarse—tom. 99, pág. 204. Gómez, Gelly, Molina Arrotea, *por sus fundamentos*. La ejecución del inmueble que garante el préstamo debe hacerse ante la jurisdicción en que por el contrato se haya estipulado el pago de la deuda—tom. 106, pág. 272. Gómez, Gelly, Molina Arrotea, *por los fundamentos del dictamen fiscal*. También la Cám. de lo Com. ha establecido que el préstamo hipotecario implica una obligación personal. Véase tom. 36, pág. 5—numeración general—.

7. A solicitud del ejecutante se ordenó el embargo de las acciones y derechos que al deudor competían contra una compañía formada en Bélgica. Dictada sentencia de remate, el mismo ejecutante se presentó pidiendo que se intimara á la compañía el depósito en el Banco de la Nación de la cantidad de obligaciones suficiente á cubrir el crédito adeudado, á lo cual se opuso su representante, sosteniendo que la compañía no adeudaba suma alguna al ejecutado, en virtud de hechos indicados y de las consideraciones aducidas que presentó. En tal situación y no tratándose de bienes existentes en poder del deudor, debe sustanciarse la oposición formulada por la empresa, tercero en el juicio, observando procedimientos análogos á los prescriptos para las tercerías.

8. Este punto de derecho no fué materia de resolución ni en 1ª ni en 2ª Inst., pues habiendo sido objetada por las partes fué retirada dicha objeción.

9. Véase verb. *Administración*, 4.

10. El arraigo no podría hacerse efectivo en los bienes dados en prenda por estar sujetos á otras responsabilidades que tenían relación con el objeto principal del asunto.





11. **Bienes**—Sólo deben embargarse bienes por el importe del crédito y las costas—Civ., tom. 14, pág. 249, Ser. 5ª (tom. 61).

12. **Bienes**—En tanto no se justifique el carácter hereditario por la ley extranjera invocado, no puede reconocerse derecho á los bienes muebles existentes en la República—Civ., tom. 19, pág. 141, Ser. 5ª (tom. 66).

13. **Bienes**—Para la transmisión á título hereditario

---

11. Art. 455 del Cód. de Proc.

12. No tratándose de bienes raíces situados en esta capital, sólo el juez de la sucesión tiene jurisdicción competente para resolver sobre la adjudicación y consiguiente posesión de bienes situados en nuestro país.

13. Esta cuestión no fué resuelta por la Cám., pues cuando se elevaron los autos en apelación el apelante desistió del recurso; pero teniendo en cuenta la importancia de la cuestión vamos á dar los fundamentos en que se basa la doctrina sentada en el sumario. Es un principio universalmente seguido en materia civil, que nuestro Cód. ha aceptado clara é incuestionablemente el de la unidad de las sucesiones, con la sola limitación consignada especialmente en el art. 3470 en beneficio exclusivo de nacionales ó extranjeros domiciliados en la República, pero sin que esa escepción pueda hacerse extensiva á otras personas ni á otros casos, puesto que sólo la establece la ley para impedir que los nacionales ó domiciliados, en concurrencia con extranjeros no domiciliados, puedan ser perjudicados por éstos al amparo de leyes extranjeras que deben aplicarse sobre bienes existentes en la República, como puede verse en Demolombe, tom. 1º, párrafo 93; y Aubry y Rau, tom. 6, pág. 592. Los principios que rigen las sucesiones, tanto en lo relativo al derecho hereditario y transmisión de la herencia, como respecto de la jurisdicción de los Tribunales, están netamente consignados en los arts. 3281 á 3284, los que no sólo consideran á la sucesión como un todo ideal sin tener en cuenta su contenido ni los objetos ó bienes singulares que la componen, sino que, por el contrario, establecen que el derecho de sucesión se refiere al patrimonio del difunto, que está legislado por el derecho local del domicilio que tenía á su muerte, sean los sucesores nacionales ó extranjeros. Según los mismos principios, la sucesión ó derecho hereditario se abre desde la muerte del autor de la sucesión, y corresponde conocer de ella al juez del lugar del último domicilio del difunto, ante quien deben entablarse todas las demandas concernientes á los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, estando reproducida esa disposición por el art. 634 del Cód. de Proc. Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendiente y descen-

de bienes situados en la República, debe seguirse ante

diente, como en el caso de que se trata, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad ni intervención de los jueces, y sólo cuando ellos están fuera de la República ó de la provincia donde se hallan los bienes, deben pedirlo al juez del territorio, acreditando la muerte del autor de la sucesión y su título á la herencia—arts. 3410 y 3411, Cód. Civ.—Esto en manera alguna importa establecer la pluralidad de sucesiones ú obligar á los herederos á tramitar tantos juicios sucesorios como lugares distintos haya en que el autor hubiese dejado bienes inmuebles, sino únicamente lo que dispone el art. 10 del mismo Cód. es que para entrar en posesión de los bienes particulares de la herencia, debe ésta obtenerse del juez territorial, acreditando los extremos requeridos por ese artículo y satisfaciendo los impuestos ó cargas inherentes á la transmisión de los inmuebles. Esta es la doctrina ó interpretación que á los citados artículos se han dado siempre por nuestros tribunales, como puede verse en el dictamen del señor fiscal de Cámara, doctor Cortés, y en la resolución dictada por ese Trib., que se registra en el tom. 7, pág. 571, Ser. 1.<sup>a</sup>, y también en los resueltos por la Suprema Corte Nacional, tom. 8, págs. 286 y 338, Ser. 2.<sup>a</sup>, de sus *Fallos*. Dos reglas que indudablemente se chocan en su aplicación absoluta forman la base de la controversia jurídica que en estos casos se sostiene. Por un lado, la que establece que los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto á su calidad de tales, á los derechos de las partes, á la capacidad para adquirirlos, á los modos de transferirlos y á las solemnidades que deben acompañar esos actos—art. 10 del Cód. Civ.—Por otro lado, la que preceptúa que el derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local del domicilio que aquél tenía á su muerte—art. 3283 del mismo Cód.—, y de la que parece desprenderse el principio absoluto de la unidad de sucesión. ¿Cuál es el carácter de uno y otro principio? ¿En qué orden de consideraciones reposan? Esto es sumamente importante de investigar, para decidir á cuál de ellos ha de darse preeminencia, y cuál debe reputarse dominante en la tendencia de la legislación que nos rige. Aubry y Rau, ocupándose del estatuto real que rige todos los inmuebles situados en Francia, en virtud de un precepto análogo al del art. 10 de nuestro Cód., dice en el párrafo 31, nota 45, lo siguiente: «Como el territorio forma, en cierto modo, la base material del Estado, cuya existencia se encuentra así íntimamente ligada á la suerte de los inmuebles que componen este territorio, ningún legislador ha podido consentir en someter los inmuebles situados en su país al imperio de una ley extranjera. Por consiguiente, la regla de que los inmuebles están regidos por la ley de su situación, es seguida en todos los Estados civilizados. Así, bajo el punto de vista de los motivos sobre los cuales





ellos la testamentaria del fallecido en el extranjero — Civ. tom. 22, pág. 481, Ser. 3ª (tom. 69).

Esta regla está fundada, no hay lugar á distinguir entre la transmisión ó título particular de uno ó varios inmuebles determinados, y de la transmisión á título universal de una universalidad de inmuebles. En vano, para sostener lo contrario, se objeta, por una parte, que no siendo el patrimonio un objeto exterior y confundiéndose por el contrario con la persona del propietario, no tiene asiento ni situación distinta del domicilio de esta persona; por otra parte, que la sucesión abintestato es deferida según la voluntad presunta del difunto, y que para interpretar esta voluntad conviene referirse á la ley de su patria; que así, bajo este doble punto de vista, la sucesión, aún en cuanto á los inmuebles situados en país extranjero, debe ser regida por la ley nacional del domicilio. La primera de estas objeciones, propuesta por Zachariae, es exacta en sí misma, pero no es concluyente: en la transmisión de un patrimonio no es posible, en efecto, hacer abstracción completa de los objetos de que se compone. Se trata siempre, en definitiva, de la suerte de los inmuebles hereditarios, y las razones que hacen rechazar la aplicación de las leyes extranjeras en materia de transmisión de inmuebles, se aplica con mayor razón aún á la transmisión por vía de sucesión que á las mutaciones á título particular, porque el primer modo de transmisión es á la vez más general y más extenso que el segundo. En cuanto á la segunda objeción, ella no es ni exacta ni concluyente. Si por el reglamento de las sucesiones el legislador tiene ordinariamente en cuenta las afecciones naturales y presuntas del hombre, esta consideración no es y no puede ser sino secundaria: lo que domina en la materia de las sucesiones son vistas políticas, razones de interés social, y es éste un motivo más para escluir en esta materia toda aplicación de una ley extranjera.» Dificilmente hubiera podido encontrarse algo más decisivo y concluyente que las palabras que se dejan transcritas, en lo que concierne al fundamento de uno y otro principio, y á la preferencia que debe acordarse al del estatuto real sobre el de la unidad de la sucesión. Acaso pudiera objetarse que la conclusión de Aubry y Rau cuenta, como elemento de decisión, la ausencia en la legislación francesa de un precepto semejante al del art. 3283 de nuestro Cód.; pero aún así, la solución que acuerda primacía al estatuto real sobre la unidad de la sucesión, debe admitirse entre nosotros por razones obvias, como fácilmente puede demostrarlo. Suponiendo que el art. 10 y el 3283 del Cód. figuran sin ningún antecedente que iniciara en el espíritu del legislador la propia índole y tendencia de uno y otro, inclinaría irresistiblemente el juicio del jurista al predominio del primero sobre el segundo. El principio de que los bienes raíces deben estar exclusivamente regidos por la ley de su situación, reposa sobre consideraciones de orden público, desde que es cierto, como lo dicen Aubry y Rau, que el territorio forma la base natural del Estado. El principio de la unidad y

#### 14. **Bienes** — Solo procede la acción personal contra los

de la sucesión se basa en una abstracción jurídica, cual es la de que el patrimonio es un objeto ideal que no está fijo en un lugar. Entre una disposición que afecta el orden público y otra de simple coordinación jurídica, dado el caso que irremisiblemente pugnara y se excluyeran, la que atañe al orden público debería prevalecer. Pero el legislador ha dejado claramente entrever que el gobierno de los inmuebles por la ley del país de su situación, es un principio que domina y se levanta por encima de las diferentes reglas que fijan la materia de derecho internacional privado. Así en los arts. 6º y 7º se establece que la capacidad de las personas debe regirse por la ley de su domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados ó de bienes existentes en país extranjero; pero, por medio de una nota puesta al pie del art. 6º, y que indudablemente comprende también al 7º, hace notar que, á pesar de los términos hasta cierto punto absolutos de esas dos disposiciones legales, los bienes quedan regidos por la ley del lugar de su situación. Y en el comentario al mismo art. 3283, que es el que sirve de base á la teoría de la sucesión única, se leen estas palabras: «Puede llamarse una excepción á este principio general lo que está dispuesto respecto á la transmisión de los bienes raíces que forman una parte del territorio del Estado, y cuyo título debe siempre ser transferido en conformidad á las leyes de la República» — art. 10 de este Cód.—El doctor Cortés, cuyas opiniones se citan por los que sostienen y por los que impugnan la competencia de los tribunales del país para conocer de esta sucesión en lo que se refiere á los bienes raíces situados en el mismo, no ha disentido con estas ideas espuestas, como resulta de la lectura atenta de la vista que se registra en el tom. VII, Ser. 1ª, pág. 571 de los *Fallos* de la Exema. Cámara. Puede, por otra parte, asegurarse, que como simple cuestión de doctrina, la unidad de la sucesión, absorbiendo los inmuebles situados en el extraño suelo, no ha gozado de mayor prestigio en el pasado ni lo goza en la actualidad, y por el contrario, respetables autoridades proclaman la necesidad de quebrantar esa unidad en obsequio de la soberanía territorial, como con vasta erudición lo demostró el doctor Quintana en el Congreso sudamericano de derecho internacional privado, y lo confirma con su autoridad de maestro en la complicada ciencia el doctor Alcorta, en el tom. II, cap. 5, sec. 1ª, de su obra titulada *Curso de derecho internacional privado*. De esta obra importante, conviene que se transcriba algunos párrafos decisivos para la cuestión que se debate, pues después de tratar el punto bajo su aspecto doctrinario, el autor lo encara bajo el punto de vista de nuestra legislación positiva. Nuestros legisladores se inclinan á esta última opinión. El Cód. sanciona la pluralidad de sucesiones. La justificación de esta solución, se produce plenamente por la simple manifestación de los antecedentes que se encuentran en el mismo Código.





socios, justificada la inexistencia de bienes de la socie-

En el art. 40, estableciendo los principios generales, determina que los bienes raíces situados en la República, son exclusivamente regidos por las leyes del país respecto á su calidad de tales, á los derechos de las partes, á la capacidad de adquirirlos, á los medios de transferirlos y á las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, á una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido ó perdido de conformidad á las leyes de la República. ¿Hay algún caso previsto en el Código en que se separe de esta prescripción cuando se refiere á los inmuebles? Ninguno, y así lo establece en la tutela, en los contratos, en los derechos reales. ¿Puede tomarse como escepción el art. 191 con referencia al contrato nupcial? Este punto ha sido resuelto al ocuparse del matrimonio, en cuanto al régimen de los bienes y nos referimos á lo allí espuesto: el contrato nupcial sólo rige los bienes inmuebles cuando está de acuerdo con las disposiciones de la ley de la República. El art. 3470 prescribe que: «En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, ó extranjeros domiciliados en el Estado, estos últimos tomarán de los bienes situados en la República una porción igual al valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen escluidos por cualquier título que sea, en virtud de leyes ó costumbres locales.» La fuente de este artículo corresponde al art. 2º de la ley de 14 de Julio de 1819, y concuerda con la ley belga de 27 de Abril de 1865, y con la ley holandesa de 7 de Abril de 1869; pero su objeto no es en todas partes el mismo que el de su fuente. La ley francesa tenía por objeto, en su art. 1º, derogando algunas disposiciones del Cód. Civ., quitar el último pretexto para la aplicación del derecho de albinagio, que había quedado espresamente abolido por la resolución; y por su art. 2º impedir que el reconocimiento del derecho de los extranjeros á la sucesión en el país no viniera á colocarlos en mejores condiciones que los nacionales, una vez que el derecho de éstos pudiera ser desconocido ó limitado por las leyes de aquéllos por cualquier título. El art. 3470 no ha venido á destruir el derecho de albinagio, puesto que en la República no existía cuando el Código fué promulgado, y tampoco ha querido establecer un privilegio en favor del nacional, como tal nacional, para el caso en que la ley extranjera le privara de un derecho en ese carácter, desde que en su disposición comprende los «herederos extranjeros y argentinos, ó extranjeros domiciliados en el Estado». ¿Cuál ha sido su objeto, entonces? Proteger al habitante de la República contra las desigualdades que puedan encontrarse en las leyes extranjeras, desigualdades que vendrían á hacerse sentir en los bienes. ¿Cómo se haría efectiva esa protección? Por medio de un juicio sucesorio en el Estado, tomando por punto de partida la existencia de otro juicio fuera del Estado. ¿Qué importa la existencia de estos dobles juicios? La pluralidad de las suce-

dad — Com., tomo 1, página 195 Serie 3ª (tomo 25).

siones, es decir, que siempre que haya bienes en diferentes territorios, habrá tantos juicios cuantos bienes existan en ellos, y con el objeto de evitar que esta pluralidad de juicios pueda dar por resultado diferencia de condiciones entre los herederos, se busca la compensación, agregando «una porción igual al valor de los bienes situados en el país extranjero de que fuesen excluidos por cualquier título que sea». En la nota al art. 3283, y para fundar su disposición, después de transcribir los fundamentos alegados por Savigny en favor de su solución, agrega, como para que no se dude del alcance que se debe dar á la letra del artículo: «Puede llamarse una excepción á este principio general, lo que está dispuesto respecto á la transmisión de los bienes raíces que forman una parte del territorio del Estado, y cuyo título debe ser siempre transferido, en conformidad á las leyes de la República.»—art. 10 de este Cód.—¿Puede dudarse de que hay pluralidad de sucesiones cuando hay bienes raíces en diferentes lugares? ¿Puede dudarse que cuando el art. 10 emplea las palabras «modo de transferirlos», comprende en estos modos las sucesiones? En la nota del art. 3398, que trata de las legítimas, se dice: «Cuando en los cinco artículos anteriores hablamos de las porciones legítimas, nos referimos á los bienes existentes en la República. Supóngase que una persona muera en Buenos Aires, dejando 100.000 pesos aquí y 100.000 pesos en Francia. Los bienes que estén en la República se registrarán por nuestras leyes; y los que estén en Francia por las de aquel país. Habrá, pues, tantas sucesiones cuantos sean los países en que hubiesen quedado bienes del difunto. Así, la máxima común es: *quot sunt bona diversis territorii obnoxia totidem patrimonía intelliguntur.*» ¿Puede darse nada más terminante? De lo que se lleva espuesto hasta aquí, resulta evidente que la unidad de sucesión no es un principio absoluto de nuestra legislación, y que, por el contrario, de la combinación de sus preceptos concernientes á este punto, se puede llegar á la conclusión de que ha de haber pluralidad de juicios sucesorios, no sólo cuando se trata de la repartición de inmuebles situados en la República, sino aún cuando se trate de la división de muebles. Y si mayor número de autoridades jurídicas fuera necesario invocar en este orden de ideas, puede recordarse que los reformadores del proyecto del Cód. de Proc., doctores Malaver, Obarrio y Basavillbaso, han debido pensar que ese es el espíritu y tendencia de nuestra legislación de fondo, desde que han consignado en ese proyecto reformado la siguiente disposición: «Si el difunto en la época de su fallecimiento tuviese su domicilio fuera de la República, y hubiese dejado en ésta bienes inmuebles ó muebles regidos por las leyes del lugar de su situación, conocerá del juicio de sucesión, en lo que respecta á estos bienes, el juez del lugar donde estuvieren todos ó la mayor parte de ellos»—art. 59, inc. 4ª—.





**Bienes**—Véase: *Acción personal*, 1; *Abogado*, 2; *Cesión de bienes*, 1, 2; *Tercería de dominio*, 1; *Banco Hipotecario Nacional*, 1; *Inhibición*, 4, 5, 7, 8, 9, 10; *Acción pauliana*, 1; *Honorarios*, 8; *Obligación de hacer*, 1; *Bienes reservables*, 1; *Daños y perjuicios*, 2; *Administrador de bienes* 1; *Arrendamiento*, 1; *Alquileres*, 2; *Acreedor*, 2; *Obligación de pagar*, 1; *Concurso* 13; *Menores*, 1; *Administración*, 5; *Divorcio*, 27; *Gastos de justicia*, 3; *Condominio*, 4.

1<sup>o</sup>. **Bienes adventicios**—La declaración de insolvencia de la testamentaria paterna sin intervención del tercero poseedor de bienes adventicios, no basta para conferir derechos reivindicatorios sobre los bienes indebidamente vendidos por el viudo—Civ., tom. 12, pág. 396, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 59).

1<sup>o</sup>. **Bien embargado**—Su tasación, aun aprobada judicialmente, no forma prueba del valor del bien embargado — Com., tom. 1, pág. 122, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

2. **Bien embargado**—Procede la ampliación si resulta que los bienes embargados no bastan para cubrir la deuda— Com., tom. 1, pág. 122, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

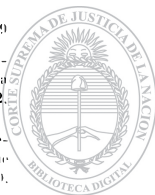
1<sup>o</sup>. **Bienes embargados**—Sólo puede levantarse el embargo de los muebles si se justifica que los bienes presentados en substitución responden por la deuda — Com., tom. 9, pág. 123, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

1<sup>o</sup>. Ley 24, tit. 13, Part. 3<sup>a</sup>.

1<sup>o</sup>. El sumario no expresa lo que resolvió la Cám. Por el contrario para resolver la cuestión tomó como base, la tasación aprobada. El crédito con sus intereses y costas, ascendía á más del importe de la tasación, y entonces el ejecutante pidió ampliación del embargo, la que fué acordada precisamente porque la tasación demostraba que la cosa no alcanzaba á cubrir el capital, los intereses y las costas del juicio.

2. Véase la nota precedente.

1<sup>o</sup>. La facultad que el art. 477 del Cód. de Proc. confiere al ejecutado para invertir el orden prescripto para el embargo en favor del acreedor, es, como dicho art. lo expresa, á condición de que en substitución de los muebles embargados, se ofrezcan otros bienes que, aunque ya gravados basten manifiestamente á cubrir el crédito reclamado. Esta condición no constaba en autos. En tal caso, no es justo privar al ejecutante de una garantía ya asegurada en favor de su crédito, substituyéndola por otra que no presente manifiestamente igual seguridad.



2. **Bienes embargados**—Debe quedar sin efecto el embargo si por escritura pública se justifica que el poseedor era propietario de los bienes embargados—Com., tom. 9, p. 72, Serie 3ª (t. 25).

3. **Bienes embargados**—El juez de la ejecución no puede autorizar al acreedor para intervenir en el juicio en que existen bienes embargados al deudor—Com., tom. 9, p. 120, Ser. 3ª (tom. 25).

4. **Bienes embargados** — La cesión de derechos sobre los bienes embargados importa desistir de la tercería—Com., tom. 9, pág. 360, Ser. 3ª (tom. 25).

5. **Bienes embargados** — Si consta la existencia de los bienes embargados en poder del ejecutado, debe ordenarse la entrega omitiendo todo procedimiento contra el depositario—Com., tom. 1, pág. 152, Ser. 5ª (tom. 36).

6. **Bienes embargados** — La concesión de moratorias suspende los plazos de las obligaciones; deben devolverse al ejecutado los bienes embargados preventivamente — Com., tom. 1, pág. 211, Ser. 5ª (tom. 36).

---

2. Porque los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes sino también contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, pagos, reconocimientos, etc., enunciaciones de hechos ó actos jurídicos que forman el objeto principal—arts. 894 y 895, Cód. Civ.

3. Véase verb. *Acreedor*, 1.

5. Los bienes se encontraban en poder del ejecutado por habérselos dejado el depositario; esto hace presumir que al hacerse cargo aquél del depósito lo hizo con todas las obligaciones inherentes á su carácter de depositario entre las cuales se cuenta la de mantener los objetos que constituyen el depósito, á la orden del juez embargante.

6. La concesión de moratorias importa prorrogar el plazo de las obligaciones del comerciante á quien se acuerdan hasta la fecha en que dichas moratorias espiren. Por esa razón y por la intervención de vigilancia á que se sujeta las moratorias, según el art. 1593, Cód. de Com., el embargo preventivo autorizado por el inc. 5º, art. 443, Cód. de Proc., por razón de deudas sujetas á condición, suspensión ó plazo pendiente, no procede; y los que se hubiesen decretado para asegurar el cumplimiento de obligaciones vencidas, deben revocarse desde que éstos pierden tal carácter por la concesión de las moratorias.





7. **Bienes embargados**— Su posesión por el ejecutado hace necesaria la deducción de tercería sobre los bienes embargados—Com., t. 5, pág. 172, Ser. 5ª (tom. 40).

8. **Bienes embargados**— Para que proceda la tercería es indispensable que existan bienes embargados: el depósito en efectivo verificado para evitar un embargo no puede fundar una tercería—Civ., tom. 11, pág. 231, Ser. 5ª (tom. 58).

**Bienes embargados**—Véase: *Excepción de nulidad*, 4.

1. **Bienes de la esposa**— Siendo gananciales los frutos civiles de los bienes de la esposa, los muebles comprados por ella á su solo nombre con esos frutos, responden de las obli-

---

7. Porque según disposición expresa de la ley, la posesión es presunción de propiedad en los bienes muebles—art. 2412 del Cód. Civ. El que no esté en posesión de la cosa y alegue su dominio debe destruir esta presunción que es tan solo *juris tantum*, y por consiguiente admite prueba en contrario. Por otra parte el art. 478 del Cód. de Proc. acuerda al ejecutante el derecho de embargar los bienes de que esté en posesión el deudor.

8. En un juicio se libró mandamiento de embargo, el que se pretendió trabar sobre bienes de un tercero: éste manifestó en el acto de la diligencia que los bienes eran suyos y no del deudor ejecutado. El oficial de justicia se retiró sin embargar los bienes. El tercero depositó en el Banco la suma importe del mandamiento para *evitar* el embargo. Luego se presentó deduciendo tercería de dominio sobre los bienes embargados y pidiendo se le devolviera la suma depositada. La acción no pudo prosperar por cuanto el art. 529 del Cód. de Proc. dice que las tercerías que se deduzcan en los juicios ejecutivos, deben fundarse en el dominio de los bienes embargados ó en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al ejecutante. De ello se deduce que es requisito indispensable, para que pueda deducirse tercería, que exista un embargo trabado sobre un bien que pertenezca ó al que tenga mejor derecho el tercerista. Esa condición no concurría en el caso presente, pues resultó que no se embargó, sino que sólo fué á trabarse ese embargo, pero esta diligencia no se llevó á efecto por la manifestación que se hizo al oficial de justicia, de que los bienes denunciados no pertenecían al deudor. Si se hizo el depósito de una suma de dinero, nadie se lo exigió ni la embargó, y no podría alegarse que él fuese originado ó que tuvo por causa evitar que se embargarán las mercaderías, puesto que ese caso no llegó, único que podría justificar el reemplazo que se pretendió hacer, y la tercería que se había deducido.

1. Arts. 1272, incs. 1 y 3, y 1273, inc. 3, Cód. Civ.



gaciones de la sociedad conyugal, debiendo rechazarse la tercera—Com., tom. 1, pág. 378, Ser. 5ª (tom. 36).

**Bienes de la esposa**—Véase: *Alimentos prorisorios*, 2; *Embargo preventivo*, 53.

**Bienes gananciales**—Véase: *Cesión*, 2; *Embargo preventivo*, 38.

**Bienes hereditarios**—Véase: *Hijos naturales*, 2.

1ª. **Bien hipotecado**—Si el espediente en que se decretó el embargo del bien hipotecado no existe, el levantamiento debe hacerse con citación por edictos—Civ., t. 13, pág. 289, Ser. 5ª (tom. 60).

**Bien hipotecado**—Véase: *Alquileres*, 1.

**Bienes de menores**—Véase: *Remate judicial*, 14.

1ª. **Bienes reservables**—El heredero forzoso de los bienes reservables adquiere el dominio desde la verificación del segundo matrimonio, y en consecuencia procede la tercera contra la ejecución que pretenda la enajenación de dichos bienes—Com., tom. 5, pág. 73, Ser. 5ª (tom. 40).

1ª. **Bienes sociales**—El socio, aun justificada la sociedad,

1ª. Es aplicable al caso el precepto del art. 80 del Cód. de Proc.

1ª. Véase la nota del verb. *Bienes*, 5.

1ª. La acción de reivindicación es la que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, y por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella, como lo establece el art. 2758 del Código Civ. Para que una acción reivindicatoria entablada en juicio pueda prosperar con éxito; para que sea legalmente procedente, es necesario que se ajuste á la disposición de ese art. del Cód.; esto es, que se encuentren cumplidos todos los requisitos que la ley exige. En el caso actual, ni la parte demandante, ni la cosa que se pretendía reivindicar, se encontraron en las condiciones requeridas por el art. 2758. Lo que se demandaba por acción reivindicatoria no era una cosa particular de la demandante, puesto que según ella misma lo expresó en su demanda, esa cosa, el inmueble, pertenecía y pertenece á una sociedad. De este hecho se deriva natural y lógicamente que tampoco la demandante tiene derecho de dominio sobre el inmueble. Y si no tiene el derecho de dominio, si no es propietaria de ese inmueble, tampoco pudo tener la posesión del mismo á título de dominio, y por consiguiente no pudo



carece de dominio particular sobre los bienes sociales, y en consecuencia, carece del derecho de reivindicar una parte indeterminada—Civ., tom. II, pág. 187, Ser. 5ª (tom. 58).

### 1. Bienes testamentarios — La ocultación de bienes

perderla para que pueda reclamarla por medio de la acción de reivindicación. Suponiendo que el demandante sea miembro de la sociedad, no por eso tiene el derecho de dominio y posesión de los bienes sociales, derechos que corresponden a la sociedad. Comprendiendo estas dificultades legales que obstaban al éxito de la acción reivindicatoria del inmueble, la parte actora se limitó a pedir que la demandada le entregase la cosa reclamada en la parte que le correspondía como socia y como heredera de los socios fundadores, ejercitando el derecho que el art. 2761 acuerda a los copropietarios ó condóminos entre sí por las partes ideales que les corresponde en la cosa común. Pero, el derecho de socio no acuerda el derecho real de condominio sobre los bienes de la sociedad, sino un derecho proporcional a esos bienes; no tiene un derecho *in rem*, aunque tenga ó pueda tener un derecho *ad rem*. La parte demandante sostuvo que la demandada no era legítima propietaria de la cosa reivindicada; si la demandada no era propietaria de la cosa, no era procedente tampoco la acción del art. 2761, porque ésta sólo se acuerda a los copropietarios ó condóminos entre sí, por la parte ideal que les corresponde. ¿Cuál es esa parte ideal que corresponde a la demandante sobre la cosa reivindicada? Como hija legítima de sus padres sería la quinta parte de la que a éstos correspondería como miembros de la sociedad, puesto que dejaron cinco hijos. Pero, ¿cuál es la parte que a esos socios corresponde en la cosa de la sociedad? No lo decía la demandante, olvidando que una parte ideal no es una parte indeterminada, sino una parte alicuota. Esa sola indeterminación de la parte ideal reclamada bastaría para desestimar la demanda, puesto que el Juzgado, atenta la naturaleza de la acción reivindicatoria, no podría mandar entregar la parte indeterminada de la cosa que se reivindicaba. Para determinar la parte ideal que al demandante como socio corresponde en los bienes sociales, sería indispensable liquidar la sociedad, único derecho que tienen los socios para llegar a dividirse los bienes sociales. La demandante no tenía derecho para usar de la acción reivindicatoria entablada, porque no era propietaria de la cosa en cuestión, ni había tenido nunca posesión de la misma a título de dueña.

1. La ocultación denunciada se hacía consistir en haberse escludido de los inventarios, una parte de bienes pertenecientes a una sucesión, y que por lo tanto, no formaron parte del caudal, al practicarse la cuenta particionaria. Al presentarse la denuncia, no se comprobó en manera alguna la existencia de esos bienes y su ocultación, y por lo tanto, mientras no se establecieran estos extremos, no procedía la ac-



testamentarios no puede fundar una acusación por defraudación, en tanto no se resuelva la existencia del hecho en el juicio civil—Crim., tom. 3, pág. 385, Ser. 5ª (tom. 38).

**2. Bienes testamentarios** — No procede autorización judicial para licitar, á nombre de los menores, bienes testamentarios—Civ., tom. 22, pág. 472, Ser. 3ª (tom. 69).

**Bienes testamentarios** — Véase: *Remate judicial*, 15, *Gastos causídicos*, 1.

**1ª. Bigamia**—El delito de bigamia debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría—Crim., tom. 1, p. 75, Ser. 5ª (tom. 36).

**1ª. Bigamo**—La falta de presentación y la ignorancia del

---

ción criminal, puesto que no existe el delito, y éste no se presume, de los autos sucesorios, no sólo no resultó que se hubiese hecho oposición á los inventarios, sino que constaba la expresa conformidad manifestada por el representante de la sucesión, y esta circunstancia aleja toda presunción de delito.

2. No se hizo lugar á la licitación teniendo en cuenta que la madre de los menores imponía para esa operación condiciones complejas de difícil solución práctica. Pero se estableció asimismo que esa denegación era «sin perjuicio de que la madre pudiera ejercitar los derechos de que se considerase asistida para la realización de sus propósitos cargando con todas las ulteriores legalidades».

1º. Art. 143 del Cód. Pen.

16. Constaba en autos la existencia del delito por las partidas de matrimonio agregadas y expedidas por las oficinas respectivas del Registro Civil, de las que resultaba que el procesado había contraído un primer matrimonio y después un segundo, existiendo al contraer este último el primero. El procesado no negó que hubiera contraído el primer matrimonio ni alegó que éste se hubiese disuelto con arreglo á las leyes civiles. Al declarar primeramente negó la existencia del segundo matrimonio, pero en su segunda declaración, confesó ser cierto el hecho de haber contraído los dos matrimonios; que para conseguirlo tuvo que engañar á la segunda esposa haciéndola creer que era soltero, y que ella ignoró siempre su verdadero estado. La subsistencia del primer matrimonio no podía ser puesta en duda, con arreglo al art. 87 de la ley de Mat. Civ., desde que no se comprobó ni siquiera se intentó probar su disolución. El procesado para contraer su segundo matrimonio cambió de nombre, pero su identidad estaba plenamente comprobada en el proceso.



paradero de la primera esposa, no bastan para justificar la disolución del primer matrimonio; el bigamo debe probarlo plenamente—Crim., tom. 1, pág. 73, Ser. 5ª (tom. 36).

1. **Billetes**—No procede la devolución de los billetes de loterías prohibidas, aun cuando hayan sido secuestrados al mero tenedor de buena fe—Crim., tom. 2, pág. 424, Ser. 5ª (tom. 37).

**Boletas**—Véase: *Inhabilidad de título*, 7.

1. **Boleto**—El de compraventa sólo obliga a la reduc-

1. La existencia de los billetes cuya devolución solicitó el acusado, probaba plenamente la infracción de la ley 2989 de 5 de Oct. de 1893; y si las constancias de la causa no fueron suficientes para declarar quien fué el autor, razón por la cual se sobreseyó provisionalmente, de ahí no puede concluirse que procede la restitución de los billetes secuestrados. Dados los términos de la ley citada, la existencia de los billetes constituye la prueba más concluyente del cuerpo de la infracción, aun cuando no sea posible descubrir quien haya sido su autor.

1. El actor se presentó pidiendo la escrituración de un boleto privado de compraventa afirmando que por su parte había ejecutado una á una las obligaciones que el boleto le imponía, circunstancia que lo colocaba en condiciones legales para exigir á los compradores las que á ellos correspondían. Agregaba, que no obstante ser uno sólo el que suscribía el boleto, demandaba conjuntamente con él á otros dos, porque éstos eran á la par de aquél, compradores del terreno y habían intervenido directa y personalmente con el demandante en la compra y en los arreglos posteriores que trataron de llevar á cabo, reconociéndose una y mil veces compradores del terreno y discutiendo simplemente en las conferencias que tuvieron lugar, meros detalles de plazos é intereses. Ofrecía probar, en la estación oportuna, el carácter de compradores de los otros dos señores que no suscribían el boleto. Contestando, pidió el demandado el rechazo de la acción fundándose en que el boleto lo facultaba para arrepentirse del contrato, perdiendo la seña estipulada; que antes ya había manifestado la intención de no cumplir el contrato, perdiendo la seña, y que ahora reproducía esa manifestación, fundándose en la disposición del art. 1202 del Cód. Civ., y que desde luego la demanda era injusta. En cuanto á los otros dos señores, pidieron igualmente el rechazo de la demanda, aunque por razones diferentes, al menos en lo fundamental. Negaron el carácter de compradores que les atribuía la demanda; negaron que hubiesen intervenido en el contrato, y negaron, por último, que se hubiesen reconocido compradores en ninguna otra forma, como que no contrataron con el actor.

ción á escritura pública de parte de los otorgantes. Ca-

Espresaron, sí, que hubieron de tomar parte en la operación, pero entendiéndose con el comprador y no con el vendedor; y que á este respecto dieron pasos y hasta propusieron bases para el negocio, sin resultado práctico, porque no llegaron á entenderse, ó sea á formalizar ningún convenio. En obsequio á la claridad y al buen método debe tratarse la cuestión separadamente para cada uno de los demandados. La diversidad de razones en que se fundaba la demanda, relativamente á cada uno de los demandados, y las diversas defensas que éstos opusieron á la acción, así lo aconsejan. *Demanda contra el comprador.* Por la relación que se deja consignada, se ve que la acción deducida contra éste, va dirigida á que el boleto se reduzca á escritura pública. Se ha visto, que el fundamento primordial de dicha acción era una cláusula del boleto, que daba al vendedor el derecho de dar por rescindida la venta, ó de exigir judicialmente el cumplimiento del contrato, si venciere el término como plazo, sin que se hubiese escriturado el inmueble. Se sabe que el comprador pidió el rechazo de la demanda, argumentando con el texto del art. 1202 del Cód. Civ., que, en su opinión, le da el derecho de arrepentirse del contrato perdiendo la señal estipulada en el boleto. Ahora bien; el art. 1202 del Cód. Civ., dice así: «Si se hubiese dado una señal para asegurar el contrato ó su cumplimiento, quien la dió puede arrepentirse del contrato ó puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede también arrepentirse el que la recibió, y en tal caso, debe devolver la señal con otro tanto de su valor, etc.». Pero, no es á la luz del principio consagrado por esta disposición que debe resolverse el caso, sino según las estipulaciones contenidas en el contrato cuya existencia constataba el boleto. El art. 1197, Cód. Civ., prescribe que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma. Esta libertad de contratar, no tiene otra limitación que la de que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Así, pues, cualquiera que sea el precepto del art. 1202, con relación á las arras que se pacten en los contratos, debe estudiarse el convenio en sus propios términos ó cláusulas, puesto que, como queda establecido, él es la ley de las partes. El art. pertinente del boleto decía: «Esta venta se efectúa bajo las siguientes bases: a) Cien mil pesos que en este acto entrega el comprador, y por los cuales se le da el más bastante recibo, y como señal del cumplimiento de esta venta. Esta suma quedará á beneficio del vendedor si no se escritura el bien vendido dentro de los tres meses á contar de la fecha en que el vendedor manifieste estar rescindidos los contratos de sublocación. Si venciesen los tres meses sin que se hubiese escriturado el bien, el vendedor está facultado para dar por rescindida esta venta ó para exigir judicialmente su cumplimiento». La primera





rece de valor legal contra terceros que no lo firman, aun

parte del inciso *a*, no contiene un pacto de seña, puro y simple, en los términos del art. 1202 del Cód. Civ. Si así fuese, se hubiera dicho que, en su caso, los vendedores devolverían la señal con otro tanto de su valor, y no la señal con intereses, como se expresaba. Aunque en el inciso se hablaba de seña, sin embargo, dada la forma de la cláusula y los conceptos empleados, se ve que no es una seña lo que se pacta. Las palabras son estas: «Esta suma de 100.000 pesos», quedará á beneficio del vendedor si no se escritura el bien vendido dentro de los tres meses, á contar de la fecha en que el vendedor manifieste estar rescindidos los contratos de sublocación». Es de doctrina corriente, que los actos jurídicos deben calificarse según la naturaleza del acto y circunstancias en que se produzcan, sin tener en cuenta el nombre que las partes le hayan dado por error. El codificador argentino sustenta ese principio en las notas á los arts. 1493 y 3716, Cód. Civ. Ese inciso no constituye otra cosa que una cláusula penal á que quedó sujeto el comprador. En efecto; el art. 652, Cód. Civ., dice así: «La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta á una pena ó multa en caso de retardar ó de no ejecutar la obligación». El art. 653, complementando la disposición anterior, dice: «La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, ó cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor ó de un tercero». ¿Y qué otra cosa hizo el comprador, en el contrato y cláusula preindicados, sino sujetarse á una pena ó multa consistente en una suma de dinero para el caso en que retardara, ó no ejecutara la obligación? Esta suma, los 100.000 pesos, quedará á beneficio del vendedor, dice el boleto, caso de que el comprador no escriture dentro de los tres meses fijados, según antes se hizo notar. Si la cláusula referida no envuelve un pacto de seña, sino una cláusula penal, es evidente que al comprador no le asiste el derecho de rescindir el contrato, perdiendo los 100.000 pesos, como equivocadamente lo sostuvo. Pero hay más; la segunda parte del inciso *a* del art. 3º del boleto, entraña claramente un pacto comisorio á favor de los vendedores, ventaja que se reservaron, según lo reconoce el mismo comprador. El vendedor se reservó, pues, por dicha cláusula, el derecho de rescindir el contrato ó de exigir su cumplimiento en el caso de que transcurrieran los tres meses sin efectuarse la escrituración. Y tal es el derecho que ejerció el vendedor por medio de su apoderado, dentro del testó y espíritu del boleto de compraventa. La acción es perfectamente procedente. El art. 1184, inc. 1º, Cód. Civ., preceptúa que deben ser hechos en escritura pública los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad. El art. 1185, establece que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos en instrumento particular, como pasa

cuando tuvieran interés en la negociación — Jurispru-

con el contrato materia del presente litigio, quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. Por fin, el art. 1187 dispone, que la obligación de que habla el art. 1185, será considerada como una obligación de hacer, y que la parte que se resistiese á hacerla, podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. La cuestión *sub-judice* se encuentra perfectamente dentro de esas disposiciones, desde que lo que piden los actores, es que el comprador les escribure el boleto. *Demanda contra los terceros.* La demanda contra éstos también era por escrituración del boleto. La ley acuerda este derecho á los contratantes; pero los terceros no figuraban como tales en el boleto. De éste constaba que el vendedor, contrató con uno sólo y con nadie más. De manera que, á estar al instrumento mismo con que el actor instruya su demanda, los terceros no intervinieron en ese contrato, cuyas consecuencias se querían hacer pesar sobre ellos. El comprador confesó que posteriormente al otorgamiento del boleto, recién entraron los terceros á formar parte del sindicato para el cual se adquiría el inmueble, siendo de observarse que esta confesión estaba corroborada por un testigo. ¿Cómo es, entonces, que se quería responsabilizar á ese tercero por obligaciones que no contrajo? El art. 503. Cód. Civ., dispone que las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores á quienes se transmitiese; y el art. 1195, concordante con el 1199, contiene el principio de que los contratos no pueden perjudicar á terceros. Es entre acreedor y deudor, ó en otros términos, entre las partes que han celebrado el contrato que se establecen las relaciones de derecho, y sólo ellas recíprocamente son hábiles para exigirse el cumplimiento de las obligaciones que de las antedichas relaciones jurídicas surjan. Desde el momento que los terceros no figuran como parte contratante en el boleto, ningún vínculo jurídico existe entre ellos y el vendedor respecto de ese contrato. En presencia de estas disposiciones legales, salta á la vista la improcedencia de la acción interpuesta contra los terceros. Se sostuvo por el actor, que los terceros se reconocieron compradores conjuntamente con el comprador; que aceptaron el contrato, y por consecuencia el boleto, y que, bajo esa base, realizaron actos de verdadero comprador. Pero, siendo ello cierto, ¿autorizaba al actor para deducir contra ellos acción de escrituración del boleto? Decididamente, no. Los terceros, no pudieron llegar á ser compradores del primitivo vendedor, sino mediante un convenio posterior al otorgamiento del boleto, puesto que constaba que en éste no intervinieron; y por lo tanto, si algún derecho tenía que hacer valer el vendedor, habría sido por razón de ese convenio posterior, pero nunca en virtud del boleto en que no tomaron participación. En la hipótesis de que los terceros hubiesen entrado á formar parte del







dencia Civil, tomo 10, página 120, Serie 5ª (tomo 57)

convenio, con posterioridad al otorgamiento de este instrumento, se habría producido una novación de contrato; pero este hecho no se comprobó, y la novación no se presume con arreglo á la doctrina del art. 812 del Cód. Civ. Es verdad que el art. 1188, contiene el precepto de que los contratos que debiendo ser hechos por instrumento público ó particular, fuesen hechos verbalmente, también quedarán concluidos para el efecto designado en el art. 1187. Con esta base el actor trató de probar que el convenio que pretendía haber acordado con los terceros, se celebró verbalmente, para lo cual se produjo prueba de confesión testimonial y documental. Aunque de todos modos la acción fué mal dirigida, supuesto que los terceros no estaban ligados por el contrato; aunque en el caso de novación no probada, debió exigirse de los terceros el cumplimiento del contrato ó obligación novada, y no la escrituración del boleto primitivo; sin embargo, conviene hacerse cargo de la prueba producida si evidenciaba la insubsistencia de la acción producida. Si lo que el actor perseguía con su acción, fuese que los terceros cumplieran con la obligación novada, aún en este supuesto, la prueba fué considerada ineficaz. El art. 1193, Cód. Civ., dispone que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 200 pesos, deben hacerse por escrito, y no pueden ser probados por testigos; y el art. 180, Cód. de Proc., dice que la prueba de testigos no será admitida en los casos que establece el Cód. Civ., salvo que existiese un principio de prueba por escrito. Agregá, que se considera principio de prueba por escrito, todo documento ó manifestación constatada en juicio, que emane del adversario y que haga verosímil el hecho litigioso. ¿Existía un principio de prueba por escrito constatado en autos? En caso afirmativo, la prueba testimonial era procedente; en caso negativo, ella es inadmisibles y debía desestimarse. El actor sostuvo que existía el principio de prueba por escrito, y lo hacía consistir en una carta y un telegrama. Esas piezas no constituyen el principio de prueba por escrito de que habla el art. 180, Cód. de Proc. Para que este extremo exista, preciso es que se trate de un documento ó manifestación que haga verosímil el hecho litigioso. Será siempre inoficioso argumentar con documentos ó manifestaciones para establecer el principio de prueba por escrito, si ellos no hacen verosímil el hecho litigioso. Para que un documento ó manifestación dados hagan verosímil un hecho determinado que forme la materia de un litigio, es indispensable que alguna relación tengan con éste, y que esa relación sea más ó menos directa. Si esto no sucede, ¿en qué razón lógica se fundaría la probabilidad ó verosimilitud del hecho? Si la carta, ni el telegrama, tenían relación alguna, ni siquiera remota, con el hecho litigioso, es decir, con el contrato de compraventa que se pretendía haber celebrado los terceros con el actor. El texto de esos documentos no autorizaba en manera alguna semejante conclusión. Tanto la carta



## 2. Boleto—La cesión de derechos á un boleto de compra-

como el telegrama, lo mismo podrían referirse al supuesto contrato de compraventa, como á cualquier otro hecho completamente distinto. Más claro: como ni la carta ni el telegrama contenían indicación alguna capaz de hacer presumir la verosimilitud de la celebración del contrato que se atribuía á los terceros, bien podían aplicarse á cualquier hecho completamente ajeno al hecho litigioso. Ambos instrumentos pudieron ser dirigidos por los terceros en el carácter de simples corredores ó comisionistas, hecho perfectamente verosímil, si se tiene en consideración que los terceros eran corredores ó comisionistas de oficio. De autos no constaba, pues, la existencia de un principio de prueba por escrito; y entonces era impertinente la prueba testimonial producida. Pero, en el supuesto de que fuera legal la testimonial que obraba en autos, siempre se tendría que ésta era ineficaz para probar la participación de los terceros en el contrato de compraventa. El art. 1137, Cód. Civ., dice que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada á reglar sus derechos; y según el art. 1323, habrá compraventa cuando una de las partes se obligue á transferir á la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue á recibirla y á pagar por ella un precio cierto en dinero. De las declaraciones no se desprendía que hubiese llegado á existir entre los terceros y el actor esa armonía ó declaración de voluntad común sobre hecho ó derecho alguno. Ninguno de los testigos presenció que hubiese habido acuerdo de voluntades sobre la cosa, el precio y demás condiciones propias del contrato de compraventa —art. 1323 y concordantes. — Las afirmaciones de los testigos eran vagas y no versaban sobre hechos concretos, constitutivos del contrato que se decía celebrado. El actor argumentó con la confesión del comprador directo, según la cual los terceros llegaron á formar parte del sindicato que adquiría el inmueble de referencia, constituyéndose así en compradores, y habiendo tenido en ese carácter conferencias con el abogado del actor para tratar puntos referentes á prórrogas de plazos y á intereses. No es dudoso que esa confesión del comprador no puede afectar á los terceros, por ser parte interesada en el asunto, pues es obvio que al comprador le convenía comprometer á los terceros para dividir su responsabilidad. Pero, no es eso sólo; existe una razón legal de mayor fundamento, si cabe, en virtud de la cual queda escludida toda idea de responsabilidad de parte de los terceros, en razón de la confesión espresada. Es un principio de derecho que la confesión judicial hace prueba completa *contra el que la ha prestado*; más no contra terceros. — Escribo, *Confesión judicial*. — La confesión judicial prueba, pues, contra el confesante, pero no contra tercero.

2. Porque es una verdadera cesión de los derechos adquiridos en virtud del contrato de compraventa. Aunque verse la cesión sobre bie-



venta de inmuebles, debe otorgarse en el sello correspondiente—Civ., tom. 10, pág. 366. Ser 5ª (tom. 37).

3. **Boleto**—La forma de pago contenida en el boleto de compra de inmuebles no está sujeta al impuesto de papel sellado—Civ., tom. 11, pág. 351. Ser. 5ª (tom. 38).

**Boleto**—Véase: *Título, 7; Turno, 2.*

1. **Boleto de compraventa**—Si el litigio y las senten-

---

nes raíces, debe estenderse en papel sellado, porque ella no importa la transmisión del dominio de los mismos, sino de los derechos del comprador para que el nuevo adquirente pueda solicitar la escrituración correspondiente. No es, pues, un boleto de compraventa como el anterior, para que pueda sostenerse que no está sujeto á sello por versar sobre bienes raíces: es una cesión de derechos que puede ó no ser estendida en escritura pública y que, por consiguiente, debió ser otorgada en papel sellado.

3. Porque se trataba de un boleto simple sujeto á ser convertido á escritura pública para producir efectos legales.

1. Esta cuestión fué resuelta por mayoría. Para dar una idea acabada de esta cuestión, vamos á exponer sus antecedentes. Se demandó á una sucesión para que escriturase dentro de tercero día, y bajo apercibimiento de hacerlo el Juzgado de oficio, 229 leguas de terreno en Santiago del Estero, de acuerdo con el contrato de compraventa á que se hacía referencia. La sentencia de 1ª Instancia, resolvió: «que la sucesión está obligada á escriturar las 229 leguas de campo en Santiago del Estero á que se refiere la demanda, dentro del término de diez días, *bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho, etc.*» Todo el contexto de la sentencia, era perfectamente armónico con la parte dispositiva que queda transcrita. La sentencia de la Cám., confirmó la anterior, sin modificación alguna, y por consiguiente ella mandó como la sentencia del Inferior, que se escriturasen los campos de la referencia. La parte dispositiva del fallo, decía así: «Por lo que resulta de la votación de que instruye el precedente acuerdo, se confirma, con costas, la sentencia.» El contenido del acuerdo se adaptaba perfectamente con la parte dispositiva precedentemente transcrita. Ni la demanda perseguía la elevación á escritura pública del boleto de compraventa de la referencia, ni las sentencias dictadas resolvieron tal cosa. La sentencia debe ser dictada con arreglo á la demanda, ó sea á las acciones deducidas, de conformidad con la doctrina del art. 216 del Cód. de Proc. Si la demanda buscaba la escrituración de los campos, lo que vale decir, el otorgamiento de la escritura de transmisión del dominio de esos campos, mal habrían podido dictarse las sentencias antes citadas sobre la elevación á escritura pública del boleto de referencia, supuesto que

cias recayeron sobre escrituración de la propiedad y no del boleto de compraventa, la escritura otorgada judicialmente no puede ser anulada—Civ., tom. 11, pág. 333, Ser. 3<sup>a</sup> (1, 58).

este punto no formaba la materia del litigio. Se demandó el otorgamiento de la escritura de los campos vendidos, y las sentencias, bien ó mal dictadas, mandaron que esa escritura se otorgase por la sucesión demandada. Esos fallos no mandaron elevar á escritura pública el boleto privado de compraventa, porque no versando sobre este el litigio, no podían resolver semejante cosa. De acuerdo con esas sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, y en ejecución ó cumplimiento de las mismas, el Inferior mandó que un escribano que designó estendiera la escritura *judicial* de venta á favor de los actores. De esa resolución reclamó é hizo cuestión la sucesión, pero el Inferior insistió en su mandato anterior y la escrituración se llevó á cabo sin oposición ya de parte de la sucesión demandada. Estendida la escritura en Octubre de 1891, y transcurridos próximamente cuatro meses, se presentó nuevamente la sucesión, pidiendo al Juzgado dejara sin efecto, sin más trámite, la escritura pública de venta de las tierras en litigio que había otorgado á favor del actor. Fundaba el pedimento diciendo que las sentencias de primera y segunda instancia citadas, habrían condenado á los demandados simplemente á elevar á escritura pública el boleto ó instrumento privado en que se había celebrado la promesa de venta; que las sentencias no mandaron que se otorgase la escritura definitiva del contrato de venta, sino que la promesa fuese reproducida en escritura pública; que al otorgar el Juzgado la escritura definitiva del contrato de venta, como lo había hecho, había incurrido en un gravísimo error de entendimiento de esas resoluciones, desde que ellas sólo mandaban elevar á escritura pública el boleto ó documento privado; que, finalmente, el Juzgado no había podido otorgar la escritura de oficio sin la previa negativa ó rebeldía de los demandados; que así el Juzgado debía sin más trámite volver sobre el error cometido y proveer de acuerdo con lo solicitado.—Los dos fundamentos alegados eran de todo punto inexactos; de autos constaba todo lo contrario, según queda establecido. No existía tal error. El juez *a quo* otorgó la escritura de transmisión del dominio, porque así lo había resuelto por un auto que quedó consentido y ejecutoriado, y en cumplimiento de las dos sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que entendía así, lo mandaban; como lo declaró por otro auto igualmente consentido. Si no medió, pues, el error de que se hacía mérito por los demandados, si tampoco resultaba cierto que el Inferior hubiese procedido á otorgar la escritura, sin estar habilitado para ello, es incuestionable que el pedimento fallaba por su base, y se colocaba en la categoría de una pretensión manifiestamente ilegal, porque importaba insistir en lo que ya había sido materia de resolución ejecutoriada. De todo lo considerado se





2. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto de compraventa procede su conversión a escritura pública, pero no la definitiva del inmueble á que se refiera el contrato—Civ., tom. 13, pág. 174, Ser. 3ª (tom. 60).

3. **Boleto de compraventa**—Si la demanda pretende el otorgamiento de la escritura definitiva de compraventa y no la del boleto privado, debe ser rechazada—Civ., tom. 13, página 218, Ser. 3ª (tom. 60).

4. **Boleto de compraventa**—Si por el boleto de compra-

---

deduce la justicia del auto, en que el Inferior no hacía lugar, con costas, á la referida gestión. La minoría dijo que «en presencia de las consideraciones que fundan el acuerdo de la Cám., y que fijan la verdadera inteligencia de la ejecutoria, el Inferior no ha podido otorgar escritura definitiva del contrato, sino del boleto ó promesa de compraventa á los efectos de los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.»

2. Esta es la jurisprudencia sustentada por la mayoría de la Cám. Véase Inst., tom. 8, verb. *Boleto de compraventa*, núm. 1.

3. Y el rechazo debe hacerse aun de oficio, dice la Cám. Véase Instituta, tom. 8, verb. *Boleto de compraventa*, 3, 7 y 8; *Acción de escrituración*, 1.

4. Aquí triunfó la tesis sostenida por nosotros, de que el boleto privado de compraventa de inmuebles, produce efectos legales sin necesidad de reducirlo á escritura pública. El Dr. González del Solar, que es el único camarista que piensa como nosotros, dijo: según consta de sus respectivos escritos de demanda y contestación, las partes han estado conformes con la rescisión del contrato de compraventa convenido en el boleto, y así se declara por la sentencia del Inferior, disponiéndose además, que el demandado debe restituir al actor, en el término perentorio de diez días, la suma que recibió á cuenta del precio de venta. Considero que este fallo se ajusta estrictamente á derecho, y para fundar mi voto en ese sentido me basta hacer presente que, según una cláusula espresamente convenida en el boleto citado, el actor carece de acción y de derecho para pedir la restitución con otro tanto de la suma que entregó á cuenta del precio, en razón de haberse disuelto el compromiso contraído por los defectos de los títulos correspondientes á la finca vendida. Me refiero á la cláusula en la cual se establece testualmente: «Es condición de esta venta que los títulos han de ser perfectos, y si así no resultara, quedaría ella nula, sin que por eso nazca ninguna acción entre los contratantes.» Por consiguiente y tratándose de una convención que forma para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma, según el principio consagrado por el



venta se estipulaba la rescisión sin reclamo, no procede la devolución de la seña doblada—Civ., tom. 13, pág. 424, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 60).

5. **Boleto de compraventa**—Sólo da acción para pedir su conversión en escritura pública, pero no el cumplimiento del contrato — Civ., tom. 13, pág. 329, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 60).

art. 1193 del Cód. Civ., es para mí indudable que habiéndose declarado disuelta la obligación contraída por los defectos de los títulos notados por el actor en su demanda, carece de acción, como he dicho, para exigir la restitución de la suma entregada á cuenta del precio con otro tanto. El doctor Giménez dijo: El documento con que se instruye la demanda, no confería al actor más derechos que los acordados en los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ. La acción debió, por lo tanto, encaminarse, lisa y llanamente, á solicitar la escrituración que tales preceptos autorizan, toda vez que el referido documento no contiene pacto comisorio en favor del actor. No procedía, pues, demandar la rescisión, ni menos las condenaciones pedidas por el actor; y si aquélla ha sido declarada por el Inferior, débese únicamente á la conformidad manifestada al respecto por demandante y demandado. Fundo en estos motivos y concordantes de la sentencia mi voto por la afirmativa. El doctor Molina Arrotea se adhirió al voto anterior. El doctor Gelly, dijo: La acción instaurada no es procedente, por cuanto no existe el contrato de compraventa que le sirve de fundamento. Y digo que no existe tal contrato, porque, con arreglo al art. 951 del Cód. Civ., la existencia de los actos entre vivos, cuando su validez depende de la forma instrumental — como sucede en el caso *sub-judice*, art. 1184, — comienza el día de la fecha del instrumento; y el que se exhibe no es instrumento público. ¿Cómo podría, entonces, rescindirse lo que no existe ni ha existido jamás? El actor, pues, ha confundido su derecho al ejercitar otra acción que la que le acuerdan los arts. 1185 y 1187, que está muy distante de ser la deducida. Aun cuando me bastaría la precedente consideración, para fundar mi voto por la absolución del demandado, teniendo en cuenta, sin embargo, que en definitiva ambas partes están conformes en dejar sin efecto las obligaciones emergentes del boleto, no veo inconveniente en que así se declare. ¿Por qué la Cám. en este caso no declaró que la acción debió rechazarse de oficio? Simplemente porque su doctrina aplicada á los casos prácticos resulta abiertamente incon-sulta.

5. Aquí volvió la Cám. á su antigua teoría. El caso del núm. 4 fué un mero accidente producido con el solo fin de quebrar la monotonía de sus resoluciones, y á fin de que no se pueda decir que la jurisprudencia de la Cám. es constantemente uniforme.



1. **Boleto privado**—Reconocida la autenticidad de las firmas del boleto privado de compraventa del inmueble, los vendedores están obligados á otorgar escritura de reconocimiento de la propiedad—Civ., tom. 16, pág. 132, Ser. 3ª (tom. 63).

2. **Boleto privado**—Debe estenderse en el sello correspondiente el boleto privado en que se estipula la obligación de otorgar escritura pública—Civ., tom. 20, pág. 168, Ser. 3ª (tom. 67).

3. **Boleto privado**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, la demanda que exige su conversión en escritura pública debe prosperar—Civ., tom. 21, pág. 61, Ser. 3ª (tom. 68).

**Boleto privado**—Véase: *Papel sellado*, 14; *Contrato*, 50; *Pacto comisorio*, 1.

---

1. Los demandados se habían obligado en el documento «á otorgar escritura pública de traspaso de propiedad de la isla Curuzú Chali á una sociedad demandante, reconociendo lo que ésta era la verdadera propietaria, y el demandado había hecho igual reconocimiento en repetidas ocasiones, como director de la sociedad y en estos autos, confesando por lo menos, que convino en traspasar la propiedad de la isla á dicha sociedad y que desde entonces consideró que ésta era la propietaria de la misma». En consecuencia el demandado estaba obligado, decía el juez: «á otorgar escritura pública de traspaso de propiedad de esa isla á la sociedad demandante, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses, como lo disponen los arts. 1185, 1187 y 1188 del Cód. Civ.», siendo el demandado condenado á otorgar dentro de diez días á favor de la sociedad, escritura pública de reconocimiento de propiedad de la isla materia del juicio.

2. Con arreglo al art. 1º de la ley de sellos vigente en el año 1894, debían estenderse en papel sellado correspondiente todos los actos que versasen sobre asuntos ó negocios sujetos á la jurisdicción nacional. El documento constataba la celebración de un acto jurídico en el que las partes se obligaban á celebrar oportunamente y por escritura pública un contrato de arrendamiento—art. 944 del Cód. Civ.—En consecuencia, ese acto debió estenderse en el papel sellado correspondiente, que en el caso, era el que determina el art. 7º de la citada ley de sellos. Esta ley del 94 modificó los términos de los anteriores en cuanto á los actos ó contratos celebrados bajo forma privada.



1. **Bolsa**—Las diferencias de bolsa, aunque prohibidas, fundan una obligación lícita si tienen por origen operaciones anteriores a la vigencia del Cód. de Comercio—Com., tom. I, pág. 423, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Bolsa**—Justificado en autos que las operaciones de

1. La demanda se dedujo cobrando una suma de dinero procedente de diferencias de bolsa; y al pronunciarse sentencia definitiva, el juez de 1ª Instancia declaró inadmisile la acción, por tratarse de actos ilícitos que no producen efecto legal alguno, con arreglo a lo dispuesto en el art. 80 del Cód. de Com. La doctrina del juzgado es exacta, y la sentencia debía ser confirmada si se tratase de actos celebrados después de la vigencia del actual Cód. de Com.—1º de Mayo de 1890;—pero como los actos que daban origen y mérito a la acción deducida, tuvieron lugar antes de 1888, no les son aplicables las disposiciones del Cód. de Com. vig. Aún cuando la prescripción del art. 80, Cód. de Com., haya de considerarse como de orden público y contra leyes de este carácter no pueden invocarse derechos irrevocablemente adquiridos—art. 5º, Cód. de Com.,—tal regla no sería de aplicación a este caso, porque tanto el referido art. 80, como el 86, que es su correlativo obligado, son ambas disposiciones de un carácter punitivo, pues que a la vez que declaran la ilicitud del acto, establecen penas severas contra sus infractores, y es elemental que á leyes de esta naturaleza no puede dárseles efecto retroactivo. Así lo tiene reconocido esta misma Cámara en una causa que corre, publicada en la 4ª serie de sus fallos.

2. Porque tales contratos son ilícitos y no producen efecto legal—art. 80 del Cód. de Com.—y no producen tampoco acción alguna en juicio—art. 78.—El primer art. ha definido las especulaciones llamadas *juegos de Bolsa*, diciendo: que consisten en las ventas y compras que no obligan á ninguna de las partes á la entrega y no deben resolverse sino por el pago de las diferencias entre el día de la compra y el de la entrega, y que dichas operaciones constituyen contratos ilícitos que no producen efecto legal. Este art. es una derogación de la ley de 2 de Noviembre de 1888, é importa una verdadera escepción á los principios generales que reglan la libertad de las transacciones mercantiles; y es por eso que su interpretación debe ser restrictiva y que los jueces deben tener sumo cuidado en su aplicación á fin de no herir los legítimos intereses del comercio honrado, confundiendo los negocios reales y sinceros que demandan las necesidades del verdadero comerciante con las especulaciones ficticias del mero agiotista ó jugador al alza ó baja de los valores. Lo que en el *argot* de la Bolsa—Laurent, tomo 27, núm. 230,—se llama *diferencias de liquidación*, no es otra cosa que el juego de Bolsa. Entre las muchas circunstancias y que los autores reconocen generalmente como presuntiva de esta ilicitud, se cuentan,





bolsa sólo tenían por objeto el pago de las diferencias, debe rechazarse la acción con expresa condenación en costas—(Com., tom. 2, pág. 214, Ser. 5ª (tom. 37)).

### 1. Bolsa de Comercio—No existiendo convenio expreso

principalmente, todas aquellas que tienden á demostrar falta de voluntad originaria en las partes, de entregarse y recibirse los títulos ó valores materia del contrato; la multiplicidad de operaciones contradictorias, ventas y compras importantes en el espacio medio entre dos liquidaciones; arreglo de diferencias, sin entregar ni recibir la posesión efectiva de los títulos ó valores; exageración de negociaciones, con relación á la posición pecuniaria de los operadores; cuando no se hace ni se intenta hacer la entrega recíproca de cosa y precio en el plazo convenido; cuando los mismos operadores son recíprocamente compradores y vendedores los unos á los otros, de los mismos valores ó títulos, etc.:—Balloz, *Repertoire*, Vº «Jeu-Pari», núm. 19; Buchere, *Opérations de la Bourse*, núm. 496; y Dévilleneuve, *Dictionnaire du Droit commercial*, Vº «Jeu de Bourse», núm. 4.—Estas reglas reciben aún mayor fuerza por lo dispuesto en el art. 81 de nuestro Cód., de que todo contrato de Bolsa obliga á los contratantes al cumplimiento efectivo de las prestaciones estipuladas cuando no se tratare de contratos prohibidos. En la resolución de estas cuestiones debe además tenerse presente que para que la excepción de juego pueda prosperar, opuesta contra un corredor de Bolsa, se requiere la prueba plena de que éste, al ejecutar la operación, sabía que su comitente no quería otra cosa que entregarse al juego de diferencias. Bedarride se expresa así en el núm. 303 de su tratado sobre las Bolsas de Com.: «Cuanto más grave es la responsabilidad del agente de cambio, más cuidado debe tenerse en exigir una prueba positiva y cierta de la imputación de que es objeto. Pues bien, esta prueba no puede consistir en el hecho de que la parte haya tenido intención de jugar ó de que efectivamente haya jugado; es necesario que se establezca que concurriendo esta intención, el agente de cambio se ha prestado conscientemente á favorecer y consumir la operación de juego». Estas conclusiones, de una justicia evidente, puesto que no se puede castigar al que ha sido víctima de la mala fe de un tercero, están expresamente adoptadas por el art. citado del Cód. de Com.

1. El informe de la Cám. de Comercio de la Bolsa, afirmaba que el uso corriente en plaza es abonar la comisión de venta de medio por ciento por todo artículo del ramo de comestibles y bebidas no comprendido en la tarifa del centro de corredores, desde el 1º de Oct. de 1886 y que rige actualmente, y es ese uso comercial el que debe determinar la comisión que puede exigirse, siempre que no haya sido expresamente pactada—art. 274, Cód. de Com. vig. y art. 379 del Cód. anterior.

sobre comisión á pagar á un corredor de comestibles, el informe de la Bolsa de Comercio forma prueba plena de la usual en plaza—Com., tom. 9, pág. 150, Ser. 3<sup>a</sup> tom. 25 .

**Bosque**—Véase: *Contrato comercial*, 2.

**Buena fe** — Véase: *Excepción de falsedad*, 2; *Billetes*, 1; *Acción reivindicatoria*, 1; *Costas*, 66; *Frutas*, 3.





1<sup>a</sup>. **Caducidad**—Es improcedente la escepción de inhabilidad del título por caducidad de la letra, si el protesto reúne los requisitos que la ley exige —Com. tom. 9, pág. 146, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 27).

2. **Caducidad**—La declaración de nulidad del juicio no puede fundar la escepción de falta de personería á causa de la caducidad del poder especial con que fué iniciado—Civ., t. 11, pág. 224, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

**Caducidad** — Véase: *Aceptante de una letra*, 1; *Escep. de Caducidad*, 1 y 2; *Acciones*, 1.

**Caligrafos**—Véase: *Autenticidad*, 1.

**Caja**—Véase: *Gerente de una sociedad*, 1.

1<sup>b</sup>. **Calumnia**—Corresponde al juez del crimen el conocimiento de la querrela conjunta por calumnia é injuria —Crim., tom. 9, pág. 388, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

---

1<sup>a</sup>. Si el protesto reúne las condiciones requeridas por el Cód. de Com. la caducidad de la letra no puede operarse—art. 676 del Cód. de Com.

2. Declarado nulo el juicio, el mandato queda en todo su vigor, y puede servir para iniciar de nuevo el juicio declarado nulo. La declaración de nulidad del juicio no produce la caducidad del mandato—arts. 1960, 1962 y 1963 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>. De acuerdo con la disposición de los arts. 178 del Cód. Pen., y 25 y 28 del Cód. de Proc.



2. **Calumnia** — No procede la manifestación del acusado como diligencia preparatoria del juicio por calumnia—Crim., tom. 2, pág. 81, Ser. 5ª (tom. 37).

3. **Calumnia**—Sólo procede la acción por calumnia si se imputa un delito determinado—Crim., t. 3, p. 310, S. 5ª t. 38.

4. **Calumnia** — Si de la querella resulta improcedente la acción de calumnia, debe rechazarse sin sustanciación—Crim., tom. 5, pág. 270, Ser. 5ª (tom. 40).

5. **Calumnia**—El agravio moral causado por el calumniador no puede ser demandado, en tanto no se justifique el daño que pecuniariamente haya sufrido la víctima—Civ., tom. 17, pág. 288, Ser. 5ª (tom. 64).

**Calumnia**—Véase: *Acusado*, 1; *Apoderado general*, 1; *Acción*, 3, 4 y 8; *Acusado por calumnia*, 1 y 2; *Querella*, 7.

1ª. **Calumnia encubierta**—Justificada la calumnia encubierta, debe condenarse al reo a un año de prisión y a la multa correspondiente —Crim., tom. 5, pág. 51, Ser. 5ª (tom. 40).

1ª. **Calumnia impresa**—El acusado por calumnia impresa debe justificar quién es el autor del artículo acusado para que sea notificado—Crim., tom. 4, pág. 315, Ser. 5ª (tom. 40).

2. El artículo acusado no llevaba firma alguna; en este caso nadie puede ser considerado como autor sin previa manifestación del editor del diario en que se contiene la publicación acusada.

3. Para que este delito exista es indispensable la imputación de un hecho que tenga obligación de acusar el Min. Fiscal — art. 177 del Cód. Pen.

4. Arts. 177 del Cód. Pen. y 200 del Cód. de Proc. Crim.

5. Véase: verb. *Agravio*, núm. 1.

1ª. Arts. 182 y 183 del Cód. Pen.

1ª. Un reportaje que se decía hecho a una persona que se nombraba en el mismo, fué acusado. El director del diario fué requerido para que dijese si efectivamente el autor había sido la persona reportada. El director manifestó que se refería en un todo a lo que el reportaje expresaba. Entonces el querellante pidió que el juicio se entendiera con la persona aludida. No se hizo lugar porque según la Cám. no constaba que la persona reportada hubiese sido la autora de la publicación.



1<sup>a</sup>. **Cámara**—No puede resolverse en consulta puntos no resueltos por el Inferior—Civ., t. 10, p. 358, S. 5<sup>a</sup> (t. 57).

**Cámara**—Véase: *Avaluación*, 2; *Hurto*, 5.

**Camarista de feria**—Véase: *Feria*, 3.

1<sup>b</sup>. **Cantidad fijada**—La cantidad fijada en la póliza del seguro forma prueba plena con respecto al asegurado, siendo de su cargo la prueba en contrario—Com., tom. 1, pág. 20, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>c</sup>. **Cantidad líquida**—El embargo preventivo sólo puede dictarse si existe cantidad líquida exigible—Civ., tom. 10, pág. 431, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 57).

**Cantidad líquida**—Véase: *Documento privado*, 3; *Inhabilidad de título*, 1; *Obligación de hacer*, 1; *Peritos*, 2; *Embargo preventivo*, 24 y 36.

1<sup>d</sup>. **Capacidad**—Las preguntas como diligencias preparatorias del juicio, sólo pueden versar sobre la capacidad del hecho, pero no sobre el derecho á litigar—Civ., tom. 11, pág. 8, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

1<sup>a</sup>. Por cuanto á cada funcionario del orden judicial le corresponde defender su jurisdicción por los medios legales, sin necesidad de consultas al Superior.

1<sup>b</sup>. Véase verb. *Asegurador*, n° 2.

1<sup>c</sup>. Por cuanto la forma de practicarse el embargo preventivo está regida por la ley del juicio ejecutivo—art. 451 del Cód. de Proc.—y el mandamiento en el juicio ejecutivo, sólo procede por suma líquida y exigible—art. 464, *ibid*.

1<sup>d</sup>. El inc. 1° del art. 67 del Cód. de Proc. tiene un alcance limitado en cuanto á que sólo autoriza interrogaciones sobre la personalidad del demandado, esto es, sobre su aptitud para comparecer en juicio, sea por su propio derecho, sea en representación de otro; mas de ninguna manera las que puedan referirse ó afectar directa ó indirectamente al fondo de la contienda á ventilarse, pues como lo observa Manresa, comentando el texto de la ley española, los ejemplos en ella enumerados se refieren á la personalidad del demandado, no con el objeto de investigar si puede ó no ser responsable á las resultas de la acción que se entable contra él, sino para conocer si una vez interpuesta la demanda reúne las condiciones que las leyes exigen para que venga obligado á comparecer en juicio para contestarla.



**Capacidad** — Véase: *Sentencia*, 12.

**Capellanía** — Véase: *Posesión*, 7.

1<sup>a</sup>. **Capital** — El pago del capital sin intereses y costas no basta para levantar un embargo — Com., tom. 9, pág. 61, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

**Capital** — Véase: *Consignación*, 3; *Sociedad*, 3.

1. **Capital depositado** — Si existe pacto expreso sobre capitalización trimestral de intereses, aunque figure un límite al capital depositado, deben liquidarse sobre todo el depósito, pues su admisión importa una modificación; la gratuidad debe probarla el que la alega — Com., tom. 1, pág. 277, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>b</sup>. **Capital social** — Para que su devolución pueda ser decretada, debe justificarse plenamente la entrega — Civ., t. 17, pág. 267, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 64).

**Careo** — Véase: *Testigos*, 22.

1<sup>c</sup>. **Cargador** — Tiene derecho para negar á los acarreadores subsiguientes intervención en el juicio sobre devolución de fletes iniciado contra el acarreador — Com., t. 2, pág. 106, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 37).

**Cargador** — Véase: *Acarreador*, 1, 2 y 3.

1<sup>d</sup>. **Cargo** — El error en el cargo no puede fundar la nulidad de actuaciones posteriores — Com., t. 1, p. 193, Ser. 5<sup>a</sup> t. 36.

1<sup>a</sup>. Porque el embargo garante toda la ejecución en la que están comprendidos el capital, los intereses y las costas.

1<sup>b</sup>. Arts. 1184, inc. 3<sup>a</sup> y 1663 del Cód. Civ.

1<sup>c</sup>. La demanda estaba ya contestada cuando el demandado pidió que la acción se siguiera con otro cargador que decía quería asumir las responsabilidades de aquella. Después de contestada cualquiera acción, ya no es posible alterar el cuasi contrato de litiscontestación. Por otra parte en el caso especial del sumario los arts. 170 y 171 del Cód. de Com., hacen inoficiosa esa intervención.

1<sup>d</sup>. Se alegó la nulidad del cago porque se decía que el escrito había sido presentado sin firma de letrado, lo que no era exacto pues la tenía. No se hizo lugar por cuanto esa causal no está comprendida en ninguno de los casos previstos por el art. 237 del Cód. de Proc.



2. **Cargo** — Los términos á los efectos de la prueba, se cuentan por el cargo puesto al escrito y no por la fecha del proveído — Com., tom. 4, pág. 305, Ser. 5ª (tom. 39).

**Cargo** — Véase: *Escrito*, 5.

1. **Caricaturas** — La injuria por medio de grabados ó ca-

2. El cargo fué puesto cuatro días antes de vencer el término de prueba, cuando aún había tiempo de dar cumplimiento al precepto de los arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.; pero fué proveído el día en que vencía el término probatorio. Presentado el escrito en tiempo hábil, el decreto tardío no puede perjudicar á la parte por cuanto entra en la excepción del art. 118.

1. Si bien el Cód. Pen., al legislar sobre injurias y calumnias no ha designado el grabado como medio de injuriar, como lo han hecho los códigos español y francés que le han servido de guía y modelo, ello no quiere decir que no esté legislado el punto, pues se ha omitido el método casuístico de aquellos, adoptando fórmulas y declaraciones generales en las que podrán tener cabida numerosos hechos criminosos. Así como el Cód. Pen., no se ha ocupado espresamente de la calumnia ó injuria por la prensa, y sólo lo ha hecho incidentalmente en el art. 184, al establecer que en los casos de injuria por la prensa, la satisfacción pública que se debe insertar en el impreso ó periódico en que se hizo la ofensa, y se ha considerado la prensa comprendida en las palabras «ó escritos» á que se refiere el art. 179, como lo ha consagrado la jur. de los Trib., así la caricatura, el dibujo y el grabado, están comprendidos como medio de injuriar en los hechos ó acciones á que se refiere dicho art. 179. Hecho que procede de hacer: *hacer*, significa, como lo dice el doctor Velez-Sarsfield, de acuerdo con Ortolan, una acción de hombres á la vez que designa un suceso cualquiera que ocurre en el mundo de nuestras percepciones y puede producirse por causa ajena al hombre, con participación directa ó indirecta del mismo; y finalmente, por efecto inmediato de su voluntad. Así, pues, hecho con relación al efecto inmediato de la voluntad del hombre, es la forma exterior y tangible de su pensamiento y voluntad; y así la reproducción deliberada por medio del grabado, de una idea ó concepción, sobre cualquier acto realizado, constituye un hecho emanado exclusivamente de la voluntad y pensamiento del autor, por medio del grabado. Casi todos los países civilizados castigan la injuria y desacato á los magistrados y particulares por medio del grabado, pintura, dibujo, signo y caricatura, como Francia, Estados Unidos é Inglaterra. En Francia los escritos ó dibujos castigados como desacato, difamación ó delito de prensa, deben tender á comprometer el honor ó delicadeza del magistrado; y la jurisprudencia da á ambas expresiones un sentido extremadamente lato. No es necesario que la persona sea nombrada, pues nada sería más fácil que eludir la ley. Basta que sea



ricaturas, debe ser castigada con arreglo á las disposiciones penales que rigen el mismo delito cometido por medio de la prensa — Crim., tom. 4, pág. 334, Ser. 5ª (tom. 39).

designada por iniciales ó indicaciones de tiempo, profesión y calidad de una manera cualquiera y se cumple en los tribunales franceses el consejo de Portalis: «No aceptar en esta materia ningún subterfugio». —Barbier, Código explicado de la prensa, núms. 613, t. II, y 408. En Inglaterra se llama *seditions libel*, todo escrito ultrajante por la expresión ó intenciones, y se castiga con multa y prisión. La ley permite discutir y criticar los actos del gobierno con tal que la discusión sea leal y la crítica templada, decente y respetuosa, y no permite que se sospechen sus intenciones y se atribuyan sus actos á cálculos perversos ó fines perversos. —Barbier, Código explicado de la prensa, t. I, pág. 12. — En los Estados Unidos, se llama *libel* á todo escrito, grabado y signo censor ó ridículo, hecho con malévolo y malicioso intento hacia gobiernos, magistrados ó individuos, bastando la tendencia al ridículo, y por la razón de que un hombre tiene derecho á una posición respetable en sociedades y no debe ser injuriado ni degradado ante la opinión de sus vecinos. No se necesita que el nombre sea mencionado, si es suficientemente obvio quien sea la persona lanzada así al ridículo público. —*The American Ciclopedia*, vol. X, págs. 394 y 395, v. *Libel*. —La libertad de la prensa, consagrada por la Constitución Nacional, no puede sufrir con el castigo de delitos comunes cometidos por medio del grabado, dibujo ó caricatura, por cuanto está ya bien establecido el alcance y límite de aquella libertad por tratadistas europeos, americanos y argentinos. El notable constitucionalista doctor Nicolás A. Calvo, dice en la pág. 577, del segundo volumen de su obra Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos: «Sostener que la prohibición al Congreso de dictar leyes que restrinjan la libertad de la prensa, garantiza á todo ciudadano el derecho de decir, escribir ó imprimir lo que quiera sin ninguna responsabilidad pública ni privada, es tan extraño que no puede discutirse seriamente. Tanto valdría decir que todo ciudadano tiene el derecho de difamar al Congreso y comprometer la tranquilidad y reputación de los ciudadanos. Un hombre podría acusar á otro de los crímenes más odiosos, sublevar la indignación de los ciudadanos esponiendo calumnias, turbar y destruir la paz de las familias, incitar rebeliones, disturbios y traiciones contra el gobierno. Con semejante estado de cosas una sociedad no podría existir largo tiempo y los hombres se verían obligados á recurrir á las venganzas personales. Los términos de la enmienda no acuerdan una licencia semejante; no significan otra cosa sino que todo ciudadano tendrá derecho de decir, escribir, imprimir su opinión sobre cualquier asunto, bajo las restricciones de no herir á nadie en sus derechos, en sus bienes, en su reputación, no turbar la tranquilidad pública y de no intentar el derro-

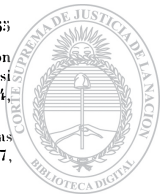




1. **Carta**—La garantía de una obligación, aún cuando resulte de una carta, está sujeta al impuesto de papel sellado.—Com., tom. 9, pág. 54, Ser. 3ª (tom. 25).

camiento del gobierno». En igual sentido se expresa el juez Blackstone, cuando dice: «Todo hombre tiene el derecho de hacer conocer su opinión sobre cualquier materia: pero si publica *cosas perjudiciales é ilegales*, es responsable de las consecuencias de su temeridad». Ejercite el artista su talento y arte respetando el honor y la justa consideración que merecen los gobiernos y particulares, ridiculizando las costumbres malas, fustigando vicios, enseñando y enalteciendo los buenos ejemplos, llevando la risa y la alegría culta á sus lectores; pero sin víctimas, ni individualizaciones, ni mala enseñanza, como lo hacen los numerosos periódicos de caricaturas de Londres, París, Berlín, etc. El fiscal Dr. Segovia al dictaminar en esta causa decía: «Sabios espositores de la Constitución Norte Americana, como Story y Kent, nos advierten que el uso desenfrenado de la palabra escrita ó hablada es tan fatal para la libertad como para el despotismo; que todo hombre libre tiene un derecho indiscutible para hablar, escribir y publicar sus ideas sobre todas clases de asuntos; pero es responsable del abuso de ese derecho; de modo, que si publica cosas inconvenientes, maliciosas, dañinas ó perversas, debe cargar con las consecuencias de su temeridad. Agregaré con la autoridad de esos mismos espositores, que cuando la Constitución Argentina, á imitación de la Norte Americana, dispone en su art. 32 que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ó establezcan sobre ella la jurisdicción federal, tales limitaciones no comprenden á las legislaturas locales ni á la jurisdicción común ó no federal. Por consiguiente, al aplicar los tribunales locales el Cód. Pen., como una ley municipal, diré así: el Congreso y esos Tribunales proceden como autoridades locales que gobiernan el municipio de la capital, y no se infringe, por tanto, el mandato constitucional del art. 32. Finalmente, la crítica y la caricatura, tienen su campo propio y su terreno vedado. La injuria, se haya cometido por medio de la prensa, no cambia la naturaleza del delito desde que el hecho se halla previsto y penado por el Cód. Pen., y la libertad de imprenta garantida por la Constitución no autoriza á injuriar ni á cometer ninguno de los delitos comunes que pueden perpetrarse por medio de la prensa, lo cual difiere en ejecución, pero no altera su esencia.

1. Está sujeto á la ley de papel sellado todo *acto, contrato, documento ó obligación* que verse sobre asuntos ó negocios sujetos á la jurisdicción nacional—art. 1º, ley de sellos de 1891.—El documento es de obligación, como cualquier otro, llámese carta ó lo que se quiera; y tan es así, que el interesado lo presentó en juicio para hacer valer los derechos que de él resultaban. No es necesario que la ley diga expresamente que la correspondencia privada está sujeta al impuesto de sellos,



1<sup>a</sup>. **Cartas**—No procede el pago de multa por infracción al impuesto de papel sellado á la parte que recibió la carta, si no se justifica su aceptación de la propuesta — Com., tom. 4, pág. 220, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 39).

2. **Cartas**—Puede exigirse el reconocimiento de cartas misivas á testigos presentados de contrario — Civ., tom. 17, pág. 396, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 64).

**Cartas**—Véase: *Fianzas*, 1; *Papel sellado*, 13.

1<sup>b</sup>. **Carta de crédito**—Los tomadores de una carta de crédito no pueden ser solidariamente responsabilizados por su importe sin pacto expreso — Com., tom. 1, pág. 81, Serie 5<sup>a</sup> (tom. 36).

para que puedan aplicarse las disposiciones del caso, cuando en esa correspondencia se incluye un contrato ó un acto productor de obligaciones y derechos, basta con la prescripción ya mencionada que comprende todo *acto, contrato, documento ó obligación*, entre los cuales, no cabe duda, están comprendidas las obligaciones ó estipulaciones hechas por medio de la correspondencia. Por otra parte, no se ignora que los contratos pueden celebrarse por cartas, según disposición espresa del Cód. Civ.; y si es así, no es discutible que los documentos que los contienen deben observar las prescripciones de la ley de sellos que rige para todo acto ó contrato celebrado, para ser ejecutado en la Capital.

1<sup>a</sup>. La carta decía así: «Como hemos convenido verbalmente, me comprometo en la cantidad de doce mil pesos moneda nacional por sus honorarios, cantidad que le pagaré en cuanto cobre lo que me adeuda la Compañía Nacional de Grandes Hoteles. Queda entendido que dicha suma es para la totalidad de la deuda que me es debida». Como este documento que la misma parte que lo firmaba lo había presentado, como copia de una carta que decía haberla escrito al abogado, no constituye por sí un contrato, aún supuesta su verdad: estaba suscrito tan solo por una de las partes y no por la otra, y ésta ni lo había presentado ni aceptaba la verdad de su contenido; resultaba que no era un verdadero contrato por no haberse comprobado el concurso de voluntades.

2. La carta cuyo reconocimiento se solicitó era atribuida al mismo testigo, y formando parte de una repregunta el hecho relativo al envío de la carta, su reconocimiento queda comprendido entre las facultades de que puede hacer uso el litigante — art. 192 del Cód. de Proc. — como un medio lícito de constatar el grado de veracidad del testigo presentado por el adversario, sobre los hechos llamado á declarar.

4<sup>b</sup>. Según nuestra ley, la solidaridad no se presume, y debe nacer ó de la ley ó de términos inequívocos del título constitutivo de la obliga-



**Carta de pobreza**—Véase: *Arraigo*, 3.

**Casa de ejercicios**—Véase: *Adulterio*, 4.

**Caución**—Véase: *Embargo preventivo*, 35.

**Causa civil**—Véase: *Jurisdicción correccional*, 1.

1<sup>o</sup>. **Causas correccionales**—Puede recibirse prueba en causas correccionales después del juicio verbal, si el juzgado lo cree pertinente—Crim., tom. 4, pág. 403, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 39).

**Causa correccional**—Véase: *Jurisdicción correccional*, 1; *Prueba*, 8.

**Causa criminal**—Véase: *Excepción*, 11; *Costas*, 35; *Recurso*, 2.

1<sup>o</sup>. **Causa indeterminada**—Su alegación después de la hora señalada para posiciones, no puede ser tomada en consideración—Civ., tom. 16, pág. 323, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

**Causa de justificación**—Véase: *Agente fiscal*, 2.

**Cédula**—Véase: *Notificación*, 3.

**Certificado**—Véase: *Diligencia preparatoria*, 2.

1<sup>o</sup>. **Certificados médicos**—Los espeditos sin previo

ción—arts. 699 y 701, Cód. Civ., y 263, Cód. de Com. ant.—En el caso del sumario, no sucedía ni lo uno ni lo otro; luego la obligación contraída quedaba sujeta á las reglas generales de los arts. 674, 691 y 694, Cód. Civ.

1<sup>o</sup>. El art. 576 del Cód. de Proc. Crim., por su colocación en el Cód. después de la acusación y defensa—art. 575 ibíd.—importa acordar á las partes, el derecho de producir más pruebas dentro del término de diez días y por vía de plenario; no existe razón que obste á dicha interpretación, máxime cuando con arreglo á lo dispuesto en el art. 13, en los casos de duda debe estarse á lo que sea más favorable al procesado.

1<sup>o</sup>. El art. 133 del Cód. de Proc., en su 2<sup>o</sup> aparte dice que si el citado á posiciones «no compareciere á declarar» el juez al sentenciar lo tendrá por confeso si el interesado lo pidiere. El art. 127 establece que la citación se hará «bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer *sin justa causa* será tenido por confeso». Si al excusar su inasistencia, el citado no aduce causal alguna, no le será posible al juez determinar si la causa que impidió la comparecencia *fué justa ó no*.

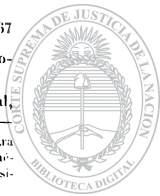
1<sup>o</sup>. La Cám. no funda su resolución en principio ni ley alguna. Por el contrario ha sido y es constantemente admitido todo certificado médico acreditando la enfermedad del que debe absolver posiciones á los efec-

mandato judicial y no ratificados carecen de fuerza probatorio—Civ., tom. 22, pág. 356, Ser. 5ª (tom. 69).

1. **Cesión**—Si la cesión del acreedor comprende capital,

tos de excusar su no comparecencia. Y es así como esta misma Cámara tiene resuelto que no siendo negada la autenticidad del certificado médico, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de posiciones.—Véase tom. 10, pág. 78, Ser. 4ª (tom. 42).

1. El cesionario del crédito no contrae obligación alguna hacia el que devengó los honorarios cedidos. Esta cuestión puede plantearse en la siguiente forma: *¿El cesionario de un pleito responde por los honorarios del procurador y abogado que representaron defendiendo al cedente en ese mismo pleito, por el hecho solo de cesión?* El caso debe resolverse negativamente por las siguientes consideraciones: 1ª Es evidente que los créditos litigiosos pueden ser objeto de una cesión—art. 1446, Cód. Civ.—En esto, nuestra legislación se ha separado del Derecho Romano que prohibía la enajenación de las cosas litigiosas, y, por consecuencia, una acción no era cesible desde que estaba intentada. 2ª No debe confundirse la *renta* de un derecho que tenemos sobre una cosa, con la *cesión* de un derecho cuando nos está obligada una persona. Por eso, v. gr., las disposiciones relativas á la cesión de crédito no son aplicables á la cesión de derechos hereditarios, como lo ha declarado la Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Ser. 3ª. En toda cesión actúan siempre tres personas: cedente, cesionario, deudor cedido; cuando éste no existe, no hay cesión de créditos. 3ª La cesión existe en los derechos litigiosos, porque concurren los tres factores antedichos, y porque aunque no haya reconocimiento de crédito, se ha cedido la esperanza más ó menos fundada, de un crédito realizable. 4ª La cesión de un crédito no se equipara á la subrogación legal, como nuestro Código lo confunde algunas veces—art. 450, nº 2—porque el cesionario ejerce sus derechos por todo el crédito sin consideración al desembolso hecho, mientras en la subrogación sólo lo hace hasta la concurrencia de lo desembolsado—art. 771, nº 1.—5ª Ahora bien; efectuada en debida forma la cesión de una acción litigiosa, con arreglo á lo establecido por el art. 1435 del Cód. Civ., es decir, por escritura pública, ó por acta judicial hecha en el respectivo expediente, y cumplida la obligación expresa de notificar al deudor, esto es, á la contraparte, la propiedad del crédito queda transmitida por la entrega del título correspondiente. Se efectúa esa transmisión aún respecto de terceros que tengan un interés legítimo en contestar la cesión para conservar después de ella, derechos adquiridos—art. 1459 del Cód. Civ.—Entre estos terceros, se encuentran, en primer lugar, como acreedores del cedente por sus honorarios regulados ó devengados, el abogado y procurador que han locado sus servicios al cedente, para defenderlo y representarlo en el





intereses y costas, el procurador carece de personería para exigir su pago al cesionario ó al deudor—Com., tom. 3, pág. 12, Ser. 5ª (tom. 38).

pleito cedido. Como acreedores del cedente que son, mientras el cesionario no ha hecho notificar la cesión, pueden embargar el crédito cedido, ó podrían enervar los efectos de la notificación al deudor y aún su aceptación de la cesión, cuando, con previsión, hubiesen obtenido un embargo anterior del crédito cedido. 6ª Entre tanto, en circunstancias normales, en que se hubiese cedido el crédito litigioso con toda regularidad, al cesionario no le une ningún vínculo de derecho con el antiguo abogado y procurador del cedente con el cual efectuaron éstos un contrato de locación de servicios. Ese contrato, para el cesionario, es una *res inter alios acta*; lo mismo que el contrato de cesión de créditos es *re inter alios acta* para el abogado y procurador, los cuales quedan comprendidos, en todo caso, entre los acreedores del cedente, con las atribuciones que pueden ejercitar como tales, demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio ó en fraude de sus derechos—art. 961, Cód. Civ.—Comprobado el fraude, el cesionario del crédito podría proceder con arreglo á lo establecido por el art. 966, es decir, hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, ó dando fianza; pero esta conducta del cesionario no sería determinada por la obligación en que estuviera de satisfacer honorarios de servicios no solicitados por él, sino una consecuencia de la enajenación fraudulenta del cedente. 7ª El abogado y el procurador no podrían invocar derechos que quisiesen deducir del art. 3266 del Código Civil, título preliminar De la trasmisión y derechos en general, que preceptúa: «las obligaciones que comprenden al que ha transmitido una cosa, respecto á la misma cosa, pasan al sucesor universal ó al sucesor particular; pero el sucesor particular no está obligado con su persona y bienes, por las obligaciones de su autor, por las cuales lo representa, sino con la cosa transmitida». Dando á la voz *cosa* la significación más amplia, es decir, también de *objeto incorporal*, como son los derechos y acciones que pueden constituir la cesión de créditos, esta disposición legal citada no favorece los intereses del abogado y procurador. En efecto, el crédito proveniente de sus honorarios no grava la cosa misma, los derechos que se discuten; no es inherente á ellos, es decir, al crédito cedido. Tan es así, que esos honorarios se hacen efectivos aún cuando se pierda la acción ó escepción que se defiende; se hacen efectivos antes de la terminación definitiva del pleito, y sobre bienes del defendido que no son objetos del crédito litigioso. Y si no gravan la cosa misma, no podría perseguirse su cobro en cualquier poder á que pasaran ó estuviesen, ya sea en el del primer cesionario ó en el de los cesionarios sucesivos. 8ª La locación en general y la locación de servicios en particular, no engendra sino acción



2. **Cesión**—El cesionario del esposo es parte en la sucesión de la esposa en tanto se trate de bienes gananciales—Civ., tom. 12, pág. 416, Ser. 5ª (tom. 59).

3. **Cesión**—El cesionario de fondos embargados debe deducir acción ante el juez embargante—Civ., tom. 12, pág. 431, Ser. 5ª (tom. 59).

4. **Cesión**—Si el derecho cedido no existía al hacerse la

personal entre las partes contratantes; las cuales se responden recíprocamente por el cumplimiento de la obligación. Claro está que si el cesionario acepta espresamente cargar con el pago de honorarios y continuar la locación de servicios anteriores, se hace responsable de las obligaciones del cedente. En cualquier otro caso, el abogado y procurador no tienen acción para perseguir el cobro de su crédito sobre el crédito cedido. 9ª Como acreedores del cedente, lo son en su carácter de meros acreedores quirografarios. No tienen ningún privilegio por sus honorarios sobre la generalidad de los bienes del deudor, incluso sobre los derechos cedidos, de que habla el inciso 1º del art. 3879 del Cód. Civ., pues él se refiere a los honorarios devengados por servicios prestados en el interés común de los acreedores y de la administración del concurso. 10. Concordante con esta interpretación, la jurisprudencia civil ha establecido que el cesionario no tiene relación alguna de derecho con el abogado y procurador del cedente: que el mandato solo produce relaciones jurídicas entre mandante y mandatario; que si el cesionario en el acto de la cesión no ha contraído la obligación de satisfacer honorarios anteriormente devengados, no está en el deber de pagarlos, ni de manifestar siquiera conformidad ó disconformidad con honorarios á regularse por cuenta del cedente—Véase tom. 4, Ser. 2ª, pág. 93, Jur. Civ.—La jurisprudencia comercial también se ha pronunciado en el mismo sentido. Ha establecido que no habiendo contraído el cesionario, por la escritura de cesión, obligación alguna hacia el procurador del cedente, éste no tenía personería para reclamarle el importe de la liquidación de sus honorarios—Véase, t. 38, numeración general, p. 12.—11. Á fin, pues, de evitar dificultades que surgen en la práctica, en el cumplimiento de las obligaciones de la cesión de créditos, consideramos que la cesión no sólo debe notificarse al dñdor, sino que debe pactarse espresamente á cargo de quién ha de quedar el pago de los honorarios del abogado y procurador, haciendo conocer á éstos el convenio. Si no, se corre el riesgo de que el cesionario—que *stricto juris* no está obligado á satisfacerlos,—sea molestado por otro pleito además del que ha comprado; ya fundado en el cobro de ellos, ya en la revocación de cesión, como tiene derecho todo acreedor dentro de las condiciones legales antes señaladas.

4. Arts. 1476 y 1477 del Cód. Civ.



cesión, el cedente está obligado á devolver el precio percibido—Civ., tom. 14, pág. 90, Ser. 5ª.

5. **Cesión**—El deudor cedido está obligado al pago, sin que puedan afectar el derecho del acreedor los embargos que le hayan sido notificados con fecha posterior á la cesión—Civ., tom. 17, pág. 110, Ser. 5ª (tom. 64).

6. **Cesión**—Si el derecho cedido no existía al hacerse la cesión, el cedente está obligado á devolver el precio percibido—Civ., tom. 17, pág. 178, Ser. 5ª (tom. 64).

7. **Cesión**—El cesionario carece de personería para alzarse contra las resoluciones, rechazando la cesión, consentidas por el cedente—Civ., tom. 17, pág. 344, Ser. 5ª (t. 64).

8. **Cesión**—Consentido el auto, que acepta la cesión, debe desecharse la oposición del deudor cedido—Civ., tom. 19, pág. 85, Ser. 5ª (tom. 66).

9. **Cesión**—El acreedor que á la vez reúne el carácter de cesionario, tiene derecho para exigir judicialmente del deudor el importe de la deuda embargada materia de la cesión—Civ., tom. 19, pág. 298, Ser. 5ª (tom. 66).

**Cesión**—Véase: *Contrato*, 7; *Posiciones*, 14; *Derechos hereditarios*, 2; *Honorarios*, 27; *Arraigo*, 15.

1. **Cesión de bienes**—Presentada ante juez incompetente por razón del domicilio, no basta paralizar la ejecución ante los jueces de la Capital—Com., t. 2, pág. 111, Ser. 5ª (t. 37).

2. **Cesión de bienes**—Los gastos judiciales anteriores á

5. Arts. 1437, 1438, 1439 y 1463 del Cód. Civ.

6. De acuerdo con lo resuelto en el n° 4.

9. Las convenciones hechas en los contratos son una regla á la cual las partes deben someterse como á la ley misma.—Arts. 701 y 1197 del Cód. Civ.

1. El juez de La Plata exhortó á las autoridades judiciales de la Capital federal para que remitiesen un expediente seguido contra un deudor concursado en aquella localidad. No se hizo lugar á la remisión por cuanto el concursado estaba domiciliado en la Cap. federal, y de acuerdo con el precepto del art. 718 del Cód. de Proc. el conocimiento del concurso corresponde al juez del domicilio del deudor.

2. Porque los gastos judiciales para que gocen de privilegio deben



la cesión de bienes, no tienen privilegio — Civ., tom. 10, pág. 382, Ser. 3ª (tom. 37).

3. **Cesión de bienes**—El concursado debe entregar la suma en efectivo que confiese tener al presentar la cesión de bienes — Civ., tom. 21, pág. 213, Ser. 3ª (tom. 68).

1. **Cesión de derechos** — Aún cuando la cesión no haya sido aceptada, no procede escepción de falta de personería contra el cesionario — Civ., tom. 13, pág. 312, Ser. 3ª t. 60.

2. **Cesión de derechos** — En tanto no se declare aceptada, debe continuar interviniendo el cedente — Civ., tom. 13, pág. 84, Ser. 3ª (tom. 60).

3ª. **Cesión de derechos** — La de un boleto de compraventa de inmuebles, debe otorgarse en el sello correspondiente — Civ., tom. 10, pág. 366, Ser. 3ª (tom. 37).

**Cesión de derechos** — Véase: *Bienes embargados*, 4.

**Cicatriz** — Véase: *Deformación*, 2.

**Cifras** — Véase: *Adulteración*, 1.

**Circunstancias**—Véase: *Homicidio*, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22; *Adulterio*, 3; *Arma de fuego*, 1; *Homicidio sin circunstancias*, 1; *Lesiones*, 1; *Llave falsa*, 1; *Robo*, 10; *Disparo*, 1, 2; *Atentado á la autoridad*, 1.

**Circunstancias agravantes** — Véase: *Delito*, 2; *Robo*, 10, 16, 17; *Hurto*, 10.

---

devengarse en interés común de los acreedores, siendo evidente que los gastos anteriores al concurso no han podido beneficiar á ese concurso que entonces no existía.

1. Esta escepción la fundó el demandado, en la falta de acción para promover el juicio como cesionario, porque había impugnado la cesión sin haberse aún resuelto el punto. De aquí resulta que la escepción no se fundaba en la falta de capacidad legal, ó de hecho como la llama Freitas, en el actor ó en el apoderado, ó en la falta de documento constitutivo del mandato, sino en la falta de acción del actor. La escepción, como se ve no afectaba al fondo de la cuestión y en tal concepto no pudo prosperar como delatoria debiendo por el contrario ser materia del pronunciamiento definitivo.

2. Contra el auto aprobatorio de la cesión se interpusieron recursos. Mientras éstos no sean resueltos el cesionario no es parte.

3ª. Véase: *Boleto*, nº 2.





**Circunstancias atenuantes**—Véase: *Excarcelación*, 2; *Injurias*, 3 y 4; *Homicidio con circunstancia atenuante*, 1; *Homicidio*, 6, 18; *Disparo*, 2, 3; *Adulterio*, 6; *Pejoración*, 9; *Uxoricidio*, 2; *Embriaguez*, 3.

**Circunstancias calificativas**—Véase: *Homicidio*, 13.

**Circunstancias concurrentes**—Véase: *Injurias*, 4.

1<sup>o</sup>. **Citación**—Las inhibiciones que pesen sobre la propiedad hipotecada, no pueden ser levantadas sin citación—Cív., tom. 9, pág. 344, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

**Citación**—Véase: *Día para el reconocimiento*, 1; *Declaraciones*, 4; *Firma social*, 2; *Posiciones*, 19; *Sellos*, 3; *Domificio*, 3; *Apoderado*, 3.

1<sup>b</sup>. **Citación de evicción**—No procede, al vendedor, si se demanda por derechos personales—Cív., tom. 19, pág. 38, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 66).

1<sup>c</sup>. **Citación de remate**—La afirmación de haber falle-

---

1<sup>a</sup>. Porque el levantamiento de esas inhibiciones afecta á la parte á cuyo favor se anotaron. Si el acreedor hipotecario cree tener un derecho preferente, debe procurar que le sea reconocido por los medios que las leyes procesales determinan, y para esto es necesario oír á la parte que solicita la inhibición.

1<sup>b</sup>. El art. 2108, Cód. Cív., prescribe que el enajenante debe salir á la defensa del adquirente, en el caso de que un tercero le demandare la propiedad ó posesión de la cosa, el ejercicio de una servidumbre ó cualquier otro derecho comprendido en la adquisición, ó le turbase en el uso de la propiedad, goce ó posesión de la cosa. Si la demanda no es sobre propiedad ó posesión de la cosa comprada, ni tiende á turbar el uso de la propiedad ó goce de la posesión, no comprende la citación de evicción. Tampoco se demandaba ó disputaba el ejercicio de ningún derecho comprendido en la adquisición del inmueble; pues la acción instaurada era meramente personal, sobre devolución de exceso de precio, de acuerdo con la prescripción contenida en el art. 1345, Cód. Cív. No versando la acción sobre propiedad ó posesión, ni tendiendo á turbar una ú otra, ni disputándose el ejercicio de una servidumbre ú otro derecho cualquier comprendido en la adquisición, es manifiesto que no procede la aplicación del art. 2108 del Cód. Cív.

1<sup>c</sup>. Al hacerse la citación de remate se hizo la manifestación de que el ejecutado había fallecido. Vencido el término de tres días, el actor pidió que se dictara sentencia por no haberse opuesto escepción, pues la manifestación del fallecimiento no se había acreditado en forma al-



cido el deudor al notificarse la citación de remate paraliza la tramitación—Com., tom. 9, pág. 74, Ser. 3ª (tom. 25).

**2. Citación de remate**—La nulidad opuesta como excepción, es procedente y puede ser resuelta como previa, siempre que se funde en vicios anteriores a la citación de remate—Com., tom. 4, pág. 424, Ser. 5ª (tom. 39).

**Citación de remate**—Véase: *Nulidad*, 5; *Bienes*, 2; *Excepciones*, 14.

**Ciudadano**—Véase: *Excepción de incompetencia*, 2.

**1. Clase determinada**—El comprador que ha contratado por junto una cantidad de objetos, aunque desgajados entre sí y por distintos precios, no puede ser obligado á recibir una parte ó clase determinada—Com., t. 9, p. 488, Ser. 3ª (t. 25).

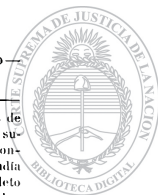
**1. Clasificación**—La de los hechos delictuosos, no importa una falta de respeto al juez, ni puede fundar una corrección disciplinaria—Crim., tom. 9, pág. 449, Ser. 3ª (tom. 25).

**1ª. Cláusula**—La que declara nula y sin valor la venta por

---

guna. No se hizo lugar por cuanto se consideró como suficiente recaudo la manifestación hecha, aunque no comprobada.

1ª. El actor se presentó pidiendo que en virtud de los documentos que acompañaba y del derecho que le conferían los arts. 1185, 1187 y 1204 del Cód. Civ., se condenara al demandado á otorgarle la escritura de venta de los lotes de terreno que se espresaban en el boleto exhibido, con las costas del juicio. Evacuado por el demandado el traslado de la demanda, solicitó se rechazara ésta, con especial condenación en costas, fundándose en que el demandante había dejado vencer con exceso el plazo de veinte días en que debía escriturar, según lo acreditaba el boleto que acompañaba, por cuya razón, haciendo uso de la facultad que le acordaba el contrato, anuló la venta de la referencia. De los antecedentes del asunto, resultaba que el actor se consideraba con derecho para que se le otorgase la escritura pública de compraventa á que aludía el boleto, fundándose en que en dicho boleto no se había determinado plazo alguno para el cumplimiento de la obligación, y que, por consiguiente, era procedente que se cumpliese el convenio de referencia dentro del plazo que prudencialmente se fijase al efecto. Por su parte el demandado no se consideraba obligado á efectuar la escrituración, manifestando que según el boleto, el demandante no había escriturado, ni había intentado escriturar dentro de los veinte días á que aludía el boleto, y que de acuerdo con lo que en dicho documento se establecía, había quedado sin ningún valor el compromiso de venta he-



el transcurso de un término, importa un pacto comisorio — Civ., tom. 11, pág. 203, Ser. 3ª (tom. 58).

cho en remate público en favor del demandante. El juez después de examinar las piezas de convicción de los autos, consideró que había suficientes elementos para declarar que en la compraventa se había convenido en que debía efectuarse la escrituración en el plazo á que aludía el boleto, no obstante haberse omitido espresar ese plazo en el boleto presentado por el actor. Tanto en uno como en otro de los boletos, habían quedado subsistentes enunciaciones que autorizaban á interpretar la voluntad de las partes contratantes de la manera en que lo había sostenido el demandado. En esos documentos existía el enunciado de que el importe del precio se entregaría la mitad al contado en el acto de estenderse la correspondiente escritura que se otorgaría libre de gravamen y de defectos dentro de veinte días de la fecha, decía uno de los boletos; habiéndose omitido poner el número de días en el otro, pero dejando subsistente todo lo demás. Dados estos antecedentes, no es posible admitir que las partes hayan entendido que la venta se hacía sin plazo, como lo pretendió el actor, porque para interpretarlo así, se prescindiría del contenido del mismo boleto exhibido por el demandante, en donde si bien se observaba que se había omitido espresar el número de días, constaba que la escrituración debía hacerse á plazos. Una cosa es, en efecto, que las partes omitan referirse á plazos, y otra cosa es, que no obstante entender que la escrituración debía de efectuarse á tantos días de la fecha, se haya prescindido de llenar el blanco destinado á espresar ese plazo. En el primer caso quedaría demostrado que los interesados no habían fijado plazo ni habían entendido fijarlo, mientras que en el segundo podía observarse que entendieron estipularlo y que sólo omitieron involuntariamente espresarlo. Esa omisión que aparecía en uno de los boletos, estaba suplida con el otro boleto, suscripto por el mismo demandante; y si se observa que en el primero estaba claramente manifestada la intención de fijar el plazo, es evidente que el segundo lo ratifica y lo complementa salvando una omisión, que de no ser tal, haría imposible la inteligencia del boleto. Además en ambos documentos se había establecido que la venta, es decir, el pago del precio, se haría la mitad al contado y la otra mitad á plazo con el 7 por 100 de interés. Se comprende que los interesados hayan convenido que la mitad del precio se abonase en el momento de firmarse la escritura, y la otra mitad después, porque el comprador iba á usufructuar el dinero y la cosa ya vendida y entregada; pero no se explica la obligación de pagar el precio mitad al contado, es decir, cuando se firmara la escritura, y la otra mitad después, con interés, sin haber previsto que el vendedor podía continuar con el inmueble sin efectuar la escrituración, desde que no se había estipulado el plazo para este efecto. Esta es otra consideración que explica á las claras que los interesados enten-



**Cláusula**—Véase: *Administración*, 2; *Donación*, 1.

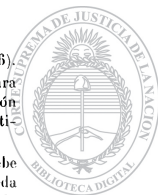
**1ª. Cláusulas**—De redacción ambigua deben interpretarse en sentido favorable al dador de la obligación—Com., tom. 3, pág. 399, Ser. 5ª (tom. 38).

**1ª. Cláusula expresa**—Debe rechazarse la excepción de falsedad de la letra firmada por poder, si se justifica que en el instrumento de mandato existía cláusula expresa que acor-

dieron fijar plazo para la escrituración, siendo, por lo tanto, infundadas las afirmaciones de la parte actora, y que, lejos de demostrar uno de los boletos, dichas afirmaciones, acredita que el pago se convino y que simplemente se omitió espresarlo; omisión suplida en el otro boleto. Es de advertirse que en ambos boletos se ha establecido que transcurrido el plazo dentro del que debía efectuarse la escrituración, quedaba la venta nula y sin ningún valor, siendo de cuenta del comprador los daños y perjuicios que pudiera exigir el vendedor. Esta cláusula surte los efectos del pacto comisorio en favor del demandado, por cuanto se había reservado el derecho de nulificar el contrato en caso de no escriturarse el inmueble dentro del plazo convenido—art. 1203 del Cód. Civ.—El demandado pidió el rechazo de la demanda, amparándose para ello en el boleto que exhibió, y en el cual se señalaba el plazo de veinte días para otorgar la escritura, «*en la inteligencia de que transcurrido ese término, quedará esta venta nula y de ningún valor*», según rezaba dicho documento. Ahora bien: si la venta se hizo á plazo; si el plazo venció sin que el actor se hubiese prestado á la escrituración, era llegado el momento de aplicar la sanción prevista en los boletos de referencia, declarando aquélla nula y de ningún valor, por haber transcurrido el tiempo dentro del cual debió formalizarse el contrato definitivo.

1ª. Art. 218, incs. 2 y 3 del Cód. de Com.

1ª. El pagaré cuyo cobro se demandaba por acción ejecutiva, fué firmado por apoderado general del obligado. El ejecutado opuso la excepción de falsedad, fundado en la insuficiencia del poder que había conferido. Ese poder se agregó durante el término de prueba, y en él se leía la cláusula siguiente: «Para que acepte, otorgue y firme todas las obligaciones, documentos y escrituras que se le exigieren y sean necesarios para el desempeño de este mandato con las cláusulas de derecho». Esa autorización habilitaba al apoderado para obligar á su mandante con relación á terceros por medio de documentos, como son los pagarés, no obstante las responsabilidades que ellos pudieran acarrear contra el mandatario en caso de abuso del mandato; y si el poder era bastante para obligar al mandante con relación á terceros, la excepción de falsedad fundada en la insuficiencia de aquél, es improcedente.



daba esa facultad—Com., tom. 1, pág. 329, Ser. 5ª (tom. 36).

1º. **Cláusulas necesarias**—No es requisito esencial para la validez del poder otorgado por un socio, la transcripción del contrato social; basta la inserción de las cláusulas pertinentes—Com., tom. 1, pág. 121, Ser. 5ª (tom. 36).

1º. **Cláusula penal**—El contrato con cláusula penal debe ser cumplido si lo exige el acreedor, sin que la pena pueda eximir al deudor del cumplimiento, si no existe cláusula expresa—Civ., tom. 10, pág. 120, Ser. 3ª (tom. 57).

**Clausura de casas**—Véase: *Municipalidad*, 1.

**Coacción**—Véase: *Agente de la autoridad*, 1.

**Coacusados**—Véase: *Declaraciones*, 5.

**Código de Comercio**—Véase: *Bolsa*, 1; *Libros de Comercio*, 9.

1º. **Cohecho**—Para que pueda declararse la existencia del

1º. En virtud de lo prescripto en el art. 1004 del Cód. Civ., es indispensable el requisito de la designación, en las procuraciones, los documentos habilitantes, bajo pena de nulidad. La S. C. Federal, ha establecido en varios casos, que esa exigencia de la ley se considera cumplida transcribiendo solamente la cláusula habilitante del contrato, —Ser. 2ª, tom. 11, págs. 33 y 154.—En el poder presentado se encontraba transcrita la cláusula pertinente del contrato social.

1º. Pueden verse los fundamentos consignados en la nota del verb. *Boleto* 1, donde está comprendido el caso resuelto en este sumario.

1º. La cuestión á resolver era si el administrador del Cementerio del Norte había cometido cohecho por haber permitido la inhumación de cadáveres en los nichos llamados de alquiler, no obstante estar prohibida por una ordenanza. Los elementos constitutivos de este delito que según nuestra ley—art. 250, Cód. Pen., concordante con el 177, Código Penal francés,—son tres, á saber: calidad de funcionario en el cohechado; recibo ó aceptación de dádivas ó promesas; y ejecución ó abstención de un acto propio de sus funciones ó deberes—Vide Chauveau y Hélie, *Théorie du Code Penal*, núms. 834 y 845, 6ª edición.—La calidad de funcionario que investía al administrador no había sido puesta en duda y resultaba plenamente probada por las constancias de autos. La prohibición, de inhumar cadáveres en los sepuleros de alquiler, dictada por el Intendente municipal en 23 de Ag. de 1890 y la desobediencia á esa resolución, que sea cual fuere su legalidad, el administrador estaba obligado á respetar, como empleado subalterno, estaba igualmente probada. Queda por examinar el otro elemento esencial del delito, que es



cohecho, no basta la prueba de presunciones — Crim., tom. 4, pág. 75, Ser. 5ª (tom. 39).

**Coherederos**— Véase: *Obligación*, 4.

1. **Comerciante**— La jurisdicción comercial es competente para conocer en la ejecución de un crédito garantido con hipoteca, aun cuando el deudor no sea comerciante — Com. tom. 1, pág. 5, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Comerciante**— Para dictar auto de quiebra, debe justificarse que el deudor ejerce el comercio — Com., tom. 1, pág. 145, Ser. 5ª (tom. 36).

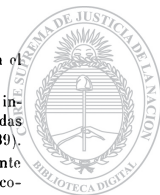
3. **Comerciante**— Las constancias de los libros de los comerciantes forman prueba plena en contra del dueño, aun

la dádiva ó promesa para que el funcionario viole sus deberes haciendo lo que no debe ó absteniéndose de lo que debe hacer. Las constancias de la causa predisponían el ánimo contra el procesado, envuelto según ellas en un comercio repugnante y odioso desde que no podían ejercerlo sino turbando la paz de las tumbas y profanando las cenizas de los que fueron. Había en la causa graves presunciones que inclinaban á pensar que el delito ó los delitos que motivaron la acusación, fueron realmente cometidos; pero ni aquella consideración debe estraviar el criterio del magistrado ni esta circunstancia podría por sí sola legitimar tan grave declaración; lo primero, porque friamente y sin pasión debe hacerse el examen y apreciación de la prueba con relación á los elementos constitutivos del delito; lo segundo, porque sea cual fuere la gravedad de las presunciones, jamás podrían ellas servir por sí solas, para declarar probada su existencia.

1. La hipoteca se constituyó para garantir un préstamo comercial concedido por un banco. La obligación principal es, el crédito ó préstamo acordado, operación propia del giro común de los establecimientos comerciales de este carácter, y en tal caso, cae bajo la prescripción del art. 8, inc. 5ª del Cód. de Com. Esta circunstancia basta por sí sola para establecer la comercialidad del acto, que por ello queda regido por la ley y jurisdicción mercantiles, aun cuando alguno de los contrayentes no revistiere la calidad de comerciante. La hipoteca que garantiza la mayor eficacia de los derechos del acreedor, es una obligación meramente accesoria que ni desnaturaliza el carácter mercantil del crédito reclamado, ni puede cambiar la jurisdicción, pues en materia de garantía, es juez competente el que tiene competencia para conocer de lo principal. — Arg. del art. 5, Cód. de Proc.

2. Art. 1383 del Cód. de Com.

3. Art. 63 del Cód. de Com.



tratándose de cuestiones seguidas por los que no ejercen el comercio — Com., tom. 1, pág. 277, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Comerciante** — Las cuestiones sobre derecho a un inmueble corresponden a la jurisdicción civil, aún suscitadas entre comerciantes — Com. Tom. 4, pág. 299, Ser. 5ª (t. 39).

5. **Comerciante** — La formacia dedicada exclusivamente a la preparación de recetas, no importa el ejercicio del comercio — Crim., tom. 4, pág. 379, Ser. 5ª (tom. 39).

6. **Comerciante** — La quiebra debe declararse por el juez del lugar en que el deudor tenga establecido su comercio — Com. tom. 5, pág. 232, Ser. 5ª (tom. 40).

1. **Comerciantes** — En litigios entre comerciantes las constancias de los libros de comercio llevados en forma ha-

4. El acto no está comprendido entre los enumerados como mercantiles, en el art. 8 del Cód. de Com.

5. El dueño de una farmacia fué declarado en quiebra, y habiéndose encontrado indicios de fraude pasaron los antecedentes al juez del crim., se ordenó el sobreseimiento definitivo, de acuerdo con el precepto del art. 434, inc. 2º del Cód. de Proc., porque según el art. 198, del Cód. Pen., relacionado con el art. 1379 del Cód. de Com., el delito de quiebra fraudulenta ó culpable solo puede ser cometido por los que revisten la calidad de comerciantes. Esta calidad no concurría en el procesado, pues del expediente de su concurso que se tuvo a la vista, resultaba claramente que no se dedicaba al comercio de drogas, sino que su principal ocupación consistía en la preparación de recetas, esto es, en el ejercicio de la profesión de farmacéutico, cuyo carácter esencialmente liberal, cuando se reduce a los límites referidos, no encuadra dentro de las disposiciones legales de los arts. 1º y 2º del Cód. de Com. No siendo, pues, comerciante el procesado, no es susceptible del estado de quiebra — art. 1379 citado, del Cód. de Com. — y menos, por consiguiente, de incurrir en el delito de quiebra fraudulenta ó culpable. Esta conclusión no puede ser modificada por la declaratoria de quiebra dictada por el juez de Comercio, puesto que dada la independencia de las jurisdicciones, lo que aquel resuelve no puede tener efecto ni influencia alguna en el juicio que se ventila ante el Juez del Crimen, salvo el caso de cuestiones prejudiciales, entre cuyo número no se encuentra ésta — arts. 1104 y 1105, Cód. Civ.—No pudiendo existir el delito que había dado margen al proceso, según lo que queda espuesto, correspondía el sobreseimiento definitivo.

6. Art. 2 de la ley de 3 de Set. de 1878.

1. Art. 63 del Cód. de Com.



cen prueba plena si no se presentan asientos en contrario — Com., tom. 9, pág. 182, Ser. 3ª (tom. 25).

**Comerciantes** — Véase: *Libros de comercio*, 2, 5, 6, 7 y 10; *Quiebra*, 1 y 3; *Hipoteca*, 5; *Comisión*, 4; *Jurisdicción comercial*, 2, 4 y 5; *Deuda*, 1; *Compulsa*, 3; *Defraudación*, 8; *Actos de comercio*, 1; *Daños y perjuicios*, 11 y 45; *Indemnización*, 1; *Préstamo hipotecario*, 1.

1. **Comisión** — Reconocida la existencia del mandato ó comisión, la obligación de rendir cuentas es ineludible — Com., tom. 3, pág. 109, Ser. 5ª (tom. 38).

2. **Comisión** — No procede el pago de media comisión al martillero que no verificó el remate; debe regularse el honorario — Civ., tom. 9, pág. 340, Ser. 5ª (tom. 56).

3. **Comisión** — Aun cuando se haya estipulado una compensación especial si se cumple el mandato, la falta de cumplimiento solo permite reclamar la comisión usual determinada por árbitros — Civ., tom. 18, pág. 51, Ser. 5ª (tom. 65).

1. Art. 70 del Cód. de Com.

2. La jurisprudencia anterior era la de que el martillero que no vendía por falta de postores, no tenía derecho á cobrar comisión alguna. Hoy ésta ha variado. — Véase *Inst.*, tom. 5, verb. *Martillero*, 2 y su nota.

3. El dueño de un inmueble autorizó á un comisionista para que procediera á su venta por un precio determinado, el que le sería entregado íntegro, quedando á favor de éste lo que obtuviese de más sobre el precio fijado como remuneración de su servicio. La propiedad fué vendida con un exceso de 1.500 pesos sobre el precio fijado, pero no pudo escriturarse por defectos de que adolecía el título. El comisionista demandó el pago de la suma de 1.500 nacionales que decía se le adeudaba de acuerdo con el contrato, alegando que la venta celebrada había quedado sin efecto por culpa de su propietario. El demandado pidió el rechazo de la demanda, fundándose en que si bien era cierto que autorizó para vender la finca bajo la base espresada, siendo el excedente de esta cantidad para la comisión y gastos, no creyó que este convenio era para explotarle, y se hizo para el caso en que la venta se realizase y se cumpliese la condición estipulada, de entregarle esa suma libre de gastos, quedando á favor del demandante lo que obtuviese de más; que el comprador, serio ó simulado, que presentó el comisionista, se resistió, bajo tal ó cual pretexto, á escriturar; la condición no se ha cumplido, y el demandado nada debía. Que no obstante





4. **Comisión** — El cobro de comisión ó corretajes por un contrato, corresponde á la jurisdicción comercial, aun cuando los que en él intervienen no sean comerciantes — Civ., t. 22, pág. 397, Ser. 3ª (tom. 69).

**Comisión** — Véase: *Bolsa de Comercio*, 1; *Martillero*, 1; *Acreedor hipotecario*, 2.

1º. **Comisión liquidadora** — Un miembro de la comisión liquidadora de una sociedad, tiene personería para contestar las demandas dirigidas contra ella — Com., tom. 3, pág. 389, Ser. 3ª (tom. 38).

**Comisión liquidadora** — Véase: *Acciones criminales*, 1.

1º. **Comisión de remate** — No procede el pago de comi-

---

esto, le ofreció pagarle media comisión como es usual, es decir, el uno por ciento, que es lo que podía buenamente ofrecerle. Que el comisionista debió examinar los títulos primeramente antes de vender, como medida de prudencia. La cuestión á resolver es simplemente: ¿si no habiendo tenido lugar la venta, es procedente el cobro de la suma estipulada en el convenio? Sobre este punto no podía hacerse discusión ante la simple lectura del documento, porque de él resultaba con toda claridad el compromiso de que quedaría á favor del demandante el exceso de precio en el único caso de venderse, porque ese compromiso se contrajo bajo la base de que hubiese venta, lo que quiere decir, si se quiere entender lealmente ese convenio, que si no había venta no podía existir esa misma remuneración convenida para el caso de venta. Para el caso de que no hubiera venta, no había nada convenido. No habiéndose hecho el convenio sino para el caso de venderse, no habiendo sucedido esto *a fortiori* se impone que la única comisión que ha podido cobrarse es aquella que es usual y de práctica, y como ésta nunca puede ser la que establecía el boleto para el caso especialmente determinado en él, resulta que el demandante sólo tiene derecho, como queda supuesto, á la comisión ordinaria. — Arts. 1627 y 1628 del Cód. Civ.

4. Se trata del cobro de la comisión gestionada por un corredor que intervino en la compraventa de un campo con haciendas. Si bien esta clase de operaciones es de carácter civil, sin embargo la cuestión no versaba sobre esta operación sino respecto de la comisión adeudada al corredor en virtud de su intervención en la operación. Es lógico que el conocimiento de su cobro corresponde á la jurisdicción comercial, desde que el actor reconoció haber intervenido como corredor, estando desde luego sujeto á los tribunales mercantiles. — Arts. 5, 7 y 33 del Cód. de Com. y 92 de la Ley Org. de los Tribs. de 1886.

14. La venta fué suspendida á causa de una tercera deducida. En



sión á los martilleros si la suspensión del remate no es imputable á las partes—Com., tom. 1, pág. 206, Ser. 5ª (tom. 37).

**Comisión investigadora**—Véase: *Acusación*, 5.

1ª. **Compensación**—Produciéndose de pleno derecho la compensación, aun cuando se adeuden especies distintas, el acreedor que pretenda la existencia de cuenta corriente debe justificarla—Tom.: 3, pág. 331, Ser. 5ª (tom. 38).

**Compensación**—Véase: *Injurias graves*, 2; *Comisión*, 3; *Mandato*, 8; *Excep. de compensación*, 1, 2.

16. **Competencia**—El juez competente para las cuestiones que surjan de la novación, es el del lugar en que se verificó, independientemente del que lo fuera para conocer en el primitivo contrato—Com., tom. 9, pág. 373, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Competencia**—Del tribunal arbitral, solo procede si la existencia de la sociedad se encuentra justificada—Com., tom. 1, pág. 225, Ser. 5ª (tom. 36).

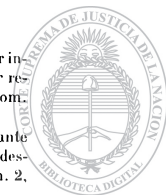
3. **Competencia**—La incompetencia *ratione materiae*, como cuestión de orden público, puede ser promovida en cualquier estado del juicio universal antes de pronunciarse sentencia definitiva—Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

1ª Instancia se estableció que una comisión se adeudaba por cuanto la «causa no es imputable á los martilleros que cumplieron con hacer los anuncios ordenados para la venta y las diligencias para que el remate se celebrara. Que estos servicios hay por las partes el deber de retribuirlos, porque los martilleros no están en la obligación de prestarlos gratuitos». La Cám. revocó esta resolución fundándose en que «habiéndose suspendido el remate, por un hecho que no es imputable á las partes, y no constando que aquellos hayan efectuado trabajo alguno que dé lugar á una remuneración».

16. Art. 818 del Código Civil.

2. No es aplicable la prescripción del art. 448 del Cód. de Com., sino las reglas del derecho común á que alude el art. 296 del mismo, en los casos en que no se presente el instrumento probatorio de la existencia de la sociedad y de su registro.

3. El Cód. de Proc. ha limitado la oportunidad legal para suscitar cuestiones de competencia, estableciendo en el art. 414 que solo pueden promoverse antes de estar trabado el pleito por demanda y contestación. Esta disposición dictada para el juicio contradictorio ordinario, cualquiera que sea su alcance, no es aplicable á los juicios universales



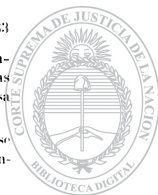
4. **Competencia** — Las cuestiones de competencia por inhibitoria, como promovidas por los jueces, no pueden ser resgidas por los téminos que la ley fija para las partes — Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 3ª (tom. 37).

5. **Competencia** — El acreedor que ha comparecido ante el juez del concurso comercial, no queda inhibido para desconocer en cualquier estado su competencia — Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 3ª (tom. 37).

de jurisdicción voluntaria, ni aun por analogía, desde que en estos no hay un estado que pueda considerarse similar al de la litiscontestación en los pleitos ordinarios. Si, por otra parte, hubiese de esperarse para promover estas cuestiones á que el juicio perdiese su carácter de voluntario y se convirtiera en contencioso, resultarían perfectamente inútiles la separación de las jurisdicciones y las reglas de competencia establecidas por la ley para los juicios voluntarios, lo que no es en manera alguna admisible. No alcanzando á estos juicios la limitación del art. 14 citado, y teniendo en cuenta el principio general de que la jurisdicción, por razón de la materia, no es prorrogable — art. 1º, Cód. de Proc., — debe concluirse que á falta de una limitación espresa en la ley, las cuestiones de competencia *ratione materiae* en esta clase de juicios pueden promoverse en cualquier estado de la causa antes de su terminación definitiva. El recordado principio del art. 1º, Cód. de Proc., y el precepto del art. 19 del Cód. Civ., demuestran claramente que la comparecencia ante el Juez de Comercio y el reconocimiento de su competencia por parte de uno de los acreedores que ha promovido esta cuestión no inhabilita á éste para su ulterior desconocimiento. Si la división de las jurisdicciones ha sido establecida por razones de orden público y si ellas son improrrogables por la voluntad de las partes, es evidente que éstas no pueden renunciarlas, y que aun cuando lo hagan, tal renuncia no puede producir efecto alguno y debe ser considerada como si no hubiera tenido lugar.

4. La forma en que se promovió la cuestión de competencia fué por la vía inhibitoria: en este caso no son propiamente las partes, sino los jueces mismos los que la sostienen. Bajo este punto de vista sería diferente discutir si las partes tienen derecho ó no á promover tales contiendas, pues realmente no son ellas sino los jueces quienes las promueven declarando su competencia ó incompetencia.

5. Porque la división de las jurisdicciones ha sido establecida por razones de orden público, siendo ellas por lo general improrrogables por voluntad de partes. Siendo esto así, es evidente que éstas no pueden renunciarlas, y aun dado el caso que las hubiesen hecho, tal renuncia no puede producir efecto alguno y debe ser considerada como si no hubiese tenido lugar.



6. **Competencia** — El Ministerio Fiscal puede, aun contra la voluntad ó consentimiento de las partes, promover las cuestiones de competencia en cualquier estado de la causa — Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

7. **Competencia** — Si de autos resulta que el delito se cometió fuera de la Capital, debe declararse de oficio la incompetencia — Crim., tom. 2, pág. 167, Ser. 5ª (tom. 37).

8. **Competencia** — Por corresponder el conocimiento del juicio al fuero federal, solo puede ser invocada por el extranjero — Com., tom. 2, pág. 306, Ser. 5ª (tom. 37).

9. **Competencia** — El juez de la querella es competente para conocer en los incidentes que se susciten sobre cobro de honorarios — Crim., tom. 4, pág. 253, Ser. 5ª (tom. 39).

10. **Competencia** — Es juez competente para la ejecución de la hipoteca el del lugar en que esté situado el inmueble, si

---

6. Art. 117, inc. 1º de la ley org. de los Trib. de 1886.

8. El fuero federal por razón de la diversidad de nacionalidad es un privilegio acordado al extranjero cuando litiga con un argentino, y como todo privilegio es renunciable por aquel en cuyo favor ha sido introducido: *in ius beneficio non datur*. La jurisdicción de los Trib. de Prov., ó de los ordinarios de la Cap., es concurrente en ese caso con la de los federales; y demandado el extranjero ó contestando la demanda ante aquéllos promovida, se entiende renunciado el fuero y prorrogada la jurisdicción — Art. 12, inc. 4º, ley de 14 de Set. de 1863; art. 112, ley org. de 12 de Nov. de 1886, y ley de 18 de Set. de 1884.

9. Porque es un incidente del juicio principal radicado ante ese tribunal. Esta es la jurisprudencia constantemente consagrada por todos nuestros tribunales: Véase tom. 88, pág. 220; t. 101, pág. 106; t. 104, pág. 281; tom. 106, pág. 247; t. 109, pág. 57, todos de la Jur. Civ.

10.. Á este respecto hay una verdadera anarquía en la jurisprudencia. Los impugnadores del principio consagrado en el sumario dicen que según la definición que da el art. 3108 del Cód. Civ., se comprende que la hipoteca es una obligación accesoria, desde que, como lo dice el artículo, se constituye para garantir ó en seguridad, de un crédito en dinero, y tan es la hipoteca una obligación accesoria, que ella no puede existir sin que exista un crédito al cual sirva de garantía. Propiamente no puede decirse que la acción que nace de un crédito personal garantizado con hipoteca, sea una acción real, pues en tal caso no se trata de hacer declarar la existencia, plenitud ó libertad de derechos reales, tanto más, cuando no se niega la existencia de la hipo-



no existe convención expresa.—Civ., tom. 10, pág. 104, Ser. 5ª (tom. 57).

teca, en cuyo caso, no hay declaración que hacer al respecto. Si bien es cierto que el acreedor hipotecario, cuando el deudor enajena la cosa, puede perseguirla en poder del adquirente—art. 3162, Cód. Civ.—debe observarse que el siguiente 3163 dispone que en ese caso el acreedor debe hacer intimar el pago al deudor, y si éste no lo verificase, recién puede recurrir al tercer poseedor, lo que constituye una nueva demostración de que la hipoteca no es la obligación principal. Cuando no hay lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y el hecho de que en esta Capital, se hubiese constituido la hipoteca, nada significa, pues para levantarla basta que se dirija un exhorto por las autoridades respectivas. El Cód. de Proc., es el que determina la jurisdicción de los Trib., y éste, en el aparte 4º, del art. 4º, establece «que es juez competente cuando se ejercitan acciones personales, el del lugar convenido para el cumplimiento de las obligaciones, y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado ó del lugar del contrato, con tal que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente». Los sostenedores de la tesis contraria dicen: El derecho de hipoteca, es un derecho real, como terminantemente lo establecen los arts. 2503, inc. 5º y 3108, Cód. Civ. Es un principio comúnmente sustentado por los escritores de derecho, que á todo derecho real corresponde una acción también real. El derecho personal, *jus ad rem*, —relación de persona á persona,— se hace efectivo mediante una acción personal. El derecho real, *jus in re*, —relación de persona á cosa,—se hace efectivo mediante una acción real. Así, pues, toda vez que el sujeto activo de un derecho real busca la efectividad del mismo ante los tribs., pone en ejercicio una acción que es necesariamente real por su naturaleza. En efecto, Mañeldey, en su *Tratado de Derecho Romano*, párrafo núm. 202, enseña: que la acción real es la que se deriva de la propiedad y de los derechos reales. Ortolán sustenta el mismo principio en su *Generalización del Derecho Romano*, núm. 97, con gran acopio de razonamientos. Escribe define la acción real diciendo: «que es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, esto es, del dominio pleno ó menos pleno, ó de la prenda ó hipoteca.» *Verb Acción real*. Laurent, tom. VI, núms. 72 á 77, y tom. XXX, núm. 173, sostiene el mismo principio. Fijada la doctrina predominante sobre el punto de referencia, apliquémosla al caso ocurrente. La ejecución se funda en una escritura hipotecaria, de manera que se busca la efectividad del derecho de hipoteca que surge de dicha escritura. El derecho de hipoteca es real, de acuerdo con la prescripción antes citada; luego, la acción en virtud de la cual lo hace valer el actor, es igualmente real, según queda demostrado. Siendo esto así, la cuestión no puede ofrecer dificultad. El art. 4º del Cód. de Proc., prescribe en su primer acá-



**11. Competencia** — La competencia por cantidad debe resolverse con abstracción de la moneda especial de la obligación — Civ., tom. 14, pág. 144, Ser. 3ª (tom. 61).

**Competencia** — Véase: *Acusación fiscal*, 2; *Concursos*, 1; *Comerciante*, 1; *Jueces de instrucción*, 1; *Cesión de bienes*, 1; *Honorarios*, 2; *Recurso de habeas corpus*, 1; *Transacción*, 2; *Costas*, 8; *Escep. de incompetencia*, 4; *Cuestiones prejudiciales*, 1; *Embargo*, 5; *Persona jurídica*, 1; *Tribunales de la Capital*, 1 y 2; *Término extraordinario*, 9; *Diccionario*, 43, 45 y 48; *Interdicto de obra nueva*, 2.

**1ª. Competencia por cantidad** — Para la fijación de la competencia por esta causa, no debe atenderse a la moneda especial de la obligación — Com., t. 3, p. 291, Ser. 3ª (t. 40).

**1ª. Competencia consentida** — La declaración sobre competencia el juez no puede de oficio revocarla una vez consentida — Com., tom. 9, pág. 401, Ser. 3ª (tom. 25).

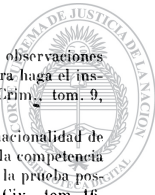
---

pite, que será juez competente, cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Constando que las fincas hipotecadas están situadas en esta capital, es incontestable que estos trib., son competentes para conocer de la ejecución. El art. 2757 del Cód. Civ., no puede obstar a la exactitud de la tesis consignada, cuando dice: «Las acciones reales que nacen del derecho de propiedad son: la acción de reivindicación, la acción confesoria y la acción negatoria». Este artículo no tiene un sentido limitativo; se refiere únicamente a las acciones reales que nacen del derecho de propiedad, lo que seguramente no excluye las que tengan otro origen, como por ejemplo, las que nacen del derecho de hipoteca. La S. C. N., se ha decidido por esta última opinión — Véase: tom. 38, pág. 181.

11. Es punto resuelto por los Trib. de la Cap., que el aditamento de «oro» a una suma de dinero enunciada en moneda nacional, no altera la jurisdicción, que solo se diversifica por razón de la cantidad: primero, porque la unidad monetaria de la Rep. es el peso de oro; segundo, porque las alternativas de valor de los billetes de emisión bancaria, a causa de la inconvertión, si hubiera de observarse en la determinación de la competencia, introduciría una confusión y trastorno altamente perjudiciales para los intereses públicos y privados, dando lugar a que un día fuera competente un tribunal y al día siguiente otro.

1ª. De acuerdo con lo resuelto en el verb. *Competencia*, n.º 11.

16. Opuesta por el demandado la escepción de incompetencia de jurisdicción por corresponder el conocimiento de la causa al trib. arbitral,



**1<sup>a</sup>. Competencia del constructor** — Las observaciones que sobre competencia del constructor de la obra haga el inspector informante, no importa una injuria — Crim., tom. 9, pág. 407, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

**1<sup>b</sup>. Competencia federal** — La diversa nacionalidad de los contratantes, para que haga procedente la competencia federal, debe justificarse en la época oportuna: la prueba posterior no puede ser tenida en consideración — Civ., tom. 16, pág. 153, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

**1<sup>c</sup>. Competencia potestativa** — Si la competencia es

tral, conforme al art. 601 del antiguo Cód. de Com., y contestada esta excepción por el actor, el juez de 1<sup>a</sup> inst., previo llamamiento de autos resolvió declarándose competente y abriendo la causa á prueba. Notificada esa providencia á las partes, fué consentida por ellas y adquirió por el mismo hecho toda la autoridad de la cosa juzgada, contra la cual no puede volverse. Aun cuando anteriormente no se hubiere suscitado y resuelto la espresada cuestión, declarada la competencia del juzgado al abrir la causa á prueba, conforme al art. 87 del Cód. de Proc., y consentida como fué dicha providencia, el juez de 1<sup>a</sup> inst. no podía, ni á petición de parte ni de oficio, declararse incompetente según espresamente lo dispone dicho art. en su última parte. La distinción que hizo el juez para fundar su declaración estemporánea de incompetencia, entre jurisdicción relativa á la sustanciación de la causa y jurisdicción para decidir ó fallar el litis, no es admisible bajo ningún concepto, pues lejos de fundarse en disposición legal alguna, contraria abiertamente la prescripción del mismo art. 601 citado, en que fundó su incompetencia, desde que allí se establece que las cuestiones sobre arrendamiento mercantil, de las que se trataba en el caso ocurrente, deben decidirse en juicio arbitral y por esta espresión no ha de tomarse el fallo, que no es más que la diligencia final que pone término al juicio, sino toda la tramitación de la causa. La jurisprudencia de la Cám. de lo Com., ha sido uniforme, como puede verse en los fallos que se registran en el tom. 3<sup>o</sup>, 1<sup>a</sup> ser., pág. 65, y tom. 3<sup>o</sup>, ser. 2<sup>a</sup>, pág. 95. Últimamente el juez Dr. Amuchástegui, en una brillante sentencia, ha resuelto la cuestión en sentido contrario, siendo confirmada por la Cám.

**1<sup>o</sup>.** El querellante no comprobó las injurias que decía habían sido vertidas contra él, y por el contrario el querellado demostró haber sido injuriado por el acusador. En este caso es de estricta aplicación el art. 186, inc. 2<sup>o</sup> del Cód. Pen.

**1<sup>b</sup>.** Arts. 118 y 245 del Cód. de Proc.

**1<sup>c</sup>.** La jurisdicción de los Tribs. de la Cap. es competente cuando los extranjeros quieran someterse voluntariamente á ella; el demandant



potestativa del ejecutado, no procede condenación en costas aun cuando se declare procedente la escepción — Com., t. 9, pág. 378, Ser. 3ª (tom. 25).

1ª. **Competencia testamentaria** — Debe justificarse la competencia del Juzgado para conocer en la testamentaria — Civ., tom. 13, pág. 268, Ser. 5ª (tom. 60).

1ª. **Cómplice** — Debe ser considerado como autor el cómplice que, conociendo el delito y fomentándolo, recogía y guardaba los objetos hurtados — Crim., tom. 9, pág. 477, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Cómplice** — De adulterio, sin circunstancias debe ser penado con dos años de destierro — Crim., tom. 1, pág. 319, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Cómplice** — No puede calificarse y pensarse como autor del hurto al que no resulte haber tomado parte directa en la comisión del delito, sólo debe ser penado como cómplice ó encubridor — Crim., tom. 1, pág. 255, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Cómplice** — El que por las circunstancias que rodean el hecho no podía ignorar su participación en un delito, debe ser condenado como cómplice — Crim., tom. 3, pág. 123, Ser. 5ª (tom. 38).

**Cómplice** — Véase: *Robo*, 6; *Adulterio*, 3.

1ª. **Compra** — No importando un préstamo la compra con

---

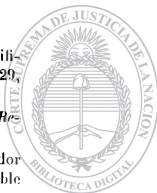
no está obligado á conocer la nacionalidad del demandado, y es deber de la parte que opone la escepción de incompetencia, probar que le asiste el privilegio que les confiere á los extranjeros la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribs. Nacs. — art. 2º, inc. 2º, — y por lo tanto, no puede suponerse que el actor proceda con malicia al deducir su acción ante la jurisdicción ordinaria para ser condenada á las costas del juicio.

1ª. El que inició la testamentaria dijo que el causante, aunque domiciliado en esta Cap., había fallecido fuera de ella; luego es evidente la necesidad de acreditar previamente que el causante había fallecido accidentalmente fuera de su domicilio ó residencia.

3. Art. 42, inc. 3ª, Cód. Penal.

1ª. Se dejó establecido que el acto no importaba un préstamo de dinero y que por consiguiente no le está prohibida de acuerdo con el precepto del art. 450, inc. 8º del Cód. Civ. La compra se consideró muy





pacto de retroventa, puede autorizarse al tutor para verificación con dinero de los menores—Civ., tom. 16, pág. 329, Ser. 5ª (tom. 63).

**Compra**—Véase: *Abogado*, 2; *Defraudación*, 8; *Remate*, 3.

1. **Comprador**—Procede el desistimiento del comprador aun después de aprobado el remate judicial, si el inmueble tiene distinta ubicación que la que indicaban los avisos—Com., tom. 4, pág. 350, Ser. 5ª (tom. 39).

2. **Comprador**—Las observaciones que el comprador en remate judicial oponga estemporáneamente, deben ser desestimadas sin sustanciación—Civ., tom. 10, pág. 376, Ser. 5ª (tom. 57).

3. **Comprador**—No procede darse por desistido al comprador en remate judicial en tanto no se presenten los títulos—Civ., tom. 10, pág. 436, Ser. 5ª (tom. 57).

4. **Comprador**—No puede darse por desistido al compra-

---

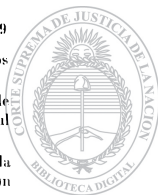
conveniente para los intereses del menor, pues la suma á entregarse como precio era muy inferior al valor real de la cosa según la tasación que se había efectuado.

1. El vendedor debe entregar exactamente la misma cosa vendida—arts. 1409 y 1426, Cód. Civ.,—y si así no lo hace el comprador puede rehusar el pago del precio—art. 1426 citado.—A pesar del largo tiempo transcurrido y de las intimaciones y apercibimiento que se decretaron, no se subsanó esta deficiencia.

2. Aprobado un remate fué notificado el auto aprobatorio al comprador. Pasado algún tiempo se le intimó obligar el precio de compra. El comprador hizo observaciones á los títulos después de los tres días perentorios que acuerda los arts. 519 y 520 del Cód. de Proc. para presentar esas observaciones: luego no podían ser tomadas en consideración.

3. Aprobado el remate se ordenó la escrituración del inmueble previos los trámites de ley. El comprador se presentó solicitando la exhibición de los títulos sin resultado alguno. Mientras no se exhiben los títulos no puede exigirse que el comprador deposite el precio, pues el art. 521 consagra ese derecho á favor de éste.

4. De acuerdo con el caso precedente. Si bien el art. 520, inc. 2º del Cód. de Proc., dispone que el comprador de una finca en remate debe consignar el precio previamente á la escrituración, el art. 521 del mis-



dor en remate judicial, en tanto no se hayan presentado los títulos—Civ., tom. 11, pág. 398, Ser. 5ª (tom. 58).

5. **Comprador**—En remate judicial, no debe hacersele lugar al desistimiento si no existen los defectos opuestos al título—Civ., tom. 12, pág. 334, Ser. 5ª (tom. 59).

6. **Comprador**—En remate judicial, no puede exigir la agregación de títulos que se encuentran depositados en un establecimiento público—Civ., tom. 18, p. 126, Ser. 5ª (t. 65).

7. **Comprador**—El desistimiento de los compradores no basta para dejar sin efecto lo convenido entre los herederos sobre venta de inmuebles—Civ., t. 20, p. 148, S. 5ª (t. 67).

8. **Comprador**—Debe manifestar si acepta los títulos,

mo Cód. dispone que antes de hacerse la oblación podrá el comprador pedir que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos, y el juez así lo proveerá, mandando que se pongan de manifiesto en la escribanía del actuario por tres días perentorios. El comprador del inmueble, se presentó haciendo uso del derecho que le acuerda el citado art. 521, y pidió al juzgado que se pusieran á su disposición los títulos, á efecto de examinarlos antes de procederse á la oblación y escrituración. Encontrándose tal pedido dentro del precepto legal apuntado, él no puede desestimarse, sin que baste á ese efecto la orden pendiente de la oblación, puesto que el Cód. dice que «antes de ella podrá el comprador pedir que se exhiban los títulos de propiedad para examinarlos».

5. El art. 522 del Cód. de Proc., sólo autoriza el desistimiento cuando los títulos adolecen de algún vicio que no puede subsanarse en breve tiempo, en cuyo caso debe optar por el desistimiento sin responsabilidad alguna ó la realización de la compra con los defectos que contengan los títulos.

6. Los títulos se encontraban en el Banco Nac. á disposición del comprador: desde luego desaparece la necesidad de mandarlos agregar á los autos, pues esta agregación no tiene otro objeto que habilitar al comprador para que pueda examinarlos.

7. Se convino entre los coherederos en proceder á la venta, la que se realizó, pero quedando después sin efecto. Se pretendió suspender la enajenación posterior, á lo que no se hizo lugar porque no había conformidad en la suspensión respecto de todos los interesados, y porque los copropietarios pueden pedir la liquidación de la cosa común en cualquier tiempo y por cualquiera razón.

8. Observados los títulos por el comprador, y considerando que esas observaciones carecían de fundamento se le ordenó que depositase el



bajo apercimiento de darlo por desistido—Civ., tom. 20, pág. 211, Ser. 5ª (tom. 67).

**Comprador**— Véase: *Clase determinada*, 1; *Estado civil*, 1; *Contrato*, 6, 12 y 21; *Acción reivindicatoria*, 1; *Martillero*, 3; *Compraventa*, 2; *Contrato de compraventa*, 5; *Remate judicial*, 1, 8, 10 y 11; *Venta*, 1; *Gravámenes*, 1; *Remate*, 2; *Apelación*, 7; *Nulidad*, 25; *Muebles*, 2; *Titulos*, 1 y 2; *Hipoteca*, 8; *Mejoras*, 1; *Prescripción treintenaria*, 2; *Locación*, 11; *Tradición material*, 1.

1. **Compraventa**— El recibo por saldo de cuentas no basta para justificar el pago de aquellas que hayan sido materia de un contrato de compraventa especial—Com., tom. 1, pág. 294, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Compraventa**— El contrato de compraventa de mer-

precio dentro de tercero día bajo apercimiento de tenerlo por desistido. De la propia exposición del comprador resultaba que los vicios no eran subsanables en breve tiempo, en cuyo caso es de aplicarse el precepto del art. 522 del Cód. de Proc.

1. El deudor aseguró haber abonado á un empleado determinado el precio materia del contrato especial; pero no comprobó este extremo. Por el contrario al absolver posiciones dijo que el pago lo había hecho á otro empleado de la casa acreedora. El recibo por saldo era por una suma insignificante, mientras que el contrato especial era de importancia. Por estas razones se declaró que el recibo por saldo no era bastante á comprobar el pago del contrato especial. El recibo especial alegado por el deudor y no producido en autos, obliga á éste á abonar el importe. Ley 8, tít. 3, Part. 3ª.

2. El actor se presentó demandando la devolución de una suma de dinero que había entregado á cuenta del precio de diez bocoyes de vino jerez seco, fundándose en que este contrato quedó de hecho rescindido por haber devuelto al vendedor la cosa y éste aceptádola, según el art. 470 del Cód. de Com. Como se trata de la rescisión de compra y venta de mercaderías, debe averiguarse si tal contrato ha podido ser rescindido por el comprador, según los hechos que resultan de la causa. Estos hechos, que aparecían comprobados por la confesión misma del demandante, como podía verse en el escrito mismo de demanda y en la contestación á las posiciones, demostraban que el actor compró en los depósitos del dique núm. 2, diez cascos de vino, los que fueron elegidos é individualizados por el demandante dentro de 42 cascos que espickó y gustó poniendo en los comprados su nombre y apellido. Se comprobó, además, por confesión del comprador, que esos cascos fue-

caderías no puede ser rescindido si el comprador después de probadas las recibe, aun cuando las devuelva al vendedor— Com., tom. 4, pág. 67, Ser. 5ª (tom. 39).

ron mandados y recibidos por el comprador y almacenados en su casa de comercio. Estaba asimismo establecido que el comprador pagó á cuenta del precio, la suma de 1.000 pesos, cuya devolución era el objeto del juicio. Desde luego, la compraventa del vino, quedó consumada por parte del vendedor, con la entrega de la cosa que previamente había gustado el comprador, y encontrándola de la calidad que le convenía, la había individualizado, mirado y recibido. No solamente tuvo lugar en este caso la tradición simbólica, por haber el comprador puesto su marca á los objetos comprados, en presencia del vendedor, sino también tradición real de la misma— arts. 463, Cód. de Com., y 2601 del Cód. Civ.— Una venta considerada en tales condiciones no puede ser rescindida, porque el comprador después de probar en su casa el vino, lo haya devuelto al vendedor invocando vicio en la calidad. En tal situación, el comprador solo tiene derecho exceptuando casos de dolo y fraude, á la rescisión por vicios redhibitorios. Los arts. 472 y 473 del Cód. de Com., son terminantes al respecto. El primero prevé el caso de vicio en la calidad de la cosa comprada y da derecho al comprador en los tres días inmediatos á la entrega para reclamar de ellos, probando que los vicios no han podido suceder por caso fortuito ni causarse fraudulentamente en su poder; pero agrega el artículo, que si en el acto de la entrega se hace reconocimiento íntegro en calidad y cantidad de los géneros que el comprador reciba, no habrá lugar á dicha reclamación después de entregarlos. Tan concluyente es esta disposición que el art. 473 siguiente, solo exceptúa los vicios internos de la cosa vendida que no pueden percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega, dejando tales vicios de cuenta del vendedor durante un plazo, cuya fijación queda librada al arbitrio de los tribs. La C. S. N., en el tom. 5º, ser. 2ª, pág. 476, tiene decidido que el contrato de compraventa, queda consumado por parte del vendedor con la entrega de la cosa en las condiciones, y de la calidad estipulada. El art. 470 del Cód. de Com., no tiene aplicación en el presente caso; este artículo legisla las compras hechas sobre muestras ó de mercaderías que no se han tenido á la vista, vendidas como de una calidad convenida ó determinada en los usos del comercio, y en tal caso, establece la presunción de que el vendedor ha consentido la rescisión del contrato, si devueltos por el comprador son aceptados ó no los hace depositar judicialmente.— Esto es conforme á los principios del derecho, según los cuales, tales contratos llevan una condición suspensiva si fueran de la calidad establecida por el uso del comercio, por cuya razón el comprador puede rehusar el recibo de ellos y devolverlos al vendedor, y éste á su vez, probar que lo es de la





3. **Compraventa**—Si el comprador opta por la rescisión del contrato de compraventa antes de exigir su cumplimiento, debe devolver las sumas percibidas y sus intereses—Civ., tom. 12, pág. 349, Ser. 5ª (tom. 59).

4. **Compraventa**—Al que alega la existencia del con-

calidad contratada—arts. 1336 y 1338, Cód. Civ. Mas cuando la cosa vendida ha estado á la vista, y ha sido examinada, probada y recibida por el comprador, no puede éste ampararse del art. 470, porque la venta ha quedado *consumada*, pues, el art. 472, dice que si en el acto de la entrega se hace el reconocimiento íntegro en calidad y cantidad, no habrá lugar á dicha reclamación, y es concordante con el art. 153 del mismo. Aceptar la aplicación á este caso del art. 470, caso espresamente previsto y resuelto por el art. 472, importaría decidir la cuestión por un precepto inaplicable. Si el comprador encontró después de recibir el artículo, que era de mala calidad, no tenía derecho para resolver por propia autoridad el contrato, devolviendo el vino por vicio en la calidad como si no lo hubiera examinado antes de recibirlo, sino que debió hacer constar ese vicio ante autoridad competente, según el espíritu de los arts. 476, Cód. de Com., y 2168 del Cód. Civ. Lo dicho basta para demostrar la improcedencia de la demanda; pero aun aceptando hipotéticamente que el art. 470 rigiese el caso, no debiera considerarse justificada. Este artículo sólo establece una presunción de derecho en contra del vendedor, pero esta presunción como toda *presuntio juris tantum*, puede ser destruida por la prueba. Los mismos demandantes espresaron en el escrito de demanda, que habían agotado los reclamos para obtener la devolución de la cantidad dada á cuenta de precio, sin poderlo conseguir, lo que quiere decir que había manifestación positiva de voluntad hecha al mismo comprador, contraria á la presunción de tácito consentimiento que establece el artículo. Mal podían entonces los demandantes sostener que por mútuo consentimiento se rescindió la compra consumada del vino, cuando de su propia demanda se desprendía la falta de tal consentimiento. No debe olvidarse que los contratos bilaterales, legalmente celebrados, no pueden revocarse al arbitrio de una sola de las partes.

3. Los intereses proceden desde la notificación de la demanda con arreglo á lo dispuesto en los arts. 508, 509 y 622 del Cód. Civ., puesto que se trata de la obligación de entregar ó devolver una suma de dinero. Esa obligación nace con la resolución del contrato, pero el deudor solo incurre en mora y está obligado á pagar los intereses consiguiéntes desde la interpelación judicial.

4. La prueba incumbe á todo aquel que alega un hecho nuevo en juicio. Así negada por el demandado la existencia del contrato de compraventa es de cargo del actor comprobarlo.



trato de compraventa corresponde la prueba, aunque el demandado, confesando el recibo de las mercaderías, alegue la existencia del de consignación—Cív., tom. 12, pág. 362; Ser. 5ª (tom. 59).

**Compraventa**—Véase: *Contrato de compraventa*, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12; *Contrato*, 6, 11, 41 y 42; *Simulación*, 1; *Contrato comercial*, 2; *Boleto*, 1 y 2; *Cesión de derechos*, 1; *Boleto privado*, 1; *Remate judicial*, 14; *Prescripción*, 5.

1. **Compulsa**—De libros, el auto que á solicitud de parte, ordena la compulsa de libros por contadores, es inapelable—Com., tom. 9, pág. 384, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Compulsa**—Que no llena los requisitos de la ley no forma prueba, aunque el demandado haya incurrido en rebeldía no contestando la demanda—Com., tom. 4, pág. 104, Ser. 5ª (tom. 49).

3. **Compulsa**—De los libros de comercio, solo forman prueba en asuntos entre comerciantes—Com., tom. 4, pág. 170, Ser. 5ª (tom. 39).

4. **Compulsa**—No procede la compulsa de libros de terceros; basta la simple oposición de las partes—Com., tom. 5, pág. 278, Ser. 5ª (tom. 40).

1. Según la Cám., el auto en que se acepta la prueba de compulsa de libros, por contadores, solicitada por una de las partes, por convenir así á sus derechos, no es apelable, según los términos del art. 226, Cód. de Proc., porque dicho auto ni es sentencia definitiva, ni decide art. del juicio, ni trae gravamen irreparable, desde que el mérito de las probanzas lo juzgará el juez al sentenciar. Por estas razones ningún auto ordenando la producción de la prueba ofrecida sería apelable.

2. El único efecto jurídico que produce la no contestación de la demanda, es el dar por revocado el traslado continuando los autos según su estado. Luego la rebeldía no produce presunción de verdad de los hechos invocados por el actor. La compulsa, para que produzca prueba requiere se haga en forma; es decir que se examinen todos los libros exigidos como indispensables por el art. 44 del Cód. de Proc.

3. El art. 63 del Cód. de Proc., establece que los libros de comercio llevados en la forma y con los requisitos prescriptos, serán admitidos en juicio, como medio de prueba, entre comerciantes, en hecho de su comercio.



5. **Compulsa**—Vencido el término de prueba no puede ampliarse la compulsa—Civ., tom. 14, p. 204, Ser. 5ª (t. 61).

**Compulsa**—Véase: *Libros de Comercio*, 3 y 4; *Embargo preventivo*, 4, 6 y 33; *Contador*, 1; *Autenticidad*, 1.

1ª. **Compulsas**—Las de los libros de comercio con la cuenta presentada, deben practicarse por los secretarios—Civ., tom. 22, pág. 380, Ser. 5ª (tom. 69).

1ª. **Compulsa de libros**—Solo procede para una operación determinada—Com., tom. 3, pág. 337, Ser. 5ª (tom. 38).

1ª. **Comunero**—Es improcedente la falta de personería aún cuando el demandante carezca de poder en forma si es comunero en el crédito gestionado—Civ., tom. 9, pág. 53, Ser. 5ª (tom. 56).

**Concesión**—Véase: *Contrato*, 37; *Ordenanzas municipales*, 1.

1ª. **Conciliación**—Si el querellante no concurre al juicio de conciliación debe dársele por desistido—Crim., tom. 3, pág. 376, Ser. 5ª (tom. 38).

1ª. **Concordato**—Para la aceptación del concordato deben votar las dos terceras partes de los acreedores verificados—Com., tom. 2, pág. 88, Ser. 5ª (tom. 37).

5. Toda prueba debe producirse dentro del término probatorio, salvo el caso de excepción del art. 118 del Cód. de Proc.

1ª. En este caso la compulsa se limita a constatar la autenticidad de la cuenta y su concordancia con los asuntos de los libros. El secretario en este caso, se limita a informar si en los libros existe una cuenta igual a la que se presenta en autos. No es una diligencia pericial para la que la ley requiere conocimientos especiales—art. 161 del Cód. de Proc.

1ª. Arts. 58 y 59 del Cód. de Com.

1ª. El condómino que ejerce la administración debe ser considerado como mandatario de los otros, aplicándoseles las disposiciones del mandato—arts. 2304 y 2701 del Cód. Civ.

1ª. Art. 592 del Cód. de Proc. Crim.

1ª. Las dos terceras partes de los acreedores que reúnan las tres cuartas partes de los créditos verificados con exclusión de los hipotecarios y privilegiados, ó las tres cuartas partes de los acreedores que aunan las dos terceras partes de los mismos créditos—art. 1471 del Cód. de Com.



2. **Concordato**—Sólo procede el concordato en la época que determina el Código—Com., t. 2, p. 383, Ser. 5ª (t. 37).

3. **Concordato**—Sólo puede tomarse en consideración el concordato presentado y discutido en junta de acreedores—Com., tom. 3, pág. 290, Ser. 5ª (tom. 38).

1. **Concurso**—Aun cuando la quiebra se haya pedido sin

2. El estado del concurso era el de liquidación. El art. 1461 del Cód. de Com. fija el término perentorio de 8 días para proponerlo, y vencido ese plazo se procede á la liquidación.

3. Art. 1469 del Cód. de Com.

1. Obtenida la quiebra de un comerciante, se procedió á tomar posesión de sus bienes y papeles, se nombró síndico, depositario y demás diligencias propias de este estado. El auto de quiebra fué revocado á petición de los fallidos por haberse pedido aquélla sin derecho. Entonces se presentó el comerciante solicitando la devolución de lo percibido por todos los que intervinieron en la tramitación de la quiebra, como son el síndico, el abogado del síndico, etc. El Juez Dr. Giorraga no hizo lugar á esa devolución, sin perjuicio del derecho de los actores para hacer responsables á los que solicitaron la quiebra sin derecho. La resolución del ilustrado Juez Dr. Giorraga que fué confirmada por sus fundamentos en la Cám. decía así: «Que las sumas extraídas durante la vigencia del auto de quiebra lo fueron por trabajos profesionales ó por servicios necesarios al debido funcionamiento del concurso, como ser los del síndico y depositario, del abogado de aquél y del contador, todos indispensables, fundados en el libro IV, *De las quiebras*, del Cód. de Com. Que la regulación hecha al abogado tenía fuerza de cosa juzgada, en virtud de haber sido verificada bajo el imperio de lo dispuesto en el art. 1568, Cód. de Com. Que la regulación hecha al contador fué consentida y convenida con el síndico. Que lo mismo pasó con el depositario. Que la cantidad entregada al síndico (1000 pesos), lo fué con cargo de oportuna rendición de cuentas y en virtud de lo espuesto por él en un escrito. Que solo ha lugar á la repetición de lo pagado, cuando lo pagado lo fuere sin causa ó por error ó en consideración á una causa futura á cuya realización se oponía obstáculo legal, ó que de hecho no se hubiese realizado, ó que fuese en consideración á una causa existente, pero que hubiese cesado de existir, ó cuando fuese en virtud de una obligación cuya causa fuere contraria á las leyes ó al orden público ó por una causa contraria á las buenas costumbres —arts. 784, 792, 793, 794 y 795 del Cód. Civ.—Que es indudable que los pagos efectuados no se encuentran en ninguna de estas condiciones; antes al contrario, se encuentran fundados en servicios especialmente determinados por el Cód. de Com., en el recordado lib. IV, que habla





derecho, el concursado carece de acción para repetir los gastos causídicos—Com. tom. 9, pág. 365, Ser. 3ª (tom. 25).

## 2. Concurso—El representante de un concurso radicado

de las quiebras, y comprobados en autos. Que los servicios prestados en este concurso por las diversas personas referidas anteriormente, y muy especialmente por el síndico y su letrado, su asesor legal, han tenido simple carácter como directores de la quiebra, representando simultáneamente á los acreedores, á los fallidos y á la ley, como se desprende del conjunto de disposiciones que rigen la quiebra, y como puede verse en Renouard, tom. 1º, pág. 437, citado por el Dr. Moreno, que es de su misma opinión—*Estudio sobre las quiebras*, núm. 271—. Que esos servicios, pues, fueron prestados en el interés de los mismos fallidos, y no pueden hoy sin injusticia y notoria temeridad, pretender repetir los pagos hechos, máxime si se considera que los gastos causídicos tienen su privilegio general que deben ser satisfechos por la masa—art. 1499, Cód. de Com.—, sea cual fuere la terminación de la quiebra. Que en el caso de la solución de la quiebra por la adjudicación de los bienes de la masa á los acreedores—tít. XIII, Cód. de Com.—, deben abonarse inmediatamente de aprobada la solución en esa forma por el Juez, los créditos con privilegio general, bajo pena de quedar sin efecto—arts. 1558 y 1559,—lo que da á conocer claramente la idea del legislador de garantizar esos gastos; por analogía son aplicables esos principios al caso *sub judice*, que si no fuera así, resultaría que las diversas personas que intervienen en una quiebra no sabrían á quien dirigirse á fin de que les abonasen sus emolumentos, mientras que la ley no permite esto, puesto que les ha dado un privilegio sobre la masa de los bienes. Que esto no importa impedir á los fallidos que deduzcan, contra quienes hubiere lugar, las acciones que les convinieren, desde que el caso se halla previsto en el art. 1401, Cód. de Com., si los acreedores que solicitaron y obtuvieron la quiebra han procedido dolosamente ó con injusticia manifiesta. Que finalmente, si se accediese á la petición solicitada, podrían quedar ilusorios los derechos de todos aquellos que han intervenido, como síndico, abogado, etc., porque bien podría suceder, que levantando el auto de quiebra, acreedor y deudor fuesen insolventes, ó en el mejor de los casos, ambos se resistiesen á abonar los honorarios, teniendo entonces que pleitear para conseguir el pago, lo que es contrario, como queda dicho, al privilegio que les acuerda la ley sobre la masa de los bienes.

2. Si bien era cierto que el concurso demandado se hallaba radicado en el extranjero, razón por la que la demanda debía ventilarse allí, de acuerdo con el conocido principio de que el actor ha de seguir el fuero del reo, no lo es menos que el síndico del concurso, por un acto libre y espontáneo, como constaba del poder acompañado, había establecido domicilio especial para arreglar los asuntos que se relacionaran con



en el extranjero, con facultad para demandar, no puede alegar la incompetencia en caso de ser demandado—Com. t. 9, pág. 414, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Concurso** — Los gastos del síndico deben abonarse después de aprobados, sin esperar á la liquidación del concurso—Com. tom., 2, pág. 102, Ser. 5ª (tom. 27).

4. **Concurso**—El conocimiento del juicio de concurso corresponde al juzgado que primero haya dictado el auto de quiebra—Com., tom. 2, pág. 401, Ser. 5ª (tom. 37).

5. **Concurso** — El ejercicio actual del comercio es requisito esencial para la declaración de quiebra: si de autos

---

esa quiebra en cualquier punto de la República Argentina donde existiesen deudores ó acreedores, ó donde hubiese que admitir ó contestar los títulos que se presentasen. Dados los términos del mandato, no cabe la menor duda de que la demanda pudo iniciarse ante los tribunales de esta Capital, desde que aquí residía el que se presentó invocando la calidad de acreedor. El apoderado, no puede, *motu proprio*, limitar, en perjuicio de terceros, las facultades de que se hallaba investido, ejerciendo su mandato en los casos favorables al concurso y rehusando hacerlo en los casos que no lo fuesen.

3. Hoy la jurisprudencia ha cambiado á este respecto.

4. Esta resolución no importa una cuestión de competencia, pues los dos jueces tenían la misma jurisdicción para entender en el asunto. Todo se reducía á saber cuál de los dos jueces previno en el conocimiento de la quiebra. Por uno de los juzgados tan sólo se dictaron algunas medidas de investigación sin adoptar resolución alguna, mientras que por otro tribunal se había dictado ya el auto de quiebra, ordenándose las medidas prevenidas por el art. 1396 del Cód. de Com. No pudiendo haber sino un juicio de quiebra, no puede haber cuestión una vez establecido cuál es el juez que previno en el mismo. El juicio de quiebra empieza en el momento en que el juez dicta la correspondiente declaratoria de concurso. Así un acreedor puede pedir la quiebra de su deudor, y como el juez debe pedir explicaciones antes de dictar el auto, el deudor puede en cumplimiento del art. 1389 del Cód. de Com., presentarse en quiebra ante otro juez.

5. Constaba en autos que los deudores, que era una razón social, habían vendido su negocio. La presunción es que con esa venta dejaron de ser comerciantes. Habiendo transcurrido desde esa venta hasta la petición de quiebra más de los seis meses señalados por el art. 1383 del Cód. de Com., correspondía á los acreedores justificar que sus deudores habían continuado ejerciendo el comercio.



consta que ha cesado no procede la formación de concurso— Com., tom. 3, pág. 71, Ser. 5ª (tom. 38).

6. **Concurso**—El concursado tiene derecho á intervenir en el concurso en tanto se trate de ejercer acciones conservatorias de sus bienes y derechos— Com., tom. 3, pág. 75, Ser. 5ª (tom. 38).

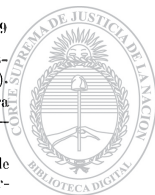
7. **Concurso**—Solo se consideran como pasivo de un concurso las deudas presentadas y verificadas en la debida oportunidad—Com., tom. 3, pág. 399, Ser. 5ª (tom. 38).

8. **Concurso**—El conocimiento del juicio seguido contra

---

6. Á un escribano se le regularon sus honorarios en § 3.500 por haber inventariado los bienes del concurso; operación que duró 6 días. El concursado apeló, no se hizo lugar á la apelación. Recurrida de hecho por el interesado, dicha resolución, se declaró mal denegado el recurso, reduciéndose el honorario á § 900. No hay duda que el concursado tiene derecho á apelar en estos casos, porque según lo dispuesto por el art. 1403 del Cód. de Com., el fallido puede ejercitar acciones conservatorias de sus bienes y derechos. Entre los actos de este carácter, deben considerarse incluidos los que se refieren á la estimación de honorarios que deben satisfacerse con el producto de los bienes de su activo, como resulta del argumento de la ley de 25 de Ag. de 1891, —núm. 2795,—y la doctrina de los autores: Massé, núm. 1201 y Alauzet, 2178. En tal concepto el fallido tiene personería para apelar de las regulaciones que se hagan en el concurso.

8. Iniciado el juicio de quiebra, fué el deudor escarcelado bajo fianza, y habiendo fugado, un acreedor pidió al Juez de Com., que el fiador fuese obligado á presentar á su fiado en el término que el juez le señalase, bajo apercibimiento de hacerse efectiva la fianza. El Juez de Com., se inhibió de entender en el incidente, fundándose en que los antecedentes fueron pasados al juez de instrucción por razón de quiebra culpable. Eso no lo estimó, el Fiscal Dr. Segovia, suficiente para justificar dicho auto opinando que es al Juez de Com., y no al de Instrucción, á quien incumbía entender en la solicitud del acreedor. Corresponde al primero, porque es el juez de Com. quien intervino en el otorgamiento de la fianza, fianza dada con fines civiles y cuyo alcance, subsistencia y efectos han de ser apreciados por dicho juez, con arreglo á las leyes mercantiles, ya que es un principio de procedimiento que al juez de la causa principal corresponde el conocimiento de los incidentes y juicios accesorios. Así, parece tan natural la intervención del juez de Com., en ese incidente ordinario del juicio de quiebra, como sería irregular que conociera de él el juez de Instrucción, que no exigió tal fianza y no le corresponde hacerla efectiva.



el fiador para la presentación del fallido fraudulento, corresponde al juez del concurso—Com., t. 4, p. 359, Ser. 5ª (t. 39).

9. **Concurso**—Autorizado el gasto de un empleado para la sindicatura, es á cargo del concurso la remuneración—Com., tom. 5, pág. 251, Ser. 5ª (tom. 40).

10. **Concurso**—En los de menor cuantía, los jueces de paz pueden decretar la prisión del fallido sin cometer usurpación de autoridad—Com., tom. 5, pág. 311, Ser. 5ª (t. 40).

11. **Concurso**—Los honorarios del tutor deben considerarse gastos de justicia, pues su intervención es necesaria en caso de ser concursada la testamentaria—Civ., tom. 11, pág. 122, Ser. 5ª (tom. 58).

12. **Concurso**—El acreedor particular de un socio concursado carece de derecho sobre los fondos sociales; debe esperar la liquidación—Civ., tom. 14, p. 194, Ser. 5ª (t. 61).

9. El síndico tomó un tenedor de libros para que le ayudara en la contabilidad de la casa fallida. En primera instancia no se hizo lugar al cobro por cuanto habiendo pedido autorización para celebrar un convenio con dicho auxiliar, ella le fué acordada en los términos del artículo 1570 del Cód. de Com., debiendo el síndico someter á la aprobación del Juzgado las convenciones que celebrase con él. De autos no resultaba que esto se hubiese cumplido por el síndico como tampoco constaba el trabajo cuya regulación se pedía. La Cám. revocó esta resolución, fundándose en que el síndico había sido autorizado para tomar dicho auxiliar con el objeto que se expresó en el escrito presentado solicitándolo, la remuneración es á cargo del concurso; y que no puede ser motivo bastante para exonerar al concurso de esa obligación, la circunstancia de no haberse comunicado al Juzgado la remuneración convenida, desde que según resultaba, no había convenio alguno al respecto, defiriéndose al Juzgado la estimación.

10. El inc. 1º del art. 13 de la ley de just. de paz de la Cap., concede á los jueces de paz la facultad de intervenir en los juicios de concurso de acreedores cuando su monto no exceda *prima facie* de la suma de 500 pesos. El inc. 6º del art. 1396 del Cód. de Com., dispone la detención del fallido por las causas que el mismo determina, y por consiguiente al decretarla el juez de paz no usurpa autoridad alguna.

11. Estos honorarios están comprendidos en el art. 3879, inc. 1º del Cód. Civ. Además ellos fueron devengados en interés común de los acreedores, pues los trabajos se efectuaron en juicios que dieron por resultado el aporte de sumas al concurso.



13. **Concurso**—Antes de proceder á la venta de bienes del concurso debe oírse á los acreedores—Civ., t. 14, p. 266, Ser. 5ª (tom. 61).

14. **Concurso**—La aceptación pura y simple de la herencia impide la formación de concurso en tanto no se justifique la insolvencia de los herederos—Civ., tom. 20, pág. 295, Ser. 5ª (tom. 67).

15. **Concurso**—Cuando el auto de concurso se haya levantado por incompetencia deducida por el concursado, deben pasarse los bienes al juez competente—Civ., tom. 21, pág. 269, Ser. 5ª (tom. 68).

**Concurso**—Véase: *Abogado*, 2 y 3; *Competencia*, 5; *Honorarios*, 5, 6 y 12; *Bienes*, 3; *Acción reivindicatoria*, 2;

---

13. Art. 735 del Cód. de Proc.

14. La aceptación pura y simple de la herencia produce la confusión de las herencias en los respectivos patrimonios de los herederos, quedando éstos obligados al pago de las deudas y cargas de dichas herencias, no sólo con los bienes hereditarios, sino también con los suyos propios—arts. 3342 y 3343, Cód. Civ.—Siendo esto así, no procede la declaración de concurso de una sucesión si no son declarados concursados á la vez los herederos, puesto que carecería de objeto aquella declaración desde que los herederos fueran solventes y estuviesen en condiciones de pagar todas las deudas de las sucesiones. Si bien los acreedores de la herencia pueden pedir la formación de inventario y la separación de los bienes de la herencia y de los herederos con el fin de hacerse pagar con los bienes de aquélla con preferencia á los acreedores del heredero, no se había hecho uso de ese derecho, acordado por el art. 3433 del Cód. Civ.

15. Declarado en esta Cap. el concurso civil de un deudor, se presentó un exhorto de la provincia en que se pedía al juez se exhibiera de conocer en el juicio por haber sido ya declarado concursado el deudor ante otra jurisdicción. El juez exhortado se declaró incompetente por haberse demostrado que el deudor tenía su domicilio en la provincia, al ser declarado allí en estado de concurso—art. 718 del Cód. de Proc.—Declarada la incompetencia se ordenó que se hiciera entrega, bajo inventario, de todos los bienes de que había tomado posesión el síndico. Siendo el juez competente el de la provincia donde tenga su último domicilio el concursado—art. 12, inc. 1ª de ley de 14 de Oct. de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Tribs. Nacs.—es evidente que los bienes deben pasar al juez encargado de su liquidación.



*Acreeedor hipotecario, 1; Acreeedor, 2; Gastos de justicia, 2; Sociedad, 6; Cesión de bienes, 3.*

1<sup>a</sup>. **Concursos**—Los Tribunales de la Capital son competentes para entender en demandas iniciadas ante ellos contra concursos radicados en el extranjero, si existe representante con poder en forma—Com., tom. 9, pág. 444, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

1<sup>b</sup>. **Concurso civil**—El concursado civilmente no es parte en el juicio—Civ. tom. 16, pág. 344. Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

1<sup>c</sup>. **Concurso comercial**—El producido de la prenda

---

1<sup>a</sup>. De acuerdo con los fundamentos expuestos en la nota del verbo *Concurso* núm. 2.

1<sup>b</sup>. Sin embargo, la ley acuerda al concursado el derecho de intervenir en ciertas y determinadas circunstancias. Así puede, en caso de abandono de la sindicatura, pedir se la intime la prosecución del juicio; puede apelar de las regulaciones de honorarios que se practiquen en el concurso, etc.

1<sup>c</sup>. Se dispuso se clausuraran las operaciones de la quiebra por insuficiencia del activo para cubrir los gastos, y que los gastos ocasionados y que aún estaban impagos, se cubriesen imputándose parte de su importe á los fondos afectados por privilegio especial, por cuanto los fondos pertenecientes á la masa no eran bastantes. El acreedor preudario se opuso sosteniendo que su privilegio primaba sobre el que la ley ha reconocido al fisco por el impuesto fiscal, sobre el que ha establecido para los gastos causídicos por razones de orden público. Esto es erróneo. La ley, al establecer el orden de preferencia en que serán abonados los créditos, aboca en primer lugar aquellos que gozan de privilegio general; en segundo, los que están favorecidos por privilegio especial; y entre los primeros están comprendidos los impuestos fiscales y los gastos causídicos. La razón es fácil de alcanzar; es de orden público y está basada en aquel principio de derecho que proclama que nadie puede enriquecerse con el trabajo ó con la cosa ajena. En el juicio de concurso puede el juez permitir que el síndico actúe en papel simple, con cargo de reposición, porque si no tiene fondos del concurso, no es justo obligarle á sacarlos de su propio peculio para actuar en asuntos en que interviene por mandato de la ley. Pero la razón de orden público que establece el impuesto de papel sellado, exige que éste sea repuesto con preferencia á todo otro crédito. Así podían ser muy justas las razones en que se apoye el privilegio de un crédito, pero para hacerlo efectivo por la vía judicial, debe comenzarse por comprar el sello. Ahora, en cuanto á los gastos causídicos, los honorarios del síndico y devolución de sumas que éste ha adelantado á la masa, de su propio peculio, ¿qué es lo que se discute? El acreedor



solo responde de los gastos necesarios para su venta,

prendario que ha presentado su crédito al síndico llamado por un edicto publicado *con el dinero del síndico*, que ha impuesto al síndico trabajo para verificar su crédito, luego para graduarlo, que ocupa la atención de éste en todas las diligencias que se practican para la liquidación de la prenda ¿qué razón podría alegar para recibir estos beneficios sin retribuirlos y para delegar su abono exclusivamente á los acreedores comunes? Ninguna. La razón de orden público quiere que el gasto causídico tenga privilegio general, porque á no ser así, nadie aceptaría la misión de intervenir en estos juicios, misión que importa una carga para el comerciante que no hace profesión de pleitista. El síndico no puede ser víctima de la imprudencia que hayan cometido los acreedores al contratar con el fallido, no es suya la culpa y no debe reportarle el menor perjuicio. Por otra parte, el síndico que tiene que abandonar sus negocios propios para efectuar inventarios, presidir juntas y practicar las múltiples diligencias que le ordena la ley en beneficio de los acreedores, ¿por qué razón no ha de ser compensado? Respecto á los gastos que efectúe en desempeño de su misión, la razón de que él no puede quedar perjudicado con ellos, es aun más evidente. Es pues, claro, bajo todo punto de vista, el derecho indiscutible, la equidad en que se funda el derecho invocado. Así lo ha reconocido la Cám. Com. Esta cuestión no es nueva, varias veces ha ocurrido y ha sido siempre resuelta en la misma forma. Pueden verse: auto del señor Juez doctor Fonrouge en el concurso Etcheverry, confirmado por la Cám.; el fallo del Juez doctor Cigorraga en el concurso Guialdol, confirmado por la Cám.; y finalmente el fallo del doctor Figueroa en el concurso Soto, todos perfectamente aplicables por analogía. En el caso corriente el acreedor prendario había presentado su escrito, obligó al síndico á estudiarlo, asistió á la junta de verificación, que luego el síndico tuvo que intervenir en las operaciones que se efectuaron para la venta de la prenda, y finalmente se clausuraron las operaciones de la quiebra. Sin embargo, la Cám. Com. no aceptó esta tesis y declaró que: si bien tienen privilegio general, según el art. 1499 del Cód. de Com., los créditos por gastos para la seguridad de los bienes, administración de la casa fallida y demás diligencias judiciales ó extrajudiciales en beneficio común verificados con la debida autorización, tal privilegio no tiene lugar respecto de aquellos créditos para cuya seguridad y libre ejercicio no era necesaria la declaración de quiebra, respecto de las cuales solo tienen privilegio las costas que se refiriesen especialmente á ellas. El acreedor prendario, el locador garantido suficientemente con las cosas introducidas por el inquilino y para quienes la administración de la quiebra es más bien un embarazo que un auxilio, no ceden al privilegio por los gastos generales de la quiebra; y sí únicamente á los gastos especiales á que la realización de los bienes afectados á su privi-

## pero no por los generales del concurso — Jurispruden-

legio diere lugar.—Arts. 3889, Cód. Civ., 582, 1449, inc. 1.º y 1500, inc. 3.º Cód. de Com., Segovia, nota 4778.—En materia civil es otra la teoría sostenida por la Cám. de esa jurisdicción. Ella consagra en su jurisprudencia los principios sustentados en la primera parte de esta nota. Y no podía ser de otra manera, pues el art. 3879 del Cód. Civ. en su inc. 1.º dice que los gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores y los que cause la administración durante el concurso, tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles ó inmuebles. Este art. no limita, ni hace excepción alguna respecto de los acreedores privilegiados, prendarios ó hipotecarios. Y en la nota del Codificador se expresa que son gastos de justicia, los de inventario, conservación, liquidación y realización de los bienes del deudor. El inventario de que habla el art. de la ley Civ., es el *estado del activo y pasivo* de que hablan los arts. 726 y 729 del Cód. de Proc. En el estado presentado por la sindicatura en el concurso general entran los bienes hipotecados, como también entran los bienes prendarios en el *estado de graduación de créditos* y en el *estado de distribución*. La publicación de edictos, haciendo saber la formación del concurso—art. 728 del Cód. de Proc.,—comprende á todos los acreedores, sean quirografarios ó prendarios, sean comunes ó privilegiados. Lo propio sucede con la publicación de los edictos haciendo saber la presentación del *estado de graduación*—art. 758 *ibid.*—En ese estado están comprendidos los acreedores hipotecarios ó prendarios; como también lo están en la verificación de créditos. Todos estos actos celebrados benefician á la masa del concurso ó interesan á todos los acreedores sin excepción alguna, ya sean acreedores prendarios, hipotecarios ó quirografarios, comunes ó privilegiados. Por otra parte, la disposición del art. 3937 del Cód. Civ., solo establece, y significa simplemente que el acreedor no está obligado á esperar el resultado del concurso general para obtener el pago de su crédito, y puede exigirlo inmediatamente; pero de ninguna manera establece que el acreedor prendario no deba concurrir al pago de los gastos del concurso general que son indispensables en el concurso y que lo benefician fuera de toda duda. Esta doctrina ha sido consagrada por la Cám. en numerosos casos, entre los cuales hay algunos de verdadera importancia jurídica, como son el que corre publicado en el tom. 114, pág. 144, en la que se resolvió que: «Los gastos del concurso pueden ser pagados del producido del bien hipotecado». En el tom. 8º, pág. 404, Ser. 5ª, resolvió la misma Cám. de lo Civ. que: «Los honorarios del síndico en el concurso general, tienen prelación sobre el crédito hipotecario, aún cuando se haya formado concurso especial».—Véase tom. 55 de la numeración general.—Esta sentencia decía que: «según previene el art. 727 del Cód. de Proc., declarado el concurso. se nombrará un síndico con el cual deberán en-







tenderse todas las operaciones ulteriores del concurso, y las cuestiones que el deudor tuviese ó las que hubieren de iniciarse. Esta intervención es en tal caso ineludible, no solo para la prosecución y validez de sus trámites, sino también para que puedan fijarse y aclararse los derechos de los acreedores, pues la declaratoria del concurso hace desaparecer la personalidad del deudor en sus relaciones jurídicas con aquéllos. El sindicato, según lo enseña la doctrina, tiene los caracteres de un mandato público confiado por la autoridad judicial en nombre de la ley; desempeñando, las personas llamadas á dirigir el concurso, un triple mandato, pues representan simultáneamente á los acreedores, al fallido y á la ley. De consiguiente, los emolumentos ú honorarios de la sindicatura tienen calidad preferente para su pago cualquiera que sea la naturaleza de los créditos y seguridades y privilegios con que hubiesen sido constituidos, desde que en ningún caso podrían haberse hecho ejecutivos sin la presencia ó intervención de aquella sindicatura. La circunstancia de haberse formado un concurso particular para el cobro especial de un crédito privilegiado, no obsta á que el acreedor continúa siéndolo de la masa común; y en tal carácter tiene en el juicio general la intervención que legalmente le corresponde, como que en él ha debido ser y ha sido efectivamente verificado y graduado su crédito; lo que revela que todos los gastos causídicos han redundado también en su beneficio, pues de otro modo no habría podido ejercitar válidamente la acción real deducida, ni podría conservar acción alguna personal contra el fallido». Esta resolución fué dictada por unanimidad en la Cám. de lo Civ. En otro caso que corre publicado en el tom. 122, pág. 278 se dice que: «Los honorarios del síndico tienen prelación sobre las del acreedor hipotecario». En esta resolución, la Cám. citó en apoyo de su doctrina el caso que corre publicado en el tom. 55, pág. 404 de la Jurisp. Civ., ya citado. El doctor Machado comentando el art. 3889 del Cód. Civ., dice: ¿Cuáles son los que tienen preferencia sobre el acreedor prendario? En primer lugar, siempre se deben colocar los gastos de justicia hechos en beneficio del mismo crédito, porque sin ellos no habría podido cobrarse; en segundo lugar, los gastos hechos para la venta de la cosa dada en prenda; porque sin reducir la cosa á dinero contante no se habría sabido cual era el precio; tercero, los gastos funerarios; cuarto, los gastos de conservación si el acreedor prendario conocía que estaban impagos; quinto, los gastos de última enfermedad; sexto, el acreedor pignoraticio. Se ha establecido cuales son los créditos que son preferidos á los del prendario, pero si concurren todos juntos, ¿cuál será el orden de preferencia? Es una cuestión muy difícil, porque el Cód. no ha señalado un orden invariable de preferencia. Así, el art. 3913, coloca como preferentes al crédito del prendario, al acreedor por gastos funerarios, por los de última enfermedad



**2. Concurso Comercial**—Como actor, debe ocurrir ante el Juez del domicilio del demandado—Com., tom. 1, pág. 203, Ser. 5ª (tom. 36).

del deudor, y los gastos de la venta de la cosa tenida en prenda. ¿Pero cuál será el orden de preferencia? Sería fácil decidir la cuestión entre los gastos funerarios que ocupan el primer lugar, según el art. 3880, y los de última enfermedad del deudor, que están en el segundo; ¿pero respecto de los gastos de la venta de la cosa dada en prenda? Deben ocupar el primer lugar, porque sin ellos no habrían podido pagarse los acreedores, de modo que deben ser preferidos; pero aún queda esta dificultad, ¿y los gastos judiciales del concurso sin los que éstos créditos no habrían podido ser pagados, y que tienen privilegio sobre los mismos créditos? No puede ofrecer dudas tratándose de cada uno de esos créditos, porque el art. 3900, es bien expreso: los gastos de justicia tienen preferencia sobre *todos los créditos*, en el interés de los cuales se han causado; así por ejemplo, el crédito por gastos funerarios cede su lugar á los gastos de justicia hechos en favor de ese crédito. Si esos gastos de justicia se cobran antes que el crédito mismo, quiere decir entonces, que cada uno de ellos debe comenzar por pagar los gastos judiciales, y después recién cobrar su crédito; y así debe suceder para cada uno de ellos. Los gastos de justicia con privilegio general á que se refiere el art. 3879, se deben pagar primero en todos los casos; en seguida cada uno de los créditos con los gastos de justicia hechos en el interés de ellos; pero, ¿cuál es la colocación que debemos dar á los créditos por gastos funerarios, gastos de última enfermedad, y gastos de venta de la cosa? ¿Están en la misma línea y deben prorratearse? Ya se dijo que los gastos funerarios son preferidos á los de última enfermedad, agregando, que los gastos hechos en la venta de la cosa dada en prenda, son preferidos á los funerarios y de última enfermedad. Si se trata de un concurso, entonces serán preferidos: 1º, los gastos de justicia relativos al inventario y seguridad de las cosas; 2º, los gastos para la venta; 3º, los funerarios; 4º, los de conservación, si el acreedor conocía el crédito del conservador, arts. 3901 y 3902; 5º, los de la última enfermedad del deudor; 6º, el acreedor prendario.»

2. El agente fiscal dijo: «Se trata precisamente del caso previsto en el cuarto aparte del art. 4º del Cód. de Proc. El lugar elegido para el cumplimiento de la obligación del demandado, era en esta Cap., pues que el deudor concursado que era un Banco tenía en esta jurisdicción su domicilio, y por lo tanto, dado este carácter, la intención de las partes no ha debido ser otra sino que el contrato debía cumplirse en esta Cap.» No prosperó esta doctrina, pues teniendo por objeto el juicio de concurso la distribución proporcional de los bienes del fallido entre sus diferentes acreedores, es de necesidad y de conveniencia que la liquidación de la masa se haga bajo la autoridad de un solo juez, porque



**Concurso comercial**—Véase: *Alquileres*, 1.

1. **Concurso especial**—El acreedor hipotecario es el único que tiene derecho á exigir la formación de concurso especial—Civ., tom. 21, pág. 317, Ser. 5ª (tom. 68).

únicamente teniendo en cuenta la universalidad de bienes y deudas, es posible efectuar el reparto en la forma que corresponde. Es en vista de esta necesidad y con el objeto de evitar desigualdades entre los acreedores, que el art. 1387 del Cód. de Com., atribuye al juicio de quiebra el carácter de universal. El motivo referido y en virtud del cual la ley confiere fuero de atracción al juicio de concurso, solo existe respecto de los juicios contra éste, porque son ellos los que podrían dar lugar si hubieran de seguirse y ejecutarse por jueces distintos, á que la distribución no se hiciera con la proporcionalidad y justicia que la ley exige. Respecto de los pleitos que el fallido haya iniciado como actor, ó que el concurso entable en el mismo carácter, no existe ni remotamente el peligro apuntado, porque todo lo que en virtud de ellos se obtenga, vendrá á la masa común y recibirá la aplicación correspondiente por el juez del concurso. En consecuencia, no alcanzando á los juicios en que el concurso sea demandante, la razón de la ley, debe entenderse que el art. 1387 citado, se refiere solamente á los negocios judiciales contra el fallido ó el concurso, interpretación que aconseja igualmente en este caso la circunstancia de que dicha disposición constituye una excepción á las reglas generales sobre jurisdicción, y que como tal debe ser interpretada en un sentido restrictivo. Esta doctrina es, la que enseñan los autores y la que ha sido aceptada por la Jur. de nuestros Trib., habiendo reconocido unos y otros que los juicios universales de quiebra y sucesión, atraen al Juzgado que entiende de ellos, los asuntos judiciales en que el fallido ó la sucesión sean demandados, pero no aquellos en que desempeñan el rol de demandantes—Véase Manresa y Reus, tom. 3º, pág. 356; Caravantes, tom. 3º, pág. 130; Segovia, not. 4437; Fallos de la S. C. F.; y de la Cám. Civ., tom. 4º, Ser. 2ª, pág. 89.

1. Iniciado un juicio testamentario por la esposa del causante, se prosiguieron sus trámites legales con intervención de ésta y de los padres del *de cuius*, representados por un procurador. Los bienes sucesorios consistían en dos fincas: una ubicada en esta capital, y la otra, en la provincia de Buenos Aires. El primero de los inmuebles enunciadlos se hallaba gravado con hipoteca. Obtenida por los interesados la respectiva declaratoria de su carácter hereditario y puestas las propiedades en remate, fué comprada la de esta Cap., por el acreedor hipotecario. Oblado el saldo resultante de la diferencia entre el precio de compra y el crédito é intereses corridos, el comprador pidió la posesión de la cosa, á la que se opuso el representante de la sucesión, hasta tanto no se depositara la diferencia existente entre el crédito hipotecario y el pre-



**Condenación**—Véase: *Sumas*, 1.

1. **Condición**—Al que reconociendo la deuda alega la existencia de una condición, corresponde justificarla—Com., tom. 9, pág. 308, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Condición**—Debe rechazarse la excepción de espera, si dependiendo de una condición, el escepcionante no justifica haberla cumplido—Com., tom. 5, pág. 379, Ser. 5ª (tom. 40).

3. **Condición**—La obligación sujeta a condición no es

cio de remate. Estas pretensiones fueron desestimadas. Terminado este incidente y devueltos los autos á 1ª Inst., la misma parte, su letrado y el martillero, se presentaron nuevamente provocando la formación de un concurso especial sobre la finca comprada por el acreedor hipotecario, en consideración á que sus créditos tenían privilegio sobre el de éste. Estas peticiones constituyeron un nuevo incidente á resolverse. Se trata de saber si procede la formación de un concurso especial al inmueble hipotecado. El art. 3937 del Cód. Civ., dice: «á cada finca gravada con hipoteca, podrá abrirse á solicitud de los acreedores un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella». En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales que en él se causaren. Resulta de los términos de esta disposición que ella ha sido establecida en beneficio de los acreedores hipotecarios, siendo éstos los únicos que tienen facultad para promover la apertura de un concurso especial á los efectos enunciados en el mismo texto legal, esto es, para ser pagados inmediatamente.

1. La condición en este caso importa la alegación en juicio, de un hecho nuevo, siendo un principio de derecho procesal, que todo aquel que aduce un hecho nuevo en juicio debe comprobarlo.

2. Se trataba de la ejecución de un pagaré á la orden: con sujeción al art. 676 del Cód. de Com., para que la excepción de espera sea procedente contra la acción ejecutiva de las letras de cambio—art. 744 del mismo Cód.,—ella debe probarse por escritura pública ó por instrumento privado reconocido judicialmente. Si bien por el instrumento público que se exhibió, el acreedor contrajo la obligación de renovarla á su vencimiento, debe tenerse presente que en uno de los artículos del mismo contrato se había estipulado que para que el deudor pudiera obtener la renovación, contraía la obligación de avisar al acreedor con 15 días de anticipación. Lo pactado quedaba, pues, sometido á una condición resolutoria, y no se probó el cumplimiento de tal condición existiendo en el término convenido la renovación.

3. Tratándose de una obligación de índole compleja, solo en juicio ordinario pueden ventilarse y resolverse las acciones y excepciones á que diere lugar—art. 66 del Cód. de Proc.—Á no ser que la condición

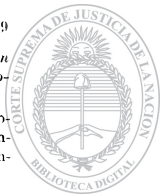


ejecutiva en tanto no se justifique su cumplimiento—Civ., tom. 11, pág. 374, Ser. 3ª (tom. 58).

1. **Condiciones** — La prueba sobre las condiciones del contrato no debe ser tenida en consideración si el traslado de la demanda se dió por contestado en rebeldía—Com., tom. 1, pág. 290, Ser. 3ª (tom. 36).

á que está sujeta la obligación, pudiese comprobarse fehacientemente y en forma sumaria. Dadas estas circunstancias, no es posible reconocer fuerza ejecutiva al documento condicional, porque como se desprende claramente de la letra y espíritu de los arts. 464 y 465 del Cód. de Proc., solo gozan de ese beneficio los créditos cuya existencia y legalidad aparezcan por lo menos *prima facie*, plenamente justificados.

1. El actor demandó el pago de la cantidad de 600 pesos, saldo del precio de un piano vendido en 1200 pesos. La demanda se dió por contestada en rebeldía del demandado, y habiéndose ordenado un embargo preventivo, éste dió á embargo el mismo piano motivo del juicio, espresándolo así bajo su firma en la diligencia de embargo, como también que no tenía fondos para pagar la deuda. El demandado reconoció una tarjeta, en la cual prometía «liquidar la cuenta del piano»; asumiendo posiciones, confesó haber recibido el piano para ser *descontado su precio* de un negocio que indicó posteriormente; confesó haber recibido el piano para que se descontara su importe de un negocio de tierras. En su alegato, también confesó que recibió el piano y lo repitió en la espresión de agravios. Todos estos hechos y la existencia en su poder del piano mismo, prueban el derecho del actor. El piano fué entregado al demandado y éste no lo había pagado en su totalidad; esto es lo que claramente resultaba de autos. El demandado alegó durante el término de prueba y posteriormente, que tenía un negocio en sociedad con el demandante, y que eran las utilidades de ese negocio con las que se debía pagar el precio del piano. La Cám. decía: «como estos hechos no fueron articulados en la estación oportuna del juicio, al contestarse la demanda, las pruebas que á ellos se refieren deben ser irremisiblemente desechadas, según lo dispuesto en el art. 408 del Cód. de Proc.» Esta teoría no es exacta, pues este Trib. tiene resuelto que la contestación en rebeldía sólo produce el efecto de dar por decaído el derecho de contestar la acción instaurada; pero en manera alguna la de considerar como confesados los hechos afirmados en la demanda. Por el contrario, la verdadera doctrina y jur. han consagrado que el que no contesta la demanda, la niega en todas sus partes. Negada la acción, no hay duda alguna que el demandado puede producir la prueba necesaria para desvirtuarla, y por consiguiente la que llega á producir debe ser tomada en consideración.— Véase *Instituta*, tom. 7, verb. *Demanda contestada*, n.º 3 y 4.



**Condiciones**— Véase: *Juez*, 1; *Recusación*, 2; *Excepción de falta de personería*, 1; *Contrato*, 13; *Obligación condicional*, 1.

1<sup>a</sup>. **Condición resolutoria**—Justificada la condición resolutoria expresamente pactada en el contrato de locación, la sentencia que lo declara rescindido no causa agravio y debe confirmarse—Civ., tom. 9, pág. 114, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

**Condición social**—Véase: *Alimentos*, 1.

1<sup>b</sup>. **Condominio**—La falta de firma de uno de los condóminos no altera su obligación de hacer escritura, si se justifica que espresamente conocía la venta y la ratificaba—Civ., tom. 16, pág. 132, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

2. **Condominio**—El reconocimiento incidental de condominio existente en un testamento, no basta para crear derecho sobre un inmueble que por escrituras públicas corresponde en exclusiva propiedad al vendedor—Civ., tom. 20, pág. 60, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

---

1<sup>a</sup>. Según el contrato de arrendamiento, había quedado espresamente convenido, que el pago del alquiler estipulado se haría con toda puntualidad del 1º al 10 de cada mes vencido, y que la falta de cumplimiento daría lugar á su rescisión. Siendo de espreso derecho que las convenciones hechas en los contratos, forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma — art. 1197 del Cód. Civ.,—no puede ponerse en duda la justicia del pronunciamiento que declare rescindido el contrato por falta de cumplimiento de esa cláusula.

1<sup>b</sup>. El inmueble aparecía como de propiedad de algunos directores de una sociedad, pero en realidad no les pertenecía á ellos sino á la sociedad. El comprador se presentó pidiendo la escrituración del boleto, á lo que se opuso uno de los directores á cuyo nombre estaba el inmueble, fué rechazada su opinión por cuanto, si bien el boleto de venta no contenía su firma, constaba que había reconocido en diferentes momentos la eficacia de la venta.

2. No se puede fundar ningún derecho de propiedad en enunciaciones inexactas contenidas en escrituras públicas, mucho menos cuando esas enunciaciones son de simples referencias, y su error y aun su supresión, en nada puede afectar la validez del acto. El favorecido por la afirmación contenida en una cláusula accidental de un testamento, jamás puede arrancar de él su derecho cuando esa enunciación es falsa y contraria á la verdad de los hechos.



3. **Condominio**—No procede la nulidad de la ejecución por falta de intervención de los condóminos, si el condominio había desaparecido—Civ., tom. 21, p. 362, Ser. 3ª (t. 68).

4. **Condominio**—La división del condominio en especie es la regla general de la que no es posible apartarse sino en

4. Poseído un inmueble por tres hermanos, se presentó uno de ellos ejercitando el derecho que le acuerda el art. 2692 del Cód. Civ., y pidió se procediese a la venta en remate del inmueble, por ser éste el medio que mejor consultaba los intereses de los condóminos. Los otros se opusieron a la enajenación solicitada, alegando entre otras razones, que el campo, por su forma y la igualdad de sus condiciones, admitía cómoda división. Sobre este particular, los elementos de juicio traídos a la causa fueron de incontestable eficiencia, y permitieron ejercitar con acierto el criterio judicial. Espidiéndose la Sociedad Rural sobre la consulta que se le hizo, expresó que el campo era fácilmente divisible en tres proporciones iguales; que un campo de las dimensiones indicadas es perfectamente aplicable, tanto a la ganadería como a la labranza. Los peritos en mayoría, se espidieron en sentido análogo, consignando uno de ellos que el campo era de fácil división, siendo todo alto y sin desperdicio alguno, notándose por su extraordinaria uniformidad; y el otro dijo que esta facilidad resultaba por su configuración y condiciones, sin perjuicio de su valor general. Se arguyó, con referencia al informe de la Sociedad Rural, que no había dicho espresamente que dividido el establecimiento conservaría cada una de sus partes el valor que proporcionalmente le corresponde en el conjunto, olvidándose, sin embargo, que esa omisión no afectaría el punto fundamental de la controversia, y que la misma corporación informante no había suscitado una dificultad, limitándose a enunciar que no es posible afirmar nada sobre la equivalencia de sus valores, sin un examen previo sobre el terreno mismo. Del punto de vista legal, la solución sería idéntica a la que imponen los antecedentes informativos de la prueba. El Inferior observó juiciosamente, que la división en especie es la regla general de la que no es posible apartarse, sino en el caso de que esa forma sea inaceptable, por no ser los bienes cómodamente partibles; si bien consultando, como es evidente, la conveniencia de los condóminos. Esta es la inteligencia que surge de los textos legales, y que tienen su antecedente ilustrativo en la ley francesa—art. 824 y siguientes del Cód.,—aunque indiscutiblemente sea ésta más abundante en doctrina que la nuestra, y más precisa en sus procedimientos. Es el principio dominante en casi todas las legislaciones positivas, y cuyo origen se remonta al testo romano... *Si familiar aerciscundar, vel comuni dividendo iudicium agatur, et decisio tan difficilis sit, ut ponne impossibilis esse videatur.*



el caso de que los bienes no sean cómodamente partibles—Civ., tom. 22, 1.º g. 165, Ser. 5ª (tom. 69).

**Condóminos**—Véase: *Declaratoria de herederos*, 2; *Defraudación*, 4.

**Conducta irregular**—Véase: *Adulterio*, 6.

1ª. **Conductores**—La infracción de las ordenanzas municipales que reglamentan el tráfico, importa en los conductores de vehículos, la culpa que la ley exige para responsabilizarlos por los daños y perjuicios causados por accidentes—Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 5ª, (tom. 56).

1ª. **Confesión**—La confesión de haber sido devueltas las

---

1ª. Habiendo sido muerto por un coche de tramway un individuo, su esposa se presentó reclamando daños y perjuicios, esponiendo que su esposo fué derribado por un coche que cruzaba con la mayor velocidad dicha boca-calle, en contravención de los reglamentos municipales que ordenan que los cruces de las calles se hagan al paso; que las ruedas del vehículo pasaron sobre los muslos de la víctima, quien tres días después falleró á consecuencia de las heridas; que la muerte de su esposo la había dejado próxima á la indigencia, pues carecía de profesión é ignoraba el idioma del país. Estando establecido por la ley—art. 1109, Cód. Civ.—que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio, y siendo extensiva esta obligación á los daños que causaren los que están bajo su dependencia—art. 1113,—la cuestión se reduce puramente á examinar si se había causado ó no daño á la parte actora por culpa ó negligencia de parte de la empresa demandada ó sus dependientes. En la contestación á la demanda se reconoció el hecho del accidente que lesionó al esposo, sosteniéndose solamente que la culpa estuvo de parte del mismo, sin que los empleados de la empresa hubiesen infringido ninguna prescripción reglamentaria. Se comprobó por medio de testigos que el lesionado fué atropellado por un coche de tramway que venía á todo escape. Estas declaraciones constituían prueba respecto de los hechos sobre que versaban, pues se trataba de testigos libres de tacha y que habían presenciado los hechos á que se refieren, quedando, por lo tanto, comprobado, que el coche de tramway que iba á todo escape, atropelló á la víctima. En el reglamento sobre tramways de Enero de 1872, se preceptúa que los cruces de calles se hagan al paso ó tranco de los caballos; esta prescripción reglamentaria había sido violada, como lo demostraban las declaraciones ya citadas, violación que constituye la culpa ó negligencia que da nacimiento á la obligación de reparar el perjuicio causado.





mercaderías en que se funda la sociedad, exige al demandado de probar su disolución—Com. t. 1, p. 396, Ser. 6ª (t. 36).

2. **Confesión**—La ficta, resultante de las posiciones abusuales en rebeldía, no forma prueba si no se abrió la audiencia el día señalado—Civ., tom. 9, pág. 430, Ser. 5ª, (tom. 56).

3. **Confesión**—Si de la confesión de la parte resulta la falsedad de la obligación que á su favor contiene el instrumento público, debe declararse su simulación—Civ., tom. 11, pág. 300, Ser. 5ª, (tom. 58).

4. **Confesión**—Si el demandado, aceptando la verdad del saldo, solo objeta una de las partidas, la prueba pericial, aun cuando exista conformidad sobre su procedencia, no puede alterar el derecho que resulta de dicha confesión—Civ., tom. 15, pág. 224, Ser. 5ª, (tom. 62).

5. **Confesión**—Del curador de la herencia, no basta para

---

2. Esta es la doctrina sustentada por la Cám. de lo Civ. fundándose en que la confesión ficta no produce efectos legales sino en tanto se hayan cumplido determinadas formalidades que no aparecían ciertamente en los autos. Es así indispensable que el día señalado se proceda, á pedido de parte, á la apertura de la audiencia, y en presencia del Juez solicite el interesado se haga efectivo el apercibimiento en oportunidad. Teniendo en cuenta la gran fuerza que el derecho atribuye á la confesión, lo ha declarado así en numerosas resoluciones, que constituyen al presente una de las partes fundamentales de su jurisprudencia. Véase *Instit.* tom. 8, verb. *Posiciones*, 8, y *Audiencia*, 1; tom 7, verb. *Audiencia abierta*; y tom. 5, verb. *Audiencia*, 1.

3. Los instrumentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones contenidas en ellos—art. 994 del Cod. Civ.—No obstante la fe que merece, ante la ley, el contenido de estos instrumentos, admiten sin embargo, prueba en contrario. Entre esos medios probatorios se encuentra la confesión de parte, que es la prueba de las pruebas. Cuando el beneficiado por una declaración contenida en un instrumento público confiesa que esa enunciación es falsa ó simulada, la fuerza probatoria del instrumento cede ante la confesión de la parte—Art. 953, *ibid*; ley 2, tít. 13, Part. 3ª.

4. La confesión de parte debe indiscutiblemente primar sobre la prueba pericial por la gran fuerza que en derecho tiene aquélla conforme al sabio principio de la ley 2, tít. 13, Part. 3ª.

5. Las facultades de los curadores en lo que respecta á la administración se hallan limitadas por la ley—art. 488 del Cód. Civ.—á los



declarar justificada la existencia del crédito—Civ., tom. 15, pág. 392, Ser 5ª, (tom. 62).

**Confesión**—Véase: *Posiciones*, 8; *Pena de muerte*, 1.

**1ª. Confesión extrajudicial**—El préstamo ó mutuo no puede ser justificado por testigos si no existe principio de prueba escrita, aun cuando por ella se justifique la confesión extrajudicial del deudor—Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 5 (1. 56).

**Confesión extrajudicial**—Véase: *Prueba testimonial*, 4.

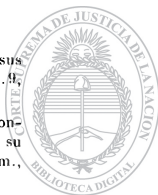
**Confesión jurada**—Véase: *Divorcio*, 18.

**1ª. Conforme**—El conforme con el total de una cuenta no

actos administrativos de mera custodia ó conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas. El reconocimiento de una obligación no es entre tanto acto administrativo, y de consiguiente no es acto autorizado ó permitido por derecho á los curadores, como no lo es, en igualdad de situaciones, á los tutores sujetos á las mismas trabas que los primeros. El espíritu de la ley es claro: ha querido garantizar los intereses de los incapaces poniéndolos á cubierto de administradores sospechosos, negligentes ó infieles. En cuanto al art. 489 del mismo Cód., en manera alguna favorece la tesis contraria, pues la personería que por él se confiere al curador no aparea la potestad de obligar con sus confesiones los bienes que está llamado á administrar.

1ª. La entrega en este caso constituye un contrato de mutuo—artículo 2240 del Cód. Civ.,—el cual no puede probarse por testigos, sino por instrumento público ó privado, de fecha cierta, cuando el empréstito ó la cosa ó suma prestada pasa del valor de 200 pesos m. n.—artículo 2246 del Cód. Civ.—En la prescripción del art. citado y el art. 1193 del Cód. Civ. queda comprendida también la prueba por confesión extrajudicial—art. 138 del Cód. de Proc.,—y no procediendo en efecto otra prueba que la testimonial, ella debe ser desechada, así como el crédito que reclamado en su mérito, y no probado en la única forma determinada por la ley. Aún admitiendo que el dinero cuya restitución se reclamaba, hubiera sido entregado en cuotas que no excedieran ninguna de ellas de 200 pesos, aún así, siempre resultaba improbadó el crédito cobrado, porque los dos testigos que depusieron sobre el particular no referían haber presenciado entrega alguna de dinero, ya sea en una sola vez ó por diversas cuotas, sino que oyeron decir, al interesado que era deudor del demandante por 300 pesos, y esto, importa establecer la confesión extrajudicial, que si bien es un medio legal de prueba, no puede, sin embargo, acreditarse por testigos sin mediar un principio de prueba por escrito—art. 138 del Cód. de Proc.

4ª. El acto de conformarse con una cuenta no importa crear una obli-



está sujeto al impuesto de papel sellado si cada una de sus partidas no estaba comprendida en el impuesto—Cóm., tom. 9, pág. 392, Ser. 3ª (tom. 25).

2ª. **Conforme**—Puesto al pie de la cuenta importa conformidad con el precio que en ella existe; al que alega su posterior agregación corresponde justificar el hecho—Com., tom. 5, pág. 142, Ser. 5ª (tom. 40).

**Conforme**—Véase: *Cuenta*, 2; *Cuenta corriente*, 4.

**Congreso Nacional**—Véase: *Acusación*, 5.

1ª. **Consejo de Educación**—Corresponde dar intervención al Concejo de Educación á solicitud de partes—Cív., tom. 9, pág. 354, Ser. 5ª (tom. 56).

2ª. **Consejo de Educación**—Sólo puede intervenir en la testamentaria después de declarada vacante la herencia—Cív., tom. 11, pág. 379, Ser. 5ª (tom. 58).

1ª. **Consejo de Higiene**—Si el precio de la asistencia médica debe ser fijado por el Consejo de Higiene, no procede

gación sino reconocer la obligación que ya existía. Ninguno de los actos parciales que representaban la suma total de esas cuentas estaba sujeto á la ley de sellos, y desde luego tampoco debía estar la suma total, que no es sino el resultado de esas sumas parciales.

2ª. Proemio de la Ley 1, tít. 13, Part. 3ª.

1ª. Art. 44, inc. 11 de la ley nª 4420.

2ª. De acuerdo con la jur. establecida en estos casos. Véase tom. 2, p. 525, S. 2; é *Instituta*, tom. 2, verb. *Consejo General de Educación*.

1ª. El sumario no expresa con exactitud lo resuelto por el tribunal. La Cám. exoneró de las costas al vencido, porque el actor solicitó que aquél fuese condenado al pago de una suma determinada, como precio de la asistencia médica prestada. Sin embargo, solo se condenó al demandado á pagar la suma que fijara el Consejo de Higiene, lo que demostraba que el actor no había prosperado en su demanda. Cuando se pide que se condene á la parte al pago de una suma determinada, y solo se la condena á abonar la suma que fija el Consejo, es evidente que el vencido no puede ser condenado en costas, pues su resistencia al pago de la suma demandada era legítima; no pudiendo por otra parte, decia la Cám., «imputarse á la defensa temeridad ni malicia por lo que procede la exoneración de las costas por existir mérito para ello de acuerdo con el art. 221 del Cód. de Proc.»



condenación en costas contra el vencido—Civ., tom. 11, pág. 285, Ser. 5ª (tom. 58).

**Consejo de Higiene**—Véase: *Honorarios*, 20, 25 y 27; *Médico*, 2; *Servicios médicos*, 1.

**Consentimiento tácito**—Véase: *Contrato*, 15.

1. **Consignación**—La consignación, antes de librarse mandamiento, exonera al deudor del pago de las costas—Com., tom. 9, pág. 191, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Consignación**—La consignación, antes del requerimiento, exime de las costas—Com., t. 9, p. 357, S. 3ª t. 25).

3. **Consignación**—Para que la consignación surta efectos de pago debe comprender capital, intereses y gastos—Com., tom. 4, pág. 232, Ser. 5ª (tom. 39).

4. **Consignación**—Si el acreedor objeta la consignación, debe continuarse el procedimiento—Com., tom. 4, pág. 232, Ser. 5ª (tom. 39).

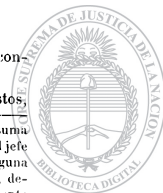
5. **Consignación**—La procedencia de la consignación no

1. Art. 483 del Cód. de Proc.

3. Para que la consignación surta los efectos de pago, debe reunir todos los requisitos, sin los cuales el pago no puede ser válido, en cuyo caso el acreedor no está obligado á aceptarlo—art. 758 del Cód. Civ.—Según lo dispuesto por el art. 756 del mismo Cód., si el deudor debiese capital é intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal. Se trataba de una letra protestada, en cuyo caso se hace correr á favor del acreedor los intereses legales y el derecho á cobrar los gastos del mismo. La consignación solo había sido hecha por el capital, y con arreglo á las disposiciones legales, si el acreedor se opone, no puede surtir los efectos de pago sin que también se consignen los intereses y gastos expresados. Aun cuando se trataba de un embargo preventivo, no habiendo consignado el deudor el monto expresado en el mandamiento, como lo requiere el art. 456 del Cód. de Proc., no es procedente la suspensión del mandamiento, ni la consignación surte los efectos del pago.

4. Véase nota precedente.

5. Entablada una demanda sobre cumplimiento de contrato, se quiso acumular otra sobre pago por consignación. No se hizo lugar á la segunda, por cuanto son dos juicios diversos que no admitían acumulación en ese estado de la causa.



puede discutirse en el juicio sobre el cumplimiento del contrato—Civ., tom. 16, pág. 338, Ser. 5ª (tom. 63)!

#### 6. Consignación—La consignación de los impuestos,

6. El actor se presentó haciendo consignación en pago de una suma por impuestos que debía á la Mun., pidiendo que se hiciera saber al jefe de la oficina de recaudación del impuesto general, que si tenía alguna objeción que hacer al pago por consignación que venía á verificar, debía fundarla dentro del término que se le señalaba, bajo apercibimiento de tenerse la consignación como pago legítimo. Esponiendo los antecedentes del caso, el actor espresaba: que á consecuencia de un aviso de la oficina de recaudación de impuestos mun., había ocurrido á verificar el pago por unas fincas relacionadas en una planilla que acompañó, pidiendo que se liquidase su importe; que hecha la liquidación por la Mun., había observado al jefe de la oficina, que ella no se ajustaba á los impuestos fijados en el art. 1º de la Ord. de 1892, que la asamblea municipal de 30 de Dic. del mismo año había declarado vigente para regir en 1893, á lo que se contestó que no se reconocía más Ord. de impuestos que la que le había comunicado la Intendencia, por la cual se aumentaban considerablemente los impuestos de alumbrado, limpieza y barrido, en relación á los establecidos en la ordenanza antes citada; que en consecuencia rehusó pagar la cantidad que se le exigía por la Mun., puesto que no reconocía como válida otra Ord. que la de 30 de Dic. de 1892; que en esa virtud consignaba judicialmente los impuestos que creía deber, usando del derecho acordado por el art. 756 del Cód. Civ. Corrido traslado de la demanda, el representante de la Mun., pidió el rechazo de la consignación, sosteniendo que la Ord. con arreglo á la cual pretendía pagar el actor, no estaba en vigencia, á causa de que había sido observada por el intendente municipal en uso de la facultad que espresamente le confiere el inc. 4º del art. 59 de la ley org. mun., agregando que en el año 1893 se había sancionado otra Ord. de impuestos por el Concejo Deliberante y los mayores contribuyentes, y promulgada por el intendente municipal. Corrido un nuevo traslado por haberse declarado de puro derecho la cuestión, el Inferior falló la causa declarando válido el pago por consignación, resolución de que se alzó el representante de la Municipalidad. La cuestión á resolver es esta: ¿Pudo el intendente mun. observar la Ord. de 30 de Dic. de 1892? Si el intendente pudo observar la Ord., ésta quedó sin efecto, puesto que no constaba que se hubiese insistido en su sanción; y desde entonces la consignación hecha con arreglo á ella sería ilegal é inválida á los efectos del pago. Por el contrario, si la Intendencia no pudo observar tal ordenanza, ella subsiste, y la consignación habría sido bien hecha. El art. 59 de la ley org. mun. de la Cap., enumerando las atribuciones y deberes del intendente municipal, dice en su inc. 3º: «promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo deliberante y proveer á su eje-

con arreglo á la ordenanza municipal que válidamente los

cución por medio de los empleados á sus órdenes, dictando las disposiciones reglamentarias del caso; y en el inc. 4º, agrega: «observar en el término de cinco días útiles, las ordenanzas que estime ilegales ó inconvenientes, inclusive la del presupuesto general; pero si el Concejo insiste en su resolución por simple mayoría de votos de los miembros presentes en sesión, deberá promulgarlas y cumplirlas. Si vencidos los cinco días útiles la ordenanza no fuera observada, se considerará en vigencia». Este último inciso confiere al intendente, como se ve, la atribución de observar en el término de cinco días las ordenanzas que sancione el Concejo deliberante, inclusive la del presupuesto general, toda vez que las estime inconvenientes ó ilegales. Cuando esto prescribe la ley, es indudable que se refiere á las ordenanzas comunes que el Concejo deliberante puede dictar sobre materias de administración, dentro de la órbita de sus atribuciones. Ahora bien: ¿la Ordenanza de 30 de Dic. de 1892 fijando los impuestos para 1893, debe entenderse comprendida entre las que el intendente puede observar? Parece que no. Para la fijación de los impuestos, la ley ha previsto una forma y tramitación especiales. El art. 44, inc. 1º, ley org. citada, establece que corresponde al Concejo «fijar todo impuesto á mayoría absoluta de votos del cuerpo deliberante, aumentado para ese acto con un número igual al que lo componga, de los mayores contribuyentes de cada parroquia». Resulta que los impuestos se fijan por el Concejo deliberante, aumentado para ese acto con un número igual de los mayores contribuyentes de cada parroquia, es decir, por una asamblea ó tribunal especial. Esa asamblea ó tribunal no es el Concejo deliberante, ni por su número, ni por la forma de su constitución, ni por sus atribuciones. Es un tribunal especial, creado por la ley con un sólo y único mandato: fijar los impuestos. La ordenanza que ese tribunal dicte, de naturaleza ó índole legislativa, no es observable por el intendente. La ley solo le da ese derecho con relación á las ordenanzas comunes que sancione el Concejo deliberante: queda sentado que el tribunal que crea el art. 44, inc. 1º, ley citada, no es el Concejo deliberante. La atribución que el art. 59, inc. 4º, da al intendente, es sin duda alguna, una limitación á las facultades de otro poder; y desde entonces es una ley de escepción que debe interpretarse restrictivamente. Así, si la disposición antes citada habla únicamente de las ordenanzas que sancione el Concejo deliberante, no se puede legalmente, mediante una interpretación extensiva, incluir las ordenanzas sobre impuesto que dicte la asamblea del art. 44, inc. 1º, ley citada. La consecuencia de todo esto es que la observación hecha á la Ordenanza de 30 de Dic. de 1892 fué ilegal, y hay que conceptuarla á ésta como vigente, de conformidad con lo dispuesto en el último acápite del inc. 4º del art. 59, ley citada. De donde se deduce que la consignación efectuada por el actor con suje-





## ha fijado, surte los efectos del pago — Jurisprudencia de

ción á esa ordenanza era procedente, desde que los impuestos que con ella se propuso pagar eran los determinados en la dicha ordenanza. El Dr. Saavedra que integró el Trib. para resolver esta cuestión votó en desidencia diciendo: «El demandante pretende pagar los impuestos municipales del año 1893, con arreglo á la Ordenanza sancionada en Dic. de 1892, y me basta hacer presente que esta ordenanza fué modificada, y quedó, por consecuencia sin efecto, por la de Feb. de 1893, para que quede en evidencia la improcedencia de la consignación efectuada de conformidad á la primera. El derecho de modificar ó derogar sus propias ordenanzas, por parte del Concejo deliberante, nace de la facultad que la ley le acuerda para dictarlas, y de la misma naturaleza legislativa de sus funciones; de modo que á falta de una limitación ó prohibición expresa, ese derecho alcanza á todas las ordenanzas que emanan de él y que versen sobre cualquiera de las materias que caen bajo su jurisdicción. Por consiguiente, no prohibiendo la ley, ni explícita ni implícitamente, la modificación ó derogación de la ordenanza de impuestos, ésta tiene que ser considerada á ese respecto, al igual de todas las demás, siendo entonces forzosa la conclusión de que el Concejo aumentada en la forma que corresponde, puede dejar sin efecto, por medio de nuevas ordenanzas, las anteriores relativas á impuestos. El único precepto de la ley org. mun. que pudiera invocarse como una limitación del derecho en cuestión sería el que contiene la última parte del inc. 9º del art. 44, pero bien considerada esa disposición, se ve que ella no tiene más objeto que evitar que empiece el año sin estar sancionada la ordenanza de impuestos, propósito que se esplica perfectamente, porque, de lo contrario, la Municipalidad podría verse privada de sus recursos durante una parte del año, y trabada por lo tanto su marcha en perjuicio de los intereses generales. Por lo demás, la determinación de la época en que debe dictarse la ordenanza, es el fin especial de la disposición referida, y fuera de él, no es lícito buscar en la ley interpretaciones que respondan á un orden diverso de propósitos. Pero, aún cuando esto fuera posible, aún cuando pudiera creerse que una disposición que tiene un objeto dado, encierre fines accidentales y diversos, de todos modos no puede entenderse que la fijación de una época especial para sancionar una ord., importe prohibición de derogarla ó modificarla en adelante; sobre todo cuando esta prohibición debiera ser expresa, puesto, que constituiría una excepción al principio general que consagra aquel derecho en términos absolutos. Dada pues, la facultad incontestable del Concejo para modificar ó derogar las ordenanzas de impuestos, y resultando que la de Dic. de 1892 fué derogada por la de Feb. de 1893, es indudable que aquélla no puede considerarse subsistente y que ésta será la única obligatoria, siempre que haya sido sancionada de conformidad

## la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, tomo 16, pá-

con la ley. El demandante sostiene que esa ord. es ilegal, porque para su sanción el Concejo no fué integrado con los mayores contribuyentes que dictaron la ord. anterior. Pero esta tesis es completamente infundada. En primer lugar, con arreglo al art. 2º de la ley antes citada, el mandato de los mayores contribuyentes dura solamente por el año en que son nombrados. En segundo lugar, y suponiendo que el mandato solo concluya con el desempeño de las funciones que les son conferidas, éstas fueron totalmente ejecutadas con la sanción de la ord. respectiva; de modo que, una vez dictada, los mayores contribuyentes quedaron desde entonces legalmente separados del cuerpo á que pertenecían, é inhibidos, por consecuencia, de dictar una nueva ord. Por otra parte, ni de la letra ni del espíritu de la ley, resulta la necesidad de que una ord. de impuestos sea modificada por el mismo personal del Concejo que la sancionó. Si en cualquier época del año hay un Concejo legalmente constituido, tiene el derecho de modificar sus ordenanzas, sin tener para nada en cuenta quienes fueron las personas que formaban parte de la corporación cuando aquellas fueron dictadas. Ahora, en cuanto al nombramiento de los mayores contribuyentes que reemplazaron á los que habían sancionado la ord. de diciembre, su legalidad es indiscutible, ante la demostración concluyente que contiene el informe de la Comisión del Concejo, transcripto en el alegato del demandado. Tenemos, pues, que siendo perfectamente legal la ord. de 1893, derogatoria de la de 1892, el pago de los impuestos tiene necesariamente que hacerse con arreglo á aquella, por ser la única vigente, y que, por lo tanto, no puede ser admitida como pago una consignación que no ha sido hecha de acuerdo con el título obligatorio —arts. 756 y 758, Cód. Civ.—Se ve entonces, que, con derecho ó no, el intendente mun. para vetar la Ord. de 1892, de cualquier manera ésta no ha quedado subsistente, desde que el Concejo, en uso de facultades que le son propias y que no han sido limitadas en forma alguna, sancionó una nueva Ord. que dejó sin efecto la primera. Pero es el caso que, por mi parte, considero indiscutible el derecho del intendente para vetar las Ord. de impuestos. La ley ha conferido á ese funcionario el derecho absoluto é ilimitado de observar las ordenanzas que sancione el Concejo deliberante —inc. 4º, art. 59,—y esta facultad no reconoce otro origen que la naturaleza ejecutiva de las funciones del uno, y el carácter legislativo de las que corresponden al otro: de suerte que, siendo esa la razón del derecho, éste puede ejercitarse siempre que el Concejo proceda como autoridad legislativa, ya sea sólo, cuando sanciona una ord. cualquiera, ya sea aumentado, cuando dicta las ordenanzas de impuestos. Desde que en uno y otro caso obra como rama legislativa de la Mun. y desde que el veto se acuerda al intendente por razón del carácter de las funciones que desempeñan ambas autorida-





gina 287, Serie 5ª (tomo 63 de la numeración general)

des, lo lógico es que pueda hacer uso de él en cualquiera de los dos casos citados. Esta es la única interpretación sincera, si puedo expresarme así, de las disposiciones de la ley municipal, relativas al veto del intendente. Cuando ella no ha consignado excepción alguna, cuando ha agregado que hasta puede vetar la ordenanza de presupuesto, como queriendo significar que ninguna escapa á esa facultad, y cuando, por fin, no habría razón alguna que justificara la exclusión de la ord. de impuestos, debe concluirse que ésta puede ser observada á la par que cualquiera otra. Esta conclusión se robustece aun más, si se piensa que para la ley no existen en la Mun. sino dos departamentos: el ejecutivo y el legislativo; y que habiendo conferido al primero el derecho del veto, sin limitación alguna, es porque realmente quiere que todos los actos que emanen del segundo, sean susceptibles de observación por parte del intendente. La circunstancia de no haber designado á la Ord. de impuestos entre las que pueden observarse, no puede tomarse como razón de excepción, porque habiendo sentado el principio general del veto, solo pueden escapar á él los actos que expresa y especialmente haya designado la ley como exentos de observación. Por otra parte, el precepto legal es que pueden observarse todas las Ordenanzas del Concejo, y entre las que éste puede dictar, se enumera la de impuestos en los inc. 1º y 9º del art. 44; de donde se deduce, entonces, que la letra misma de la ley autoriza el veto respecto de ellos. Se impone con tal evidencia á la simple lectura de la ley, que el veto del intendente á las ordenanzas del Concejo no tiene limitación alguna, que ha sido necesario valerse de una verdadera sutileza para llegar á la conclusión contraria. Se dice que en realidad todas las ordenanzas del Concejo pueden vetarse, pero se agrega que la de impuestos no emana del Concejo, sino de un cuerpo especial, compuesto de aquél y de un número igual de mayores contribuyentes. Sostengo, por mi parte, que el Concejo aumentado, no deja de ser el Concejo, y que así lo considera la ley, cuando en los dos inc. antes citados, 1º y 9º, del art. 44, establece que los impuestos son sancionados por el Concejo, lo que equivale á decir que el Concejo y los mayores contribuyentes constituyen, al objeto especial de que se habla, el Concejo deliberante, ó sea la rama legislativa de la Mun. El aumento no importa cambio en la unidad del cuerpo, que permanece idéntico á sí mismo, cualesquiera que sean las modificaciones de detalle que pueda recibir. Aumentar supone una cosa existente á la cual se agrega algo que le da mayor volumen ó extensión, pero que no altera la esencia, ni la individualidad propia de la cosa misma, que continúa subsistiendo con los caracteres en virtud de los cuales se distingue de los demás. Por consecuencia, el Concejo aumentado tendrá mayor número de miembros, pero no habrá cambiado su propia personalidad, que no depende de la mayor ó me-





nor cantidad de personas que lo componen, sino del rol que desempeña en el mecanismo administrativo de la Municipalidad. Yo considero que es la evidencia misma la proposición de que una cosa aumentada continúa siendo la misma cosa, y si alguna duda pudiera quedar en mi espíritu, ella desaparecería ante la verdadera coincidencia que nos reúne en este sitio para resolver aquel punto, á miembros de la Exma. Cám. Civ., y á otros de la Cám. de lo Crim. El Trib. que conoce de este juicio, la Exma. Cám. Civ., se encuentra integrado por dos vocales ajenos á él, y sin embargo, no deja de ser la Exma. Cám. Civ. Se me dirá que no es lo mismo integrar que aumentar, pero tal observación sería de todo punto inexacta, porque en los dos casos se supone una cosa existente que continuará lo mismo, no obstante que en el primero se habrá completado y en el segundo se habrá aumentado. Con relación á la identidad de una cosa y á su subsistencia como tal, no hay diferencia alguna entre integrar y aumentar, desde que, integrada ó aumentada, es necesaria, una cosa de existencia anterior que continúa siendo lo que es. Si, pues á pesar de la integración, la Exma. Cám. Civ. continúa siendo tal Cám., lo mismo sucede con el Concejo deliberante, á pesar de su aumento permanece idéntico á sí mismo, en cuanto á los caracteres que sirven para darle su propia individualidad, es decir, que continúa siendo el cuerpo especial que se conoce con aquel nombre. Interpretando el espíritu de la ley, se llega al convencimiento de que no se ha querido crear sino un solo cuerpo legislativo que para ciertas funciones se le rodea de mayores precauciones; y recurriendo al sentido gramatical de las palabras de que se vale, llegamos al mismo resultado: la única autoridad legislativa municipal es el Concejo deliberante, que en ciertas ocasiones se aumenta con los mayores contribuyentes. Todo concurre, pues, á demostrar que los impuestos no son sancionados por un cuerpo especial legislativo, sino por el Concejo, la única autoridad de aquel carácter que la ley reconoce, y es por lo tanto evidente que emanando de éste la ordenanza respectiva, el intendente tiene el perfecto derecho de vetarla. Sea, pues, porque la ordenanza de 1892 fuese vetada, sea porque fuese derogada: de todos modos, los impuestos de 1893 no pueden pagarse con arreglo á aquélla. Por consecuencia, la consignación que se ha hecho no puede admitirse como válida.» A esta sólida argumentación se volvió á replicar por la mayoría, que las funciones atribuidas por la ley á la Mun., no importan facultades legislativas, y el derecho de vetar impuestos, privativo del Congreso Nac. en la Cap. de la Rep., ha sido delegado en parte por la ley org. de la Mun., no en el Concejo deliberante, sino en una asamblea especial, compuesta de los miembros del Concejo mismo y de otros tantos tomados entre los mayores contribuyentes del municipio. Así resulta del texto expreso de la ley en el inc. 1º del art. 44, aún gramaticalmente examinado. Todos los arts. del Cap. II, que trata de las atribuciones y deberes del Concejo deliberante, explican espresamente lo que «corresponde al Concejo», usando de esa frase para determinar la prescripción



## 7. Consignación.—Tratándose de prestaciones periódicas

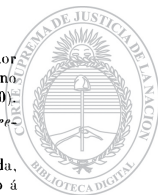
de la ley sin agregación alguna; pero en el inc. 1º del art. 44 dice, que le corresponde « fijar todo impuesto á mayoría absoluta del cuerpo deliberante, aumentado para ese acto con un número igual al que lo componga, de los mayores contribuyentes de cada parroquia ». Ha quedado así creada para la fijación de impuestos municipales, y por ministerio de la ley, una asamblea especial, distinta del Concejo deliberante municipal, y formada por miembros del cuerpo deliberante y por contribuyentes en número igual los unos y los otros. Esta prescripción legal, reglamentando en esa forma la facultad de fijar impuestos, delegada hasta cierto punto por el Congreso, no es una novedad, y por el contrario, se ajusta á los más sanos principios del derecho administrativo, al dar intervención directa á los contribuyentes. Lo preceptuaba así la ley núm. de la prov. de B. Aires, y es doctrina corriente y universal, la intervención de los contribuyentes en la distribución ó fijación de los impuestos, y muy especialmente cuando se trata de impuestos muns., que no son, ni pueden ser, sino la retribución de un servicio prestado, á diferencia de otros impuestos que son privativos de las autoridades que representan la soberanía, y que no revisten ese carácter. Siendo ese el espíritu y la letra de la ley, es evidente que la sanción de la asamblea especial encargada de fijar los impuestos muns., no ha podido ser observada por el intendente, y mucho menos para pedir su reforma en el sentido de aumentar las cargas de los contribuyentes. El inc. 4º del art. 3º de la ley, faculta al intendente mun., para observar las ordenanzas, y agrega: « inclusive la del presupuesto general ». Esta cláusula especial del inciso, demuestra que el legislador comprendió que el presupuesto de la administración podría ser considerado como una escepción á la regla, en atención á su naturaleza, á pesar de que ese presupuesto lo discute y sanciona el Concejo deliberante por sí sólo, sin la intervención de los mayores contribuyentes. Para que el intendente pudiera observar las ordenanzas que fijan los impuestos, que no forman tampoco parte integrante del presupuesto, y que son sancionados por una asamblea especial, sería necesario que se hubiese hecho así constar en la ley de una manera positiva.

7. Demandado un inquilino por cobro de arrendamientos y seguido el juicio, se llegó hasta el embargo de bienes para cubrir la ejecución. Posteriormente se presentó el inquilino pagando por consignación el importe del arrendamiento correspondientes á meses adeudados y vencidos con posterioridad á los de la ejecución. El acreedor se opuso á la consignación por cuanto decía que no podía pagar los meses posteriores sin abonar los anteriores y se preguntaba: ¿Puede el deudor de obligaciones á pagar en prestaciones parciales y en períodos determinados, obligar al acreedor á que le reciba en pago el último período, dejando en suspenso el pago de los anteriores? Aún cuando no se en-

es válida la consignación de las correspondientes á un período determinado aún cuando se encuentren en litigio las anteriores—Civ., tom. 22, pág. 43, Ser. 5ª, (tom. 69).

cuernte en las leyes vigentes precepto espreso que resuelva el caso existen sin embargo, disposiciones terminantes de carácter general, y aún especiales para casos análogos, por las que fácilmente se puede arribar á una solución, justa y racional. Se tiene, desde luego, la regla establecida por el art. 758, Cód. Civ., según la cual, «no concurriendo los requisitos legales determinados, en cuanto al modo, forma y tiempo para el cumplimiento de las obligaciones, el acreedor no está obligado á aceptar el ofrecimiento del pago». Si se tratara de una obligación indivisible, ó no sujeta á pagos parciales, se encontrarían, además, disposiciones especiales por las cuales el acreedor está autorizado á rechazar toda exigencia del deudor para que le admita el cumplimiento irregular de sus obligaciones. Así, por ejemplo, si Juan debe á Pedro 100 pesos, no puede obligar á éste á que le reciba 50 hoy, 20 mañana y el resto el día del término fijado para el cumplimiento de la obligación —arts. 673 y 742.—Una proposición semejante, máxime cuando ni descuentos estaría obligado á hacer—art. 755,—no puede ser más favorable y ventajosa para el acreedor, y sin embargo, la ley lo faculta á rechazarla; y con perfecto fundamento, como lo demuestra el codificador en la nota al art. 570. En el caso presente, el pago que se ofrecía no ocasionaba en realidad perjuicios al acreedor, pero esto no quita que fuese pago irregular, pues lo natural y razonable sería que se pagaran primeramente las mensualidades anteriores, no solo porque se deben, sino también porque de ese modo ni se altera el orden sucesivo de las prestaciones, tal como el acreedor tiene derecho á exigir, ni se producen confusiones que dificulten regularizar el servicio posteriormente. Aunque no fuera más que para prevenir pleitos y complicaciones ulteriores, el acreedor procede con cordura resistiendo el pago en la forma que le impone el deudor. Con el mismo derecho que pretende el deudor pagar las últimas mensualidades, dejando pendiente las precedentes puede luego exigir que se le admita el pago de mensualidades alternadas, ó que la totalidad correspondiente á un período se impute por mitad á dos vencidos. No habría razón para considerar á unas, pretensiones menos legítimas que á las otras, pues todas obedecerían á un mismo propósito: cumplir irregularmente las obligaciones contraídas, ó en términos más espresivos, pagar como se le antoje y no como se comprometió á hacerlo. ¿Es esto justo? ¿Puede haber ley que autorice á los deudores á cumplir sus obligaciones alterando á su voluntad el orden natural de los pagos? No cabe controversia al respecto, pues son proposiciones que se resuelven con solo formularlas. La cuestión fué resuelta en el sentido del sumario, pues con respecto á los alquileres anteriores, en juicio ejecutivo que para su cobro seguía





8. **Consignación de pago**—El fallecimiento del acreedor hipotecario hace procedente el pago por consignación si no existe testamentaria—Civ., tom. 13, pág. 256, Ser. 5ª (t. 60).

**Consignación**—Véase: *Pago de consignación*, 1; *Acreedor prendario*, 3; *Compraventa*, 4.

1º. **Construcción**—La confesión al contestar la demanda, de haber hecho el actor pagos por cuenta del demandado a los que suministran materiales para la obra, no importa un principio de prueba que haga procedente la testimonial para justificar la existencia del contrato de construcción—Civ., tom. 22, pág. 141, Ser. 5ª.

**Construcción**—Véase: *Acto de comercio*, 2; *Locación*, 2; *Precio*, 3.

1º. **Constructor de obra**—Carece de derecho para deducir acciones posesorias contra el propietario—Civ., tom. 22, pág. 467, Ser. 5ª (tom. 69).

el primero, se había trabado un embargo y verificado el depósito de la cantidad de dinero, que respondía suficientemente a la deuda cuyo cobro se le reclamaba. Este argumento reposa en la justificación completa de todas las circunstancias de que el locatario deudor hizo mérito, a saber: que la consignación corresponde a meses adeudados, y por la parte de alquileres que tenía el deber de abonar; que en la ejecución de la referencia se reclamaban los devengados por otros meses.

8. Habiendo fallecido un acreedor hipotecario, el deudor se presentó haciendo el depósito judicial del crédito hipotecario, pagando por consignación, de acuerdo con el precepto del art. 3203 del Cód. Civ., alegando así mismo las circunstancias de ignorar el domicilio de los herederos del acreedor. El juez no consideró acertado el procedimiento, por no tratarse de un acreedor ausente, que es al que se refiere el art. 3203 del Cód. Civ., sino de un acreedor fallecido, en cuyo caso para hacer valer sus derechos el deudor, debía ejercitarlos de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 626 y 627 del Cód. de Proc. La Cám. revocó el auto, teniendo presente que a este caso debe aplicarse por analogía el inc. 3º del art. 757 del Cód. Civ., por concurrir la misma razón que informa dicho precepto legal, y teniendo presente además, lo establecido en los arts. 45 y 46 del mismo Cód., y 61 y 62 del de Proc.

1º. Se trataba de un contrato mayor de 200 nacionales, regido por el art. 180 del Cód. de Proc. y 1193 del Cód. Civ.

14. Véase verb. *Acciones posesorias*, nº 1.



**Constructor de obra**—Véase: *Competencia*, 1; *Embargo preventivo*, 28 y 51.

1<sup>a</sup>. **Cónsul**—Los herederos deben ocurrir al juez de la testamentaria iniciada por el Cónsul—Civ., tom. 10, pág. 361, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 57).

**Consulta**—Véase: *Cámara*, 1.

1<sup>b</sup>. **Contador**—El informe de éste, no tiene la fuerza probatoria que la ley reconoce á la compulsa de los libros de comercio—Com., tom. 4, pág. 50, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 39).

**Contador**—Véase: *Honorarios*, 36.

**Contencioso administrativo**—Véase: *Ordenanzas municipales*, 1.

1<sup>c</sup>. **Contestación evasiva**—La negativa general de los

1<sup>a</sup>. Los cónsules de las naciones extranjeras, están autorizados para intervenir é iniciar los juicios sucesorios de los súbditos respectivos, cuando éstos mueren sin dejar herederos conocidos. Su intervención en estos casos es legítima, y si él inicia primero el juicio correspondiente, el hecho de presentarse después herederos que se dicen legítimos, no cambia, ni puede cambiar la jurisdicción ni la competencia del juez. Los que se dicen herederos, deben ocurrir al juez que conozca ya del asunto, para ejercitar los derechos que crean tener, y no pueden á su vez iniciar juicio nuevo ante otro juez, pues esto importaría desconocer la legalidad de las medidas promovidas por el Cónsul.

1<sup>b</sup>. Porque el informe del contador, no tenía los requisitos de una consulta, y además porque el art. 63 del Cód. de Com. exige tres requisitos para que los libros de comercio sean admitidos en juicio como medio de prueba: 1º que estén llevados en forma y con los requisitos prescritos; 2º que el juicio sea entre comerciantes; y 3º que los asientos se refieran á hechos de su comercio, hechos que deben ser comerciales para ambas partes—como lo demuestra Bédarride, comentando el art. 12, Cód. francés, análogo al nuestro, núms. 244 á 249; y el doctor Segovia en la nota 235 al Cód. de Com.—En el caso de la referencia faltaba la 3ª condición, porque la cuenta cuyo saldo se demandaba provenía de actos que si eran comerciales para el actor, entraban en la categoría de gastos domésticos para el demandado.

1<sup>c</sup>. El juez de 1ª Inst. decía á ese respecto que la forma en que se ha contestado la demanda autoriza al juzgado para estimar esa contestación como un reconocimiento de la verdad de los hechos afirmados por el actor. En efecto; al establecer la ley las reglas que tanto el demandante como el demandado deben observar en los escritos de demanda



hechos espuestos en la demanda, importa una contestación evasiva—Civ., tom. 20, pág. 428, Ser. 5ª (tom. 67).

1ª. **Contrademanda**—Al contestar la contrademanda, el demandante puede acompañar documentos—Com., tom. 9, pág. 380, Ser. 3ª (tom. 25).

**Contradocumento**—Véase: *Simulación*, 3.

1ª. **Contrato**—Para que el principal pueda ser obligado á

---

y de contestación, ha tenido por objeto fijar las cuestiones de hecho y de derecho que deben surgir de la litiscontestación, y que deben ser resueltas en la sentencia—arts. 216 y 217 del Cód. de Proc.,—sin que sea dable al demandado formular una negativa general é indeterminada de los fundamentos aducidos por el demandante; sobre todo cuando, como en el caso presente, esa negativa está en contradicción con afirmaciones contenidas en la misma contestación: porque entonces esa negativa, mientras más absoluta sea, más implica una negativa. Decir en una contestación, que son falsos todos los hechos aseverados por el actor, á la vez que afirma que solo debe el demandante una cantidad menor que la que cobra, es una verdadera evasiva porque no pueden ser falsos todos los hechos aseverados por el actor, desde el momento en que el demandado reconoce adender una cantidad, y la deuda reconoce por origen los antecedentes que se invocan en la demanda. Para evitar estas incongruencias, muy semejantes á inexactitudes, la ley ha ordenado que el demandado, al contestar la demanda, oponga todas las escepciones perentorias y dilatorias que no hubiesen sido deducidas y sometidas á prueba en artículo previo; que confiese ó niegue categóricamente los hechos establecidos en la demanda, y que especifique con claridad los que alegue por su parte como fundamento de sus escepciones, observando las formas prescritas para la demanda—arts. 99 y 100 del Cód. de Proc.—La Cámara dijo: «No obstante la negativa del demandado, concebida en términos que se prestan á las justas observaciones que al respecto hace la sentencia, el actor ha comprobado ampliamente, mediante las posiciones dadas por absueltas en rebeldía, y con las declaraciones de numerosos testigos, los extremos de su demanda.» Por consiguiente de aquí resulta que el principio sentado en el sumario no ha sido consagrado por la Cám. y no debe tenerse como jurisprudencia aceptada por este Tribunal.

1ª. La contrademanda es una verdadera acción, y en consecuencia, así como el demandado no solo tiene derecho sino que está en el deber de acompañar con su contestación todos aquellos documentos en que funde su derecho, del propio modo, el contrademandado puede presentarlos al producir su escrito en contestación á la contrademanda.

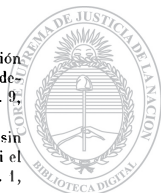
1ª. Según se estatuyó en el art. 158 del Cód. de Com. antiguo, bajo



cumplir el contrato celebrado por un dependiente, debe justificarse que lo autorizó ó ratificó — Com., tomo 9, pág. 321 Ser. 3ª (tom. 25).

cuyo imperio se firmó la obligación que motivó la litis, el comerciante que confiere á su dependiente el cargo de firmar documentos que produzcan obligaciones y acciones, está obligado á darle autorización especial para todas las operaciones comprendidas en el referido cargo, la que solo surtía efecto, desde la fecha en que fuere anotado en el Reg. de Com.—art. 134, Cód. cit. Este mismo art., establecía que no era lícito á los dependientes de comercio, subscribir ningún documento de cargo ni descargo sobre operaciones de comercio de sus principales, á no ser que estuviesen autorizados con poder bastante legítimamente registrado. El art. 150 del mismo, establecía, que para que las obligaciones contraídas por correspondencia firmada por un dependiente surta efecto, es necesario que el comerciante dé á conocer por escrito al dependiente de su casa como autorizado para las operaciones. El art. 135, no puede interpretarse en sentido contrario pues fuera de no ser aplicable á los dependientes sino á los factores, por no hallarse incluida en la disposición del art. 151. La regla recordada es terminante, y de ello se deduce, que para que una obligación contraída por un dependiente surta efecto y obligue al principal, es indispensable la autorización escrita. Igual interpretación se desprende del art. 143 que exige, como condición para obligar al principal, la autorización necesaria—Obarrio, núm. 145, *Curso de Derecho Comercial*.—La regla del art. 138, es aplicable á los dependientes—art. 151—que hace responsable á los comitentes de las obligaciones que contraen los factores, y se ha establecido con la limitación de que los dependientes proceden, al tratar el negocio, en nombre de sus comitentes, debidamente autorizados. La regla contraria, sería abrir ancha puerta al fraude y á la mala fe. En efecto; un dependiente sin responsabilidad, no tendría más que celebrar un contrato ruinoso en nombre de sus principales, y so pretexto que la falta de autorización ó omisión del registro afecta exclusivamente las relaciones recíprocas del principal y factor, podría después pedir el cumplimiento del contrato, con perjuicio de los intereses de la parte obligada. La ley, no solo se ha preocupado del interés de los terceros que contratan con un dependiente sino que también ha cuidado los derechos de los comitentes: ha querido evitar el fraude de tan fácil realización y difícil prueba por parte del damnificado. Por eso ha establecido con justicia que el dependiente que contrata á nombre de su comitente requiere una autorización especial. Además, debe tenerse presente, la diferencia que hay entre factor y dependiente. En el art. 151, no se ha incluido la disposición del art. 139, ni se ha omitido la prueba «de hechos positivos que induzcan presunción legal,» y la razón es sencilla: «Factor es la persona á quien un comerciante en-





2. **Contrato**—Si el documento en que se funda la acción no importa una obligación de pagar, debe absolverse al demandado que niega la existencia del contrato.—Com., tom. 9, pág. 229, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Contrato**—La prueba testimonial no procede sin principio de prueba escrita, ni aun en materia criminal, si el contrato excede de doscientos nacionales. —Crim., tom. 1, pág. 233, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Contrato**—La prueba sobre las condiciones del contrato, no debe ser tenida en consideración si el traslado de la demanda se dió por contestado en rebeldía —Com., tom. 1, pág. 299, Ser. 5ª (tom. 36).

---

carga la administración de sus negocios, ó la de un establecimiento particular » —art. 133, Cód. de Com.,—y munido de poder bastante para hacer los negocios de éste, en su representación. Su capacidad se rige, por las reglas del contrato. A ellos se aplica la disposición del art. 139: y todos los negocios celebrados por él, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro ó tráfico del establecimiento, se entienden celebrados por cuenta del propietario, cuando resulte que el factor obró con orden de su comitente ó por hechos positivos, que induzcan presunción legal. Pero no sucede así con el dependiente, éste es un empleado de categoría inferior, cuyas funciones se reducen á auxiliar al principal, y cuya extensión de facultades, es inferior á la del factor. El factor dirige ó administra el establecimiento de comercio, mientras que el dependiente, solo realiza unas operaciones ó desempeña una parte determinada del giro, cuando sus funciones no están restringidas á obedecer las órdenes directas ó inmediatas de sus principales. De aquí, pues, resulta que siendo diferentes las funciones del factor y dependiente, la legislación comercial ha reglamentado la capacidad y atribuciones de cada uno de distinta manera; por eso, la disposición del art. 139 del Cód. de Com., no es aplicable á las funciones de los factores.

3. Al acusado se le imputaba haberse quedado con ocho pagarés de cien pesos cada uno, que le fueron entregados por el querellante para serle devueltos una vez que fuesen estendidos en el papel sellado correspondiente. El convenio en virtud del cual se efectuó esta entrega, constituye un contrato innominado, que dado su valor, solo puede probarse por escrito, ó por testigos mediante principio de prueba por escrito—art. 1193, Cód. Civ.—No existiendo el principio de prueba escrita que la ley exige, la testimonial es absolutamente ineficaz para la justificación de dicho contrato.

4. Véase verb. *Condiciones del contrato*, 1.



5. **Contrato**—Reconocida la existencia del contrato, el demandado debe ser obligado al pago del precio de los objetos recibidos—Com., tom. 1, pág. 229, Ser. 5ª (tom. 36).

6. **Contrato**—Justificado que el contrato de compraventa tuvo lugar entre comprador y vendedor, los intermediarios en la venta no pueden ser responsabilizados por la falta de cumplimiento—Com., tom. 2, pág. 16, Ser. 5ª (tom. 37).

7. **Contrato**—La cesión del derecho á construir una vía férrea, es un contrato comercial—Com., tom. 2, pág. 36, Ser. 5ª (tom. 37).

8. **Contrato**—En los delitos que tienen por base un contrato civil, debe ante todo justificarse la existencia del invocado—Crim., tom. 2 pág. 56, Ser. 5ª (tom. 37).

9. **Contrato**—Los Tribunales de la Capital son competentes para entender en las cuestiones sobre cumplimiento de contratos celebrados en su jurisdicción, aun cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero—Com., tom. 2, pág. 114, Ser. 5ª (tom. 37).

10. **Contrato**—No es indispensable la inscripción individual de los socios en la matrícula de comercio; basta la del contrato de sociedad para llenar los objetos del Código—Com., tom. 2, pág. 116, Ser. 5ª (tom. 37).

---

6. Siendo meros intermediarios, no son parte directa en el contrato de compraventa, careciendo de acción contra ellos los verdaderos contratantes.

7. Véase la nota del verb. *Acto administrativo*, 1.

8. Tratándose de pretendidos delitos que suponen la existencia de un contrato, se requiere que dicho contrato sea probado con arreglo á derecho, pues de lo contrario faltaría la base primordial de la existencia del delito. Así en el caso del sumario se dijo que el querellado había recibido en depósito la suma de mil pesos, como ni siquiera se ofreció la prueba instrumental ni se produjo como base un principio de prueba por escrito—art. 180, Cód. de Proc. Civ., y 1193, Cód. Civ.—la querella no pudo prosperar pues la prueba testifical fué declarada insuficiente por falta de principio de prueba por escrito.

9. Art. 1215 del Cód. Civ.

10. De acuerdo con la jurisprudencia—Véase tom. 3, verb. *Matrícula de rematadores*, 1; tom. 8, pág. 221, jurisprudencia Comercial.



11. **Contrato**—Al que invoca el carácter de dependiente ó mandatario al realizar un contrato de compraventa comercial, corresponde la prueba de la escepción — Com., tom. 2, pág. 191, Ser. 3ª (tom. 37).

12. **Contrato** — Los vicios ocultos hacen procedentes la

11. Cuando se confiesa la celebración de un contrato, es de presunción legal que se opera por cuenta propia. Así resulta de la doctrina consignada en los arts. 1161, 1197 y 1929 del Cód. Civ.; 139, 146, 147 y 150 del Cód. de Com.; ley 8, tít. 3, Part. 3ª. Por otra parte. Con arreglo á lo establecido en los arts. 133 y 136 del Cód. de Com., aplicables á lo dependientes de comercio, según el art. 150, el factor debe ser constituido por autorización especial del proponente ó sea de la persona por cuya cuenta se hace el tráfico, la cual solo surtirá efecto desde la fecha en que fuere asentada en el Reg. de Com., debiendo siempre verificar el negocio á nombre de sus comitentes. Además, la autorización debe otorgarse mediante poder especial por escrito—art. 36, núm. 4; Segovia, núm. 434.

12. El actor había vendido al demandado 1.000 toneladas de carbón de Cardiff, de buena clase para vapor, próximo á llegar, en viaje, y á entregarse á bordo del buque en el Riachuelo. Llegado el carbón fueron entregadas las 1.000 toneladas vendidas, y transportadas al depósito del comprador. Este al poner en uso en la línea férrea el carbón comprado, encontró y sostuvo que no era carbón *de buena clase para vapor*, que tenía vicios ó defectos que no podían percibirse al tiempo de recibirlo, y pidió la aplicación del art. 473 del Cód. de Com. A su vez el demandado sostuvo que había entregado carbón de la mina determinado en el contrato, que era á lo que se había obligado; que si ese carbón resultaba defectuoso en las máquinas que usaba la compañía del ferrocarril comprador, sería acaso por causa de éstas y no del carbón; y que el comprador debía conocer las condiciones del carbón de dicha mina cuando verificó la compra. Desde luego era necesario determinar y resolver ante todo, si en un contrato de estas condiciones, debe entenderse, para determinar las responsabilidades legales, á la designación del nombre la mina de que el carbón proviene, ó á su calidad de que sea de buena clase para vapor. Parece que la primera condición,—la designación de la mina de que el carbón proviene,—no tiene importancia legal, no solamente porque, como todo el mundo sabe, de una misma mina puede extraerse carbón de diferentes cualidades, sino también porque de la prueba producida en el juicio resultaba que el carbón de «Waynes Merthyr» así se llamaba la mina, es desconocido en este mercado. Así lo declaró el perito nombrado de conformidad de partes, quien manifestó que era la primera vez que ha visto esa clase de carbón «Waynes Merthyr». Así manifestó la Cám. de Com., que «la

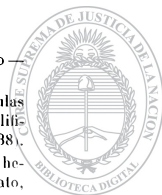


rescisión del contrato, aun después de recibida la mercadería por el comprador, pero el vendedor no es pasible de los daños y perjuicios si por circunstancias pudo ignorar dichos vicios—Com., tom. 2 pág. 197, Ser. 5ª (tom. 37).

**13. Contrato**—La falta de cumplimiento á las condicio-

marca del carbón «Waynes Merthyr» no es de los carbones conocidos en esta plaza. Desde luego, la designación de la mina no puede tener en este caso importancia legal, porque no se trata de una calidad conocida en los usos del comercio—art. 436 del Cód. de Com.—y es necesario atenerse exclusivamente á la otra condición que debiera poseer la cosa vendida, *ser carbón de buena clase para vapor*. Tal fué también la opinión de la Cám. de Com., y no podría ser de otra manera. A estas consideraciones se añade la de que tanto el comprador como el vendedor conocían el objeto con que se compraba el carbón, que era para las locomotoras del ferrocarril; y desde luego se comprende de que el uno compraba y el otro vendía carbón que creía apto para el uso á que estaba destinado. Establecido así que esa condición esencial que el carbón fuese de buena clase para vapor, es necesario examinar la prueba producida á este respecto. Habría sido de desear que se hubiese hecho un examen científico del carbón de que se trata, que sirviéndose del método Silberman ó Berthier, hubiese determinado su poder calorífico, por el número de calorías que desprendiese la unidad de peso—Lámi, vol. 5, pág. 705—. Pero los interesados prefirieron hacer un examen práctico y experimental: de común acuerdo nombraron el perito, para que haciendo funcionar las locomotoras del Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, y las del Ferrocarril de Buenos Aires y Ensenada con el carbón de que se trata, informarse sobre sus cualidades. Así se convino ante el Juzgado de 1ª Instancia. Desde luego las conclusiones del informe pericial constituyen plena prueba de lo que afirma en atención á las circunstancias mencionadas. El perito informó que el carbón adolecía de defectos tales, que aun cuando no es impropio para su destino, disminuye gran parte su importancia para locomotoras; que esos defectos son ocultos y han existido antes de la entrega del carbón; que este carbón no es el que el comercio designa como de buena clase para vapor. En presencia de estas conclusiones que constituyen plena prueba sobre los hechos indicados, era de estricta aplicación al caso presente lo dispuesto en el art. 473 del Cód. de Com., y en el art. 2174 del Cód. Civ.

13. La estafa se hacía consistir en que un comprador al adquirir unos muebles después de haberlos recibido quiso abonarlos en pagarás en vez de dinero: lo defraudado con el pago hecho en esta forma eran los intereses. Se resolvió que el querrellado al pedir los muebles al querellante, no se había valido de ardid ó engaño para obtenerlos, y que



ciones del contrato, no puede calificarse como delito—Crim., tom. 3, pág. 21, Ser. 5ª (tom. 38).

14. **Contrato**—La falta de cumplimiento á las cláusulas de un contrato aun cuando exista dolo, no pueden ser calificadas como delito—Crim., tom. 3, pág. 41, Ser. 5ª (tom. 38).

15. **Contrato**—Para justificar que el vendedor que ha hecho tradición de la cosa consiente en la rescisión del contrato, se requiere prueba expresa; el consentimiento tácito que resulta de la recepción de la cosa no basta para justificarla—Com., tom. 4, pág. 67, Ser. 5ª (tom. 39).

16. **Contrato**—Para que pueda declararse y pensarse la existencia del delito de negativa maliciosa de deuda, debe

---

el único hecho que se le imputaba, es el de haber querido abonar en pagares, una cuenta que se decía, fué convenida al contado; esta sola circunstancia no basta para caracterizar el delito de estafa ó defraudación á que se refieren los arts. 202 y 203 del Cód. Pen., pues en ninguno de sus incisos se halla fundamento legal á la acción intentada.

14. El comprador de una tropa de novillos sacó la hacienda subrepticamente del corral del vendedor, invocando ante el capataz órdenes recibidas de su patrón. Se alegó que el importe de hacienda debía abonarse antes de sacarse los animales del corral. El precio no se abonó, y el comprador vendió la hacienda á un precio inferior al de compra, ocultándose del vendedor después. Si bien la conducta del procesado y los hechos imputados, autorizan *prima facie* á reputarlos dolosos principalmente por haber vendido la hacienda á precio menor que el de compra, y por haberse ocultado,—no todo dolo da lugar á acción criminal,—y las constancias del sumario no eran bastantes para declarar que el hecho cometido pueda considerarse comprendido en alguno de los casos á que se refieren los arts. 202 y 203 del Cód. Penal. En efecto; de ellas resultaba, que el procesado había comprado 92 animales vacunos; el vendedor afirmaba que al contado, aquél que á plazo; pero si fué al contado, el vendedor debió ser diligente y ordenar á su capataz para que no entregase la hacienda sin que le pagase el precio ó sin orden escrita suya, y con esta sola precaución se habría puesto á salvo de la mala fe del comprador. Por esto y de conformidad en lo dispuesto en el art. 435, inc. 1º Cód. de Proc. Crim., se sobreseyó provisionalmente en la causa.

15. Véase la nota del verb. *Compraventa*, 2.

16. El contrato es la base del delito imputado; si no existe el fundamento del delito, sin causa determinante, no puede haber delito. Véase los núms. 13 y 14.



justificarse plenamente la existencia del contrato que le haya dado origen—Crim., tom. 5, pág. 103, Ser. 5ª (tom. 40).

17. **Contrato** — El que por transacción encarga a un tercero de determinados pagos, carece de personería para oponerse con posterioridad si es de los incluidos en el contrato—Com., tom. 5 pág. 168, Ser. 5ª (tom. 40).

18. **Contrato** — Si el delito se hace consistir en la viola-

17. Producidas algunas diferencias entre dos comerciantes, se arribó á un arreglo por el cual se designó á un tercero como *único representante* de ambos, en todos los contratos de los dos comerciantes. Dado el carácter de que estaba investido el tercero, era él el único facultado para llevar á cabo la transacción, sin que ninguno de los contratantes pudiese oponerse á ello por carecer de derecho y de personería. El liquidador interviene y gestiona solo.

18. Los hechos que dieron margen á esta cuestión son los siguientes: El querellante un señor Blotta descontó á Giliberti un pagaré de 12.090 pesos, y suscrito á su orden por la señora de Oromí, con la fianza solidaria de Bellizia. Iniciada acción ejecutiva contra dicha señora y comprobada la insolvencia, se pidió por Blotta á fin de preparar su acción contra Giliberti y Bellizia, que estos compareciesen á reconocer sus firmas. El primero presentó escrito desconociendo su firma, pero antes de eso, se había presentado demandando judicialmente á Blotta por reivindicación del mencionado pagaré, sosteniendo que no había sido endosado y que continuaba siendo de su propiedad. Bellizia por su parte no concurrió á la citación y su firma se le dió por reconocida en rebeldía. En virtud de estos hechos que revelaban en los querellados, según decía el actor, el propósito de despojarlo del título del crédito de que Blotta se decía propietario, se acusó á Bellizia y Giliberti del delito de defraudación. El juez de instrucción reconociendo que existía semiplena prueba de los hechos referidos, constituyó en prisión preventiva á los procesados considerándolos reos del delito de denegación maliciosa de deuda y no de defraudación como lo pretendía el querellante. Establecidos estos antecedentes, lo que el Trib., debía resolver en primer término, era si los hechos denunciados constituían el delito de defraudación ó el de negación maliciosa de deuda—art. 207, Cód. de Proc. Crim. — La defraudación supone apropiación de lo ajeno por medio del fraude—art. 203, Cód. Pen., y en el caso ocurren- te es evidente que ni Giliberti ni Bellizia se había apropiado de nada hasta esa época. Si el pagaré objeto del delito continuó en poder de Blotta, como resultaba de autos, no había respecto de él, defraudación posible. La posesión del objeto que se pretende defraudado por parte del que se dice víctima del delito excluye de un modo absoluto la existencia de éste, dado el concepto legal y doctrinario del delito de defrau-



ción de un contrato, debe ante todo justificarse plenamente la

dación. No habiéndose, pues, los acusados apoderado del pagaré ni perdido Blotta hasta el momento sus derechos sobre él, todo lo más que los hechos imputados podrían constituir sería una tentativa de defraudación. Sin embargo, la existencia de esta misma infracción estaba terminantemente desautorizada por las constancias de autos. El acto exterior constitutivo de la tentativa, solo consistiría, en este caso, en la demanda reivindicatoria entablada por Gilberti: Ahora bien, ¿se concibe como tentativa delictuosa, el hecho de presentarse ante un juez pidiendo el reconocimiento del derecho que se cree tener con razón ó sin ella? ¿Puede atribuirse intención criminal á quien se propone ajustar su conducta á lo que resuelvan los jueces? Es evidente que no: en primer lugar, porque la presentación en juicio es un derecho perfectamente legítimo y que en ningún caso puede constituir delito para la ley penal; y en segundo lugar, porque ese acto no reúne en sí ninguno de los elementos esenciales de la tentativa punible. Si la acción deducida es improcedente se habrá ejecutado un acto completamente ineficaz para la realización del proyecto criminal, y en tales condiciones la tentativa está exenta de pena. Si al contrario la demanda prospera, los actos ulteriores estarían á cubierto de toda sospecha de intención criminal, desde que tendrían por causa y fundamento el reconocimiento judicial de un derecho. En cualquier de los dos casos, el camino adoptado es perfectamente legal y excluyente por consecuencia, de la idea del delito. Los otros dos actos que se califican también como principio de ejecución de la defraudación, la firma de Gilberti puesta por Bellizia y el desconocimiento de esa firma por parte de aquél, en el juicio ejecutivo, no reúnen tampoco los caracteres de la tentativa. El primero, no tiene en modo alguno relación directa con el delito, y es susceptible de esplicaciones diversas. El segundo, si se tiene en cuenta que con anterioridad se había entablado la demanda de reivindicación, se comprende que es un medio de defensa empleado con el objeto de impedir la prosecución del juicio ejecutivo y dar tiempo á que se resolviese la cuestión sobre la propiedad del pagaré. No importando, pues, los hechos imputados ni una defraudación ni una tentativa de este delito, será necesario decidir, si ellos autorizan la calificación hecha por el juez, de negación maliciosa de deuda. Sobre este punto, debe observarse en primer lugar, que el desconocimiento de la deuda se había efectuado en términos que no eran en modo alguno compatibles con la intención dolosa. Lo que los querellados hicieron fué solamente someter á la decisión de los jueces las razones que creían tener para desconocer la existencia del crédito que se les reclamaba, y como antes se ha visto, esto constituye el ejercicio de un derecho perfectamente legítimo incompatible con la existencia del delito de negación maliciosa de deuda. Para que exista este delito, por otra

existencia del último—Crim., tom. 5, p. 193, Ser. 5ª (t. 40).

parte, se requiere como condición esencial que haya una deuda legalmente exigible. Así se deduce claramente del art. 200 del Cód. Pen., y de los principios generales del derecho criminal. No siendo exigible una obligación, el deudor que la niega no causa perjuicio alguno al acreedor, desde que negada ó confesada, no puede ser compelido á su pago, y por consecuencia, faltando el perjuicio de tercero la sociedad no tiene interés en el castigo de actos que no lesionan ningún derecho efectivo. La negativa de una deuda, pues, para que pueda ser eregida en delito, debe tener la pérdida de un derecho cuya eficacia no dependa exclusivamente de la voluntad del deudor, ó lo que es lo mismo, debe ser un derecho emergente de una obligación civil y no de una natural. Los principios jurídicos que rigen las obligaciones naturales, demuestran evidentemente, por otra parte, que su desconocimiento por el deudor no puede producir efecto alguno civil y mucho menos penal. Sentadas estas premisas y aceptando como ciertos los hechos espuestos por el querellante, hay que ver si en el caso presente existe por parte de los querellados el delito de negación maliciosa de deuda. La deuda que según la querella y el juez *a quo* había sido negada es la que constaba de un pagaré. Ahora bien: ¿Era exigible dicho crédito contra los procesados Giliberti y Bellizia? Siendo estos respectivamente endosante y avalista del mencionado pagaré, el tenedor que no lo hizo protestar en la oportunidad legal, había perdido todo derecho contra ellos con arreglo á lo que disponen los arts. 666 y 714 del Cód. de Com. No teniendo entonces Blotta ningún derecho para exigir á los procesados el pago del mencionado documento, no solo no hay deuda exigible, sino que ni siquiera existe realmente una deuda, y desde luego es evidente que no puede existir el delito acusado. Además, aun cuando el pagaré no hubiera caducado contra Bellizia y Giliberti por la falta de protesto; de todos modos, el derecho de Blotta se habría perdido por prescripción, puesto que desde el vencimiento del pagaré hasta que se iniciaron las gestiones preparatorias contra los deudores, había transcurrido un tiempo mayor que el establecido por el inc. 2º del art. 848 del Cód. de Com., para la prescripción de esta clase de derechos. Bajo este otro punto de vista, pues no habría tampoco deuda exigible, ni posibilidad por consiguiente de cometer el delito previsto por el art. 290, inc. 1º, del Cód. Pen. Resulta por lo tanto, que no existía ni siquiera semiplena prueba de ninguno de los delitos de que los procesados fueron acusados, y en consecuencia, faltando ese requisito, la improcedencia de prisión preventiva decretada, surgía claramente de lo que dispone el art. 366 del Cód. de Proc. Crim. Por otra parte, la acusación contra el querellante Blotta, reconocía por causa, según las afirmaciones de Giliberti; el hecho de haberse apropiado aquél, del mismo pagaré objeto de su querella, el cual le había sido entregado á fin de que lo cobrase







**19. Contrato**—La acción debe deducirse ante el domicilio del deudor, ó en el lugar del contrato siempre que se

por cuenta de Giliberti. La base fundamental de la acusación dependía, pues, de la prueba del mandato conferido por Giliberti ó Bellizia á Blotta, porque es claro que si el delito se hace consistir en la violación de un contrato, mientras no se pruebe que éste ha existido no es posible hablar de su violación. La cuestión previa que se presentaba entonces á la decisión del Trib., era esta: ¿Se ha producido en autos el mandato que el querrellante pretende haber conferido á Blotta? Las únicas pruebas dirigidas á ese fin eran la de testigos y la de presunciones, ambas completamente inadmisibles en este caso. La primera, porque según los arts. 209 del Cód. de Com. y 1193 del Civ., los contratos que tengan por objeto un valor superior á doscientos pesos, no pueden ser probados por testigos; y la segunda, porque «los hechos de que las presunciones querrían arrancarse, ó resultarían justificadas por la prueba testifical, que no es admisible para la prueba directa del contrato mismo y que no podría aquí ser admitida so pena de burlar, por este medio indirecto el mandato de la ley, ó esas presunciones resultarían justificadas por otras pruebas y no serían en tal caso la única prueba sino un complemento de la existente, ó habría un principio de prueba escrita en cuyo caso la prueba testimonial es admisible»,—Segovia not. 109, al art. 1194 y doctrina uniforme de los autores Véase Laurent, tom. 19, núms. 694 y siguientes.—Estas conclusiones no se oponen en manera alguna al precepto del art. 1873 del Cód. Civ., según el cual el mandato puede conferirse verbalmente, porque dicho art. legisla la forma del contrato y no su prueba, la que debe hacerse conforme á las reglas generales de los contratos. Así lo reconoce categóricamente el mismo codificador al espresar en la not. del art. cit., que «en cuanto al mandato verbal su prueba no puede ser recibida sino conforme á lo dispuesto respecto á las pruebas de las obligaciones. Siendo, pues, absolutamente inadmisibles las pruebas rendidas según se acaba de ver, es forzosa la conclusión de que no se había justificado legalmente la existencia del contrato que servía de base á la contraquerella. El sobreseimiento, entonces se impone de una manera ineludible. Pero, ¿en qué carácter? No procede como definitivo, porque no resulta con evidencia que el delito no se haya cometido.—inc. 1º, art. 434 del Cód. de Proc. Grim.—Tampoco procede en virtud de lo que disponen los otros dos incs., del art. cit. Quedaba entonces solamente el sobreseimiento provisional á que se refiere el inc. 1º, del art. 435, que es precisamente la disposición legal de estricta aplicación á este caso, porque era la falta de suficientes medios de justificación para demostrar la perpetración del delito, lo que impidió la prosecución de esta causa».

19. Arts. 1º, inc. 1º, del Cód. de Proc., y 1212 á 1216, del Cód. Civ.



encuentre en él aunque sea accidentalmente—Com., tom. 5, pág. 269, Ser. 5ª (tom. 40).

20. **Contrato**—El reclamo sobre intereses y daños y perjuicios, corresponde al juez que conozca en el cumplimiento del contrato en que se funda la acción—Com., tom. 5, pág. 276, Ser. 5ª (tom. 40).

21. **Contrato**—La quiebra del comprador que ha recibido

---

20. Terminado un pleito sobre cobro de un seguro, el asegurado se presentó pidiendo que en consecuencia de haber sido el asegurador vencido en la demanda instaurada, se declarara de cargo del condenado todas las costas del juicio, los intereses devengados desde el pago de las mismas y todos los demás intereses moratorios. Se alegó que tratándose de un juicio nuevo debía el interesado ocurrir al juez en turno. La Cám. resolvió que deduciéndose la petición como una continuación del juicio que se había seguido entre las mismas partes, debía tramitarse ante el mismo juzgado que conoció en el juicio principal. Esta es la doctrina aceptada por nuestros Tribs., pues la teoría contraria nos conduciría á la multiplicación de los juicios que es contraria á la causa pública. Véase *Inst.* tom. 5, verb. *Transacción*, n° 4, y tom. 80, pág. 227 de la *Jur. Civ.*; tom. 4, pág. 361, Ser. 4º *Jur. Com.*, tom. 64, pág. 267, y tom. 73, pág. 190, F. S. C. N.

21. El actor había vendido una cantidad de bolsas de trigo que el comprador—la parte demandada,—debía abonar al contado pero no lo hizo. La venta se hizo del 10 al 20 del mes y el 23, el comprador se presentó en quiebra. No se dedujo por el actor la acción de reivindicación prevista por el art. 1503 del Cód. de Com., según lo declaró con repetición en el juicio y si se hubiere hecho así, no habría prosperado, porque no concurría en el caso, las condiciones exigidas por los arts. 1503 y 1504 del mismo Cód., para que proceda tal acción, por cuanto constaba de los recibos presentados por el actor que el trigo fué entregado al fallido, y por las manifestaciones constantes en autos fué embarcado conjuntamente con el trigo comprado á otras personas, en buques flotados por el comprador. La acción deducida era la de nulidad del contrato de venta, y la apoyaba el demandante en las disposiciones de los arts. 954 y 1044 del Cód. Civ., que anulan los actos jurídicos practicados con los vicios del error de dolo, simulación ó fraude, sosteniendo que hubo error por su parte y dolo y fraude por parte del comprador. El error de los demandantes en cuanto á la solvencia del comprador no puede alegarse como causa nulidad, y en cuanto al dolo ó fraude, cualesquiera que sean las responsabilidades legales en que hubiese incurrido, y que no era la oportunidad de juzgar, esas circunstancias no autorizan la acción de nulidad, en virtud de lo prevenido en el



las mercaderías, inhabilita al vendedor para pedir la nulidad del contrato por existir error, dolo ó fraude—Com., tom., 5.º, pág. 402, Ser. 5.ª (tom. 40).

## 22. **Contrato**—La falta de manifestación del carácter de

art. 1503 del Cód. de Com. Ese art. dispone, que no pueden ser objeto de reivindicación en caso de quiebra, los objetos ó cosas cuya propiedad se ha transferido al fallido, aunque no se haya pagado el precio; y hace cesar igualmente el derecho acordado por el art. 216, para pedir la resolución del contrato. Desde luego, y ante la prescripción de este art., no puede prevalecer la disposición que por regla general establece el art. 954 del Cód. Civ.; el caso de quiebra es la excepción de la regla. Esta fué la opinión de la mayoría. La minoría sostuvo que: la acción para pedir la nulidad de los actos practicados con los vicios de error ó dolo, no se extingue por la quiebra de una de las partes que lo celebraron y que las restituciones á que conduce la declaración de nulidad de tales actos, no se hallan regidos por la disposición del art. 1503, Cód. de Com., sino por las generales del Cód. Civ., sobre esos vicios y nulidades. En el caso presente la acción deducida se fundaba en el error del demandante al celebrar el contrato de compraventa con un insolvente por creerlo solvente, y en el dolo con que éste procedió al celebrar tal contrato cuando estaba preparando la memoria con que pocos días después iba á presentarse en quiebra como en efecto lo hizo. Como los hechos en que se fundó la demanda no habían sido contradictorios, era lícito haber fallado la causa después de contestada aquella — art. 212, Cód. de Proc. — En cuanto al error alegado parece que no es suficiente para declararla nulidad que se reclama, porque el error de hecho no puede alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable — art. 929, Cód. Civ. — Tampoco podría en este caso declararse la nulidad por causa de dolo, porque para que el dolo pueda ser medio de nulidad de un acto, es preciso la reunión de las circunstancias enumeradas en el art. 932 del mismo Cód., entre ellas, que haya sido la causa determinante de la acción, circunstancia que no concurre en el caso, porque si bien es cierto que los demandantes no hubieran vendido el trigo si hubiesen conocido el estado del comprador, no puede en manera alguna declararse que el silencio de éste haya sido la causa determinante del contrato, ni puede equipararse á la disimulación, retinencia ó ocultación dolosa á que se refieren los arts. 931 y 933, por más que haya sido indiscutiblemente doloso el proceder que observó el comprador en la negociación.

22. Se declaró insuficiente esta causal de nulidad, por cuanto esa omisión quedó subsanada por una diligencia que se practicó, aparte de que el cobro que el propietario gestionaba ejecutivamente era el im-



locatario, cuando exista contrato por escritura pública, no puede fundar la nulidad del juicio—Civ., tom. 9, pág. 3, Ser. 3ª (tom. 36).

**23. Contrato**—Al que demanda la devolución de la seña corresponde justificar que el demandado es el culpable de la rescisión del contrato—Civ., tom. 9, pág. 199, Ser. 3ª (t. 56).

**24. Contrato**—Al que alega la simulación del contrato

porte de una multa en que se había incurrido en una de las cláusulas del contrato.

23. La demanda de devolución se fundó en la falta de cumplimiento del contrato. Este es el fundamento de la acción. Su comprobación incumbe al actor, porque es quien lo afirmó.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

24. El actor se presentó exigiendo el cumplimiento de un contrato de compraventa de los muebles de la casa habitación del demandado. Este alegó la simulación del contrato que constaba de escritura pública. Esta hace prueba plena del contrato celebrado entre las partes, como así también del cumplimiento, por parte del comprador, de su obligación de pagar el precio convenido — art. 993, Cód. Civ. — En mérito de esta prueba, y del hecho confesado por el demandado de no haber entregado las cosas vendidas, el derecho del actor para exigir su entrega inmediata está terminantemente establecido por el art. 1409 del Cód. Civ., siendo por consecuencia, procedente la acción deducida, en cuanto persigue el cumplimiento de esta obligación del vendedor. No obsta á la anterior conclusión, el hecho alegado por el demandado de ser simulada la escritura de compraventa, porque teniendo esta á su favor la presunción de la ley, la prueba de la simulación corresponde al que la alega — ley 11, tit. 3ª, part. 3ª, y *Jur. Civ.*, tom. 1ª, Ser. 1ª, pág. 91, — y en el caso presente el demandado no intentó siquiera producir justificativo alguno de sus afirmaciones. Se alegó como prueba de la simulación, las circunstancias de comprenderse en la venta hasta las camas, el tiempo transcurrido sin reclamar la entrega, y la exigencia de la entrega de los muebles cuando el vendedor fué demandado por cobro de pesos, no constituyen por sí solas presunciones de simulación; y para su prueba son antecedentes sin importancia alguna. La desproporción entre el precio de compra y el valor de los muebles, y la intimidad en las relaciones de los litigantes, que explicaría la confianza de haber puesto los muebles á nombre del actor, son hechos que si no son probados, no pueden dar margen á presunción de ninguna especie. El recibo anticipado del precio y la redacción de la escritura cuando aquél ya se había pagado, aun cuando no pudieran considerarse como indicios de simulación, son hechos que el actor explicaba satisfactoriamente; y desde luego, pudiendo ser ellos interpretados con igual inve-



por escritura pública corresponde la prueba—Civ., tom. 9, pág. 204, Ser. 5ª (tom. 56).

25. **Contrato**—Justificadas las relaciones contractuales entre el locador y locatario de obras, al primero corresponde justificar la existencia del contrato con un tercero—Civ., t. 9, pág. 403, Ser. 5ª (tom. 56).

26. **Contrato**—Si el contrato permite al vendedor, rescindir la venta ó exigir su cumplimiento, la suma entregada no puede considerarse seña sino pena—Civ., tom. 10, pág. 120, Ser. 5ª (tom. 57).

27. **Contrato**—Para que el principio de prueba escrita haga procedente la testimonial, debe referirse especialmente

rosimilitud en un sentido ó en otro, debe optarse por la inteligencia que sea más favorable á la subsistencia del acto—ley 2ª, tit. 33, part. 7ª.—Por otra parte, la simulación relativa «cuando no ha tenido por objeto perjudicar á terceros, ó un fin ilícito, no es causa de nulidad en los actos, porque podrían hacerlo en la forma que quisieran, con tal que no fuera una forma prohibida», como dice Favard, citado por nuestro codificador en la nota al art. 956 del Cód. Civ. Por último, el privilegio concedido á la prueba de la simulación, solo puede admitirse con relación á terceros, y no cuando se alega por alguno de sus autores, porque para éstos no militan las mismas consideraciones que se aceptan para aquellos. Cuando se celebra un acto jurídico y se oculta su verdadero carácter, el interesado tiene mil medios para ponerse á cubierto de posibles infidencias, y si no ha empleado ninguno, debe cargar con las consecuencias de su imprudencia ó imprevisión. Lo contrario sería abrir la puerta á lo arbitrario, dejando siempre incierta la eficacia y valor de los actos sinceros.

25. El demandado alegó que el contrato para construir una obra no lo había celebrado con el actor, sino con un tercero que era ingeniero arquitecto, y que por consiguiente el constructor no podía demandarlo, á menos que se hicieran subrogar las acciones del arquitecto. Sin embargo de esto, de la prueba resultó que éste solo fué el director técnico de la obra: que presentó al demandado tres propuestas, suponiéndose haber sido aceptada la del actor: que el demandado había entregado á cuenta de las obras la suma de pesos mil al actor. Todo esto hace suponer y demuestra que el demandado conocía quien era el ejecutor de la obra, consintiendo tácitamente en que él la verificara—art. 1146 del Cód. Civ.

26. Este sumario está comprendido en la nota del verb. *Boleto*, 1.

27. Véase la nota citada en el núm. precedente.



al contrato sin que por sus términos pueda aplicarse á otro distinto—Civ., tom. 10, pág. 120, Ser. 5ª (tom. 57).

**28. Contrato**—La prueba de la simulación en los contratos por escritura pública debe necesariamente ser escrita, si el que deduce la acción intervino en su otorgamiento—Civ., tom. 10, pág. 134, Ser. 5ª (tom. 57).

**29. Contrato**—Si la subsistencia de dos contratantes es

28. La reiterada jurisprudencia de la Cám., ha dejado establecido que «cualesquiera que sean las presunciones de simulación, ellas no pueden bastar para destruir los efectos de la escritura pública entre las mismas partes que la otorgaron, porque la ley en presencia de los peligros y fraudes á que la simulación de los actos jurídicos se presta, ha establecido como forma exclusiva de prueba, el contradocumento en que se deje sin efecto ó que se restrinjan los efectos del acto aparente, admitiendo todo género de pruebas solo á favor de los terceros»—Véase ser. 1ª, tom. 9º, pág. 22; y ser. 2ª, tom. 2º, pág. 58, Jur. Civ.—Este principio se funda en el texto y espíritu del art. 960 del Cód. Civ., inspirado sin duda en la doctrina y jurisprudencia francesas. Marcadé, ocupándose de este punto, dice: «Mientras que la prueba testimonial de la simulación de un acto puede ser hecha por un tercero á quien perjudica, porque él ha tenido imposibilidad de procurarse una prueba escrita, aquella no podría ser producida por el que ha sido parte en el acto, y que es uno de los autores de la simulación, porque le ha sido fácil procurarse esa prueba escrita de la simulación». Bonnier se pronuncia en el mismo sentido. «¿Pero, qué debe decirse en caso de simulación simple, se pregunta, que no tenga por objeto perjudicar á terceros ni defraudar la ley? Cuando no ha habido dolo ni violencia se está en el caso de decir con Pothier, que la parte que arguye la simulación falta en no haberse hecho entregar una contraescritura». Se ve, que la prueba privilegiada, únicamente pueden emplearla los terceros, pero de ninguna manera los mismos otorgantes del acto impugnado, porque como se dijo en uno de los fallos antes citados analizando los arts. 994 y 995 del Cód. Civ., estas disposiciones muestran que cuando las partes han comparecido espontáneamente ante el oficial público y han otorgado un acto revestido de las formas legales, debe éste merecer completa fe; que si las partes quieren modificar ese acto, la misma ley les ofrece el medio que se ha indicado, el contradocumento que estaba en sus manos emplear; y finalmente, que admitir en tal caso, sea la prueba testimonial, sea la de simples presunciones, sería contrariar el espíritu manifiesto del Cód., de restringir aquella por sus notorios peligros, mucho más respecto de actos contenidos en instrumento público.

29. En cuanto sea incompatible con el acuerdo de voluntades que



material y legalmente imposible debe conceptuarse que el último ha dejado sin efecto el primero—Civ., tom. 10, pág. 281, Ser. 5ª (tom. 57).

**30. Contrato**—Justificada la existencia del contrato cuya forma de cumplimiento era á opción del obligado, el acreedor solo puede exigir el cumplimiento en la forma más favorable al deudor—Civ., tom. 11, pág. 65, Ser. 5ª (tom. 58).

**31. Contrato**—Tratándose de un contrato sin término

---

el último pueda comprobar. Los contratos no son otra cosa que un acuerdo de voluntad común de las partes destinada á reglar sus derechos—art. 1137 del Cód. Civ.

**30. Arts. 1197 y 1029 del Cód. Civ.**

**31.** La acción reconocía por fundamento la existencia de dolo y mora, por parte del demandado, en la ejecución de las obligaciones que le imponía un contrato de arrendamiento celebrado. Examinando atentamente dicho contrato y demás constancias de autos, se llegaba al convencimiento de que el demandado había cumplido legalmente sus obligaciones, y que por consecuencia, no existía ninguna de las causas que dan derecho á una indemnización de daños y perjuicios. En efecto, por el contrato en cuestión, el propietario se obligó á dar en arrendamiento al inquilino, una quinta de su propiedad, por el término de cinco años, á contar desde el día en que fuese puesto en posesión de ella. Como se vé, las partes no convinieron el plazo en que debía efectuarse la entrega de la cosa, y como de esto dependía que el término del contrato empezase á correr, resulta que las obligaciones propias del arrendamiento no tenían tampoco plazo fijado para su cumplimiento. Si no había término estipulado por las partes para la entrega de la cosa, ésta debía efectuarse, según la disposición del art. 576 del Cód. Civ., en el plazo que el juez señalase; y como de autos constaba que el propietario puso al inquilino en posesión del inmueble en el término acordado por el Juez con ese objeto, es claro que la obligación había sido satisfactoriamente cumplida por el demandado, y que, por consiguiente, era completamente infundada la pretensión de que por su parte había habido dolo y mora en la ejecución de lo pactado, porque ni uno ni otra pueden existir cuando en tiempo oportuno se cumplen las obligaciones que un contrato impone. El art. 1198 del Cód. cit., no hace sino demostrar aun más la improcedencia de la demanda. Si los contratos obligan á las consecuencias que virtualmente están comprendidas en ellos, es evidente que las partes estaban obligadas por el contrato mismo á recurrir al Juez para la designación del plazo dentro del cual debía cumplirse, porque esa es la consecuencia virtualmente comprendida en un contrato que no determina plazo para el

para la entrega del predio arrendado, no puede considerarse que el locador ha incurrido en mora en tanto no haya sido fijado judicialmente—Civ., tom. 11, pág. 275, Ser. 3ª (1. 58).

cumplimiento de una obligación de dar. Siendo, pues, esta la consecuencia legal del contrato en cuestión, es claro que debe ser principalmente tenida en cuenta aunque no esté de acuerdo con la equidad y el uso, desde que estos no pueden invocarse contra una disposición expresa de la ley. En el orden de las consecuencias virtuales de un contrato, con arreglo á la enumeración que hacen Aubry y Rau, no hay duda que deben figurar en primera línea aquellas que la misma ley ha previsto. Por otra parte, tratándose de obligaciones sin plazo designado, la equidad aconseja y el uso sanciona la regla de que sea el juez quien determine la época en que deberá cumplirse. Esta misma consecuencia en este contrato, demuestra también que si el demandante ha sufrido realmente perjuicios por la demora en la entrega de la cosa, los debe atribuir á su propia culpa, desde que subscribiendo la cláusula pertinente del contrato sabía ó debía saber que en definitiva correspondía al juez la designación del plazo para la entrega de la propiedad. Debía saber también que el juicio respectivo estaba sujeto á una larga tramitación, que solo podía evitar mediante la determinación del plazo. Estando entonces previstos en el contrato, como consecuencia necesaria, la intervención judicial y un proceso más ó menos largo, es indudable que las partes están obligadas á cargar con ellos, cualesquier que sean sus inconvenientes y los perjuicios que puedan sobrevenir. Se alegó asimismo que fué por las defensas y recursos del demandado que el juicio no pudo resolverse en un breve término. Esta causal no puede destruir la fuerza de las consideraciones precedentes, porque el dueño, en tal caso se limitó á ejercer su derecho, y es bien sabido que el ejercicio de un derecho no da lugar á la acción de daños y perjuicios—arts. 1067 y 1071, Cód. Civ.—Por lo demás, debe tenerse presente que el arrendamiento, con arreglo á las consideraciones legales antes espuestas, y cualquiera que haya sido la actitud del demandado en aquel juicio, empezó recién el día en que el propietario puso al inquilino en posesión de la propiedad, y que, por lo tanto, es imposible que con anterioridad á esa fecha el locatario haya sufrido perjuicio alguno por razón del contrato, puesto que mal puede causar perjuicio un contrato cuyas obligaciones y derechos están todavía en suspenso. Los perjuicios que el actor reclamaba eran los que resultaban de no haber podido subarrendar el inmueble en las ventajosas condiciones que pudo hacerlo antes de la posesión, es decir, que ellos consistían en no haber arrendado una cosa sobre la cual no tenía derecho actual alguno, puesto que el arrendamiento que tenía prometido no había aun comenzado. Como se vé, estos perjuicios además de ser puramente ideales, no han nacido de un hecho del arrendador, sino del mismo convenio







### 32. Contrato—El poder conferido para otorgar escritura

de las partes y de una disposición de la ley. Si el inquilino no pudo subarrendar la cosa, no fué por culpa ni negligencia del propietario, sino porque él mismo no era todavía arrendatario; de modo que el demandado tampoco había incurrido en la responsabilidad general que sanciona el art. 1109 del Cód. Civ. Prescindiendo de estas consideraciones y suponiendo que la verdadera causa de la demora en la ejecución del contrato fuese, no el contrato mismo y la disposición del art. 576 del Cód., sino la conducta observada por el demandado en el juicio sobre fijación de plazo, y admitiendo también que la temeridad de las defensas del propietario diese lugar á la responsabilidad establecida por el citado art. 1109, como lo enseña Laurent en el tomo 20, núms. 411 y 412 de su obra *Droit Civil*; de todos modos la demanda debía ser rechazada, porque aun así faltaría la comprobación de uno de sus elementos esenciales, esto es, la prueba de la existencia de perjuicios.

32. La parte actora se presentó en unos autos testamentarios diciendo que: «con fecha 12 de Ag., del año 1891, Fasciolo —el causante— confirió el poder especial que adjuntaba á favor de Franceschi, para que éste en su nombre otorgara y firmara escritura á su favor, de una finca que poseía en Villa Catalinas; que Franceschi no pudo cumplir su cometido porque Fasciolo murió á las pocas horas de otorgarle el poder; que el esponente había prestado al causante, todos sus ahorros y sobre esta base se dedicó Fasciolo con algún éxito al comercio; que en estos últimos tiempos habían convenido que Fasciolo le vendería una casa por la suma de 6.000 pesos que él le había proporcionado en diversas ocasiones. Citó los arts. 3279 y 3417 del Cód. Civ., y agregó: que los herederos están obligados á escriturarle, y que en todo caso estarían obligados á devolverle el precio con sus intereses, y pidió, que habiendo entablado formal demanda, se condenara á los herederos de Fasciolo á la escrituración á su favor de la finca indicada, y en su defecto, á la devolución de 6.000 pesos recibidos por el causante en calidad de precio, con más los intereses y costas. La heredera contestó diciendo: que negaba que su esposo hubiese vendido ni prometido vender propiedad alguna á la actora, como también que hubiese recibido 6.000 pesos ni ninguna otra cantidad de esta señora, que era la actora; que jamás se le conocieron bienes de fortuna ni profesión ni oficio lucrativo que le permitiese acumular 6.000 pesos y entregarlos á otra persona como precio de un inmueble, sin exigirle recibo de la entrega del dinero ni el usual boleto de compraventa; que lo que había pasado, era lo siguiente: la actora vivía en criminal concubinato con su esposo, y cuando se sentía próximo á la muerte, ésta, en combinación con otras personas, ejerciendo presión sobre el ánimo del moribundo, le hicieron firmar el poder; que el causante falleció á las 7 de la tarde del mismo día, y que entonces es claro, que ni su salud era completa ni su razón cabal,

de venta no basta para justificar el contrato — Civ., tom. 11, pág. 300, Ser. 5ª (tom. 58).

ni su espíritu se hallaba libre de sugestiones extrañas que lo impulsaban en el sentido de beneficiar á la actora y afirmando una vez más, que el documento era nulo; que tampoco vale como instrumento de mandato, desde que éste concluye por el fallecimiento del mandante—art. 1963, inc. 3ª del Cód. Civ.;—que por otra parte, dicho documento no puede hacer fe como instrumento público sino de las enunciaciões de los hechos directamente relativos al acto jurídico que forma su objeto principal—arts. 993, 994 y 995 del Cód. Civ.;—que por otra parte, los contratos que excedan de 200 pesos, solo pueden probarse por escrito, debiendo redactarse tantos ejemplares cuantas sean las partes que tengan un interés distinto. Cita los arts. 1021 y 1193, y pide que se rechace, con costas, la demanda. Ahora bien, la demanda reconoce como único fundamento el instrumento público — incs. 1ª y 2ª, art. 979 del Cód. Civ.,—en que el causante de la sucesión da poder para que se otorgue escritura de venta á favor de la actora, declarando haber recibido con anterioridad la suma de 6.000 pesos, precio de la venta. La sucesión opone como primera defensa, la nulidad del referido documento, fundada solo en que el otorgante no ha gozado de completa libertad al estenderse aquél. Con prueba testimonial se pretendió justificar, que el documento era nulo, porque no se había llenado las formalidades prescritas por el art. 1004 del Cód. Civ. En cuanto á la presencia de los testigos en el acto del otorgamiento de la escritura, que si bien es cierto que dichos testigos declaran que no estuvieron presentes y no vieron firmar á Fasciolo el instrumento, debe observarse primero, que tal prueba puede reputarse impertinente porque ese hecho no ha sido articulado en la contestación á la demanda, y segundo, porque en todo caso, de acuerdo con la ley 115, tit. 18, par. 3ª, debe darse crédito á la escritura y no á los testigos; cuando se llenaron los requisitos que la ley señala, como sucedía al presente. Es in cuestionable que la escritura no tiene valor como instrumento de mandato, pues éste concluye con la muerte del mandante — inc. 3ª, art. 1963 del Cód. Civ. — siendo también exacto, que tampoco puede valer como disposición de última voluntad—arts. 1983, 3622 y 3672 del mismo Cód.—Si bien es exacto que ese instrumento no constituye una verdadera prueba de que Fasciolo hubiese vendido á la actora la casa que se espresa, pues en el documento no se dice que se hubiese celebrado tal contrato, resultando lo contrario de los propios términos del mandato, pues él es conferido precisamente para vender la propiedad dicha; y como no se presentó otra prueba para demostrar la existencia del contrato de compraventa, es claro que no debe hacerse lugar á la escrituración pedida. Sin embargo, como en la demanda se solicitaba que se condenase á la sucesión á escriturar la finca ó á la devolución de





33. **Contrato** — Al que pretende la existencia de un contrato terminado con el mandatario, corresponde justificar la existencia del mandato—Civ., tom. 12, pág. 53. Ser. 5ª (t. 59).

34. **Contrato** — La imposibilidad de cumplir la sentencia que ordena la escrituración del inmueble, no puede fundar

los 6.000 pesos que se dice recibidos por el causante en calidad de precio, correspondía examinar la cuestión bajo esta faz. Los instrumentos públicos hacen plena fe de los reconocimientos contenidos en ellos — art. 994 del Cód. Civ., — y como Fasciolo, reconoce haber recibido la espresada cantidad, es incuestionable que esta enunciaci6n hace fe. No obstante esto, no significa ni quiere decir que no pueda probarse la falsedad de tal enunciaci6n 6 reconocimiento, prueba que en el presente caso se habia producido con la misma confesi6n de la actora. En efecto; absolviendo posiciones, espresa que antes de conocer 6 Fasciolo trabaj6 como siete a6os como cocinera y planchadora; que antes de conocer 6 Fasciolo tenia 1.900 nacionales, por cuyo precio compr6 la confiteria, compra que se hizo 6 nombre de Fasciolo porque en 6l depositaba toda su confianza y que desde hacia siete a6os siempre habia vivido con ese se6or, 6 quien consideraba como su esposo. Como se ve, la actora confiesa, que cuando empez6 6 vivir con Fasciolo solo tenia 1.900 pesos con los que se compr6 la confiteria 6 nombre de 6ste, y contestando 6 otra posici6n, dice: que durante su uni6n con el causante se mantenfa y vivfa de lo que tenfa y procuraba la confiteria. Si entonces, pues, ha vivido siempre con Fasciolo, si 6ste era legalmente el due6o y administraba la confiteria, si la absolvente se mantenfa con el producido de la confiteria, que no era suya, pues fu6 comprada por Fasciolo, como ella misma lo declar6, ¿de d6nde sac6 entonces los 6.000 pesos para prestar al causante de la sucesi6n? ¿C6mo se explica que 6ste, siendo el due6o y quien esplotaba la confiteria pidiese dinero prestado 6 la actora que vivfa con 6l, considerado como su marido, y que aun en el supuesto de ser cierto lo que dice de la confiteria es indudable que qued6 sin un centavo cuando la compra, pues el precio que dice haber pagado es precisamente el de 1.900 pesos, que seg6n ella, era lo que tenfa cuando comenz6 6 vivir con Fasciolo? Dadas estas conclusiones, basadas en la misma confesi6n de la demandante, y que, por lo tanto, constituyen prueba completa, es incuestionable que el acto jurfdico y reconocimiento que contiene el instrumento son simulados—art. 955 del Cód. Civ., — y que por consiguiente no podfa prosperar la demanda.

33. En virtud del principio de procedimiento que establece la obligaci6n del actor de comprobar los extremos de su demanda — Ley 1ª, tft. 14, Part. 3ª.

34. Arts. 1187 y 627 del Cód. Civ.



una acción para que se declare el desistimiento del contrato.—Civ., tom. 12, pág. 96, Ser. 5ª (tom. 59).

35. **Contrato**—El locatario no tiene derecho a exigir el pago de mejoras que no han sido determinadas en el contrato.—Civ., tom. 12, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 59).

36. **Contrato**—No es necesario la autenticación y justificación del contrato invocado, si el demandado reconoce expresamente la deuda—Civ., tom. 12, pág. 218, Ser. 5ª (t. 59).

37. **Contrato**—El cumplimiento ó interpretación de los contratos de concesión de un tramway, solo pueden exigirlos las empresas concesionarias deduciendo acción ante los Tribunales ordinarios—Civ., tom. 15, pág. 425, Ser. 5ª (t. 62).

38. **Contrato**—La prueba testimonial no puede ser tenida en consideración para justificar un contrato de mayor cuantía, si no existe principio de prueba por escrito—Civ., tom. 17, pág. 64, Ser. 5ª (tom. 64).

39. **Contrato**—Si la existencia del contrato no requiere la escritura pública como condición esencial de su validez, no procede la declaración de nulidad del mismo por defecto de forma—Civ., tom. 18, pág. 21, Ser. 5ª (tom. 65).

40. **Contrato**—Si el pacto comisorio, por el vencimiento

35. El contrato no se conformaba á lo dispuesto en el art. 1542 del Cód. Civ.

36. Reconocida la existencia del contrato, la parte está obligada á su cumplimiento, y uno de sus efectos inmediatos es que el deudor procure aquello á que se ha obligado—art. 505 del Cód. Civ.—Por otra parte, donde existe confesión de parte, toda otra prueba es inútil é innecesaria.

37. De acuerdo con la jurisprudencia sentada en el verb. *Ordenanzas Municipales*, núm. 1 y su nota.

38. Arts. 180 del Cód. de Proc., y 1193 del Cód. Civ.

39. Se alegó la nulidad invocando los arts. 1003, 1050 y 1052 del Cód. Civ., á la que no se hizo lugar por cuanto la necesidad de la escritura pública, que no es más que una forma para justificar la existencia del contrato, no implica la nulidad de éste que es un contrato meramente consensual—art. 1494 del Cód. Civ.—que no requiere para su validez que revista la forma de escritura pública.

40. Según la convención estipulada, que es ley para las partes—



de un término, depende única y exclusivamente de una de las partes, la otra no puede exigir la rescisión del contrato—Civ., tom. 18, pág. 313, Ser. 5ª (tom. 65).

41. **Contrato**—Debe rechazarse la demanda que pretenda el cumplimiento del contrato de compraventa por instrumento privado sin antes reducir el boleto á escritura pública.—Civ., tom. 18, pág. 313, Ser. 5ª (tom. 65).

42. **Contrato**—Tratándose de un contrato de compraventa

art. 1197 del Cód. Civ.,—la facultad de rescindir el contrato se reservó exclusivamente el vendedor para el caso en que transcurrieran quince días sin otorgarse la respectiva escritura. Por consiguiente el comprador no puede demandar la resolución del contrato, porque el pacto comisorio no se constituyó en su favor sino en el del vendedor. El derecho de aquél se limita á pedir su cumplimiento—art. 1204, Cód. Civ.

41. Y aunque la parte no lo pida, deben los jueces rechazarla de oficio, según jurisprudencia constantemente sentada por esta Cám. Véase verb. *Boleto de Compraventa*, núms. 2, 3 y 5—Y asimismo, *Inst.* tom. 8, mismo verbo, núm. 1.

42. Condenado un comprador á escriturar un boleto privado de compraventa de un inmueble se presentó, antes de dicha escrituración del boleto, declarando que abandonaba á favor de la otra parte la suma que había entregado á cuenta del precio. Se resolvió aceptar el desestimiento de la compra, pero por mayoría del tribunal, pues la minoría, consecuente con su teoría de que el boleto privado carece de eficacia alguna mientras no sea elevado á escritura pública, se pronunció en contra. Sin embargo aquí se admitió la resolución del contrato fundándose en que la convención contenía un pacto comisorio y que en caso de incumplimiento debe aplicarse el art. 1204 del Cód. Civ. El pacto comisorio es muy diferente del que implica la entrega y el recibo de arras, y que no obstante la forma en que ha sido establecido, él no obsta al ejercicio de la acción deducida, porque la entrega de arras sirve para asegurar el contrato ó su cumplimiento y da derecho tanto al comprador como al vendedor para arrepentirse. Esta situación legal podría producirse cuando se hubiese constituido una señal lisa y llanamente para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no cuando independientemente del pacto que solo favorece al vendedor se han dejado á éste á salvo sus derechos y acciones para proceder contra el comprador. La facultad legal de arrepentirse del contrato no podría válidamente ser ejercitada por el demandante porque á ello se opone de una manera insalvable la cláusula ya recordada, que por irritante que sea tiene empero, fuerza obligatoria para la otra parte, porque las convenciones son ley para las partes y deben cumplirse en los térmi-



por instrumento privado, que solo obliga al otorgamiento de escritura pública, la falta de cumplimiento solo ocasiona el pago de daños y perjuicios si no existe pena espresa, debiendo tenerse como tal la señal dada para el cumplimiento—Civ., tom. 18, pág. 366, Ser. 5ª (tom. 63).

43. **Contrato**—La existencia de pacto comisorio á favor de una de las partes no enerva el derecho de la otra para ampararse de la disposición que le permite perder la señal ó arras por el incumplimiento del contrato—Civ., tom. 18, pág. 366, Ser. 5ª (tom. 63).

44. **Contrato**—La forma del pago no puede fundar la

---

nos en que se han formalizado, á menos que su cumplimiento no afectase las buenas costumbres ó el orden público. En nuestro derecho, las arras ó señal no exigen ciertamente para su constitución ni su validez jurídica la concurrencia de formas sacramentales ni declaraciones solemnes; más no debe olvidarse que bien estudiada la convención de la referencia, se ve que lo que allí se ha estipulado es una pena ó multa para el caso de retardo ó de incumplimiento de la obligación, como incuestionablemente aparece así al espresarse que los pesos entregados por el comprador los perderá si dentro de los veinte días no se presentare á escriturar, y cuando no solo no se ha impuesto ninguna prestación al vendedor sino por el contrario se le ha desligado de todo compromiso de venta, salvándole todavía el derecho de accionar contra él. Y no es posible dudar de que este es el carácter de aquella estipulación si se tiene en cuenta que según la doctrina de nuestro Cód., hay cláusula penal cuando una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta á una pena ó multa si la retarda ó no la ejecuta y cuando ésta solo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero ó de cualquier otra prestación que puede ser objeto de las obligaciones—arts. 652 y 653 del Cód. Civ.

43. Véase la nota del núm. precedente.

44. En un contrato de compraventa de un bien raíz, hecho en documento privado, el comprador se obligó á pagar el precio al contado; pero no lo hizo así, pagando parte al contado en efectivo y parte en pagarés que el vendedor aceptó. Tal contrato no podía considerarse como de compraventa, de conformidad con el art. 1184, inc. 1º del Cód. Civ., pero valía como obligación de hacer—arts. 1185 y 1187 *ibid.*—Dentro de esta calificación cabe considerarse si se produjo el hecho previsto por los contrayentes como causal de rescisión, esto es, el no pago de la suma de pesos establecida. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben prome-



rescisión del contrato, siempre que el acreedor la haya aceptado, cualquiera que fuera la forma estipulada—Civ., tom. 18, pág. 407, Ser. 5ª (tom. 65).

45. **Contrato**—Verificado el pago el vendedor por instrumento privado está obligado á otorgar escritura pública del contrato, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses—Civ., tom. 18, p. 407, Ser. 5ª (t. 65).

46. **Contrato**—El contrato de disolución de sociedad en que se reconozcan obligaciones debe estenderse en el sello correspondiente—Civ., tom. 18, pág. 428, Ser. 5ª (tom. 65).

47. **Contrato**—Siempre que de autos resulte la existencia de un contrato no presentado, debe darse intervención al ministerio fiscal—Civ., tom. 20, pág. 383, Ser. 5ª (tom. 67).

48. **Contrato**—Llevado á cabo por el representante legal

terse como á la ley misma—art. 1197.—Luego, con arreglo á este principio, toda vez que el comprador no hubiese hecho el pago en la época señalada, el convenio tendría que declararse rescindido. Pero constaba que el comprador pagó en la forma espresada. Efectivamente, ¿qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar—art. 725 Cód. Civ.—Y el comprador hizo la prestación á que estaba obligado en tiempo propio. Se objetó que en vez de pagar todo al contado, solo pagó una parte, y que por lo tanto, no hizo la prestación en forma. Debe notarse que el acreedor aceptó voluntariamente el pagaré, y en tal caso el pago se efectuó con arreglo al art. 740, pues si bien éste dispone que el acreedor no puede ser obligado á recibir una cosa por otra, á contrario sensu, se desprende que puede entregarse una cosa por otra consintiéndolo el acreedor. Goyena en el comentario al art. 1089 del Proy. de Cód. para España, análogo al 740 citado después de sostener de acuerdo con el texto, que el deudor de una cosa no puede obligar á su acreedor á que reciba otra diferente, formula este juicio: «Claro es que podrá pagarse una cosa por otra consintiéndolo el acreedor».

45. En el caso precedente el comprador había pagado, condenándose en consecuencia al vendedor á lo espresado en este sumario.

46. Arts. 1º y 7º de la ley de sellos de 1893.

47. Art. 51 de la ley de sellos de 1894.

48. El actor se presentó demandando el pago de la gruta construida en la Plaza Constitución y que le había sido encomendada por el Intendente. La Mun., contestó diciendo que el Intendente había celebrado el



de una persona jurídica, no basta para obligarla si carecía de facultades para formalizarlo — Civ., tom. 21, pág. 53, Ser. 5ª (tom. 68).

49. **Contrato** — Aun cuando se fije valor en el contrato, si se prevé la existencia de un excedente, debe considerarse de valor indeterminado — Civ., t. 21, p. 307, Ser. 5ª (t. 68).

50. **Contrato** — Si el condenado á reducir á escritura pública el boleto privado de compraventa no cumple la sentencia, debe declararse rescindido el contrato — Civ., tom. 22, pág. 100, Ser. 5ª (tom. 69).

**Contrato** — Véase: *Competencia*, 1; *Clase determinada*, 1; *Documentos*, 5; *Incapacidad*, 1; *Jurisdicción*, 1; *Asegurador*, 1; *Cláusulas necesarias*, 1; *Acto de comercio*, 1; *Acto administrativo*, 1; *Obras*, 1; *Prueba escrita*, 1; *Simulación* 1 y 4; *Inscripción*, 2; *Prenda*, 3; *Aceptante*, 1; *Embargo*, 8; *Cláusula penal*, 1; *Locación*, 3; *Rendición de cuentas*, 3; *Oblación de precio*, 1; *Alquileres*, 6; *Mandato*, 5; *Hipoteca*, 6; *Arras*, 1; *Daños y perjuicios*, 37; *Prueba testimonial*, 10; *Terreno enfiteútico*, 1; *Papel sellado*, 13 y 15.

#### 1. **Contrato bilateral** — Procede la escepción de inhabi-

contrato sin previa licitación, como lo ordena el art. 59 de la ley org. mun., y que por consiguiente había obrado sin facultades suficientes. Las municipalidades son personas jurídicas que funcionan por intermedio de sus representantes legales, y con sujeción á la ley de su creación — arts. 33 y 35, Cód. Civ. — Los actos de sus representantes legales solo las obligan en cuanto se ajusten á los términos de la ley que marca las atribuciones de aquéllos. En lo que ultrapasen esas atribuciones y facultades nada tienen que ver la persona jurídica, que no es por sí susceptible de abuso que le sea imputable — art. 36, Cód. cit. — Negada por la Municipalidad la existencia de facultades por parte del Intendente para contratar sin licitación previa las obras, y estando efectivamente prescripta la licitación por precepto espreso de la ley — art. 59 cit., — cumplía al actor demostrar que ella no había sido violada. Ahora bien; de autos resultaba que ni siquiera la había intentado, por lo que debía considerarse plenamente comprobada la escepción aludida.

50. No se dió cumplimiento á la escrituración por culpa de la parte contraria en cuyo caso procede la aplicación del art. 1187 del Cód. Civ.

1. Se hizo consistir esta escepción en que la escritura pública de con-





lidad de título si la obligación emana de un contrato bilateral y el ejecutante no justifica haber cumplido las obligaciones que se impuso—Civ., tom. 9, pág. 235, Ser. 5ª (tom. 56).

trato se formó bajo la condición de que el demandante suministrase los datos necesarios para tramitar una sucesión, en cuya virtud se otorgarían los títulos correspondientes, condición que no se había cumplido según el demandado, y que por consiguiente, no era exigible la parte de precio que se cobraba. En la escritura pública, el actor se había obligado á entregar al demandado todos los antecedentes y documentos necesarios para establecer ó seguir los juicios sucesorios cuyos derechos había cedido, pero el cumplimiento de esa obligación no se había impuesto en manera alguna como condición que debiera realizarse previamente al pago del saldo del precio que quedaba adeudando al comprador. La obligación que éste contrajo de pagar el saldo del precio que quedó adeudando, era pura y simple, según constaba de la escritura, debiendo cumplirla dentro del plazo de ocho meses, el que se encontraba vencido al iniciarse la demanda. El título con que se pidió la ejecución era, entonces, hábil, por estar comprendido en la disposición de los arts. 464 y 465, inc. 1º del Cód. de Proc. Así se resolvió en 1ª Inst. y así opinaba uno de los camaristas, pero los otros dos resolvieron la cuestión en sentido contrario, fundándose en que «aun cuando el crédito que se cobra consta en un instrumento público, éste, sin embargo, no trae aparejada ejecución por tratarse de un contrato bilateral cuyo cumplimiento por parte del actor no se ha comprobado, ni ofrece siquiera cumplirlo—art. 1261, Cód. Civ.—Se trata de un contrato bilateral, no cabe duda, pues bien claramente se establece en el documento exhibido que la cesión de derechos que el actor hacía al ejecutado, debía consumarse con la entrega de los títulos justificativos de sus derechos, y esta obligación del cedente no consta que la haya cumplido, pues el recibo, única prueba pertinente que se ha intentado al respecto, carece de todo valor legal, desde que la firma que lo suscribe no ha sido reconocida, ni el reconocimiento ha sido propuesto—art. 1026, Cód. Civ.—Basta mencionar estos antecedentes y los preceptos legales contenidos en los arts. 1426, 1434 y 1435 del Cód. Civ. para penetrarse de que el cumplimiento de la obligación del cesionario solo puede ser materia de un juicio ordinario—art. 66, Cód. de Proc.,—y que en manera alguna puede exigirse por la vía ejecutiva, como se la intentado, porque para que exista crédito exigible, se requiere no solo la constatación legal de su existencia, sino también de su exigibilidad, y ya se ha visto que esta segunda condición no resulta acreditada, puesto que está subordinada al cumplimiento previo de la obligación recíproca del ejecutante—art. 510, Cód. Civ.—No existiendo, pues, título ejecutable, la excepción de inhabilidad opuesta por el ejecutado es perfectamente procedente ».



1. **Contrato civil**—No procede la escepción de incompetencia si los pagarés están concebidos á la orden, aun cuando

1. La incompetencia la fundaba el ejecutado en que el origen de los pagarés á la orden que fueron endosados por el tomador, era un contrato de compraventa de bienes raíces, por cuyo precio se dieron. Pero en este juicio, no se trataba de cumplimiento del contrato de compraventa que dió origen á los títulos de comercio, pagarés, sino de la ejecución por falta de pago de esos títulos. Desde luego, atento el principio establecido en el art. 735, Cód. de Com., según el cual la letra de cambio constituye entre cada uno de los que la firman, una obligación distinta y personal, y tratándose de documentos equiparados á dichas letras y endosados al portador, cualquiera que fuese el origen de dichos documentos, ellos representan una obligación comercial, no civil, distinta é independiente de aquellos de que provinieron, que por lo mismo, cae bajo la jurisdicción comercial. Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio, no son comerciantes; pero quedan sujetos á las leyes y jurisdicción del comercio en cuanto á las controversias que ocurrieren con motivo de ese acto — art. 6, Cód. de Com. Al comprar el demandado las propiedades á que se refieren los documentos, ejecutó sin duda un acto puramente civil, aunque las hubiese comprado para venderlas después; mas al firmar los espresados documentos, en la forma en que los firmó, ejecutó un acto esencialmente comercial, porque otorgó pagarés á la orden, endosables y sujetos, por tanto, á las mismas disposiciones que rigen las letras de cambio—art. 740, Cód. cit.— El Dr. Barrenechea, fiscal de los Trib., decía: ¿Es discutible, acaso, que los pagarés podían ser endosados? No. ¿Podían ser protestados los mismos por falta de pago? Sí. Y bien: esas operaciones solo pueden ser ejecutadas con los papeles de comercio, y si pudieron realizarse respecto de los pagarés en cuestión, necesario es convenir que ellos son papeles de comercio y están sujetos á las disposiciones de la ley comercial en cuanto á las obligaciones que ellos establecen, los derechos que confieren á sus tenedores y la forma y manera en que deben exigir el cumplimiento de aquellas; ¿quién es el juez encargado de aplicar la ley comercial? El juez de comercio; luego, V. S. es competente para conocer en la presente demanda en que se trata de hacer cumplir las obligaciones estipuladas en los pagarés. No hay que atender al origen de la deuda, porque cualquier que él sea, nada se opone á que las partes contratantes al otorgar un documento de obligación convengan en darle el carácter y la forma de un papel de comercio, ya para facilitar su cobro por medio de trámites más breves y menos dispendiosos, ya como una manera de proporcionarse un documento negociable, etc. Y este propósito entró sin duda en la mente del que otorgó los pagarés en cuestión, como del que los recibió, porque á no ser así, no hubiesen sido concebidos á la orden, y en este caso ellos hubieran constituido



hayan tenido por origen un contrato civil—Com., tom. 9, pág. 134, Ser. 3ª (tom. 23).

2ª. **Contrato civil**—Debe desecharse la querella por defraudación, si sobre los hechos acusados hubo contrato civil—Crim., tom. 5, pág. 234, Ser. 5ª (tom. 40).

**Contrato civil**—Véase: *Cuestiones prejudiciales*, 1.

1. **Contrato comercial**—Si el contrato es comercial para una de las partes, corresponde á la misma jurisdicción el juzgamiento de las divergencias á que dé lugar—Com., tom. 1, pág. 100, Ser. 5ª (tom. 36).

2ª. **Contrato comercial**—El contrato de compraventa de

simples obligaciones de pagar, sujetas á la ley civil. El origen de una deuda, no es precisamente lo que determina la competencia de un juez y las leyes que la han de regir, sino la forma que se le ha dado á la obligación y la manera como debe cumplirse. En estos pagarés pudo no expresarse la causa de que procedía la obligación de pagar la suma que en ellos se consigna, y esto no hubiera sido un inconveniente para para que se les repite papeles de comercio, toda vez que estaban concebidos á la orden ».

2ª. La acusación fué interpuesta por un ex-socio contra otro por defraudación cometida durante la existencia de la sociedad. El querrellado produjo en juicio un documento por el cual el querellante había satisfecho las exigencias de su socio. Habiendo desaparecido la causa, no quedaba acción civil ni criminal.

1. Art. 62 de la ley org. de los Tribs. El art. 7º del Cód. de Com., establece como principio predominante, que cuando un acto es comercial para una de las partes todos los contrayentes quedan por razón de él sujetos á la ley mercantil. Con esto se ha puesto fin á la anomalía que resultaba de que un acto pudiera corresponder, en el juzgamiento de las relaciones por él creadas, á la jurisdicción civil ó comercial, según fuera el comerciante el que concurriera primero á la justicia, pues imperaba el principio de que el actor debía seguir el fuero del demandado. Hoy existe unidad de jurisdicción en virtud de aquel precepto legal.

2ª. Tanto el juez de 1ª Inst., como el fiscal del juzgado y el de la Cám., fueron de opinión contraria al principio sentado en el sumario por ésta. El pleito tenía por base un contrato de compraventa de la leña que se elaborase en los montes del vendedor, cuya leña debía ser cortada por el comprador, estipulándose en el mismo contrato el precio que debía pagarse por la carrada de leña que de tales bosques



un bosque con el objeto estipulado de cortarlo para hacer leña, es un contrato comercial—Com., tom. 3, pág. 280, Ser. 5ª (tom. 38).

**Contrato comercial**—Véase: *Prenda*, 3.

se sacase y el tamaño que debían tener los trozos que se cortasen. La Cám. dijo que en este caso se trataba de cosa inmueble, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2315 y 2319 del Cód. Civ. Que esta doctrina establecida por nuestro Cód., según la cual la venta del bosque que está todavía en pie, pero que debe ser cortado en provecho del comprador, debe ser considerada como venta de cosa mueble, tiene su apoyo en los tratadistas. Así Zachariae, § 253, núm. 4º, dice: «Que el principio, según el cual el bosque es cosa inmobiliaria en tanto que está unido al bien raíz, no tiene por consecuencia hacer que la venta de bosque, todavía en pie pero que debe ser cortado en provecho del comprador, deba ser considerada como una venta de inmuebles entre las partes, es decir, abstracción hecha de los derechos de tercero, así como de la capacidad del vendedor; esta venta es, al contrario, una venta de cosas muebles». Lomonaco, sostiene igualmente que el contrato de compraventa de la leña de un bosque, á corte determinado, no está sujeto á las reglas que se observan en la enajenación de los bienes inmuebles. Es verdad que los árboles debían reputarse inmuebles, pero en la especie, el objeto es constituido por árboles, que van á ser en seguida cortados para hacer leña. Por lo tanto, á los árboles en estado de vegetación y en su natural destino, se sustituye el destino del contrato, por lo cual basta este solo hecho para alejar toda idea de venta de cosa inmueble. *Instituzioni di Diritto Civile*, tom. 2º, pág. 20. Igual doctrina se sostiene por Demolombe, tom. IX, núms. 135 y siguientes; Pardessus, tom. 1º, núm. 8, *in fine*. «Desde que no se trata de compraventa de inmuebles, no es aplicable al caso presente el inc. 1º del art. 452 del Cód. de Com.» La naturaleza y cantidad de la cosa comprada hace comprender que se compraba para venderla, por lo cual el contrato es acto de comercio para el comprador—art. 8, inc. 1º, y por consiguiente, el caso está sujeto á la ley mercantil—art. 7º, Cód. de Com.—Los que sostienen la tesis contraria alegan, que como la compra para revender solo puede ser comercial cuando tiene por objeto una cosa mueble, y no es mercantil la compra de un inmueble—Cód. de Com., arts. 8, inc. 1, 451 y 452, inc. 1º, como la compraventa de árboles en pie, tiene por objeto cosas inmuebles por naturaleza, como lo son los árboles en pie, según el art. 2314 del Cód. Civ. y la jurisprudencia uniforme.—Escriche, verbo *Bienes inmuebles*, Demolombe, IX, vide, núm. 449, etc., no siendo por consiguiente aplicable aquí lo dispuesto por el art. 7 del Cód. de Com., puesto que la compraventa es civil para vendedor y comprador.



1. **Contrato de compraventa** — No puede exigir el cumplimiento del contrato de compraventa el que ha faltado á las prestaciones que el mismo le imponía — Com., tom. 9.º, pág. 241, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Contrato de compraventa** — El recibo por saldo de cuentas, no basta para justificar el pago de aquellas que hayan sido materia de un contrato de compraventa especial — Com., tom. 1, pág. 294, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Contrato de compraventa** — Procede la tercería de

---

1. Art. 1201 del Código Civil.

2. Véase : verb. *Compraventa*, n.º 1.

3. El actor se presentó deduciendo tercería de dominio en otro juicio y respecto de un inmueble que se anunciaba en remate, fundándose en que el bien era de su exclusiva propiedad, según escritura que acompañó, por más que el inmueble estaba sujeto á un pacto de retroventa, cuyo plazo no estaba aun vencido. La demanda prosperó, pues aunque el dominio adquirido á título de compraventa con pacto de retroventa sea un dominio revocable, no por eso es menos eficaz para fundar una tercería de oposición excluyente, destinada á impedir la enajenación de la cosa, porque tanto el dominio pleno y perfecto como el imperfecto ó revocable, es exclusivo en el sentido que ese término tiene, según su significado gramatical y jurídico — art. 2508, Cód. Civ. — Firmada la escritura de venta seguida de la tradición del inmueble, se extingue el dominio que el vendedor tenía en él — art. 2609 — en este caso así se hizo, según resultaba de la escritura, y quedó trasmitido al comprador, que vino á ser su propietario mientras no le sea revocado en virtud del pacto — art. 2663, — aun cuando la revocación tenga efecto retroactivo al día de la transmisión — art. 2671. — Al vendedor no le queda sino una acción personal que puede ser *in rem scripta*, para que la cosa le sea entregada, ó en defecto, su valor con los daños y perjuicios — doctor Segovia, not. 20, del art. 2672, — pues esa acción es la que corresponde al derecho que nace del pacto — art. 1366, — y que puede ser cedido ó ejercitado por sus acreedores. En virtud de las disposiciones recordadas puede embargarse — art. 476, inc. 5ª, Cód. de Proc., — y enajenarse ese derecho, pero no la finca vendida ni el dominio de ella que pertenece al tercerista mientras no se cumplan las condiciones requeridas para que la revocación se opere. El dominio es exclusivo, no pudiendo dos personas tener todo el dominio de la cosa, si bien pueden ser propietarios de ella en común — art. 2508, del Cód. Civ. — Adquirido por el comprador el dominio al bien, es evidente que el vendedor se desprende de los derechos de propiedad que tiene sobre la cosa vendida, reservándose solo la facultad de recuperarla dentro del plazo



dominio excluyente del propietario poseedor del inmueble, aun cuando por el contrato el vendedor tenga derecho á recuperarla, devolviendo el precio: el derecho á la retroventa puede ser enajenado—Com., tom. 1, pág. 289, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Contrato de compraventa**—La fijación de término para cumplir el contrato de compraventa, constante de escritura pública, bajo apercibimiento de daños y perjuicios, no causa agravio—Com., tom. 9, pág. 250, Ser. 5ª (tom. 37).

5. **Contrato de compraventa**—El vendedor que no

---

convenido en el pacto de retroventa. El vendedor puede ceder el derecho establecido por ese pacto, de acuerdo con el art. 1386 del Cód. Civ., pero nunca puede estenderse esa cesión más allá de las facultades que el cedente tiene, y que en el caso sería el derecho de recuperar la propiedad, pagando lo adeudado—art. 1384 del mismo Código.

4. Porque se ajusta á las prescripciones legales que rijan el caso—arts. 505, 625, 628 y 1197 del Cód. Civ.

5. Se trata de una demanda de rescisión de contrato con pérdida de la seña dada para su oportuno cumplimiento, y el Juez de 1ª Inst., teniendo tan solo en cuenta las referencias incidentales del documento y no las constancias del contrato mismo, que no le fué exhibido, falla haciendo lugar á la demanda en todas sus partes. El documento original fué presentado ante la Cám., la que dijo que si el Inferior, ejercitando la facultad que le acuerda el art. 57 del Cód. de Proc., hubiera ordenado la agregación de un testimonio del contrato que dió margen al litigio, otro habría sido su pronunciamiento, pues de su conceso surgía evidente la improcedencia de las acciones deducidas. Resultaba en efecto, del contrato presentado ante la Cám., que el 5 de Jun. de 1889, convino con el demandado en venderle un terreno de su propiedad, por el precio de 120.000 pesos. El comprador entregó en el acto de formalizarse el contrato, por escritura pública, la cantidad de 20.000 pesos á cuenta de precio y como seña, obligándose á abonar los 100.000 restantes en el acto de otorgarse la escritura de venta correspondiente, que se verificarla tan pronto como se cumpliera una condición que se estipulaba. Conveniéndose además que si el comprador no escriturase diez días después de haberse cumplido la condición, perderla la seña dada. Basta leer este convenio, formalizado, por escritura pública, para apercibirse de que se trata de un verdadero contrato de compraventa, pues reúne todos los elementos requeridos para su existencia legal: consentimiento, cosa, precio y forma—arts. 1140, 1184, inc. 1ª, y 1523, Cód. Civ.—«Habrà compraventa, dice el último artículo citado, cuando una de las partes se obligue á transferir á la otra la propiedad de una cosa y ésta se obligue á recibirla y pague por ella un precio cierto en dinero». Es oport-



se encuentra en aptitud de cumplir el contrato de compra-

tuno transcribir este art. del Cód. Civ., porque se observa que es muy frecuente confundir la obligación contraída de transferir la propiedad, con la transferencia misma, cuando la última no es más que el cumplimiento de aquella obligación, lo que demuestra que son dos casos completamente diversos, y que si bien pueden constatarse por un mismo acto, nada obsta á que lo sean separadamente, y hasta forzoso es que lo sean, cuando se realizan en diferentes épocas. En el caso presente, el contrato de compraventa quedó concluido para producir sus efectos propios, desde el momento en que las partes espresaron su consentimiento en forma auténtica — art. 1140 — esto es, desde entonces el vendedor quedó obligado á transferir la propiedad del inmueble vendido y el comprador á recibirla y pagar el precio estipulado. La segunda escrituración á que se refiere el contrato, no puede considerarse como suspensiva de sus efectos legales, porque ella no tiene más objeto que constatar el cumplimiento de las recíprocas obligaciones convenidas, esto es, otorgando la verdadera escritura de transferencia de la propiedad seguida de la tradición y pagando el comprador el precio convenido. Por eso se dice anteriormente, que cuando en un mismo acto se vende y se transfiere la propiedad, no es necesario más que una escritura, pero cuando como en este caso, la obligación de transferir debe cumplirse posteriormente en época cierta ó incierta, por fuerza tiene que otorgarse una segunda escritura que compruebe la transferencia del dominio, ó sea el cumplimiento del contrato de compraventa. En una palabra: vender y transferir no son sinónimos jurídicamente, pues la primera espresa únicamente la obligación de hacer lo segundo; uno es causa y el otro efecto. En la escritura presentada, el escribano había pagado tributo al error común, haciendo manifestar á los contratantes, que el saldo del precio se abonaría en el acto de otorgar la escritura de venta, sin observar que, si hubiera de tomarse al pie de la letra esa manifestación, resultaría que el comprador habría incurrido en mora desde ese mismo instante, pues la escritura de venta quedaba otorgada sin abonarse ese saldo de precio. No es, pues, á la escritura de venta á lo que las partes se referían, sino á la de transmisión del dominio que debía otorgarse diez días después de cumplida la condición ó plazo estipulado. Se concertaba un plazo incierto -- art. 568 -- para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de compraventa, tanto para el vendedor como para el comprador, y se estipulaba una multa para el caso en que el comprador no cumpliera con su obligación en el plazo fijado. Ahora bien: el vendedor pretendía hacer efectiva la multa por haber dejado transcurrir el comprador el plazo de diez días consignado en la escritura de compraventa, sin prestarse á otorgar la escritura de propiedad, que ella estaba dispuesta á extenderle. La pena ó multa como se establece por el art. 655 del Cód. Civil,

venta, no puede exigir la rescisión y pérdida de la seña fundado en la mora del comprador—Civ., t. 10, p. 3, S. 3<sup>a</sup> (t. 57).

entra en lugar de la indemnización de perjuicios é intereses, cuando el dendor se hubiera constituido en mora; y en consecuencia, para resolver si el comprador debe ó no pagar la multa estipulada, se debe examinar previamente si se ha incurrido ó no en mora. Por documentos fehacientes presentados, se comprobó que el 22 de Mayo de 1890, empezó á correr el plazo de diez días para otorgar la escritura de transferencia de la propiedad vendida por el contrato. Este plazo era común para ambas partes, pues es incuestionable que solo con la concurrencia de los dos podía estenderse la escritura; ó mejor dicho, la concurrencia por parte del comprador dependía de que el vendedor se encontrara en condiciones de cumplir su obligación de transferirle la propiedad vendida; porque solo así estaría obligado el comprador á cumplir la suya de recibir la cosa y pagar el precio — arts. 1409, 1412, 1424 y 1426, Cód. Civ. — Luego, pues, para saber si el comprador había incurrido en mora, como se aseveraba en la demanda, se debe averiguar primeramente si el vendedor se encontraba ó no en condiciones de consumir por su parte el contrato, porque, como lo establece el art. 310, «en las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora, si el otro no cumple ó no se allana á cumplir la obligación que le es respectiva». El demandante manifestó que tan pronto como se cumplía la condición, le hizo saber al comprador que estaba listo para cumplir el cumplimiento contraído por la escritura. En documento acompañado comprobóse efectivamente que tal manifestación se hizo al comprador; pero, ¿bastaban acaso esos antecedentes para demostrar que el vendedor estuviera realmente en aptitud de cumplir la obligación que se impuso por la escritura de 1889? Parece que no, porque la condición no se había cumplido, la que consistía en que la Mun., otorgara un título al vendedor; pero el tít. fué otorgado á éste en condominio con otros coherederos, y se refería á una mayor extensión. Este título habilitaba á los condóminos para transmitir colectivamente toda el área que espresa ó una fracción de ella, pero aisladamente ninguno de los condóminos puede transmitir á terceros otra cosa que no sea su parte indivisa — art. 2677. — Es verdad que el actor sostuvo que él no había hecho más que vender su parte indivisa, pero esto no era exacto, ó á lo menos no resultaba así de los términos bien expresivos de la escritura, en que aparecía vendiendo una cosa divisa, perfectamente determinada, 21 cuerdas más ó menos. La obligación contraída era la de entregar tal área de tierra, y no la parte que le correspondía en el condominio con sus coherederos, y tan es así, que hasta el precio debía sufrir modificación, según que, en definitiva, entregara mayor ó menor superficie. ¿O pretendía también que el comprador estaba obligado á pagar el precio estipulado para reclamar después la diferencia







## 6. Contrato de compraventa—Deducida acción sobre

que resultase? El art. 1426 del Cód. Civ., se encarga de contestar. Si como se sostenía por el actor, su intención no fué vender tierra, sino derechos á ella, no se explicaría la adopción de una terminología apropiada á los contratos de compraventa, cuando habría sido muy sencillo emplear la relativa al de cesión de derechos. ¿Cómo reputar lo mismo decir, por ejemplo, vendo ó cedo las tres quintas partes que me corresponden en tal cosa, que vendo 20 y tantas cuerdas de las treinta y pico que poseo en condominio en tal parte? Lo primero sería una evidente cesión de derechos proindivisos, mientras que el segundo, que era la fórmula adoptada, es una pura y simple venta de cosa determinada «con indicación del área, pero bajo un cierto número de medidas, que se tomarán en un terreno más grande», como autoriza á hacerlo el inc. 3º del art. 1344, Cód. Civ. Se trata pues, de un caracterizado contrato de compraventa, y el vendedor no demostró estar en condición de cumplirlo por su parte: no puede ser dudoso que el comprador no ha incurrido en mora por el hecho de resistir el pago del precio antes que se determine la verdadera ubicación del terreno, como lo manifestaba en una carta agregada—arts. 1342 y 1409,—y si no había incurrido en mora, es obvio que el actor no tenía derecho á hacer efectiva la multa establecida—arts. 510, 655 y 1423, Cód. Civ.—En cuanto á la rescisión del contrato que también era materia de la demanda, invocándose al efecto el art. 1202 del Cód. Civ., tampoco es procedente, desde que el demandante no se acomodaba á las condiciones exigidas por la ley citada para ejercitar su derecho. El art. 1202 establece, que cuando se hubiere dado una señal para asegurar el contrato ó su cumplimiento, tanto el que lo ha dado como el que la recibió, pueden arrepentirse del contrato ó rescindirlo, que es lo mismo, perdiendo la señal el primero y devolviéndola doblada el segundo. En el caso presente, el actor es quien recibió la señal; luego, para arrepentirse del contrato, tendría que devolverla con otro tanto de su valor; y lejos de proceder en esa forma, pretendía que se declarase resuelto el contrato y perdida para el comprador la señal entregada. La disposición de la ley en que se fundaba no le da, como se ha visto, semejante derecho. ¿Se lo acordará acaso, alguna otra? Es difícil que exista, á menos de ponerse en pugna con los arts. 1204 y 1432, que prohíben terminantemente á las partes disolver el contrato, aun cuando la otra no lo cumpliere, excepto en el caso que se hubiese estipulado espresamente el pacto comisorio, lo que no se había hecho en el caso que nos ocupa: ni aun cuando se hubiere estipulado, cabría invocarlo, desde que para que el actor pudiera ejercitar la facultad que tal pacto le diera, sería menester que el demandado no se allanara á cumplir el contrato—art. 1203,—y esto no se había demostrado, como hemos visto.

6. El art. 216 del Cód. de Proc., establece que la sentencia definitiva



cumplimiento de un contrato de compraventa, no puede de oficio resolverse la conversión en escritura pública del documento en que se funda—Civ., t. 10, pág. 195, Ser. 5ª t. 57.

7. **Contrato de compraventa**—Rescindido de conformidad de partes el contrato de compraventa de inmuebles, el vendedor debe devolver lo percibido y sus intereses desde la fecha de la demanda—Civ., tom. 10, p. 212, Ser. 5ª t. 57.

8. **Contrato de compraventa**—La indeterminación de días para el cumplimiento del contrato de compraventa, no basta para declarar la inexistencia de un término si del contexto general resulta la existencia de plazo para la escrituración—Civ., tom. 11, pág. 205, Ser. 5ª tom. 58.

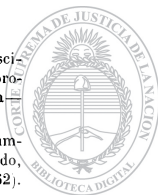
9. **Contrato de compraventa**—Procede la rescisión del contrato de compraventa por instrumento privado, si existe conformidad de partes, sin que se sea indispensable su reducción á escritura pública—Civ., tom. 13, pág. 424, Ser. 5ª (tom. 60).

debe contener decisión expresa positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas en juicio. Si la acción que se deduce no es procedente, el juez debe concretarse á rechazarla, sin resolver nada fuera de lo pedido; lo contrario sería incurrir en nulidad de la sentencia.

7. Es regla de espreso derecho, que para que el dendor incurra en mora y pueda, por lo tanto, condenársele al pago de los intereses desde la época del vencimiento de la obligación, debe mediar requerimiento judicial ó extrajudicial por parte del acreedor, excepto en los casos determinados por el art. 509 del Cód. Civ., entre los cuales no se encuentra el caso de que aquí se trata.

8. Véase la nota del verb. *Cláusula*, n° 1, donde están comprendidos los fundamentos de este sumario.

9. Si debiéramos de atenernos á la doctrina sustentada por la mayoría de esta Cám., resultaría que el sumario está en contra de ella; pues si el boleto simple no confiere otro derecho á las partes contratantes que el de solicitar la reducción del boleto á escritura pública, el contrato de compraventa no existiría, según esa doctrina, mientras no se llene este requisito. Luego si esto es así, si no hay contrato, la rescisión no procede, por cuanto para dejarlo sin efecto, se requiere que exista. No se puede dejar sin efecto lo inexistente. Sin embargo, la Cám. resolvió que la rescisión del contrato era procedente, aun sin reducirlo primeramente á escritura pública. Por lo demás puede verse la nota del verb. *Boleto de compraventa*, n° 4.



10. **Contrato de compraventa**—No procede su rescisión aun cuando se justifique que el vendedor adquirió la propiedad, después de haberse obligado á otorgar la escritura—Civ., tom. 15, pág. 307, Ser. 5ª (tom. 62).

11. **Contrato de compraventa**—Demandado el cumplimiento de un contrato constante en documento privado, debe desecharse la acción—Civ., t. 15, p. 414, Ser. 5ª (t. 62).

12. **Contrato de compraventa**—Si el contrato de compraventa cuyo cumplimiento se exige solo consta en instrumento privado, debe rechazarse la acción—Civ., t. 20, p. 410, Ser. 5ª (tom. 67).

**Contrato de compraventa**—Véase: *Contrato comercial*, 2; *Compraventa*, 2; *Derechos hereditarios*, 1; *Remate judicial*, 14; *Prescripción*, 5.

1. **Contrato de construcción**—Al que alega que las obras accesorias no estaban incluidas en el contrato de cons-

---

10. Porque en este caso el vendedor, llegada la oportunidad de hacer la escritura definitiva, se halla en condiciones de entregar la cosa al comprador, lo que hace inaplicables los arts. 1412 y 1413 del Cód. Civ., siendo además bien evidente que cualquiera deficiencia que de derecho pudiere alegarse por no ser el propietario de la cosa el vendedor, queda cubierto por la adquisición posterior del dominio de la cosa vendida—art. 1330.

11. De acuerdo con la jur. sentada por la mayoría de la Cám. véase verb. *Boleto de compraventa*, n.º 2, 3 y 5. En contra véase el mismo verb. n.º 4; tom. 23, pág. 334; tom. 23, pág. 103; tom. 33, págs. 245 y 403; tom. 34, pág. 46; tom. 35, pág. 108, y tom. 36, pág. 183; tom. 20, págs. 117 y 281; tom. 21, pág. 255. En todas estas causas se ha tratado del cumplimiento de contratos convenidos en boletos privados que versaban sobre bienes inmuebles, sin exigirse la escrituración previa del mismo boleto. Sin embargo, la doctrina contraria ha triunfado en la inmensa mayoría de los casos.

12. Véase la nota precedente.

1. Las partes no presentaron ningún contrato escrito para justificar sus pretensiones. No se comprobó tampoco que en la convención celebrada no hubiesen estado incluidas las obras que se cobraban como accesorias. Negado por el demandado el hecho de la construcción de las obras accesorias, corresponde su prueba al actor—ley 1, tit. 14, Part. 3ª.



trucción, corresponde justificarlo plenamente—Civ., tom. 12, pág. 64, Ser. 5ª (tom. 59).

**Contrato de construcción**—Véase: *Construcción*, 1.

1ª. **Contrato de depósito**—Si es verbal y excede de doscientos pesos, la simple declaración del demandado forma prueba plena de las condiciones en que se verificó y de su restitución—Civ., tom. 9, pág. 91, Ser. 5ª (tom. 56).

1ª. **Contrato de descuento**—Es improcedente la incompetencia de la jurisprudencia comercial opuesta a la ejecución hipotecaria, si solo se constituyó el gravamen como accesorio de un contrato de descuento—Com., tom. 9, pág. 136, Ser. 3ª (tom. 25).

1ª. **Contrato de locación**—No procede la rescisión del

1ª. Se trataba de la devolución de un depósito voluntario irregular por valor de 1200 g oro que el actor constituyó en poder del demandado sin mediar formalidad alguna por haberse hecho confidencialmente. Éste confesó la exactitud del depósito pero alegó haberlo devuelto parte en dinero y parte en mercaderías. De acuerdo con el precepto del art. 2201 del Cód. Civ., el depositario en estos casos *es creído sobre su declaración*, tanto sobre el hecho del depósito, como sobre la identidad de la cosa y *restitución de ella*.

1ª. La ejecución fué iniciada por una institución bancaria á cuyo favor el ejecutado constituyó una obligación hipotecaria. Siendo la operación hecha por un banco y constituyéndose la hipoteca en seguridad de esa operación, y estando las operaciones bancarias comprendidas entre los actos que la ley declara comerciales—art. 8º, inc. 3º del Cód. de Com.—resulta de aquí el carácter de comercial que tiene dicha obligación, como tampoco puede desconocerse que por lo que respecta á ella, el deudor queda sometido á las leyes y jurisdicción del comercio, conforme á lo prescripto por los arts. 6º y 7º del Cód. citado. Siendo esto así, y como entre los actos comerciales que sujetan á los que los ejecutan á la jurisdicción mercantil, también figuran *los accesorios* de operaciones comerciales, como la prenda, la fianza, etc.—art. 8º, inc. 10, Cód. de Com.—Y no siendo la hipoteca sino un accesorio como fianza de la obligación que con ella se ha querido garantir, es concluyente que el Juez de Com. es perfectamente competente para conocer de la acción que de dicho acto emerge. Sin embargo no debe perderse de vista que la hipoteca es un derecho real, y que el juez competente para en su ejecución, es el del lugar en que la cosa está situada. Véase verb. *Competencia*, 10.

1ª. El actor espuso que había arrendado del demandado una casa por



contrato de locación si los vicios y defectos de la cosa habían cesado en la fecha en que se demanda judicialmente—Civ., tom. 9, pág. 62, Ser. 5ª (tom. 56).

2ªños: gastó en refacciones una fuerte suma de dinero: entró á habitarla, teniendo que desocuparla después á causa de la gran humedad de ella, lo que hacía peligrar su salud, según certificado médico que exhibió y el de la Comisión de Higiene de la parroquia. Fundado en estos defectos de la casa y de otros que la hacían inhabitable, pidió la rescisión del contrato—arts. 1519 y 1525 del Cód. Civ.—El demandado creyó que las razones alegadas por el actor fuesen suficientes para la rescisión, manifestando que la casa fué vista por el locatario antes de aceptar el contrato, y que no hizo entonces observación alguna sobre sus condiciones higiénicas, inferiores á las que tenía actualmente; que esa casa la había ocupado por varios años sin haber jamás sufrido las molestias á que se refería el actor y que tampoco éste las había notado sino cuando la depreciación del papel de curso legal lo obligó á pagar una suma mayor por los alquileres convenidos á oro; que fué entonces cuando se quejó de sus malas condiciones, fundándose en la estrechez de la casa, su falta de ventilación que él ya conocía y la existencia de pozos que no se hallaban en las condiciones indicadas en su demanda; que satisfaciendo esas reclamaciones, verificó primeramente el desagotamiento de esos pozos y después la construcción de cloacas, quedando la casa en las mejores condiciones de higiene, no consiguiendo con esto contentar al locatario, porque no era esto lo que pretendía, desde que el precio del oro aumentaba, explicándose así esta demanda cuyo rechazo pedía, por encontrarse la casa alquilada en perfectas condiciones y no ser aplicable, por lo tanto, lo dispuesto en los arts. citados por el actor. El juez absolviendo al demandado, después de establecer entre otras consideraciones, que el locatario no había probado, que al tiempo de producir la demanda, la casa arrendada adolecía de los vicios ó defectos graves que impedirían el uso de ella, ni que en el mismo tiempo se hiciesen reparaciones que interrumpieran sus derechos de locatario, desde que la prueba producida se refería á una época anterior y porque constaba de autos, que había continuado disponiendo de la propiedad alquilada, lo que hacía claro la improcedencia de lo dispuesto en los arts. 1519 y 1525. El locador es responsable, indudablemente, así de los vicios de que tenía noticia como de los que ignoraba, cuando son tales que impiden el uso de la cosa, como lo dice Pothier explicando á la vez, que toca al locador esta responsabilidad, no solo cuando los vicios ya existían al tiempo del contrato, sino también cuando sobrevinieran después, á diferencia de este contrato con el de compraventa, en el que el vendedor solo debe responder de los que existiesen al tiempo de celebrarlo.—Véase Pothier, *Tratado de la locación y conducción*, §§ 111 y 112.—Esta es la doctrina consagrada por el art. 1525, cit. Menos



2. **Contrato de locación**—La facultad de poner materiales usados acordada en el contrato de locación de obra, debe resultar espresamente estipulada—Civ., tom. 9, p. 107 Ser. 5ª (tom. 56).

3. **Contrato de locación**—Aun cuando se declare procedente la rescisión del contrato de locación, los daños y perjuicios deben ser plenamente justificados—Civ., tom. 10, pág. 206, Ser. 5ª (tom. 57).

4. **Contrato de locación**—Si la rescisión del contrato de locación es imputable al locatario, el locador tiene acción para demandar la indemnización de pérdidas é intereses—Civ., tom. 11, pág. 82, Ser. 5ª (tom. 58).

5. **Contrato de locación**—Para que el locatario pueda exigir del locador la devolución de la fianza ó depósito, debe justificar que entregó la propiedad en buen estado de conser-

---

puede decirse de aplicación lo dispuesto en el art. 1519 para el caso en que el locador se dispusiese á hacer en la cosa arrendada las reparaciones que son de su cargo é interrumpiese con ellas el uso ó goce estipulado, en todo ó en parte, ó cuando fuesen muy incómodas al locatario, desde que, las reparaciones fueron concluidas mucho antes de deducida la demanda y con posterioridad á la desaparición de los defectos atribuidos por el actor á la casa arrendada.

3. Si bien el art. 1579 autoriza al propietario á pedir la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios en el caso que el inquilino no pague dos períodos consecutivos de renta—este era el caso del sumario.—Pero para que el cobro de daños y perjuicios proceda, se requiere no solo que se tenga el derecho de exigirlos, sino que se compruebe la efectividad de su existencia. Si se demuestra ésta y no su monto, sería aplicable el art. 220 del Cód. de Proc. Civ.

4. El locatario, como en el caso precedente, había dejado de pagar dos períodos consecutivos de renta. El propietario pidió la indemnización del daño consistente en la diferencia entre el alquiler estipulado en el contrato y el que se podría obtener después de la rescisión. Esta diferencia fué comprobada en forma, por medio de peritos, lo que hacía aplicable el art. 1579 del Cód. Civ.

5. Por cuanto un contrato de arrendamiento en que se estipula una fianza encierra obligaciones recíprocas, y entonces ninguno de los interesados puede pedir el cumplimiento de las obligaciones que incumben al contrario sin antes comprobar haber cumplido por su parte las suyas ó sin ofrecer su cumplimiento—art. 1201 del Cód. Civ.



vacación y cumplió en absoluto las estipulaciones del contrato de locación — Civ., tom. 11, pág. 127, Ser. 5ª (t. 58).

6. **Contrato de locación** — Si en el contrato de locación las partes no fijan el plazo en que el locador debe efectuar la entrega del predio, el locatario no puede considerarse con derecho á disponer de la cosa arrendada en tanto no le hubiera sido entregada — Civ., tom. 11, pág. 275, Ser. 5ª (tom. 58).

7. **Contrato de locación** — Si bien la rescisión prematura de un contrato de locación se supone que causa perjuicios, deben justificarse plenamente los que se aleguen como pérdidas de utilidades — Civ., t. 11, p. 294, Ser. 5ª (t. 58).

8. **Contrato de locación** — La prueba de la rescisión del contrato de locación celebrado por instrumento público, corresponde á quien la alega — Civ., t. 12, p. 152, S. 5ª (t. 59).

9. **Contrato de locación** — Justificada la existencia del contrato de locación, el locatario debe ser obligado al cumplimiento. — Civ., tom. 12, pág. 152, Ser. 5ª (tom. 59).

10. **Contrato de locación** — Justificada la existencia de un contrato de locación á término fijo, el locatario es respon-

---

6. Véase la nota del verbo *Contrato*, n° 31, donde está comprendida la razón de este sumario.

7. En el cobro de los daños y perjuicios deben demostrarse dos extremos para ser procedente: 1º, el derecho de cobrarlos; 2º, su existencia efectiva. En cuanto al monto, puede suplirse con el juramento estimatorio del art. 220 del Cód. de Proc.

8. Las escrituras públicas hacen plena fe entre las partes, mientras su contenido no sea modificado por otro documento — arts. 992, 994, 995 y 996 del Cód. Civ. — La rescisión de un contrato así celebrado debe comprobarse por quien la afirma, en virtud del conocido principio de que al que alega un hecho nuevo en juicio incumbe la prueba.

9. Las partes están sometidas al contrato como á la ley misma — art. 1197 del Cód. Civ.

10. El contrato decía: «es entendido también que el vendedor continuará ocupando el inmueble durante la retroventa, como inquilino.» Si no constase que el inquilino hubiese devuelto el inmueble arrendado al terminar la locación — arts. 1609 y 1615 del Cód. Civ., — ó que hubiese hecho depósito judicial, si el locador se negaba á recibirlo — art. 1611 — se presume que continúa en la ocupación. Así surge *a contrario sensu* de la disposición de este último artículo.



sable de los alquileres después del vencimiento si no hizo la devolución, ó el depósito judicial si el locador se resistía á recibirlo — Civ. tom. 13, pág. 96, Sér. 5ª (tom. 60).

**11. Contrato de locación**—El locador puede darlo por rescindido si el locatario abandonó el predio arrendado, responsabilizando á éste por los daños y perjuicios causados—Civ., tom. 15, pág. 370, Ser. 5ª (tom. 62).

**12. Contrato de locación**—Cualquier que sea el motivo de rescisión del contrato de locación y aun cuando sea imputable al propietario, no puede exigírsele el pago de la pena, si no existe la causal espresamente estipulada en el contrato—Civ., tom. 20, pág. 375, Ser. 5ª (tom. 67).

**Contrato de locación**—Véase: *Condición resolutoria*, 1; *Excepción*, 8; *Locación de servicios*, 2; *Alquileres*, 3, 4, 8; *Daños y perjuicios*, 29 y 39; *Mejoras*, 1.

**1. Contrato de locación de servicios**—La resolución de un contrato de locación de servicios celebrado en forma instrumental debe justificarse por prueba escrita. Aun cuando se justifique una modificación sobre el precio estipulado, las demás condiciones que forman el fondo del contrato se conceptúan vigentes — Com., tom. 5, pág. 59, Ser. 5ª (tom. 40).

**2. Contrato de locación de servicios**—Debe recha-

11. Art. 1564 del Cód. Civ.

12. Según una cláusula los demandantes se obligaron á abonar la suma de 15000 pesos nacionales de indemnización á los inquilinos por falta de cumplimiento de lo estipulado, toda vez que aquellos pidieran la casa antes de terminado el contrato. De las probanzas que se acumularon en el proceso, no resultó que se hubiese producido el estremo indicado, ni siquiera constaba que se hubiese alegado esto como defensa. La no ejecución de otras obligaciones no podía hacer prosperar la acción. Para ello se había invocado la cláusula penal de referencia. Pero las convenciones de este carácter deben interpretarse limitativamente. En el caso que nos ocupa no se fijó la pena, según el mismo interesado, para el caso de que no se cumplierse las otras obligaciones del contrato, sino para el de que se pidiera la casa por los interesados antes de finalizar el término del contrato.

2. El art. 541 del Cód. Civ., establece que el deudor de la obligación es responsable de los daños y perjuicios, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla. De manera que esta obligación tiene que ra-





zarse la acción por daños y perjuicios emergentes de la falta de cumplimiento al contrato de locación de servicios, si el demandante es el culpable de la rescisión — Civ., tom. 10, pág. 238, Ser. 5ª (tom. 57).

**Contrato de locación de servicios**—Véase: *Daños y perjuicios*, 3; *Locación de servicios*, 3.

1ª. **Contrato de mutuo**—Establecida la existencia de este contrato, el mutuuario está obligado á devolver al mutuante, en el término convenido, una cantidad de cosas iguales de la misma especie ó calidad — Civ., tom. 11, pág. 310, Ser. 5ª (tom. 58).

1ª. **Contrato de obra**—La prueba pericial terminantemente asertiva forma prueba en estos contratos — Civ., t. 9, pág. 101, Ser. 5ª (tom. 56).

1ª. **Contrato de prenda**—Para que el contrato de prenda

---

dicar en el antecedente de que haya dejado de cumplir la obligación por culpa propia.

1ª. Art. 2250 del Cód. Civ.

1ª. Arts. 1623, 1627 y 1636 del Cód. Civ.; y 178 del Cód. de Proc. Civ. Este último art. ha quedado modificado por la ley n° 4128 en su art. 26, por el cual se establece que la fuerza probatoria de la prueba pericial será apreciada por el juez de la causa, teniendo en consideración un cúmulo de circunstancias que allí se enumeran.

1ª. Se pedía la declaración de nulidad del acto constitutivo de la prenda, fundado en que la escritura respectiva no contenía una designación detallada de la cosa dada en prenda, como lo exigían los arts. 742 y 743 del Cód. de Com. antiguo, que es el que correspondía aplicar por tratarse de una prenda comercial otorgada antes de la vigencia del actual. Lo único que consignaba la escritura á este respecto, era que la cosa dada en prenda la constituía el establecimiento tipográfico « La Universidad ». Ahora bien: ¿Se llenan con esta indicación las exigencias legales de los artículos citados del Cód. de Com., que requieren la expresión de calidad de la prenda y el de su peso y medida cuando se trata de cosas que ordinariamente se venden en esta forma? La designación precisa de la cosa dada en prenda que exigen los dos arts. 742 y 743 del Cód. cit., responde al propósito de prevenir los fraudes que fácilmente podrían cometerse substituyendo cosas de poco valor, por otras de un valor superior, ó también aumentando la cantidad de las cosas entregadas en prenda. Siendo este el verdadero espíritu de la ley, ¿podrá decirse que en el caso que nos ocupa era suficiente la de-



sobre muebles sea válido contra terceros, los objetos deben estar perfectamente individualizados: la determinación de un establecimiento en conjunto, anula el contrato—Com., tom. 3, pág. 254, Ser. 5ª (tom. 38).

signación contenida en la escritura? Establecer que lo que se daba en prenda era el establecimiento tipográfico «La Universidad», ¿es bastante para impedir la sustitución en número y calidad de algunas ó de todas las mercaderías ó piezas que en su conjunto forman un establecimiento de su género? Con solo pensar en la diferencia enorme de valor que puede haber en distintos establecimientos de esa clase, resultando de la variedad en el número y calidad de las máquinas, tipos y demás útiles que la constituyen, se comprende que aquella sola indicación no respondía en manera alguna á los propósitos de la ley, puesto que ella no es bastante para impedir los fraudes que el legislador tan empeñosamente y con tanta justicia ha querido prevenir. No respondiendo, pues, la designación que contenía la escritura, al verdadero objeto de la ley, debe concluirse que el acto constitutivo de la prenda, no reunía las formalidades y condiciones necesarias para su validez. Esta conclusión está de acuerdo con la doctrina de los autores — véase Laurent, tom. 28, núm. 435; Aubry y Rau, tom. 4º, núm. 701, not. 8ª, y Troplong, *Nantissement*, núms. 186 y siguientes, — y ha sido sancionada en numerosos casos por la jurisprudencia francesa, bastando recordar entre otros, por su perfecta similitud con el caso presente, el fallo citado por Dalloz, en el núm. 93, *Nantissement* de su Repertorio, por el cual se declaró que no era válido el acto por el que un deudor da su biblioteca en prenda, cuando aquél no especifica el número de volúmenes, el nombre de las obras, su formato, edición y demás signos característicos de su valor. Está también de acuerdo la conclusión anterior con el art. 3217 del Cód. Civ. y su nota explicativa, que pueden servir para fijar la verdadera interpretación de los artículos respectivos del Cód. de Com., ya que en su letra no hay diferencias sensibles, y puesto que en su espíritu ambos Códigos responden al mismo orden de ideas. Concordando entonces por la razón apuntada, la doctrina del Cód. Civ. con los arts. 742 y 743 del Cód. de Com. citados, y teniendo presente cual es el verdadero fundamento de estos artículos, no puede ser dudoso que al exigir que se espese en todo caso la calidad de los objetos dados en prenda — art. 742, — como al disponer que se especifique el peso y medida de las cosas que se gravan en esa forma — art. 743, — el Cód. de Com. lo que en realidad ha querido y dispuesto es que se detalle de tal manera la cosa, que su individualidad no pueda ser confundida con ninguna otra. Si, pues, esta es la única interpretación correcta de las disposiciones del Cód. de Com., relativas á esta materia, es claro que aun cuando un establecimiento tipográfico no sea de las cosas que se venden por su calidad, peso ó medida: de todos



## 2. Contrato de prenda—La existencia del contrato de prenda no basta para alterar la jurisdicción á que corresponde

modos, con arreglo al art. 742, que en términos generales requiere la expresión de la calidad de la prenda, ha debido ser designada ésta, en tal forma, que su individualidad aparezca tan claramente determinada, que no pueda dar lugar á los fraudes que se quieren prevenir. No reuniendo estas condiciones una escritura, la prenda que por ella se constituye queda afectada de un vicio que hace procedente la declaración de su nulidad con arreglo á las disposiciones legales antes citadas. Se pretendía, sin embargo, que la indicada condición había sido cumplida mediante el inventario detallado que se hizo. Pero á esto se se observó: 1º, que la designación detallada de las cosas que constituyen la prenda, debe hacerse en la misma escritura pública ó privada en que se otorga — arts. 742, Cód. de Com. y 3217, Cód. Civ.; — 2º, que si se hace por acto separado, éste debe tener las indicaciones necesarias para que pueda ser considerado como complementario del principal, ó en su defecto, reunir todas las formalidades necesarias para que por sí solo sirva de instrumento del contrato; 3º, que el inventario no tenía ninguno de estos caracteres, porque no haciendo referencia alguna al contrato de prenda, no puede tomarse como complementario de éste, ni servía tampoco por sí solo de escritura de la prenda, desde que un simple inventario cuyo objeto no se expresa no puede servir de prueba de ningún contrato; 4º, que la referencia que contenía la escritura presentada al inventario practicado por las partes, no comprendía al presentado después, puesto que éste era de fecha posterior á aquélla; y 5º, que aun en el caso de tomarse dicho inventario como una escritura privada de prenda, no podría ser opuesta á terceros, por carecer de fecha cierta — art. 1035, Cód. Civ.

2. El crédito que comprobaba el documento estaba garantido con prenda. Pero en manera alguna obsta la constitución de ésta al ejercicio de las acciones que la ley acuerda al acreedor, para demandar ejecutivamente el pago de su crédito. Lo contrario sería confundir los dos contratos: préstamo de una cantidad de dinero, que es el contrato principal, con el accesorio de prenda celebrado para garantizar el cumplimiento del primero. Esos contratos son diferentes y crean derechos y obligaciones distintas, si bien están íntimamente relacionados entre sí, sin que el accesorio pueda existir sin la obligación principal. En el juicio no se ejercitaban por el demandante sino las acciones que nacían del contrato principal, y es innegable, que tratándose del cumplimiento de una obligación de pagar una cantidad de dinero contenida en dicho documento, y estando éste suscripto por el obligado reconocido en juicio, era un título hábil para demandar ejecutivamente, de acuerdo con lo que disponen los arts. 464 y 465, inc. 2º, del Código de Procedimientos.



el documento en que consta la obligación principal—Civ., tom. 22, pág. 333, Ser. 3ª (tom. 69).

1ª. **Contrato privado**—Procede la escepción de falta de personería, si el poder otorgado por el socio se funda en un contrato privado, aun cuando se transcriban los artículos pertinentes—Com., tom. 9, pág. 58, Ser. 3ª (tom. 25).

**Contrato privado**—Véase: *Sellos*, 4.

1ª. **Contratos privados**—Los contratos por instrumento privado solo tienen fecha cierta con relación á terceros desde su presentación en juicio—Com., t. 9, p. 162, Ser. 3ª (t. 25).

1ª. Celebrado un contrato de sociedad en forma privada, el socio administrador otorgó poder para que un apoderado la representara en un pleito á iniciarse por ella. El poder contenía la transcripción de la cláusula habilitante, según lo prescriben los arts. 1003 y 1004 del Cód. Civ. Como el art. 289 del Cód. de Com. faculta á las partes á celebrar contratos de sociedad en forma privada, parece que el apoderado así instituido estuviese suficientemente facultado para representar á la sociedad. Pero no es así por cuanto, todo contrato social, sea hecho en forma privada ó pública, necesita para surtir efecto contra terceros, que sea inscripto en el Registro Público de Comercio—arts. 289 y 296 del Cód. de Com.—El contrato de la referencia no estaba inscripto, y por consiguiente no podía surtir efectos contra terceros. Sin embargo debe distinguirse si la acción se dirige á hacer efectivo algún derecho emergente única y exclusivamente de la existencia de la sociedad, ó si tiene por origen otra causa cualquiera, pues basta tener presente que el art. 296 del Cód. de Com. no tiene este alcance, desde que la acción instaurada no se funde en la existencia de la sociedad, sino en hechos distintos. La jurisprudencia constante de los Trib. de la Cap., ha establecido la interpretación que debe darse á dicho art., declarando que sus conceptos no se refieren indistintamente á todas las acciones, ni desvirtúan toda relación de derecho de los socios entre sí, ó de la sociedad con terceros, sino á aquellas que no tuvieran otra causa posible que la existencia de la sociedad, porque no es posible entender que los socios estén privados de demandar á los terceros por el pago de sus deudas; la prohibición de la ley de demandar á terceros sin el instrumento social registrado, se refiere á los efectos futuros del contrato, pero no prohíbe que se demanden en juicio por los efectos ya producidos ó por lo que respecta á lo pasado. Véase el caso Nocetti y Cª contra don Ernesto Quesada; y pág. 39, tom. 4ª, Ser. 2ª; pág. 182, tom. 1ª, Ser. 1ª; Segovia, núm. 1903; Freitas, comentario al art. 303, Cód. del Brasil; Pardessus, Derecho Com., núm. 1010, Alauzet, núm. 384.

1ª. Art. 1035 del Código Civil.



1<sup>a</sup>. **Contrato de sociedad**—La falta de personería de los socios por falta de inscripción del contrato en el Registro Público de Comercio, no puede ser invocada por los terceros que contrataron con ella sin exigir su requisito—Com., t. 1, pág. 153, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>b</sup>. **Contrato de sociedad**—La resolución de las cuestiones sobre nulidad del contrato de sociedad es previa á la formación del tribunal arbitral—Com., tom. 9, pág. 398, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

1<sup>c</sup>. **Contrato verbal**—Reconocida la existencia del contrato verbal de sociedad, el administrador está obligado á la rendición de cuentas—Com., tom. 9, p. 269, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

1<sup>d</sup>. **Contrato de venta**—Siempre que exista precio esti-

---

1<sup>a</sup>. Véase la nota del verb. *Contrato privado*, n<sup>o</sup> 1.

1<sup>b</sup>. La jurisdicción arbitral establecida por el art. 448 del Cód. de Com., es de excepción y como tal debe ser rigurosamente restringida á sus términos literales. Según esos términos se requiere que exista sociedad, que ésta sea comercial, que el litigio sea entre socios, y la materia del pleito, un asunto social. Promovida por uno de los asociados la cuestión de nulidad fundada en un vicio del contrato de sociedad, es de competencia del trib. ordinario su previa decisión, por no tratarse de una cuestión social, y falta, desde luego, uno de los requisitos exigidos por el citado art., para que el caso sea de arbitraje forzoso. Véase Dalloz, verb. *Arbitraje forzoso*, cap. 3<sup>o</sup>, art. 38, núms. 126 y 188, ó *Inst.*, tom. 4, verb. *Sociedad*, núm. 5, que está de acuerdo con esta doctrina.

1<sup>c</sup>. Con arreglo á lo estatuido en el segundo punto del art. 296 del Cód. de Com., concordante con el 399 del derogado, la sociedad que no se haga constar por escrito y cuyo instrumento probatorio no se haya registrado, produce sus efectos respecto á lo pasado, en cuanto á que los socios deberán dar respectivamente cuenta, según las reglas del derecho común, de las operaciones que se hayan hecho y de las ganancias ó pérdidas que hayan resultado.

1<sup>d</sup>. El contrato de compraventa, no puede existir sin precio—art. 1323 del Cód. Civ.—*Sine precio nulla venditio est.* ¿Pero este precio real, cierto y determinado, debe consistir precisamente en dinero, ó puede darse otra cosa sin que el contrato pierda por esto sus efectos? Pothier, ocupándose especialmente de este punto y después de determinar lo que debe entenderse por precio, lo resuelve así: el precio, ha de consistir en una cantidad de dinero que el comprador se obliga á pagar



plado, el contrato de venta es perfecto, aun cuando el pago en parte se verifique en obligaciones de dar, vencidas y exigibles al vendedor — Civ., tom. 10, pág. 154, Ser. 5ª (t. 57).

**Convención espresa**—Véase: *Competencia*, 10.

1ª. **Convenio** — Justificado el convenio ó conformidad prestada á la cuenta por honorarios, la obligación de pagar la cuenta convenida es ineludible — Civ., t. 12, p. 266, Ser. 5ª (tom. 59).

**Convenio** — Véase: *Esposos*, 1; *Honorarios*, 28; *Acarreador*, 1; *Bolsa de Comercio*, 1.

**Cónyuges**—Véase: *Divorcio*, 5.

1ª. **Copia**—La falta de presentación de copia de los escritos

al vendedor, pues, si consistiera en cualquier otra cosa, el contrato no sería una compraventa, sino una permuta (L. 7ª, Cód. de Ber. permut.). Sin embargo, si además de la cantidad en dinero se obligase el comprador á dar por suplemento de precio alguna otra cosa, ó bien hacerla, el contrato no dejaría de ser una verdadera venta (L. 6, § 1, ff. de Act. empt.). Falta observar, agrega, que con tal que las partes hayan convenido en un precio consistente en dinero, no importa que después el comprador haya dado en pago otra cosa cualquiera. *Non enim pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem.* (Pothier, *Tratado del contrato de compraventa*, pár. 30i). Se ve, pues, que según el derecho romano, á que se refiere Pothier, el contrato de compraventa no se desnaturalizaba cuando después de convenido el precio cierto en dinero, el comprador entregaba otra cosa en pago. Nada hay en nuestra legislación civil que se oponga á las conclusiones sostenidas por Pothier. Del propio modo opinan Marcadé, comentando el art. 1394 del Cód. Civ. francés, que concuerda con el 1323 del nuestro—tom. 6, pág. 184—y Ballez, núms. 345 y 346, quien además, cita la opinión de varios espositores del derecho francés.

1ª. Las convenciones son para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—arts. 718 y 1197 del Cód. Civ.

1ª. Esta es la sana y correcta interpretación del art. 21 del Cód. de Proc. Si el traslado conferido es de los previstos por la ley, el litigante que entrega el escrito sin las copias, incurre en la pena establecida, teniéndose por no presentado el escrito. Si el secretario lo recibe, no obstante la prohibición de ley, esa transgresión del empleado no puede mejorar la condición legal de la parte litigante. Esta es la jurisprudencia de la Cám. Comercial. La de lo Civil sustenta una tesis contraria. Véase *Inst.*, tom. 8, verb. *Copias*, nº 6; y tom. 7, mismo verb., nº 1. En



en que el traslado es obligatorio, hace procedente su dovolución—Com., tom. 5, pág. 265, Ser. 5ª (tom. 40).

2. **Copia** — El escrito de traslado obligatorio presentado sin copia, debe tenerse por no presentado — Com., tom. 5, pág. 285, Ser. 5ª (tom. 40).

3. **Copia** — La Municipalidad no está obligada á presentar en los juicios y á petición contraria copia de los informes que sus empleados espidan en los expedientes administrativos — Civ., tom. 14, pág. 120, Ser. 5ª (tom. 61).

4. **Copia** — En tanto no se entregue copia á todos los de-  
cuanto á la jurisprudencia comercial, puede verse el mismo verb., nº 1 del tom. 7.

2. Véase el número precedente.

3. Se pidió que la misma Municipalidad suministrase la prueba de la demanda del contrario. Esta petición constituye una violación de todas las leyes y principios que rigen la prueba. Un procedimiento contrario establecería el precedente de que la Mun. ú otra cualquiera parte en el juicio, pudiera ser obligada á suministrar á la contraria sus propios instrumentos, haciendo conocer hasta las opiniones que le ha dado su letrado. Los informes y dictámenes, son documentos que pertenecen á la Mun. y que ésta no está obligada á producir: *Edere non cogitur reus propter instrumenta actor ac intentionem fundandum*, dicen las leyes 1, 4 y 8, tít. 1º, lib. 2º, Cód. Rom.; y este principio ha sido consignado en nuestras propias leyes, como puede verse en las Leyes 17 y 39, tít. 2º, y en la 1ª, tít. 14, part. 3ª. Por otra parte, esos documentos no constituyen actos ó hechos jurídicos cuya existencia deba comprobarse, pues son únicamente actos de orden interno de carácter administrativo, cuya exhibición en juicio no podría decretarse por carecer de sanción en caso de resistencia.

4. El art. 21 del Cód. de Proc. dice que el que presenta una petición de que deba darse traslado, «acompañará en papel común y bajo su firma tantas copias cuantas sean las personas con quienes litigue». En el caso del sumario, todos los codemandados pidieron que no corriera término mientras no se les entregara las copias á todos, pues como eran varios y no había la copia correspondiente para cada uno, nadie quiso recibirla suya. El art. 81 del Cód. de Proc., como excepción establece que el término para contestar la demanda vence para todos cuando el término haya corrido para el que se encuentra á mayor distancia. Pero aquí todos los codemandados se hallaban presentes, el término debió correr separadamente para cada uno desde su notificación; sin embargo, á causa de la falta de las copias se declaró que no correría hasta que no se entregaran las correspondientes á todos.



mandados, no corre término para evacuar la demanda—Civ., tom., 17, pág. 314, Ser. 5ª (tom. 64).

5. **Copia**—Aun cuando no se acompañe copia de la revocatoria, no puede devolverse el escrito después de proveído—Civ., tom. 21, pág. 235, Ser. 5ª (tom. 68).

1. **Copias**—El auto que no hace lugar al pedido de copias en el juicio ejecutivo, es inapelable—Com., tom. 2, pág. 167, Ser. 5ª (tom. 37).

2. **Copias**—En el juicio ejecutivo, no puede fundar la nulidad, la falta de entrega de las copias de las obligaciones ejecutadas en tanto no se dé traslado al ejecutado—Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 5ª (tom. 56).

3. **Copias**—Si el original se manda entregar al interesado para contestar la demanda, no puede exigir la presentación de copias—Civ., tom. 19, pág. 63, Ser. 5ª (tom. 66).

4. **Copias**—El deudor al ser citado de remate no puede

5. Esta es la jurisprudencia sentada por la Exma. Cám. de lo Civ.—Véase los núms. 1 y 2.

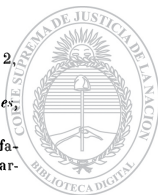
1. El ejecutado interpuso la apelación, siendo así que en el art. 505 del Cód. de Proc. se deniega el recurso.

2. La ley de la materia exige la presentación y entrega de las copias cuando se trata de un juicio ordinario en que el demandado debe evacuar el traslado de la demanda, pero tales copias no son un recaudo legal cuando la petición tiende á preparar el juicio ejecutivo por medio del reconocimiento de la firma puesta al pie de un documento privado. El ejecutante no está obligado por la ley á presentar copia, desde que de su petición no se va á correr traslado. El ejecutado no las necesita, porque con ellas no se va á ilustrar de que el documento cuyo reconocimiento, se le pide sea ó no auténtico. Los arts. 468 y 77 del Cód. de Proc. no pueden tener otro alcance para la parte ejecutada, porque de ser así, no guardaría armonía con los principios ni con el texto del art. 21 del ya cit. Cód. Véase el núm. 4.

3. A una demanda se acompañaron algunos planos, pidiendo el actor que se desglosaran y se entregaran al demandado bajo recibo, por cuanto su copia habría sido costosa. El Juez así lo resolvió. Peticia revocatoria no se hizo lugar, por cuanto la entrega de los planos originales al demandado surte los mismos efectos para su examen.

4. El art. 485 del Cód. de Proc., no establece que al citarse de remate al deudor se le han de acompañar las copias de la demanda, pues





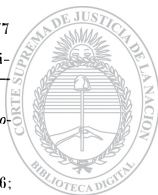
exigir que se le entreguen copias de la demanda — Com., t. 2, pág. 167, Ser. 5ª (tom. 37).

**Copias** — Véase: *Excepción de nulidad*, 5; *Excepciones*, 17; *Escrito*, 6 y 7; *Nulidad*, 46.

**1. Correcciones** — Los Defensores de menores tienen facultades correccionales sobre los que se encuentren á su cargo — Crim., tom. 3, pág. 20, Ser. 5ª (tom. 38).

únicamente dice que la notificación se hará por medio de cédula á diferencia del art. 77 del mismo Cód., que al hablar de la citación para contestar la demanda ordinaria, establece expresamente que se han de acompañar las copias, por cuya razón no debe exigirse un requisito que la ley no establece. Al citarse de remate no se da vista, únicamente al demandado, del primer escrito ó sea del de demanda sino de todo el expediente, desde que el art. 489 establece que también podrá alegar el deudor la nulidad de la ejecución por violación de las formas, de donde resultaría que para cumplir con esta formalidad, habría que acompañar copia de todo el expediente, lo cual es sencillamente un absurdo. No es esto solo: en muchísimos casos y para preparar la vía ejecutiva, se presenta escrito pidiendo reconocimiento de firma, y una vez verificado el reconocimiento, recién se entabla la acción ejecutiva pidiendo que estando reconocida la firma se libre el correspondiente mandamiento. Ahora bien; es evidente que la copia de este escrito poca ó ninguna luz podría dar al demandado acerca del juicio que se le entabla, que es lo único que se tiene en vista al conferirse á una persona traslado ó vista. La citación de remate tiene por objeto hacerle saber al ejecutado, que ha llegado la estación oportuna de presentarse al juicio, y no importa darle traslado de tal ó cual escrito determinado. Del texto del art. 21 del Cód. de Proc., se desprende que el acompañamiento de copias se refiere única y exclusivamente al caso en que se haya presentado escritos, pues dice en su segunda parte: «si no se exhibiesen las copias, el secretario no recibirá el escrito»; así pues, aun cuando la citación de remate estuviera comprendida entre aquellas á que se refiere el art. 77 del mismo Cód., no podría sostenerse que sería necesario acompañar las copias del escrito de demanda: pues si así fuera, no se podría recibir al iniciarse el juicio sin las copias respectivas, lo cual no está establecido ni por el Cód. ni por la jurisprudencia constante de los Tribunales.

1. Dos menores que estaban bajo la guarda del Defensor, y por causales legales ordenó la detención de los pupilos: éstos dedujeron el recurso de *habeas corpus*. No prosperó el recurso por cuanto el Defensor había hecho uso de facultades propias conferidas por las leyes — arts. 128, 129, incs. 4 y 7, y 132 de la Ley Org. de 12 de Nov. de 1886.



1<sup>a</sup>. **Corrección disciplinaria**—Si la recusación es evidentemente infundada, procede corrección disciplinaria—Civ., tom. 15, pág. 72, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 62).

**Corrección disciplinaria**—Véase: *Clasificación*, 1; *Abogado*, 1; *Apercibimiento*, 2; *Administración*, 3.

**Corredor**—Véase: *Bolsa de Comercio*, 1.

**Cosa**—Véase: *Contrato de mutuo*, 1; *Contrato de locación*, 6; *Depositario judicial*, 2.

1<sup>b</sup>. **Cosa demandada**—La falta de designación de la cosa demandada, hace procedente la excepción de defecto legal—Com., tom. 1, pág. 228, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>c</sup>. **Cosa juzgada**—Las resoluciones sobre escarcelación bajo fianza, no hacen cosa juzgada—Crim., tom. 1, pág. 93, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

2. **Cosa juzgada**—La sentencia recaída en el juicio co-

1<sup>a</sup>. Del examen del expediente que hizo el tribunal, consideró que el propósito de la parte era claro, de entorpecer la marcha regular del juicio, infringiendo la disposición del art. 53 del Cód. de Proc. Entre otras de las causales determinadas como que entorpecían el juicio, estaba la de que la parte había recusado al juez por haber emitido opinión antes de la citación de remate.

1<sup>b</sup>. Porque el art. 71 del Cód. de Proc., preceptúa que la demanda debe contener y expresar con toda exactitud la cosa demandada.

1<sup>c</sup>. Art. 395 del Cód. de Proc. Crim. Véase Inst., tom. 6, verb. *Cosa juzgada*, n° 3.

2. Entablada una querella se trajo *ad effectum videndi* otro expediente, del que resultó sobre el hecho delictuoso motivo de la nueva querella criminal, se había instruido el correspondiente sumario y pasado al juez correccional respectivo. Éste, oída la acusación fiscal y defensa del acusado, dictó sentencia definitiva condenándole a la pena de un mes de arresto. El juez dijo que terminado así dicho juicio por sentencia firme, existe al respecto cosa juzgada y no es posible admitir la iniciación de un nuevo proceso sobre el mismo hecho, sin violar el precepto del art. 7, Cód. de Proc. Crim., que no es más que la repetición del aforismo del derecho criminal *non bis in idem*—Ilaus, núms. 1275 y 1291.—Tal excepción procede aun cuando en el juicio correccional no haya intervenido personalmente la víctima como querellante, pues habiéndose juzgado el delito contradictoriamente con el Min. Público, que es el representante de la sociedad, los efectos del fallo son *erga omnes* y alcanzan también en lo penal al mismo damnifi-



rreccional, hace cosa juzgada para el damnificado y le inhabilita para querellarse—Crim., t. 4, p. 230, Ser. 3ª (tom. 39).

3. **Cosa juzgada**—La sentencia de trance y remate que declara inhábil el título, no hace cosa juzgada en el juicio ordinario—Civ., tom. 19, pág. 274, Ser. 3ª (tom. 66).

4. **Cosa juzgada**—La declaración de nulidad de un acto jurídico no hace cosa juzgada para los sucesores singulares de los que han intervenido—Civ., t. 22, p. 229, Ser. 5ª (t. 69).

cado que no se mostró parte en la causa—Dalloz, véase *Chose jugée*, núm. 496; Bonnier, *Tratado de las pruebas*, núm. 908. — Si á esto se agrega la doble circunstancia de que la víctima fué citada en el primer proceso y compareció á prestar declaración como damnificado ante el comisario instructor del sumario de prevención, y que según constancias de autos, la madre y esposa del mismo damnificado se presentaron denunciando la agravación de las heridas, denuncia que fué debidamente atendida por el juez de la causa quien ordenó al médico de los Trib. el reconocimiento del lesionado, y sólo cuando este facultativo le informó confirmando el diagnóstico y el pronóstico del médico de policía, respecto de la levedad y pronta curación de las lesiones—menos de 7 días,—procedió á convocar al respectivo juicio verbal para oír la acusación y defensa del reo. Todo esto demuestra que el querellante tuvo suficiente y oportuno conocimiento del proceso iniciado con motivo del hecho querellado y que en consecuencia pudo y debió asumir el rol de acusador particular en dicho juicio promoviendo la declinatoria de jurisdicción ó haciendo valer todos los demás derechos que la ley le acuerda como damnificado, debiendo culparse á sí mismo si por su inacción quedó consentida la sentencia del Inferior en el primer juicio que puso término al espresado proceso. Aparte de que el art. 200 del Cód. de Proc., funda suficientemente la oportunidad de la resolución de cosa juzgada, es también de advertirse que ésta puede hacerse valer previamente en cualquier estado del sumario—art. 444, inc. 4º y 443, Cód. de Proc.—y que tal escepción es en materia criminal de orden público, y puede ser suplida de oficio—Dalloz, palabra citada, núm. 396.

3. El art. 500 del Cód. de Proc. establece que cualquiera que sea la sentencia en el juicio ejecutivo, tanto el actor como el demandado pueden promover el correspondiente juicio ordinario, quedando su derecho á salvo siempre á este efecto. En el juicio ejecutivo las resoluciones no causan estado. Así resulta igualmente de los arts. 325 y 541.

4. Véase la nota del verb. *Acto jurídico*, núm. 2, donde está comprendido el principio sentado en el sumario.



5. **Cosa juzgada** — La inculpabilidad que resulta del sobreseimiento definitivo en la jurisdicción criminal, no hace cosa juzgada ante la civil, donde puede justificarse la culpa del acusado—Civ., tom. 22, pág. 316, Ser. 5ª (tom. 69).

**Cosa juzgada** — Véase: *Honorarios*, I y 33; *Excepción de cosa juzgada*, 1.

1ª. **Cosa vendida** — El vendedor está obligado á entregar la cosa vendida, ó á devolver el precio recibido si fuese imposible dar la posesión al comprador—Civ., tom. 21, pág. 204, Ser. 5ª (tom. 68).

1ª. **Costas** — Reconocida por el demandado la obligación en que se funda el actor, debe ser condenado á su cumplimiento con costas—Com. tom. 1, pág. 351, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Costas** — No procede condenación en costas si no existe temeridad—Com. tom. 2, pág. 415, Ser. 5ª (tom. 37).

3. **Costas** — La falta de malicia y temeridad, hace improcedente la condenación en costas—Com., tom. 3, pág. 40, Ser. 5ª (tom. 38).

4. **Costas** — Si no existe temeridad ó malicia, no procede la condenación en costas—Com., t. 3, pág. 64, Ser. 5ª (t. 38).

5. Esta cuestión fué resuelta por mayoría, opinando en sentido del sumario los Dres. González del Solar, Giménez y Molina Arrota. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase verb. *Acto ilícito*, núm. 3.

1ª. Es la acción *emptio*. que consagra el art. 1412 del Cod. Civ.

1ª. Art. 505 del Código Civil.

2. La Cám., exoneró de las costas al vencido «en atención á la naturaleza de la cuestión debatida» la que consistió en resolver si el apoderado ó representante de una persona jurídica está ó no obligado á absolver posiciones. El art. 221 del Cód. de Proc., deja amplia libertad á los tribunales para exonerar de las costas al vencido. Esta facultad ha quedado restringida en cuanto á los incidentes, pues el art. 24 de la ley n° 4128 dice que «las costas del incidente se impondrán al vencido».

4. En este caso la Cám. dijo «que teniendo en cuenta la prueba rendida por la parte demandada que excluye completamente la idea de que haya malicia ó temeridad en su conducta, es el caso de aplicar la disposición del art. 221 del Cód. de Proc.»



5. **Costas**—Si la escepción es temeraria procede la condenación en costas—Com., tom. 3, pág. 70, Ser. 5ª (tom. 38).

6. **Costas**—Procede la condenación en costas, si la acción instaurada carecía de fundamento legal—Com., tom. 3, pág. 172, Ser. 5ª (tom. 38).

7. **Costas**—Debe condenarse en las costas del incidente al acreedor que se opone por escrito á la concesión de moratorias—Com., tom. 3, pág. 301, Ser. 5ª (tom. 38).

8. **Costas**—No procede condenación en costas si la competencia es potestativa del escepcionante—Com., tom. 3, pág. 304, Ser. 5ª (tom. 38).

9. **Costas**—No debe condenarse en costas al que desiste, si la jurisdicción es potestativa del que opuso la escepción—Com., tom. 3, pág. 299, Ser. 5ª (tom. 38).

10. **Costas**—No debe condenarse en costas al acusado, si no consta que haya imputado al querellante el delito que funda la acción—Crim., tom. 3, pág. 341, Ser. 5ª (tom. 38).

11. **Costas**—La oposición indebida del asegurador al pago

---

6. Si no hay razón para litigar no hay razón para exonerar de las costas, art. 221 Cód. de Proc.

7. Porque el art. 1589 de la ley vigente cuando existían las moratorias, solo autorizaba á los acreedores á oponerse verbalmente. La esposición escrita era inadmisibile por no ajustarse á la ley. La incidencia así suscitada lo fué contra derecho, y por consiguiente no hay razón para esceptuar de las costas á la parte vencida.

8. Á este respecto hay jurisprudencia contradictoria—Véase Inst. t. 7 ver. *Excepción de incompetencia*, núm. 9.

9. Porque en este caso no puede atribuirse á la parte, ni malicia, ni temeridad.

10. Un querellado por calumnia dijo que no había hecho imputación alguna al querellante, y que cualquiera frase que éste conceptuase ofensiva, desde luego la retiraba. El querellado dijo que en vista de la espiación dada desistía de llevar la acusación adelante, y exigía del acusado el pago de las costas. No se hizo lugar porque no podía considerarse como una retractación la manifestación hecha, ni en consecuencia aplicarse lo dispuesto en el art. 595 del Cód. de Proc. Crim.

11. Se dijo que la lectura de los autos, y especialmente de la demanda y contestación, demostraban que la parte no había tenido



del importe del siniestro, lo hace pasible de las costas del juicio—Com., tom. 4, pág. 5, Ser. 5ª (tom. 39).

12. **Costas**—Rechazada la demanda el demandado debe ser condenado en las costas que por su rebeldía haya causado; las demás deben ser abonadas en el orden causado—Com., tom. 4, pág. 104, Ser. 5ª (tom. 39).

13. **Costas**—Es ineludible la condenación en costas al vencido, si no podía ignorar su falta de derecho para accionar—Com., tom. 4, pág. 188, Ser. 5ª (tom. 39).

14. **Costas**—El rechazo de la propuesta de someter el asunto á peritaje, no basta para condenar en costas al proponente—Com., tom. 4, pág. 222, Ser. 5ª (tom. 39).

15. **Costas**—El querellante no está obligado al pago de diligencias periciales pedidas por el acusado sin previa condenación en costas—Crim., tom. 4, pág. 253, Ser. 5ª (t. 39).

16. **Costas**—Procede la exoneración de costas si por las circunstancias de la causa resulta que el vencido tuvo razón derecha para accionar—Com., t. 4, p. 274, Ser. 5ª (tom. 39).

17. **Costas**—La revocación del embargo importa la condenación en costas aun cuando espresamente no se resuelva el punto—Com., tom. 4, pág. 274, Ser. 5ª (tom. 39).

18. **Costas**—Si al contestar el traslado de la escepción de

---

razón para litigar, pues todos los fundamentos opuestos á la acción decidida habían sido desestimados en la sentencia.

12. Art. 434 del Cód. de Procedimientos.

13. Porque no hay vínculo de derecho entre el perito que ejecuta el trabajo en beneficio de quien lo propone y su contraparte. Las reglas que rigen los contratos establecen que sus consecuencias rigen para y entre los que directamente intervienen en ellos. El perito tiene acción contra aquel á quien ha prestado sus servicios. Según se desprende de las disposiciones consagradas en el Apéndice del Cód. de Proc., la forma sumaria de pago de los honorarios solo rige entre la parte y su cliente.

17. La condenación en costas á la parte que solicitó el embargo es una consecuencia de la responsabilidad que espresamente impone el art. 444 del Cód. de Proc., en cuyo caso debe hacerse efectiva aun cuando no lo diga espresamente el auto revocatorio.

18. En contra, puede verse el tom. 5, verb. *Costas*, n° 51.



defecto legal el actor aclara la demanda, no procede condenación en costas—Com., tom. 4, pág. 390, Ser. 5ª (tom. 39).

19. **Costas**—Justificado que la suma reconocida es la que verdaderamente se adeuda, no procede condenación en costas al demandado—Com., tom. 5, pág. 14, Ser. 5ª (tom. 40).

20. **Costas**—La reforma de la sentencia importa dejar subsistente la condenación en costas que ella contuviese y exonera de las de 2ª Inst. al que interpuso con éxito el recurso—Com., tom. 5, pág. 259, Ser. 5ª (tom. 40).

21. **Costas**—El pago hecho antes del requerimiento exime al deudor de las costas de la ejecución—Com., t. 5, p. 284, Ser. 5ª (tom. 40).

22. **Costas**—Siendo obligatoria en los pronunciamientos

---

19. Porque el demandado, en este caso, tuvo razón derecha para litigar, y su oposición no puede considerarse ni temeraria ni maliciosa. Si la demanda no prospera, es de aplicación el precepto del art. 221 del Cód. de Proc. Puede verse la ley 43, tít. 2, Part. 3ª, que trata de la *plus petitio*.

20. La condenación al pago de costas en 1ª Inst. existe de pleno derecho cuando la parte vencedora la ha solicitado, así resulta de los términos del art. 221 del Cód. de Proc. y lo enseña Caravantes con los autores que él cita—Proc. Judiciales, núm. 1103.—La exoneración de costas es la excepción á la regla y solo procede cuando expresamente se ha decretado en el pronunciamiento. En 2ª Inst. la condenación es también de pleno derecho en el caso que la sentencia sea confirmatoria en todas sus partes de la de 1ª—art. 274, Cód. de Proc.,—pero no si fuese revocatoria y reformatoria por argumento *a contrario sensu* y disposición de la ley 1ª, tít. 22, lib. 4º.

21. Doctrina que surge *a contrario sensu*, de la disposición del art. 483 del Cód. de Proc.

22. La obligación del juez, de resolver sobre el pago de las costas procesales, no nace en el procedimiento criminal de lo pedido y discutido por las partes, sino de los términos expresos y preceptivos del art. 143 del Cód. de Proc. Crim. que lo establece como uno de los requisitos que necesariamente debe contener todo auto ó sentencia que ponga fin á la causa ó á un incidente. Esta conclusión se desprende no solo del carácter imperativo de la disposición referida, sino también de la generalidad de sus términos. Estableciendo ella que en todo acto ó sentencia *deberá* resolverse sobre el pago de las costas, es forzoso entender que esa resolución debe dictarse en todos los casos, haya ó no petición



criminales la imposición de costas al vencido, no causa nulidad la condenación sin pedido de parte—Crim., tom. 5, pág. 303, Ser. 5ª (tom. 40).

23. **Costas**—Reconocida por el ejecutado la procedencia de la escepción, la condenación en costas es ineludible—Civ., tom. 9, pág. 33, Ser. 5ª (tom. 56).

24. **Costas**—La estimación elevada de los daños y perjuicios que efectivamente se han sufrido, no importa «plus-petition» ni temeridad ó malicia que haga pasible al demandante, vencido, del pago de las costas—Civ., t. 9, p. 47, Ser. 5ª (t. 56).

25. **Costas**—Si en la demanda el actor no solicitó conde-

---

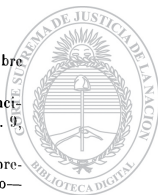
de parte, desde que no es permitido distinguir donde la ley no distingue. Concorre á fijar esta interpretación del texto legal, el art. 496 del mismo Cód., que impone también la obligación de resolver sobre el pago de las costas al pronunciar sentencia definitiva, sin hacer depender esa resolución de que el punto haya sido objeto del juicio, ó de que la parte lo haya pedido, como lo exige cuando se trata de las demás responsabilidades civiles y de la calificación del carácter de la acusación. Finalmente, el espíritu de otras disposiciones del mismo Cód. como las que se contienen en los arts. 178, inc. 4º, 378, 379 y 411, demuestra á las claras que en procedimiento criminal no es necesaria petición de parte para que el juez asegure las responsabilidades pecuniarias que pueden pesar sobre los procesados. Estando, pues, el juez, no solo autorizado sino obligado, á pronunciarse respecto del pago de las costas, la resolución sobre este punto aun sin petición de parte no puede dar lugar á nulidad alguna, siendo por consecuencia improcedente el recurso que fundado en tal causa puede deducirse.

23. Citado de remate el ejecutado opuso escepción de incompetencia con la que se manifestó conforme el ejecutante. El juez hizo lugar á la escepción con costas. Esta imposición es perfectamente procedente en presencia de la terminante disposición del art. 507 del Cód. de Proc. Este artículo dispone que las costas del juicio ejecutivo serán todas á cargo de la parte que sea vencida en último grado.

24. De acuerdo con la jurisprudencia constante de nuestros tribunales. Véase Inst., t. 8, verb. *Costas*, núm. 58, 72 y 75; y tom. 7, mismo verb., núm. 23.

25. El art. 221 del Cód. de Proc. establece que las costas serán á cargo del vencido, *si esta lo solicitare*. Por otra parte el art. 216 establece que la sentencia debe contener decisión expresa y positiva *sobre las acciones deducidas en el juicio*. Si la cuestión de las costas no ha sido materia de petición, el juez no puede pronunciarse sobre ese punto que





nación en costas, el juzgado no debe pronunciarse sobre ellos—Civ., tom. 9, pág. 132, Ser. 5ª (tom. 56).

26. **Costas**—No procede condenación en costas al vencido, si resulta en parte reconocido su derecho—Civ., tom. 9, pág. 140, Ser. 5ª (tom. 56).

27. **Costas**—Si ninguna de las partes ha logrado sus pretensiones, las costas deben pagarse en el orden causado—Civ., tom. 9, pág. 197, Ser. 5ª (tom. 56).

28. **Costas**—No procede condenación en costas al vencido, si no existe temeridad en la acción deducida—Civ., t. 9, pág. 240, Ser. 5ª (tom. 56).

29. **Costas**—Las costas forman parte integrante de lo que debe pagar el vencido en caso de prosperar la acción de daños y perjuicios—Civ., tom. 9, pág. 286, Ser. 5ª (tom. 56).

30. **Costas**—No procede condenación en costas si el demandado manifiesta su conformidad con el precio que determinen peritos, por no haberlo convenido para la locación de servicios—Civ., tom. 9, pág. 317, Ser. 5ª (tom. 56).

31. **Costas**—Si el actor no obtuvo todo lo demandado, no procede condenación en costas al vencido—Civ., tom. 9, pág. 317, Ser. 5ª (tom. 56).

32. **Costas**—Debe exonerarse al vencido, de las costas, si

---

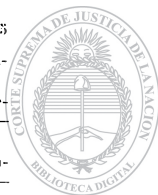
no ha sido materia de la demanda. De acuerdo con este caso puede verse t. 6, p. 377, Ser. 2ª, Jur. Civ., é Inst., t. 8, verb. *Costas*, núm. 45.

26. Porque en este caso su oposición era justificada, y entonces el juez puede hacer uso del derecho que le acuerda la 2ª parte del artículo 221 del Cód. de Proc., exonerando de las costas al vencido por encontrar mérito bastante al efecto.

29. Véase la nota del núm. 24.

30. La Cám. dijo: «Pienso que el demandado no ha incurrido en evidente malicia ó temeridad que lo haga pasible de la pena de costas. De autos más bien se desprende que el reo ha tenido razón probable para litigar, y entonces no existe base para la condenación en costas. Es de aplicarse al presente la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc., según la cual los jueces pueden eximir de las costas á la parte vencida, siempre que encontrasen motivo bastante para ello».

32. Al resolver esta cuestión la Cám. dijo «que el actor había pedido la escrituración de un contrato de compraventa de un inmueble de que



por ser equívoca la demanda pudo incurrir en error al contestarla—Civ., tom. 10, pág. 223, Ser. 3ª (tom. 37).

**33. Costas**—Si se considera que la parte ha tenido derecho probable para litigar, no procede condenación en costas—Civ., tom. 10, pág. 231, Ser. 3ª (tom. 37).

**34. Costas**—No procede condenación en costas si ninguno de los ligantes consigue en absoluto lo que pretendía—Civ., tom. 10, pág. 247, Ser. 3ª (tom. 37).

**35. Costas**—La declaración que sobre pago de las costas

instruía un boleto privado presentado. Los demandados pidieron el rechazo de la demanda, fundándose, entre otras razones, en la de que el referido boleto no daba al actor otro derecho que el de exigir que se redujera el mismo á escritura pública, con arreglo á los arts. 1185 y 1187, Cód. Civ., y jurisprudencia de este Trib. El Inferior ha fallado la causa, condenando á los demandados á elevar á escritura pública el boleto, y á pagar las costas del juicio. El demandado se ha alzado de la resolución en lo referente á las costas solamente, y es sobre este punto que la Cám. tiene que pronunciarse. Estudiando el escrito de demanda, se ve desde luego, que es un tanto equívoco. Es cierto que el actor cita para fundar su acción los arts. 629, 1185 y 1187, Cód. Civ., lo que haría suponer que sólo se pide que se mande elevar á escritura pública el boleto; pero es que en el *petitum* se solicita que se ordene á los demandados procedan en un término perentorio á estender las escrituras á que se comprometieron por el boleto adjunto, y que en caso contrario se ordene la rescisión del convenio, lo que haría presumir que lo que se persigue en el presente juicio es el cumplimiento del contrato de compraventa á que se refiere el boleto. Es en este último sentido que lo entendieron los demandados, y en ese concepto formularon su oposición, sus alegaciones y defensas. Pienso que dados estos antecedentes, los demandados han tenido razón probable para litigar, y que no son pasibles de la pena de las costas, que solamente debe pesar sobre los litigantes evidentemente temerarios.

**35.** Á este respecto no puede decirse que en el fallo de la Cám., se hubiese resuelto este punto concreto. El orden en que votaron los camaristas y la forma en que lo hicieron es verdaderamente confuso. Pero lo cierto es que hubieron opiniones distintas sin poderse establecer quienes votaron en el sentido del sumario y quienes en contra. Las dos teorías pueden resumirse así: los que están en contra del sumario dicen que «no es lícito al actor volver sobre lo resuelto en lo criminal donde el demandado fué exonerado de las costas». Cuando se dictó el auto de sobreseimiento, se declaró espresamente que no se condenaba en costas al querellante, «por no encontrar mérito para ello». Ese auto



contenga la sentencia absolutoria en la causa criminal, no enerva el derecho del calumniado para cobrar como perjuicios las sumas pagadas en la defensa—Civ., tom. 11, pág. 92, Ser. 5ª (tom. 58).

36. **Costas**—Justificado que los herederos tenían pleno conocimiento de la obligación, la testamentaria debe ser condenada al pago de las costas—Civ., tom. 11, pág. 105, Ser. 5ª (tom. 58).

37. **Costas**—No estando lós herederos obligados á reco-

fué consentido por el procesado, y por consiguiente, justo ó injusto, arreglado ó no á derecho, no es posible ahora á título de que se trata de un juicio civil, provocar una declaración contraria, porque sería atentatoria de la cosa juzgada, pues en definitiva lo que se pretende es pasar por encima de aquella declaración, desde que los gastos que se cobran son precisamente los causados en la de 1ª instancia del juicio criminal. Fundando otro camarista su voto en el sentido del sumario, dijo: «Dejando de lado la cuestión largamente debatida entre los autores desde Merlin y Toullier sobre el principio de que la cosa juzgada en lo criminal ya con respecto á la condenación del acusado ó á su absolución no puede alegarse en el juicio civil, desde que ha sido espresamente consagrado por nuestra legislación—arts. 1102 y 1103 del Código Civ.—pienso que la sentencia del Superior se ajusta estrictamente á derecho. Constando de autos la querella criminal promovida por falsificación de un documento y la absolución del querrellado y no pudiendo como he dicho, alegarse en este juicio cosa alguna sobre el hecho que ha motivado el pronunciamiento en lo criminal, es para mí incuestionable el derecho del actor para reclamar como ofendido cuanto hubiere gastado en su defensa y todas las ganancias que dejó de tener con motivo de aquella acusación, como lo autoriza al efecto el art. 1090 del Cód. Civ.»

36. El heredero que era mayor de edad dijo al contestar la demanda que «puede ser exacto que se le deba al Nuevo Banco Italiano la suma que reclama; pero que como se trata de una deuda del causante de la testamentaria, no puede manifestar su conformidad, pues sus poderdantes no tienen conocimiento de dicho crédito», pero en el curso del juicio se demostró acabadamente que tenía pleno conocimiento de la deuda. Si el demandado hubiese confesado desde el principio lo verdadero habría evitado los gastos del juicio que su negativa debía necesariamente ocasionar.

37. En el escrito presentado por el heredero no se desconoció en absoluto la existencia del crédito; limitóse á manifestar que él ninguna noticia tenía al respecto, debiendo, por lo tanto el actor solicitar las



nocer la firma del causante, su actitud meramente pasiva en el juicio no importa temeridad ni malicia que les haga pasibles de las costas—Civ. tom. 11, pág. 109, Ser. 5ª (tom. 58).

38. **Costas**—Siendo obligatoria la prueba de la deuda si existen menores, no procede imposición de costas á la testamentaria—Civ., tom. 11, pág. 181, Ser. 5ª (tom. 58).

39. **Costas** -- La cantidad que por costas debe percibir la parte vencedora puede ser embargada por terceros acreedores personales; los que han devengado honorarios deben deducir tercería—Civ., tom. 11, pág. 387, Ser. 5ª (tom. 58.)

40. **Costas**—El pago antes del requerimiento exonera de las costas—Civ., tom. 11, pág. 409, Ser. 5ª (tom. 58).

---

medidas necesarias para acreditar la autenticidad del documento acompañado con la demanda. Esta contestación tiene aplicación satisfactoria refiriéndose á negocios que no son personales y cuando bien puede suceder que los libros y papeles del causante no suministraren antecedente alguno acerca de la deuda reclamada, y toda vez que es de ley que los sucesores del causante no están obligados á declarar reconociendo ó negando la firma, pudiendo limitarse á manifestar que no saben si la firma es ó no de su autor — art 1032 del Cód. Civ. — Por lo demás, nada en el juicio revelaba un poder malicioso de parte del demandado, quien no obstaculizó en lo mínimo las diligencias que el actor creyó del caso practicar á fin de dejar establecida la legitimidad de su crédito. Entonces, en manera alguna procedía la condenación en las costas, siendo, por el contrario, de aplicación estricta la excepción á la regla consagrada en el art. 221 del Cód. de Proc.

38. Habiendo menores interesados la comprobación judicial de todo crédito pasivo es de prescripción legal, puesto que los representantes necesarios ó legales de los menores no tienen facultad para reconocer deudas de éstos.

39. La acción para obtener el pago de las costas en que es condenado un litigante vencido, solo puede ser ejercida por la parte vencedora. Ella no puede ser ejercida ni por el procurador personalmente en su nombre propio, ni por el abogado, por no existir entre éstos y el vencido relación alguna de derecho. Si aquéllos desean cobrar sus honorarios deben dirigir su acción contra su cliente que es quien utilizó sus servicios. En estos casos la tercería es el único medio establecido por la ley para obtener la declaratoria de pago preferente.

40. Véase el núm. 21.



41. **Costas**—El desistimiento responsabiliza por las costas causadas hasta que se presentó el escrito—Civ., tom. 12, pág. 3, Ser. 5ª (tom. 59).

42. **Costas**—Si la demanda se dió por contestada en rebeldía, no procede condenación en costas contra el demandante vencido—Civ., tom. 12, pág. 64, Ser. 5ª (tom. 59).

43. **Costas**—Si resulta temeraria la defensa del demandado, debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., t. 12, pág. 206, Ser. 5ª (tom. 59).

44. **Costas**—No procede condenación en costas contra la testamentaria, si la obligación debía justificarse—Civ., t. 12, pág. 224, Ser. 5ª (tom. 59).

45. **Costas**—Las costas son de cargo del vencido que ha litigado con evidente temeridad—Civ., t. 12, p. 237, S. 5ª (t. 59).

46. **Costas**—Aun cuando el actor sea condenado en las

---

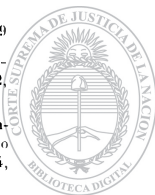
41. En esas costas están comprendidos los honorarios del curador provisorio. El sumario está de acuerdo con la jur. Véase *Inst.*, tom 8, verb. *Costas*, n° 41.

42. La sentencia debe necesariamente referirse al cuasi contrato formado por la litiscontestación. Así, pues, cuando en la demanda no se piden las costas, por más de rigor que sea su imposición, el juez no puede decretarlas. Igual regla debe observarse cuando en la contestación no se solicitan, y mucho más cuando el traslado de la demanda se da por evacuado en rebeldía, como había sucedido en el presente caso.

44. La viuda del causante se limitó á contestar, que desconocía el crédito, porque no le constaba su existencia, sobre todo, cuando el documento presentado no estaba firmado por el extinto en persona. Esta actitud de la viuda no puede hacerla acreedora á la condenación en costas, pues aun en los casos de documentos firmados personalmente, los sucesores del que aparece firmando pueden limitarse á declarar que no saben si la firma es ó no de su autor—art. 1032 del Cód. Civ.—No puede existir temeridad por su parte, y debe eximirse de las costas, aplicando la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc.

45. Para que un litigante que pierde el pleito pueda escapar al dictado de temerario, y quedar á salvo de las costas, no mediando malicia, preciso es que aduzca probanzas pertinentes y que constituyan por lo menos semiplena prueba.

46. Porque en este caso la contrademanda no prosperó en su totalidad, siendo principio inconcuso de procedimiento que cuando no se obtiene todo lo pedido, el vencido no es responsable por las costas.



costas de la demanda, no puede ser responsable de la recon-  
vención, si se le exigía más de lo que era justo—Civ., tom. 12,  
pág. 244, Ser. 5ª (tom. 59).

47. **Costas**—Debe rechazarse la acción, con especial con-  
denación en costas, si se exige el cumplimiento del convenio  
en forma distinta á la estipulada—Civ., tom. 12. pág. 274,  
Ser. 5ª (tom. 59).

48. **Costas**—Los condenados en costas no son solidarios;  
deben prorratearse—Civ., tom. 12. pág. 427, Ser. 5ª (tom. 59).

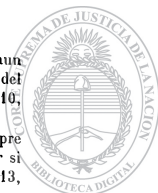
49. **Costas**—No procede condenación en costas si solo se  
acepta una de las escepciones opuestas—Civ., tom. 13,  
pág. 72, Ser. 5ª (tom. 60).

---

47. Porque en este caso el vencido no tuvo razón probable para liti-  
gar—art. 221 del Cód. de Proc.

48. La obligación mancomunada es solidaria, solo cuando resulta del  
título constitutivo ó de la ley—art. 699 del Cód. Civ.—No hay ley alguna  
en que pueda fundarse la solidaridad de la condenación en costas. El  
Cód. de Proc. no establece que la imposición de las costas tenga lugar  
por vía de pena, no obstante las doctrinas y leyes anteriores que decla-  
raban procedente la condenación en costas. Solamente en los casos de  
malicia y temeridad, lo que quizá induciría la opinión de que era una  
pena de la temeridad ó malicia. El art. 220 del Cód. cit. adoptó una re-  
dacción en que aparecen deliberadamente escludidas aquellas dos cir-  
cunstancias, y consignó simplemente esta regla general: «la parte que  
fuese vencida en el juicio, deberá pagar todos los gastos de la contra-  
ria, si ésta lo solicitare». La segunda parte del mismo art. faculta á los  
jueces para atenuar la dureza de esta regla cuando lo considerase justo.  
Todo lo que se haya dicho después de la sanción del Cód. de Proc., so-  
bre requerirse malicia ó temeridad para que proceda la condenación en  
costas, no es otra cosa que poco respeto hacia el texto legal inspirado  
en estas sabias palabras de Dalloz: «Las costas se fundan en el contrato  
judicial verificado entre las partes por el hecho de presentarse ante la  
justicia para obtener sus derechos, por lo cual se obligan á pagar lo  
juzgado, porque *nemo laedere videtur qui sue jure utitur*». Por otra parte,  
para que fueran aplicables al caso los arts. 1081 y 1082 del Cód. Civ.,  
sería necesaria la existencia de un *acto ilícito*, que no puede consti-  
tuirlo la defensa ni el uso de los recursos establecidos por la ley mis-  
ma. Véase Caravantes, párrafos 1101 y 1102 del libro II.

49. Se opusieron conjuntamente las escepciones de litispendencia y  
arraigo: solo prosperó esta última.



50. **Costas**—La condenación en costas es ineludible aun cuando el vencido alegue la mala dirección como motivo del resultado adverso á sus pretensiones—Civ., tom. 13, pág. 110, Ser. 5ª (tom. 60).

51. **Costas**—Las costas son de cargo del vencido siempre que no justifica la negativa de lo aseverado por el actor si ella importaba la afirmación de un hecho—Civ., tom. 13, pág. 118, Ser. 5ª (tom. 60).

52. **Costas**—El error del demandante, si le es imputable, no basta para exonerarlo de la condenación en costas—Civ., tom. 13, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 60).

53. **Costas**—El demandante que careciendo de derecho para demandar continúa la acción, no obstante la conformidad del deudor, debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., tom. 13, pág. 411, Ser. 5ª (tom. 60).

54. **Costas**—Son de cargo del vencido cuando no existe motivo legal de exoneración—Civ., t. 14, p. 314, Ser. 5ª (t. 61).

55. **Costas**—Puede el vencido ser exonerado de las costas si de autos resulta mérito legal para ello—Civ., tom. 14, pág. 328, Ser. 5ª (tom. 61).

56. **Costas**—Si el vencido tuvo razón probable para litigar, debe ser exonerado de las costas del juicio—Civ., t. 14, pág. 352, Ser. 5ª (tom. 61).

57. **Costas**—Son de cargo del vencido si no existe causa legal de exoneración—Civ., t. 14, p. 380, Ser. 5ª (tom. 61).

---

50. No es una causa para exonerar al vencido de la aplicación del principio general sentado en el art. 221 del Cód. de Proc.

51. El fundamento capital de la sentencia en lo principal fueron los arts. 1574 y 1575 del Cód. Civ., en cuya virtud tuvo que presumirse la mala fe del vencido, por mandato expreso de la ley. En tal concepto era ineludible la regla general contenida en el art. 221 del Cód. de Procedimientos.

55. Es una facultad discrecional conferida á los jueces en la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc. A causa de esta excepción que la ley ha querido establecer para casos muy especiales, la regla general de que el vencido debe pagar las costas del contrario, ha pasado á la categoría de una excepción, siendo hoy el principio general la no imposición de las costas al vencido.



58. **Costas**—Son de cargo del vencido; la excepción únicamente procede cuando se ventilan cuestiones de derecho ó complicadas de hecho, ó cuando aparezca que se ha tenido probable derecho para litigar—Civ., t. 14, p. 403, Ser. 5ª (t. 61).

59. **Costas**—Dada la prerrogativa que la ley concede á los herederos para no reconocer la firma del causante, no procede la condenación en costas á la testamentaria aun cuando nieguen en absoluto la existencia de la obligación—Civ., t. 14, pág. 412, Ser. 5ª (tom. 61).

60. **Costas**—No procede condenación en costas al vencido si ha presentado pruebas que demuestran que tuvo razón probable para litigar. — Civ., tom. 14, pág. 418, Ser. 5ª (t. 61).

61. **Costas**—No procede condenación en costas al demandado si no prospera la demanda en todas sus partes. — Civ., tom. 15., pág. 16, Ser. 5ª (tom. 62).

62. **Costas**—Si la tercera se ha deducido después de la

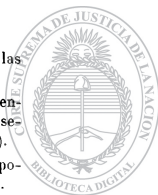
---

58. La Cám. dijo: «El art. 221 del Cód. de Proc. establece como regla que el vencido debe satisfacer las costas del contrario si éste lo solicitare. Esa condenación ha sido pedida en el escrito de contestación á la demanda, y ni en la naturaleza del juicio, ni en circunstancia alguna del proceso se encuentra mérito para que se haya hecho excepción á la regla del art., excepción que únicamente procede cuando se ventilan cuestiones de derecho ó complicadas de hecho, ó cuando aparezca que se ha tenido probable razón para litigar.

59. Los sucesores del suscriptor de un pagaré ejercitaron el derecho que les acuerda espresamente la ley—arts. 1032 y 1033 del Cód. Civ.,—exigiendo la comprobación plena y legal de la autenticidad del documento que se les cobraba. Si no están obligados á manifestar categóricamente si son ó no exactos los hechos aseverados en la demanda, su actitud en el juicio no autoriza la rigurosa aplicación del art. 221 del Cód. de Proc., desde que el actor estaba legalmente forzado á producir la prueba que había rendido para justificar su crédito.

62. La causa fué sentenciada de remate, justipreciado el bien embargado, y vendido finalmente en remate público con las formalidades correspondientes. En este estado, y aprobada ya por el Juez de la ejecución la venta, se presentó la esposa del ejecutado, deduciendo tercera escluyente del dominio del bien denunciado como de propiedad de su cónyuge. Esta demanda fué resuelta por el Inferior en términos favorables al derecho de la demandante, consinténdola el acreedor que fué la parte vencida en el juicio. Causa desde luego extraña la actitud





venta del bien, el ejecutante no debe ser condenado en las costas. — Civ., tom. 15., pág. 37, Ser. 5ª (tom. 62).

63. **Costas** — No procede regulación, aun cuando la sentencia sea confirmada con costas, si no se han causado en segunda instancia. — Civ., tom. 15, pág. 112, Ser. 5ª (t. 62).

64. **Costas** — El desistimiento hace ineludible la imposición de costas. — Civ., tom. 15, pág. 144, Ser. 5ª (t. 62).

65. **Costas** — Mientras no se declare la solidaridad, los ejecutados solo responderán por la parte de costas y gastos que proporcionalmente les correspondan. — Civ., tom. 15, pág. 186, Ser. 5ª (tom. 62).

66. **Costas** — Aun cuando se declare procedente la tercería, no procede condenación en costas al ejecutante, si de autos resulta su buena fe. — Civ., t. 15, p. 237, Ser. 5ª (t. 62).

---

de la tercerista, dejando transcurrir mucho tiempo entre la notificación de la sentencia de remate y la presentación de su escrito—demanda de tercería — que fué próximamente un año; producirse gastos inútiles que han podido consumir todo el caudal del pleito, y consentir, por último, la venta pública del inmueble antes de hacer efectivos sus derechos. Ni podría excusarse en la ignorancia de estos hechos, por la proximidad de sus vínculos con el deudor y la intervención personal que había tenido en los procedimientos del juicio.

64. Véase el núm. 41.

65. Se inició demanda ejecutiva por cobro de honorarios contra « las partes en litigio, para que por iguales partes abonasen la suma de 300 pesos, importe de la regulación ». En este concepto fué tramitado el juicio, siendo de advertir que esta forma ó modalidad de la ejecución la imponía, por otra parte, la naturaleza del crédito. Aparte de lo espuesto, el embargo de un inmueble de propiedad de uno de los ejecutados, fué trabado á las resultas de la cantidad proporcionalmente adeudada por él, como lo informaba el escrito del ejecutante, en el cual expresaba que no conociendo el domicilio del otro deudor, se reservaba su derecho de denunciarle bienes oportunamente. En esta situación, no puede atribuirse á la sentencia de trance y remate otro alcance que el que le imprimían los antecedentes relacionados, tanto más cuanto que el mismo acreedor entendía que aquel pronunciamiento declaraba responsables á sus adversarios por partes iguales, al pago de los honorarios que persiguiera contra ellos. Véase además el núm. 48.

66. La imposición de las costas no fué pedida por la parte vencedora.



67. **Costas**—No procede condenación en costas á la testamentaria, si la prueba se hizo necesaria por existir menores interesados.—Civ., tom. 13, pág. 276, Ser. 3ª (tom. 62).

68. **Costas**—La *plus-petitio* solo permite que el actor sea condenado en las costas; en ningún caso la pérdida de la suma demandada.—Civ., tom. 13, pág. 332, Ser. 3ª (t. 62).

69. **Costas**—Aun cuando la jurisdicción sea potestativa del demandado, procede la condenación en costas al demandante, si por su carácter público no puede alegar ignorancia.—Civ., tom. 13, pág. 423, Ser. 3ª (tom. 62).

70. **Costas**—No procede su imposición, si por circunstancias especiales el vencido pudo creer que le asistía el derecho que ejerció.—Civ., tom. 13, pág. 427, Ser. 3ª (tom. 62).

71. **Costas**—Aun cuando los gastos del protesto son de cargo del deudor, las costas judiciales del reconocimiento no

---

67. Véanse los núms. 37, 44 y 59.

68. No existe ley que disponga lo contrario, pues la ley 43, tit. 2º, Part. 3º, única pertinente, solo establece la condenación en costas. En la Nov. Rec., que dicho sea de paso no debe citarse siquiera, porque jamás ha regido entre nosotros, no se encuentra disposición alguna que establezca la pena de la pérdida del capital; y si bien en la ley 6, tit. 28, lib. V, correspondiente á la 9ª, tit. 21, lib. IV, R. C., se dispone la condenación «en otro tanto de la demasia», no podría tampoco, ni aun con esa limitación, aplicarse á los casos ordinarios, como era el que se trataba, porque esa ley rige tan solo en los juicios ejecutivos.

69. Según resultaba de autos, el demandante había reconocido la procedencia de la excepción de incompetencia de jurisdicción deducida por el demandado, en razón de ser éste Cónsul de la Rep. del Paraguay, consinténdose en consecuencia el auto. En tal virtud, es incontestable la procedencia de la condenación en costas, dada la sanción contenida en el art. 221 del Cód. de Proc., pues no aparecía de autos mérito alguno que autorizase la excepción á la regla establecida por derecho.

71. Si bien el art. 736 del Cód. de Com. establece que ellos son á cargo del deudor, no procede, sin embargo su aplicación en estos casos, por cuanto, con excepción de los gastos del protesto, las costas judiciales no se causaron por el cobro del crédito sino para obtener su reconocimiento, por la circunstancia de haber fallecido el deudor dejando herederos menores de edad que hacían imprescindible la intervención de los jueces—art. 3284 y 3465 del Cód. Civ.



pueden recaer sobre los herederos, si existen menores—Civ., tom. 16, pág. 48, Ser. 5ª (tom. 63).

72. **Costas**—La aceptación de un peritaje careciendo de título no basta para ser responsabilizado por las costas—Civ., tom. 16, pág. 341, Ser. 5ª (tom. 63).

73. **Costas**—No procede condenación en costas al embargante sin derecho que desiste inmediatamente—Civ., tom. 16, pág. 372, Ser. 5ª (tom. 63).

74. **Costas**—El que desiste después de las excepciones debe ser condenado en costas—Civ., tom. 16, pág. 387, Ser. 5ª (tom. 63).

75. **Costas**—No procede condenación en costas si la existencia de testamentaria hace obligatoria la comprobación del crédito—Civ., tom. 17, pág. 138, Ser. 5ª (tom. 64).

76. **Costas**—No procede condenación en costas cuando no han prosperado todas las pretensiones de las partes—Civ., tom. 17, pág. 152, Ser. 5ª (tom. 64).

77. **Costas**—Debe rechazarse la acción de daños y perjuicios con especial condenación en costas si el demandante no justifica el hecho en que la funda—Civ., tom. 17, pág. 164 Ser. 5ª (tom. 64).

78. **Costas**—El desconocimiento de recibos que los peritos declaran auténticos, no basta para condenar en costas, si

---

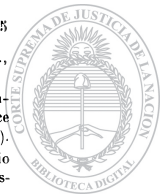
72. Solo en el caso del art. 178 del Cód. de Proc., procede que el perito pague las costas del incidente.

73. Por cuanto, como resultaba claramente del escrito presentado, el recurrente, lejos de obstaculizar el propósito del embargado, lo había facilitado, espresando su conformidad en que el embargo fuera levantado, lo que en definitiva constituye el mérito á que se refiere el art. 221 del Cód. de Proc., para eximirlo de las costas.

75. Parece que esa exoneración se impone por no tratarse para los sucesores, de hechos personales ó de créditos contraídos directamente por ellos. Así se comprende que no puedan incurrir en la nota de litigantes temerarios ó maliciosos. Esta solución es tanto más ajustada á derecho, cuanto que el mismo Cód. Civ. autoriza al heredero á declarar que ignora si una firma es ó no del causante—art. 1032.

76. Porque en este caso hay razón derecha para litigar.

77. Art. 221 del Cód. de Proc., y ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª.



la contraparte no ha conseguido todo lo que pretendía—Civ., tom. 17, pág. 244, Ser. 5ª (tom. 64).

79. **Costas**—La condenación en costas es inevitable contra el obligado á pagar los daños y perjuicios que desconoce los derechos del actor—Civ., t. 18, p. 13, Ser. 5ª (tom. 65).

80. **Costas**—El tercerista que confiesa su falta de dominio sobre los objetos embargados, debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., tom. 18, pág. 30, Ser. 5ª (tom. 65).

81. **Costas**—No procede condenación en costas al vencido si no ha sido solicitada en la demanda—Civ., tom. 18, p. 159, Ser. 5ª (tom. 65).

82. **Costas**—No procede condenación en costas al vencido si se reconoce que la rendición de cuentas sólo puede hacerse mediante la entrega de libros del vencedor—Civ., tom. 18, pág. 195, Ser. 5ª (tom. 65).

83. **Costas** — El desistimiento antes de diligenciarse el

---

79. Porque las costas se han considerado siempre como parte integrante de los daños y perjuicios.

80. Toda tercería de dominio se funda en el derecho pleno de propiedad que se atribuye el tercerista. Si después de instaurada una acción de esta naturaleza, se reconoce por el mismo actor su falta de derecho, surge evidente la malicia con que se instauró la acción, debiendo con justicia aplicarse el principio general del art. 221 del Cód. de Proc.

82. En el caso ocurrente la Cám. dijo: «Aun cuando encuentro atinadas las consideraciones del Inferior para demostrar que la prosecución de este juicio se debe principalmente á la ambigüedad con que fué contestada la demanda, pienso, sin embargo, que no procede la condenación en costas, por cuanto, si bien el actor obtiene la mayor parte de lo solicitado en la demanda, la sentencia no le es absolutamente favorable, puesto que no solo contiene una limitación á lo pedido, sino que, lo que es más decisivo aun, se declara que la rendición de cuentas deberá hacerse previa exhibición por parte del actor de los libros y documentos que el demandado considere necesarios, de acuerdo con lo solicitado por éste en su contestación. No es, pues, el caso del art. 221 del Cód. de Proc., y en consecuencia, lo que corresponde es que las costas se abonen por su orden».

83. No hubo ni demanda ni pleito, hubo solamente la preparación del juicio ejecutivo por el reconocimiento de la condición de inquilino del deudor. Éste no debió tener legalmente intervención alguna, pues



mandamiento, no basta para responsabilizar por las costas al ejecutante—Civ., tom. 19, pág. 134, Ser. 3ª (tom. 66).

84. **Costas**—Aun cuando la cuestión se ventile como de puro derecho, procede condenación en costas al que reconoce su falta de derecho para litigar—Civ., tom. 19, pág. 361, Ser. 3ª (tom. 66).

85. **Costas**—El desconocimiento de la autenticidad de la firma del causante no basta para condenar en costas á los herederos—Civ., tom. 19, pág. 372, Ser. 3ª (tom. 66).

86. **Costas**—Rechazada la demanda por improcedente, debe condenarse en costas al actor—Civ., tom. 20, pág. 33, Ser. 3ª (tom. 67).

87. **Costas**—No procede especial condenación en costas si se discutió un punto de derecho—Civ., tom. 20, pág. 197, Ser. 3ª (tom. 67).

88. **Costas**—El que á sabiendas inicia ante la jurisdicción

no llegó el momento de ser citado de remate. En tales condiciones, no hay ni puede haber costas causídicas. La mayor parte de las actuaciones del juicio versaba sobre diligencias preparatorias para formarlo, y las demás se habían producido con motivo de la intervención que indebidamente asumió el locatario.

84. El fundamento capital de la demanda, consistía en que los bienes á que se hacía referencia en la misma no eran gananciales, lo que se ofreció probar en oportunidad; pero, no obstante esto, el mismo demandante reconoció después, que evidentemente lo eran según la letra del art. 1272 del Cód. Civ. El demandado pudo decir, con verdad, que esta manifestación importaba propiamente un desistimiento del incidente, en cuyo caso las costas son á cargo del desistente.

85. Porque el art. 1032 del Cód. Civ. ampara al heredero en este caso.

87. Este no es un principio absoluto. Hay caso en que las costas se imponen aunque se discutan cuestiones de derecho. Véase Inst. tom. 7, verb. *Costas* núm. 24. En el caso del sumario la Cám. dijo: «La cuestión debatida ha sido de puro derecho, sin que por parte del vencido se revele malicia ó temeridad al promoverla, lo que autoriza á ejercer en su favor la facultad acordada en el segundo inciso del art. 221 del Cód. de Proc».

88. El escrito iniciando la acción estaba dirigido al juez de Comercio; sin embargo el de lo Civ. le dió curso tramitándose el juicio. Después



civil un juicio comercial debe ser condenado en costas — Civ., tom. 20, pág. 212, Ser. 3ª (tom. 67).

89. **Costas**—Si el domicilio denunciado era falso, las costas deben ser á cargo del demandante—Civ., tom 20, p. 226, Ser. 5ª (tom. 67).

90. **Costas**—El vencido en el interdicto de retener la posesión debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., t. 20, pág. 392, Ser. 5ª (tom. 67).

91. **Costas**—No procede condenación en costas contra la testamentaria si el curador de la herencia se limita á pedir la justificación del crédito — Civ., tom. 20, pág. 400, Ser. 5ª (tom. 67).

92. **Costas**—Si la sentencia solo condena al pago de lo reconocido al contestar la demanda, no procede especial condenación en costas—Civ., tom. 20, pág. 404, Ser. 5ª (t. 66).

93. **Costas**—El autor de un acto ilícito que pone en duda su responsabilidad debe ser condenado en las costas del juicio—Civ., tom. 21, pág. 137, Ser. 5ª (tom. 68).

---

se dieron cuenta las partes y se ordenó su remisión al Juez de Com., declarándose que el expediente había sido tramitado solo por error, por lo que no se impuso las costas. La Cám. dijo que no había mérito para la exoneración.

89. Disposición expresa del art. 77 última parte del Cód. de Proc.

90. Última parte del art. 578 del Cód. de Proc.

91. El representante legal de una sucesión procede con derecho cuando pide la justificación de una cuenta, cuya existencia y legitimidad no está obligado á conocer, y que por el contrario sería peligroso acordar ese reconocimiento cuando la ley — arts. 1870 y 1881, inc. 7, Cód. Civ., — exige poderes especiales para reconocer deudas anteriores al mandato.

93. Cuando el demandado por indemnización de daños y perjuicios, no limita su defensa al monto exigido, debe cargar con las costas del juicio, pues en tal caso, los gastos que se originan al actor forman parte del daño causado, como ha sido reiteradamente resuelto por este Trib. en casos análogos. Y esta solución es tanto más justa, cuanto que en el juicio propiamente, esto es en lo que constituye el verdadero litigio, la culpabilidad del demandado, éste es vencido, siendo entonces de perfecta aplicación el art. 221 del Cód. de Proc.



94. **Costas**—Deben ser á cargo del vencido cuya temeridad aparece evidente—Civ., tom. 21, pág. 152, Ser. 5ª (t. 68).

95. **Costas**—Aun cuando se declare procedente el pago de los servicios, el vencido no debe ser condenado en costas si el precio debe ser determinado por árbitros—Civ., tom. 22, pág. 53, Ser. 5ª (tom. 69).

96. **Costas**—Declarada la improcedencia de la jactancia, el actor debe ser condenado en las costas—Civ., tom. 22, pág. 125, Ser. 5ª (tom. 69).

97. **Costas**—El reconocimiento del crédito por escritura pública después de iniciada la demanda no basta para condenar en costas, si en ella nada se estipuló espresamente sobre

---

95. En el *petitum* de la demanda se solicitaba se condenase al demandado á satisfacer una suma determinada de pesos como importe de los servicios reclamados. Entre tanto la sentencia que fué consentida por el actor declaró que éste no tenía derecho á cobrar esa suma, por haber quedado en virtud de convenios posteriores reducidos en parte los trabajos practicados, debiendo procederse á su estimación por árbitros—art. 1627 del Cód. Civ.—De aquí resulta que la demanda no prosperó por lo que no procedía la imposición de las costas.

96. En asuntos de solución difícil ó dudosa, del punto de vista de los hechos ó del derecho, procede por parte de los jueces el ejercicio de la facultad acordada por el art. 221 del Cód. de Proc. Pero cuando el litigio que se ha ventilado hasta su fallo definitivo, no ofrece estos caracteres, cuando la improcedencia de la demanda ó de la defensa es notoria, cuando el litigante vencido no ha tenido ninguna razón ó motivo legal para iniciar ó proseguir la controversia, la aplicación del principio general establecido en la primera parte del art. citado, es ineludible.

97. Reconocido el crédito del demandante, éste declaró que la demanda carecía ya de objeto, quedando como único punto á resolverse si los demandados debían ó no pagar las costas del juicio. Pero es el caso, que en la escritura de reconocimiento con cuyas enunciaciones se manifestó conforme el actor por hallarse redactada en los términos convenidos, no se hablaba de costas, ni resultaba que el otorgante se responsabilizara por su pago. Si ésta hubiera sido la voluntad de las partes, así lo habrían consignado en el mismo acto jurídico, que tiene para ellas fuerza de ley—art. 1197, Cód. Civ.—Pero en su silencio, en la ausencia de toda cláusula declaratoria, no es legar establecer otras responsabilidades que las contenidas en su texto. No se trataba de actos producidos en el juicio.



el deber de pagarlas—Civ., tom. 22, pág. 119, Ser. 5ª (t. 69).

**Costas**—Véase: *Acusación*, 1, 6; *Consignación*, 1, 2; *Competencia potestativa*, 1; *Acusado por calumnia*, 2; *Bolsa*, 2; *Cesión*, 1; *Arbitros*, 5; *Abogado*, 5; *Abogados*, 1; *Consejo de Higiene*, 1; *Arraigo*, 4; *Regulación*, 2; *Escep. de falta de personería*, 13; *Escep. de efecto legal*, 9; *Honorarios*, 15, 21, 22; *Recusación*, 15.

1ª. **Costas de la querella**—Si la resolución mandando archivar la querella ha sido consentida, el Juzgado no puede resolver sobre las costas—Crim., t. 9, p. 425, Ser. 3ª (t. 25).

1ª. **Cotejo**—No procede el cotejo de firmas si los representantes legales de los herederos las reconocen como auténticas—Civ., tom. 11, pág. 384, Ser. 5ª (tom. 58).

2. **Cotejo**—Pedido cinco días antes de vencerse el término, debe ordenarse—Civ., tom. 22, p. 416, Ser. 5ª (t. 69).

**Cotejo**—Véase: *Firma*, 9.

1ª. **Crédito**—Si el crédito consta de instrumento público

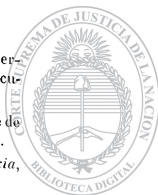
1ª. Consentida una sentencia, ni la parte ni el juez puede innovar su estado, pasa en autoridad de cosa juzgada.

1ª. Esta diligencia de prueba la autoriza la ley cuando aquel á quien se atribuye un documento privado, negase ser suya la firma, ó sus sucesores declaran que ignoran si la firma es ó no de su causante; en estos casos es cuando debe procederse á la comprobación del documento, pudiendo pedirse, sin perjuicio de los demás medios probatorios, el cotejo ó comparación de letras como lo establecen los arts. 163 y 144 del Cód. de Proc. Este reconocimiento espreso del representante hace supérfluo é improcedente el cotejo de la firma.

2. Este término es suficiente para que la prueba se produzca dentro de las condiciones exigidas por el art. 118 del Cód. de Proc.

1ª. Se trataba de un préstamo de 45.000, pesos, valor nominal, en cédulas hipotecarias de la provincia de Buenos Aires, serie O, por el plazo de seis meses, y la obligación de restituir la misma cantidad de cédulas é iguales cupones, pagándose en dinero efectivo aquellas que hubieran resultado sorteadas durante el tiempo del préstamo, y con declaración de que en caso de no hacerse esa devolución en el término convenido, los prestamistas quedarían *ipso facto* autorizados para hacer comprar en la Bolsa de Comercio la misma cantidad de cédulas, y el deudor obligado á pagar en efectivo su importe, con más la comisión de compra, interés del 2 % estipulado y las costas judiciales, si las hubiere, ó bien





que hace necesario una liquidación previa, la falta de intervención del deudor vicia de nulidad el procedimiento ejecutivo.—Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 5ª (tom. 57).

2. **Crédito** — Justificada su existencia, debe declararse de legítimo abono—Civ., tom. 13, pág. 21, Ser. 5ª (tom. 60).

**Crédito** — Véase: *Comunero*, 1; *Confesión*, 5; *Herencia*, 1; *Firma*, 9; *Comerciante*, 1; *Gastos de justicia*.

1. **Cuenta** — Reconocidas las partidas que la forman, el

para exigir en efectivo el más alto precio á que se hubieran cotizado entre la fecha del vencimiento y la del pago. Como resulta de estas enunciaciones, la obligación no constituía la determinación de la cantidad líquida por la cual tan solo puede despacharse ejecución y librarse mandamiento, resultando de autos que para ello se había practicado las diligencias solicitando informe del presidente de la Cám. Sindical de la Bolsa de Com. sin intervención del deudor, circunstancia que hacía inhábil el título.

1. El actor inició demanda por el pago de 2.151 pesos oro, como saldo de cuenta. El demandado no negó de una manera positiva esta deuda, pero sostuvo que la cuenta no estaba liquidada y que debían ponerse en su haber las cantidades que le correspondían por su participación de 2 °. en los negocios del demandante durante un año. En las posiciones del demandado reconoció las diferentes partidas inscriptas en el libro diario del actor, por él mismo, y que sumaban la cantidad demandada; pero al mismo tiempo, sostuvo que faltaba el haber de esa cuenta y el balance de fin de año. El actor presentó su libro diario, pero en una forma singular, para que se tomase copia de determinadas partidas que él indicase, lo que tampoco se hizo; pero sin que se practicara una compulsu en forma legal de todo lo pertinente y en todos sus libros. De aquí resultaba que se había justificado la existencia de una cuenta entre las partes, y que había en ella á cargo del demandado las partidas indicadas, por cuyo importe se dedujo la demanda. Además resultaba evidente por la confesión del demandante, que el demandado le había acordado una participación del 1 °. de los negocios. Desde luego, probado como estaba este hecho, por la propia confesión, el actor estaba obligado á rendir cuenta y proceder á una liquidación relativa á los negocios que tuvo durante el año, para que determinado el *quantum* que correspondía al demandado por el 1 % que de las utilidades le correspondía, le fuese abonado ese haber en la forma que por derecho corresponde. La determinación de la importancia de ese uno por ciento debe hacerse por jueces arbitradores, de conformidad con el art. 448 del Cód. de Com. De aquí resulta igualmente, que no procede en este caso la compensación, desde que el crédito cuyo pago perseguía



demandado debe ser condenado al pago inmediato sin perjuicio de cobrar éste á su debido tiempo las cantidades que resulten de liquidaciones á practicarse—Com., tom. 3, p. 248. Ser. 5ª (tom. 38).

**2. Cuenta**—Con conforme, no puede exigirse en juicio ejecutivo—Civ., tom. 18, pág. 103, Ser. 5ª (tom. 65).

**Cuenta**—Véase: *Conforme*, 1, y 2; *Depositario*, 8; *Juicio ejecutivo*, 2; *Rematador*, 2.

**1. Cuenta corriente**—No procede juicio ejecutivo con

el actor, era líquido y resultaba probado plenamente; mientras que el crédito del demandado no era líquido y solo resultaría del juicio de arbitadores.—Véase arts. 819 y 820, Cód. Civ.

2. La cuenta presentada, si bien justificaba la existencia de un crédito, se trataba de una obligación sin plazo determinado. En tal concepto, lo que corresponde es solicitar que se fije un plazo para su abono, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 618 del Cód. Civ. No habiendo fijado la ley de Proc., una tramitación especial, y no pudiendo hacerse la fijación del plazo sin audiencia de la parte demandada, porque ésta puede tener excepciones que oponer, es claro que deben seguirse los trámites preceptuados para el juicio ordinario—art. 66 del Cód. de Proc.—En este mismo sentido se han resuelto casos análogos en los precedentes judiciales, como puede verse en la ser. 1ª, tom. 6, pág. 473, Jur. Civ.

1. La cuenta corriente de que habla el art. 771 del Cód. de Com., y á la cual se le da acción ejecutiva por los arts. 787 y 793 del mismo, «es un contrato bilateral por el cual una de las partes remite á la otra ó recibe cantidades de dinero en propiedad ú otros valores, sin aplicación á empleo determinado, ni obligación de tener á la orden una cantidad ó un valor equivalente, pero á cargo de *acreditar* al remitente por sus remesas liquidadas en la época convenida, compensarlas de una vez hasta la concurrencia del *debito* y *credito*, y pagar su saldo». Además, es de naturaleza de la cuenta corriente que ésta comprenda los requisitos enunciados por el art. 777, sin lo cual no puede considerarse que cualquier otro título ú operación semejante tenga ese carácter. Es de esencia de ese contrato la compensación recíproca entre el *debe* y el *haber*, cuyo contrato no necesita de convención previa, pues nace de la naturaleza de las mismas obligaciones. Así lo ha definido en su informe la comisión reformadora del Cód. de Com., al tratar de ese tit., como puede verse en la pág. 37 de dicho informe, en el que se citan palabras de los doctores Villegas y Quesada, que ya antes habían anticipado trabajos sobre este punto. Resultaba del documento de una



una cuenta que no llena los requisitos de las que el Código de Comercio califica de cuenta corriente—Com. tom. 9, pág. 104, Ser. 3ª (tom. 25).

## 2. Cuenta corriente—No hay obligación de espresar

compulsa y del escrito presentado que el origen de la deuda era un pagaré, firmado por el demandado y otros, á favor del actor, que era un Blanco, con el cual se pretendió formular una cuenta corriente, en la que no existía más operación que la que resultaba de esa obligación y los intereses devengados, operación á la que indebidamente se le dió el carácter de cuenta corriente, por faltarle los elementos determinados por la ley, y tratarse solo de un contrato de cambio, el cual está regido por las disposiciones del tít. X del Cód., que regla las relaciones de derecho que nacen para las personas que intervienen en un contrato de esa naturaleza. A una sola de las partes, por su voluntad, no le es dado por la ley, cambiar las formas de los contratos, como sucedería, si en vez de aplicarse las disposiciones de las letras de cambio se rigiera por las referentes á las cuentas corrientes. Además, se prestaría al abuso de que podrían iniciarse simultáneamente dos ejecuciones contra el deudor por la misma cosa: una por la cuenta corriente no observada y otra por el pagaré, lo que sería á todas luces irregular. Si la parte del actor tenía interés en hacer valer sus derechos, no podía existir inconveniente alguno al respecto, desde el momento que debía encontrarse en su poder el pagaré origen de la deuda contra tercero, con lo que rodearía al juicio de las formalidades legales. Por otra parte, la notificación de la cuenta había sido hecha sin intervención judicial, siendo así que ella debió hacerse judicialmente para obtener de este modo una demostración evidente de que la cuenta no fué observada en el término fijado por el art. 793 del Cód. de Com.

2. Presentada al juzgado una cuenta para que la parte hiciere la manifestación prescrita por el art. 793 del Cód. de Com., ésta se presentó diciendo que no podía hacerla por cuanto la cuenta contenía partidas englobadas que requerían previa aclaración. A lo que la parte contraria dijo que el pedimento no procedió por cuanto él importaba oponer excepciones, no siendo ellas viables por cuanto no había demanda alguna entablada y solo en este caso podían oponerse. Se resolvió que debía aclararse la cuenta porque la cuenta corriente presentada no contenía en sí misma todos los elementos y especificaciones indispensables para que pueda ser examinada, y manifestar la parte interesada, su conformidad ó las observaciones á que hubiere lugar—art. 793, Cód. de Com. La gestión iniciada, importaba una verdadera demanda para obtener el reconocimiento del saldo de la cuenta corriente y la acción ejecutiva que es su consecuencia—art. 787, Cód. de Com.— Por lo tanto, no puede negarse al demandado el derecho de pedir en tiem-



con conformidad ó disconformidad con el saldo de una cuenta corriente, si existen partidas englobadas por saldos anteriores—Com., tom., 1, pág. 95, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Cuenta corriente**—No procede la vía ejecutiva por el saldo de la cuenta corriente si no existe conformidad—Com., tom. 3, pág. 293, Ser. 5ª (tom. 38).

4. **Cuenta corriente**—Es obligatoria la manifestación de conformidad ó disconformidad con la cuenta corriente en el término que fija la ley—Com., t. 4, p. 222, Ser. 5ª (tom. 39).

**Cuenta corriente**—Véase: *Compensación*, 1; *Depositarío*, 7.

1. **Cuenta detallada**—Procede la escepción de defecto legal si la cuenta no contiene el detalle de cada partida—Com., tom. 9, pág. 428, Ser. 3ª (tom. 25).

po y forma legal, las esplicaciones necesarias para manifestar ó no su conformidad con la cuenta corriente, cuando esas declaraciones no resultan de la cuenta misma, como sucedía en el caso, en que ella tenía por origen un saldo de cuenta anterior.

3. Arts. 787 y 790 del Cód. de Com.

4. Véase en contra el núm. 2. En el caso del sumario, el Juez dijo: «que lo espuesto por la parte en su escrito, importa una escepción, la cual no procede en el estado actual del juicio dada la disposición del art. 793 del Cód. de Com., que impone al deudor la obligación de manifestar dentro de cinco días su conformidad ó disconformidad con la cuenta corriente pagada». La Cám. confirmó el auto diciendo: «Por sus fundamentos y con arreglo á la jurisprudencia de esta Cám. establecida entre otras causas, en la del Banco de Roma y Río de la Plata, con la sociedad «El Cazador», en resolución de 30 de Abril último, se confirma».

1. El art. 71 del Cód. de Proc., establece que debe el demandante explicar claramente los hechos en que funda la demanda. La demanda fundada en una cuenta no espresaba claramente estos hechos, porque en la cantidad que cobraba como saldo no se espresaba los hechos jurídicos de que procedía. Las espresiones «saldo de cuenta remitida», de una de las partidas del documento, no satisfacen la esposición *sucinta* de los hechos en que se basaba la acción personal deducida, y no habilitaban al reo para confesar ó negar los hechos porque se le demandaba. — Véase la doctrina de Manresa y Reus, comentando el art. 224 del Cód. de Enj. Civ. de España, tom. 2, pág. 31, y lo resuelto por la Cám. en lo Civ. tom. 1, pág. 539, y el espíritu del art. 68 del Cód. de Com.



**Cuenta particionaria**—Véase: *Honorarios de abogado*, 2; *Honorarios*, 33; *Gastos causídicos*, 1.

1. **Cuestiones**—Solo pueden resolverse como prejudiciales las cuestiones taxativamente enumeradas en el Código—Crim., tom. 4, pág. 239, Ser. 5ª (tom. 39).

2. **Cuestiones**—El juez del crimen á quien se proponga

---

1. Las únicas cuestiones prejudiciales á que puede referirse el art. 17 del Cód. de Proc. Crim., son las determinadas por el art. 1104 del Cód. Civ. Fuera de ellas pueden haber cuestiones que den lugar á juicios previos; pero, esto puede suceder únicamente cuando se alega la existencia legal de un contrato civil y no cuando se acusa simplemente la existencia de un delito público y se suministran elementos de prueba que los jueces están obligados á tomarlos en consideración, á fin de esclarecer los hechos criminosos que se denuncian.

2. El juez de 1ª Instancia dijo: «La base del procedimiento en materia penal es la comprobación de la existencia de una acción ú omisión espresamente penada por la ley. El delito que se trataba de perseguir y castigar, era el de estafa ó defraudación cuyos caracteres especiales consisten en lucrar en perjuicio de tercero, valiéndose de ardidés ó engaños, ya suponiendo un nombre, simulando una calidad ó valiéndose de falsos títulos ó influencia mentida—art. 202, Cód. Pen.—En el caso occurrente se había pretendido fundar la existencia del delito, en haberse dispuesto por el procesado, de propiedades que le fueron vendidas con todas las formalidades dispuestas por la ley; venta que como lo reconoció el acusador particular estaba destinada á eludir su responsabilidad de quien legítimamente podía hacerla efectiva. Siendo las ventas hechas por escritura pública de las propiedades, un hecho consumado que no puede alterarse ó modificarse por arreglos privados ó particulares, resultado de una simulación delictuosa, no es posible aceptar la existencia de la infracción criminal, mientras no se declare por sentencia definitiva recaída en juicio civil contradictorio, que las referidas escrituras de compraventa adolecen de nulidad. Dependiendo la existencia del delito de una cuestión prejudicial á resolverse, queda patentizada la inconveniencia de haberse dado á este proceso un desarrollo prematuro, falta de la base esencial que debe buscarse en materia criminal, cual es la clasificación neta y claramente definida de la existencia del delito mismo. En el estado actual de la causa y dada la única manera de apreciar los hechos que se han considerado punibles, no queda otro medio que suspender toda resolución sobre la procedencia ó improcedencia del castigo, hasta que no se provoque la cuestión que ha de resolver la existencia de los elementos esenciales que constituyen los hechos delictuosos. No existiendo por ahora base para la cons-



una cuestión, debe resolver las que sobre el mismo hecho se susciten aunque tengan carácter civil—Com., tom. 4, pág. 398, Ser. 5ª (tom 39).

**Questiones** — Véase: *Competencia*, 1; *Contrato de sociedad*, 1; *Escusación*, 1; *Nulidad*, 4, 29, 31; *Comerciante*, 3; *Acto administrativo*, 1; *Peritos*, 1; *Árbitros*, 3; *Sentencia*, 11; *Acusación*, 4.

### 1. Cuestión prejudicial — La rendición de cuentas no es

titución del delito, no puede autorizarse la continuación de la prisión preventiva del procesado, sin exponerse á llegar al resultado irregular de haber privado injustamente de su libertad á un individuo que no se encuentra considerado como delincuente». Por todo esto resolviose suspender el pronunciamiento de la sentencia definitiva que tenía que dictarse en la causa, hasta que no se determinase en el juicio civil que correspondía, sobre la validez ó nulidad de las escrituras públicas de propiedad y de cuyo hecho dependía la existencia ó inexistencia del delito que se había pretendido establecer. La Cám. revocó el auto diciendo: «que por la resolución apelada se manda suspender el pronunciamiento sobre la acción criminal deducida, por considerarse prejudicial y del resorte de la jurisdicción civil la cuestión relativa á la validez ó nulidad de las escrituras de propiedad estendidas á nombre del que-rellado. Que según disposición expresa de los arts. 1104 y 1105 del Cód. Civ., las únicas cuestiones prejudiciales que deben ser resueltas por la jurisdicción civil y que impiden por consiguiente el ejercicio de la acción penal, son las que versan sobre la validez ó nulidad de los matrimonios y sobre la clasificación de la quiebra de los comerciantes. Que con escepción de estos dos casos ó de otros que espresamente establezca la ley — art. 1105, — el principio dominante en esta materia y que nuestro Cód. ha adoptado en los dos arts. cit., es que todo juez competente para conocer de un proceso crim., lo es igualmente para decidir todas las cuestiones que se susciten con motivo de él, aun cuando no lo sería si se las propusiesen separadamente— Haus, tom 2º, núm. 1193; Garraud, tom. 5º, núm. 334; Chauveau et Hélie, tom. 5º, núm. 2035. — Que no siendo, pues, prejudicial la cuestión á que se refiere el auto apelado, como que no está incluida entre las que la ley considera tales, su resolución corresponde al juez de la causa en virtud del principio general de competencia que acaba de recordarse».

1. No existiendo otras cuestiones prejudiciales sino las declaradas tales por la ley, entre las cuales no se halla comprendida la de rendición de cuentas, y no siendo tampoco de aplicación en este caso la prescripción del art. 200, Cód. de Proc. Crim., desde que los hechos que sirven de fundamento á la querrela pueden no constituir delito, corresponde la instrucción del sumario sin que previamente se requiera el juicio civil.



cuestión prejudicial si se acusa por defraudación al que está obligado á rendirlas. — Crim., t. 5, pág. 252, Ser. 5ª (t. 40).

1ª. **Cuestiones prejudiciales** — La incompetencia por tratarse de un contrato civil, no puede ser opuesta y resulta como cuestión prejudicial. — Crim., t. 4, p. 239, S. 5ª, (t. 39).

2. **Cuestiones prejudiciales** — Solo lo son las taxativamente determinadas por la ley. — Crim., tom. 4, pág. 404, Ser. 5ª (tom. 39).

1<sup>b</sup>. **Culpa** — El escribano secretario que autoriza una dili-

---

2. Véase verb. *Cuestiones*, n° 1.

1<sup>b</sup>. La querella fué promovida contra un secretario de Juzgado de Paz á quien se imputaba haber cometido el delito de falsedad en una cédula de citación que, para comparecer á absolver posiciones, le había sido hecha al mismo querellante en un juicio civil y en cuya cédula aquél afirmaba haberla diligenciado personalmente ante dos testigos, que resultaron no ser ni vecinos del citado, ni dos personas distintas, pues las dos firmas eran evidentemente hechas por una misma mano. Efectivamente, por la cédula en que se pretendía cometido el delito y cuyo original se había agregado al proceso, por las declaraciones y careos de los empleados del Juzgado de Paz, por el informe de los peritos calígrafos, y finalmente por las mismas declaraciones del encausado, se demostró que el acusado dió falsamente fe de haber practicado la diligencia de notificación por medio de la referida cédula, en presencia de dos testigos, de los cuales solo el uno presenció y suscribió realmente la diligencia, no habiendo concurrido el otro, ni firmado tampoco la cédula, pues la firma que lo representaba resultó hecha por la misma mano del otro testigo, quien venía así á ser también autor de la falsedad. Ahora bien: la opinión común de los autores exige como elementos constitutivos del delito de falsedad, á este respecto, dolo especial ó intención fraudulenta con que debe concurrir el agente á la comisión de esta clase de delitos; pero cualesquiera que sean las distinciones que puedan ó deban hacerse en esta materia, y sea que deba estarse á la exigencia doctrinaria ya recordada, ó debamos atenernos al texto de nuestra ley positiva—art. 280, Cód. de Proc. Crim.,—que no distingue entre tal dolo especial y el general del art. 6.º, parecía innecesario entrar á determinar cuál sería en realidad la clase de dolo que corresponde en este género de delitos, desde que en este caso, no puede sostenerse que tanto el secretario como el testigo real obraban con una ú otra clase de dolo. En efecto, el mismo querellante declaró espresamente respecto del querellado, que no sostenía que él fuese el falsificador, pero que es responsable por *culpa grave* de dicha falsificación, y solicitó que solo se le impusiera la pena correspondiente á la



gencia falsa, solo debe ser castigado como culpable de negligencia, en tanto no se justifique la existencia de voluntad criminal. — Crim., tom. 1, pág. 55, Ser. 5ª (tom. 36).

**Culpa**—Véase: *Asegurador*, 1; *Homicidio*, 11; *Alegatos*, 1; *Sobreseimiento*, 3; *Quebra culpable*, 1; *Conductores*, 1; *Daños y perjuicios*, 6, 13, 16, 17, 21, 36; *Acto ilícito*, 1, 2, 3, 4; *Juicio civil*, 1; *Divorcio*, 11; *Indemnización*, 2; *Falsedad de instrumento público*, 1.

### 1. **Cuotas**—Es procedente la escepción de inhabilidad de

falsificación de documento público, cometida por *culpa grave*. El Ministerio Público solicitó en primera instancia la absolución para ambos procesados, y el Fiscal de Cám., si bien espresó agravios de la sentencia absolutoria del Inferior, pidió también que solo se responsabilizase al secretario por culpa grave. Esta conclusión se ajustaba á las constancias del proceso, las cuales demostraban que si bien no podía imputarse á este encausado una intención dolosa, general ó especial, debía sin embargo responder por culpa, pues solo un olvido reprehensible de los deberes que la ley impone á los secretarios de actuación en casos semejantes, deberes que los obligan á una mayor diligencia y atención, pudo ocasionar el que se cometiese la falsificación de la cédula en la forma ya explicada. Si él hubiese cumplido con sus deberes, el diligenciamiento de la cédula se habría hecho realmente ante los dos testigos de verdad, que la ley exige, y él habría dado fe de una cosa real y no de una falsedad. Por consiguiente, había incurrido en la culpa grave prevista en el art. 16, inc. 5.º, Cód. Pen.

1. Visada una cuenta por la Mun., el acreedor dejó pasar 12 mensualidades sin gestionar cobro alguno, y después de este término inició ejecución por el total de la cuenta. El ejecutante al iniciar su acción dijo que desde la visación de la cuenta hasta la iniciación del juicio habían transcurrido las 12 mensualidades, que son más del año asignado por el art. 4 de la Ley de Oct. de 1888 — n.º 3228 — por cuyo motivo la prerrogativa de la espera que tenía el deudor para el reintegro del total del crédito había caducado. Habiendo sido visada, agregaba el ejecutante, la cuenta por la Intendencia, y vencido el último período ó mensualidad, sin que en esc entretanto se hubiese dignado el deudor solventarla ni en una siquiera de las cuotas, reunidos entonces los requisitos legales, procedía la iniciación del correspondiente juicio ejecutivo. Contra esta ejecución se opuso la escepción de inhabilidad de título. La ley en que apoyaba el demandante su acción, dispone que el pago de afirmado se hará por los propietarios en doce mensualidades, por partes iguales, ó á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 por 100 sobre su importe. No constaba, entretanto, de autos que el





título, si la ejecución por afirmado comprende la totalidad del crédito y no las cuotas fijadas con anticipación—Civ., tom. 11, pág. 320, Ser. 3ª (tom. 58).

**Cuotas**—Véase: *Empedrado*, 1.

**Curación**—Véase: *Disparo de arma de fuego*, 4.

1. **Curador**—La presentación de los que se dicen herede-

ejecutante hubiese gestionado del deudor el pago del servicio en ninguna de las formas establecidas; resultando, por el contrario de la propia exposición de su demanda y del escrito de contestación á la excepción opuesta, que había dejado correr los plazos señalados sin exigir aquel pago, habiéndolo verificado recién por la vía judicial después de vencida la última cuota y por la totalidad del crédito. Este procedimiento es contrario á la misma ley que servía de fundamento á su demanda, puesto que priva al deudor de las ventajas y beneficios que espresamente le han sido concedidos por la misma, haciéndole más onerosas las prestaciones que le están impuestas. Y ello no por su mora ó por su culpa, sino por acto exclusivamente imputable á su acreedor. La Cám. ha establecido jurisprudencia concordante con estas ideas, declarándola entre otras causas, en la CLIII de la 4ª Ser. de sus *Fallos*. Acordando la ley, se decía, un término para el pago por mensualidades de las cuentas de afirmados, el caso se encuentra regido por el art. 509 del Cód. Civ., que exige el requerimiento judicial ó extrajudicial por parte del acreedor para que el deudor incurra en mora. ¿Y cómo puede pretenderse dar el efecto de requerimiento al hecho de presentarse las cuentas á la Mun. para su visación, cuando es lo más probable que ese acto se efectúe sin conocimiento de los deudores? Podrían así los acreedores, se agregaba, por un acto que no requiere la intervención del deudor, hacer efímeros los derechos que la ley ha conferido á éste dándole facilidades para el pago de los afirmados. No teniendo al presente el requerimiento, punto alguno de arranque, no habiéndose demostrado siquiera desde cuando haya llegado á conocimiento del deudor la época desde la cual era exigible su deuda, mal puede englobarse después en la ejecución varias mensualidades atrasadas que hacen presumir forzosamente la mora en que incurriera el deudor.

1. El nombramiento de curador, que prescribe el art. 689 del Cód. de Proc., es para el caso que hecha la publicación de los edictos y no habiendo comparecido persona alguna alegando derechos á la herencia, proceda la declaratoria de vacancia de la sucesión, establecida por el art. 688 de dicho Cód. Si consta de autos haberse presentado personas invocando derechos sucesorios á la herencia y ofreciendo justificar su respectivo carácter hereditario, es evidente que el nombramiento de curador solamente procedería en este caso, cuando vencido el término



deros hace improcedente el nombramiento de curador de la herencia—Civ., tom. 11, pág. 6, Ser. 5ª (tom. 58).

2. **Curador**—Tiene derecho á ser reembolsado de los gastos á medida que los verifique, si existen fondos de la testamentería—Civ., tom. 13, pág. 135, Ser. 5ª (tom. 62).

3. **Curador**—La renuncia del curador interrumpe los términos—Civ., tom. 17, pág. 290, Ser. 5ª (tom. 64).

**Curador**—Véase: *Confesión*, 5; *Herencia*, 1.

1ª. **Curador «ad litem»**—La falta de intervención del esposo demandado por divorcio en el nombramiento de curador «ad litem», no causa la nulidad del juicio—Civ., tom. 11, pág. 360, Ser. 5ª (tom. 58).

1ª. **Curador provisorio**—El esposo puede ser nombrado

---

señalado por el juzgado para dicha justificación, ésta no se hubiera producido.

3. Habiendo renunciado el curador, ante el Juez de la curatela, fué nombrado otro en su reemplazo, quien aceptó el cargo. En un juicio que tramitaba por otro juzgado, el renunciante pidió que el juicio se entendiera con el reemplazante, á lo que se proveyó de conformidad. Pero antes de ser notificado éste, venció el término del traslado, acusándose la correspondiente rebeldía. No se hizo lugar por cuanto con el nuevo nombramiento había caducado el anterior, y para que corriera el término del traslado conferido, era necesario que el nuevo curador fuese notificado para recién desde esa fecha empezar á correr el término de la ley.

1ª. La ley de mat. civil ha dispuesto, en su art. 37, que no es necesaria la autorización del marido para que la mujer comparezca en juicio en los pleitos que tenga con él. Y esta disposición de la ley vendría á quedar anulada de una manera indirecta, si el marido pudiera oponerse al nombramiento del curador propuesto por la esposa para representarla en tales juicios.

1ª. El Dr. Evaristo Barrenechea cuyo dictamen dado en su carácter de Fiscal, sirvió de fundamento á la resolución que espresa el sumario, decía: «Es exacto lo que esponen el asesor del Min. de Menores y la señora Julia Capurro de Libacci. El marido es curador de su mujer declarada incapaz, según lo dispone la ley, y si es así, no cabe duda de que, para que lo sea, es indispensable la declaración previa de incapacidad. Pero para el trámite á que da lugar esa declaración previa, se requiere también un curador provisorio. ¿Debe serlo forzosamente el marido? No. La ley ha dejado al juez la facultad de nombrarlo sin im-



curador provisorio de la esposa denunciada incapaz — Civ., tom. 10, pág. 407, Ser. 5ª (tom. 57).

1ª. **Curatela provisoria** — La esposa no puede ejercer la curatela provisoria del esposo denunciado insano — Civ., t. 16, pág. 353, Ser. 5ª (tom. 63).

1. **Custodia** — Debe absolverse al acusado por infidelidad en la custodia de documentos públicos, si ellos aparecen. — Crim., tom. 4, pág. 312, Ser. 5ª (tom. 39).

---

ponerle la obligación de designar á aquél. Luego, el auto de de V. S. es arreglado á derecho. Pero hay, á mi juicio, razones especiales que hacen muy atendible la petición de Capurro, tales como la falta de recursos por parte de éste para abonar los servicios del curador provisorio y la no existencia de disposición legal que declare incompatible el cargo de curador provisorio con el carácter que inviste Capurro y el rol que desempeña en este juicio. Siempre que sea posible á los jueces evitar gastos á los litigantes, opino que deben hacerlo y, por lo mismo, creo que podría dejarse sin efecto, en el caso, el nombramiento de curador provisorio, designando al esposo de la que se dice incapaz para desempeñarlo». La Cám. dijo: «alegándose que no existe en la ley disposición alguna que prohiba el nombramiento de curador provisorio en favor del esposo, ni resultando de auto motivo alguno comprobado para que no recaiga en él tal representación».

1ª. Si en el caso del verb. *Curatela provisoria*, núm. 1, se resolvió que el marido puede ser nombrado curador provisorio de la esposa, ¿por qué la esposa no puede ser nombrada curadora provisoria del marido? Existen las mismas razones en uno como en otro caso. Sin embargo en el del sumario se dijo que: «El nombramiento de un curador provisorio que represente al supuesto demente y lo defienda en el pleito hasta que se pronuncie la sentencia definitiva, está terminantemente dispuesto en el art. 147 del Cód. Civ. La esposa no puede invocar su derecho á la curatela del marido hasta que se dicte la declaratoria de incapacidad, debiendo representar al presunto incapaz durante la secuela del juicio un curador provisorio nombrado por el juez».

---



**Chancelación** — Véase: *Gastos*, 7.

1<sup>a</sup>. **Cheque** — La entrega de un cheque hecha en pago contra un Banco en el cual el firmante no tiene fondos, importa el delito de estafa si el pago debía verificarse en efectivo ó al contado. — Crim., tom. 1, pág. 141, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 36).

2. **Cheque** — No es necesario el protesto contra el librador del cheque no pagado para que tenga fuerza ejecutiva contra él. — Com., tom. 5, pág. 239, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 40).

1. **Cheques** — La entrega en pago, de cheques incobrables importa la defraudación que la ley define y castiga. — Crim., tom. 3, pág. 380, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

**Choque marítimo** — Véase: *Jurisdicción federal*, 2.

---

1<sup>a</sup>. En un contrato de compraventa cuyo pago debía ser al contado, se recibieron 200 pesos en el acto y el resto en dos cheques. Al ir á cobrar los referidos cheques, el vendedor constató que el comprador no tenía las cantidades en ellos expresadas, haciendo protestar dichos documentos. Por esta circunstancia, el querellante se consideró estafado en el importe de los cheques. Ahora bien, los hechos ó circunstancias que caracterizan el delito de estafa, son el empleo de medios fraudulentos por los cuales se obtiene la entrega de valores, la distracción ó disipación de los mismos. El art. 202 del Cód. Pen. legisla sobre el caso.

2. Arts. 836 y 666, inc. 1<sup>o</sup> del Cód. de Com.

---



1<sup>a</sup>. **Damnificados**—Solo pueden ser admitidos como querellantes los damnificados personalmente por el delito, ó los herederos necesarios en caso de homicidio — Crim., tom. 1, pág. 165, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

**Damnificado**—Véase: *Hurto*, 7; *Querella*, 2, 5; *Delito*, 5; *Cosa juzgada*, 2; *Encubridor*, 2.

1<sup>b</sup>. **Daño**—Para que el autor del daño pueda ser responsa-

1<sup>a</sup>. Si bien el art. 155 del Cód. de Proc. Crim., autoriza á toda persona que presenciare, ó que de cualquier otra manera tuviere conocimiento de la perpetración de un delito que dé lugar á la acción pública, á denunciarlo al juez competente ó á alguno de los otros funcionarios allí designados, el derecho de querellarse y promover en tal carácter el juicio criminal en esta clase de delitos, ha sido reservado por los arts. 14 y 170 al Min. Público y á las personas damnificadas ó particularmente ofendidas por el hecho delictuoso y á sus representantes legales. La Cám. de lo Crim., aceptando esta doctrina en las causas de Domingo Borgan, por homicidio en la persona de don Pastor Lucero, y contra N. Camacho, por homicidio en la persona de S. D. Ramírez y otros, ha establecido lo que por persona damnificada ó particularmente ofendida por el delito, debe entenderse á los efectos del ejercicio de la acción penal, declarándose con tal motivo que es la víctima misma del delito, y que solo cuando por razón del delito mismo, el ofendido se hallase imposibilitado para ejecutarla, como en el homicidio, podrán ser admitidos los *herederos necesarios* del muerto. Con arreglo á esto la Cám. en los casos espresados de fecha 30 de Abril, y 8 de Mayo de 1894, respectivamente, si bien reconoció á la madre el derecho de acusar al matador de su hijo, lo negó al hermano del muerto.

1<sup>b</sup>. Aquí se suscitó incidentalmente la discusión de si la absolución



bilizado civilmente, debe justificarse que procedió con dolo, culpa ó negligencia — Civ., tom. 22, p. 293, S. 5ª (t. 69).

1ª. **Daños**—El que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio; esta obligación se extiende á los daños que causen los que están bajo su dependencia—Civ., tom. 12, pág. 114, Ser. 5ª (tom. 59).

1ª. **Daños y perjuicios**—La devolución del flete pagado,

del acusado en el juicio criminal hace cosa juzgada para lo civil. Uno de los camaristas el Dr. Gelly sostuvo que sí y el Dr. Gimenez que no. Este último cita las palabras de Laurent, t. XX, *Principios de Derecho Civil*, § 385. Dice este autor: «Es necesario no confundir el delito civil con el delito criminal. El delito criminal consiste en la infracción de la ley penal; lo que lo caracteriza es que una pena se impone al culpable en interés de la sociedad; tratándose del delito civil, el interés social no es el primer motivo. La parte perjudicada se propone obtener la reparación del daño que el delito le ha causado, en el interés privado, no hay un culpable propiamente dicho, hay un deudor y un acreedor. El delito criminal puede ser al propio tiempo un delito civil, cuando de él ha resultado un perjuicio ocasionado deliberadamente. Pero si no ha existido el propósito de perjudicar y no obstante ha resultado daño, el delito criminal habrá engendrado un delito ó sea la obligación de indemnizar el perjuicio». Sin embargo la parte demandada fué absuelta porque la responsabilidad de la empresa no podía imputársele, en los términos de los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. La demanda se fundaba en el hecho capital de no haber el cochero conformado su conducta á las disposiciones municipales del caso pues se sostuvo que conducía los caballos en marcha que no era la reglamentaria y que omitió el toque preventivo de la corneta. Entretanto, de la prueba rendida, no resultaban en manera alguna justificadas las circunstancias que se invocaron para determinar la responsabilidad. Antes al contrario, con esa prueba se estableció que el hecho, en todo caso, había sido el resultado de una imprevisión de la desgraciada víctima del accidente en manera alguna imputable al conductor del vehículo.

1ª. Arts. 1109, 1113 y 1122 del Cód. Civ.

1ª. La devolución del flete no procede, desde que la ley no lo dispone, y desde que sería evidentemente absurdo obligar á que el valor íntegro de las cosas, es decir, el precio que éstas tuviesen en el lugar de la entrega, sin deducir el precio del transporte. Si así fuese, resultaría que el cargador saldría ganando el precio del flete, desde que se le entrega lo que la cosa vale y además aquél. Por otra parte, no se había probado que hubiese habido demora en el sentido del art. 187 del



solo procede por el retardo en la entrega; si se obliga á la empresa al pago de los daños y perjuicios causados por la pérdida de la cosa, debe deducirse el precio de porte — Com., tom. 1, pág. 38, Ser. 5ª (tom. 36).

**2. Daños y perjuicios** — Si el acreedor que recibió en prenda el pagaré practicó en oportunidad las gestiones para asegurar su cobro, no puede ser condenado al pago de daños y perjuicios, los que solo proceden si se justifica que conocía bienes del deudor y no lo ejecutó — Com., tom. 5, pág. 18, Ser. 5ª (tom. 40.)

**3. Daños y perjuicios** — No proceden daños y perjuicios por falta de cumplimiento á un contrato de locación de servicios, si en el mismo se había convenido la indemnización en el caso de resolverse — Com., tom. 5, pág. 59, Sr. 5ª (t. 40).

**4. Daños y perjuicios** — Pendiente el juicio por daños y perjuicios contra el principal, es improcedente el iniciado

---

Cód. de Com., y por lo tanto, no correspondía en este caso la aplicación del art. 188, que es el que establece la devolución del flete.

2. Practicando el acreedor todos los actos tendientes á conservar la eficacia del crédito y los derechos de su deudor, llena cumplidamente las obligaciones que le impone el art. 587 del Cód. de Com.

4. Si bien es cierto que según lo dispuesto en el art. 1081 del Cód. Civ., la obligación de reparar el daño causado por un delito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, este precepto legal no tiene el alcance que quería el actor, y los derechos que él reconoce deben ejercitarse en la forma que determine el art. 705 del mismo Cód. Deducida la demanda contra el principal, el actor no puede iniciar nuevo juicio con un objeto igual contra los demás autores del supuesto delito, por cuanto indemnizando uno de ellos todo el daño, carece de derecho para demandar á los otros la parte que pudiera corresponderles — art. 1082, Cód. Civ. — Esta disposición de la ley no tiene otra escepción que el caso de insolvencia del deudor, espresamente previsto en el art. 705, lo que no se había alegado, ni justificado. Si se admitiera la posibilidad de poderse tramitar varios juicios de la misma naturaleza, se llegaría á conclusiones completamente inaceptables, pues quedaría al arbitrio del actor pedir la ejecución de aquella sentencia que fuese más favorable á sus intereses, á parte de la monstruosidad jurídica que podría resultar de sentencias contradictorias sobre la responsabilidad procedente de un mismo hecho.



contra el dependiente fundado en los mismos hechos—Civ., tom. 9, pág. 122, Ser. 5ª (tom. 56).

5. **Daños y perjuicios**—No procede indemnización de daños y perjuicios si el demandado se limitó á ejercitar un derecho propio—Civ., tom. 9, pág. 148, Ser. 5ª (tom. 56).

6. **Daños y perjuicios**—La manifestación hecha del demandante por daños y perjuicios de ignorar si el accidente tuvo por origen la culpa del demandado, basta para rechazar la acción—Civ., tom. 9, pág. 240, Ser. 5ª (tom. 56).

7. **Daños y perjuicios**—El locatario es reponsable de los danos y perjuicios causados en el predio arrendado, siempre que se justifique que sobrepasaron á los que el uso de la cosa hace necesario—Civ., tom. 9, pág. 286, Ser. 5ª (tom. 56).

8. **Daños y perjuicios**—La retención indebida de ob-

---

5. Art. 1071 del Cód. Civ.

6. El actor al absolver posiciones confesó que «no sabía» si el accidente fué casual. Esta confesión tiene especial gravedad si se tiene en cuenta que había sido precisamente el concepto contrario el que deba servir de fundamento para declarar la responsabilidad perseguida en el juicio. No estableciéndose la existencia de culpa ó negligencia, la irresponsabilidad del autor del hecho surge de la doctrina del art. 1109 y concordantes del Cód. Civ.

7. El propietario de una casa reclamó de su ex-inquilino los daños y perjuicios ocasionados por los desperfectos en ella causados, como ser roturas de baldosas, molduras, etc. Estos son los que generalmente causan las personas que habitan una casa y que son á cargo del inquilino, según el art. 1573 del Cód. Civ. No habiéndose destruido por el demandado la presunción legal que establece el art. 1616, debe darse por suficientemente comprobado el hecho de que los referidos desperfectos fueron causados por el inquilino con posterioridad á la ocupación de la casa por parte de él. Esta conclusión surge de la presunción legal mencionada; se encontraba justificada en el caso ocurrente, por las declaraciones contestes de testigos. Dada la clase de desperfectos ocasionados, no puede sostenerse que ellos provengan del uso á que estaba destinada la finca; además, de que cualquiera que él sea, el inquilino tiene la obligación legal de conservar la casa en buen estado—art. 1561, Cód. Civ. Debe tenerse presente también, que estos deterioros no están comprendidos entre los que el Cód. Civ., en sus arts. 1568 y siguientes, declara como no imputables al locatario.

8. El propietario de unas herramientas se presentó demandando su





jelos, impone la obligación de resarcir los daños y perjuicios que se justifiquen emergentes de este hecho—Civ., tom. 10, pág. 274, Ser. 5ª (tom. 57).

#### 9. Daños y perjuicios—La negativa del derecho a co-

devolución, pues el demandado las retenía indebidamente en su poder. En su defecto pedía el pago del valor de ellas y una indemnización de los perjuicios causados por esa retención. Se pidió el rechazo de la acción, sosteniéndose que las herramientas habían sido retenidas por haberlas recibido en prenda del actor, y a la vez demandaron á éste por la suma dada en préstamo y en garantía de la que recibió las herramientas referidas. Como se ve, la única defensa alegada por el demandado para negarse á la entrega de los objetos que reconoció tener en su poder, fué que éstos le fueron entregados en prenda con el objeto de garantir un crédito. La prueba producida para justificar la existencia de la prenda no dió resultado alguno favorable. Si la prenda legalmente no ha existido desde que no se comprobó, y el demandado reconoció la propiedad del actor sobre las herramientas que reclamaba, la obligación en que aquél se encuentra de restituirlas está expresamente consignada por los arts. 2758 y 2793 del Cód. Civ., sin que pueda eximirse de esa obligación por razón de la deuda alegada, puesto que ésta no es de aquéllas que hacen legítimo el derecho de retención—arts. 3939 y 3940, Cód. Civ. — Respecto de los daños y perjuicios, que también reclamaba el actor, solo acreditó haber perdido la ejecución de algunos trabajos que pudo obtener, pero cuyo valor no quedó establecido ni siquiera aproximadamente. En esta virtud, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos á que se refería la prueba producida y al derecho para exigirlos que acuerda el art. 1109, Cód. Civ., correspondía determinar su valor por medio del juramento estimatorio, fijándose á este efecto la suma prudencial dentro de la cual debe prestarse—art. 220, Cód. de Proc. — Debe observarse sobre este punto, que la suma indicada debe establecerse teniendo en cuenta que no obstante la retención de las herramientas, el actor ha podido ejercer su oficio, y que los perjuicios solo consisten en la diferencia de precio que resulta de trabajar con las propias herramientas, y en el valor de las obras que según los testigos dejó de practicar el actor por la causa expresada.

9. Cuando un Juez resuelve que no hay derecho á cobrar daños y perjuicios, no resuelve sobre su monto, pues ésta es una cuestión de hecho y aquélla de derecho; no hay pues ni prejuzgamiento, ni se emite opinión sobre el monto de los perjuicios. El interesado había recusado al Juez fundándose en que, provocada la sentencia que el Juzgado pronunció, había condenado al demandado á indemnizar el daño que le causó, y disponiendo que fijase el Superior la cantidad dentro de la cual debía prestarse juramento estimatorio. Pero, las consideracio-

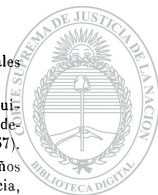


brar daños y perjuicios no basta para fundar una recusación por prejuzgamiento, si el Superior revoca la sentencia — Cív., tom. 10, pág. 383, Ser. 5ª (tom. 57).

**10. Daños y perjuicios** — Aun cuando el acto ilícito en que se fundan los daños y perjuicios hayan tenido lugar en

nes del fallo revocado, importaban un perjuicio sobre el punto que tenía que decidirse. Ese fallo, en efecto, negó la existencia de los perjuicios reclamados, á pesar de que el hecho criminoso perpetrado por el demandado por disparo de arma de fuego contra el actor, lo imposibilitó para trabajar y obtener lo necesario para su subsistencia y la de su familia; á pesar de que la bala no pudo ser extraída, y que se trataba de un delito de derecho criminal, de un hecho que implica forzosamente la existencia de perjuicios que mandan las leyes sean reparados, y no obstante las prescripciones terminantes de los arts. 1077, 1079 y sus concordantes del Cód. Civ. Habiendo, pues, el Inferior negado la existencia de perjuicios susceptibles de apreciación pecuniaria, como también el agravio moral causado por el delito, y pronunciándose por la absolución del demandado, había comprometido su amor propio en el sentido expresado, y no puede el mismo Juez, en conciencia, procediendo en sentido contrario á la opinión que tenía emitida, establecer equitativamente la indemnización que se debe satisfacer. Como el art. 368 del Cód. de Proc., en su inc. 8º, reconoce como causa de recusación haber emitido el Juez opinión ó dictamen acerca del pleito, y como el caso está comprendido en la disposición citada, recusó al Inferior, pero como se ha visto no se hizo lugar á la recusación.

10. Se trata de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el embargo indebido de un buque. El Inferior se declaró incompetente por tratarse de un asunto comercial correspondiendo en consecuencia el conocimiento el asunto á la jurisdicción mercantil. La Cámara revocó el auto diciendo: «Que aun cuando el carácter de comerciante del demandado fuere incontrovertible, esto no obstante, correspondería siempre el conocimiento del caso *sub judice* á la jurisdicción civil, porque no se trata de un acto comercial sino de hacer efectivas las obligaciones civiles que emergen del cuasidelito que se imputa al demandado; y tanto el hecho en que se funda, como las consecuencias legales que de él surgen, están exclusivamente regidas por el Código Civil, que es lo que determina la competencia de los jueces del fuero civil — art. 60 de la ley org. de los Tribs. — Que consideraciones análogas militan para desestimar el dictamen del señor Fiscal, desde que la demanda no tiene por objeto obtener embargo alguno de buques, ni se promueve siquiera cuestión que pudiera quedar comprendida en el art. 2.º de la ley de justicia federal».



jurisdicción federal, la acción corresponde á los tribunales ordinarios—Civ., tom. 10, pág. 423, Ser. 5ª (tom. 57).

**11. Daños y perjuicios**— La acción de daños y perjuicios corresponde á la jurisdicción civil, aun cuando el demandado sea comerciante—Civ., t. 10, p. 423, Ser. 5ª (t. 57).

**12. Daños y perjuicios**— No pudiendo fijarse los daños y perjuicios, no obstante haberse justificado su existencia, procede juramento estimatorio dentro de la suma que prudencialmente fijen los tribunales — Civ., tom. 11, pág. 82, Ser. 5ª (tom. 58).

**13. Daños y perjuicios**— La sentencia condenatoria en el juicio criminal hace indiscutible la existencia del hecho

---

11. Véase el número precedente y su nota.

12. Art. 220 del Cód. de Proc. Civ.

13. Resultaba de las constancias del proceso criminal agregado, que el Juzgado adoptando por resolución el dictamen fiscal, según el cual estaba plenamente probado el delito, dió por compurgado éste con la prisión sufrida. Hubo, pues, delito para la justicia penal, sin que sea razón bastante á quitarle este carácter la levedad de la lesión causada y la compurgación del mismo con la prisión preventiva sufrida. Ahora bien, según lo prevenido por el art. 1102 del Cód. Civ., después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado. Esta disposición aparta toda dificultad en la solución del punto discutido, pues siendo como es tan expícito su texto, no hay ya términos hábiles para contestar las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido el demandado. No podría hacerse argumento con el art. 1103, por correlación de principio ó de doctrina, so pena de confundir los efectos y los caracteres de un delito del derecho criminal con los caracteres y los efectos de un cuasidelito. El autor de un hecho puede ser absuelto conforme á la ley penal, sin que esta absolución afecte en lo mínimo sus responsabilidades ante la ley civil; entre otras razones, porque esta última castiga, con referencia á los hechos que causan daño á otros, hasta la culpa leve, y castiga los actos y las omisiones que escapan á las sanciones positivas de la primera. Ocupándose de esta materia, observa Bonnier, que cuando el acusado es declarado culpable, el principio de que se ha prejuzgado la cuestión civil es aplicable en toda su fuerza, espresando en seguida, que una solución negativa motivada en general sobre la no culpabilidad, se entiende de la no culpabilidad penal y deja intacto el derecho á las reparaciones civiles si ha lugar.



generador de los daños y perjuicios y la culpabilidad del autor—Civ., tom. 11, pág. 218, Ser. 3ª (tom. 58).

**14. Daños y perjuicios**—Incumbiendo la responsabilidad civil del delito á la empresa bajo cuya dependencia está el causante del hecho ilícito, debe ser condenada al pago de daños y perjuicios á que se haya hecho lugar—Civ., tom. 11, pág. 261, Ser. 5ª (tom. 58).

**15. Daños y perjuicios**—Siendo la demanda del damni-

---

14. Art. 1113 del Código Civil.

15. Tanto de los fundamentos de hecho aducidos en la demanda, como de los arts. 1077, 1078 y 1083 del Cód. Civ. que en ella se invocaron, se desprendía claramente que la acción deducida se fundaba en un delito que se atribuía al demandado, el que se hizo consistir en haber sido procesado y preso el demandante por haberlo hecho aparecer maliciosamente el demandado como presunto autor de un hurto de dinero. Habiéndose negado por el demandado la comisión de delito alguno que lo responsabilizase por las pérdidas é intereses y por el agravio moral sufrido por el actor, el resultado del juicio dependía exclusivamente, en cuanto á la responsabilidad del demandado, de la prueba que debió producir el demandante, de acuerdo con lo que dispone la ley 1ª, tít. 14, part. 3ª. De la prueba producida, tanto por el actor como por el demandado, no resultó que hubiese éste denunciado al actor como autor de hurto de dinero, de manera que no podía éste imputarle la prisión indebidamente sufrida. Según resultaba del testimonio del acta de denuncia formalizada por el demandado, éste se limitó á denunciar que en la noche anterior había dejado el negocio al cuidado del dependiente denunciado, hasta las diez desde las nueve; que poco después de las diez se retiró el dependiente, y cuando el denunciante, después de cerrar la puerta, fué á verificar el diario hecho, notó que en el cajón solo había próximamente 2 pesos en emisión menor, cuando, según su libro de caja, debía de haber de 107 á 108 pesos moneda nacional; que como á las ocho y media, el denunciante mismo vió en el cajón un billete de 50 pesos, otros de 5, de 2 y de 1; que el dependiente dijo que solo dos personas habían estado á servirse mientras estuvo solo en el negocio; y que para la averiguación correspondiente hacía esa denuncia. Como se ve, el demandado se limitó á denunciar la falta de dinero del cajón de su negocio, sin acusar al actor, ni imputarle el hurto, y esa denuncia no es un delito, porque es un hecho lícito que no reúne las condiciones requeridas por la ley para constituirlo. El actor no comprobó que la denuncia fuese falsa ni maliciosa para perjudicarlo, y si bien era verdad que de los hechos contenidos en la denuncia nacía la sospecha de que fuese el denunciado el



ficado por un delito sin acusar á persona determinada, un derecho propio, el autor de ella no contrae responsabilidad por los daños y perjuicios que el procedimiento judicial pueda ocasionar al sindicado — Civ., tom. 11, pág. 287, Ser. 5ª (tom. 58).

**16. Daños y perjuicios** — La falta de prueba sobre la culpabilidad del demandado en los hechos que fundan la acción por daños y perjuicios, hace procedente su rechazo, con costas — Civ., tom. 12, pág. 145, Ser. 5ª (tom. 59).

**17. Daños y perjuicios** — Para que proceda indemniza-

---

autor del hurto, en caso de que éste hubiese tenido lugar, debe tenerse en cuenta que esos hechos fueron reconocidos como ciertos por el actor, menos en cuanto á la pérdida del dinero. Pero, aparte de esto, del testimonio agregado resultaba que la detención del denunciado no fué originada por la sola denuncia del denunciante, ni que éste la pidiese, sino que se efectuó de oficio, en mérito de averiguaciones practicadas por la policía y de las que resultaban indicios suficientes para suponerlo autor del hurto, como espresamente se establecía en la resolución. No puede, entonces, imputarse al denunciante la prisión indebida del denunciado, ni responsabilizársele por los perjuicios y agravios que éste hubiese experimentado. Arts. 1071 del Cód. Civ. y 159 y 168 del Cód. de Proc. Crim.

16. Al actor, por su posición en el juicio, correspondía acreditar los extremos legales para hacer prosperar su demanda, estableciendo la responsabilidad del demandado en los términos de los arts. 1109 y 1112 del Cód. Civ. No probando su acción el rechazo se imponía — ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª — con costas — art. 221 del Cód. de Proc.

17. Este sumario está equivocado en la parte donde dice que «debe justificarse la culpa exclusiva del demandado». Tal cosa no se resolvió. La sentencia se dictó por mayoría de un voto; pero ninguno de los camaristas estableció ese extremo. Dos miembros de Cám., opinaron que la indemnización era procedente: otros dos que no, porque el juicio criminal había establecido la irresponsabilidad del agente, en cuyo caso no podía volverse sobre este punto en el juicio civil; y el 5º que resolvió la cuestión solo dijo que la prueba producida no demostraba la procedencia de la demanda, por cuanto los hechos debieron ser claramente demostrados de tal modo que se imponga á la conciencia judicial sin dejar lugar á dudas. Y no podía ser de otra manera, pues en los accidentes que dan lugar á los daños y perjuicios puede haber concurrencia de culpa, y esta circunstancia solo produce el efecto de disminuir la responsabilidad en cuanto al monto de la indemnización. Hay con-



ción de daños y perjuicios, debe justificarse la culpa exclusiva del demandado — Civ., tomo 12, pág. 162, Ser. 5ª (tom. 59).

**18. Daños y perjuicios** — Procede el juramento estimatorio si justificó el derecho y la existencia de daños y perjuicios no se ha probado su importancia — Civ., tom. 12, pág. 214, Ser. 5ª (tom. 59).

**19. Daños y perjuicios** — El locatario no puede reclamar daños y perjuicios del locador por el indebido desalajo si en oportunidad no puso en su conocimiento la demanda deducida por el tercero — Civ., tom. 12, pág. 379, Ser. 5ª. (t. 59).

**20. Daños y perjuicios** — Por la demora en el cumplimiento de una obligación de hacer escritura pública, solo proceden si no se cumple la sentencia que dispone su otorgamiento — Civ., tom. 13, pág. 102, Ser. 5ª (tom. 60).

**21. Daños y perjuicios** — Si la culpa es imputable á la

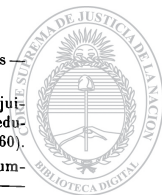
---

flicto de faltas, como dicen los autores. — Véase Aubry y Rau, tom. 4, pág. 755; Dalloz, Cód. Civil, tom. 2, pág. 235.

19. Arts. 1526 á 1530 del Cód. Civil.

20. Actor y demandado habían pactado verbalmente un contrato de compraventa de un inmueble. Aquél se presentó pidiendo que se condenara á éste á otorgar escritura pública y á indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Se ordenó la escrituración, pero no se hizo lugar á los perjuicios; en primer lugar porque no se demostró su existencia, y en segundo lugar porque el contrato verbal sobre venta de un inmueble, que no tiene plazo para la escrituración, no puede responsabilizar por los perjuicios, mientras el deudor no haya incurrido en mora. No hay mora mientras no se fije plazo para el cumplimiento de la obligación de escriturar, y mientras no se haya dejado vencer ese término sin cumplir lo mandado por la ley.

21. También este sumario es deficiente. La culpa puede ser imputable á la víctima, y puede al mismo tiempo ser imputable al autor del hecho. En este caso habría concurrencia de culpa, y siempre sería procedente una indemnización, aunque más reducida. La concurrencia de culpa de ambas partes, no exonera de responsabilidad al autor del daño. En el caso del sumario, la Cám. dijo: « La falta de culpabilidad de la Empresa demandada es manifiesta, y así lo demuestra el Inferior en juiciosos razonamientos. No existen, de consiguiente, términos en derecho para imponer una reparación que solo procedería dentro de los principios generales que definen ó caracterizan el cuasidelito cuando pudiera imputarse al autor del hecho ó á sus agentes culpa, dolo ó ne-



víctima, no procede indemnización de daños y perjuicios — Civ., tom. 13, pág. 123, Ser. 5ª (tom. 60).

**22. Daños y perjuicios** — La acción de daños y perjuicios por falta de cumplimiento de una sentencia, debe deducirse ante el Juez en turno—Civ., t. 13, p. 287, Ser. 5ª (t. 60).

**23. Daños y perjuicios** — Causados por la falta de cum-

pligancia; ó en casos como el ocurrente, cuando se hubiere señalado una infracción á las disposiciones que reglamentan la circulación de los tranvías — arts. 1109 y 1113, Cód. Civ., y Ordenanza Municipal de 9 de Octubre de 1888. — No es exacto que la Compañía haya reconocido los perjuicios, como se afirma expresando agravios, y que solo se mostrara disconforme con el monto de la suma reclamada por creerla exagerada; pues lo contrario resulta de su escrito, donde espone, entre otras cosas, que se trata de un hecho imputable solo al demandante, pues debido á su imprudencia es que se produjo el accidente.»

22. Esta nueva demanda no puede acumularse á la anterior ya juzgada y sentenciada por cuanto ella había ya terminado definitivamente. No puede sostenerse que por la nueva demanda solo se solicita la práctica de actos y diligencias tendientes á obtener el cumplimiento de la sentencia, pues que precisamente se trataba de hacer práctica la pena que ésta indicaba para el caso que no se cumpliera con la obligación de entregar la cosa materia del litigio, acción completamente distinta y separada, que debe iniciarse por la vía y Juez correspondiente.

23. El art. 532 del Cód. de Proc., presupone, como se desprende de sus propios términos, una sentencia que contenga condena de pagar cantidad líquida procedente de perjuicios, como consecuencia de un juicio sobre el particular. La sentencia cuya ejecución se pedía decía así: «Por estos fundamentos, fallo: condenando al demandado á reducir á escritura pública, en el término de diez días, el boleto de compra-venta, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses.» Esta sentencia no contiene condena de pagar cantidad líquida de perjuicios, sino que dispone que la obligación de hacer que impone al vencido, se resolverá en indemnización de pérdidas é intereses en caso de inejecución, lo que es muy diferente. La controversia había versado sobre escrituración del boleto, y no sobre daños é intereses; mal podía, pues, el fallo la de referencia contener condena sobre esto. Si el vencido se resistió á otorgar la escritura, la acción del vencedor no podía ser otra que compelerle al pago de los daños é intereses que la inejecución le hubiera acarreado, mediante el competente juicio ordinario en que se demostrase la existencia y entidad de los mismos en los términos de los arts. 519, 520, 521 y 629 del Cód. Civ. No era el caso de ejecución de sentencia, porque la de que se trataba no



plimiento á una obligación de hacer, no pueden ser fijados por simple liquidación: requieren juicio en forma.—Civ., tom. 13, pág. 335, Ser. 5ª (tom. 60).

**24. Daños y perjuicios**—La indemnización debe ser proporcionada á los justificados y no á los reclamados—Civ., t. 14, pág. 5, Ser. 5ª (tom. 61).

**25. Daños y perjuicios**—El que consigue la suspensión de una obra es responsable de los daños y perjuicios si resulta que carecía del derecho invocado — Civ., tom. 14, pág. 8, Ser. 5ª (tom. 61).

**26. Daños y perjuicios**—No procede indemnización de daños y perjuicios si la culpa del accidente es imputable á la víctima—Civ., tom. 14, pág. 285, Ser. 5ª (tom. 61).

**27. Daños y perjuicios**— Para que una omisión pueda

---

condenó á pagar cantidad procedente de perjuicios; sólo procedía acción ordinaria por indemnización de daños y perjuicios con sujeción á los arts. citados del Cód. Civ.

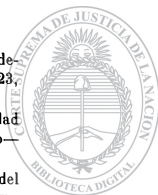
24. Los jueces siempre resuelven con arreglo á lo alegado y *probado*. La prueba es la base de toda indemnización. Aunque el monto no se demuestre, debe comprobarse que efectivamente se ha sufrido el daño. Así debe determinarse por el juez—art. 220 del Cód. de Proc.

25. Se constató que la parte había provocado injusta é ilegalmente la suspensión de la obra; luego ella debía responder de las consecuencias del hecho, en cuanto éste haya lesionado los derechos é intereses de la otra, con arreglo á la doctrina del art. 1109 del Cód. Civ. El artículo citado, dice así: «Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil».

26. Este sumario no puede considerarse como formando parte de la jurisprudencia de la Cám. Enablada la acción de daños y perjuicios fué rechazada por el trib. en la siguiente forma: dos de sus vocales dijeron que la indemnización era procedente porque había habido culpa de parte del autor; uno dijo que no había habido tal culpa, y dos opinaron que no procedía la acción por cuanto el juez de lo Criminal se había pronunciado declarando en la querrela criminal, la irresponsabilidad del agente, debiendo considerarse que ese pronunciamiento hacía cosa juzgada para lo civil. No entraron á resolver si había habido ó no cuasidelito en la ejecución del hecho.

27. La acción de daños y perjuicios, se fundaba, en que el demandado no dió cumplimiento en oportunidad á la obligación de hacer





fundarla, el actor debe justificar la obligación que tenía el demandado de ejecutar el hecho omitido—Civ., tom. 13, p. 323, Ser. 3ª (tom. 62).

**28. Daños y perjuicios**—Cuando se demanda cantidad líquida y no se justifica, no procede juramento estimatorio—Civ., tom. 15, pág. 311, Ser. 3ª (tom. 62).

**29. Daños y perjuicios**—Causados por la resolución del

transferencia de las libretas que acreditaban un gravamen hipotecario que pesaba sobre un campo vendido, resultando del incumplimiento de tal obligación que no pudiera llevarse á efecto la venta que del mismo campo había verificado el actor á tercera persona. Aún admitiendo como cierto el hecho imputado al demandado, él no bastaba en manera alguna, á motivar la demanda, toda vez que en ningún caso ese hecho constituiría un antecedente esencial para la subsistencia del contrato, cuya inexecución ó falta de cumplimiento inhabilitara al actor para disponer libremente del inmueble comprado. La exigencia de ese requisito, no importa establecer una prohibición de enajenar el inmueble hipotecado, á lo que está autorizado el propietario por el art. 3157 del Cód. Civ.

28. La Cám. al resolver este punto dijo: «No sería el caso de aplicar las reglas consignadas en los arts. 219 y 220 del Cod. de Proc., por no existir en autos elemento alguno para establecer las bases sobre que haya de hacerse la liquidación, ó que nos sirviera de norma de criterio para determinar la cantidad dentro de la cual debía el actor prestar el juramento estimatorio. Por otra parte, los citados arts. no serían aplicables al caso *sub-judice*, porque desde que la demanda versa sobre cobro de cantidad determinada de pesos provenientes de daños y perjuicios, con arreglo al art. 104, al actor incumbía probar todos los hechos alegados y que, por haber sido controvertidos, constituyan los puntos sometidos á la decisión judicial—arts. 216 y 217, Cod. de Proc.—Esta es la interpretación que se ha dado á los arts. 219 y 220, entre otros, en las causas que se registran en las págs. 150, tom. 3; 321, tom. 6, y 571, tom. 8, de la ser. 1ª de Jur. Civ.»

29. Los perjuicios emergentes de la falta de cumplimiento de un contrato de locación están regidos por los arts. 1579, 511 y 1109 del Cód. Civ. Se tuvo en cuenta para la fijación del monto de los perjuicios, la diferencia entre el alquiler que puede producir el inmueble después de rescindido el contrato, y el que abonaba el inquilino; como asimismo la dificultad del propietario en encontrar nuevo inquilino el mismo día en que se recibe y lo que le haga perder el alquiler hasta el día en que encuentre nuevo arrendatario, y también todo el tiempo en que el propietario se vió privado del alquiler, pues las llaves se habían depositado en el juzgado para que el dueño las recibiese.



contrato de locación á término fijo, consisten en la diferencia del alquiler que perciba el locador y el que debía pagar el locatario—Civ., tom. 13, pág. 370, Ser. 5ª (tom. 62).

**30. Daños y perjuicios**—Solo procede el pago de daños y perjuicios si existe prueba de que efectivamente se han sufrido; no basta justificar el derecho á reclamarlos—Civ., tom. 16, pág. 402, Ser. 5ª (tom. 63).

**31. Daños y perjuicios**—La posesión acordada por sen-

30. Los arts. 1067 y 1068 del Cód. Civ. rigen el caso; y el art. 1109, es complementario de aquéllos. La acción deducida se fundaba en el art. 1109 del Cód. Civ., según el cual todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio, estando regida esta obligación por las disposiciones relativas á los delitos del derecho civil. No basta para el legítimo ejercicio de la acción que acuerda el art. 1109, que exista un hecho ilícito, ni éste se considera punible para los efectos civiles, sino cuando hubiese daño causado ú otro acto exterior que lo pueda causar; y solo hay daño cuando se causare á otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, ó directamente en los casos de su posesión ó dominio, ó indirectamente por el mal hecho á su persona, ó á sus derechos ó facultades—arts. 1067 y 1078.—En el caso ocurrente, si bien se habla comprobado que el demandado realizó un acto ilícito ejecutando al actor, y haciéndole embargar sus bienes, no se justificó en manera alguna que ese embargo hubiese causado perjuicio efectivo al demandante ni que tampoco le hubiese privado de ninguna ganancia; debiendo tenerse presente que si el embargo decretado á petición del demandante se hizo efectivo, fué porque el mismo ejecutante los ofreció á embargo. No solo no se comprobó el monto de los daños y perjuicios reclamados sino tampoco que ellos existiesen en realidad, de suerte que no podía dejarse la determinación de los mismos para ser materia de otro juicio, como lo dispone el art. 219 del Cód. de Proc., y menos aun si se tiene presente que en la demanda no se hizo estimación de esos daños y perjuicios.

31. Para que proceda una acción de daños y perjuicios, preciso es que se trate de un hecho ilícito ejecutado con culpa ó imprudencia—arts. 1066, 1109 y 1110 del Cód. Civ.—Cuando el demandado entró en posesión del terreno que era motivo del pleito, fué en razón de una sentencia dictada por un Trib. competente, y así no pudo mediar un hecho ilícito, ni culpa ó negligencia de su parte. Entró en posesión del terreno después de alcanzar ese derecho en buena ley, esto es, mediante un juicio en forma. Vencido el actor en un interdicto, dedujo contra el demandado juicio ordinario de reivindicación, en que discutieron su me-



tencia, aun cuando resulte indebida, no puede considerarse acto ilícito que pueda engendrar responsabilidad por los daños y perjuicios—Civ., tom. 17, pág. 49, Ser. 3ª (tom. 64).

**32. Daños y perjuicios—Al que exige los daños y per-**

jor derecho de poseer, recuperando el terreno. Mientras duró el litigio, el tiempo que no se para, corrió y produjo un cambio en las condiciones de la propiedad raíz, desventajosa para el actor, puesto que afirmaba que valía, en la época de la demanda el terreno, menos que en la época en que comenzó el pleito. Aceptando en hipótesis esa disminución de valor en el terreno, no es legal perseguir al demandado por su indemnización. La disminución del precio efectuado por el retardo en recuperar la posesión del terreno, no es imputable al demandado, pues, como ya se ha dicho, entró en posesión de él por mandato judicial, y no por medios reprobados. La acción carece de base, pues. En los casos de reivindicación no cabe condenación de daños y perjuicios, sino cuando se producen los extremos previstos por los arts. 2784 y 2787, cosa que no se había alegado, ni menos probado. Pero, en todo caso, no se justificó que el terreno no se hubiese vendido á mejor precio que el que tuviera en ese entonces, por estorbarlo el pleito de reivindicación. No constaba que el causante del actor hubiese concertado un contrato de venta del terreno á precio ventajoso, y que se hubiese frustrado por causa del pleito. De manera, que la existencia del daño no estaría constatada, como lo exige el art. 519, Cód. Civ.

32. El demandado fué condenado á escriturar un boleto de compraventa de un inmueble, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de daños y perjuicios conforme á lo que prescribe el art. 1187 del Cód. Civ. No habiéndose dado cumplimiento á lo mandado en la ejecutoria recordada, se promovió otro juicio con el propósito de hacer efectiva la condenación subsidiariamente en ella impuesta. Al efecto; el actor estimó los daños y perjuicios en la suma de 50.000 pesos moneda nacional, cantidad que importaba la utilidad que debió proporcionarle por la transferencia que del boleto de compraventa había realizado en favor de un tercero. El demandado desconoció la sinceridad del acto jurídico invocado por el demandante, sosteniendo que era simulado, con el propósito de perjudicarlo, y el juez así lo estableció en el pronunciamiento recurrido, por el cual de consiguiente, se rechazaba la acción instaurada. Aun cuando se prescindiese de la simulación y de las presunciones que existían para declararla, las cuales el juez analizaba prolijamente y con sano criterio, siempre procedería, el rechazo de la demanda, en mérito de una razón decisiva; la falta de prueba que incumbía producir al actor, para demostrar la efectividad de la transferencia verificada al tercero, acto del cual había derivar los perjuicios reclamados. Esta prueba no la constituyen en manera alguna, ni un boleto otorgado ni la decla-



juicios fundado en la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, corresponde justificarlos; los instrumentos privados cuya simulación aparece evidente no forman prueba—Civ., tom. 17, pág. 129, Ser. 5ª (tom. 64).

### 33. Daños y perjuicios—El locador de servicios á tanto

ración prestada por el firmante de la otra transferencia, pues á estos actos no puede atribuirse mayor importancia que la que revestiría un testimonio singular, en este caso prestado por persona vinculada estrechamente al actor, por los mismos antecedentes constitutivos del juicio, y por la amistad que había declarado tener con él.

33. El actor sostuvo que por el contrato celebrado, el demandado le encargó los trabajos de adoquinado que éste debía ejecutar por cuenta de la Mun., en la calle Rivadavia, entre Flores y Caballito; mientras que la parte demandada negó ese hecho, afirmando que contrató la pavimentación por medida, sin designación de número de medida, ni medida total, á razón de un peso 40 cent. el m. cuad., 50 cent. el met. cub. de terraplén ó desmonte, y 15 cent. la colocación del cordón de vereda. Ninguna prueba produjo el demandante para comprobar la existencia del contrato en la forma que decía haberlo celebrado, á no ser la de posiciones absueltas por el demandado, que no le fué favorable, lo que hacía de estricta aplicación la ley 1ª, tít. 14, part. 3ª. Debe también tenerse presente, que si el actor hubiese sido subcontratista de todos los trabajos contratados por el demandado con la Mun., es de suponer que habrían celebrado un contrato escrito, atenta la importancia de los trabajos á practicarse, mientras que si el contrato fué solo por medida y sin designación total de medida, no era necesario el contrato escrito, todo lo que, además de la falta de prueba por la parte actora, hacía más verosímil el contrato en las condiciones que sostuvo el demandado haberlo celebrado. Establecido, pues, que el actor no contrató con el demandado para hacerse cargo de todos los trabajos de pavimentación que éstos habfan contratado con la Mun., sino que únicamente ajustaron el trabajo por medida, sin designación de número de medida ni de medida total, era de fácil resolución las cuestiones principales que surgían de la litiscontestación, relativas al aumento de precio y á la indemnización de pérdidas é intereses. Es de observarse que el actor, para cobrar un aumento de precio sobre el convenido, no se fundaba en el contrato ni en disposición alguna legal, sino en que el demandado le prometió hacerle participar del mayor precio que él obtuviera de la Mun., convenio que el demandado negó, y que en manera alguna comprobó ni pretendió comprobar el actor. En esta parte, debía entonces ser desestimada la demanda, puesto que el locatario cumple con satisfacer el precio estipulado, sin que el locador, bajo ningún pretexto, pueda pedir aumento en el precio cuando la obra ha sido contratada por una suma



la medida sin designación de total, no puede demandar daños y perjuicios por la paralización de la obra — Civ., tom. 17, pág. 152, Serie 5ª (tom. 64).

**34. Daños y perjuicios** — Es improcedente la acción de daños y perjuicios contra el denunciante, si el sumario se ha sobreseído provisoriamente — Civ., tom. 17, pág. 209, Ser. 5ª (tom. 64).

**35. Daños y perjuicios** — La diversa responsabilidad de

determinada, aunque encarezcan el valor de los materiales y de la obra de mano, circunstancia esta última, que tampoco se intentó justificar — art. 1633 del Cód. Civ. — Habiéndose convenido los trabajos por medida, sin designación de la medida total, el actor no estaba obligado á practicar trabajos de una medida mayor que la estipulada, y en cualquier momento pudo dar por resuelto el contrato exigiendo el pago de las medidas concluidas, conforme á lo que dispone el art. 1639 cuando por cualquier motivo no le conviene la prosecución de los trabajos.

34. De las pruebas producidas, y espediente criminal agregado, resultó que el demandado se había limitado á denunciar el delito de que fué víctima, habiendo sido la autoridad competente quien, después de las averiguaciones del caso, procedió á la detención del demandante. Estando reducida á esto la intervención del demandado, no había en su conducta nada de reprochable, puesto que al efectuar la denuncia ejerció un derecho que le está espresamente acordado por el art. 155 del Cód. de Proc. en lo Crim. Los perjuicios que pudo haber sufrido el demandante á consecuencia de esa denuncia, no son á cargo del demandado, desde que éste se limitó á hacer uso de su derecho — art. 1071, Cód. Civ. — La irresponsabilidad del demandado no solo resultaba de la disposición legal citada, sino también del art. 168 del Cód. de Proc., en lo Crim., según el cual el denunciante no incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia. En el caso occurrente, no se justificó que el denunciante hubiese cometido el delito de calumnia, y lejos de eso, todos los antecedentes de la causa, y el mismo sobreseimiento provisional, indicaban que por su parte no había habido la menor intención de calumniar. Esos mismos antecedentes revelaban que tampoco podía imputarse al demandado culpa ó imprudencia. No pudiendo imputarse al demandado, dolo, culpa ó negligencia, la acción deducida era completamente improcedente, pues ella supone necesariamente la existencia de alguna de esas circunstancias — arts. 1067 y 1107, Cód. Civ.

35. Para resolver una escepción dilatoria debe estarse al concepto que á su demanda dé el actor — sin perjuicio de que el Juez, al sentenciar, le dé á ésta el que se merezca, — y así ocurre que á una demanda de mayor cuantía, por ejemplo, no le pueda ser opuesta la escepción



los demandados por daños y perjuicios, no puede ser opuesta como escepción y hace procedente la acumulación de los juicios — Civ., tom. 17, pág. 291, Ser 5ª (tom. 64).

**36. Daños y perjuicios — Justificada en la jurisdicción**

de incompetencia, porque el demandado sostenga que ella es de menor cuantía, basado en que no adeuda todo lo que le reclama el actor. El fundamento de la demanda en el caso que nos ocupa, estribaba en la responsabilidad que á dos empresas atribula el actor, siendo este el concepto que debía tener presente el Juez, sin que esto importe un prejuzgamiento, pues á su tiempo debe pronunciarse espresamente acerca de la procedencia de la demanda contra las dos empresas, sea condenándolas, sea absolviéndolas, ó ya absolviendo á una de ellas y condenando á la otra. Existía la identidad de cosas y de acciones, de manera que, aun cuando fueran diversas las personas demandadas, procedía la acumulación para impedir se divida la continuidad de la causa. Á esto no se opone el art. 74 del Cód. de Proc., pues no lo prohíbe espresamente, y por cuanto la palabra «parte» no debe tomarse en el sentido de «persona», sino en el de «la oposición de intereses». Las acciones no se contradecían, teniendo una misma sustanciación, y no se invocaba distinto fuero; esto último sin perjuicio de la resolución que debe dictar oportunamente el Juez acerca de su competencia.

36. El actor demandó á una empresa de tramways, por daños y perjuicios, procedentes de las lesiones corporales que le había inferido un coche de dicha compañía, por imprudencia del cochero que lo manejaba. Hizo presente que el mencionado cochero había sido juzgado ante el Juez correccional y condenado como culpable por el mismo hecho, esto es, por el choque producido entre el coche y un carruaje de plaza. Corrido traslado de la demanda, la empresa negó la existencia de los hechos alegados en aquélla, así como también la de los daños y su monto. Ante el Juez correccional se inició el proceso correspondiente contra el conductor indicado y el cochero que manejaba el carruaje de plaza. En la oportunidad del art. 579 del Cód. de Ins. Crim., el Juez correccional convocó á las partes á audiencia verbal, á efecto de que alegaran sobre la prueba. En esa audiencia, estuvieron presentes, juntamente con el Juez, el Fiscal y el Defensor de pobres. Previa lectura que se hizo de la causa por el actuario, el Fiscal dijo: «que de las constancias de autos resultaba plenamente justificado que, con motivo de un choque que hubo entre el coche de plaza y el tramway, cuyo conductor era el otro procesado, recibió el querellante las lesiones, de resultados de las cuales se le había amputado el dedo meñique. Que constando que las lesiones habían sido causadas por imprudencia de los procesados, puesto que en contra de los reglamentos vigentes cruzaban una bocacalle al trote de los caballos, no al paso como corresponde, y teniendo



criminal la culpabilidad del dependiente, procede la indemnización de daños y perjuicios contra el principal. — Civ., tom. 18, pág. 13, Ser. 5ª (tom. 65).

**37. Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento de un contrato no puede originar indemnización de daños y perjuicios, si se estipuló una seña para garantizarlo—Civ., tom. 19, pág. 173, Ser. 5ª (tom. 66).

**38. Daños y perjuicios**—El desalojo indebido, aun cuan-

en cuenta la gravedad de la lesión, pedía se les aplicara á los encausados un mes de arresto, de acuerdo con el art. 18, inc. 2º del Cód. Pen.» El defensor se adhirió á lo pedido por el Fiscal. Y el Juez condenó al conductor á un mes de arresto. Tenemos entonces, que la culpabilidad del conductor del tramway, quedó establecida en el juicio criminal, lo que vale decir que hay cosa juzgada sobre el particular, y que ya no es posible reabrir la discusión sobre ese punto. En efecto, el art. 1102 del Cód. Civ., dispone: «Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del condenado.» En el caso presente, ya no era posible contestar la existencia del hecho constitutivo del delito de culpa ó imprudencia, declarada por la sentencia del Trib. correccional, ni impugnar la culpa del condenado declarada por la sentencia de referencia. Así, justificada en forma la existencia de culpa y la culpabilidad del cochero, mediante la sentencia del Juez correccional, la empresa demandada estaba en la obligación de reparar los perjuicios causados, de conformidad con lo que prescriben los arts. 1077, 1109, 1113 y concordantes del Cód. Civ.

37. Cuando se dan arras para garantir el cumplimiento del contrato, la indemnización consiste tan solo en el monto de la suma convenida. Véase: verb. *Arras*, n° 1.

38. En la demanda deducida se hacían valer dos acciones diferentes aunque ambas tenían el mismo objeto: obtener la indemnización de pérdidas é intereses que el actor afirmaba haber sufrido. Una de esas acciones es la que nace de los delitos del derecho civil, y que la ley acuerda al damnificado para obtener la reparación del perjuicio sufrido. La otra es la que se asigna en el contrato de locación, y que tiene el locatario para demandar el pago de las mejoras necesarias ó útiles, cuando el contrato se ha rescindido sin culpa suya. Demandante y demandado estuvieron de acuerdo en el hecho de haber contratado la sublocación del inmueble referido, obligándose el subarrendador á no despedir al actor hasta que el dueño de la casa dispusiera de ella, como resultaba de los términos del convenio testimoniado agregado. También



do se haya concedido judicialmente, importa un delito del derecho civil que hace pasible á su autor de los daños y perjuicios causados—Civ., tom. 19, pág. 200, Ser. 3ª (tom. 66)

### 39. Daños y perjuicios—El fiador del contrato de loca-

se justificó que el actor compró al subarrendador la llave del negocio que había en la casa, lo que implicaba comprar el derecho de usufructuar las construcciones durante la locación. Constaba igualmente que el subarrendador demandó al subarrendatario por desalojo, y lo hizo desalojar fundándose en que el propietario por medio de una carta, le había pedido la casa alquilada, habiéndose fundado la sentencia de desalojo en esa carta. Mientras tanto, absolviendo posiciones el arrendador confesó que el propietario locador era una persona distinta de la que firmaba la carta, de manera que, el pedido de la casa hecho por el supuesto propietario, no autorizaba al subarrendador para hacer desalojar al inquilino. Al valerse el demandado de la referida carta para obtener el desalojo del subinquilino procedió dolosamente, induciendo en error al juez que dictó la sentencia de desalojo, que lo hizo en la creencia de que era el propietario quien pedía el desalojo. Esa acción dolosa, definida por el art. 931 del Cód. Civ., constituye en realidad un delito del derecho civil, puesto que fué ejecutado á sabiendas y con intención de dañar al actor—art. 1072.—Y no quedaba duda alguna del dolo con que el demandado había procedido, si se tiene en cuenta que continuó como locatario del inmueble que en parte sublocó al actor y que sublocando después á otras personas, la parte que éste ocupaba obtuvo un precio casi doble del que le pagaba el demandante. La sentencia de desalojo dictada á favor del demandado y que éste invocaba para escusar la responsabilidad que trataba de hacer efectiva el actor en el juicio, en nada podía obstar para el éxito de la demanda, porque ésta se fundaba precisamente en que el subarrendador obtuvo dolosamente esa sentencia en el juicio sumario de desalojo, invocando la carta—orden de la referencia, como si ella fuese del propietario locador, cuando en realidad no lo era. Por otra parte, la sentencia dictada en el juicio sumario de desalojo no priva á los litigantes de hacer valer sus derechos en juicio ordinario sobre rescisión ó cumplimiento del contrato de locación; y por consiguiente, el demandado no podía invocar aquella sentencia para escepccionarse con la autoridad de la cosa juzgada, y menos aun cuando en el pleito se acciona *ex-delicto*, puesto que su objeto es muy diferente que el que tenía el juicio sumario de desalojo. El acto doloso ilícito del subarrendador reúne todas las circunstancias requeridas por los arts. 1067 y 1086 del Cód. Civ., puesto que originó al actor un daño susceptible de apreciación pecuniaria.

39. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197 del





ción, no está obligado á pagar daños y perjuicios por la rescisión, si la fianza se ha estinguido por negligencia del propie-

Cód. Civ.—Por el art. 10 del contrato se estableció clara y terminantemente que: «Si el inquilino dejara de pagar tres meses consecutivos de alquileres, este contrato quedará rescindido y caducado si así lo pidiere el propietario, sin perjuicio de ser responsable el inquilino y el fiador solidario de los diez años de alquiler que adeudase. Estas dos penas serán impuestas por la simple mora en que pudiera incurrir el inquilino respecto de los tres meses de alquiler antedicho». Esta cláusula, por más que sea dura, no es contraria á la moral ó á la ley en la parte en que hace responsable al locatario y á su fiador, en caso de rescisión del contrato, del importe de los diez años de alquiler. Se trata pura y exclusivamente de una pena como en la misma cláusula se espresa, que debe aplicarse al locatario ó á su fiador en el caso en que el primero debe transcurrir tres meses sin abonar el alquiler convenido; pena excesiva si se quiere, pero aceptada y convenida entre las partes. *Dura lex sed lex*. Si el fiador firmó el contrato como tal, y por el mismo hecho se dió esa ley dura y excesiva, el demandado, no puede ni debe desconocerla bajo el pretexto de ser ella repugnante á la moral ó á la ley. El demandado afirma, en efecto, que no es lícito cobrar dos arrendamientos, y que es contrario á la esencia del contrato respectivo cobrar arrendamientos, sin entregar el uso y goce de la cosa arrendada. Pero no es sino un juego de palabras, porque, según la cláusula, el pago del importe total de los arrendamientos, en caso de mora, se impone como una pena, como una multa en dinero, por más que para fijarla se tome como base el importe de los mismos arrendamientos hasta el fin del contrato. No existen, pues, dos arrendamientos sobre una misma cosa, lo que sería legalmente imposible, y si era cierto que el actor había arrendado á una tercera persona, la finca objeto del contrato, también lo era que este contrato quedó rescindido, según así resultaba de un testimonio agregado. Rescindido el contrato por mora del locatario en el pago de los alquileres, llegó para el actor la oportunidad de hacer efectiva la pena estipulada, y si se demanda judicialmente la aplicación de tal pena, que pecuniariamente se traduce en el importe de los arrendamientos que se hubieran devengado hasta el fin del contrato, esto no quiere decir que esté obligado á entregar el uso y goce del inmueble, lo que importaría prolongar ó continuar el mismo contrato definitivamente rescindido por culpa del locatario. No siendo la cláusula en cuestión contraria á la ley ó á la moral, debe cumplirse, por más que fuera dura y excesiva la pena que comporta en sus términos. El demandado alegó, sin embargo—y el actor no lo negó,—que nunca fué interpelado para el pago del alquiler mensual que el locatario dejó de pagar, pues fuera de que hacía ya un año que el fiador había fallecido cuando se produjo la mora del deudor, lo que hacía imposible toda in-



tario que haya hecho imposible la subrogación de los privilegios que la ley concede al locador—Civ., tom. 20, pág. 79, Ser. 5º (tom. 67).

terpelación á dicho fiador, el actor negó haber sabido á la fecha en que la mora se produjo, que el demandado fuera el heredero del fiador, y éste no comprobó ni intentó probar que el propietario conocía en la misma época tal circunstancia. Por lo demás, el art. 40 del contrato disponía que las dos penas, esto es, la rescisión del contrato y la responsabilidad del inquilino y su fiador por los diez años de alquileres, ó más bien dicho, por los alquileres correspondientes al tiempo que faltaba para la terminación del contrato, serían impuestos por la simple mora en que pudiera incurrir el inquilino respecto á la falta de pago de tres meses de alquiler, lo que seguramente importa decir, que el inquilino incurría en mora por el mero vencimiento del plazo indicado. De lo contrario, no tendría aplicación ni sentido las palabras «simple mora» empleadas en el contrato. Pues bien, si estaba convenido que la simple mora, que el mero vencimiento del plazo de tres meses sin pagar el alquiler, debía producirlo, no era en tal caso necesaria la interpelación de cuya falta se quejaba el demandado, según así lo dispone el art. 509, inc. 1º del Cód. Civ. Tampoco había sido necesaria la intervención del fiador en el juicio de rescisión del contrato y de que se quejaba también, porque como él mismo lo sostuvo, la solidaridad de la fianza no quita á la misma el carácter de obligación accesoria y no hace al fiador deudor directo de la obligación principal—art. 2004.—Después de esto, el demandado no puede, contradiciéndose á sí mismo y valiéndose del error en que había incurrido el actor al iniciar la demanda, sostener que su autor, el fiador, se obligó como principal fiador, para deducir en seguida que el actor debía interpelarlo respecto del pago de alquileres y citarlo para que interviniera en el juicio de rescisión. El demandado no comprobó que la casa locada no perteneciera al actor sino á un hijo del mismo, ni menos que ese hijo fuera menor de edad, hechos que se insinuaron en el escrito de contestación á la demanda, aun cuando no se afirmaron terminantemente. No obstante todo esto, la demanda no podía en el caso prosperar, porque la fianza en que ella se fundaba se encontraba legalmente estinguida. El art. 2043 del Cód. Civ. dispone que la fianza se estingue cuando la subrogación á los derechos del acreedor, como hipoteca, privilegios, etc., se ha hecho imposible por un hecho positivo ó por negligencia del acreedor. En el caso, es indiscutible que el actor tenía privilegio sobre todos los muebles introducidos en la finca por el locatario, y sobre todas las construcciones hechas en la misma, que debían considerarse como muebles, si es que eran levantables, y si es que el inquilino podía levantarlos, como lo podía en realidad—art. 3883.—Ese privilegio, garantía no solo el pago de los alquileres adeudados,



**40. Daños y perjuicios**—No siendo el embargo del inmueble un impedimento para venderlo, su existencia no puede

sino también todas las otras obligaciones del locatario derivadas del contrato de locación—art. 3884.—Ahora bien; esas construcciones eran de gran importancia, según el actor, que las estimaba en la suma de 45.000 pesos nacionales, ó sean próximamente el doble de la cantidad demandada. Si haciendo uso de su privilegio las hubiera embargado cuando solicitó la rescisión, no hubiera tenido necesidad de demandar al fiador; ó si haciendo uso de su derecho, hubiera dirigido su acción contra el fiador, éste, subrogado en sus derechos, hubiera podido ejercitar el privilegio del propietario y nada hubiera perdido. El propietario nada hizo, sin embargo, por ejercitar su privilegio, por embargar esas construcciones tan valiosas, y aun cuando pretendía excusarse con que ellas fueron sustraídas por un tercero, esa circunstancia no lo excusa en realidad, pues á pesar de ella, pudo muy bien embargarlas dentro del mes que la ley acuerda. Ni siquiera puede decir que ese tercero ocultó de tal manera las construcciones en cuestión, que le fuera imposible encontrarlas, porque no es posible ni verosímil que puedan ocultarse á los ojos de la policía, movida por el interés particular, los materiales de un galpón de 25 metros de frente con 70 de fondo, dividido en cocheras, pesebres, etc., etc., y todos los demás muebles accesorios de un gran negocio de cochería y caballeriza. Si el propietario no ejercitó su privilegio, ni nada hizo por ejercitarlo, dejando perder materiales tan valiosos, es evidente que por su culpa y negligencia hizo imposible al fiador la subrogación de su derecho privilegiado, y es evidente también que legalmente la fianza quedó extinguida—art. 2043 cit.

40. El actor intentó probar que la propiedad que se le embargó en un juicio ejecutivo la vendió por 3.500 pesos, después de levantado el embargo, cuando con anterioridad había celebrado varios contratos de venta por 17 y 18.000 pesos, los cuales no pudo llevar á cabo por el embargo de la propiedad. Para establecer la responsabilidad del embargante por la diferencia de precio en la venta de la propiedad, ocurre preguntar: ¿ha sido el embargo de la finca lo que le impidió consumir la promesa de venta á que se refiere el actor? ¿Acaso podría ser inconveniente serio para la enajenación la existencia de un embargo decretado para responder á un crédito de menos de 3.000 pesos, sobre una propiedad por la que se ofrecía 17 ó 18.000? Nadie podrá sostenerlo, porque nada más fácil, tratándose de un compromiso formal de venta, que solicitar el levantamiento del embargo á los efectos de escrituración y su substitución en una mínima parte del precio. Si el propietario hubiera tenido intención de vender su propiedad, habría podido hacerlo con toda facilidad en la forma indicada. Si no lo hizo, suya es toda la culpa y suyas las consecuencias buenas ó malas de sus propios hechos—art. 1411, Cód. Civ.—No pudiendo sostenerse que el embargo haya



fundar daños y perjuicios, aun cuando por testigos se justifique una diferencia en el precio — Civ., tom. 20, pág. 93, Ser. 5ª (tom. 67).

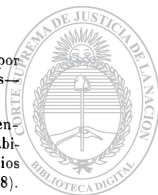
**41. Daños y perjuicios**—Puede agregarse como prueba el espediente en que se funde la reclamación por daños y perjuicios—Civ., tom. 20, pág. 209, Ser. 5ª (tom. 67).

**42. Daños y perjuicios**—La defensa del poseedor contra

impedido la venta del terreno en las condiciones favorables que se pretendía, es evidente que el hecho del embargante no ocasionó perjuicio alguno al demandado, y, en consecuencia, falta en este caso uno de los elementos que haría viable la acción deducida.

41. Ha sido siempre de constante jurisprudencia que los espedientes no pueden ser agregados como prueba á otros espedientes. Pero á este respecto se ha establecido una escepción y es que cuando el espediente es necesario por referencias generales contenidas en toda su tramitación, procede su agregación como prueba. Es lo que sucedió en el caso del sumario. Además el pleito en tramitación era una consecuencia del pleito terminado, pues en éste se había establecido la responsabilidad de la parte por los daños y perjuicios ocasionados á la otra.

42. De acuerdo con el caso resuelto en el núm. 31. La posesión del demandado era anterior á la fecha del título del reivindicante, circunstancia que, entre otras que constaban de los mismos testimonios, legitimaba su defensa, tanto más si se tiene á la vista del texto claro del art. 2789 del Cód. Civ. El demandado no cometió hecho ó acto ilícito al repeler la demanda de reivindicación deducida contra él, sino que, por el contrario, ejercitó un derecho propio cuyo ejercicio no puede en manera alguna tomarse como fuente de responsabilidades—art. 1071, Cód. cit.—Sería monstruoso imputar culpabilidad á una persona á los efectos de resarcimientos de daños por el simple hecho de ser vencido en juicio, mayormente cuando como en el caso este, hubo divergencia entre los jueces que habían intervenido en él, lo que aleja hasta la sospecha de procedimientos dolosos ó fraudulentos. Nuestro codificador en su exposición doctrinaria sobre el art. 2433, hace notar que, no hay que atribuir á la demanda los efectos de la mora, cuando se trata de un poseedor de buena fe que se defiende, no comete culpa alguna, recordando que el mismo derecho romano hallaba justo que el poseedor de buena fe se defendiese, según el siguiente pasaje del Digesto: *Nec debet possessor propter metum possidenti tenere indefensum jus suum delinquere*. Hay que observar, por otra parte, que la ejecutoria de la referencia fué acatada, siendo así que en esta situación la obligación del demandado quedaba legalmente cumplida desocupando como desocupó el inmueble, y dejándolo en estado de que el reivindicante entrase en posesión



el reivindicante no puede ser considerada acto ilícito, ni por consiguiente fundar una demanda por daños y perjuicios—Civ., tom. 21, pág. 30, Ser. 5ª (tom. 68).

**43. Daños y perjuicios**—La omisión de medidas tendientes á garantir la seguridad de los pasajeros, responsabiliza á las empresas de transporte por los daños y perjuicios causados por accidentes—Civ., t. 21, pág. 137, Ser. 5ª (t. 68).

de él — art. 2794. — Según la doctrina que sirve de fundamento á este art., el reivindicante no puede exigir condenaciones pecuniarias, sino en el caso en que el demandado rehusase la restitución de la cosa ó se hiciese imposible por su culpa ó por su dolo. La reparación surge entonces de pleno derecho, y debe fijarse *estimatio rei o litis*, en cantidad suficiente á cubrir el perjuicio sufrido por la falta de restitución.—Maynz, párr. 205; Pothier, párr. 330.—Para calificar y responsabilizar al demandado como poseedor de mala fe, habría que desconocer del punto de vista de los hechos, que el autor de la sucesión tuvo justas causas de defensa, desconocimiento á que no podría llegarse si su posesión no solo era preexistente al título del reivindicante, sino espresamente establecida en el mismo instrumento de adquisición; habría que desconocer del punto de vista legal, el sano principio incorporado á nuestro derecho en el art. 2362, según el cual todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe en su posesión. Es dentro de la letra del art. 2433 que debe solucionarse la cuestión. El art. en su parte pertinente dice: «El poseedor de buena fe que ha sido condenado por sentencia á restituir la cosa, es responsable de los frutos percibidos desde el día en que se le hizo saber la demanda, y de los que por su negligencia hubiese dejado de percibir»; pero no de los que el demandante hubiere podido percibir. La inteligencia de ese art. la pone de manifiesto la nota ilustrativa. El codificador no se adhiere desde luego á la opinión sostenida por algunos espositores, de que el poseedor de buena fe debe ser considerado, después de la litiscontestación, como poseedor de mala fe, observando así, consecuente con sus ideas, que para fundar el precepto del art., basta presentar las condenaciones que debe sufrir el poseedor de mala fe, que no pueden ser aplicables, dice, al poseedor de buena fe condenado á restituir la cosa. Es, pues, incontestable que si el poseedor de buena fe no incurre en las responsabilidades extremas del art. 2439 y sus concordantes, no se halla en cambio exento de toda reparación, y puede ser civilmente interpelado por el beneficio obtenido y por el que hubiera dejado de obtener por su propia negligencia.

43. De acuerdo con otros casos resueltos: Véase *Inst.*, t. 7, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 19, 28 y 37.



**44. Daños y perjuicios**— El locador tiene derecho á cobrar al inquilino los daños y perjuicios causados al inmueble, siempre que no sean los naturales causados por el uso — Civ., tom. 21, pág. 166, Ser. 5ª (tom. 68).

**45. Daños y perjuicios**—Corresponde á la jurisdicción civil la acción de daños y perjuicios causados por un acto ilícito aun cuando el autor sea comerciante — Civ., tom. 21, pág. 321, Ser. 5ª (tom. 68).

**46. Daños y perjuicios**—Las obras necesarias para con-

44. Art. 1616, del Código Civil.

45. En contra: Véase *Inst.*, tom. 7, verb. *Acto ilícito*, n° 6.—En el caso del sumario se dijo que: «la presente demanda tiene como fundamento actos irregulares y abusivos atribuidos á los demandados, y se dirige á obtener de éstos la restitución de diferencias y las pérdidas é intereses causados á consecuencia de los mismos. Que ninguno de aquellos actos se hallan comprendidos dentro de los términos declarados del art. 8º, ni en ningún otro pasaje del Cód. de Com. Que el hecho de ser comerciantes las partes no surte por sí solo fuero mercantil, pues la jurisdicción conferida á las autoridades judiciales para el conocimiento de las causas, se determina principalmente por el carácter del acto y la índole jurídica de las prestaciones sometidas á su juzgamiento.»

46. Los hechos fundamentales de la demanda pueden concretarse en esta forma: que el demandante era propietario de un terreno de chacra en Bahía Blanca; que la empresa del ferrocarril del Sud invadió la propiedad á viva fuerza y excavó un canal que perjudicó al propietario. Ninguna prueba se produjo para acreditar la fuerza que el actor afirmaba haberse usado por la empresa demandada para invadir su propiedad, pero este informe pericial que hacía plena prueba, por revestir las formalidades y circunstancias requeridas por el art. 178 del Cód. de Proc., justificaba que los trabajos de canalización invocados en la demanda se habían efectuado por la empresa del ferrocarril, invadiendo la propiedad el actor. ¿Esos trabajos, hechos sin el consentimiento del propietario del terreno, constituyen un delito del derecho civil ó un simple acto ilícito? La demanda invocó como fundamento los arts. 1072 y 1094 del Cód. Civ., que se refieren á los delitos, y también el 1109, relativo á los hechos ilícitos que no son delitos, lo que importa deducir las acciones que esas disposiciones legales autorizan. Tratándose de una empresa ó sociedad anónima como era la demandada, no puede imputársele la comisión de un delito aunque sea civil, porque no es capaz como persona jurídica de realizar acto alguno con intención de dañar, como se requiere por el art. 1072, para que el acto ilícito sea un delito. Tampoco puede decirse con pro-



tener las inundaciones causadas por una vía férrea, se supone en un acto accesorio de la vía, y en consecuencia, los pro-

piedad que la empresa demandada haya cometido un simple hecho ilícito, porque no puede imputársele culpa ó negligencia que haya producido un daño al demandante—art. 1109, —pero si el hecho de realizar los trabajos á que se refiere el actor constituye un acto ilícito imputable á los empleados de la empresa demandada, ésta es responsable, porque la obligación del que ha causado un daño se extiende á los daños que causaren los que están bajo su dependencia—art. 1113. - Esta es también la doctrina establecida por la jurisprudencia de nuestros tribunales en los numerosos casos de responsabilidad de las empresas de ferrocarril, por los daños causados por accidentes y otros casos análogos. Debe tenerse en cuenta que los trabajos de canalización á que se refería la demanda se habían hecho en beneficio de la empresa demandada, pues así se demostró, lo que hace indiscutible su responsabilidad hacia los terceros perjudicados. Todo el que ejecute un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona daño á otros, está obligado á la reparación del daño. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil, dice el art. 1109. Ahora bien; es algo que estaba fuera de toda discusión que los trabajos de canalización hechos por la empresa demandada en terrenos de propiedad del demandante, importaba un hecho que causa daño al propietario, como asimismo que esos trabajos se hubieran hecho por culpa de los empleados ó directores del ferrocarril. Sobre este último punto alegó la empresa que los trabajos de canalización los había hecho cumpliendo resoluciones del Gob. de la Prov. de Buenos Aires, y en prueba de ello presentó la nota relativa y un testimonio del dictamen del Departamento de Ingenieros. Según la nota, el Gob. de la Prov. dispuso que el Dep. de Ingenieros se encargase de la inspección técnica de las obras, y que la Mun. de la localidad vigilase que se cumplieran por la comisión local del ferrocarril las condiciones que se habían establecido para la ejecución de esos trabajos. Esta nota nada prueba sobre la irresponsabilidad de la empresa demandada. El dictamen del Dep. de Ingenieros, presentado también por dicha empresa, era de todo punto contrario á su defensa. En efecto, según ese dictamen, las obras de canalización del Maldonado y del Napostá benefician indudablemente á la empresa pero son también útiles al pueblo de Bahía Blanca, á fin de preservarlo de inundaciones, y como con esos canales se obtendrán resultados más ventajosos que ordenando la colocación de puentes y alcantarillas, el Dep. aconsejó al Gob. que autorizase su construcción en las siguientes condiciones: 1<sup>a</sup> Que sea de cuenta del ferrocarril la ejecución de los trabajos, como lo propone la empresa. No es exacto entonces que el ferrocarril haya ejecutado las obras de canalización cumpliendo resoluciones del Gob., sino que la misma empresa propuso ejecutarlas de

pietarios afectados por ellas tienen derecho á ser indemnizados tanto por el terreno necesario como por los daños y perjuicios causados—Civ., tom. 22, pág. 207, Ser. 5ª (tom. 69).

su cuenta, seguramente porque le convenía más que colocar puentes y alcantarillas en sus vías y terraplenes. 2ª condición: Que en la canalización del Maldonado no debe espropiarse la superficie destinada al canal, desde que éste ocupará el cauce de un arroyo que ha existido siempre. Según resultaba de los títulos del actor, y lo sostuvo también la empresa en su escrito de contestación, el terreno del primero se componía de las chacras núms. 16, 91 y 31, separada esta última de las dos primeras por el arroyo Maldonado. Sobre el cauce de este arroyo debía hacerse el trabajo de canalización, según el dictámen del Dep. de ingenieros; pero según resultaba de los planos de los peritos ingenieros, el canal estaba construido casi en su totalidad, dentro de la chacra núm. 31, distante del límite de ésta y de la núm. 16, esto es, distante del cauce del arroyo Maldonado, y solo en parte pequeña ocupaba la línea divisoria, es decir, del mismo arroyo, entre el núm. 31 y el núm. 91. En esta parte el Juzgado tenía que aceptar las conclusiones acordadas de los peritos—art. 178 del Cód. de Proc.—que establecía que el área ocupada en el terreno del actor por el canal construido por el ferrocarril, era de 32.583 metros cuadrados. La empresa del ferrocarril no cumplió entonces, la segunda condición impuesta por el dictámen del Dep. de ingenieros invocado en su defensa, según el cual el canal debía ocupar solamente el cauce del arroyo. Si el canal construido por la empresa no ha sido hecho sobre el cauce del arroyo Maldonado, sino en terreno del demandante, debe pagar su importe y satisfacer el daño causado, de acuerdo con las disposiciones legales que quedan citadas y en cumplimiento de lo que la misma empresa aparece haber propuesto al Gob. de hacer los trabajos de canalización de su cuenta. Y no puede ser de otro modo tampoco, desde que esos trabajos invadieron los derechos de propiedad de un terreno, como el del actor. La empresa demandada había comprado á otros propietarios el terreno necesario para la canalización del arroyo, y á la verdad, que no cabía explicación en su conducta para con el actor. La invocación del art. 2620 del Cód. Civ. que hizo el demandado, era inaceptable, porque no se trataba de trabajos ú obras ejecutadas por vecinos ó colindantes, que es el caso legislado por ese art. La empresa demandada citaba en su apoyo los arts. 1066, 1067 y 1071 del Cód. Civ. Los dos primeros establecen que ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuese expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales ó reglamentos de policía, y que no habría acto ilícito punible para los efectos de este Cód., si no hubiese daño causado, ú otro acto exterior que lo pueda causar, y en que á sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa ó negligencia. La lesión del derecho de propiedad constituye seguramente un delito en derecho







47. **Daños y perjuicios**—Justificada la culpa ó negligencia del conductor del vehículo que causó el daño, el propietario debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios—Civ., tom. 22, pág. 316, Ser. 5ª (tom. 69).

48. **Daños y perjuicios**—Debe rechazarse la acción de daños y perjuicios si el demandante no justifica su personalidad para sustituir á la víctima del accidente—Civ., tom. 22, pág. 368, Ser. 5ª (tom. 69).

49. **Daños y perjuicios**—La demanda sobre restitución

civil ó un simple acto ilícito—véase Laurent, tom. 20, § 407.—Los actos voluntarios que lesionan el derecho de propiedad son hechos ilícitos, porque están prohibidos por las disposiciones del Cód. Civ. que amparan el dominio, y entre otras muchas por los arts. 2508, 2511, 2512, 2513, 2514 y 2516. En la construcción del canal que motivó el pleito se había causado un daño, lo demostraba acabadamente el hecho de que toda la superficie ocupada por esa construcción era una pérdida para el propietario, á parte de otros perjuicios que reclamaba. Finalmente, el art. 1071 dispone, que el ejercicio de un derecho propio, ó el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. Pero la empresa demandada no dijo cual era el derecho propio que había ejercitado al construir el canal en un terreno que no le pertenecía, ni tampoco cual era la obligación legal á que había dado cumplimiento con esa construcción. La autorización que el Gob. de la Prov. le acordó para efectuar esa obra, no es ciertamente una obligación legal, y en todo caso, esa autorización se acordó bajo la condición de que los trabajos se hicieran por cuenta de la empresa.

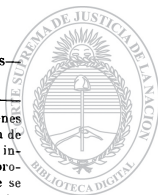
48. La empresa demandada desconoció que la demandante fuese legítima esposa de la persona muerta en el accidente, y ninguna prueba se produjo, ni siquiera se intentó producir para acreditar ese hecho necesario para que la demanda pudiese prosperar, puesto que se entabló invocando el carácter de esposa de la víctima, y el derecho que el art. 1084 del Cód. Civ. acuerda á la viuda. De manera, que aun siendo responsable la empresa demandada por los daños ocasionados por la muerte, la demandante no acreditó ser su esposa, para poder ejercitar las acciones que á la viuda acuerda la disposición legal citada.

49. Trabado un embargo sobre muebles en esta ciudad, en virtud de exhorto de las autoridades judiciales de Mendoza, la propietaria de los bienes embargados solicitó su levantamiento ante el mismo juez exhortado. Se opuso la excepción de incompetencia por cuanto este magistrado carecía de jurisdicción para entender en la tercera, debiendo limitarse al diligenciamiento del exhorto. Se declaró que el exhortado tenía jurisdicción para entender en la tercera pues si bien se trataba de



de muebles embargados por exhorto, aun cuando importa una tercería, puede ser deducida en el domicilio del responsable

un juicio emergente del embargo trabado á solicitud del juez exhortante, no lo es menos de que la demanda se interpuso directamente contra el que pidió el embargo por restitución y dominio de los bienes muebles embargados, que decía el tercerista, eran de su propiedad y por resarcimiento de daños y perjuicios. Estableciéndose por el art. 4º del Cód. de Proc., que cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles será juez competente el del lugar en que se hallen, ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante, y habiendo resultado de una diligencia practicada, que el mismo embargante tenía su domicilio en esta capital, lo que por otra parte se hallaba reconocido por él, desde que nada al respecto había objetado, y no siendo esta la estación oportuna de resolver acerca de la procedencia ó improcedencia de la acción instaurada, es fuera de toda duda que debía desecharse la escepción opuesta, máxime si se tiene en cuenta que en el caso presente, concurría también la circunstancia de que los muebles motivo de la reivindicación se encontraban en poder del tercerista quien reconocía tener su domicilio en esta capital. Además, se había interpuesto también una acción personal, como lo es la de daños y perjuicios, que con arreglo al art. 4º citado, su conocimiento compete á la jurisdicción del domicilio, dados los términos explícitos de dicha disposición y la circunstancia de estar radicado aquí el demandado. La comisión conferida debió mandarse cumplir en la forma de estilo, es decir, sin perjuicio de la jurisdicción del juez exhortado. ¿Qué es lo que esta salvedad implica? Que las diligencias decretadas por un juez de estraña circunscripción judicial, no ha de afectar derechos que el juez exhortado está en el deber de tutelar, que no se entienda menoscabada su jurisdicción ni abdicada su competencia en el choque que pueda surgir entre los intereses de los que litigan fuera de ella, y de los que dentro aparecen extraños á ese litigio. Con arreglo á esta noción clara de la medida de lo que debe y puede hacerse en auxilio de los jueces de otro territorio, aparece evidente que la persona que se pretenda lesionada por una resolución de un juez á cuya jurisdicción no está ó no se cree sometida, tiene derecho á ser amparada por los jueces de su domicilio. Sería contrario á toda regla de equidad y de justicia que tuviera que trasladarse al lugar donde el juez exhortante tenga su asiento, por lejano que sea, para contener avances que por error ó malicia se le hayan hecho esperimentar. Esta sola consideración bastaría para determinar en este caso la competencia del juez de la Cap. La Cám. resolvió esta cuestión diciendo que: «La demanda que se ha promovido en estos autos es explícita en sus términos: pide en ella la parte actora ser restituida en la posesión y dominio de sus muebles y la condenación del demandado al resarcimiento de daños y perjuicios. Declinando de jurisdicción hace



si se acciona también por los daños y perjuicios causados— Civ., tom. 22, pág. 403, Ser. 5ª (tom. 69).

notar este último que toda controversia surgida del embargo de bienes motiva una acción de tercería escluyente, que es de la competencia de los jueces ante quienes pende la causa principal. Podría ofrecer incuestionablemente gravedad el caso del punto de vista del art. propuesto, independientemente de la forma en que la persona que se considera damnificada ejercita su derecho, si no concurrían los antecedentes de hecho que informan la demanda y de los cuales se hace mérito como fundamento capital de la misma. Es la concurrencia de estos antecedentes, es su carácter, la manera en que se han producido, su relación con el punto mismo en debate, lo que pone entre tanto de manifiesto que no se trata de una acción de tercería, como la supone el demandado, y en cuya persuasión se basan los razonamientos que instruyen la declinatoria. Basta, en efecto, observar que en el escrito de demanda se dice que, no obstante referirse la requisitoria al embargo de los bienes muebles que poseía el deudor en la casa de la demandante, aquél se hizo extensivo á bienes de su propiedad, tranquilamente poseídos por ella, y que se procedió de esta manera por indicación del embargante, á su pedido y bajo su responsabilidad, y no obstante sus protestas, formalizadas en el mismo acto, de ser la poseedora y propietaria de dichos bienes. Basta observar que son estos actos personales, derechos del embargante, los que han lesionado los derechos de la demandante, á estar á sus afirmaciones, perjudicándola en su reputación y en su crédito; que son estos hechos lo que la mueven á querellarse y los que se invocan finalmente como causa determinante de las responsabilidades y condenaciones solicitadas en el juicio. Si se tratara, de un juicio emergente del embargo trabado á solicitud de un juez de extraña jurisdicción, no lo es menos de que la demanda se ba interpretado directamente contra el embargante. Los jueces no están ciertamente obligados á aceptar las denominaciones incorrectas que dén las partes, por dolo ó por ignorancia, á las acciones que sometan á su juzgamiento, pero tampoco se hallan autorizados á atribuir á las mismas una inteligencia ó propósitos distintos al que las partes manifiestan, debiendo atenerse, sin prejuzgar cuestión alguna, como lo tiene declarado la jurisprudencia española en su interpretación al art. 62 de la Ley actual de enjuiciamiento, análogo al nuestro en el punto controvertido, á la naturaleza y carácter de las peticiones deducidas. El caso en sí mismo es por lo demás de fácil solución, como que se trata de demanda tendiente á obtener la restitución de bienes existentes en esta capital, é indemnizaciones de pérdidas é intereses de persona que se halla domiciliada en territorio de la misma. Hay, pues, una acción real, la referente á los muebles; otra personal, la referente á los daños; con la circunstancia, empero, de hallarse ambas sometidas á las mismas res-



**Daños y perjuicios**—Véase: *Acarreador*, 2; *Contrato*, 12, 20, 42; *Acusación*, 6; *Asegurador*, 3, 4; *Acreeedor prendario*, 2, 3; *Abandono paterno*, 1; *Costas*, 24, 29, 77, 79; *Conductores*, 1; *Contrato de locación*, 3, 11; *Contrato de locación de servicios*, 2; *Acto ilícito*, 1, 5; *Alquileres*, 3; *Acusación calumniosa*, 1; *Acto ilícito*, 4; *Jurisdicción federal*, 2; *Obligación de hacer*, 3; *Empresa de transporte*, 1; *Excepción*, 11; *Prescripción*, 3.

1. **Declaraciones**—Prestadas fuera de la jurisdicción del juez del delito, carecen de valor legal si éste no las solicitó—Crim., tom. 9, pág. 22, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Declaraciones**—De testigos inhábiles, no forman prueba—Crim., tom. 1, pág. 246, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Declaraciones**—Si está justificado que los procesados estaban ébrios, sus declaraciones no forman prueba—Crim., tom. 1, pág. 246, Ser. 5ª (tom. 36).

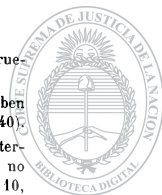
4. **Declaraciones**—La falta de sellos para la citación de los testigos, no importa negligencia que impida fijar nuevo día para las declaraciones—Com., t. 2, p. 410, S. 5ª (t. 37).

glas en orden á las facultades jurisdiccionales de los Trib. de esta Cap. La acción petitoria aparece directamente legislada por el inc. 2.º del art. 4.º del Cód. de Proc., con arreglo al cual el juez competente, cuando se ejercitan acciones reales sobre bienes muebles, es el del lugar en que se hallan ó del domicilio del demandado, á elección del demandante; la acción personal es regida por el inc. subsiguiente, que atribuye fuero al juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y á falta de éste, á elección también del demandante, el domicilio del demandado. Si á la consideración muy fundamental de ser de orden público las leyes que confieren á las autoridades judiciales el conocimiento de los asuntos sometidos á su decisión, se agrega el concepto jurídico de las disposiciones que quedan recordadas, manifestamente beneficiosas para el demandante, es evidente que el auto del Inferior sosteniendo su competencia, es arreglado á derecho.

1. Además las declaraciones fueron prestadas ante las autoridades judiciales del Rosario, siendo presentadas aquí sin la legalización correspondiente.

2. Al testigo le comprendían los incs. 5 y 10 del art. 276 del Cód. de Proc. Crim.

4. El art. 182 del Cód. de Proc. dice que la citación de los testigos deberá hacerse «por cédula en papel común».



5. **Declaraciones**—La de los coacusados no forman prueba—Crim., tom. 3, pág. 52, Ser. 5ª (tom. 38).

6. **Declaraciones**—Las no urgidas por la parte, deben quedar sin efecto—Com., tom. 5, pág. 321, Ser. 5ª (t. 40).

7. **Declaraciones**—Las disposiciones que la ley determina para prestar declaración los empleados públicos, no son aplicables a la absolución de posiciones—Civ., tom. 10, pág. 368, Ser. 5ª (tom. 57).

8. **Declaraciones**—Solo al dictar sentencia puede juzgarse del valor de las declaraciones prestadas fuera de la jurisdicción del Juzgado—Civ., tom. 11, pág. 23, Ser. 5ª (t. 58).

9. **Declaraciones**—La negligencia en pedir nuevo día para las declaraciones de testigos hace perder el derecho á examinarlos—Civ., tom. 11, pág. 31, Ser. 5ª (tom. 58).

10. **Declaraciones**—Debe admitirse la declaración del testigo presentado en tiempo, si la demora no es imputable á la parte—Civ., tom. 11, pág. 34, Ser. 5ª (tom. 58).

11. **Declaraciones**—Si no pueden prestarse dentro del término, previa espoción de la lista de testigos, deben ser rechazadas—Civ., tom. 11, pág. 367, Ser. 5ª (tom. 58).

12. **Declaraciones**—La nulidad de las declaraciones y subsiguiente fijación de día á los testigos, no pueden decretarse para mejor proveer—Civ., t. 11, p. 385, Ser. 5ª (t. 58).

**Declaraciones**—Véase: *Nulidad*, 28; *Exhorto*, 1; *Testigo*, 1, 2, 5, 6 y 23; *Médicos*, 1; *Hurto*, 7; *Acreedores*, 1; *Divorcio*, 10.

---

6. Art. 118 del Cód. de Proc. Civ.

7. Art. 202 del Cód. de Proc. Civ.

9. Se dejaron pasar cinco meses sin urgir la producción de la prueba.

11. El escrito ofreciendo la prueba fué presentado con fecha 2, habiendo vencido el término de prueba el 6; no había pues tiempo hábil para producir la prueba dentro del término, como lo prescribe el art. 118 del Cód. de Proc.

12. Porque no se encuentran comprendidas estas medidas en el precepto del art. 57 del Cód. de Proc.



1<sup>a</sup>. **Declaratoria de herederos**—El impuesto debe abonarse por cada declaratoria, aun cuando sea en la misma testamentaria—Civ., tom. 11, pág. 24, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

2<sup>a</sup>. **Declaratoria de herederos**—La falta de declaratoria en la testamentaria de uno de los condóminos, no importa deficiencia de los títulos—Civ., t. 11, p. 355, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 58).

**Declaratoria de herederos**—Véase: *Hijos naturales*, 3; *Herederos*, 1 y 6; *Excepción de falta de personería*, 10.

**Defecto**—Véase: *Deformación*, 1.

1<sup>b</sup>. **Defecto legal**—No adolece de este defecto la demanda que expresa claramente su objeto—Civ., tom. 14, pág. 157, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 60).

2<sup>b</sup>. **Defecto legal**—Si la cuenta no expresa las fechas de las obras adolece de defecto legal—Civ., tom. 20, pág. 162, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

**Defecto legal**—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 1 y sig; *Documentos*, 15.

**Defensa**—Véase: *Agente fiscal*, 2; *Simulación*, 2; *Costas*, 35.

1<sup>a</sup>. El impuesto debe abonarse por cada transmisión con independencia de las demás.

2<sup>a</sup>. Esto no obsta á la escrituración de un inmueble de pertenencia de la sucesión. Pendiente el juicio sucesorio de una madre, falleció uno de sus hijos. Se pretendió que el título no quedaba perfecto hasta tanto no se estableciera quiénes eran los herederos de ese hijo. Esto no era posible, por cuanto la propiedad vendida lo había sido por cuenta de la sucesión de la madre, á fin de que cesara el condominio de sus herederos declarados á los efectos de la partición de esa herencia. La circunstancia de que uno de los herederos muera sin conocerse todavía quienes son sus sucesores, no podía obstar á que dicha venta se realizase, toda vez que los intereses de la sucesión del hijo no sufrían menoscabo alguno. No existe disposición legal que obligue á los herederos declarados á continuar en condominio hasta tanto se termine el juicio sucesorio del coheredero.

2<sup>b</sup>. Según el art. 71 del Cód. del Proc. Civ. la demanda debe espresar los hechos y el derecho. El hecho de no determinar la fecha en que las obras fueron practicadas, inhabilita al demandado á hacer uso de sus derechos, entre los cuales puede contarse el de alegar la prescripción. Tampoco se fundó en derecho la acción instaurada.



1<sup>a</sup>. **Defensor**—Citado por edictos el deudor para el reconocimiento de la firma, debe nombrársele defensor—Com., t. 9, pág. 358, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2<sup>a</sup>. **Defensor**—La falta de apercibimiento de nombrarse defensor al citado por edictos, no puede fundar la nulidad del juicio—Civ., tom. 9, pág. 193, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 56).

3. **Defensor**—La citación por edictos para el reconocimiento de firma, debe ser bajo apercibimiento de nombrársele defensor, y no de darla por reconocida en rebeldía—Civ., tom. 10, pág. 387, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 57).

1<sup>b</sup>. **Defensor de ausentes**—Solo debe dársele intervención, cuando se ignora el domicilio del deudor y previa citación por edictos—Com., tom. 4, pág. 394, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 39).

2<sup>b</sup>. **Defensor de ausentes**—Los defensores de ausentes

---

1<sup>a</sup>. Citado un deudor por edictos para reconocer su firma, no compareció, dándosele por reconocida en rebeldía. Después pidió el actor el nombramiento de defensor, á lo que no se hizo lugar hasta tanto no se hiciera saber en la misma forma la rebeldía decretada, por cuanto ésta no era hasta entonces sino una rebeldía meramente parcial. El art. 80 del Cód. de Proc. Civ., establece que si el citado no comparece se le nombrará defensor. Es necesario que el demandado sea citado en forma antes de nombrársele defensor.

2<sup>a</sup>. Art. 471 del Cód. de Proc. Civ.

3. El art. 468 del Cód. de Proc., prescribe que la citación para el reconocimiento de firma á fin de preparar la vía ejecutiva, debe hacerse en la forma establecida por el art. 77 y siguientes del mismo Cód. En tal concepto debe aplicarse, lo dispuesto en el art. 80, citándose á los ausentes por edictos durante el término de 15 días nombrándose defensor que los represente en caso de que no compareciesen, y no bajo el apercibimiento que preceptúa el art. 468. Esta es la interpretación que debe darse á las disposiciones legales recordadas y no la de dar por reconocida la firma, porque ella importaría un apercibimiento á un ausente que podría no tener conocimiento del auto que ordena la comparecencia al reconocimiento, no siendo por esa circunstancia procedente hacerlo efectivo.

1<sup>b</sup>. Arts. 80 y 471 del Cód. de Proc. Civ.

2<sup>b</sup>. Citado de remate el ejecutado en la persona del defensor, éste recibió el expediente y dejó transcurrir el término legal sin oponer excepción: acusada rebeldía, él sostuvo que no era procedente por cuanto en su carácter de funcionario público no le eran aplicables los términos acordados para los litigantes. Siendo perentorio el término señalado



no son funcionarios públicos y les son aplicables todas las disposiciones que la ley hace obligatorias á las partes á quienes representan—Civ., tom. 10, pág. 421, Ser. 5ª (tom. 57).

**3. Defensor de ausentes**—Las notificaciones á los defensores de ausentes deben ser hechas como si fueran parte en el juicio—Civ., tom. 17, pág. 347, Ser. 5ª (tom. 64).

**4. Defensor de ausentes**—Las formas de notificación establecidas por la ley, son aplicables á los defensores de ausentes—Civ., tom. 22, pág. 426, Ser. 5ª (tom. 69).

**Defensor de ausentes**—Véase: *Ausentes*, 2 y 3; *Adultorio*, 2; *Sentencia*, 7.

por el art. 485 del Cód. de Proc., para oponer excepciones en el juicio ejecutivo, y resultando que el representante legal del ejecutado tuvo oportunamente noticia de la citación de remate, desde cuya época debía considerársele legalmente notificado de esa providencia—art. 40, inc. 2.º del Cód. de Proc.,—sin que sea dado hacer distinción alguna, puesto que los defensores de ausentes no están investidos de funciones públicas desde que su misión está limitada á la representación de intereses meramente privados, como son los de las personas en cuyo nombre intervienen en los juicios, aun cuando el mandato provenga de la ley y no de la voluntad del interesado, porque la ley no hace más que suplir ú obviar la imposibilidad en que aquél se encuentra de manifestarla ó de ocurrir personalmente al juicio.

3. A esta resolución sirvió de fundamento la vista del fiscal Dr. Evaristo Barrenechea quien decía: «Cuando una persona es citada por edictos para estar á derecho en un juicio, y no comparece, prescribe la ley que debe nombrarse un defensor que la represente. Pero este defensor no es precisamente el de ausentes, el funcionario creado por la misma ley para entender en ciertos asuntos, es un abogado porque el citado no es de los ausentes declarados tales en juicio sino en rebeldía, y no tiene por consiguiente la incapacidad que presume la ley para hacerlo representar por el defensor titular, tanto de ausentes como de incapaces. Por consiguiente, el representante del rebelde no goza de los privilegios que puede gozar un funcionario público, para ser notificado en su domicilio ó despacho, de todas las providencias que se dictaren. Aunque por práctica ó por disposición reglamentaria se dé en estos casos intervención al defensor titular de ausentes, pienso que su intervención es igual á la de las demás partes en el juicio, y no puede invocar los privilegios concedidos á los funcionarios por razón de las funciones que ejerce en el caso, las cuales lo ponen en la obligación de practicar las mismas diligencias que practicaría su representado, y entre éstas se halla la de concurrir á la oficina para ser notificado.





**Defensor de menores**—Véase: *Correcciones*, 1; *Menores*, 1.

1<sup>a</sup>. **Defensor de pobres**—Si existen varios acusados debe intervenir en el proceso un defensor de pobres para cada uno de ellos—Crim., tom. 9, pág. 477, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

**Deficiencias**—Véase: *Escep. de falta de personería*, 4; *Declaratoria de herederos*, 2.

1<sup>b</sup>. **Deformación**—La pérdida de un órgano visual importa la deformación que la ley ha previsto, aun cuando por medio de artificios pueda ocultarse el defecto—Com., tom. 2, pág. 252, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 37).

2<sup>a</sup>. **Deformación**—Una cicatriz casi imperceptible en el rostro no puede conceptuarse la deformación que el Código Penal admite como agravante—Crim., tom. 5, pág. 372, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 40).

**Deformación**—Véase: *Lesión*, 1.

1<sup>c</sup>. **Defraudación**—La que parcialmente no pase de 1.000 ps. moneda nacional, debe castigarse con un año de arresto, cualquier que sea el monto de la suma defraudada—Crim., tom. 9, pág. 185, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2<sup>b</sup>. **Defraudación**—Procede la escarcelación bajo fianza, si la defraudación solo puede ser penada con dos años de prisión—Crim., tom. 1, pág. 137, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

3. **Defraudación**—Cualquiera que sea el monto de la de-

1<sup>a</sup>. Había incompatibilidad en la defensa de los procesados, pues los unos se inculpaban á los otros recíprocamente la comisión é instigación del delito.

2<sup>a</sup>. El art. 119, inc. 3<sup>o</sup> del Cód. Pen. habla de *notablemente deforme*.

1<sup>c</sup>. El reo había dispuesto de varias sumas y en varias ocasiones por valor de \$ 2.350, pero una de ellas fué por 1.000. En este caso se aplica la pena correspondiente á la fracción mayor defraudada en una vez, y las demás defraudaciones por una suma menor se consideran como circunstancias agravantes.—El caso cae bajo la sanción de los arts. 86 y 203, inc. 2<sup>o</sup> del Cód. Pen.

2<sup>b</sup>. Arts. 202, inc. 4<sup>o</sup> del Cód. Pen. y 376 del Cód. de Proc. Crim.

3. En tal caso se trata de un delito continuado proveniente de diferentes estafas de igual valor, que debe ser penado con arreglo al monto de la mayor de ellas, y considerarse á las demás como agravantes de



fraudación, corresponde su conocimiento al juez correccional, si cometido el delito en diversos actos el mayor no llega a la suma de mil pesos—Crim., tom. 3, pág. 56, Ser. 5ª (t. 38).

4. **Defraudación**—No importa defraudación la venta de un terreno propio, aun cuando sobre él exista una obligación de hacer escritura de condominio—Crim., tom. 3, pág. 60, Ser. 5ª (tom. 38).

5. **Defraudación**—A los efectos de fijar jurisdicción por cantidad, debe estarse á lo que funda la querella por falta de entrega, cualquier que sea el monto de las sumas parciales defraudadas—Crim., tom. 3, pág. 366, Ser. 5ª (tom. 38).

6. **Defraudación**—El comprador de buena fe en remate público de artículos que se dicen defraudados, tiene personería para deducir tercería de dominio si los hubiese pagado y entrado en posesión antes del embargo—Crim., t. 3, p. 404, Ser. 5ª (tom. 38).

7. **Defraudación** — Por mayor valor, es la que sirve de base para la fijación de pena: las menores solo importan reiteración—Crim., tom. 4, pág. 126, Ser. 5ª (tom. 39).

8. **Defraudación**—La compra de mercaderías, fingiendo la calidad de comerciante, y su venta inmediata, sin abonar su importe, importa una defraución—Crim., tom. 4, pág. 126, Ser. 5ª (tom. 39).

9. **Defraudación**—La tentativa de defraudación debe ser penada con nueve meses de arresto si existen atenuantes—Crim., tom. 4, pág. 140, Ser. 5ª (tom. 38).

---

aquélla. Así lo dispone el art. 84 del Cód. Pen. al establecer que «si un delito de la misma especie se comete varias veces contra una misma persona ó cosa, se castigará el acto más grave, y los otros se considerarán circunstancia agravante», en consecuencia de lo espuesto, y con arreglo á lo prescripto en los arts. 202, inc. 3º del Cód. Pen. y 28, inc. 2º del Cód. de Proc. Crim., el delito es correccional.

4. Porque el boleto de venta, no constituye título de dominio—arts. 1184 y 1185 del Cód. Civ.,—en cuyo caso habría vendido lo que le pertenecía, no obstante los derechos que de dicho documento podrían resultar á favor del interesado.

7. Véanse los núms. 3 y 5.

9. Arts. 202, inc. 4º; y 12, inc. 2º del Cód. Pen.



10. **Defraudación**—Los representantes legales de una persona jurídica, no pueden ser parte acusadora contra sus defraudadores, si por los estatutos carecen de esa facultad—Crim., tom. 4, pág. 256, Ser. 5ª (tom. 39).

11. **Defraudación**—La sentencia que declara prescripto el derecho de acusar por quiebra culpable, no puede fundar la escepción de cosa juzgada en las acciones que por defraudación inician los acreedores—Crim., tom. 4, pág. 333, Ser. 5ª (tom. 39).

12. **Defraudación**—La posesión del objeto que se pretende defraudado por parte del que se dice víctima del delito, excluye de un modo absoluto la existencia de éste, dado el concepto legal y doctrinario del delito de defraudación—Crim., tom. 5, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 40).

13. **Defraudación**—La rendición de cuentas no puede

---

10. El poder no contenía la facultad de deducir acciones criminales, como tampoco tenía dicha facultad el Consejo de administración que era quien representaba á la sociedad.

11. La escepción de cosa juzgada en lo criminal se halla autorizada por el art. 443, inc. 4º, Cód. de Proc. Crim., siempre que la resolución en que se funda haya recaído sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento. Tal escepción requiere además identidad de infracción, pues la máxima *non bis in idem*, que es el principio de que deriva, se halla admitida en tales términos por el art. 7, Cód. cit. Nadie puede ser procesado sino una sola vez por la misma infracción. Según esto, la identidad del elemento material y del elemento moral del delito, como la identidad del delincuente, son circunstancias esenciales para la procedencia de dicha escepción, siendo esta la doctrina enseñada por los autores—véase Haus, *Droit Penal Belge*, núm. 1297 y sig.; Mangin, *Traité des Action Publique*, núms. 402 y 403; Dalloz, *Repert. verb. Chose jugée*, núm. 451 y sig.—En el presente caso no concurrían tales requisitos, porque el delito que motivó el sumario anterior fué el de quiebra culpable en el cual no media voluntad criminal, y el que motivaba el nuevo proceso era el de defraudación cometido con la concurrencia de esa voluntad. Por otra parte, en el anterior sumario terminó por declararse prescripta la acción para acusar el delito que le dió origen y esa escepción procedente en aquel caso, puede no serlo en el presente—Haus, obra cit., núm. 1287.

12. Véase la nota del verb. *Contrato*, núm. 18.

13. Según lo dispuesto en el art. 17 del Cód. de Proc., Crim. solo cuando la acción penal dependiese de cuestiones prejudiciales cuya



conceptuarse cuestión prejudicial; en consecuencia debe admitirse la querrela del mandante contra el mandatario por defraudación—Crim., tom. 5, pág. 300, Ser. 5ª (tom. 40).

14. **Defraudación**—No puede imputarse defraudación al firmante por poder, si el que aceptó la obligación conocía el instrumento de mandato—Crim., t. 5, p. 306, Ser. 5ª (t. 40).

15. **Defraudación**—La retención y depósito de una suma por orden de juez competente, no puede importar defraudación—Crim., tom. 5, pág. 329, Ser. 5ª (tom. 40).

16. **Defraudación**—La de más de seis mil pesos debe ser castigada con tres años de prisión si existe reiteración—Crim., tom. 5, pág. 364, Ser. 5ª (tom. 40).

17. **Defraudación**—Las cometidas por el reo en perjuicio de la misma víctima en diversas fechas, constituyen otros tantos delitos distintos é independientes unos de otros, y la pena, en consecuencia, solo debe recaer sobre el mayor—Crim., tom. 5, pág. 364, Ser. 5ª (tom. 40).

**Defraudación**—Véase: *Acusado*, 2; *Acusación*, 2; *Rendición de cuentas*, 1; *Cheques*, 1; *Bienes testamentarios*, 1; *Acción reivindicatoria*, 1; *Prenda*, 2; *Cuestión prejudicial*, 1; *Contrato civil*, 2.

**Defunción**—Véase: *Escep. de falta de personería*, 17.

**Delincuente**—Véase: *Sexo*, 1.

decisión competa exclusivamente á otra jurisdicción, no podrá iniciarse el juicio criminal antes de que recaiga ejecutoria en dicha cuestión prejudicial. Esta prescripción legal es la reproducción de la que se contiene en el art. 1104, del Cód. Civ., el cual establece que las cuestiones prejudiciales á que se refiere, son solamente las que versen sobre validez ó nulidad de los matrimonios ó sobre calificación de quiebra. Ni estos casos designados ni otros espresamente declarados por la ley son aplicables al sumario.

14. Tal antecedente destruye por completo toda imputación de engaño, pues es evidente que si tal hubiese sido su propósito no habría presentado el poder que acreditaba, á su entender, la suficiencia de sus facultades.

15. El depósito del dinero á la orden de un juez á la vez que importa el cumplimiento de un mandato judicial que el depositante no puede discutir, revela la ausencia de toda intención de defraudar.

16. Art. 202, inc. 5º del Cód. Pen.



1. **Delito**—La no presentación, al juez, de un escrito de transacción, aun cuando justifique una obligación de dar, no puede ser calificada como delito—Crim., tom. 9, pág. 29, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Delito**—Si por un mismo acto se cometen varios delitos, no procede la acumulación de penas; se castiga el delito más grave, sirviendo el menor de agravante—Crim., tom. 9, pág. 534, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Delito**—Para que éste exista en el hecho de disparar un arma de fuego, es necesario que se acredite que se ha hecho intencionalmente contra una persona—Crim., tom. 9, pág. 349, Ser. 3ª (tom. 25).

4. **Delito**—Si no se espresan con precisión y claridad los hechos de los cuales se pretende deducir el delito, no debe admitirse la querella—Crim., tom. 9, pág. 556, Ser. 3ª (t. 25).

5. **Delito**—Si el damnificado conocía con anterioridad, el momento preciso en que debía perpetrarse el delito, la ley supone que no existían valores de los cuales pudieran apoderarse los reos, salvo prueba en contra—Crim., tom. 3, p. 191, Ser. 5ª (tom. 38).

6. **Delito**—Para que pueda declararse la existencia del de-

---

1. El art. 838 del Cód. Civ. autoriza al firmante de una transacción á desistir de ella antes de su presentación. Por consiguiente la no presentación importa el ejercicio del derecho de desistir de que puede hacer uso el interesado, acto que no puede constituir delito.

2. Se imputaba al procesado el delito de disparo de arma de fuego y atentado á la autoridad. El delito se calificó de disparo de arma de fuego agravado con el de atentado, por haberlo cometido mientras ejercitaba sus funciones—arts. 84, inc. 5º, 99 y 235 del Cód. Pen.

3. Por ser esta una circunstancia constitutiva del delito—art. 99 del Cód. Pen.

4. Art. 176 del Cód. de Proc. Crim.

5. La Cám. dijo que era necesario resolver el punto en esta forma por cuanto era la más favorable á los procesados. No es posible dejar al arbitrio del presunto damnificado, el aumento de la pena que debe aplicarse. Lo lógico es suponer que un individuo que conoce el robo concertado, no deje valor alguno que pueda llevarse el ladrón.

6. Arts. 357 y 358 del Cód. de Proc. Crim.



lito, no basta la prueba de presunciones—Crim., tom. 3, pág. 221, Ser. 5ª (tom. 38).

7. **Delito**—Las presunciones, para justificar el delito, deben ser el antecedente lógico; si sus conclusiones pueden conducir á resultados diversos, no forman prueba—Crim., tom. 3, pág. 268, Ser. 5ª (tom. 38).

8. **Delito**—Debe sobreseerse definitivamente si los hechos en que se funda la querella no pueden ser calificados como delito—Crim., tom. 3, pág. 325, Ser. 5ª (tom. 38).

9. **Delito**—El depositario singular ó el mutuario, puede disponer de los fondos; su obligación meramente civil no puede ser calificada como delito—Crim., tom. 3, pág. 361, Ser. 5ª (tomo. 38).

10. **Delito**—Debe sobreseerse definitivamente si no se justifica la existencia del delito—Crim., tom. 3, pág. 361, Ser. 5ª (tom. 38).

11. **Delito**—Si de las constancias de la causa no resulta la existencia del delito, debe sobreseerse definitivamente—Crim., tom. 4, pág. 318, Ser. 5ª (tom. 39).

12. **Delito**—Debe desecharse la querella, sin substanciación, si el hecho imputado, aun debidamente justificado, no constituye delito—Crim., tom. 4, pág. 363, Ser. 5ª (tom. 39).

13. **Delito**—La declaración de quiebra y su calificación, no obliga á la jurisdicción criminal si ésta conceptúa que no existe delito—Crim., tom. 4, pág. 379, Ser. 5ª (tom. 39).

14. **Delito**—Reconocido el depósito, la querella por la

9. Porque el mutuario adquiere el dominio de la cosa—arts. 2189, 2191, 2240 y 2245 del Cód. Civ.—Aun cuando se disipara la cosa no habría derecho emergente de ese acto—art. 2513, *ibid*.

13. Véase la nota del verb. *Comerciante*, núm. 5.

14. El hecho imputado al querrellado era el de haberse apropiado ó distraído una suma de dinero que le había sido entregada en calidad de depósito. Ese hecho constituye el elemento material del delito previsto por el inc. 6.º del art. 203 del Cód. Pen., y autoriza en consecuencia la prosecución de la causa sin perjuicio que en definitiva se juzgue si el contrato existió ó no, punto que puede y debe ser resuelto por la jurisdicción correccional.



falta de devolución, debe sustanciarse para averiguar la existencia del delito—Crim., tom. 4, pág. 383, Ser. 5ª (tom. 39).

15. **Delito** — Si éste se hace consistir en la violación de un contrato, debe ante todo justificarse plenamente la existencia del último—Crim., tom. 5, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 40).

16. **Delito** — La negativa de una deuda, para que pueda conceptuarse delito, debe traer la pérdida de un derecho cuya eficacia no dependa exclusivamente de la voluntad del deudor—Crim., tom. 5, pág. 193, Ser. 5ª (tom. 40).

17. **Delito** — Corresponde el conocimiento de la causa al juez del crimen, si el delito por circunstancias, puede ser castigado con mayor pena de la que pueden imponer los jueces correccionales—Crim., tom. 5, pág. 177, Ser. 5ª (tom. 40).

18. **Delito** — Deben mandarse al juez de instrucción testimonios, pero no el expediente en que aparezca la existencia de un delito—Civ., tom. 10, pág. 388, Ser. 5ª (tom. 57).

**Delito** — Véase: *Amenazas*, 1; *Asamblea*, 1; *Cómplice*, 1, 2 y 3; *Depositorio judicial*, 1; *Escarcelación*, 1, 2, 3, 4, 5 y 6; *Fianza*, 1; *Plenario*, 1; *Querrela*, 2; *Testigos*, 2; *Tribunales ordinarios*, 1; *Bigamia*, 1; *Acusado por calunnia*, 1; *Agravación de la pena*, 1; *Absolución del reo*, 2; *Cheque*, 1; *Damnificados*, 1; *Delito de falsedad*, 1; *Delito de violación*, 1; *Delito de escarcelación*, 1; *Delito político*, 1; *Jueces de instrucción*, 1; *Títulos al portador*, 1; *Competencia*, 7; *Contrato*, 8, 13 y 14; *Embriaguez*, 2; *Escarcelación*, 7, 10, 13, 15 y 17; *Martillero*, 2 y 3; *Sobreseimiento*, 1 y 2; *Sobreseimiento definitivo*, 2, 3 y 4; *Sumario*, 1; *Costas*, 10; *Acción reivindicatoria*, 1; *Calunnia*, 3; *Defraudación*, 3, 12 y 17; *Desobediencia*, 1; *Injurias*, 6; *Pena de muerte*, 1; *Robo*, 15; *Abuso de autoridad*, 2; *Bienes*, 4; *Caricaturas*, 1; *Denegación maliciosa de deuda*, 1; *Denun-*

---

15. De acuerdo con la jur. Véase verb. *Contrato*, núms. 8, 16 y 18.

16. Véase la nota del verb. *Contrato*, núm. 18, donde está comprendida la razón ó fundamento legal de este sumario.

17. En la duda debe estarse en favor de la jurisdicción del juez del crimen, por ser más amplia y entrar en las facultades de ese magistrado la aplicación de penas correccionales, en tanto que sucede lo inverso con el juez de lo correccional.



*ciante*, 1; *Excepción de prescripción*, 3; *Pena*, 2; *Querrela*, 8; *Tentativa*, 1; *Daños y perjuicios*, 14 y 15; *Juicio civil*, 1; *Denuncia*, 3; *Juez de instrucción*, 1.

1<sup>a</sup>. **Delitos** — Al resolverse sobre la excepción de prescripción, no procede resolución sobre la existencia ó inexistencia de otros delitos comprendidos en la querrela — Crim., tom. 5, pág. 226, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 40).

1<sup>b</sup>. **Delito de falsedad** — El hecho de autorizar una diligencia judicial el escribano actuario, no habiéndola verificado, importa la comisión del delito de falsedad de un instrumento público — Crim., tom. 1, pág. 55, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

1<sup>c</sup>. **Delito de violación** — Para que el delito se conceptúe

1<sup>a</sup>. La Cám. dijo: «Que si bien está prescripto el derecho de acusar por el delito de injuria, en vista de que ha transcurrido más de un año desde que el delito se cometió — art. 89, inc. 3<sup>o</sup>, Cód. Pen. — no sucede lo mismo respecto del de calumnia, atento lo que dispone el inc. 3<sup>o</sup> del art. 87, y la pena con que ese delito es castigado por el art. 178 del mismo Cód. Que en el estado actual del juicio no es posible decidir si los hechos imputados constituyen ó no el delito de calumnia, porque ese es punto cuya resolución está reservada á la sentencia definitiva — inc. 1<sup>o</sup>, regla 4<sup>a</sup>, art. 495, Cód. de Proc. Crim. — Que por tal razón, solo puede tenerse en cuenta, tratándose de resolver sobre la excepción de prescripción, el delito ó delitos de que el procesado está acusado, la pena que le corresponde y el tiempo transcurrido. Que en vista de esto y de lo espresado en el primer considerando, debe desecharse la excepción opuesta en cuanto se refiere al delito de calumnia, y aceptarse en cuanto á las injurias».

1<sup>b</sup>. Véase la nota del verb. *Culpa*, núm. 1.

1<sup>c</sup>. Uno de los Cam. sostuvo que en la simple aproximación solo existe tentativa. Para que este delito se reputé consumado, la ley requiere que haya habido aproximación sexual, y estos términos significan, introducción del pene en la vagina, que es el único medio de aproximación fisiológica de los sexos, según la técnica legal. La mayoría dijo: «La defensa pretende que solo existe una tentativa de violación, y que el delito no se ha consumado, pero que en presencia del certificado médico, del cual resultaba que la menor estaba enferma de sus órganos genitales, siendo esa enfermedad el resultado de un contagio venéreo, y de los términos claros y positivos del art. 127 del Cód. Pen., creía que concurrían todos los requisitos requeridos para que el delito se considerase consumado, y que debía aplicarse la pena determinada por el inc. 1<sup>o</sup> del art. 128, Cód. Pen.»





violación, basta la simple aproximación de los órganos genitales — Crim., tom. 1, pág. 48, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Delito de violación de domicilio** — No existe, si no está probada la intención criminal — Crim., tom. 1, pág. 135, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Delito escarcelable** — No procede la escarcelación si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión — Crim., tom. 1, pág. 139, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Delito político** — En tanto el fuero federal juzga el delito político, puede seguirse la tramitación de la causa sobre delitos comunes — Crim., tom. 1, pág. 224, Ser. 5ª (t. 36).

1ª. **Demanda** — Solo pueden acumularse las demandas en los casos previstos por la ley — Com., t. 9, p. 14, S. 3ª (t. 23).

1ª. **Demanda** — Contestada en rebeldía, no debe admitirse

---

1ª. Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

1ª. Los dos delitos son completamente distintos. El primero instruido á varios individuos entre los que se encontraba comprendido también un procesado, por sedición; y el segundo, instruido exclusivamente á este sujeto, por haber cometido un delito común aprovechándose del tumulto y confusión consiguientes, con motivo de unas elecciones nacionales. El juez de sección era competente en cuanto al delito de sedición, exclusivamente del fuero federal, pero á la justicia ordinaria le corresponde conocer del delito común que se imputaba al mismo procesado. El juzgado federal tiene por la ley, prioridad para conocer en la causa, según lo determina espresamente el art. 38 del Cód. de Proc. Crim., pero esto no quiere decir que sea competente para pronunciarse en el delito común, por cuanto por ese mismo art. se espresa que en el caso de conflicto de dos jurisdicciones, debe limitarse á juzgar la causa que corresponda á su propia jurisdicción. Es también sabido que los delitos comunes que se cometen con motivo de los delitos de rebelión ó sedición, deben ser castigados independientemente del delito político. Las dos leyes de fondo que rigen la materia — ley de 14 de Setbre. de 1863, art. 24; y art. 231 del Cód. Pen. — están contestes en este punto, y la ley adjetiva determina la forma de procederse en los casos de competencia de jurisdicciones.

1ª. Art. 74 del Cód. de Proc. Civ.

1ª. Las escepciones autorizadas por los arts. 83 y 84 del Cód. de Proc. Civ., solo pueden oponerse en la oportunidad que el expresado art. 83 establece. De autos constaba que el demandado se presentó oponiendo la escepción de incompetencia después de vencido el término para con-



la escepción de incompetencia para fundar la revocatoria del auto de prueba — Com., tom. 1, pág. 212, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Demanda** — El pedido de prórroga del término para contestar la demanda, no importa renunciar al derecho de recusar sin causa — Com., tom. 1, pág. 163, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Demanda** — La rebeldía del demandado, en el traslado de la demanda, reconocimiento de firma de documentos parciales y absolución de posiciones, hace procedente su condena — Com., tom. 1, pág. 425, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Demanda** — La falta de contestación de la demanda no exime al actor de justificar plenamente los hechos en que funda su derecho — Civ., tom. 9, pág. 393, Ser. 5ª (tom. 56).

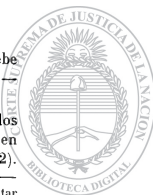
5. **Demanda** — Para que la duda manifestada al con-

testar la demanda; después de haber sido notificado del recibimiento de la causa á prueba. En cuanto á la disposición del inc. 3º del art. 87 del mismo Cód. de Proc., ella no era de tenerse en cuenta en el caso presente, puesto que sobre esta disposición prevalece la anteriormente citada, desde que esta marca precisamente el procedimiento que debe imprimirse al juicio. Desde luego de aceptarse la escepción, importaría violar abiertamente la referida disposición del art. 83, por cuanto ella marca terminantemente la época en que deben formalizarse las escepciones autorizadas por la ley. Esa disposición del art. 87, inc. 3º, debe tomarse como un medio de consentir un recurso, de alegar la incompetencia por vía de recurso contra el auto de prueba, mientras él no se encuentre consentido, pero nunca es de admitirse que se opongan escepciones en esta oportunidad, cuando ella está determinadamente expresada en el art. 83.

2. El art. 366 autoriza á recusar sin causa antes ó al tiempo de contestar la demanda. De manera que cualquier escrito presentado antes de la contestación no importa aceptar al juez para que conozca en el pleito definitivamente. La Cám. Civ. ha resuelto que la recusación debe hacerse en el primer escrito que se presente, ya sea contestando ó no la demanda. Si no se recusa en el primer escrito, ya después no puede hacer uso de ese derecho. Pero este trib. interpreta equivocadamente la ley, pues solo se exige que la recusación se haga en el primer escrito cuando sea con causa — art. 369.

4. De acuerdo con la jurisprudencia. Véase Inst., t. 7, verb. *Demanda contestada*, núms. 3 y 4. Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª; arts. 100, inc. 4º, 433, 434 y 435 del Cód. de Proc. Civ., y 919 del Cód. Civ.

5. El actor se presentó diciendo que había comprado del demandado los lotes de terreno á que se referían las escrituras acompañadas y con



tar la demanda pueda considerarse evasiva, el actor debe rendir prueba concordante para justificar el hecho dudoso — Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 5ª (tom. 57).

**6. Demanda**—Las escepciones opuestas por uno de los demandados no interrumpe el término que los demás tienen para contestar la demanda—Civ., t. 15, p. 85, Ser. 5ª (t. 62).

la superficie que las mismas designaban; que habiendo notado al tratar de venderlos, que faltaban algunos, y que en otros había una diferencia de consideración entre el área comprada y la que tenían los terrenos, era llegado el caso de demandar la entrega del terreno que faltaba, ó en su defecto, el precio, con indemnización de daños y perjuicios. El demandado pidió el rechazo de la demanda, manifestando que había entregado á los compradores el terreno que le acordaban sus títulos, y que, en la hipótesis de que no existiera íntegra la superficie enajenada, lo que había que averiguar previamente, él no tenía la obligación que la demanda le atribuía. Si bien el demandado no había desconocido categóricamente la verdad de los hechos espuestos en la demanda, en cuanto á la falta de terreno, desde que por sus palabras se colocaba en el caso de que pudiese ó no existir esa falta, no era llegada sin embargo la oportunidad de aplicar la disposición del inc. 1º, del art. 100 del Cód. de Proc. Este art., al establecer que las respuestas evasivas pueden estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos á que se refieran, deja librado al criterio judicial el hacer la declaración correspondiente, la cual indudablemente solo puede tener lugar cuando la presunción, que de la actitud equivoca del demandado resulte, se encuentre corroborada y fortalecida por otro género de pruebas. La disposición referida, en resumen, no hace más que consignar una presunción sin importancia alguna en sí, pero que puede constituir prueba completa cuando está apoyada por otros concordantes, quedando á falta de éstas, en la simple categoría de una presunción *hominis* cualquiera. En el caso resuelto, el actor á quien correspondía el *onus probandi* no produjo absolutamente justificativo alguno de la verdad de los hechos en que fundaba su acción, de tal manera que, no habiendo elementos concordantes de la presunción referida, era imposible declarar probados los extremos de la demanda, por el solo mérito de dicha presunción. Estando improbada la demanda, como resulta de las consideraciones anteriores, correspondía la absolución del reo, de acuerdo con lo que disponen las leyes 39, tít. 2º, y 1ª, tít. 14, Part. 3ª.

6. Los demandados habían consentido una resolución anterior, por la cual no se hizo lugar á la declaratoria solicitada por los otros codeemandados para que no corriese término para contestar la demanda, mientras se sustanciaba la escepción.



7. **Demanda**—Sobre interpretación de leyes de impuestos para la Capital, corresponde á los Tribunales ordinarios—Civ., tom. 19, pág. 100, Ser. 5ª (tom. 66).

8. **Demanda**—Contra la Municipalidad, no basta para decretar la suspensión del procedimiento administrativo—Civ., tom. 21, pág. 397, Ser. 5ª (tom. 68).

**Demanda**—Véase: *Excepción*, 5 y 7; *Fianza*, 5; *Injurias*, 6; *Liquidaciones*, 1; *Mercaderías*, 2; *Compulsa*, 2; *Posiciones*, 18;

7. Se había puesto en tela de juicio una ley de patentes para la Cap. Federal dictada por el Congreso. La ley de 14 de Set. del 63 carece de aplicación en este caso, por cuanto en la fecha en que se dictó dicha ley no existían los Juzgados federales de la Cap. de la Rep., estando hoy determinada la jurisdicción de éstos por el art. 111 de la ley org. de los Trib. de la Cap., de fecha 2 de Nov. de 1886. Si bien los incs. 1º y 2º de dicho art. 111 atribuyen á los jueces federales de la Capital el conocimiento de los casos regidos por las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, y de las acciones fiscales contra particulares á corporaciones, por cobro de cantidades adeudadas por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos, y en general de todas aquellas causas en que la Nación ó un recaudador de sus rentas sea parte, debe tenerse en cuenta que los mismos incs. en su parte final espresamente exceptúan las leyes que se refieren al gobierno y administración de la Cap., y las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Cap. y no generales para la Nación. Aunque la ley general de impuestos, cuyo alcance y aplicación se discutía, puede decirse que es general para la Nación, no lo es en el concepto de la ley citada, puesto que en los artículos de cuya interpretación se trataba, se refiere únicamente á la Cap. y territorios federales, y no al de las provincias, de tal suerte que puede afirmarse con exactitud que el impuesto cuestionado ha sido establecido por el Congreso en su carácter de legislatura local para esta Capital, siendo de notar que las leyes nacionales de esta naturaleza son á las que se refieren los incs. 1º y 5º del art. 111 cit. Por consiguiente, esta cuestión cae bajo la jurisdicción común de los Trib. civ. de la Capital, desde que habiéndoseles espresamente exceptuado de la competencia del Juzgado Federal, y sin atribuirse su conocimiento á otros jueces, entra en la jurisdicción ordinaria que aquellos ejercen. Esta doctrina ha sido sancionada por el art. 31, inc. 9º del Cód. de Proc. Crim.

8. No hay términos hábiles para decretar la medida que se solicita, pues ello importaría anticipar la procedencia de la acción que se instaure y la insubsistencia legal de la misma ordenanza que es lo que va á constituir la materia del litigio.



*Acciones*, 1; *Embargo preventivo*, 12; *Poder*, 1; *Esposo*, 3; *Administración*, 4; *Autenticidad*, 2; *Bienes*, 9; *Instrumentos públicos*, 1; *Prueba*, 16; *Representación*, 1; *Escepciones*, 19 y 21; *Escepción de defecto legal*, 1, 2, 4, 5, 13, 16 y 17; *Escepción de litispendencia*, 2; *Acarreador*, 3; *Concurso comercial*, 2; *Confesión*, 1; *Contrato*, 4, 5 y 9; *Costas*, 1, 12, 18, 25, 86 y 92; *De oficio*, 1; *Recibo especial*, 1; *Documentos*, 6; *Escep. de falta de personería*, 7; *Escep. de falsedad*, 4; *Notificación*, 4; *Prescripción*, 1; *Rebeldía*, 2, 3 y 4; *Árbitros*, 2; *Cuenta*, 1; *Deuda*, 1; *Ampliación*, 1; *Copia*, 4; *Nulidad*, 31 y 34; *Copias*, 3; *Recusación*, 27.

1ª. **Demanda ordinaria**—El auto que manda entregar los fondos y declara decaído el derecho de entablar demanda ordinaria es inapelable—Com., tom. 1, pág. 229, Sr. 5ª (t. 36).

1ª. **Demencia**—Cualquier Juzgado puede entender en los juicios contra el demente—Civ., t. 13, p. 257, Sr. 5ª (t. 60).

**Demencia**—Véase: *Desistimiento*, 4.

**Demora**—Véase: *Término*, 4; *Declaraciones*, 10; *Diligencias*, 1 y 2; *Domicilio*, 11; *Diligencias de prueba*, 12.

1ª. **Denegación maliciosa de deuda**—Para que exista este delito, se requiere como condición esencial que haya una deuda legalmente exigible—Crim., tom. 5, pág. 193, Ser. 3ª (tom. 40).

1ª. **Denuncia**—El Juez ante quien se haya denunciado la insanía debe conocer en las denuncias posteriores—Civ., t. 11, pág. 5. Ser. 3ª (tom. 58).

2. **Denuncia**—Siendo la denuncia del damnificado por un delito, sin acusar á persona determinada, un derecho propio, el autor de ella no contrae responsabilidad por los daños y

1ª. Arts. 505, 525 y 526 del Cód. de Proc. Civ.

1ª. Véase la nota del verb. *Contrato*, nº 18.

1ª. Pendiente una denuncia sobre insanía, se presentó una nueva por otra persona. El Juez ordenó que se ocurriese al Juez donde tramitaba la primera, por cuanto aquél había prevenido; y porque la acumulación de ambas eran procedentes por cuanto los dos juicios eran de la misma naturaleza y tenían idéntico objeto.

2. Véase el verb. *Daños y perjuicios*, 15.



perjuicios que el procedimiento judicial puede ocasionar al sindicado—Civ., tom. 11, pág. 287, Ser. 5ª (tom. 58).

**3. Denuncia**—Solo deben pasarse al Juez de Instrucción los antecedentes si resulta justificada la existencia del delito; las simples denuncias deben hacerlas ante él los interesados—Civ., tom. 15, pág. 119, Ser. 5ª (tom. 62).

**Denuncia**—Véase: *Acusación fiscal*, 2; *Depositorio*, 5; *Depósito judicial*, 3; *Valor del robo*, 1.

**1ª. Denunciante**—La personería del denunciante no enerva el derecho de acusar del Agente Fiscal; siempre el delito puede ser perseguido de oficio—Crim., t. 5, p. 247, S. 5ª (t. 40).

**1ª. De oficio**—Debe declararse de oficio la nulidad del

3. En un juicio testamentario el Juez ordenó que pasasen al de Instrucción ciertos antecedentes á fin de que iniciase proceso contra dos procuradores apoderados de los herederos. De este mandato del Juez, se pidió reposición y en subsidio apelación. No se hizo lugar al primer recurso y sí al segundo. La Cám. revocó la resolución fundándose en que los hechos denunciados, solo podrían dar margen á pasar los antecedentes á los Jueces del Crimen si, á consecuencia del juicio civil correspondiente que le promuevan los herederos, resultara que el denunciado habia procedido abusivamente y sin derecho. Las solas denuncias que obraban en los autos no autorizaban la adopción de una medida de tan grandes ulteriores como las del auto recurrido, pues no es lo mismo para los Jueces de Instrucción, que las denuncias se le formulen directamente por los que se consideren damnificados, á que se las trasmita un funcionario del orden judicial, que le imprime un carácter de mayor seriedad y trascendencia. Esto resolvió sin perjuicio de que, bajo su responsabilidad, los interesados ejercitasen las acciones civiles ó criminales que considerasen asistírlas.

1ª. Tratándose de un delito que da lugar á la acción pública, cualquiera persona capaz puede ponerlo en conocimiento de la autoridad correspondiente para su investigación.—art. 155 del Cód. de Proc. Crim.—Esta acción pública es ejercida por el Min. Fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar que incumbe á la persona ofendida ó damnificada por el delito—art. 14 del mismo.—Entre las obligaciones que impone el art. 118, á los Agentes Fiscales, se halla la de promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos en que ejerzan sus funciones, y que llegasen á su conocimiento por cualquier medio, salvo en aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido el ejercicio de la acción pública.

1ª. En este caso no se trabó el pleito en forma legal, puesto que la sociedad es una entidad distinta de la de cada uno de sus socios. Las



juicio, si demandada una sociedad, el juicio se ha seguido con uno de los socios personalmente — Com., tom. 1, pág. 112, Ser. 5ª (tom. 36).

**2. De oficio** — Los jueces pueden de oficio rechazar las diligencias de prueba pedidas fuera del término hábil — Com., tom. 1, pág. 125, Ser. 5ª (tom. 36).

**3. De oficio** — Discutida y rechazada la excepción de in-

actuaciones producidas sin intervención de una de las partes, no pueden producir efecto alguno — Ley 15, tit. 22, Part. 3ª. — Siendo deber de los Jueces velar por la regularidad del procedimiento cuando este procedimiento ha sido violado el Juez puede anularlo de oficio — Ley 2, tit. 22, Part. 3ª.

2. En un juicio ejecutivo se pidió que unos testigos fuesen citados para prestar declaración. No quedaba el término hábil para poner de manifiesto por tres días la lista de los testigos. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 118, 184 y 492 del Cód. de Proc. Civ. la prueba no podía recibirse.

3. Esta es una cuestión muy debatida en nuestros tribunales y que ha sido resuelta contradictoriamente. En el caso del sumario el juez opinó que la excepción era viable aun después de pasar el término para oponerla. Notificado el demandado opuso la excepción de incompetencia fundándose en que el tribunal competente para entender en la causa era el de Nueva York: fué rechazada esta excepción. Al abrirse la causa á prueba, declarándose competente el juzgado, por segunda vez se alegó de incompetencia por tratarse de la aplicación de una ley del Congreso — la de moratorias. — En 1ª Inst. se resolvió la incompetencia del juzgado, diciendo que por primera vez se había desechado la excepción propuesta por el demandado en forma de art. previo, pero sin que el juzgado hiciera en dicho auto una declaratoria en general sobre su competencia. Esa declaratoria solo corresponde hacerse en la oportunidad que marca el art. 87, inc. 2.º del Cód. de Proc., debiendo considerarse recién y después de consentido el auto de apertura á prueba, ó del segundo traslado en su caso, que el juicio queda definitivamente fijado y radicado para su resolución. La razón de esta disposición aparece evidente si se considera que cualesquiera que sean las excepciones dilatorias, aun la de incompetencia, que hayan podido alegarse y resolverse al iniciarse el juicio, puede éste corresponder quizás al conocimiento de otro juez, por razón de la materia, en cuyo caso procede la declaratoria de incompetencia en todo tiempo según la doctrina corriente y limitada por nuestra ley á los términos citados del art. 87. La negligencia ó voluntad deliberada de los interesados en un juicio al no proponer en tiempo una cuestión de incompetencia por razón de la materia, como en el caso presente, no debe afectar por otra parte la



competencia, los jueces no pueden, ni de oficio, ni á solicitud de partes, declararse incompetentes—Com., tom. 1, pág. 129, Ser. 3ª (tom. 36).

resolución judicial á dictarse, porque la competencia se funda en motivos de interés público que no pueden ser contrariados aceptando á los interesados las prorrogaciones de jurisdicción, que de hecho resultarían de sus actos. De lo espuesto, se desprende que no estando consentido aun el auto de prueba, procede el pronunciarse sea á petición da parte ó de oficio sobre la competencia del Juzgado. La Cám. revocó esta resolución fundándose en que el sistema de las excepciones dilatorias sucesivas y separadamente opuestas, que permitía antiguamente la legislación de las Partidas y que daba lugar á que las causas duraran medio siglo, á menos que el juez, entendiendo que se procedía con malicia por dilatar el pleito, diera un plazo perentorio al demandado para que opusiera todas sus *defensiones ayuntadas en uno*. Reaccionando contra esta práctica perniciosa, el art. 86 del Cód. de Proc., ha dispuesto que á un tiempo y en un mismo escrito, alegara el demandado todas las excepciones dilatorias. Se trataba de volver á lo antiguo, dándole al art. 87 un alcance que pugna contra el espíritu y tendencia manifiesta de la legislación moderna. Ese art. dispone que los jueces al recibir la causa á prueba en la cuestiones de hecho, ó al correr el segundo traslado en las de derecho, se pronunciarán espresamente sobre si la causa es ó no de su competencia. De la circunstancia de ese pronunciamiento en las oportunidades que se indican, se saca argumento para sostener que aunque se haya discutido y desechado una excepción de incompetencia, puede sugerirse al juez esa misma excepción bajo otra faz, y éste que ya rechazó una anterior, volver sobre sus pasos y desprenderse del conocimiento del asunto. Todas las excepciones han de ser alegadas á un tiempo, ha dicho la ley, de modo que si se cree que el juez es incompetente por razón de la materia, por razón del territorio ó del fuero, han de hacerse valer conjuntamente tales circunstancias y no una después de otra: 1ª porque constituyen una misma excepción; y 2ª porque todas tienen el mismo carácter de dilatorias. Se dirá que esto concierne solo al litigante, pero que el juez no está en el mismo caso. Debe rechazarse esta distinción, porque la razón que ha inducido al legislador á exigir que todas las excepciones dilatorias sean opuestas al mismo tiempo, tiene en mira el orden procesal, que liga tanto al juez como al litigante. Por otra parte, se comprende que cuando nada se ha dicho sobre la competencia del juez, ni se ha discutido ni resuelto cosa alguna al respecto, haya podido pasar desapercibido para éste, que carecía de atribuciones para conocer del litigio, y que solo se haya apercibido de ello al estudiar la naturaleza de la causa para darle la tramitación que especialmente le corresponda; pero, no es admisible que cuando ha en-





**4. De oficio** — Debe declararse de oficio la nulidad de la sentencia que no reúne las formalidades que la ley determina para su pronunciamiento — Civ., t. 9, p. 411, Ser. 5ª (t. 56).

**5. De oficio** — El auto que reconoce carácter ejecutivo á

tendido enterarse del asunto para pronunciarse sobre su competencia, puesta en tela de juicio por una causa ó por otra, y ha declarado que es competente, sea legal declarar que no lo es en oportunidad de recibir la causa á prueba ó correr nuevo traslado por su orden. Pero no son solo estas consideraciones que afectan, puede decirse, á la forma, las que militan en contra de esa tesis, hay razones de fondo que la hacen igualmente inaceptable. «Dice el Inferior, que es incompetente porque el caso está regido por la ley de moratorias de 13 de Jun. de 1891, y que con arreglo al art. 100 de la Const. nacional, é inc. 1º, art. 2º de la ley de 14 de Set. de 1863, su aplicación corresponde á la justicia federal. El caso no está regido por esa ley; lo está por el contrato celebrado por las partes y subsidiariamente por el Cód. de Com. La ley invocada, lo único que hizo fué modificar los plazos comerciales para todos los negocios de esta índole, y por eso es que se ha dicho con razón que puede considerarse incorporada á la legislación comercial. El plazo no es sino un elemento accidental de un contrato; y por ese accidente aun impuesto por la ley, no deja el acto jurídico de afectar la esencia que le es propia. Jamás pudo entrar en la mente del legislador que esa ley de circunstancias requiriera para su aplicación, y para solucionar las controversias á que diera lugar la intervención de la justicia federal, como si se tratara de una ley que creara derechos especiales, entre otras, las de marcas de fábrica ó patentes de invención, porque el trastorno sin nombre que hubiera producido, sacando de la jurisdicción común los asuntos que á ella correspondieran ó que en ella estuvieran radicados para trasladarlos á la jurisdicción federal, no no compensaría las ventajas que tuvo en vista acordar. Una vez radicado un juicio ante los Trib. de Prov.—lo mismo debe entenderse respecto de los de la Cap.,—será sentenciado y fenecido en la jur. prov., dice el art. 14 de la ley de 1863, con el derecho de apelación que determina en los incs. 1º, 2º y 3º; y este precepto, conocido del legislador aparte de las otras consideraciones espuestas, pudo tranquilizarlo de que no ocurrieran los inconvenientes de federalizar las obligaciones comerciales por la prórroga de noventa días que fija para su exigibilidad».

5. Con arreglo á la ley 2, tít. 22, Part. 3ª, los autos interlocutorios, pueden ser revocados de oficio «por alguna razón derecha, quando quier». En el caso ocurrente era de tanta mayor aplicación el precepto recordado, cuanto que, según resultaba de autos, se trataba de una resolución que no fué ejecutoriada por no haberse librado el mandamien-



la obligación es revocable de oficio—Civ., tom. 11, pág. 374, Ser. 3ª (tom. 58).

**De oficio**—Véase: *Competencia consentida*, 1; *Incompetencia*, 2 y 6; *Abogado*, 4; *Denunciante*, 1; *Albacea*, 1; *Contrato de compraventa*, 6; *Nulidad*, 18; *Martillero*, 4; *Nulidad de revocatoria*, 1; *Apoderado*, 8.

**Dependiente**—V.: *Contrato*, 1 y 11; *Daños y perjuicios*, 4.

1. **Depositario**—El que ha deducido tercera, no puede invocar el derecho de retención por sus honorarios como depositario—Com., tom. 1, pág. 124, Ser. 5ª (tom. 36).

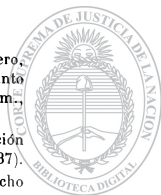
2. **Depositario**—Que no puede cuidar personalmente la

---

to ordenado, en cuyo caso pudo el Juez apreciar nuevamente el carácter de la obligación, á los efectos del art. 471 del Cód. de Proc.

1. Pendiente un juicio de tercera se cambió de depositario; el anterior había sido el mismo tercerista. Este quiso retener las cosas invocando su carácter de acreedor por los derechos de depósito. No se le hizo lugar por cuanto pendiente el juicio de tercera no se podía saber si dicho interesado era ó no propietario de los mismos. Recién después de dilucidado este punto, sería llegado el caso de establecer si ha ejercido ó no el cargo de depositario ó si simplemente ha tenido en su poder muebles de su pertenencia. Por otra parte, si antes de la sentencia se resolviera esta cuestión, se prejuzgaría necesariamente en el juicio de tercera.

2. El depositario de una casa perteneciente á un concurso fué demandado por el síndico por cobro de alquileres de la misma, fundándose en que el depositario no tiene el uso de la cosa depositada—art. 2208 del Cód. Civ.,—siendo así que la casa había estado ocupada por una tercera persona, y que entonces alquilando la finca sin la autorización necesaria había ultrapasado las facultades que la ley le da; que la sanción de la ley á los hechos verificados por el depositario se halla terminantemente establecida por el art. 2209, así como por el 2210. El depositario dijo que eran falsos los hechos, que la propiedad la ocupaba una familia al solo objeto de cuidarla, sin pagar alquiler, porque por sus ocupaciones comerciales no le era posible cuidarla personalmente; que por último, la afirmación de que cobraba alquiler era falsa, siendo únicamente un cargo gratuito del síndico. El demandado se esceptionó diciendo que la familia ocupaba la finca, al solo objeto de vivir en ella, para su cuidado, sin pagar alquiler alguno. No se justificó que el depositario alquilase la casa, ni de que se sirviese de ella; y teniendo en cuenta, por otra parte, su obligación de cuidarla y conservarla con la misma diligencia que presta á sus propias cosas—art. 2202, Cód. Civ.,



cosa, puede, bajo su responsabilidad encargar á un tercero, sin que pueda hacérsele cargo de frutos ó alquileres en tanto no se justifique plenamente que los ha percibido — Com., tom. 2, pág. 30, Ser. 5ª (tom. 37).

3. **Depositario**—Judicial, no tiene el derecho de retención sobre los objetos embargados — Com., t. 2, p. 43, S. 5ª (t. 37).

4. **Depositario** — Si existe controversia sobre el derecho del depositario judicial para cobrar gastos y honorarios, procede la recepción de prueba—Com., t. 2, p. 72, S. 5ª (t. 37).

5. **Depositario** — Al juez de la ejecución corresponde el conocimiento de las denuncias que se hagan contra el depositario—Com., tom. 2, pág. 93, Ser. 5ª (tom. 37).

6. **Depositario** — Sin perjuicio de las responsabilidades

— era indudable que la acción deducida quedó improbadada, máxime si se tiene en cuenta que no se trataba de pérdidas é intereses — art. 2204 del Cód. Civ.

3. Según el art. 459, Cód. de Proc. Civ., el depositario de objetos embargados á la orden judicial, estará obligado á presentarlos dentro de 24 horas de cualquier intimación judicial, pudiendo ser compelido á ello con arresto personal. La disposición del art. 2218, Cód. Civ., que concede al depositario el derecho de retener la cosa depositada hasta el entero pago de lo que se le deba por razón del depósito, es inconciliable con la del art. 459 cit., y no puede primar sobre éste porque según espresamente se establece en el art. 2187, Cód. Civ., las disposiciones del tit. del Depósito se refieren solo al depósito convencional, y no á los derivados de otra causa que no sea un contrato; y en todo lo que respecta á los efectos del depósito esas disposiciones rigen solo subsidiariamente *en cuanto fueran aplicables* al depósito judicial, en virtud de embargo, prenda, etc. Por otra parte, el embargo fué decretado en carácter de preventivo el que fué revocado como improcedente, y fué ordenado bajo la responsabilidad de la parte que lo pidió, como lo prescribe el art. 444, Cód. de Proc. Civ., y por consiguiente, la responsabilidad por las costas, daños y perjuicios que pueda ocasionar el embargo por haber sido pedido sin derecho, no puede hacerse pesar sobre la parte que lo impugnó y obtuvo la revocación del auto que lo decretó.

4. Se trataba de un embargo de animales que una de las partes decía no haberse trabado, mientras que la otra aseguraba no solo lo contrario sino que había hecho gastos de manutención, etc. Habiendo hechos controvertidos la apertura de la causa á prueba se imponía.

5. Se había denunciado la violación del depósito y falta de debida diligencia en el desempeño del cargo de depositario.



en que haya incurrido el depositario deben regularse sus honorarios—Com., tom. 2, pág. 95, Ser. 5ª (tom. 37).

**7. Depositario**—Si éste no estaba en condiciones de restituir el depósito á la vista ó en cuenta corriente, se presume la existencia del dolo, y consiguientemente la nulidad del acto y la obligación inmediata de devolverlo—Com., tom. 3, pág. 90, Ser. 5ª (tom. 38).

**8. Depositario**—No puede modificarse la cuenta presentada por el depositario si ha sido consentido el auto que lo aprobó—Com., tom. 4, pág. 356, Ser. 5ª (tom. 39).

**9. Depositario**—Corresponde la recepción de prueba si la cuenta de gastos del depositario fuese objetada—Com., tom. 5, pág. 180, Ser. 5ª (tom. 40).

**10. Depositario**—Si los muebles embargados han sido vendidos por orden de juez competente, no procede la prisión del depositario—Com., tom. 5, pág. 316, Ser. 5ª (tom. 40).

**11. Depositario**—Si de autos consta la fuga de la menor, no procede intimación de entrega al depositario—Civ., tom. 10, pág. 410, Ser. 5ª (tom. 57).

---

7. Arts. 932, incs. 1 y 2; 1050 y 1052 del Cód. Civ. Segovia, notas 30 y 31; Bedarride, Tratado del Dolo y Fraude, tom. 1, n° 30.

9. La Cám. dijo que impugnada la exactitud de la cuenta de gastos presentada por el depositario, no hay base para resolver al respecto sin abrir un breve término probatorio por vía de justificación, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 408 y 89, Cód. de Proc. Civ., y ley 11, tit. 4º, Part. 3ª.

10. La facultad conferida á los jueces por el art. 459 del Cód. de Proc. Civ., solo es aplicable á los depositarios cuando exista ocultación de bienes que le han sido confiados legalmente en su poder. En el caso del sumario, los bienes de que era depositario el mismo ejecutado habían sido vendidos por orden judicial. De consiguiente, el depositario no está sujeto á la medida preventiva que estatuye el art. citado.

11. Una señora fué nombrada depositaria de una menor, y habiendo fugado ésta, aquélla puso el hecho en conocimiento del juez que ordenó el depósito. No obstante haberse justificado este hecho en legal forma, la parte contraria pidió que se la intimara la entrega bajo apercibimiento de ser constituida en arresto, como lo establece el art. 459 del Cód. de Proc. No se hizo lugar á la intimación, en primer lugar porque constaba la inutilidad de la intimación, y en segundo lugar porque el apercibimiento no era procedente.



12. **Depositarario** — Los padres como depositarios de la esposa, no pueden ser presentados como testigos en el incidente sobre cambio de guardador — Civ., tom. 11, pág. 347, Ser. 5ª (tom. 58).

13. **Depositarario** — Delegada en el juzgado la facultad de nombrar depositario de los menores, la resolución que lo hace entre los propuestos no causa agravio — Civ., tom. 11, pág. 358, Ser. 5ª (tom. 58).

14. **Depositarario** — Solo puede exigir conformidad por sus honorarios al que propuso su nombramiento — Civ., tom. 13, pág. 251, Ser. 5ª (tom. 60).

15. **Depositarario** — El de semovientes no está obligado á entregarlos, en tanto no le abonen las pensiones — Civ., tom. 13, pág. 267, Ser. 5ª (tom. 60).

16. **Depositarario** — La oposición al de la esposa debe ser fundada — Civ., tom. 13, pág. 94, Ser. 5ª (tom. 62).

17. **Depositarario** — La esposa separada provisoriamente

---

12. Fué presentado como testigo el padre de la depositada, quien al mismo tiempo era su depositario. Según el art. 186 del Cód. de Proc., no pueden ser presentados como testigos *los consanguíneos ó afines en línea directa*. Luego el padre no puede ser testigo. Si bien es cierto que en el juicio de divorcio los parientes de las partes pueden ser presentados como testigos, no lo es menos que en el incidente de cambio de depositario, estaba éste especialmente interesado en sus resultados, pues del conjunto de las pruebas bien puede resultar alguna responsabilidad para él.

13. En un juicio verbal celebrado se convino en que el Juzgado nombraría el depositario sin limitación alguna para el caso de que las partes no conviniesen en la persona que debía desempeñar el cargo, á cuyo efecto cada interesado designó un número dado de personas. No habiéndose puesto de acuerdo las partes, el Juez la designó de entre las propuestas. Es evidente que esta designación no puede causar agravio porque es el resultado de un acuerdo de voluntades, que es ley para las partes — art. 1197 del Cód. Civ.

15. Arts. 2218 y 3939 del Código Civil.

17. El art. 68 de la Ley de Mat. Civ. prescribe, que puesta la acción de divorcio, podrá el Juez, á instancia de la parte, decretar la separación personal de los casados y el depósito de la esposa en casa honesta. Este depósito indica necesariamente la existencia de un depositario bajo cuya custodia debe quedar la esposa. La permanencia de la es-



debe estar á cargo de un depositario — Civ., tom. 15, pág. 141, Ser. 5ª (tom. 62).

18. **Depositario** — El tercero que en el acto del embargo niega la deuda, no puede ser considerado depositario — Civ., tom. 16, pág. 358, Ser. 5ª (tom. 63).

**Depositario** — V.: *Bienes embargados*, 5; *Honorarios*, 29.

1. **Depositario judicial**—Aun cuando á éste se le atribuya el deterioro de los objetos depositados, tal hecho no importa delito—Crim., t. 9, p. 432, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Depositario judicial**—Solo queda libre de responsabilidad por la entrega de la cosa depositada—Com., t. 9, p. 560, Ser. 3ª (t. 25).

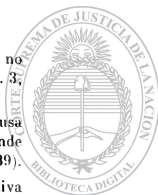
3. **Depositario judicial**—La apropiación ó malversación que de los objetos, cometa aquél, debe ser juzgada por el juez de instrucción—Crim., t. 3, p. 368, Ser. 5ª (t. 38).

posa en una casa, sin guardador, es contraria al propósito de la ley, cual es poner á la esposa que sale de la autoridad del marido, mediante la separación provisoria, á cubierto de los peligros á que pudieran arrastrarla su inexperiencia y los consejos interesados, con mengua de sus deberes conyugales.

1. Por el inciso 1º del art. 203 del Cód. Penal, se requiere que se *defraude* en la *calidad* de la cosa, es decir, que se cambie ó altere dolosamente la propiedad natural que distingue á una cosa de las demás; en el caso del sumario no se sostuvo que el acusado hubiese sustituido por otros, los objetos que le fueron confiados en depósito, sino que los había deteriorado rayando la luna de unos espejos, quitando parte del dorado de los cuadros.

2. Art. 459 del Cód. de Proc.

3. El delito que cometen los depositarios judicialmente nombrados que ejecutan respecto de los dineros ó bienes muebles confiados á su custodia algunos de los actos previstos por los arts. 267 y 268 del Código Pen., está espresamente calificado por el art. 269 del mismo. Esta disposición es aplicable, no solamente cuando la cosa depositada sea dinero, sino también cuando fueran alhajas, muebles ú otros objetos. Así resulta del mismo art. 269 del Cód. Pen., puesto que para determinar la significación de la palabra «caudales», que en él se emplea, basta la lógica y la aplicación de los principios generales del derecho. Esta ha sido la jurisprudencia constante de nuestro Trib.; y siendo el citado art. 269, idéntico en esta parte al 410 del Cód. Pen. esp., es oportuno recordar que ésta es también la doctrina del Supremo Trib. de



4. **Depositario judicial**—Su cambio de domicilio no puede fundar contra él un embargo preventivo—Crim., t. 3, p. 390, Ser. 5ª (t. 38).

5. **Depositario judicial**—El conocimiento de la causa contra el que no hace entrega de los objetos, corresponde a la jurisdicción criminal—Crim., t. 4, p. 224, S. 5ª (t. 39).

6. **Depositario judicial**—Su designación es facultativa del Juzgado—Com., t. 4, p. 300, Ser. 5ª (t. 39).

7. **Depositario judicial**—No proceden medidas contra él, fuera de la oportunidad que la ley determina—Civ., t. 14, p. 205, Ser. 5ª (t. 61).

8. **Depositario judicial**—No puede ser responsabilizado por la substitución de los objetos embargados, en tanto no se justifique plenamente el hecho—Civ., t. 16, p. 418, Ser. 5ª (t. 63).

9. **Depositario judicial**—No procede prisión contra el depositario judicial, si la desaparición del depósito no es

---

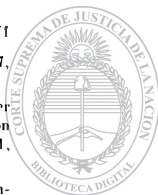
Justicia de España, como aparece de sus sentencias de 7 de Oct. de 1874, de 20 de Sept. de 1883 y 12 de Dic. de 1883.—Véase Viada, Cód. Pen. reformado, t. 2, p. 663 y 667.—Por el art. 268 del Cód. Pen., se castigan estos delitos con las penas señaladas para los ladrones, es decir, con las determinadas por los arts. 187 á 193 según los casos y las circunstancias del delito, además de la inhabilitación perpetua. No pudiendo ser impuesta esta pena por el juzgado correccional, su conocimiento corresponde á la jurisdicción criminal.

5. De acuerdo con el núm. 3.

6. El art. 458 del Cód. de Proc. no expresa que esta facultad resida en el Juzgado. Cuando el que obtiene el embargo otorga una fianza á satisfacción por los daños y perjuicios, el depositario no debe ser otro que la misma parte que pide el embargo.

8. En virtud del principio general de procedimiento que la prueba incumbe al que afirma la existencia de un hecho nuevo.

9. Se constató que unas casillas embargadas, fueron vendidas por el constructor por encontrarse impago de su precio. En este caso, es evidente que cualquiera responsabilidad en que pueda incurrir el depositario, debe hacerse valer ante el Juez civil, pero no incurre en responsabilidad penal, y por consiguiente, no puede constituirsele en prisión.



un hecho voluntario y en provecho propio—Civ., tom. 17, pág. 277, Ser. 5ª (tom. 64).

1ª. **Depositorio singular**—(ó) mutuario, puede disponer de los fondos; su obligación es meramente civil, la disipación no puede ser calificada como delito—Crim., tom. 3, pág. 361, Ser. 5ª (t. 38).

1ª. **Depósito**—Verificado en el acto del embargo preventivo, no puede fundar la excepción de pago—Com., tom. 1, pág. 403, Ser. 5ª (tom. 36).

2. **Depósito**—Aun rechazado el divorcio iniciado por la mujer, el marido no puede pedir el depósito de aquélla, si se niega á hacer vida matrimonial—Civ., tom. 14, pág. 241, Ser. 5ª (tom. 61).

3. **Depósito**—Véase: *Depositorio judicial*, 1; *Capital depositado*, 1; *Depositorio*, 7; *Delito*, 14; *Contrato de locación*, 5; *Bienes embargados*, 8.

1ª. **Depósito judicial**—Los fondos depositados judicial-

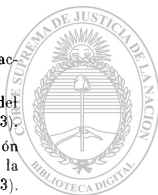
1ª. Sea que se califique el contrato como mutuo—Laurent, tom. 27 n° 73—ó como depósito singular—arts. 2189 y 2240, Cód. Civ.,—en cualquiera de los dos casos, el mutuario ó depositario, adquiere el dominio de las cosas entregadas á un título ú otro—arts. 2191 y 2245, Cód. Civ.—En consecuencia, admitiendo que el dinero entregado sea disipado por el depositario, se trataría de una disipación de cosas propias, lo cual no puede constituir delito, porque ese es un derecho emergente del dominio—art. 2513, Cód. Civ.—En tal caso, no habría sino una acción civil contra aquel que en virtud de una confianza indiscreta, pero perfectamente libre, se ha convertido en propietario de los dineros prestados y no los devuelve en el término convenido; él no disipa sino lo suyo, y la imposibilidad en que se encuentra de devolver el equivalente, no constituye un delito—Véase Dalloz, verb. *Abus de confiance*, números 80 y 154.

1ª. El depósito no se hizo en calidad de pago.

2. La Cám. declaró improcedente esta medida, sin perjuicio de que el esposo pudiera ejercitar, si viese convenirle, el derecho que le acuerda el art. 58 de la ley de Mat. Civ.

4ª. En virtud de la facultad conferida á todo Juez, por la ley 2, tit. 22, Part. 3ª, que autoriza á dejar sin efecto toda providencia dictada por error.





mente deben ser restituidos, si por error se permitió la extracción—Civ., tom. 9, pág. 332, Ser. 5ª (tom. 56).

2. **Depósito judicial**—El depositario judicial, carece del derecho de retención—Civ., tom. 16, pág. 39, Ser. 5ª (tom 63).

3. **Depósito judicial**—Las denuncias sobre substitución de objetos depositados judicialmente, deben hacerse ante la jurisdicción competente—Civ., t. 16, p. 380, Ser. 5ª (t. 63).

4. **Depósito judicial**—Procede el de los muebles cuya exclusión de la herencia se pretende—Civ., tom. 21, pág. 371, Ser. 5ª, (t. 68).

**Depósito verbal**—Véase: *Contrato de depósito*, 1.

1. **Depósito voluntario**—No procede prueba testimo-

---

2. Así lo dispone el art. 549 del Cód. de Proc. No es de aplicación el art. 2218 del Cód. Civ., atento lo dispuesto en el art. 2185.

3. Véase los fundamentos contenidos en la nota del verb. *Depositarlo judicial*, núm. 5.

4. Mientras no se resuelva esta incidencia, es deber de los Jueces adoptar las medidas de seguridad preceptuadas en el art. 641 del Cód. de Proc. El interesado pidió el nombramiento de depositario, oponiéndose la parte contraria.

1. Se gestionaba la devolución de una cantidad de madera y 150 chapas de zinc, que el actor decía haber depositado en el domicilio del demandado, y pidiendo se le condene á su restitución, ó en su defecto, al pago de la suma de 1.800 \$ m/n. Negada la verdad ó existencia de tal depósito, correspondía al actor su justificación, conforme al principio de la ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª, y á la naturaleza del contrato. Esta justificación no se produjo, pues dada la expresa disposición del art. 2201 del Cód. Civ., no es admisible la prueba testimonial, desde que se trataba de un depósito cuyo valor excede á la suma de 200 \$—art. 1193, Cód. Civ.—Por otra parte, el art. 2201 citado, estatuye en su última parte, que si el contrato de depósito excediese de la tasa antes señalada, y el depósito no constase por escrito, el que es demandado como depositario es creído sobre su declaración, tanto sobre el hecho del depósito, como sobre la identidad de la cosa y restitución de ella. En el caso, el depositario afirmó y sostuvo la inexistencia del contrato de depósito. Si el depositario debe ser creído sobre el hecho del depósito, es inquestionable que cuando dice que jamás celebró semejante contrato con el actor, este dicho debe tomarse como la expresión de la verdad. Tal es, al menos, la presunción *juris*, establecida por el artículo citado, de la cual no es dado separarse. Goyena, haciendo la filosofía de una dispo-



nial para justificar el de menor valor, si no existe principio de prueba literal—Civ. tom. 14, pág. 360, Ser 5ª (tom. 61).

**2. Depósito voluntario**—Al que pretende la existencia de valores en un mueble depositado voluntariamente, corresponde justificar plenamente su aserto—Civ., tom. 20, p. 353, Ser. 5ª (tom. 67).

**1ª. Derecho**—Aun cuando existan hechos, la cuestión es de derecho, si solo se discute su interpretación y pueden ser traídos los expedientes para mejor proveer—Civ., t. 16, p. 325, Ser. 5ª, (tom. 63).

**Derechos**—Véase: *Cesión de derechos*, 1; *Comerciante*, 4.

**Derecho de acusar**—Véase: *Homicidio*, 13.

**1ª. Derechos hereditarios**—El cumplimiento del con-

---

sición análoga de su *Proyecto de Cód. Civ.* para Esp., se expresa en estos términos, que son de perfecta aplicación á nuestro artículo: «Eslo « es conforme á los principios de derecho. El depositante ha seguido « la fe del depositario, *totum fide ejus se commissit*; se ha abandonado á « su moralidad, en la que tal vez ha tenido demasiada confianza, pero « que no puede ya recusar. Él solo es culpable de su imprudencia, si « la ha habido; digo si la ha habido, porque los Jueces no pueden des- « cubrirla cuando el depositante no les presenta más que su dicho, el « cual no debe prevalecer contra el del pretendido depositario.»

**2. De acuerdo con el núm. precedente.**

**1ª.** No existían en realidad hechos controvertidos, pues solo se desconocía el alcance y trascendencia que ambas partes atribuían á los que respectivamente invocaban. Además, las partes se referían á hechos que se afirmaba constar de expedientes mencionados, bastando en consecuencia que el juez los tenga presente oportunamente cuando haya de resolverse en definitiva.

**1ª.** Se solicitó la elevación, á escritura pública, de un contrato privado de compraventa de derechos hereditarios, y para garantir las ulteriores del juicio, se pidió un embargo preventivo. No es procedente esta medida, por cuanto si bien por las antiguas leyes se señalaban los casos en que los embargos preventivos debían ser decretados,—Ley 1ª, t. 9, part. 3ª—la procedencia ó improcedencia de estas medidas de seguridad, vino en la práctica á quedar librada al arbitrio de los jueces. El tit. XIII del Cód. de Proc., al enumerar los casos en que únicamente debe accederse al embargo preventivo,—arts. 443, 445, 446, 447 y 448—ha establecido una limitación á la facultad discrecional de que se hacía frecuentemente uso; fijando bases ciertas que puedan servir de norma á los



trato de compraventa de derechos hereditarios, no puede fundar un embargo preventivo sobre los mismos—Civ., tom. 11, pág. 344, Ser. 5ª (tom. 58).

2. **Derechos hereditarios**—Las declaraciones del cedente de estos derechos, carecen de valor legal, en cuanto puedan afectar los derechos del cesionario—Civ., tom. 16, pág. 69, Ser. 5ª, (t. 63).

**Derechos hereditarios**—Véase: *Parientes naturales*, 1; *Paternidad legítima*, 1; *Testamento*, 3.

1. **Derecho de retención**—El que por su voluntad re-

jueces. Y aparte de los casos que esos arts. espresamente determinan, no es permitido decretarlo, ni son tampoco aquellos aplicables, por analogía á casos semejantes. En este concepto, no tratándose del ejercicio de una acción reivindicatoria, no es aplicable la disposición del art. 447 del Cód. de Proc. Interpretándose restrictivamente las disposiciones citadas, ha sido y es de jurisprudencia constante en nuestros Tribs., no hacer lugar al embargo preventivo del inmueble cuya inscripción se demanda, aun cuando esa medida haya sido pedida en mérito de lo espuesto en el inc. 3º del art. 443 del Cód. de Proc., y se haya invocado para fundarla, la necesidad de asegurar la cosa materia del litigio ú otras consideraciones del mismo carácter, y lo que es más aun cuando la obligación se hubiese justificado por instrumento público. Finalmente, el inc. 2º del art. 443, se refiere á documentos que constaten la existencia de un crédito por cantidad líquida, por cuyo motivo tampoco es aplicable al caso presente. De acuerdo con este fallo. Véase Inst., tom. 3, verb. Embargo preventivo, núms. 3, 4 y 10. El principio sentado en este sumario está equivocado. Véase la nota del verb. Obligación de hacer, n.º 2 del tom. 2 de la Inst..

2. Este testimonio debe considerarse como sospechoso, pues habiendo cedido derechos, tiene interés en la eficacia de sus actos. Por otra parte, la declaración era singular, circunstancia que la despojaba de toda eficacia probatoria.

1. De que el actor haya tenido derecho para retener las cosas de la locación, no se sigue forzosamente que el propietario de los objetos deba responsabilizarse por los gastos de conservación, si en definitiva resultare que el derecho de retención fué ejercitado arbitrariamente. La retención, produce un cambio radical de vínculos jurídicos entre locador y locatario á tal punto que la locación misma termina para convertirse en una fuente diversa de obligaciones. La retención con ó sin derecho, equivale á un verdadero secuestro en el que el acreedor se constituye en depositario en virtud de la facultad que le acuerda la ley



tiene creyendo ejercer el derecho que la ley le acuerda, no puede exigir el pago de lo gastado, si se declara que carecía del derecho de retención—Civ., t. 17, p. 167, Ser. 5ª (t. 64).

**Derecho de retención**—Véase: *Depositario*, 1; *Desalojo*, 4.

1. **Desacato**—Cometen desacato contra un magistrado los que por medio de la prensa escrita ó grabada, le imputan indeterminadamente participación en crímenes de pública notoriedad—Crim., tom. 4, pág. 334, Ser. 5ª (tom. 39).

2. **Desacato**—Para que exista desacato no es indispensable

para resistir la entrega hasta tanto se le pague lo que le es debido por razón de las cosas retenidas. El actor, locador en el caso que nos ocupa, tenía evidente derecho para negar la devolución de los objetos, si en realidad el locatario, que era el demandado, le adeudaba el precio de la locación convenida. Pero si en vez de ser deudor el locatario fuera acreedor, ó no se resistiese á pagar lo que legítimamente adeudase, ó depositara, ó afianzara su importe á las resultas de la liquidación, en casos semejantes la retención sería un abuso—arg. del art. 1618, Código Civil,—y no sería justo entonces que el locatario, tras de haber sido víctima de una arbitrariedad tuviera que satisfacer todavía los gastos que hubiese demandado aquel secuestro. Es lo que pasó en el caso que nos ocupa, pues el demandado consignó una suma mayor de la que el juez declaró adeudar al actor, y en consecuencia los gastos que haya demandado el embargo, que no otra cosa importa la indebida retención ejercida por el actor, deben ser á cargo exclusivo de su causante, del mismo modo que habría tenido que satisfacerlos si en vez de haberse constituido él en depositario se hubiera nombrado un extraño por el juez. Son en realidad costas del juicio, y como éstas se mandaron abonar en el orden causado, al actor incumbía cargar con las del depósito de los objetos retenidos ó secuestrados, porque él fué el causante de ellos.

1. Véase la nota del verb. *Calumnia impresa*, núm. 1.

2. El Cód. Pen. esp., contiene declaración expresa en el sentido de que la injuria ú ofensa sea proferida en presencia del magistrado. Nuestro Cód. Pen. no exige tal circunstancia como requisito para el desacato, y establece en su art. 237, que cometen desacato los que provocan á duelo, injurian ó amenazan á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones, sin indicación de lugar y aceptando dos hipótesis para el delito: cometido en la casa de sesiones y en el despacho del empleado ó en otros lugares que los designados. La Cám. ha establecido jurisprudencia en el sentido de que las injurias dirigidas por la prensa al Presidente de la República constituyen desacato. Véase tom. 8, pág. 533 y tom. 15, pág. 375. Jur. Crim.



ble que la falta de consideración ó respeto tenga lugar en presencia del magistrado; basta que á él se haga referencia ó se le designe especialmente—Crim., t. 4, p. 334, S. 5ª (t. 39).

**Desacato**—Véase: *Disparo de arma de fuego*, 7.

**Descuento**—Véase: *Contrato de descuento*, 1.

**Descuido**—Véase: *Acarreador*, 2.

1. **Desalojo**—El locatario está obligado á entregar la cosa locada libre de toda ocupación; la existencia de sublocatarios le obliga al pago de los arrendamientos hasta el completo desalojo—Civ., tom. 9, pág. 302, Ser. 5ª (t. 56).

2. **Desalojo**—El subarrendatario no es parte en el juicio de desalojo contra el locatario—Civ., t. 14, p. 197, S. 5ª (t. 61).

3. **Desalojo**—Justificada en juicio sumario la condición

---

1. El locatario está obligado á pagar el precio y á restituir la cosa al locador—art. 1156, Cód. Civ.—y por lo tanto no basta que aquél quiera entregar las llaves á éste, si la casa arrendada no la pone á su disposición sin obstáculo alguno. El locatario confesó en su escrito de contestación á la demanda, que la casa quedaba con inquilinos cuando quiso hacer entrega de las llaves al locador; es decir, que no entregaba la casa en el mismo estado que la recibió para que el locador pudiera disponer de ella libremente, desde que quedaban en la propiedad los subarrendatarios á quienes el locatario subalquiló. El locatario que subarrenda ó cede el arrendamiento no puede librarse de sus obligaciones respecto al locador, sin el consentimiento de éste—art. 1596,—y no constaba ni de la prueba que rindió el demandado, ni de las demás constancias de autos, que el demandante hubiese dado su consentimiento para librar de sus obligaciones al inquilino, aunque este último afirmaba que alquiló la casa del propietario, sin contrato, sin compromiso alguno y con permiso para subarrendar. Aun cuando se haga el depósito de las llaves judicialmente, teniendo el locador motivo fundado para impugnarlo, ante el hecho de no hallarse la finca en condiciones de ser recibida como se entregó, no pudo quedar exento el locatario de su responsabilidad por el alquiler ó renta hasta el día de la entrega efectiva—art. 1611, Cód. Civ.—Esta responsabilidad en nada perjudica el derecho del demandado para percibir ó reclamar de los subarrendatarios el alquiler respectivo contratado con ellos—art. 1600.

2. Arts. 1585 y 1601, inc. 1º del Código Civil.

3. El contrato con que se instruyó la demanda, y las manifestaciones hechas en el comparendo á que las partes fueron convocadas, habilitaban suficientemente para dictar resolución en el juicio, en el



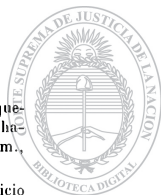
que rescindía el contrato, debe ordenarse el desalojo—Civil, t. 19, p. 359, Ser. 5ª (t. 66).

**4. Desalojo**—Deducida acción fundada en el derecho de retención, debe suspenderse la ejecución de la sentencia de desalojo—Civ., t. 21, p. 365, Ser. 5ª (t. 68).

**Desalojo**—Véase: *Daños y perjuicios*, 19 y 38; *Alquileres*, 5, 7 y 13; *Locación*, 10; *Papel sellado*, 9.

que solo se discutía si aquél era ó no de término vencido, sin que de ninguna manera se le hubiese opuesto la tacha que menciona el art. 590 del Cód. de Proc.

4. Los inquilinos se presentaron al Juzgado de 1ª Inst. diciendo que un Juez de Paz los había condenado por sentencia á desalojar en el término de sesenta días un terreno que tenían alquilado. Al mismo tiempo expresaban haber construido en dicho terreno un galpón que representaba un valor de 6.000 pesos m. n., sosteniendo que el propietario les debía pagar la construcción, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1535 del Cód. Civil. En tal virtud dedujeron el derecho de retención del terreno á objeto de mantener su posesión hasta que les fuese pagado el importe de las mejoras, amparados en la disposición del art. 3939, y pedían al Juzgado, que oficiase al juez de paz para que suspendiera la ejecución de la sentencia de desalojo, mientras se substanciará y decidiera la gestión iniciada en el juicio de retención, resolviéndose así. Notificado de ese auto el propietario interpuso recurso de apelación. Desde el momento que los inquilinos se presentaron haciendo valer el derecho de retención, la suspensión del desalojo era perfectamente correcta. Sin la orden de suspensión de la ejecución de la sentencia de desalojo, el derecho atribuido á los inquilinos por el art. 3939 del Cód. Civ. quedaría ilusorio. Consintiendo aquéllos en la entrega de la cosa, en razón de la sentencia, su derecho de retención quedaría extinguido en los términos del art. 3943 del Cód. Civ. Cuando las leyes consagran un derecho, éste debe ser amparado; de ahí la procedencia del auto de suspensión, que tiende precisamente á garantizar á los inquilinos el ejercicio del derecho invocado. Suspender la ejecución de la sentencia de desalojo, no importa volver sobre lo ya juzgado, sino simplemente aplazar el cumplimiento de aquélla en tanto se discute y falla la cuestión sobre retención de la cosa. A causa de la sumaridad del juicio de desalojo, los inquilinos no podían alegar en él la retención; aparte de que en todo caso lo impedía la importancia del derecho por exceder de la jurisdicción acordada á los jueces de paz. El hecho mismo de no haber los inquilinos usado de su derecho ante el juez de paz que les ordenó el desalojo, por imposibilidad legal, está demostrando que se encontraban habilitados para usarlo ante el juez competente.



**Desglose**—Véase: *Información*, 1.

**Designación**—Véase: *Cosa demandada*, 1.

1. **Desistimiento**—No puede darse por desistido al querellante si compareció á la audiencia después de hora, haciendo constar su voluntad de proseguir la querrela—Crim., tom. 2, pág. 100, Ser. 5ª (tom. 37).

2. **Desistimiento**—La falta de comparecencia al juicio verbal, hace procedente se declare el desistimiento del querellante—Crim., tom. 3, pág. 33, Ser. 5ª, (t. 38).

3. **Desistimiento**—La falta de asistencia á la hora designada, no basta para dar por desistido al querellante—Crim., tom. 3, pág. 63, Ser. 5ª (tom. 38).

4. **Desistimiento**—Procede el de la esposa, en el juicio

---

1. En tales condiciones, no es posible aplicar lo dispuesto en el art. 592 del Cód. de Proc. en lo Crim., que supone inasistencia, circunstancia muy distinta á una pequeña demora en que en el caso se habría incurrido.

2. Art. 592 del Cód. de Proc. Crim.

3. El querellante compareció á la audiencia en el día señalado, pero después de la hora fijada por el Juzgado. El caso es igual al del n.º 1.

4. Iniciado el juicio sobre insania del marido por su esposa, y mientras se proseguían sus trámites, sin hallarse aun en estado de sentencia, la misma denunciante se presentó al juez de la causa desistiendo de la acción. Pidiendo, que admitiéndose el desistimiento, se mandara archivar el expediente. El Juez de 1ª Inst. no hizo lugar á ello, fundándose en que el juicio debe terminar por sentencia, según resulta del texto del art. 147 del Cód. Civ., y porque el desistimiento importaría en cierta manera una transacción que versaría sobre la capacidad de la parte, que no puede ser objeto de ella, porque tampoco puede serlo de una convención. Una y otra consideración son erróneas. Cuando la ley espresa que el representante del presunto demente debe asistirle en tal carácter y defenderle en el pleito hasta que se pronuncie sentencia definitiva, no ha querido por cierto decir que este pronunciamiento debe fatalmente dictarse, sino que aquella representación debe durar hasta que se ejecutorie el fallo de insania, si hubiere lugar ó mérito para pronunciarlo. La disposición legal habla de pleito, pero no hay pleito sin querrela de parte, y no existiendo una ni otra cosa, tampoco puede haber lugar á decisión del juez. Los términos de la ley no son imperativos en cuanto al pronunciamiento de la sentencia, ni podrían serlo de ninguna manera, pues el ministerio de la justicia



iniciado por ella solicitando la declaración de demencia del esposo—Civ., tom. 12, pág. 5, Ser. 5ª (tom. 39).

**Desistimiento**—Véase: *Bienes embargados*, 4; *Conciliación*, 1; *Comprador*, 1, 3, 4, 5, 7; *Acusación*, 7; *Remate judicial*, 1, 3, 4, 8, 11, 16; *Contrato*, 34; *Costas*, 41, 64, 78, 83; *Remate desistido*, 1, 2; *Excep. de litispendencia*, 12; *Jactancia*, 2; *Títulos*, 5; *Tercera*, 7.

1. **Desistimiento del ejecutante**—Produce el levantamiento de la inhibición—Com., t. 1, p. 127, Ser. 5ª (t. 36).

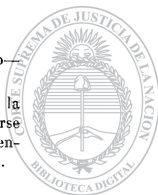
2. **Desistimiento del ejecutante**—Contra uno de los deudores y dirigida la acción contra otro, hace procedente el le-

puede cesar después de incoada la acción por diversos motivos y sin comprometer ningún derecho privado ni ningún interés social ó de orden público. Otro sería el caso, si producido el desistimiento, el Ministerio Púb. hubiese hecho suya la denuncia, provocando la secuela de la causa, ó en defecto de él, cualesquiera de las personas con facultad para hacerlo, según los términos enunciativos del art. 144 del Cód. Civ. No es tampoco arreglado el razonamiento, en cuanto considera que existiría en el fondo una transacción, porque el apartamiento del juicio, por parte de la esposa, no importa renunciar al derecho de pedir la interdicción de su esposo si á ello hubiere lugar, ni ese apartamiento cohibiría en manera alguna la acción de los que pueden intentarla en su silencio ó en su inacción. Renunciar á un derecho que puede hacerse efectivo en otro momento, aun con prescindencia del renunciante, no es transigir, porque este acto apareja la extinción de la obligación que le es correlativa, teniendo para las partes la autoridad de la cosa juzgada. ¿Y habría acaso términos hábiles para invocar esta autoridad, tratándose de la capacidad de las personas y de situaciones de hecho que una vez producidas pueden provocar la acción pública?

1. Con el desistimiento termina el juicio, y en consecuencia no debe dejarse subsistentes medidas que no responden á ningún propósito legal.

2. El acreedor de dos coobligados solidarios, inició ejecución contra uno de ellos: librado el mandamiento, dió resultado negativo. Entonces dijo que venía á cambiar la acción dirigiéndola contra el otro coobligado, solicitando se le citara para reconocer su firma. El juez dijo que en vista de lo manifestado por el acreedor, correspondía tenersele por desistido de la anterior demanda y librarse oficio para que se levantase la inhibición anotada. La Cám. confirmó fundándose en las mismas razones contenidas en el sumario precedente.





vantamiento procedente de la inhibición contra el primero—Com., t. 1, p. 128, Ser. 5ª (t. 36).

1ª. **Desobediencia**—Siendo obligación del martillero la entrega de lo vendido al comprador, no puede calificarse como delito la desobediencia á la orden del vendedor en sentido contrario—Crim., tom. 3, pág. 343, Ser. 5ª (tom. 38).

**Despojo clandestino**—Véase: *Interdicto*, 1.

**Detención**—Véase: *Fallido*, 1; *Acto jurídico*, 1.

1ª. **Detenido**—El detenido preventivamente debe, en caso de enfermedad, permanecer en un hospital; no puede concedérsele la estadía en el domicilio particular—Crim., tom. 2, pág. 83, Ser. 5ª.

**Detenido**—Véase: *Sobresimiento provisional*, 3.

**Deterioros**—Véase: *Locación*, 9; *Alquileres*, 9; *Depositorio judicial*, 1.

**Desposesión**—Véase: *Excepción de incompetencia*, 14.

**Destierro**—Véase: *Adulterio*, 3.

1ª. **Deuda**—Debe darse por comprobada ésta, si el demandado no la negó categóricamente y existe justificada en los

1ª. El art. 1.º del Cód. Pen. establece que «es delito ó falta toda acción ú omisión penada por la ley», y no hallándose, el hecho determinado en el sumario, comprendido en ninguna de las disposiciones del mismo Cód., es evidente que no existe delito.

1ª. El art. 681 del Cód. de Proc. Crim., así lo dispone.

1ª. El demandado, no solo no negó la existencia del crédito, sino que confesó, después de dada por contestada la demanda en rebeldía, haber hecho compras que no había pagado, lo cual, unido á la presunción que establece el art. 100 del Cód. de Proc., forman la prueba plena exigida por la Ley. Esta prueba comprende no solo la existencia del crédito, sino también su importe, puesto que éste no fué desconocido en la forma categórica exigida por la ley, habiéndose limitado el demandado, en su escrito, que no era de contestación á la demanda, á expresar «que no puede apreciar la cantidad de la cuenta por no venir acompañada de los documentos respectivos». Esta manifestación, no importa en modo alguno impugnar la exactitud de la cuenta, y si á eso se agrega que no contestó la demanda, es forzoso reconocer la oportunidad de aplicar la sanción del art. 100 del Cód. de Proc., en cuanto á todos los hechos que comprende la demanda.



libros de comercio del demandante, aun cuando el deudor no sea comerciante—Com., tom. 3, pág. 179, Ser. 5ª (tom. 38).

**Deuda**—Véase: *Bienes embargados*, 1 y 2; *Condición*, 1; *Fianza*, 4; *Juicio ordinario*, 1; *Concurso*, 7; *Excepción de pago parcial*, 1 y 2; *Excepción*, 7; *Juramento estimatorio*, 3; *Mandato*, 3; *Denegación maliciosa de deuda*, 1; *Delito*, 16; *Quiebra*, 10; *Excepción de pago*, 4, 5; *Pensiones militares*, 1; *Costas*, 38; *Pocuméntos*, 12; *Privilegio*, 1; *Contrato*, 36; *Juicio ejecutivo*, 3; *Prescripción liberatoria*, 1; *Depositario*, 18.

1ª. **Deudas**—La aprobación judicial del inventario importa reconocer las deudas del causante que en él se detallen—Civ., tom. 9, pág. 366, Ser. 5ª (t. 56).

**Deudas**—Véase: *Tutor*, 3; *Escep. de inhabilidad de título*, 11; *Fondos testamentarios*, 1.

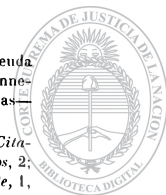
1ª. **Deudas personales**—Por esta clase de deudas, procede el embargo preventivo de la parte líquida que corresponda a un socio en la sociedad—Com., t. 1, p. 244, Ser. 5ª (t. 36).

1ª. **Deudor**—Éste, al ser citado de remate, no puede exigir que se le entreguen copias de la demanda—Com., tom. 2, pág. 167, Ser. 5ª (t. 37).

1ª. El inventario, es la descripción de todo lo que pertenece á una sucesión que forma su activo y demuestra su pasivo, sin lo cual no puede saberse su importancia. Así lo enseña el buen sentido, y así lo preceptúa la ley 100, tít. 18, part. 3.ª. «E primeramente otorgo, e vino conociendo que avía fallado en los bienes de su padre el finado tantas cosas muebles, e tantas rayzes, e tantas deudas quel devian, o quel devian», etc. La práctica, el buen sentido y la ley se encuentran de perfecto acuerdo, pues siendo el inventario la base y punto de partida para el arreglo de la sucesión y adjudicación y división de los bienes, debe especificarse en él todo cuanto afecta; de otro modo no habría liquidación posible en una testamentaria. Los actos de reconocimiento y las actuaciones judiciales no se anulan sino por causales determinadas. La operación del inventario, como se ha dicho, tiene por objeto hacer conocer el estado de la sucesión, por cuyo motivo no solo debe comprender la enumeración de los bienes que á ella pertenezcan, sino también las de las deudas á su cargo.

1ª. Art. 417 del Cód. de Comercio.

1ª. Véase la nota del verb. *Copias*, 1.



1<sup>a</sup>. **Deuda reconocida**—El reconocimiento de la deuda ante el oficial de justicia, firmando el interesado, hace innecesario juzgar sobre el valor de las pruebas rendidas—Com., tom. 1, pág. 88, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 36).

**Deudor**—Véase: *Acreedor*, 1; *Bienes embargados*, 3; *Citación de remate*, 1; *Consignación*, 1; *Defensor*, 1; *Edictos*, 2; *Prenda*, 1 y 3; *Quiebra*, 3 y 4; *Alquileres*, 1; *Comerciante*, 1, 2 y 6; *Abogado*, 2; *Tercería de dominio*, 1; *Banco Hipotecario Nacional*, 1; *Cesión*, 1; *Cláusulas*, 1; *Deuda*, 1; *Moratorias*, 1; *Defensor de ausentes*, 1; *Embargo preventivo*, 10 y 12; *Acción*, 2; *Acreedor prendario*, 2, 3 y 4; *Contratos*, 19 y 30; *Costas*, 21; *Daños y perjuicios*, 2; *Delito*, 16; *Diligencia preparatoria*, 2; *Domicilio*, 2; *Gastos*, 3; *Intereses*, 3; *Juez*, 2; *Confesión extrajudicial*, 1; *Escep. de pago*, 4; *Acreedor hipotecario*, 1; *Cláusula penal*, 1; *Crédito*, 1; *Fiador*, 2; *Nulidad*, 17; *Obligación de pagar*, 1; *Esperas*, 1; *Fianza*, 7; *Sociedad anónima*, 3; *Eseusación*, 8.

**Devolución**—Véase: *Daños y perjuicios*, 1; *Billetes*, 1; *Delito*, 14; *Encubridor*, 2; *Sumas*, 1; *Copia*, 1; *Objetos robados*, 1; *Contrato*, 22.

1<sup>b</sup>. **Día para reconocimiento**—Si el citado pide nuevo

1<sup>a</sup>. Al diligenciarse el mandamiento de embargo preventivo, habiéndose intimado al demandado el pago de la suma reclamada, contestó: Que debía al ejecutante la cantidad que se le reclamaba, y no podía abonar dicha deuda, firmando esa diligencia ante el oficial de justicia y testigos. Más tarde, absolviendo posiciones negó que fuese deudor de esa cantidad. Posteriormente durante el término de prueba, en los interrogatorios y posiciones formulados, el demandado no rechazaba la deuda, sino que sostenía que tenía plazo para pagarla. Y finalmente, al informar *in voce* su letrado ante la Cámara, no negó que su defendido fuera deudor de la cantidad reclamada, sosteniendo solamente que el actor debía pagarle daños y perjuicios por haber solicitado y obtenido indebidamente un embargo preventivo. Desde luego, había prueba plena, por confesión del demandado, de que adeudaba al actor, la cantidad que éste le cobraba, y no es necesario hacer mérito de las demás constancias probatorias como los libros del actor, que no podían tomarse en consideración desde que uno de los libros, el Diario, estaba irregularmente llevado según constaba del informe espedido.

1<sup>b</sup>. Así se desprende de la disposición de los arts. 31 y siguientes del Cód. de Proc. Civ. Advertido ya el ejecutado del procedimiento iniciado



día para el reconocimiento de la firma, la notificación puede hacerse por nota—Com., tom. 1, pág. 325, Ser. 5ª (tom. 36).

1ª. **Días señalados**—No procede la excepción de nulidad fundada en la falta de notificación personal, si existían días señalados para comparecer á secretaria—Com., t. 1, p. 325, S. 5ª.

**Día señalado**—Véase: *Declaraciones*, 9, 12.

1ª. **Diario**—La publicación de los estatutos de una sociedad anónima solo es obligatoria en un diario—Com. tom. 5, pág. 279, Ser. 5ª (tom. 40).

**Diario**—Véase: *Autor de la publicación*, 1; *Acusado por calumnia*, 1; *Edictos*, 8.

**Dictámen**—Véase: *Autenticidad*, 1.

**Diferencia**—Véase: *Embargo preventivo*, 21; *Bolsa*, 1, 2.

**Dilatoria**—Véase: *Escep. dilatoria*, núm. 1 y sig.

1ª. **Diligencias**—No procede reiteración de diligencias si no se justifica que la demora no es imputable á la parte—Civ., tom. 11, pág. 27, Ser. 5ª (tom. 58).

2. **Diligencias**—Si la demora no es imputable á la parte

contra él, y señalados los días para oír providencias, se encuentra en el caso de todo demandado á quien se le ha notificado la demanda en forma legal, y se le han indicado los días de notificaciones en la oficina; es decir, que las notificaciones subsiguientes se le harán por simple nota del secretario, con excepción de las previstas por el art. 33.

1ª. Por las razones espuestas en la nota precedente.

1ª. El art. 319 del Cód. de Com. al ordenar la publicación de la escritura, estatutos y demás actos constitutivos de las sociedades anónimas, no determina el modo y forma en que tal publicación haya de hacerse, siendo suficiente á los efectos de ese art. que la publicación se haga en un solo diario de suficiente circulación.

1ª. Con motivo de posiciones que debía absolver una de las partes, se libró exhorto al interior de la Rep.; pasaron dos meses y medio sin devolverse y sin dar motivo alguno para excusar la demora; habiendo vencido el término sin devolverse el exhorto, se mandaron pasar los autos á la oficina para alegar, por considerar el término transcurrido, más que suficiente para el diligenciamiento, no siendo posible por otra parte, esperar indefinidamente su devolución—art. 118 del Cód. de Proc.

2. Cuando se devolvió un exhorto que se había librado, ya estaba vencido el término de prueba; pero resultaba de autos que la demora



deben agregarse las diligencias después de vencido el término de prueba—Civ., t. 11, p. 47, Ser. 5ª (t. 58).

3. **Diligencias**—Si la diligencia ha sido pedida dentro del término debe cumplirse aun después de vencido—Civ., t. 17, p. 322, Ser. 5ª (t. 64).

4. **Diligencias**—Para la validez y agregación de diligencias practicadas fuera de la jurisdicción del Juzgado no es obligatorio solicitar término extraordinario—Civ., t. 17, p. 352, Ser. 5ª (t. 64).

**Diligencias**—Véase: *Plenario*, 1; *De oficio*, 2; *Apoderado*, 6; *Honorarios*, 21; *Prueba*, 3; *Calumnia*, 2; *Auto*, 1; *Notificación*, 3; *Obligación*, 3; *Prueba*, 6.

**Diligencia falsa**—Véase: *Culpa*, 1.

1. **Diligencias judiciales**—No procede la prueba sobre

---

había sido tan solo imputable á las autoridades encargadas de su diligenciamiento.

3. En el último día de prueba á las 3 p. m. se presentó escrito, pidiendo se libaran oficios para ordenar las diligencias del caso. Se resolvió que debían librarse porque habían sido *pedidos* y *ordenados* dentro del término. La Cám. no leyó todo el art. 118 del Cód. de Proc. que dice «las diligencias deben ser pedidas, ordenadas y *practicadas* dentro del término». Es evidente el error de la resolución. En las condiciones apuntadas no había tiempo para «*practicarse* la prueba ofrecida dentro del término». Esta resolución está en contra de varias otras, en que se resolvió que cuando no hay tiempo material para que la prueba pueda producirse dentro del término, ella no debe ordenarse.—Véase INSTITUTA, t. 8, verb. *Diligencias de prueba*, n° 48.

4. El derecho de las partes para solicitar diligencias probatorias en distinta jurisdicción, es completamente extraño á la concesión ó no concesión del término extraordinario. El propósito de la ley al acordar el término extraordinario de prueba no es otro que el de favorecer la amplitud de la defensa, concediendo á los litigantes un término mayor que el ordinario, á efecto de que puedan producir sus pruebas en la estación oportuna, sin que esto importe negar que tales pruebas puedan rendirse dentro del término ordinario, y que las partes tengan derecho á solicitarlos antes de la concesión del extraordinario. En el caso ocurrente, si bien aun no se había concedido el término extraordinario, el exhorto de referencia fué solitado y librado dentro del ordinario.

1. Se dijo de nulidad de la declaración de un testigo por no haberla presenciado el juez que la suscribía, pidiéndose como medida probato-



falsedad de diligencias judiciales, en tanto no exista acción en forma—Civ., t. 11, p. 364, Ser. 5ª (t. 58).

**Diligencias judiciales**—Véase: *Delito de falsedad*, 1.

**Diligencias periciales**—Véase: *Costas*, 15.

1ª **Diligencia preparatoria**—Puede exigirse del obligado por poder, la declaración de la existencia de éste como diligencia preparatoria del juicio ejecutivo—Com., tom. 1, pág. 99, Ser. 5ª.

2. **Diligencia preparatoria**—El certificado para comprobar el carácter mercantil de la fianza ó la insolvencia del deudor, no procede como diligencia preparatoria del juicio ejecutivo—Com., t. 5, p. 242, Ser. 5ª (t. 40).

1ª **Diligencias preparatorias**—Solo pueden producirse

---

ria el certificado del actuario. Las actas judiciales, en virtud del inc. 4º del art. 779 del Cód. Civ., son instrumentos públicos, y por consiguiente hacen plena fe en juicio hasta que no sean argüidas de falsos—arts. 993, 994 y 995.—El interés público, pues, se impone y obliga á todos á acatar la fe que inspiran esas escrituras. El mismo oficial y los testigos que han intervenido, por la solemnidad del acto, no pueden contradecir ni alterar el contenido—art. 992.—Sentados estos principios de derecho, viene como consecuencia lógica, que el secretario no puede ni debe informar, ni en pro, ni en contra de la escritura pública, la cual, ó debe aceptarse con toda la fe que inspira, ó se le debe argüir de falsa. El informe ó testificación que el actuario pudiera hacer contra el propio acto sería inútil por la regla: *frustra probatur cum probatur nihil relevat*.

1ª. Un pagaré aparecía firmado por poder, en cuyo caso debe prepararse la ejecución en la forma establecida en el art. 470 del Cód. de Proc. Como el acreedor no tenía como justificar la autorización del que aparecía obligado, pidió como medida preparatoria que éste manifestara si había conferido tal autorización. Se proveyó de conformidad por cuanto se trataba de averiguar un hecho relativo á la personalidad de la parte contra quien se proponía deducir la demanda para estar en situación de cumplir lo prescripto en el art. 470 citado. Esa medida preparatoria encuadra dentro la disposición del art. 67, inc. 1º del mismo Código.

2. Porque no está incluido entre las medidas preparatorias que la ley autoriza para el juicio ejecutivo.—Art. 466 del Cód. de Proc.

1ª. Se pedía en tal carácter el examen previo de testigos que no se encontraban en el caso especial del art. 68 del Cód. de Proc., tratándose de un juicio ordinario.



diligencias preparatorias del juicio si la ley expresamente las permite—Com., t. 3, p. 320, Ser. 5ª (t. 40).

2ª. **Diligencias preparatorias**—Las preguntas, como diligencias preparatorias del juicio, solo pueden versar sobre la capacidad de hecho, pero no sobre el derecho á litigar—Civ., t. 11, p. 8, Ser. 5ª (t. 38).

**Diligencias preparatorias**—Véase: *Excepciones*, 18.

1ª. **Diligencia de prueba**—La pertinencia de la solicitud en tiempo, solo puede ser juzgada al dictar sentencia—Com., t. 9, p. 70 Ser. 3ª (t. 25).

2ª. **Diligencias de prueba**—Las diligencias de prueba deben pedirse en tiempo hábil, para ser cumplidas dentro del término—Com., tom. 2, pág. 431, Ser. 3ª (t. 37).

3. **Diligencias de prueba**—La aclaración de diligencias pedidas dentro del término, debe practicarse aun después de vencido, si no es imputable á la parte—Com., t. 1, p. 388, Ser. 3ª (t. 39).

1. **Diligencias de prueba**—Las nuevas preguntas á testigos que ya han declarado, importan diligencias de prueba que no pueden decretarse después de vencido el término—Crim., tom. 9, pág. 19, Ser. 3ª (t. 25).

2ª. **Diligencias de prueba**—El agente fiscal no puede pe-

---

2ª. Véase verb. *Capacidad*, nº 1.

1ª. Se dijo que además, no aparecía motivo alguno para desechar la prueba, desde luego, como impertinente. Conviene distinguir entre art. 108 del Cód. de Proc. entre prueba procedente y prueba impertinente. En contra. Véase INSTITUTA, t. 2, verb. *Prueba*, 40; t. 5, verb. *Contradocumento*, 4; y t. 6, mismo verb. nº 7; t. 7, p. 362 de la *Jur. Comercial*.

2ª. Se ofrecía prueba de testigos en el mismo día en que vencía el término de prueba. No podía cumplirse lo dispuesto en los arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.

3. Con motivo de una prueba solicitada se libró un oficio enmendado y que no estaba en concordancia con el pedido formulado. Devuelto éste, se vió que no había sido contestado con la amplitud pedida, ordenándose su reiteración por considerar que el error fué cometido por culpa no imputable á la parte sino á secretaría.

2ª. Véase verb. *Acusación fiscal*, núm. 1.



dir en plenario diligencias de prueba para fundar su acusación—Crim., tom. 9, pág. 95, Ser. 3ª (t. 25).

3. **Diligencias de prueba**—Deben pedirse dentro del término—Com., tom. 3, pág. 10, Ser. 5ª (t. 38).

4. **Diligencias de prueba**—No deben decretarse las no pedidas en tiempo para ser cumplidas dentro del término—Com., tom. 3, pág. 14, Ser. 5ª (t. 38).

5. **Diligencias de prueba**—Las no agregadas por negligencia de las autoridades, deben serlo aun después de vencido el término—Com., tom. 3, pág. 74, Ser. 5ª (t. 38).

6. **Diligencias de prueba**—Si no han podido practicarse dentro del término por culpa del Juzgado, pueden serlo después de vencido—Com., tom. 3, pág. 68, Ser. 5ª (t. 38).

7. **Diligencias de prueba**—Pueden agregarse después de vencido el término, si el hecho no es imputable a la parte—Com., tom. 5, pág. 261, Ser. 5ª (t. 40).

8. **Diligencias de prueba**—Su pertinencia solo puede resolverse al dictar sentencia—Civ., tom. 10, pág. 354, Ser. 5ª (t. 57).

9. **Diligencias de prueba**—Las no comprendidas en la oposición, no pueden quedar sin efecto—Civ., t. 11, p. 367, Ser. 5ª (t. 58).

---

3. Se pidió la declaración de un testigo, en el mismo día en que vencía el término de prueba. No podía darse cumplimiento al precepto de los arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.

4. El exhorto para la declaración de un testigo fué solicitado un día antes del vencimiento del término de prueba. El caso es análogo al precedente.

7. Se pidió se librara un exhorto á un juez de lo civil de esta misma ciudad, para que expidiera un certificado. El término de prueba vencía el 23 de Junio, la petición se formuló el 6, pero recién el 21 se libró el oficio. Solo quedaban dos días para el diligenciamiento. Se presentó devuelta la prueba el 13 de Julio. Parece evidente que hubo desidia de parte del litigante. Sin embargo la Cám. resolvió que la culpa era de las autoridades encargadas de su diligenciamiento—art. 118 del Cód. de Proc.,—«no resultando que la demora fuese imputable á la parte», decía el tribunal.

8. Véase verb. *Diligencia de prueba*, núm. 1.





10. **Diligencias de prueba**—Solicitadas, deben cumplirse antes de los alegatos; perdido el derecho de alegar no procede el cumplimiento—Civ., t. 14, p. 127, Ser. 5ª (t. 61).

11. **Diligencias de prueba**—Deben cumplirse después de vencido el término de prueba, si la omisión no es imputable á la parte—Civ., t. 15, p. 53, Ser. 5ª (t. 62).

12. **Diligencias de prueba**—Si la demora no es imputable á la parte, deben practicarse aun después de vencido el término—Civ., t. 17, p. 301, Ser. 5ª (t. 64).

13. **Diligencias de prueba**—No practicadas por negligencia de la parte no pueden cumplirse después de vencido el término—Civ., tom. 20, pág. 241, Ser. 5ª (t. 67).

**Diligencias de prueba**—Véase: *Alegatos*, 1; *Escep. de inhabilidad de título*, 9; *Interdictos*, 1; *Término extraordinario*, 7.

**Dirección de rentas**—Véase: *Sellos*, 2.

1. **Directorio**—Aun después de declarada la quiebra de una sociedad anónima, los accionistas pueden nombrar directorio ó liquidadores en asamblea—Com., tom. 3, pág. 334, Ser. 5ª (t. 38).

**Directorio**—Véase: *Asamblea*, 1; *Libros de comercio*, 9; *Sociedad anónima*, 2.

**Discusión**—Véase: *Documentos*, 8

---

10. Agregados los alegatos, el juez llama autos para sentencia—art. 214 del Cód. de Proc.—y no podrá producirse más prueba—art. 215 *ibid.*—

11. El art. 118, tan solo reconoce como escepción «cuando la causa sea imputable á omisión de las autoridades encargadas de recibirlas».

12. «Resultando, decía la Cám., de las constancias de autos que los testigos han sido presentados dentro del término de prueba, y que no consta que el retardo de esta diligencia sea imputable á la parte que los presentó» procede la recepción de la prueba—art. 118 del Cód. de Procedimientos.

13. El interesado dejó pasar un largo tiempo sin exigir el procedimiento después de vencido el término probatorio.

1. Arts. 335, 346, 1665 y 1698 del Cód. de Com. de 1889.



1<sup>a</sup>. **Disenso**—La venia supletoria en los casos de disenso solo puede ser concedida por los jueces—Civ., t. 20, p. 172. Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 67).

1. **Disolución de sociedad**—La disolución de una sociedad solo puede ser probada por los terceros, por la espiración del término, ó por la presentación de la escritura en que conste tal hecho—Com., tom. 1, pág. 155, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 36).

2. **Disolución de sociedad**—El hecho de ser una persona miembro de dos sociedades, no importa la disolución de hecho de la más antigua—Com., t. 1, p. 155, S. 5<sup>a</sup> (t. 36).

**Disolución de sociedad**—Véase: *Confesión*, 1; *Acciones*, 1; *Jurisdicción* 2; *Quiebra*, 9; *Sociedad comercial*, 1; *Contrato*, 46.

1<sup>b</sup>. **Disparo**—De arma de fuego, contra una persona, debe ser penado con dos años de prisión si no concurren circunstancias—Crim., tom. 3, pág. 132, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

2. **Disparo**—De arma de fuego con lesiones, debe ser penado con un año de prisión si existen circunstancias atenuantes—Crim., tom. 3, pág. 238, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

3. **Disparo**—Intencional de arma de fuego contra una persona, debe ser penado con año y medio de prisión si existe una circunstancia atenuante—Crim., t. 4, p. 133, S. 5<sup>a</sup> (t. 39).

1<sup>c</sup>. **Disparo de arma de fuego**—Procede la escarcelación

---

1<sup>a</sup>. El art. 19 de la ley de mat. determina que los que pretendan contraer matrimonio deberán presentar ante el oficial público la declaración auténtica de la persona cuyo consentimiento es exigido por la ley, ó la venia supletoria del juez cuando proceda. La solicitud tendiente á llenar aquel requisito legal, debe necesariamente presentarse ante los jueces ordinarios, por ser éstos los únicos competentes para compeler á los padres á esponer los motivos de su disenso. Los oficiales del Reg. Civ. carecen de facultad para obligarlos á hacer manifestaciones relacionadas con el consentimiento que se les reclama. En este mismo sentido puede verse Inst., t. 7, verb. *Disenso*, n.º 1.

1<sup>b</sup>. Arts. 52 y 99 del Cód. Pen. de 1887. (Ley n.º 1920).

1<sup>c</sup>. El art. 376 del Cód. de Proc. Crim., permite que se decrete la libertad provisoria bajo fianza, cuando el hecho que motiva la prisión del procesado tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximo no exceda de dos años de prisión; y el art. 395 del mismo Cód., dispone



bajo fianza en el disparo de arma de fuego con lesiones, si el agente fiscal solicita el término medio de la pena—Crim., tom. 9, pág. 125, Ser. 3ª (t. 25).

**2. Disparo de arma de fuego—Hecho intencionalmente contra una persona, causando lesiones, debe ser castigado con dos años de prisión—Crim., t. 9, p. 213, Ser. 3ª (t. 25).**

**3. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una**

que el auto que decreta ó deniegue la libertad bajo caución, será reformable de oficio ó á instancia de parte *durante todo el curso de la causa*, demostrando así que los jueces pueden atender á las constancias sucesivas del proceso que determinen la existencia de circunstancias agravantes ó atenuantes que influyen en la duración de la pena—art. 52, Cód. Pen.,—para considerarse habilitados á conceder ó negar la escarcelación bajo fianza, ó reformar el auto que á este respecto hubieran dictado. Por lo tanto, mientras la causa está en estado de sumario, debe tomarse en cuenta á los efectos del art. 376 antes citado, la naturaleza en general del hecho criminoso que motiva el proceso y el máximo de la pena que le está señalada, á menos que no resulte con evidencia la ausencia de circunstancias agravantes, pero que en el plenario y después de la acusación fiscal, si por no aparecer tales circunstancias el ministerio público solo hubiese pedido el término medio de la pena—art. 52 del Cód. Pen.,—es este pedido lo que debe tomarse en cuenta como máximo de pena á los efectos del art. 376 del Cód. de Proc. Crim. Por otra parte, en el caso ocurrente, bien se clasificase el delito como lesiones graves—art. 120, Cód. Pen.,—ó bien como disparo de arma de fuego—art. 99,—la pena señalada es de uno á tres años de prisión, y no habiéndose alegado la existencia de circunstancias agravantes, la pena que correspondería sería un año y medio de prisión, lo que debe tomarse como máximo, á los efectos de la escarcelación bajo fianza. El art. 376 del Cód. de Proc. ha recibido dos modificaciones, estableciéndose por Ley núm. 3508 que: «cuando el hecho que motive la prisión del procesado tenga solo pena pecuniaria ó personal, cuyo promedio no exceda de dos años de prisión ó una y otra conjuntamente, podrá declararse su libertad provisoria, siempre que preste alguna de las cauciones determinadas en el presente título». La otra se refiere especialmente á los fallidos y en la que se establece que cuando fuese ordenado el arresto con arreglo al art. 1396 del Cód. de Com., procederá la escarcelación mediante fianza de cárcel segura por una suma que arbitrará el juez según los casos. Ley núm. 2739 de Octubre de 1890. Esta ley permite la escarcelación del fallido, cualquiera que sea la duración de la pena. Algunos opinan que la nueva ley de quiebras ha derogado la ley núm. 2739.

2. Arts. 52 y 99 del Cód. Pen. de 1887.



persona, debe ser castigado con dos años de prisión—Crim., tom. 9, pág. 335, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Disparo de arma de fuego**—Si es intencional y causa lesiones cuya curación dura más de un mes, debe ser castigado con tres años de prisión—Crim., tom. 9, pág. 383, Ser. 3ª (t. 25).

5. **Disparo de arma de fuego**—Causando heridas, debe ser penado con un año de prisión, si existe la atenuante de provocación—Crim. t. 9, p. 450, Ser. 3ª (t. 25).

6. **Disparo de arma de fuego**—En riña, debe ser castigado con un año de prisión, aun cuando haya causado lesiones leves—Crim., t. 9, p. 509, Ser. 3ª (t. 25).

7. **Disparo de arma de fuego**—Agravado con desacato á la autoridad debe ser castigado con dos años de prisión—Crim., t. 9, p. 534, Ser. 3ª (t. 25).

**Disparo de arma de fuego**—Véase: *Delito*, 3; *Arma de fuego*, 1.

1ª. **Disparo intencional**—De arma de fuego contra una persona, debe ser penado con tres años de prisión si causó lesiones y el reo es reincidente—Crim., t. 5, p. 33, S. 5ª (t. 40).

**División de condominio**—Véase: *Mensura*, 1.

1ª. **Divorcio**—Para que el juicio civil de divorcio suspenda el proceso criminal, el actor en el primero debe ser el mismo querellante—Crim., t. 9, p. 390, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Divorcio**—Las divergencias sobre visitas á los hijos.

4. Arts. 99 y 120 del Cód. Pen.

5. Art. 83 in 4.º, y 99 del Cód. Pen.

7. Arts. 99 y 235 del Cód. Pen.

1ª. Art. 84, inc. 20, y 99 del Cód. Pen.

1ª. Véase verb. *Adulterio*, nº 1.

2. Si bien es facultad de los Trib. designar para la tenencia de los hijos al esposo que reuna mayores ventajas, consultando en primer término el interés de aquellos, en ningún caso, salvo cuando lo exijan razones poderosas de salud ó cuando medie el motivo que se expresa en la última parte del art. 309 del Cód. Civ., es permitido adoptar resolución alguna que prive al esposo, no favorecido con la tenencia inme-



en caso de divorcio, deben sustanciarse sumariamente—Civ., t. 9, p. 362, Ser. 5ª (t. 56).

3. **Divorcio**—Disponiendo la ley de matrimonio que en los juicios sobre divorcio es admisible todo género de prueba, las tachas de parentesco y dependencia que el Código de Procedimiento permite, no son aplicables á los testigos, en estos juicios—Civ., t. 10, p. 292, Ser. 5ª (t. 57).

4. **Divorcio**—Justificadas las injurias graves, la sevicia y malos tratamientos de que sea víctima uno de los cónyuges, debe permitirse el divorcio—Civ., t. 10, p. 292, Ser. 5ª (t. 57).

5. **Divorcio**—Las causales que la ley de matrimonio establece para permitir el divorcio, pueden ser invocadas por cualquiera de los cónyuges, sin distinción de sexo—Civ., t. 10, p. 292, Ser. 5ª (t. 57).

---

diata, del derecho de visitarse y comunicarse con sus hijos en la forma y en el modo que aquella reglamente. Los jueces, sin necesidad de sujetarse á los procedimientos del juicio ordinario, y antes al contrario en forma informativa y sumaria, oyendo á las partes con todas sus pruebas en juicio verbal debe imponerse de los motivos que informan la disconformidad, para desestimarla en definitiva si las causas determinantes del pedido así lo hacen necesario y no son atendibles aquellos motivos. En el caso que nos ocupa se anuló la resolución de 1ª Inst., por haberse prescindido de oír al padre antes de pronunciarse la resolución que se dictó, privándole de uno de los derechos que con mayor exigencia puede reclamar.

3. El art. 70, de la Ley de Mat. Civ., admite toda clase de prueba en el juicio de divorcio. No exige pruebas legales, sino prueba de conciencia y de convicción. Los magistrados deben tenerlas todas en cuenta para pronunciar su fallo, exceptuándose tan solo la confesión ó juramento de los cónyuges. Bonnier, en su *Tratado de las pruebas* dice: «Añadamos que en materia de separación de cuerpos, la misma necesidad que hace admitir los consanguíneos, impide tachar á los domésticos; lo cual debe entenderse con respecto de los servidores».—Véase, t. 1, p. 284.

4. Art. 67, inc. 4, 5 y 6 de la Ley de Mat. Civ.

5. Ya se considera, el art. 67 de la Ley de Mat. Civ., del punto de vista de su texto, ya del de su espíritu, coloca á los esposos, respecto de las causales de divorcio, bajo un pie de la más perfecta igualdad.



6. **Divorcio**—Los muebles deben ser entregados al esposo durante el juicio de divorcio—Civ., t. 11, p. 37, S. 5ª (t. 68).

7. **Divorcio**—Es facultativo de los jueces la designación de cualquiera de los esposos para la tenencia provisoria de los hijos durante la tramitación del juicio de divorcio—Civ., t. 11, p. 371, Ser. 5ª (t. 58).

8. **Divorcio**—La sentencia que no hace lugar al divorcio no modifica la separación de hecho de los esposos—Civ., t. 11, p. 413, Ser. 5ª (t. 58).

9. **Divorcio**—Justificado el adulterio debe decretarse el divorcio—Civ., tom. 12, pág. 132, Ser. 5ª (tom. 59).

10. **Divorcio**—El juez puede delegar en el secretario las declaraciones de testigos en causa de divorcio, sin que ello pueda fundar la nulidad de la sentencia—Civ., t. 12, p. 132, Ser. 5ª (tom. 59).

---

6. La entrega debe hacerse bajo inventario, reservando para la esposa, los que fueren necesarios para su uso personal.

7. Así se desprende del texto del art. 68 de la Ley de Mat. Civ., siendo esta la doctrina establecida por la Cám. Debe entenderse por «jueces» en este caso, tanto los de 1ª como de 2ª instancia.

8. La esposa dedujo acción de divorcio, fundándose en la disposición contenida en el art. 67, inc. 7º de la Ley de Mat. Civ., esto es, en el abandono voluntario y malicioso que decía había hecho de ella el marido. La acción fué desestimada, absolviéndose al demandado. Antes de la promoción del juicio, los esposos se encontraban separados de hecho, situación que no se modificó por la sentencia, pues ésta se limitaba a decidir sobre el punto fundamental de la demanda de divorcio, es decir, sobre el abandono voluntario y malicioso alegado por la esposa, sin tratar ni menos resolver nada acerca de la separación. La situación ilegal de los esposos continuó siendo la misma después de la sentencia de divorcio, pues este punto no fué materia de la acción instaurada.

9. Sabido es que el adulterio, ó el acto por el cual se comete este delito, no puede ser generalmente presenciado por testigos, por uno de aquellos hechos que por instinto se trata de ejecutar ocultamente. La ley 12, tít. 14, Part. 3ª, exigía tan solo que en ciertos casos, la esposa fuese encontrada hablando con el pretendiente en paraje sospechoso, para que mereciera la pena establecida para el adulterio. La misma doctrina ha consagrado el art. 67, en su inc. 1ª nuestra ley de mat. civ.

10. Como el valor del litigio de divorcio es indeterminado, se aplica el art. 121 del Cód. de Proc.



11. **Divorcio**—No puede declararse la culpabilidad individual de uno de los esposos, si de la prueba producida resulta que ambos han sido los causantes del divorcio—Civ., tom. 12, pág. 282, Ser. 5ª (tom. 59).

12. **Divorcio**—Para que proceda no se requiere que los malos tratamientos sean graves; basta que su frecuencia haga intolerable la vida conyugal—Civ., tom. 12, pág. 339, Ser. 5ª (tom. 59).

13. **Divorcio**—No procede en tanto no resulten plenamente justificadas las causales invocadas—Civ., t. 12, p. 367, Ser. 5ª (tom. 59).

13<sup>b</sup>. **Divorcio**—En este juicio, carece de valor la declaración del testigo, cuyo dicho descansa en afirmaciones hechas por las partes litigantes—Civ., t. 12, p. 367, S. 5ª (t. 59).

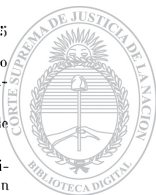
---

11. Hubo demanda y reconvención, habiéndose comprobado la culpabilidad recíproca de los cónyuges.

12. El inc. 6.º del art. 67 de Mat. Civ., no requiere que los malos tratamientos sean graves para que proceda el divorcio, bastando que su frecuencia sea tal, que hagan intolerable la vida conyugal. En el que nos ocupa se comprobó, por lo menos, la frecuencia y persistencia de los malos tratamientos por parte del esposo. Evidentemente, la vida ordenada y armónica se había hecho imposible entre los esposos, según se deducía de las constancias de autos. La molesta cohabitación reunía todos los caracteres de un mal crónico; y entonces, ninguna consideración de orden social, ni pública, ni privada, aconseja mantener una unión que solo daría frutos de escándalo. Si se les precisase a vivir juntos, se reproducirían, sin duda, las funestas discordias y riñas, acarreando daños mucho mayores que su separación. El matrimonio es de interés público, puesto que importa vivamente a la sociedad la unión de los cónyuges; pero también es de interés público acabar con el espectáculo poco edificante, de un hogar convertido en fuente malsana de reyertas y de odios.

13. Las causales enumeradas en el art. 67 de la ley de Mat. Civ., de una manera taxativa, deben ser probadas legalmente por quien las invoca, pues le corresponde la prueba; si no se establece ésta, el demandado debe ser absuelto—art. 216 del Cód. de Proc. Ley 1ª, tít. 14, P. 3ª.

13<sup>b</sup>. El art. 70 de la ley de Mat. Civ. admite toda clase de pruebas, con excepción de la confesión ó juramento de los cónyuges. Si el dicho del testigo, lleva como razón de él, lo que el cónyuges ha afirmado, carece de eficacia probatoria por cuanto en resumen se funda en la confesión de dicho consorte.



14. **Divorcio**—La tenencia provisoria durante el juicio de divorcio, no basta para privar á la madre de ver á sus hijos—Civ., tom. 13, pág. 5, Ser. 5ª (tom. 60).

15. **Divorcio**—En este juicio no procede la escepción de arraigo—Civ., tom. 13, pág. 245, Ser. 5ª (tom. 60).

16. **Divorcio**—Debiendo entender en él el juez del domicilio del cónyuge demandado, la incompetencia fundada en haberse contraído el matrimonio en el extranjero debe ser rechazada—Civ., tom. 13, pág. 245, Ser. 5ª (tom. 60).

17. **Divorcio**—La existencia de dos juicios sobre divorcio,

---

14. Debe fijarse día y hora para que los vea, en el lugar que el juez designe. Argumento del art. 68 de la ley de Mat. Civ.

15. El precepto del art. 104 de la ley de Mat. Civ., es terminante, cuando establece que debe intentarse en el domicilio de los cónyuges. Por otra parte, no se justificó en autos que la parte actora estuviera domiciliada fuera de esta Capital, prueba que incumbe al escepcionante—art. 85 del Cód. de Proc.

16. Art. 4 del Cód. de Proc. y 104 de la ley de Mat. Civ.

17. El marido entabló demanda de divorcio contra la esposa domiciliada en Montevideo. A su vez, ésta se presentó ante nuestros tribs. promoviendo divorcio contra el esposo. Esta opuso la escepcion de litispendencia, la que no prosperó: 1º, porque ambos demandados no tenían el mismo fundamento; y 2º, porque son dos acciones muy diferentes, sin relación entre sí, de tal manera que lo resuelto en la una no puede constituir cosa juzgada en la otra, sobre todo cuando no se probó que la esposa demandada hubiera deducido reconvección. Suponiendo que la acción del esposo prosperara en Montevideo, y que se hiciera lugar á la demanda de divorcio, esto no obstaría para que los Tribs. de la Rep. condenaran á su vez á aquél en virtud de la acción instaurada por su su esposa; de la misma manera, el rechazo de la demanda en Montevideo no obstaría para que se rechazara ó se admitiera la de estos Trib. El principio de la independencia de los dos juicios en casos semejantes, ha sido consagrado por la Cám.—Véase tom. 48, pág. 118.—No haciendo lugar á la acumulación de autos en un juicio de divorcio seguido por el esposo contra la esposa en un Juzgado y por ésta contra aquél en otro. Si la acumulación de autos no procede, tampoco debe proceder la escepción de litispendencia, desde que no concurren los requisitos necesarios para que pudiera considerarse como juzgada en un pleito, lo resuelto en el otro. Sin embargo pueden citarse otros casos en que se declaró procedente la acumulación. Véase t. 102, p. 162; t. 127, p. 426.





iniciados por los cónyuges, no puede fundar una excepción de litispendencia—Civ., tom. 13, pág. 245, Ser. 5ª (tom. 60).

18. **Divorcio**—No procede confesión jurada de los esposos en causas de divorcio, aun cuando sea sobre intereses—Civ., tom. 14, pág. 208, Ser. 5ª (tom. 61).

19. **Divorcio**—Debe desecharse la acción de divorcio y separación de bienes, si el que la deduce no justifica los hechos en que las funda—Civ., t. 14, pág. 323, Ser. 5ª (t. 61).

20. **Divorcio**—El abandono del domicilio conyugal para ocurrir á la justicia demandando el divorcio, no importa una causal que permita se sancione judicialmente la separación—Civ., tom. 14, pág. 336, Ser. 5ª (tom. 61).

21. **Divorcio**—Para que las causales alegadas como fun-

18. El marido se presentó, acompañando un recibo otorgado por la esposa, y pidiendo que ésta declarara bajo juramento: 1º, si era cierto que el recibo era otorgado por ella, y si recibió su importe; 2º, si era cierto también que había recibido de su esposo varias partidas que ascienden á \$ 5.000. Se hizo lugar á lo primero, mas no á lo segundo, por cuanto es absoluta la prohibición del art. 70 de la ley de Matr., respecto á la prueba de confesión.

19. La parte demandante, no solo no comprobó, sino que tampoco intentó demostrar la veracidad de los antecedentes que invocaba como fundamento de la acción, para que el juicio pudiese prosperar. Además de que es regla de derecho procesal—ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—que al actor incumbe la demostración de los hechos en que funda su derecho, cuando su contraparte desconoce la veracidad de ellos. Ocurre en esta clase de juicios la especialidad de que siempre es necesaria la prueba de referencia, porque el divorcio no solo compromete el interés de los esposos, sino también el orden público. La ley, por consideraciones de orden moral y de interés general, ha querido la unión de los casados, como base de la conservación de la familia; y si bien autoriza en los casos que prevé la separación de los cónyuges ó el divorcio, exige la demostración de aquellos hechos ó actos tendientes á justificar que esa unión no es posible sin afectar á la moral misma y sin mengua del orden que exige la familia. Es por esta circunstancia que la prueba se impone con prescindencia completa de la actitud ó manifestaciones de la parte demandada, y que cuando la prueba falta, la acción de divorcio no puede legalmente prosperar.

20. Véase *Abandono del hogar*, núm. 4.

21. La demanda se fundaba en los incs. 2, 5, 6 y 7 del art. 67 de la ley de Mat. Es elemental que en esta clase de juicios, es indispensable



damento del divorcio se consideren justificadas, la prueba debe ser plena—Civ., tom. 15, pág. 5, Ser. 5ª (t. 61).

**22. Divorcio**—En los juicios de divorcio, las rebeldías y renunciaciones expresas ó tácitas que las partes hagan de su derecho, no pueden ser tenidas en consideración para favorecer los derechos de la contraparte—Civ., t. 15, p. 5, S. 5ª (t. 62).

**23. Divorcio**—El pago de expensas á la esposa que ha iniciado juicio de divorcio, es obligatorio—Civ., tom. 15, pág. 104, Ser. 5ª (t. 62).

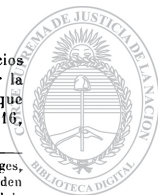
**24. Divorcio**—La prueba resultante de los instrumentos

ble demostrar los hechos y antecedentes en que se funda la acción, á objeto de poder apreciar si son ó no atendibles, para que pueda declararse la separación personal de los esposos. Es sabido, que la ley, por razones de interés público, ha querido mantener la unión de los cónyuges, propendiendo así á la conservación de la familia, y que, si bien ha autorizado el divorcio, solo lo permite en aquellos casos que en ella se preven, y en que no es posible esa acción sin mengua de la moral y del orden de la familia.—Véase la nota del núm. 19.

22. El abandono del juicio, el descuido en hacer valer ciertos derechos conferidos por la ley, la rebeldía misma, no constituyen ventajas de ningún género para el demandante, porque es deber suyo probar debidamente los extremos alegados, so pena de desestimarse su acción. De esta manera es que, aunque el demandado no rechazase una prueba, que en cualquier otro pleito le perjudicaría, en el de divorcio no le aprovecha al contrario, porque el Juez tiene el derecho de apreciarla por sí, si tuviera algún defecto legal.

23. Art. 58 de la ley de Mat. Civ.

24. Es necesario no confundir, la prueba instrumental que envuelven los instrumentos privados, con la prueba de confesión prohibida por la ley. Debe tenerse presente, que en el juicio de divorcio es admisible toda clase de prueba, con excepción de la confesión ó juramento de los cónyuges, como lo establece el art. 70 de la ley de Matrimonio Civ. El fundamento jurídico de esta disposición legal, se encuentra en que los hechos á probarse escapan generalmente al conocimiento del público y de las personas extrañas, como que, por su naturaleza, más que de publicarlos, se trata de ocultarlos; á parte de que ellos siempre pasan en lo íntimo del hogar. Es privilegiada la prueba con que pueden justificarse las causas del divorcio, lo que vale decir que bastan las presunciones, cuando ellas sean de tal carácter que produzcan la convicción en el ánimo del Juez. Una excepción, sin



privados emanados de los esposos es admisible en los juicios de divorcio, salvo el criterio de los jueces para rechazar la que conceptúan expresa para violar el principio de la ley que impide el divorcio por mutuo consentimiento—Civ., tom. 16, pág. 93, Ser. 5ª (tom. 63).

embargo, establece la ley; la confesión ó juramento de los cónyuges, teniendo en vista que el matrimonio está regido por las leyes de orden público, cuya aplicación en el divorcio no puede quedar á merced de la voluntad de los interesados, puesto que no hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos—art. 66.—Esto quiere decir, que la confesión prestada judicialmente, el juramento en juicio, no es admisible como prueba de divorcio, pero de ninguna manera excluye la ley la prueba resultante de cartas misivas entre los cónyuges, sobre todo cuando como en el caso que nos ocupa, esas cartas manifiestamente no habian tenido ni podido tener el objeto de facilitar el divorcio, sino por el contrario, el esposo que las escribió se proponía mantener la integridad de la familia por medio de la unión conyugal. Por otra parte, el Cód. Civ., en el art. 1190, determina los medios por los cuales se prueban los contratos y enumera separadamente los instrumentos particulares firmados ó no firmados, la confesión judicial ó extrajudicial, el juramento judicial y otros medios probatorios. De aquí se deduce, que en el concepto jurídico, una cosa es la confesión y el juramento, y otra, la prueba por instrumentos privados. Lo que el Código dice de los contratos, es indudablemente aplicable á los actos jurídicos. Pero, por otra parte, la enumeración, por sí sola, deja comprender la exactitud de este razonamiento, esto es, que no puede ni debe confundirse la prueba de confesión con la prueba de instrumentos privados. Si del Cód. Civ. se pasa al de Proc., se verá que aunque no existe enumeración de medios probatorios, la división y clasificación de las materias la impone. Así en un capítulo se trata de la confesión, en otro, de las pruebas instrumentales que pueden consistir en instrumentos públicos ó privados, y sigue en capítulos separados el detalle de los otros medios probatorios. Si de estos Códigos se pasa á examinar la legislación de otros países y la doctrina de los tratadistas, se observa la misma nomenclatura y división. De modo que, ni con arreglo á la legislación positiva, ni con arreglo á la doctrina universal, se puede decir que sea una misma ó idéntica cosa la confesión ó juramento y los documentos privados. Ciertamente éstos necesitan ser reconocidos en juicio para producir efectos legales, pero desde que pueden probarse por distintos medios, es evidente la línea de separación que existe entre tales medios probatorios. En los juicios de divorcio, por una excepción de los principios generales en materia de prueba, no se admite la confesión ó el juramento, á pesar de ser una *probatio probatissima*, según decían los antiguos jurisconsultos; pero por lo mismo que se



**25. Divorcio**—La sevicia y malos tratamientos que por su frecuencia hacen imposible la vida del hogar, son causas suficientes para decretar el divorcio—Civ., tom. 16, p. 93. Ser. 5ª (t. 63).

**26. Divorcio**—Justificado el adulterio, debe declararse procedente el divorcio—Civ., t. 17, p. 83, Ser. 5ª (t. 64).

**27. Divorcio**—No procede la separación de bienes en tan-

trata de una excepción, no ha de hacerse extensiva á casos ó circunstancias ajenas al estricto concepto de las palabras. La ley de Matr., lo que no ha querido es que á las partes se exija, durante el juicio, la confesión de hechos que les produciría extorsión y violencia moral; que en algunos casos podría colocarlas en situación de que confesaran un delito. Pero en manera alguna, ha podido querer excluir la prueba emergente de instrumentos privados ó cartas misivas, porque lo que ya está consignado por escrito, no puede compararse á la confesión de lo que se quiere tener oculto en fuero interno. La ley no ha podido ser hipócrita, é hipocresía sería no reconocer como cierto lo que se tiene escrito ante la vista con caracteres claros y en conceptos positivos. Todos los días ocurre que el adulterio de las mujeres se prueba por la correspondencia que dirigen á sus amantes, y ninguna ley, ninguna justicia en el mundo obliga á los maridos á continuar una vida conyugal repugnante, porque la prueba del hecho que rompe el vínculo del matrimonio, está consignada en los documentos privados ó cartas misivas. Concordante con este orden de ideas, Aubry y Rau dicen lo siguiente, en el *Curso de derecho civil francés*, t. V, p. 180: «La cuestión de saber si las cartas misivas emanadas del esposo demandado, pueden ser producidas por el esposo demandante para probar los hechos alegados en apoyo de una demanda de divorcio, debe decidirse según las reglas ordinarias expuestas en el párrafo 734. Así, las injurias contenidas en una de las cartas escritas por uno de los cónyuges al otro, pueden ser probadas por la presentación de esta carta, dejando al Juez á salvo la facultad de prescindir de ella, si pareciese haber sido concertada entre los esposos para conseguir hacer sancionar por la justicia una separación voluntaria.» La Cám. ha interpretado en este mismo sentido el art. 70 de la ley de Matr., y por consiguiente, los documentos que no hayan sido desconocidos por el demandado, y que en manera alguna revelen que hayan sido concertados para los efectos del litigio, deben ser tomados en consideración.

26. Véase la nota del verb. *Adulterio*, núm. 8.

27. La esposa actora pretendía se decretara la separación de bienes, porque el marido no le ofrecía las suficientes garantías para la administración de los bienes comunes, en virtud de lo dispuesto por el ar-



to no se resuelva cuál de los esposos es culpable del divorcio, ó la existencia de bienes aportados al matrimonio por la esposa—Civ., tom. 17, pág. 251, Ser. 5ª (t. 64).

**28. Divorcio**—El esposo es responsable por los honora-

tículo 1294 del Cód. Civ. La sociedad conyugal, originada por el matrimonio se disuelve por la separación judicial de los bienes, por declararse nulo el vínculo matrimonial, por la muerte de uno de los esposos ó por el divorcio, cuando la separación de los bienes es solicitada por el cónyuge inocente—arts. 1291 y 1306 del Cód. Civ.—Como en el caso ocurrente había que observar que los interesados tenían pendiente un juicio de divorcio, es claro que todo pronunciamiento sobre separación de bienes por esta circunstancia sería estemporáneo. Para apercibirse de ello, basta recordar el art. 74 de la ley de mat. civ., y tener presente que solo después de dictarse sentencia de divorcio podrá saberse quién es el cónyuge inocente y habilitado por la ley para pedir la separación judicial de los bienes—art. 1306 del Cód. Civ.—La única causal, entonces, que podría autorizar la separación de los bienes de los interesados, sería la prevista en el art. 1294 que no puede fundar la demanda. Con efecto, la ley desea de garantizar los bienes propios de la mujer casada para librarla de la mala administración del marido, acuerda á aquella el derecho de solicitar la separación judicial de los bienes. Es por esto que el art. 1292, establece que durante la unión del marido y mujer solo ésta y no el marido tendrá el derecho de pedir la separación de los bienes de uno y otro, y de los adquiridos hasta entonces agregando el art. 1294, que la separación solo compete á la mujer cuando la mala administración del marido le traiga peligro de perder sus bienes propios ó cuando hubiere hecho concurso de acreedores. Aquí no se demostró estos extremos que la ley requiere para que dicha petición pudiese prosperar. No se constató, en efecto, los actos de la mala administración del esposo, capaces de poner en peligro los bienes propios de la mujer, es decir, los que introdujera al matrimonio ó adquiriera durante él por herencia, legado ó donación—arts. 1243 y 1263.—Todo lo que resultó de autos á este respecto, fué que el esposo tuvo que vender unas alhajas que él mismo compró, pero esta venta de regalos de costumbre, aislada y sin antecedentes que comprueben una dilapidación de los bienes propios de la mujer, no era seguramente causa legal para fundar la acción instaurada. El art. 1294, como resulta de su texto, exige que la mala administración del marido comprometa el capital propio de la mujer, y aun la existencia de este mismo capital no se había demostrado en autos, porque los bienes que administraba el esposo no habían sido aportados por la esposa al matrimonio, ni constaba que los hubiese adquirido por herencia, legado ó donación.

28. Arts. 51, 54 y 57 de la ley de mat. civ.; 1275 inc. 3.ª y 1281 del Cód. Civ.



rios del juicio de divorcio al abogado patrocinante de la esposa—Civ., tom. 17, pág. 383, Ser. 5ª (t. 64).

29. **Divorcio**—El poder especial otorgado para deducir demanda de divorcio, es suficiente para contestar la deducida de contrario con posterioridad—Civ., t. 18, p. 66, Ser. 5ª (t. 65).

30. **Divorcio**—Debe decretarse, si se justifica la sevicia que haga imposible la vida del hogar—Civ., t. 18, pág. 176, Ser. 5ª (t. 65).

31. **Divorcio**—Para que las injurias y malos tratamien-

29. Si la demanda se hubiese promovido con el poder otorgado, el reo habría deducido reconvencción, en cuyo caso el poder habría sido bastante para contestar la contrademanda. De aquí resulta la suficiencia del mandato para contestar la demanda interpuesta. Este fué el razonamiento de la Cám.; pero es evidente el error que dicha resolución entraña, pues el art. 1884, establece que el poder especial, debe limitarse á los actos para los cuales ha sido dado, y no puede estenderse á otros actos análogos, *aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer*. Siendo la contestación á la reconvencción una *consecuencia natural* del mandato otorgado, las facultades del poder no pueden estenderse á ello, según doctrina de este artículo.

30. Se justificó por medio de prueba testimonial é instrumental las reyertas continuas entre los esposos. No podría asegurarse con completa certidumbre cuál de los dos era el culpable; pero podía afirmarse que la paz del hogar se hallaba completamente alterada, haciéndose intolerable la vida en común. En estos casos la justicia no puede hacer lo que no ha hecho la propia conveniencia de los esposos, el interés hacia los hijos comunes; lo que no ha hecho la simpatía y el cariño recíprocos, tan necesarios en la vida marital. Podría tacharse, bajo la faz moral, de tiránica la sentencia de un juez que obligase con el imperio de la ley á una mujer á vivir con su marido por quien, lejos de tenerle afecto, tiene odio y repulsión; que la obligase á soportar vejámenes y malos tratamientos. La especialidad de estos juicios hace que las sentencias que declaran el divorcio no tengan la fuerza de la cosa juzgada; en cualquier tiempo, en cualquier momento, los esposos pueden reconciliarse y dejar sin efecto dicha sentencia. Esta solo importa el amparo de la parte débil é inocente.

31. Para que el divorcio sea decretado de acuerdo con nuestra ley, es necesario que medien razones poderosas; no bastan las rencillas tan comunes en los matrimonios, ni basta ver un incidente de vías de hecho que pueda haber sido producido por una excitación nerviosa del momento. Es elemental, en efecto, que la ley, por razones de



los constituyan sevicia y puedan autorizar el divorcio, deben revestir carácter de graves y continuos, de manera que hagan intolerable la vida conyugal—Civ., tom. 18, pág. 215, Ser. 3ª (tom. 65).

orden moral y de interés público, exige la unión conyugal, que es la base de la conservación de la familia y del orden social, y que, en tal virtud, no depende de la voluntad de las partes, ni de las facultades de los jueces decretar la separación de los casados, sino en los casos previstos por la ley, esto es, cuando no es posible esa unión sin mengua de la moral y del orden que exige la familia. La esposa demandante expuso en su demanda, que por un cambio de palabras con su esposo, la tomó éste á golpes de puño, rasguñándola en el rostro, y arrancándole un aro que tenía pendiente en la oreja izquierda; que después fué echada de su casa por su marido y que hasta hubo amenazas de muerte. Por su parte, el demandado manifestó que era falso lo expuesto por su mujer, y explicando lo ocurrido, agregó que ésta le llevó la comida de la mesa y al preguntarle porqué lo hacía, y cómo le contestara con insolencias, le dió una bofetada. Añadía que en seguida su esposa se rasguñó la cara y procedió á dar cuenta del hecho á la policía del que se levantó un acta. Como se ve, con este informe no se comprobaba un acto de espontánea crueldad capaz de demostrar por sí solo la falta de afecciones conyugales, que es lo que constituye la sevicia como causa de divorcio. Tampoco ilustraba como correspondía que hubiese habido propiamente una injuria grave; pues si bien el hecho no es compatible en manera alguna con los deberes y respetos que se merecen los esposos entre sí, mientras no se conozcan las circunstancias del hecho que hayan motivado el incidente, y tratándose de un hecho aislado, falta la demostración de los elementos íntimos para constituir la injuria. La actitud del demandado pudo ser motivada por resentimientos con su esposa en un momento de ofuscación, susceptible de reparación; de modo, que el hecho en sí mismo no autoriza á declarar que no es posible la unión conyugal. Además se había dicho que el marido castigaba á su esposa; pero, no se decía cómo la castigaba; se decía que la maltrataba, sin expresarse en que consistían esos malos tratamientos. Hay diversidad de castigos que pueden ser ó no corporales, que pueden ser ó no graves, que pueden ser ó no insoportables, y es necesario determinarlos con precisión para que el juez pueda apreciarlos como son. El marido puede castigar á la esposa, según los casos, como castiga el padre al hijo, como castiga el superior al inferior de su dependencia, y no porque exista este castigo puede afirmarse que hay injurias graves, malos tratamientos, sevicia, etc., sin que se demuestre en qué consista éste, cuáles son los medios empleados para ponerlo en práctica. Un golpe de puño dado por el esposo á la esposa, puede ser para ésta una inju-



**32. Divorcio**—Los hechos posteriores á la demanda de divorcio, que aun comprobados no formarían prueba, no

ría grave, pero puede también constituir un simple accidente pasajero, sin consecuencia de ninguna clase, según la posición social de los cónyuges, su educación, y el medio en que viven. Por esto es que la ley ha impuesto al juez el deber de apreciar tales circunstancias para calificar la injuria en un caso dado. La parte demandante no se preocupó de constatar estos hechos y si hay de juzgarlos por las constancias de autos, se tiene que concluir que aquel incidente entre los cónyuges no revestía gravedad, ya por la posición social de éstos, que eran trabajadores, ya por su educación, ó ya porque tampoco resultaba de la prueba producida que los golpes y lesiones causadas fuesen graves. En resumen, no se comprobó en autos más que un hecho aislado, cuya gravedad no pudo apreciarse, porque la parte interesada en hacer prosperar su acción olvidó suministrar los datos requeridos. Un hecho que juzgado según las constancias de un expediente, puede considerarse más bien como uno de tantos acontecimientos de la vida matrimonial, frecuentes y comunes en aquellos matrimonios de la clase á que pertenecía el de los esposos litigantes, en que escasea la educación y predomina la aspereza de carácter, de sentimientos; un hecho que puede ser una injuria, pero no una injuria grave, que puede ser un acto de mal tratamiento, pero que puede no constituir los malos tratamientos frecuentes y continuados que hacen intolerable la vida conyugal.

32. La esposa se presentó demandando judicialmente el divorcio fundado en las injurias de palabra y de hecho de que había sido víctima y que la hacía insoportable la vida; en la transmisión de enfermedades crueles; y finalmente, en el adulterio de su esposo. Este negó primeramente los hechos afirmados por su cónyuge á quien acusó á su vez de adúltera, pero sin deducir demanda reconventional por esta causal, expresando más tarde, que daba por ciertos los motivos que instruyeron la acción, adhiriéndose al pedido del divorcio. El proceso debió, no obstante esta última manifestación, seguir sus trámites, como en efecto lo siguió, porque el art. 66 de la ley de mat. así lo exige y por la razón derecha de ser de orden público las leyes que rigen el matrimonio, y no poder en consecuencia decretarse el divorcio por la sola conformidad de las partes. Un testigo afirmó que la demandante sufría de accidentes sifilíticos, pero ignorando si fué el esposo quien le transmitió el contagio. Otro depuso sobre los malos tratamientos, pero no expresó en que consistían éstos, ni concretó ningún hecho ó acto demostrativo de los mismos, limitándose á decir que la demandante estuvo refugiada en su casa ocho días á causa de disgustos con su esposo: que el declarante fué á la casa conyugal, y preguntándole al esposo la causa por la cual su esposa se había ido, le





pueden ser tomados en consideración al dictar sentencia— Civ., tom. 18, pág. 226, Ser. 5ª (tom. 65).

**33. Divorcio**—Los malos tratamientos solo autorizan el

contestó que por los disgustos de siempre; que entonces el deponente á los ocho días condujo á la esposa al domicilio conyugal. A estos dos testimonios se reducía, entre tanto, la prueba pertinente de la parte actora, prueba insuficiente—Ley 1ª, tít. 14, part. 3ª y art. 66 de la ley de mat. civil.

33. El marido alegaba como causa de divorcio la disparidad de caracteres de los esposos, que decía estar virtualmente comprendido por la ley en el inc. 6.º del art. 67 de la ley de mat., y en el abandono, hecho por la esposa, á que se refiere el inc. 7.º Aunque la disparidad de caracteres haya sido realmente una causa de divorcio, bajo la legislación canónica, y establecida por la jurisprudencia formada bajo su imperio, la ley de mat. civ. que nos rige no la reconoce como legítima, ni puede sostenerse fundadamente que esía virtualmente compaendida en la disposición del inc. 6.º del art. 67 que solo se refiere á los malos tratamientos que, sin ser graves, son tan frecuentes que hacen intolerable la vida conyugal. Para convencerse que la disparidad de caracteres no está comprendida ni puede estarlo en la disposición de dicho inc. 6.º, bastaría tener presente que según éste siempre debe resultar uno de los esposos como culpable, lo que no ocurre en la disparidad de caracteres. No era entonces legal, aun siendo cierta, la primera causa invocada por el marido para demandar el divorcio. La segunda causa en que se fundaba la acción, era el abandono hecho por la esposa. El inc. 7.º del art. 67 cit., establece como causa de divorcio el abandono voluntario y malicioso, esto es, espontáneo, y que no reconozca un motivo que lo explique al menos, aunque no lo autorice. Pero la señora también acusaba á su esposo de abandono, explicando su separación del marido como consecuencia de ese abandono. Para conocer cuál de los esposos es el verdadero culpable de abandono, es conveniente establecer los antecedentes de autos. Los esposos residían en París cuando el marido resolvió regresar á esta Capital, á lo que se negó la mujer, según decía el esposo, por lo que se vino él solo, dejándola para que atendiese la educación de los hijos, con la necesaria provisión de fondos para los gastos de familia. Esa ausencia del marido del hogar no constituye por sí sola el abandono á que se refiere el inc. 7.º No se probó que fuese voluntario, y aun siéndolo, no se justificó tampoco que fuese malicioso. El marido explicaba esa ausencia por la necesidad de atender sus intereses, lo que es verosímil. Pero aunque así no fuese, la malicia del abandono consiste en substraerse por ese medio al cumplimiento de sus obligaciones conyugales, lo que no se había alegado por la esposa, ni puede



divorcio cuando son tan frecuentes que hagan intolerable la vida en común—Civ., t. 18, p. 345, Ser. 5ª (t. 65).

**34. Divorcio**—Para que el abandono del hogar conyugal por la esposa pueda fundar el divorcio, el marido debe justificar que hizo lo necesario para compelerle á volver; si asin-

presumirse, ni se comprobó. El hecho de dejar á la familia lo necesario para la subsistencia por dos años como se comprobó, ó por menos tiempo induce más bien á suponer que la ausencia del esposo no sería indeterminada, y que no excusaba el cumplimiento de sus obligaciones. No es tampoco rara la ausencia del marido en casos semejantes. Una vez que regresó el marido, quedando en París la esposa, ésta se trasladó también á esta ciudad, pero en vez de ir á habitar con su marido, puso casa aparte. Ella excusó su conducta, diciendo que su marido no fué á recibirla, pero no afirmaba que le hubiese prevenido su regreso; también sostenía que cuando ella llegó, el esposo estaba ausente de esta Capital. Ni una ni otra cosa explican la insistencia de la señora al negarse á reintegrar el hogar como lo declararon los testigos presentados. Todo esto prueba haberse demostrado, que entre los esposos había un desafecto marcado, y como consecuencia de ello, las relaciones matrimoniales, resentidas y relajadas, no ofrecen la normalidad típica de la comunicación entre esposos que se estiman y respetan. Pero esto no es suficiente, como se ha dicho, para decretar la separación personal de los esposos, porque la ley de matrimonio no ha reconocido como causa para el divorcio la incompatibilidad de caracteres. El abandono, como causal de divorcio, debe no solo ser voluntario sino malicioso, esto es, que tenga lugar sin un motivo que pueda imputarse al otro cónyuge y con el ánimo deliberado de substraerse al cumplimiento de las obligaciones que impone la vida matrimonial. La señora al llegar á esta Capital, se trasladó á una casa, que no era la de su esposo; pero este hecho no debe apreciarse en su materialidad, sino con relación al estado de cosas existente á la época en que él se produjo y á los propios actos del marido. Ese estado de cosas se encargó de ponerlo de manifiesto el mismo demandante al relacionar los antecedentes de su viaje á Europa y los motivos determinantes de su regreso, y en cuanto á sus actos basta observar que la casa que ocupó la señora fué amueblada por su propio marido, según se comprobó. Es evidente, entonces, que aquella situación fué aceptada por el marido, pues no sería verosímil que si entendía que su esposa trataba de alzarse contra su autoridad, abandonando maliciosamente el hogar común, en vez de compelerla por los medios legales á su reintegración, costeara por el contrario el mueblaje de la casa habitada por ella, consintiendo así en la constitución de su nuevo domicilio.

34. Véase la nota del núm. precedente.



tió y contribuyó á sostener la separación, no puede calificarlo de voluntario y malicioso—Civ., t. 18, p. 345, Ser. 5ª, (t. 65).

35. **Divorcio**—La ausencia del esposo, dejando los recursos necesarios para el sostén de la familia, no puede ser calificada como abandono voluntario y malicioso que haga precedente el divorcio—Civ., t. 18, p. 345, Ser. 5ª (t. 65).

36. **Divorcio**—La incompatibilidad de caracteres no es causal que pueda fundar el divorcio—Civ., t. 18, pág. 345, Ser. 5ª (t. 65).

37. **Divorcio**—Justificada la sevicia y el abandono voluntario de la esposa hecho por el marido, debe decretarse el divorcio por culpa de éste—Civ., t. 19, pág. 213, Ser. 5ª (t. 66).

38. **Divorcio**—El desconocimiento de la filiación legítima calificándola de adulterina, no puede ser resuelta como incidente del juicio de divorcio—Civ., t. 19, p. 260, S. 5ª (t. 66).

39. **Divorcio**—Justificado el adulterio y el abandono vo-

---

35. De acuerdo con los principios contenidos en la nota del número 33.

36. Véase el mismo núm.

38. Cuando el escrito, desconociendo la paternidad, se presentó, ya la demanda había sido contestada por la esposa. No es posible resolver sobre una cuestión de esta naturaleza á modo de incidente del divorcio, y es necesario que ella sea ventilada en juicio pleno y por separado como corresponde á su importancia y trascendencia, conforme á lo que se deduce de los arts. 250, 252 y 254 del Cód. Civ. y de las disposiciones correlativas sobre registro de los nacimientos, que debe ser materia de juicio especial.

39. Aun tratándose del adulterio, no como causa de divorcio sino como un delito, sería muy difícil dejar de tener por demostrada la unión sexual de los adúlteros, por no existir la comprobación del hecho físico dado que se aportase los demás antecedentes necesarios. Viviendo los culpables en la misma pieza como vivían, nadie podría sostener que no existía demostrada la prueba casi siempre imposible de *nudus et nuda et in eadem lecto*. Además, es una presunción *juris* que demuestra el adulterio, el hallar escondidos en la casa á los infamados ó imputados de esta falta—ley 62 del Estilo—luego, con más razón y más fuerza debe existir esa presunción de derecho, cuando los imputados de adulterio vivan juntos fuera del hogar conyugal, haciendo una vida común, como lo hacía la esposa. Las leyes, no han podido exigir en materia civil el mismo rigorismo que en materia criminal, y aun



luntario y malicioso del hogar, debe declararse el divorcio—Jur. Civ., tom. 19, pág. 260, Ser. 5ª (tom. 66).

40. **Divorcio**—El esposo es responsable por los honorarios y gastos de la esposa en el juicio de divorcio—Civ., t. 19, pág. 399, Ser. 5ª (t. 66).

41. **Divorcio**—La esposa tiene derecho de ver á los hijos fuera del hogar, aun cuando el divorcio haya sido rechazado—Civ., tom. 20, pág. 259, Ser. 5ª (tom. 67).

42. **Divorcio**—Para fundar el divorcio basta que los malos tratamientos hagan intolerable la vida en común, sin que sea indispensable que sean graves—Civ., tom. 20, pág. 417, Ser. 5ª (tom. 67).

43. **Divorcio**—Los Tribs. de la Cap. son competentes para

---

en esta misma materia, bien sabido es que hasta las pruebas que se rechazan en los demás juicios, se admiten en las causas de adulterio, siguiendo en esto la universal doctrina de las conocidas disposiciones de la ley romana.

40. La sentencia no había hecho lugar al divorcio. No habiendo divorcio, el esposo es responsable de los honorarios devengados en representación de la esposa no divorciada. Véase además los n.ºs 23 y 28.

41. La demanda de divorcio había sido rechazada, negándose la esposa, no obstante esto, á volver al domicilio conyugal. El padre tenía los hijos en su poder, la madre pidió que se le permitiera verlos; el esposo se opuso sin alegar otra causa que la negativa de la esposa á volver al hogar marital. Es un derecho innegable el que la madre tiene de ver á sus hijos cuando no puede seguirse á éstos perjuicio ni daño alguno, pues aun separados los padres por sentencia de divorcio, siempre debe resolver el juez en poder de quien de ellos deben quedar los menores de cinco años, sin que pueda alegarse por ninguno de ellos preferente derecho á tenerlos—art. 213 del Cód. Civ.—Debe señalarse día y hora para que pueda verlos, sin perjuicio de la acción que compete al esposo respecto á la reintegración de sus hijos.

43. Debe tenerse en cuenta el domicilio que tenía el marido antes de producirse la separación de hecho. Como antecedente para determinar con acierto la solución que correspondía dar al caso presente, debe observarse que existía un convenio que decía: «Los esposos que suscriben el presente documento, de mutuo acuerdo, cediendo á la intervención amistosa de personas de su relación, para evitar un juicio contencioso, inevitable en el estado de sus relaciones, han acordado, etc: 1º, separarse por tiempo indeterminado, quedando la esposa en casa de su her-



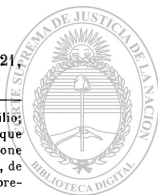
conocer en el juicio de divorcio si en ella tuvo lugar el matri-

mano...; 5º, el esposo pasará á su esposa una pensión alimenticia en relación con su haber. Si las partes no estuviesen de acuerdo en cuanto al monto, el juez lo fijará; 6º, el esposo declara que nada tiene que observar en cuanto á la honestidad y decencia de su esposa». Tenemos, pues, este antecedente: que en el momento en que se celebró el convenio existían causas que hacían inevitable un juicio contencioso entre los esposos; es decir, un juicio de divorcio. Tenemos, además, este otro: que el esposo nada tenía que observar en cuanto á la decencia y honestidad de su esposa. Entonces, las causas de disensión provenían del esposo, y más se confirma uno en este pensamiento, observando que ninguna salvedad se consigna en el convenio, que se relacione con su buena conducta. Creada la situación que enuncia el convenio, á los tres años aparece el esposo en Córdoba, pidiendo la reintegración del matrimonio y objetando á la demanda de divorcio que con motivo de ese pedido de reintegración instauró su esposa en esta Capital, que el domicilio conyugal debe considerarse en aquella provincia y que allí debe ocurrir para gestionar la separación. ¿Es esto justo? ¿puede haber presidido en la mente del legislador la idea de que, cuando un marido deserta de sus deberes, abdica su autoridad, omite alimentar á su esposa y á sus hijos, haya de considerarse domicilio de los cónyuges, á los efectos del divorcio, cualquier punto apartado de la residencia que tuvo el matrimonio integrado, en que se le ocurra al marido errante fijar su residencia? ¿Que protección acordaría la ley á la mujer, si tratándose de cónyuges que residieran en Jujuy, el marido se trasladara á esta Capital, haciendo abandono de sus derechos y deberes, y cuando la esposa lo emplazara en juicio, le contestara que ocurriese á los jueces de su nueva residencia para discutir, ya fuera el divorcio ó alguna otra de las prestaciones que el matrimonio impone? La mujer abandonada y sin recursos en el lugar donde estaba domiciliado el matrimonio, no tendría más remedio que resignarse al abandono y quedar sujeta á que el marido el día que mejor le pareciera, la hiciese intimar que se trasladara á esta Capital á reintegrar el matrimonio que él dislocó, y naturalmente, con la amenaza de compulsión *manu militari*. Podría suceder también que al marido se le ocurriese demandar por divorcio á la mujer ante los Tribs. de su última residencia; y también quedaría ésta sin protección legal si no tuviera recursos para trasladarse al lugar del juicio ó para constituir mandatario. Resultaría, si tal orden de cosas quedara imperante, que lo que es una causa de divorcio en contra del marido, se convertiría en una ventaja y privilegio á su favor. Pero la mujer requiere ser protegida la par, por lo menos, que el marido en las relaciones que engendra el matrimonio, y nada avanzaría de extraordinario si dijera que merece una protección mayor en razón de su sexo y debilidad. Esa protección se la acuerdan las leyes



monio, y la esposa abandonada tiene en ella su domicilio,

siempre que se interprete con equidad y á cada precepto se le atribuya el verdadero alcance y significado que jurídicamente le corresponde. En esta emergencia solo se invoca por los que sostienen la competencia de los Tribs. de la residencia actual del esposo, el art. 53 de la ley de Mat. Civ. que dispone que la mujer está obligada á habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia; pero antes de consignarse ese precepto en la ley aludida, se había consignado este otro: el marido está obligado á vivir en una misma casa con su mujer y á prestarle todos los recursos que le fueran necesarios—art. 51.—El primer deber, por consiguiente de la ley conyugal, consiste en que el marido viva en una misma casa con su mujer. Este es deber principalísimo y de su infracción no puede surgir ventaja para el marido y desventaja para la mujer. Nuestra legislación marca en las relaciones matrimoniales un adelanto sobre la legislación francesa. La ley francesa como obligación de éste, respecto á la cohabitación, solo consigna este insípido precepto: «El marido está obligado á recibir á la mujer»—art. 214, Cód. Nap.—Fácilmente se percibe que ésta más realizada por nuestra legislación la condición de la mujer, ante la diferencia que se observa entre las disposiciones que quedan comparadas, y se confirma uno más en aquél Cód., y que parece más bien introducida en beneficio de la mujer que del marido, desde que á éste se le acuerda el empleo de medidas judiciales para integrar la unión, mientras que aquélla, faltando el marido al deber de vivir en una misma casa, solo puede reclamar alimentos. De donde es lógico inducir que la causal de divorcio enunciada, tiende á suplir la falta de medios compulsorios acordados á la mujer para conseguir la integración de la vida conyugal. Es muy significativa, como tendencia en las miras del codificador, de amparar á la mujer contra el abandono del marido, la concordancia del art. 187 del Cód. Civ. que es el mismo art. 53 de la ley de Mat. Civ., con las leyes del tít. 3º, libro VII, Rec. de Ind., cuya lectura íntegra es sugerente, pues en estas leyes se dictan disposiciones y prescriben reglas para que los maridos residentes en América sean compelidos á regresar á la península á reintegrar sus hogares. Teniendo en cuenta los antecedentes consignados, resulta que la disposición del Cód. Civ., art. 90, inc. 9º, que establece que la mujer casada tiene el domicilio de su marido aun cuando se halle en otro lugar con licencia suya, rige mientras la integridad matrimonial no haya sido rota por hecho del marido. Es natural, en tales circunstancias, que las gestiones que terceros promuevan á la mujer se ventilen ante los jueces del domicilio del marido, porque él tiene la representación de la sociedad conyugal, y que las cuestiones



aun cuando el marido deduzca inhibitoria—Civ., tom. 21, pág. 347, Ser. 3ª (tom. 68).

mismas entre los esposos se diluciden ante los jueces de ese domicilio; pero no es natural que suceda lo mismo en el caso de excepción que se trata. La ley de Mat. Civ. ha empleado una locución que presupone el hecho común y ordinario, sin transgresión por parte del marido, de que la unión conyugal se mantenga en las condiciones que la ley prefiere. Cuando este punto de partida no existe, el domicilio de los cónyuges, no puede ser otro que aquel en que vivieron marido y mujer hasta el momento en que aquél lo abandonó, con prescindencia de sus derechos y deberes. El art. 104 de la ley de Mat. Civ. prescribe, en efecto, que las acciones de divorcio y nulidad del matrimonio deben intentarse en el domicilio de los cónyuges. ¿A qué domicilio ha querido referirse la ley? Indudablemente al domicilio del matrimonio integrado en que los cónyuges viven normalmente, bajo el imperio de las relaciones jurídicas que la unión matrimonial crea. Es cierto que el convenio celebrado entre los esposos, no debe producir los efectos que los contrayentes se propusieron; pero que fija y establece hechos que, jurídicos ó no, determinan consecuencias que no es posible apartar y que tienen su eficacia relativa en lo que concierne á las relaciones matrimoniales. El punto de partida de su alejamiento del hogar marital y la fijación de su residencia en Córdoba por parte del esposo, fué el convenio celebrado. ¿Qué alcance ó significación de hecho debe atribuirse á ese convenio y al proceder posterior del esposo? Su desertión del hogar marital y su establecimiento en una ciudad lejana, durante varios años, importa netamente un olvido, ó más bien dicho, un abandono de uno de los primordiales deberes del esposo. La última parte del art. 104 de la ley de Mat. Civ., dispone que si el marido no tuviese su domicilio en la Rep., la acción de divorcio podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiese celebrado en la Rep. El principio que consagra el inc. es perfectamente aplicable por analogía al punto en cuestión; y de ese principio se deduce que el juez competente para conocer del divorcio interpuesto por la esposa, debe ser el juez del último domicilio conyugal, esto es, el juez de la Cap. de la Rep. El esposo cometió una falta al dejar su hogar y establecerse en Córdoba, dejando á su esposa é hijos en Buenos Aires, sin acordarse según se afirma, de suministrar lo necesario para la subsistencia. De su falta no puede derivar una ventaja para sí, y recíprocamente, una desventaja para su esposa, cual sucedería si ésta tuviera que seguirlo á Córdoba para hacer valer la acción de divorcio. Á partir de la fecha del convenio celebrado, el matrimonio quedó dislocado y no puede haber otro domicilio conyugal que el que tenían los esposos cuando se separaron, que no era otro que esta Cap., en que fué celebrada la unión. Sostuvo el esposo que con arreglo al art. 90, inc. 9º,



**44. Divorcio**—Si bien el mútuo consentimiento no puede autorizar el divorcio, los tribunales deben tener en

la mujer no tiene otro domicilio que el de su esposo. Tal disposición rige sin dificultad mientras la integridad del matrimonio subsista; pero no puede suceder lo mismo cuando ella es destruída por el hecho del marido, como ocurría en este caso.

44. Los jueces no deben permitir fácilmente á una mujer que se separe de su marido con quien su voluntad la unió, dice Pothier—*Tratado del matrimonio*, págs. 235 y 307—sino mediando justas causas que exijan esa separación como necesaria é indispensable para evitar daños mayores de obligarlos á vivir juntos. Pero, ¿cuáles son estas justas causas? La ley de mat. que rige actualmente las ha establecido en el art. 67, comprendiendo entre ellas la sevicia, las injurias graves y los malos tratamientos á que se refieren los incs. 4.º, 5.º y 6.º que fueron invocados por la esposa como fundamento de su acción. El derecho ha contado siempre entre las causas de divorcio los malos tratamientos, de obra ó de palabra, como una causal común, porque se concibe, como lo dice Gutiérrez Fernández, comentando disposiciones análogas de la ley esp. de mat. civ., que en algún caso se prevalezca la mujer, de su pretendida debilidad, para ofender y maltratar al marido, pero no siendo esto lo natural sino que el marido abuse de su fuerza, la ley requiere que esos malos tratamientos, aunque no sean graves, sean tan frecuentes que hagan intolerable la vida conyugal—inciso 6.º, art. 67 ley de mat.,—como requiere también que las injurias sean graves en consideración á la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse y que el juez puede apreciar,—inc. 5.º—Pero la ley requiere también que su existencia sea completa y para ello admite en esos juicios toda clase de prueba, con excepción de la confesión ó juramento de los cónyuges,—art. 70.—La ley ha establecido que no hay divorcio por mútuo consentimiento de los esposos, y para que ese precepto fuera efectivo, ha dispuesto también que no se admitirá la prueba de confesión y juramento de los cónyuges,—arts. 66 y 70.—La confesión, pues, no puede ser admitida como prueba única de las causas que los esposos invoquen para obtener la separación personal. Sobre todo no puede exigirse confesión ó juramento sobre esos hechos, porque no pueden importar un delito; y es principio uniforme de legislación que á nadie puede exigírsele que suministre pruebas que puedan dar lugar á la imposición de una pena. Pero la misma ley ha dicho que todo género de prueba será admitida en esta clase de juicios, lo que importa autorizar al juez para formar su convencimiento con los diferentes elementos que figuren en el proceso, es decir, por presunciones ó indicios que naturalmente sean graves, precisos y concordantes, admitiéndose entre ellos los que resulten de las confesiones ó manifestaciones de las partes, porque en tal





cuenta los hechos de los esposos que resultan constatados en autos por confesión propia concordantes con la prueba testimonial—Civ., tom. 22, pág. 181, Ser. 5ª (t. 69).

**45. Divorcio**—El aislamiento de la esposa, so pretexto de incapacidad, sin exigir declaración de autoridad competente para constatarla judicialmente, importa una causal de divorcio—Civ., tom. 22, pág. 181, Ser. 3ª (t. 69).

**46. Divorcio**—En tanto se resuelva la demanda de di-

caso no resultan contrariados los propósitos de los arts. 66 y 70, y se llega al descubrimiento, difícil por regla general, de la verdadera situación del matrimonio que se presenta ante los trib. en demanda de justicia.

45. Encontrándose domiciliados en la provincia de San Juan los esposos, la esposa empeñó unas joyas y se vino ocultamente á esta cap., alojándose en la casa del padre de su esposo. Conducta tan irregular dió motivo á que se la considerara afectada de cierta perturbación intelectual y el marido y su padre la trataron como histérica ó neurótica. Se la redujeron sus comodidades á una sola habitación de la casa y se la privó del cuidado y hasta de la comunicación con su hijo. La salida de la señora de San Juan fué sin duda irregular, pero tanto motivo hay para atribuirle á un desequilibrio mental, como á la causa que ella le atribufa, y que consistía en haber sido abofeteada por su esposo, y desear que ese rasgo de violencia y otros que pudieran producirse no llegaran á noticia de su padre y se produjeran conflictos de mayores consecuencias. El hecho es que no habiendo probádose el histerismo ó la neurosis, era más verosímil la causa que la esposa atribufa á su partida, desde que nada se había dicho ni insinuado respecto á su honestidad. En tal caso ¿cuál sería el derecho del esposo? Obligar á la mujer á reintegrar el hogar, ó pedir la separación personal, es decir, el divorcio, de acuerdo con el inc. 7.º, art. 67 de la ley de mat. El abuso no justifica el abuso, y ya se vería trastornarse todo el orden en las familias si á una acción incorrecta de uno de los esposos pudiera contestarse con una incorrección mayor. Si el marido tuvo motivos para considerar á su esposa neurótica ó histérica, ha debido hacer comprobar esa afección, someterla á un tratamiento y si no alcanzaba resultados favorables y el mal afectaba un carácter agudo, solicitar su interdicción y demás medidas legales. Pero declararle loca por sí y ante sí y tratarla como tal, es un hecho abusivo que tiene que ser considerado como malos tratamientos que han hecho intolerable la vida conyugal.

46. El art. 68 de la ley de mat. civ. dispone que, puesta la acción de divorcio, ó antes de ella en caso de urgencia, podrá el juez á ins-



vorcio, es potestativo del Juzgado determinar sobre la tenencia de los hijos—Civ., tom. 22, pág. 410, Ser. 5ª (t. 69).

47. **Divorcio**—El juicio de divorcio no puede suspenderse aunque el esposo no proporcione litisexpensas—Civ., tom. 22, pág. 442, Ser. 5ª (t. 69).

48. **Divorcio**—Los Tribunales de la Capital son competentes para conocer en el juicio de divorcio, si en ella tuvo lugar el matrimonio, y la esposa abandonada tiene en ella su domicilio, aun cuando el marido deduzca inhibitoria—Civ., tom. 22, pág. 461, Ser. 5ª (t. 69).

**Divorcio**—Véase: *Alimentos provisorios*, 1 y 3; *Curador «ad-litem»*, 1; *Nulidad*, 18; *Sentencia*, 8; *Sociedad conyugal*, 1; *Hijos*, 3; *Alimentos*, 8; *Honorarios*, 31; *Tenencia de los hijos*, 1; *Domicilio*, 15; *Gastos*, 6; *Domicilio del matrimonio*, 1.

---

tancia de la parte decretar la separación personal de los casados y el depósito de la mujer en casa honesta, dentro de los límites de su jurisdicción, y determinar el cuidado de los hijos, con arreglo á las disposiciones del Cód. Civ. La facultad que ese art. confiere á los jueces sobre tenencia provisoria de los hijos, es discrecional y ellos tienen que ejercerla en cada caso ocurrente, inspirándose en la naturaleza y modalidad de los hechos producidos.

47. Esta resolución está en abierta oposición con otro caso resuelto. Véase Inst., tom. 3, verb. *Juicios*, núm. 1.

La Cám. decia al establecer el principio sentado en el sumario que: «Los procedimientos de un juicio no pueden ser suspendidos sino por consentimiento de partes ó en los casos especialmente determinados por ley. Que en el caso ocurrente no existe ese consentimiento, ni la causal alegada por la esposa demandante es suficiente á justificar la suspensión que solicita; pues el incumplimiento de la sentencia de litisexpensas por parte de su cónyuge, no ha podido crearle una situación distinta á la que necesariamente existía á la época de la demanda. Que en efecto, la falta absoluta de recursos que al presente se alega no es un hecho determinado por el proceso mismo, ó mejor dicho, por razón de los dispendios ocasionados por la secuela; y siendo esto así, es evidente que la señora, si carecía de medios para litigar, debió antes de querrellarse contra su esposo gestionar previamente las litisexpensas, ó en su defecto la correspondiente declaratoria de pobreza.»

48. De acuerdo con la jurisprudencia sentada en el núm. 43.



1. **Documentos**—Deben devolverse los documentos de fecha anterior á la demanda presentados sin juramento con las posiciones—Com. t. 9, p. 88, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Documentos**—Cualesquiera que sean los términos del auto que ordena el pago de la multa por infracción á la ley de papel sellado, no pueden devolverse los documentos después de pagada—Com., t. 9, p. 376 Ser. 3ª (t. 25).

3. **Documentos**—En el juicio ejecutivo solo procede prueba sobre la falsedad del título y no sobre documentos presentados por otros motivos—Com., tom. 9, pág. 379, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Documentos**—Al contestar la contrademanda el demandante, puede acompañarlos—Com., tom. 9, pág. 380, Ser. 3ª (t. 25).

5. **Documentos**—Ó contratos otorgados fuera de la jurisdicción, deben pagar el impuesto de papel sellado sin multa—Com., tom. 9, pág. 543, Ser. 3ª (t. 25).

6. **Documentos**—Los no presentados ó individualizados

---

1. Los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. exigen este requisito.

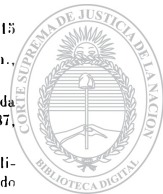
2. Se intimó el pago de la multa dentro de un término, bajo apercibimiento de desglosarse los documentos: la parte abonó, pero después de vencido el término. El juez ordenó el desglose no obstante el pago verificado, por haberse éste hecho después de vencido el término, haciendo de esta manera efectivo el apercibimiento. La Cám. dijo: que esto no procedía, por cuanto el art. 40 de la ley de papel sellado de 1892, acuerda á los jueces tan solo la facultad de no dar curso á la solicitud ó documento que se presenta sin venir con el sello respectivo. En tal caso el apercibimiento debió limitarse á esto, sin llegar hasta ordenar la devolución de los documentos, sin que por consiguiente el apercibimiento pudiese hacerse efectivo, privando á la parte de un medio probatorio, sobre todo después de haber pagado la multa, cumpliendo así con la única obligación que le impone la ley.

3. Lo contrario importaría ordinizar el juicio ejecutivo. La falsedad en el caso del sumario debe el interesado ventilarla en el correspondiente juicio ordinario.

4. Véase verb. *Contrademanda*, 1.

5. Art. 2.º de la ley de papel sellado de 1892.

6. Art. 73 del Cód. de Proc.



en la demanda, no pueden presentarse en la prueba—Com., tom. 2, pág. 74, Ser. 5ª (t. 37).

7. **Documentos**—Si de los presentados resulta vencida la espera, debe continuar la ejecución—Com., tom. 2, p. 87, Ser. 5ª (t. 37).

8. **Documentos**—La parte que los presenta no está obligada á satisfacer el importe de la multa, si ella no ha sido materia de discusión y resolución—Com., tom. 2, pág. 155, Ser. 5ª (t. 37).

9. **Documentos**—Presentados en el acto de las posiciones, deben devolverse si no se acompañan con el juramento de ley—Com., tom. 3, pág. 297, Ser. 5ª (t. 38).

10. **Documentos**—El que los presenta debe pagar la multa por infracción á la ley de papel sellado—Com., tom. 3, pág. 338, Ser. 5ª (t. 38).

11. **Documentos**—Durante el término de prueba, en el

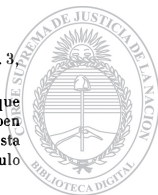
---

8. El fiscal, interpretando la ley de papel sellado de 1894, opinó que el documento presentado, no estaba sujeto á impuesto alguno. La Cámara adoptó como resolución este dictamen.

9. El art. 73 del Cód. de Proc. dispone que después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, ó anterior bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de ellos. El documento producido en el acto de las posiciones era de aquellos comprendidos en la segunda parte, y que como fundamento del derecho, debió mencionarse en la demanda.

10. De acuerdo con la ley de papel sellado de 1893 y 1894.

11. No existiendo en las disposiciones legales que forman el tit. XIV del Cód. de Proc., ninguna de la que resulte que en la substanciación de las excepciones del juicio ejecutivo, sean aplicables las reglas que se han establecido en los arts. 72 y 100, inc. 4.ª, para la demanda y su contestación en el juicio ordinario, es evidente su admisibilidad. El artículo 452 corrobora esta doctrina, pues si como dicho art. lo establece, en los juicios ejecutivos puede usarse de los mismos medios probatorios y en la misma forma en que los ordinarios, y si en éstos una de las pruebas admitidas es la instrumental, es evidente el derecho del ejecutante para presentar documentos. Desde que este art. establezca que la prueba se produzca en la misma forma que en el juicio ordinario, pueden considerarse incorporadas al juicio ejecutivo las disposiciones de los recordados arts. 72 y 100, inc. 4.ª, por cuanto á lo que ese



juicio ejecutivo, pueden presentarse documentos—Com., t. 3, pág. 360, Ser. 5ª (t. 38).

**12. Documentos**—Aquellos en que consta la deuda que se garante por medio de hipoteca, no son de los que deben ser transcriptos como habilitantes, y en consecuencia, esta omisión no puede fundar la excepción de inhabilidad de título—Civ., tom. 11, pág. 224, Ser. 5ª (t. 58).

**13. Documentos**—La falta de presentación de los documentos al deducir la demanda, no puede fundar el recurso de nulidad de la sentencia—Civ., t. 12, p. 218, Ser. 5ª (t. 59).

**14. Documentos**—Pueden agregarse en segunda instan-

---

art. se refiere es á la manera en que debe producirse la prueba, al procedimiento que para cada uno de los distintos medios probatorios se ha establecido en el tit. II, Secc. VIII, Cód. de Proc.

12. Art. 1004 del Cód. Civ.

13. No existe ley alguna que establezca que dicha circunstancia constituye un vicio ó defecto de procedimiento que invalide absoluta ó parcialmente el juicio. Más aun, ni autorizaría siquiera la excepción dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda, como ha sido repetidas veces consagrado por nuestros Trib.

14. Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos en la Cámara. Aquella sostuvo que con arreglo al art. 245 del Cód. de Proc., «antes de notificarse de la providencia de autos podran las partes presentar los documentos de que juren... no haber podido proporcionárselos en tiempo oportuno». En el caso ocurrente aun no había sido dictada la providencia de autos para definitiva, y la parte litigante interesada al presentar los documentos acompañados lo hace jurando no haber podido proporcionárselos durante la estación de la prueba en primera instancia que es precisamente el tiempo oportuno á que se refiere el citado art. 245. No existía cosa juzgada sobre la admisibilidad de esos documentos en segunda instancia, pues las resoluciones solo decidieron que no proceda su agregación á la prueba de primera instancia por estar vencido el término probatorio, lo que es bien diferente y corroboraba la manifestación del actor acerca de no haber podido proporcionárselos en esa oportunidad. Por el contrario, el hecho mismo de haber declarado la improcedencia de la agregación de los documentos á la prueba de primera instancia por la circunstancia indicada de presentarse después de vencido el término de la prueba, revela por sí solo la perfecta admisibilidad de su presentación en segunda instancia, al amparo del derecho acordado por el art. 245, de cuya letra y espíritu surge evidentemente el propósito del legislador de conciliar el rigor del art. 245 con el fin primordial



cia los que la parte hubiera tenido conocimiento después de vencido el término de prueba, aun cuando en primera instancia se haya rechazado la agregación—Civ., t. 12, p. 408, Ser. 5ª (t. 59).

**15. Documentos**—La falta de presentación de los documentos en que se funda la demanda no importa un defecto legal—Civ., t. 14, p. 185, Ser. 5ª (t. 61).

**16. Documentos**—Los privados, solo tienen fecha cierta con relación á terceros desde su presentación en juicio—Civ., t. 17, p. 78, Ser. 5ª (t. 64).

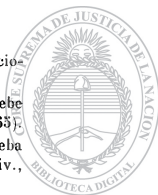
**17. Documentos**—El juramento puede prestarse al pre-

de la justicia: *suum cuique tribuere*. Clausurada toda discusión en primera instancia y reabierto ante el Superior, desaparece todo inconveniente para el orden regular de los juicios, consintiendo la producción de medios probatorios ignorados ó adquiridos tardíamente, máxime cuando consisten en instrumentos públicos que no demandan notable alteración en los procedimientos. Esta es también la doctrina sostenida por Manresa y Reus en su comentario al art. 867 de la ley de enjuiciamiento española, que es menos explícita que el art. 245 de nuestro Cód. «La minoría dijo que la parte solicitó en su escrito de responde la agregación, á la causa, de partidas matrimoniales, como también de bautismo». Que posteriormente, pidió fuese igualmente agregada otra de bautismo. Que según lo instruyen las constancias de autos, esta misma parte produjo en primera instancia análoga petición, relativamente á los dos primeros documentos, petición que fué desestimada á virtud de hallarse vencido el término probatorio cuando ella fué deducida, ordenándose además su devolución. Que con este antecedente, la improcedencia de la agregación de los documentos de la referencia en esta instancia superior, es manifiesta, pues según lo prescribe el art. 245 del Cód. de Proc., solo podrán presentarse los documentos de que juren las partes no haber tenido hasta entonces conocimiento ó no haber podido proporcionarlos en tiempo. Que respecto á las partidas de bautismo, no militan las mismas razones, y habiéndose acompañado en tiempo oportuno y con los requisitos exigidos por la ley, corresponde su agregación, de conformidad á la disposición legal citada».

15. Esto es de constante jurisprudencia en la Cám. Civ.—Véase *Inst.*, tom. 7, verb. *Documentos*, núm. 2; tom. 6, mismo verb., núm. 2; tom. 5, mismo verb., núms. 3 y 7, y tom. 2, mismo verb. La Cám. Com. ha resuelto algunos casos en contra.—Véase *Inst.*, tom. 7, verb. *Documentos acompañados*, núm. 3.

16. Arts. 1034 y 1035 del Cód. Civ.

17. Si bien el art. 73 del Cód. de Proc. exige la formalidad del jura-



sentar los documentos que se hacen reconocer en las posiciones—Civ., t. 18, p. 85, Ser. 5ª (t. 65).

18. **Documentos**—El que presenta el documento debe pagar el sello y la multa—Civ., t. 18, p. 430, Ser. 5ª (t. 65).

19. **Documentos**—Pueden agregarse durante la prueba si no son de los que deben acompañarse á la demanda—Civ., t. 19, p. 81, Ser. 5ª (t. 66).

20. **Documentos**—Si no se refieren al derecho del actor puede ser presentado durante la prueba—Civ., t. 19, p. 116, Ser. 5ª.

21. **Documentos**—No pueden agregarse como prueba, documentos que se confiesa haber tenido al iniciar la demanda—Civ., t. 21, p. 218, Ser. 5ª (t. 68).

22. **Documentos**—Después de llamados autos, no pueden agregarse documentos aun de fecha posterior—Civ., t. 21, p. 315, Ser. 5ª (t. 68).

23. **Documentos**—La esposa excluida de la herencia no puede ser llamada á reconocer documentos—Civ., t. 21, p. 430, Ser. 5ª (t. 68).

**Documentos**—Véase: *Mandamiento*, 1; *Obligación*, 2; *Excepción de defecto legal*, 15; *Contrato*, 2; *Información*, 1; *Juicio ejecutivo*, 1; *Incompetencia*, 2; *Nulidad*, 8; *Recusación*, 8; *Agente Fiscal*, 4; *Excepción de falsedad*, 7; *Autenti-*

mento, no determina si en actos como el del sumario, ha de llenarse ese requisito antes ó después de la presentación y reconocimiento del documento. En caso de duda debe estarse á lo que sea más favorable á la libertad de la defensa.

18. Arts. 33 y 34 de la ley de sellos de 1893 y 1894.

19. Esta es la jurisprudencia admitida.—Véase INSTITUTA, t. 8, verb. *Documentos acompañados*, nº 5, cuya nota es bien ilustrativa del punto resuelto en el sumario.

20. De acuerdo con el número precedente.

21. De autos constaba que el presentante del documento había tenido conocimiento de su existencia aun antes de iniciarse la demanda. En el curso de ésta se presentó jurando que recién llegaba á su conocimiento. No fué admitido por constar la falsedad de tal aseveración.

22. Arts. 215 y 245 del Cód. de Proc.

23. Porque una vez excluido de la sucesión, deja de ser parte.



*cación de documentos, 1; Acreedores, 1; Autenticidad, 2; Falsedad, 5; Inhabilidad de título, 5; Posiciones, 48. Opinión pericial, 4; Papel sellado, 6.*

**1ª Documento adulterado**—La parte que presente en juicio el documento adulterado, es responsable criminalmente por la falsificación, si pretende hacerlo valer en su favor—Crim., tom. 4, pág. 15, Ser. 5ª (t. 39).

**2ª Documento adulterado**—La presentación en juicio de un documento adulterado, debe ser penado con un año de prisión—Crim., tom. 4, pág. 150, Ser. 5ª (tom. 39).

**1ª Documentos agregados**—Solo al dictar sentencia puede juzgarse de la procedencia de documentos agregados, después de vencido el término—Civ., tom. 13, pág. 272, Ser. 5ª (t. 60).

**2ª Documentos agregados**—La viuda puede presentar documentos después de vencido el término, bajo el juramento de ley—Civ., tom. 13, pág. 292, Ser. 5ª (t. 60).

**1ª Documentos habilitantes**—Si existen en el protocolo, no deben transcribirse en el poder; basta su referencia—Com., tom. 9, pág. 43, Ser. 3ª (tom. 25).

**1. Documento al portador**—Reconocida la autenticidad de un documento al portador y á la vista, procede juicio ejecutivo; las excepciones deben ser opuestas y resueltas en la estación oportuna—Com., tom. 4, pág. 260, Ser. 5ª (tom. 39).

**1ª Documento privado**—Cuya falsedad haya sido justificada en el juicio civil, debe ser pasado al Juez del cri-

1ª. El inculcado no fué quien falsificó el documento, pues no sabía leer ni escribir; pero él lo presentó en juicio, é invitado á retirarlo se opuso, por cuanto favorecía sus intereses. El art. 358 del Cód. Pen. anterior, es aplicable en este caso.

2ª. Art. 202 del Cód. Pen.

1ª. Art. 108 del Cód. de Proc.

2ª. Se consideró que la viuda había cumplido el requisito del art. 73 del Cód. de Proc. Sin perjuicio de apreciar oportunamente el mérito probatorio, de acuerdo con el art. 108 del Cód. de Proc.

1ª. Art. 1003 del Cód. Civ.

1ª. Art. 160 del Cód. de Proc. Civ.





men para la averiguación del delito y su autor—Com., tom. 9, pág. 283, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Documento privado**—El juicio criminal sobre destrucción de un documento privado, es independiente del civil que sobre su contexto pueda suscitarse—Crim., tom. 2, pág. 52, Ser. 5ª (t. 37).

3. **Documento privado**—Procede el reconocimiento de un documento privado por cantidad líquida y de plazo vencido, para preparar el juicio ejecutivo—Com., tom. 3, pág. 304, Ser. 5ª (t. 38).

**Documento privado**—Véase: *Demanda*, 3; *Contrato de compraventa*, 6, 11; *Excepción de espera*, 7; *Escritura de hipoteca*, 1.

1ª. **Documentos privados**—Los documentos privados agregados por error, sin atinencia con el litigio, deben ser devueltos sin pagar la multa por infracción á la ley de sellos—Com., tom. 9, pág. 89, Ser. 3ª (t. 25).

1ª. **Documento público**—La excepción de espera debe recibirse á prueba, aun cuando no se acompañe documento público ó privado—Com., tom. 1, pág. 118, Ser. 5ª (t. 36).

**Documento público**—Véase: *Custodia*, 1.

---

2. El objeto que se proponen ambos juicios, son completamente distintos, y por consiguiente, faltan los requisitos de identidad de causa y de jurisdicción exigidos para que exista litispendencia.

3. Art. 466 del Cód. de Proc.

4ª. El documento no hacía parte del asunto motivo del pleito, ni fué presentado al Juez voluntariamente, sino que fué incorporado al expediente por error; por lo mismo, tiene el carácter de los papeles ó instrumentos privados cuya inviolabilidad está garantida por la Const. Nac., de los cuales los Jueces ó Tribs. no pueden apoderarse, sino en los casos previstos por la ley, y por los procedimientos que ella establece.

1ª. La excepción de espera es admitida por el art. 488 del Cód. de Proc. Aun cuando este artículo dice que ella debe probarse por instrumento público ó privado reconocido en juicio, esto no quiere decir que dicho documento deba acompañarse al oponerse la excepción. Por consiguiente, una vez opuesta, debe abrirse la causa á prueba. Todo esto sin perjuicio de que en la oportunidad debida, se estime y juzgue con arreglo á derecho, el mérito de la prueba que dentro de dicho término se hubiese producido—art. 408 del Cód. de Proc.



**Dolo**—Véase: *Martillero*, 1; *Contrato*, 14, 21; *Acto ilícito*, 2; *Escritura*, 1; *Escritura pública*, 7; *Nulidad*, 40; *Apoderado*.

1. **Domicilio**—El error en la designación del domicilio del testigo implica negligencia de la parte—Com., t. 4, p. 408, Ser. 5ª (t. 39).

2. **Domicilio**—La acción personal debe deducirse ante el domicilio del deudor ó en el lugar del contrato, con tal que se encuentre en él aunque sea accidentalmente—Com., t. 5, pág. 269, Ser. 5ª (t. 40).

3. **Domicilio**—La citación para absolver posiciones en el domicilio constituido por el absolvente, es válida aun cuando el mandatario haya constituido domicilio legal—Com., t. 5, pág. 281, Ser. 5ª (t. 40).

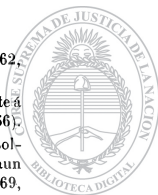
4. **Domicilio**—Aun cuando las notificaciones se hayan verificado en una casa desocupada, no procede la nulidad del

1. Después de vencido el término de prueba, se presentó la parte diciendo que por error había denunciado un domicilio equivocado, y pidió en consecuencia que se señalara nuevo día y hora para el examen del testigo, debiendo citársele en el nuevo [domicilio] denunciado. No podía accederse al pedido por cuanto la recepción de la prueba dentro del término se había hecho imposible por un hecho imputable á la parte. De acuerdo con el precepto del art; 118 del Cód. de Proc. dicho pedido no podía prosperar.

2. Art. 4.º, inc. 4.º del Cód. de Proc.

3. El art. 12 del Cód. de Proc., establece categóricamente que el domicilio una vez constituido subsiste para todos los efectos legales, mientras no se constituya otro. A los efectos de la constitución de domicilio, no se consideran la misma persona, el mandante y el mandatario; y tan es esto así, que si el apoderado se presenta sin constituir domicilio, se le exige que lo constituya, aunque su mandante hubiese constituido el suyo. Se argumenta en contra con el precepto del art. 127 del Cód. de Proc. Pero bastará recordar que este art. dispone que el absolvente sea citado, y nadie puede ser citado en un domicilio que no sea el constituido. Se pretendía que debía citarse en el domicilio constituido por su apoderado; pero esto equivaldría á que fuese citado fuera de su domicilio, en uno que no tenga constituido. Sería pretender que el domicilio del poderdante es el del apoderado. A este respecto hay jurisprudencia.—Véase t. 2, p. 259, Ser. 2ª; t. 27 de la numeracion general, Jur. Com. En contra véase los núms. 13 y 14.

4. Art. 12 del Cód. de Proc.



juicio si era el domicilio legal constituido—Civ., t. 9, p. 262, Ser. 5ª (t. 56).

5. **Domicilio**—Una vez constituido se reputa subsistente a los efectos legales—Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 5ª (t. 56).

6. **Domicilio**—Conocido el domicilio del que debe absolver posiciones, debe librarse el correspondiente exhorto, aun cuando se haya ordenado la comparecencia—Civ., t. 10, p. 369, Ser. 5ª (t. 57).

7. **Domicilio**—No deben llamarse autos para sentencia en tanto el ausente, cuyo domicilio se ignora, comparezca á absolver posiciones—Civ., t. 11, p. 372, Ser. 5ª (t. 58).

7.<sup>b</sup> **Domicilio**—El cambio del de los testigos, después de presentados, no es causal que obste á que sean citados después de vencido el término de prueba—Civ., tom. 11, p. 347, Ser. 5ª (t. 58).

8. **Domicilio**—No habiéndose constituido domicilio especial para la ejecución, el designado como del deudor no es obligatorio para las notificaciones de la demanda—Civ., t. 14, pág. 372, Ser. 5ª (t. 61).

9. **Domicilio**—El ejecutante está obligado á denunciar el domicilio en que debe diligenciarse el mandamiento—Civ., tom. 15, pág. 73, Ser. 5ª (t. 62).

10. **Domicilio**—Aun cuando la propiedad sea de la espo-

---

6. Art. 136 del Cód. de Proc.

7. De acuerdo con el caso registrado en el verb. *Ausencia*, núm. 1.

7.<sup>b</sup> No hay negligencia de parte del litigante, pues el hecho no le es imputable—arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.

8. Al otorgarse la escritura pública de obligacion, no se designó domicilio especial para su cumplimiento; solo se hizo constar el del otorgante, pero en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 1001 del Código Civil.

9. Argumento del art. 471 del Cód. de Proc.

10. El art. 68 de la ley de mat. prescribe que, puesta la accion de divorcio, podrá el juez, á instancia de la parte, decretar la separacion personal de los casados y el depósito de la mujer casada en casa honesta. Se proveyó en el caso, disponiendo la separacion personal de los esposos, y el depósito de la primera en una casa que se designó. Habiéndose objetado por el marido la persona del depositario, la señora



sa, la separación importa que debe habitar otro domicilio—Civ. tom. 15, pág. 141, Ser. 5ª (t. 62).

11. **Domicilio**—La demora en denunciar el domicilio de un testigo, importa negligencia—Civ., tom. 15, pág. 147, Ser. 5ª (t. 62).

12. **Domicilio**—Debe fijarse nuevo día al testigo que ha cambiado de domicilio—Civ., tom. 18, p. 77, Ser. 5ª (tom. 65).

13. **Domicilio**—Las posiciones deben ser absueltas en el domicilio del absolvente cuando tenga lugar el acto—Civ., tom. 18, pág. 76, Ser. 5ª (tom. 65).

no insistió sobre este punto, y se limitó á pedir al Juzgado que la autorizara para quedarse en su propia casa que era la misma en donde tenía su domicilio y habitaba el esposo. Proveyóse á esta solicitud, y no obstante la oposicion del marido, resolviendo que la señora quedase en la referida casa en calidad de depósito. Tal resolucion no es arreglada á derecho. La separacion personal de los esposos quedó resuelta por auto ejecutoriado, pero dicha separacion quedaria ilusoria si la señora hubiera de habitar la misma casa en que vive el marido. La vida común, ó sea la cohabitacion de los cónyuges en el caso de la referencia fué considerada como un peligro y un escándalo permanente. Entre tanto, la ley ha querido evitar tan desagradables extremos al autorizar á los jueces á disponer la separacion personal de los esposos, pendiente la demanda de divorcio. El depósito de que habla el art. 68, induce necesariamente la existencia de un depositario bajo cuya custodia debe quedar la esposa, circunstancia que no concurría en el caso, puesto que el auto facultaba á la señora pura y simplemente para que se quedase en su propio domicilio, de su sola cuenta, sin dependencia de ningún guardador, lo que ciertamente contraria el propósito de la ley, cual es poner á la esposa que sale de la autoridad del marido, mediante la separacion provisoria, á cubierto de los peligros á que pudieran arrastrarla su inexperiencia á los consejos interesados, con mengua de los deberes conyugales.

11. Recién después de pasados 18 días de aquel en que debía declarar el testigo, y estando ya vencido el término de prueba, se denunció el nuevo domicilio.

12. El Tribunal consideró prudencial, el término dentro del cual se denunció el nuevo domicilio.

13. En contra de la doctrina sentada en el núm. 3, aquí se estableció que el domicilio constituido por el dueño del pleito, había quedado sin efecto, á causa del constituido por el apoderado. En este caso, no es aplicable el art. 12 del Cód. de Proc., sino el 136.



14. **Domicilio**—El constituido por el mandante queda sin efecto, si el mandatario constituye uno distinto—Civ., tom. 21, pág. 228, Ser. 5ª (tom. 68).

15. **Domicilio**—Del matrimonio, á los efectos de seguir el juicio de divorcio, no rige el domicilio del marido después del abandono, sino el que tenía el matrimonio antes de producirse la separación de hecho—Civ., tom. 21, p. 347, Ser. 5ª (t. 68).

**Domicilio**—Véase: *Notificación*, 2, 8; *Concurso comercial*, 2; *Delito de violación de domicilio*, 1; *Contrato*, 9; *Cesión de bienes*, 1; *Detenido*, 1; *Depositorio judicial*, 4; *Firma*, 6; *Auto inapelable*, 1; *Defensor de ausentes*, 1; *Posiciones*, 19; *Edictos*, 3; *Apoderado*, 3, 7; *Arraigo*, 7, 8, 16; *Nulidad*, 20; *Testigos*, 7; *Excepción de arraigo*, 1; *Jurisdicción*, 3; *Costas*, 89.

1ª. **Domicilio del matrimonio**—El domicilio del matrimonio á los efectos de seguir el juicio de divorcio, no rige el domicilio del marido después del abandono, sino el que tenía el matrimonio antes de producirse la separación de hecho—Civ., tom. 22, p. 461, Ser. 5ª (t. 69).

**Dominio**—Véase: *Bienes reservables*, 1; *Bienes sociales*, 1; *Costas*, 80; *Tercería*, 6; *Acción reivindicatoria*, 8.

1ª. **Donación**—Aun cuando ella sea anterior á la vigencia del Código Civil, la cláusula prohibiendo la enajenación debe tenerse por nula—Civ., t. 11, p. 176, Ser. 5ª (t. 58).

**Duda**—Véase: *Demanda*, 5.

14. Este caso es exactamente igual al precedente. Se cuestionaba si el domicilio constituido por el mandante subsistía no obstante haber el mandatario constituido uno nuevo. Se resolvió negativamente, ordenándose que las posiciones fuesen absueltas en el lugar en que se encontraba el absolvente.

15. Véase la nota del verb. *Divorcio*, 43.

1ª. Véase la nota del verb. *Divorcio*, núm. 43, con el que está de acuerdo este sumario.

1ª. El art. 5º del Cód. Civ. declara el imperio inmediato de las leyes de orden público. Teniendo este carácter las que organizan la propiedad y facilitan la libre circulación de los bienes, bases primordiales de la riqueza pública, es indudable que con arreglo al art. citado, las disposiciones del mismo Cód. que declaran la nulidad de toda prohibición del derecho de enajenar, deben aplicarse aun á los actos celebrados con anterioridad á su vigencia.



**Embriedad**—Véase: *Declaraciones*, 3; *Homicidio*, 11.

1<sup>a</sup>. **Edad**—Para comprobar la edad del menor á inscribirse en el Registro Civil, el perito debe ser nombrado por el Juez—Civ., t. 15, p. 102, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 62).

**Edad**—Véase: *Excepción de minoridad*, 1.

1<sup>b</sup>. **Edictos**—No procede citación por edictos para absolver posiciones—Com., t. 9, p. 51, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

2. **Edictos**—Citado por edictos el deudor para el reconocimiento de la firma, debe nombrársele defensor si no comparece—Com., tom. 9, pág. 358, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

3. **Edictos**—Si se justifica que el ejecutado tuvo oportu-

1<sup>a</sup>. El nombramiento á que se refiere el art. 35 de la ley de Registro Civil, debe emanar de los Tribunales.

1<sup>b</sup>. De acuerdo con el sumario.—Véase, t. 19, p. 390; t. 52, p. 489; t. 55, p. 265; t. 59, p. 138; t. 60, p. 260; t. 81, p. 350; t. 84, p. 322; t. 86, p. 48, todos ellos de la Cám. Comercial. El art. 33 del Cód. de Proc., determina que la providencia que ordena la absolución de posiciones debe ser notificada en el domicilio del litigante, fijando el art. 127 las formalidades que deben llenarse para esta diligencia y la responsabilidad en que incurre el que no comparece sin justa causa. Por consiguiente, es deber de las partes denunciar el domicilio ó lugar donde se encuentre el que deba absolverlas. No es de aplicación en este caso lo dispuesto en el art. 80, por cuanto esta disposición se refiere á la citación ó emplazamiento de las partes, para contestar la demanda.

2. Véase verb. *Defensor*, 1.

3. El actor al absolver posiciones confesó que el deudor vivía en el Paraná. La citación para el reconocimiento fué hecha por edictos ale-



no conocimiento del juicio, no procede la nulidad de la ejecución fundada en habersele citado por edictos conociendo su domicilio—Com., t. 5, p. 379, Ser. 5ª (t. 40).

4. **Edictos**—La publicación de edictos es ineludible si no existe testamento—Civ., 10, p. 372, Ser. 5ª (t. 57).

5. **Edictos**—No procede citación por edictos para absolver posiciones—Civ., t. 11, p. 372, Ser. 5ª (t. 58).

6. **Edictos**—Si existe testamento, no es necesaria la publicación de edictos—Civ., tom. 14, pág. 260, Ser. 5ª (t. 61).

7. **Edictos**—La nulidad de la ejecución fundada en irregularidad en la publicación de los edictos debe ser rechazada, si el citado ha comparecido en la época oportuna—Civ., tom. 14, pág. 372, Ser. 5ª (t. 61).

8. **Edictos**—Los diarios y recibos acompañados para

gándose ignorancia del domicilio. Por consiguiente, decía el ejecutado, la citación se hizo con violación del art. 79 del Cód. de Proc., siendo nula, según el art. 82. Pero debe tenerse presente que este mismo artículo establece al mismo tiempo que en tal caso es de aplicación el art. 40. Ahora bien, el ejecutado lejos de invocar su falta de conocimiento de la citación, se presentó en tiempo oponiendo excepciones, lo que demostraba su perfecto conocimiento de todo lo que se actuaba contra él.

4. Cuando se trata de una sucesión intestada, es imprescindible esta publicación, por cuanto, es por medio de ella que los herederos y acreedores tienen conocimiento de la iniciación del juicio, habilitándolos para concurrir á esa sucesión, y poder gestionar en su caso sus créditos ó sus derechos á la herencia. Por otra parte la calidad de único heredero solo puede resultar de la presunción que nace de no haberse presentado otros después de la publicación de edictos. — De acuerdo con el sumario. Véase *Inst.*, t. 4, p. 103; t. 14, p. 127; y t. 112, p. 301.

5. Como se vé este caso está de acuerdo con lo resuelto en el n° 1, por la Cám. Com. La Civil tiene la misma jur.— Véase t. 47, p. 84; t. 48, p. 147 y 189; t. 67, p. 262; y t. 73, p. 51.

6. De acuerdo con la ley y la juris. Véase *Inst.*, tom. 4, verb. *Edictos* núm. 2.

7. Igual doctrina á la del núm. 3, resuelta por la Cám. Civ. El propósito de los edictos es obtener que el demandado concurra á estar á derecho. Si eso se ha conseguido, cualquier irregularidad queda cubierta por haberse llenado el propósito de esa publicación.

8. El fiscal, doctor Evaristo Barrenechea, fué de opinión que no



justificar la publicación de edictos, deben ser repuestos por papel sellado—Civ., tom. 17, pág. 333, Ser. 3ª (t. 64).

**Edictos**—Véase: *Defensor de ausentes*, 1; *Defensor*, 2 y 3; *Bien hipotecado*, 1; *Embargo*, 16; *Remate judicial*, 13.

1. **Edificación**—La fijación hecha por la Municipalidad de la línea de edificación solicitada, es facultativa y no puede causar agravio, sin perjuicio de las acciones que el que se considere damnificado pueda deducir—Civ., tom. 10, pág. 71, Ser. 3ª (t. 37).

**Edificio**—Véase: *Robo*, 15.

1. **Editor**—Su responsabilidad subsiste en tanto no pre-

debía hacerse la reposición por cuanto de otro modo es recargar con gastos una sucesión. Los edictos pagan su impuesto cuando figura su original en los autos. La agregación de los diarios y recibos, es para demostrar que se cumplió la orden judicial; ellos no constituyen una prueba presentada en juicio contencioso, ni es una petición. La justicia debe abaratare, y los documentos á que se hace referencia deben admitirse en la forma en que han sido presentados, pues con ello no se viola la ley de sellos. La Cám. resolvió de acuerdo con el sumario. Estando comprendidos los recibos, decía, en la disposición del art. 21, inc. 1.º, de la ley de papel sellado de 1894, por cuanto ésta no hace excepción respecto de ellos, no obstante lo dictaminado por el Agente Fiscal, no ha lugar. La ley vigente exceptúa á estos recaudos de toda reposición.

1. Un propietario de la calle Rivadavia entre San Martín y Reconquista, se presentó á la Municip. pidiendo línea para construir un edificio. Esta repartición pública fijó como línea de edificación la del palacio arzobispal que se encuentra en la misma cuadra. La Mun. se limitó á acceder al pedido, y sin embargo, el solicitante se alzó de esa resolución. Tal era el punto apelado, único sobre el cual estaba llamado á pronunciarse el Trib. Dicha resolución fué confirmada, por ser perfectamente legal. Efectivamente, el art. 46, inc. 1.º, ley org. mun., atribuye á la corporación la facultad de ordenar las delineaciones de la ciudad. Al acordar al solicitante lo que éste pedía, la Mun. ejerció una facultad que le es propia. Todos los demás tópicos que se discutían por las partes fueron declarados extemporáneos, pues solo se trataba de la apelación referida, relativa únicamente á la resolución municipal que daba pura y simplemente la línea de edificación requerida.

1. El editor no presentó al autor del escrito acusado, limitándose tan sólo á indicar el nombre de una persona que no residía en esta





sente al que indica como autor de la publicación acusada —  
Crim., Tom. 4, pág. 321, Ser. 5ª (t. 39).

2. **Editor**—La escepción de falta de personería del editor

Cap. El deber del editor para salvar su responsabilidad, es presentar al autor del hecho y que se declare responsable, asumiendo la intervención en el juicio; pues al aceptar publicaciones bajo el anónimo debe garantizarse, y si no lo hace, el editor del diario es responsable de su publicación.

2. El Juez del Crim., Dr. French, decía así, al resolver esta cuestión: «Que tratándose de una cuestión de puro derecho como es la excepción de falta de personería opuesta por el querellado, el Juzgado debe resolverla sin otra tramitación, de acuerdo con el art. 449 del Cód. de Proc. Crim. Que la publicación en la cual se contienen las imputaciones que se consideran calumniosas y que sirven de base á la querella, ha sido hecha en la sección crónica del diario, sin exigirse fuera firmado por un autor responsable, fácil de conocerse por el damnificado. Que teniendo los órganos de la prensa diaria un editor directamente responsable que garanta la verdad de las publicaciones, es contra él que deben dirigirse las reclamaciones tendientes á la vindicación del interés moral y la honra individual comprometidas. Que dentro de nuestra legislación penal vigente, las calumnias é injurias vertidas por la prensa, están comprendidas en los principios del derecho común, debiendo observarse para la imposición de la pena y prosecución del juicio, las reglas de aplicación ordinaria. Que la presente querella se ha dirigido solamente contra el editor, no estando éste autorizado para hacer figurar en el juicio á otra persona que no ha comparecido por sí, ni se ha resuelto citarla ni oírlo. Que aun estimando como procedente la responsabilidad asumida por D. Santiago de Zerbi, ella no tendría valor intrínseco, por cuanto el instrumento otorgado ante escribano, declarándose autor del suelto materia de la acusación, no importa el reconocimiento llano, de ser ante la ley, el autor del presente delito de calumnia, puesto que la confesión en causa criminal para que sea válida, debe como primer requisito, ser hecha ante juez competente. Que no sería posible someter al querellante á una situación ilusoria, como lo sería la de tener que perseguir á una persona que no suscribe la publicación acusada y que bajo el pretexto de una confesión sin mérito jurídico, se declare responsable para salvar al editor acusado, y luego después se evada, como lo ha hecho De Zerbi, marchándose del país. Que por otra parte, está reconocido en autos que de Zerbi era empleado del editor para escribir en el diario, lo que coloca bajo la responsabilidad de éste que le paga sus artículos escritos para publicarlos al amparo del diario, y no bajo el nombre particular de aquél. Por estas consideraciones y atento lo dispuesto en el art. 316 del Cód. de Proc. Crim., y arts. 21, inc. 1º, y 184 del Cód. Pen., no hago lugar á la escepción



de la publicación por no ser él el autor, es improcedente como dilatoria—Crim., tom. 5, pág. 244, Ser. 5ª (tom. 40).

3. **Editor**—De la publicación, es responsable ante la acusación, si el querellante así lo exige—Crim., tom. 5, pág. 273, Ser. 5ª (tom. 40).

**Editor**—Véase: *Autor de la publicación*, 1.

1. **Ejecución**—No procede la reapertura de una ejecución terminada y mandada al archivo—Com., tom. 2, pág. 419, Ser. 5ª (tom. 37).

**Ejecución**—Véase: *Embargo*, 1; *Excepción de inhabilidad de título*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; *Excepción legal*, 1; *Bienes embargados*, 5, 6, 7; *Comerciante*, 1; *Desistimiento del ejecutante*, 2; *Endoso*, 3; *Excepción de inhabilidad*, 1; *Excepción de pago*, 1, 3; *Cesión de bienes*, 1; *Documentos*, 7; *Excepción de quita*, 1; *Fuero federal*, 1; *Honorarios*, 1, 9, 10; *Letra*, 2; *Liquidación*, 2; *Bienes*, 1; *Excepción de pago parcial*, 1; *Excepciones*, 3, 4, 8; *Moratorias*, 1; *Juicio ejecutivo*, 1; *Nulidad*, 8, 10; *Acción*, 2; *Adulteración*, 1; *Bienes reservables*, 1; *Costas*, 21; *Daños y per-*

ción de falta de personería alegada por el querellante.» La Cám. confirmó la resolución, fundada en que debiendo aplicarse el Cód. Pen. a los delitos de injurias y calumnias cometidas por medio de la prensa, como lo dispone la ley del 57, y resulta claramente del art. 184 del Cód. Pen., la responsabilidad del editor del diario en que se contiene la calumnia ó injuria, surge directamente de las disposiciones del artículo 33, inc. 2º, Cód. Pen. La excepción de falta de personería deducida, es, por consecuencia, improcedente.

3. De acuerdo con los núms. precedentes.

1. Iniciado un juicio ejecutivo y librado mandamiento, se presenta el actor diciendo que está «en vías de arreglo y pide el desglose y entrega del documento que servía de base á la ejecución». Así se hace. Más tarde, vuelve á presentarse en los mismos autos, con el documento, manifestando su resolución de continuar la ejecución, pues no le había sido posible arribar á ningún arreglo, y en consecuencia, pide que se libe nuevo mandamiento. No se hizo lugar, porque el Juez declaró que con el escrito anterior había quedado terminado el juicio, ordenándose el archivo del expediente, y que el interesado debía ocurrir al Juez en turno. La Cám. declaró que el recurso había sido mal concedido, por cuanto la resolución mandando recurrir al Juez en turno, es inapelable. De aquí resulta que el sumario no fué materia de resolución en la Cám.



*juicios, 2; Edictos, 3; Excepción de espera, 2; Excepción de falsedad, 7, 8; Tercería, 2; Embargo, 9.*

**Ejecución de sentencia—Véase: Excepciones, 23.**

1. **Embargo**—El de muebles exceptuados por la ley, no puede fundar la nulidad de la ejecución — Com., tom. 9, pág. 202, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Embargo**—Debe subsistir, aun cuando el Juzgado se

---

1. En primer lugar, los muebles entregados no eran de los exceptuados por la ley—art. 480, Cód. de Proc.—Además, la nulidad que autoriza alegar el art. 489 del Cód. de Proc., solo procede cuando se violan las formas substanciales del juicio, entre las que no está comprendida la diligencia apuntada.

2. Iniciada una ejecución por el Banco Nac. ante un Juez de comercio de la Cap., no habiendo dado resultado el mandamiento de ejecución y embargo, se decretó una inhibición general. Después, el Juez se declaró incompetente, de oficio, mandando pasar el expediente al Juez federal. Antes de tener conocimiento el ejecutado de esta resolución, el interesado había alegado esa misma incompetencia, solicitando el levantamiento de la inhibición. El Juez no hizo lugar, por cuanto se había desprendido del conocimiento del asunto. Esta cuestión fué resuelta por mayoría en la Cámara. El sumario se funda simplemente en el art. 463 del Cód. de Proc.—La minoría sostuvo que este artículo no era aplicable al caso. Es evidente el error de la mayoría. En primer lugar, el hecho de estar desprendido un Juez del conocimiento de un asunto, por haber dictado una resolución, no lo inhibe de dictar medidas como la solicitada—art. 222 del Cód. de Proc.—Por otra parte, según los principios vigentes, lo actuado sin competencia es nulo, y cuando un Juez nota su falta de jurisdicción en un caso, después de haber ejercitado su magistratura en él, debe reponer las cosas al estado en que se encontraban; de no, la reparación sería incompleta. Además, no puede un pedido dejarse encarpelado, hay que proveer lo que corresponda, y cuando lo pedido afecta, no la mera transición, sino un derecho herido, la providencia debe ser fundada. Es cierto que el art. 463 del Cód. de Proc., dispone que para los embargos dictados por un Juez incompetente: «será válido siempre que haya sido dictado con arreglo a las disposiciones de este título». Es una disposición de mera conveniencia, y de derecho puramente positivo y local. Se ve que se trata solamente de Jueces que hacen uso de esa misma ley, pues sería absurdo que se hiciera extensiva á Tribunales que se rigen por otras leyes. En el caso, por ejemplo, se trata de una inhibición general que erróneamente figura en la ley local y que no existe en modo alguno en lo federal, como se ha declarado reiteradamente—Véase t. 40, p. 269.—

declare incompetente y remita los autos al fuero federal—Com., tom. 9, pág. 411, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Embargo**—Si el Juzgado lo conceptúa suficiente, debe aceptarse el bien ofrecido á embargo—Com., t. 1, p. 148, Ser. 5ª (t. 36).

4. **Embargo**—Adolece de nulidad el auto que no hace lugar al levantamiento del embargo sin substanciación—Com., tom. 2, pág. 92, Ser. 5ª (t. 37).

5. **Embargo**—Aun aceptada la escepción de incompetencia, no debe levantarse el embargo si no fué pedido y substanciado en oportunidad—Com., t. 4, p. 238, Ser. 5ª (t. 39).

¿No sería incongruente que la ley local declarase que cuando un Juez local decreta una medida preventiva, que no existe en lo federal, y nota después su incompetencia, esa medida preventiva será sin embargo válida? Semjante incongruencia no se puede suponer en una ley, y si existiese expresa, sería inconstitucional. En efecto, la jurisdicción federal no existe sino en los casos previstos por la Constitución; ella tiene su ley. Cualquiera otra ley distinta, aun dictada por el Congreso, no es la ley de los asuntos federales, nada podría ser más inconstitucional que una declaración del Congreso, según la que los Jueces locales pudieran indirectamente y como el resultado de un error, someter un asunto federal á otra ley y á otra jurisdicción, en cualquier medida que fuera.

3. Art. 474 del Cod. de Proc. El acreedor no aceptó el inmueble ofrecido á embargo, porque se hallaba situado fuera de la jurisdicción del proveyente, porque se encontraba en condominio y porque no lo consideró bastante á cubrir la ejecución. La primera circunstancia no es causal bastante que obste al embargo; la segunda tampoco, puesto que no impide su venta; y la tercera menos porque el precio que aparecía como pagado era bastante para cubrir la ejecución.

4. Una persona que se decía propietaria de los bienes embargados, solicitó se le levantara el embargo: el juez sin oír al actor ni al demandado, no hizo lugar. La Cám. anuló el auto por considerar substanciales los trámites omitidos—leyes 12 y 15, tít. 2, Part. 3.ª—mandando pasar los autos al juez que seguía en el orden del turno para que substanciar y resolviera el incidente.

5. Declarada procedente la escepción de incompetencia por ser extranjero el demandado, éste apeló porque el juez no mandó levantar al mismo tiempo el embargo trabado. La Cám. confirmó lo resuelto porque el ejecutado no había pedido dicho levantamiento, ajustándose por consiguiente la resolución á lo pedido por la parte que se consideró agraviada.





6. **Embargo**—Si el opositor al embargo no tenía posesión de los muebles, debe deducir tercería—Com., tom. 4, p. 388, Ser. 3ª (t. 39).

7. **Embargo**—El levantamiento del embargo sin tercería debe ser rechazado si el ejecutante niega la posesión del oponente—Com., t. 5, p. 323, Ser. 5ª (t. 40).

8. **Embargo**—El embargante de un inmueble hipotecado, carece de derecho para oponerse á la venta verificada por el acreedor con arreglo á la ley y al contrato—Civ., tom. 9, pág. 132, Ser. 5ª (t. 56).

9. **Embargo**—Los embargos que sobre el importe de la ejecución se hayan dictado sin notificar al ejecutante, no pueden fundar la escepción de inhabilidad del título—Civ., t. 9, pág. 269, Ser. 5ª (t. 56).

10. **Embargo**—Si el embargo garantiza el capital y éste ha

---

6. Es práctica consagrada por la jur. que cuando los bienes embargados se encuentran en poder de un tercero, éste tiene derecho á pedir su levantamiento sin deducir tercería—t. 43, p. 201, 226 y 228; t. 44, p. 142; t. 35, p. 176; t. 78, p. 414; t. 16, p. 131; t. 82, p. 238.—Como en los muebles, la posesión vale título, el que no tiene esa posesión debe comprobar su derecho en el correspondiente juicio de tercería—art. 529 del Cód. de Proc.

7. Un tercero alegando derechos de propiedad sobre unos muebles embargados, se presentó pidiendo el levantamiento del embargo sin deducir tercería. El embargante desconoció el derecho invocado por el tercero y pidió que no se hiciese lugar al levantamiento. El juez resolvió abrir la causa á prueba por existir hechos controvertidos—art. 104 del Cód. de Proc. La Cám. revocó el auto diciendo que no procedía la recepción de prueba, porque no se había interpuesto demanda de tercería, sino que simplemente el pedimento, se había limitado á solicitar el levantamiento del embargo; y como esto no procedía, la resolución debía limitarse á levantar el embargo sin substanciación ó á no hacer lugar, y que siendo controvertida la posesión invocada, el rechazo de la petición se imponía.

8. Arts. 1195, 1197, 3108, 3151 y 3162 del Cód. Civ.

9. Porque esa falta de notificación hace que el embargo no produzca efecto respecto de los ejecutantes, debiendo considerarse perfectamente hábil el título de la ejecución.

10. Art. 474 del Cód. de Proc.



sido pagado, los acreedores por honorarios no pueden exigir que subsista—Civ., tom. 9, pág. 350, Ser. 5ª (t. 56).

11. **Embargo**—La oblación del total de la liquidación hace ineludible el levantamiento de los embargos—Civ., t. 11, p. 343, Ser. 5ª.

12. **Embargo**—Después de manifestada conformidad con el levantamiento del embargo no debe darse nueva audiencia a los embargantes—Civ., t. 13, p. 300, Ser. 5ª (t. 60).

13. **Embargo**—Debe levantarse el embargo si el depósito en efectivo cubre la obligación—Civ., t. 15, p. 63, S. 5ª (t. 62).

14. **Embargo**—No procede si no se ha diligenciado el mandamiento—Civ., t. 15, p. 73, Ser. 5ª (t. 62).

15. **Embargo**—Debe levantarse si se deposita la pensión que la motiva—Civ., t. 15, p. 89, Ser. 5ª (t. 62).

16. **Embargo**—Debe levantarse, citando por edicto al embargante, si el espediente en que se decretó ha desaparecido—Civ., t. 18, p. 105, Ser. 5ª.

17. **Embargo**—Trabado sobre bienes del alimentante, debe subsistir aun cuando cese la obligación, en tanto no

11. De acuerdo con el sumario precedente.

12. Arts. 236 y 474 del Cód. de Proc. Carece de objeto esa segunda audiencia, siendo principio de derecho procesal que los jueces no deben decretar medidas inútiles.

13. Art. 474 del Cód. de Proc.

14. El art. 471 del Cód. de Proc. establece que si el deudor no verificase «el pago en el acto, se procederá á embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad demandada y las costas».

16. Art. 80 del Cód. de Proc. Es la única forma de subsanar errores ó descuidos de que no es responsable la parte interesada.

17. El embargo fué decretado para garantir no solo los alimentos que debían prestarse sucesivamente, sino también los adeudados por mensualidades atrasadas que aquél había dejado de satisfacer. Se alegó que los alimentos responden á una necesidad actual y que por lo tanto no puede subsistir por los ya consumidos; pero esto carece de importancia, desde que obligado á suministrar esos alimentos, la mora en el cumplimiento de tal obligación no puede beneficiarlo, y el derecho para reclamar su pago subsiste desde que el alimentado á su vez los debe á la persona que se los ha adelantado.



sean abonadas todas las pensiones devengadas desde que judicialmente se decretaron—Civ., t. 20, p. 25, Ser. 5ª (t. 67).

18. **Embargo**—Su ampliación no puede recaer en las existencias de una casa de comercio si sobre ella se ha deducido tercería—Civ., t. 20, p. 328, Ser. 5ª (t. 67).

19. **Embargo**—No procede, sobre muebles reivindicados, si el documento en que se funda no lo individualiza—Civ., t. 21, p. 395, Ser. 5ª (t. 68).

**Embargo**—Véase: *Bienes embargados*, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. *Posesión*, 1, 4; *Alquileres*, 1, 11 y 14; *Deudas personales*, 1; *Bien embargado*, 1 y 2; *Fianza*, 4; *Juicio ordinario*, 1; *Tercería de dominio*, 1; *Defraudación*, 6; *Inhibición*, 4, 5 y 7; *Costas*, 17, 39 y 73; *Bienes*, 2; *Excepción de pago parcial*, 2; *Pensiones militares*, 1; *Cesión*, 3 y 5; *Bien hipotecado*, 1; *Tercería*, 4 y 5; *Hipoteca*, 1; *Inhibición*, 8 y 10; *Depositario*, 18; *Honorarios*, 26; *Administración*, 9; *Gastos de Justicia*, 2; *Daños y perjuicios*, 40.

#### 1. **Embargo preventivo**—La prueba resultante de libros

18. Si bien la deducción de cualquiera tercería autoriza para ampliar el embargo, esto se entiende cuando los bienes primitivamente embargados no forman con aquellos que se pretende embargar por vía de ampliación, una colectividad de bienes. Las universalidades de cosas, como un rebaño, una biblioteca, son siempre consideradas cosas particulares y no como universalidades—nota del codificador al art. 2764 del Cód. Civ.—las existencias de una tienda, de una cigarretería, de una sastrería, están en el mismo caso. Además el nuevo embargo debe recaer racionalmente sobre bienes que no se encuentren en las mismas condiciones de los que son materia de la tercería, porque ó los bienes pertenecen todos al ejecutado, y en tal caso el nuevo embargo resultaría excesivo contrariamente á las limitaciones establecidas por la ley—arts. 455, 471 y 477 del Cód. de Proc.—ó son de un tercero, y entonces el embargo resultaría indebido ó ilegal—art. 478.

19. Dicho recaudo no es bastante á los efectos del art. 448 del Código de Proc.

1. Art. 443, inc. 4ª del Cód. de Proc. La compulsa para el embargo preventivo debe comprobar, no solo la exactitud de la cuenta presentada, sino que debe asimismo establecerse que el comerciante lleva todos los libros exigidos por el Cód. de Com. y en la forma por él establecida. El simple informe no basta. Véase t. 31, p. 101; t. 88, p. 360; t. 32, p. 345; y el núm. 4.



de comercio llevados en forma hace procedente el embargo preventivo—Com., tom. 9, pág. 20 Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Embargo preventivo**—La sentencia que manda fijar el precio por peritos, no puede fundar un embargo preventivo—Com. 1, pág. 196, Ser. 5ª (tom. 36).

3. **Embargo preventivo**—Cualesquiera que sean las irregularidades de los libros de comercio en que se fundó el embargo preventivo, no puede declararse su nulidad si fué con sentido—Com., tom. 1, pág. 88, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Embargo preventivo**—No procede, fundado en la compulsa del libro de inventarios—Com., tom. 2, pág. 86, Ser. 5ª (tom. 37).

5. **Embargo preventivo**—La presentación del demanda—

2. Para que proceda el embargo preventivo, se requiere como para el juicio ejecutivo, que haya suma líquida, ó que por lo menos ella pueda fijarse por el arbitrio judicial—arts. 451 y 471 del Cód. de Proc.—En el caso del sumario la Cam. declaró que dados los términos de la sentencia, no había en autos base suficiente para estimar provisionalmente el monto de los perjuicios cuyo pago se había ordenado.

3. Art. 452 y 236 del Cód. de Proc. Civ.

4. El inc. 4º del art. 443 del Cód. de Proc., exige para decretarse el embargo preventivo, que la deuda esté justificada por los libros de comercio llevados en debida forma por el actor. La compulsa había sido hecha solamente en el libro de inventarios, que aunque llevados con los requisitos exigidos por el Cód., de él no resultaba la procedencia del crédito cobrado, manifestándose tan solo que el demandado era deudor de una suma determinada. Para el objeto de justificar la deuda, es necesario que se examinen ó compulsen los libros que el art. 44 del Cód. de Com. declara indispensables, porque solo en virtud del contrario que resulte de la conformidad de los respectivos asientos, es que pueden esos libros ser considerados como medio de prueba entre comerciantes—art. 63, Cód. de Com.—Véase el n.º 1.

5. Declarado rebelde el demandado, el actor solicitó un embargo preventivo: antes de estar consentida la declaratoria de rebeldía, y antes de decretarse el embargo preventivo, el contumáz se presentó. El juez decretó la rebeldía y otorgó el embargo. Apelada la resolución, por el rebelde, fué revocada por la Cám., fundándose en que si bien el pedido de la parte actora fué hecho antes de la presentación del rebelde, tal circunstancia no autorizaba dicha declaratoria, puesto que la sola comparecencia es bastante para suspender los efectos de la rebeldía, según el art. 438, y en consecuencia su declaración en un caso





do, hace improcedente la rebeldía solicitada. Si no procede la declaración de rebelde, debe quedar sin efecto el embargo preventivo—Com., tom. 2, pág. 393, Ser. 5ª (tom. 37).

**6. Embargo preventivo**—Si existen pagarés, no puede acordarse, fundado en la compulsa de los libros de comercio Com., tom. 2, pág. 395, Ser. 5ª (t. 37).

**7. Embargo preventivo**—No procede durante la secuela

---

como este es improcedente. El fundamento del embargo preventivo consistía en la declaración de rebeldía. Por lo tanto, dejándose sin efecto aquella, dicho fundamento desaparece, y el auto de embargo debe entonces dejarse sin efecto.

6. Los pagarés no fueron presentados por el actor, pero la acción se fundaba en ellos. El embargo preventivo se pidió en mérito de una compulsa solicitada. El juez no hizo lugar por considerar necesario, á los efectos del embargo, los documentos invocados. La Cám. confirmó la resolución por sus fundamentos. Esta doctrina carece de base legal. En efecto, al demandar el embargo preventivo no se hacía mérito de la fuerza probatoria de los documentos, sino de las constancias de los asientos de los libros del actor, los que pedía se compulsasen. En presencia de esto, no tiene objeto ni se explica que se obligue á presentar los pagarés, cuando no se hacía mérito de ellos, sino que se invocaba otro comprobante de tanta eficacia como aquellos, según lo prescribe el inc. 4.º del art. 443 del Cód. de Proc. Si no existiesen los referidos pagarés, se habría acordado el embargo sin otro recaudo que la compulsa—art. citado—y no se ve porque, por la enunciación de poseer tales comprobantes, se pueda exigir más justificativos de los que la ley exige para acordar tal medida.

7. Esta cuestión fué resuelta por mayoría, constituida la Cám. en tribunal de interlocutorias. Reconoció un documento en rebeldía y dadas por absueltas las posiciones en el mismo carácter, la parte se presentó pidiendo embargo preventivo fundándose en que en el juicio había la confesión expresa ó tácita del demandado, que hace presumir verosímilmente el derecho alegado por el actor, con arreglo al art. 448 del Cód. de Proc., puesto que el documento y las posiciones ya referidas, son una confesión de la deuda, según también lo establece el texto expreso de los arts. 127 y 133. El juez dijo que: «No habiéndose dado por absueltas las posiciones, por cuanto esto solo puede hacerse en la estación oportuna, es decir, al pronunciarse la sentencia, no existía por entonces, la confesión ficta de que se hacía mérito». La mayoría de la Cám. dijo que el auto se había limitado á ordenar la agregación del pliego de posiciones para ser tenido presente en la oportunidad señalada por el art. 133 del Cód. de Proc., y aunque también mandó tener por recono-



del juicio ordinario, si los hechos en que se funda son constancias de autos cuyo valor probatorio deba juzgarse en la sentencia—Com., tom. 3, pág. 377, Ser. 5ª (t. 38).

8. **Embargo preventivo**—Procede, llenados los requisitos que la ley determina—Com., tom. 4, pág. 237, Serie 5ª (t. 39).

9. **Embargo preventivo**—Puede pedirse en cualquier estado del juicio—Com., tom. 4, pág. 301, Ser. 5ª (t. 39).

10. **Embargo preventivo**—El término para apelar se cuenta desde la traba si estaba presente el deudor—Com., tom. 4, pág. 327, Ser. 5ª (t. 39).

11. **Embargo preventivo**—Dictado por juez incompetente solo puede quedar subsistente si ambos jueces ejercen

cido el documento, dicho documento no puede por sí solo, fundar el pedido de embargo preventivo, desde que no se había justificado por el recurrente que hubiese verificado las ventas á que el mismo documento se refiere. La minoría sostuvo por la revocatoria y decía «aunque por la resolución, no se tuvo por confeso al demandado respecto de las posiciones presentadas por el actor, reservándose este punto para ser resuelto oportunamente al pronunciarse sentencia definitiva—art. 130, Cód. de Proc.—sin embargo, en la misma resolución se dió por reconocido el documento y en atención á los términos en que dicho documento está concebido, procede el embargo preventivo con arreglo á lo dispuesto en el art. 448 del Cód. de Proc.»

8. De acuerdo con el precepto del inc. 2º, art. 443 del Cód. de Proc., se produjo la información sumaria del caso para acreditar la autenticidad del documento que servía de base al juicio.

9. En un juicio, después de notificado el traslado de la demanda, se presentó el actor pidiendo embargo preventivo: el juez no hizo lugar atento el estado de la causa. La Cám. resolvió que esa medida de seguridad, podía solicitarse en cualquier estado del juicio, de acuerdo con el título respectivo del Cód. de Proc.

10. Porque el término para interponer el recurso acordado por el art. 452 del Cód. de Proc., empieza á correr desde que el deudor tiene conocimiento judicial ó extrajudicial—argumento del art. 40 del mismo Código.

11. La facultad conferida por el art. 463 del Cód. de Proc. para decretar embargos preventivos, siendo ellos válidos aunque los jueces que los dicten sean incompetentes por razón de la materia, solo se refiere á los jueces que ejerzan imperio en el mismo territorio en que rige la ley que invocan para decretar el embargo.—Véase verb. *Embargo*, 5.



jurisdicción en el mismo territorio en que rige la ley que invocan—Com., tom. 5, pág. 269, Ser. 5ª (t. 40).

12. **Embargo preventivo**—Si el deudor lo presencia y lo consintió, solo tiene derecho á exigir se interponga demanda en forma—Com., tom. 5, pág. 298, Ser. 5ª (tom. 40).

13. **Embargo preventivo**—La concesión de moratorias permite su levantamiento—Com., t. 5, p. 31, S. 5ª (t. 40).

14. **Embargo preventivo**—Procede, autenticada que sea la firma por información—Civ., t. 9, p. 382, S. 5ª (t. 56).

15. **Embargo preventivo**—No procede si no puede librarse mandamiento por cantidad líquida—Civ., tom. 10, pág. 359, S. 5ª (t. 57).

16. **Embargo preventivo**—Las consideraciones del Juzgado al conceder el embargo preventivo, no pueden fundar una recusación por prejuzgamiento—Civ., tom. 10, pág. 360, Ser. 5ª (t. 57).

17. **Embargo preventivo**—Es susceptible de revocatoria si ha sido indebidamente dictado—Civ., t. 10, p. 425, Ser. 5ª (tom. 57).

18. **Embargo preventivo**—Cuando éste no procede tam-

---

12. Arts. 236, 452 y 460 del Cód. de Proc.

13. Véase en el mismo sentido el t. 46, p. 28. Arts. 4568 y 4590 del Cód. de Com. La moratoria es como la quiebra, un estado indivisible que la ley no destruye. Véase Segovia, nota 2065 al art. 1599 del Cód. de Com.

14. Arts. 443, inc. 2º, y 450 del Cód. de Proc. Civ.

15. Arts. 451, 455, 471 y 475 del Cód. de Proc.

16. Para obtener un embargo preventivo, es menester la comprobación de extremos que hagan verosímil el derecho del que solicita tal medida de seguridad. Por consiguiente las consideraciones del auto que decretó el embargo que motivan la recusación con causa, solo importan dejar establecido *prima facie* que se halla cumplida aquella exigencia, pero en manera alguna importa un prejuzgamiento sobre la controversia sometida al fallo del juez.

17. De acuerdo con la jur. Véase t. 41, p. 493 y 499; t. 48, p. 190. El art. 452 del Cód. de Proc. acuerda el recurso de apelación. Si concede lo más debe otorgar lo menos, como es el recurso de reposición.

18. La inhibición es una medida subsidiaria; y tiene lugar cuando



poco procede la inhibición—Civ., t. 10, p. 431, Ser. 5ª (t. 57).

19. **Embargo preventivo**—Su existencia sobre un inmueble no modifica la jurisdicción de los jueces para intervenir en los diversos juicios á que dé lugar la propiedad—Civ., tom. 11, pág. 47, Ser. 5ª (tom. 58).

20. **Embargo preventivo**—No procede si la sentencia dispone que el precio lo determinen peritos—Civ., tom. 11, pág. 350, Ser. 5ª (tom. 58).

21. **Embargo preventivo**—Si de autos resulta justificada la medida y el precio, procede aquél por el importe de la diferencia entre lo vendido y entregado — Civ., tom. 11, pág. 423 Ser. 5ª (tom. 58).

22. **Embargo preventivo**—Si la obligación que lo mo-

---

no se le conocen bienes al deudor—art. 461 del Cód. de Proc. Si no procede lo principal tampoco es viable lo accesorio: ambas medidas están sujetas á las mismas reglas.

19. Porque el embargo preventivo, es un mero accidente respecto del derecho de propiedad, que puede ejecutarse independientemente de las demás acciones á que el dominio da lugar.

20. Porque no hay crédito líquido, siendo este requisito indispensable seguir los art. 451, 454, 455 y 471 del Cód. de Proc.

21. Con arreglo á lo que dispone el art. 448 del Cód. de Proc., durante un juicio ordinario puede decretarse embargo preventivo á solicitud de cualquiera de las partes, siempre que por confesión expresa ó ficta resulten probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado. Por consiguiente, sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia, concurriendo los extremos que el art. requiere, puede decretarse la medida de seguridad que en el mismo se autoriza. En el caso occurrente, para sostener la procedencia del embargo, se hacía mérito de la manifestación contenida en el escrito de contestación á la demanda, por la cual se reconocía el hecho capital en que se fundaba, á saber, la diferencia entre la estensión de un campo comprado al demandado, y la que resultaba de la mensura practicada por un ingeniero, existiendo, además términos hábiles para decretar el embargo por cantidad líquida desde que se conocía el precio de la hectárea y la diferencia de que se acaba de hacer mención.

22. La disposición del art. 460 del Cód. de Proc. no puede referirse sino á los casos en que por la naturaleza del crédito es posible iniciar demanda inmediatamente después de trabado el embargo preventivo. De otro modo, esta medida sería completamente ilusoria cuando se de-



tivó no es exigible, no debe intimarse al acreedor deduzca demanda en el término de ley—Civ., t. 12, p. 422, S. 5ª (t. 59).

**23. Embargo preventivo**—Justificada por información la autenticidad de las firmas, procede el embargo preventivo—Civ., t. 12, p. 439, Ser. 5ª (t. 59).

**24. Embargo preventivo**—Solo procede si existe cantidad líquida—Civ., tom. 13, pág. 277, Ser. 5ª (t. 60).

**25. Embargo preventivo**—Por alquileres, debe limitarse a los muebles existentes en el inmueble arrendado—Civ., t. 13, p. 308, Ser. 5ª (t. 60).

creta de conformidad á lo que se dispone en el inc. 5.º del art. 443 del Cód. de Proc., porque no procediendo en esos casos la demanda, sino después de cumplida la condición ó vencido el plazo, resultaría que el embargo preventivo tendría necesariamente que alzarse dentro de los ocho días de trabado, viniendo á quedar de esa manera burlados los propósitos de la ley. Al autorizar ésta, el embargo preventivo en los casos referidos, debe suponerse que quiere garantir realmente los intereses de esa clase de acreedores y de acordarles una garantía que solo sería en el nombre si el deudor pudiese á los ocho días hacerla desaparecer, quedando las cosas como antes. Siendo, pues, el verdadero propósito de la ley dar garantías eficaces á los acreedores que se encuentran en el caso del inc. cit. del Cód. de Proc., es evidente que no puede referirse á ellos la disposición del art. 460, desde que, como se ha visto, si les fuere aplicable resultaría que no tendrían garantía alguna. Si bien es cierto que esta interpretación de la ley ofrece el peligro de que los embargos preventivos tengan una duración demasiado larga, no debe olvidarse que colocada la ley en la disyuntiva de autorizar el embargo con todos sus inconvenientes, ó dejar en el abandono intereses que merecen protección, ha optado por lo primero, teniendo en cuenta que el deudor siempre puede librarse del embargo dando una fianza á satisfacción del juez—arts. 453 y 454, Cód. de Proc.—Consintiéndose por el embargado el auto, por el que se declaraba procedente el embargo solicitado de acuerdo con el inc. 5.º del art. 443 del Cód. de Proc., es evidente que no cabe la intimación á que se refiere el art. 460, pues el mero hecho del embargo no causa la efectividad de las acciones pendientes de plazo ó condición que solo se produce en los casos de concurso—art. 1413 del Cód. de Com.

23. Art. 443, inc. 2º, del Cód. de Proc.

24. Véanse las notas de los núms. 2 y 15.

25. Art. 445 del Cód. de Proc.



**26. Embargo preventivo**—Solo procede si puede librarse mandamiento por cantidad líquida—Civ., t. 14, p. 160. Ser. 5ª (t. 61).

**27. Embargo preventivo**—Para que la acción de petición de herencia fundada en la filiación natural pueda permitirlo, debe existir semiplena prueba del derecho alegado—Civ., t. 14, p. 171, Ser. 5ª (t. 61).

**28. Embargo preventivo**—El constructor, como acree-

26. De acuerdo con los núms. 2, 15 y 24. Un constructor de obras de mandó una suma de dinero: el demandado dijo que no adeudaba esa, disfrutando en cuanto al monto. Fundado en esta contestación, y en el art. 448 del Cód. de Proc., se solicitó un embargo preventivo, alegándose que el juez podía fijar prudencialmente su monto. No se hizo lugar, porque no existía cantidad líquida reconocida, y porque el Juzgado no podía fijar en esa oportunidad el *quantum*; todo lo que hacía imposible el mandamiento—arts. 451, 453, 456 y 471 del Cód. de Proc.

27. Si bien la demanda de filiación natural y la de petición de herencia, que es su consecuencia, se equiparan por su naturaleza, alcance y efectos á la acción reivindicatoria, no es menos exacto que, para que cualquiera de ellas autorice la medida de seguridad acordada por el artículo 447 del Cód. de Proc., se requiere que la acción instaurada se encuentre fundada en antecedentes que acrediten siquiera con los caracteres de una semiplena prueba el derecho alegado. Así lo tiene establecido la jur.—véase t. 122, p. 219 y 149; t. 36, p. 220; t. 135, p. 366.—En el caso del sumario, la acción de filiación y petición de herencia solo reposaba, por entonces, en meras manifestaciones personales de la parte actora. Existían cartas y tarjetas acompañadas con la demanda, las que prescindiendo de su valor probatorio intrínseco, carecían, con respecto al incidente, de trascendencia y pertinencia, pues su autenticidad no había sido comprobada, ni aun sumariamente.

28. No es un obstáculo, la circunstancia de no existir cantidad líquida, pues tratándose de hacer efectivo un privilegio acordado por el Cód. Civil, basta que sea viable en los términos del art. 446 del Cód. de Proc. Cuando se trata de hacer efectivo un privilegio no se requiere mandamiento previo, pues éste no puede substituirse sobre otros bienes: el privilegio va con la cosa. El embargo en este caso es el único medio de hacer efectivo el privilegio, como que en definitiva, no es otra cosa que la toma de razón del privilegio mismo. De la contestación á la demanda resultaba establecido el carácter de constructor, con la única diferencia en cuanto al monto de la deuda. Los extremos legales á acreditarse se limitan á la existencia del privilegio, y éste existe por ministerio de la ley—art. 3931 del Cód. Civ.—y la existencia del crédito que ese privilegio garante con prescindencia de su monto.



dor privilegiado, tiene derecho á embargar preventivamente la propiedad—Civ., t. 14, p. 224, Ser. 5ª (t. 61).

29. **Embargo preventivo**—Procede éste y el nombramiento de administrador del bien cuya posesión se demanda—Civ., tom. 14, pág. 271, Ser. 5ª (tom. 61).

30. **Embargo preventivo**—El legatario puede pedirlo—Civ., t. 15, p. 56, Ser. 5ª (t. 62).

31. **Embargo preventivo**—El locador solo puede pedir el de los muebles sobre los que tiene privilegio—Civ., t. 15, pág. 67, Ser. 5ª (tom. 62).

32. **Embargo preventivo**—No procede si no puede diligenciarse el mandamiento—Civ., t. 15, p. 73, S. 5ª (t. 62).

---

29. Art. 448 del Cód. de Proc.

31. De acuerdo con los núms. 25 y 28. Parece que esta doctrina colocara al propietario en condiciones peores á las de un acreedor común. Es verdad que el locador, tiene privilegio sobre los muebles que estaban en la casa arrendada, sobre los cuales se había ya decretado y trabado embargo; pero cuando, como en el caso ocurrente, los muebles afectados á ese privilegio no alcanzan ó son insuficientes á responder y garantizar el pago del crédito que aumenta día á día, ¿qué razón ó disposición legal existe para no ampliar el embargo sobre bienes no afectados al privilegio? La ley no lo prohíbe, y nada más justo, desde que el inquilino no paga, que se embarguen por ejemplo, los subarrendamientos que él percibiese por la misma finca, porque de otra manera, si el locatario subarrendase toda la casa, podría dejar de pagar al locador, quien se vería imposibilitado de garantizar sus derechos é intereses defraudados, no obstante todos los privilegios acordados por el Cód. Civ. á su crédito. Sin embargo debe tomarse en cuenta que el art. 445 del Cód. de Proc. dispone que el locador puede pedir embargo preventivo sobre los bienes afectados por el Cód. Civ. al privilegio del mismo. En tal concepto, y siendo las disposiciones legales que rigen esta materia de interpretación restrictiva, el embargo preventivo solo debe decretarse sobre los bienes afectados expresamente por la ley á dicho privilegio. El artículo 3885 del Cód. Civ. solo reconoce el privilegio de los bienes muebles del locatario que se encuentran en la casa alquilada. No vemos el inconveniente en que el locador ejerce su derecho como privilegiado sobre los muebles, y al mismo tiempo como acreedor común, lo ejerce sobre los demás bienes. Pero se sostiene que en este último carácter carece de derecho á embargar preventivamente.

32. Un acreedor solicitó el embargo de la 4.ª parte del sueldo de un empleado de la aduana de esta Cap. Pero el mandamiento no podía



33. **Embargo preventivo**—Fundado en una compulsión de libros, no procede contra el deudor que no ejerce el comercio—Civ., tom. 15, pág. 153, Ser. 3ª (tom. 62).

34. **Embargo preventivo**—Procede si la sentencia determina cantidad líquida, aunque subsidiaria a una obligación de hacer—Civ., tom. 15, p. 160, Ser. 3ª (t. 62).

35. **Embargo preventivo**—No procede el levantamiento, si se ha prestado la caución dentro del término fijado—Civ., tom. 16, pág. 324, Ser. 3ª t. 63).

36. **Embargo preventivo**—No procede si se demanda cantidad ilíquida—Civ., tom. 17, pág. 293, Ser. 3ª (t. 64).

37. **Embargo preventivo**—No basta para fundarlo, la

diligenciarse por hallarse domiciliado el deudor en la provincia. Se declaró que no procedía el embargo, mientras no se diligenciara el mandamiento de ejecución.

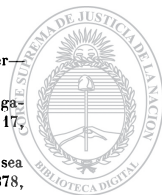
33. Debe entenderse que la disposición del art. 443, inc. 4.º del Cód. de Proc. Civ., se refiere a los casos suscitados entre comerciantes y por el hecho de su comercio, es decir por obligaciones comerciales, arts. 63 y 64 del Cód. de Com.

34. Estaba determinada en la sentencia el monto de una indemnización que el demandado debía satisfacer al actor, en cuyo caso, ya se trate de una obligación de hacer ó de dar, existen términos hábiles para que proceda la medida de seguridad acordada por el art. 448 del Cód. de Proc.

36. Se trataba de una demanda por indemnización de daños y perjuicios, en cuyo caso no procede esa medida de seguridad, según lo resuelto reiteradamente por la Cám. Véase *IXST.*, tom. 7, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 1.

37. Se demandaba la escrituración de una propiedad. El comprador fundándose en que el vendedor trataba de enagenar el inmueble, solicitó se embargara preventivamente, atento lo que dispone el art. 247 de la ley org. de los trib., 505 del Cód. Civ. y 447 del Cód. de Proc. La mayoría de la Cám. dijo que no procedía lo pedido, no se demandaba la constitución, declaración, modificación ó extinción de ningún derecho real, ni podría el actor perseguir tal propósito desde que el título que sirve de fundamento á la acción que deduce, solo crea á su favor un derecho personal como él mismo lo reconoce al invocar los artículos 1185 y 1187 del Cód. Civ., no estando por consiguiente el caso comprendido en ninguno de los incs. del art. 247 de la ley org. para solicitar la anotación preventiva de sus derechos en el registro de la propiedad». La minoría dijo: «Que la gestión iniciada tiende á obtener la





demanda sobre cumplimiento de una obligación de hacer—Civ., tom. 17, pág. 339, Ser. 5ª (t. 64).

38. **Embargo preventivo**—Procede contra bienes gananciales por deudas personales de la esposa—Civ., tom. 17, pág. 341, Ser. 5ª (t. 64).

39. **Embargo preventivo**—Procede reconocida que sea la autenticidad de la obligación—Civ., tom. 17, pág. 378, Ser. 5ª (t. 64).

40. **Embargo preventivo**—No puede fundarlo la sentencia que condena al pago de una suma determinada—Civ., t. 18, p. 82, Ser. 5ª, (tom. 65).

41. **Embargo preventivo**—Procede, si la información llena las exigencias de la ley—Civ., tom. 18, pág. 84, Ser. 5ª (t. 65).

42. **Embargo preventivo**—El carácter legal de una obligación ejecutiva, no puede tenerse en cuenta al dictarlo—Civ., tom. 19, p. 24, Ser. 5ª (tom. 66).

---

constitución de un derecho real, y desde entonces es aplicable al caso *sub judice* el art. 247, inc. 1.º de la ley org.»

38. Porque en los gananciales tiene una parte indivisa la esposa, pudiendo en consecuencia hacer efectivo en ellos, su derecho el acreedor.

39. Al contestar la demanda el demandado reconoció un documento firmado por él, sosteniendo sin embargo que su pago no le incumbía. Esta calificación de su confesión, no puede tomarse en cuenta sino al contestar la demanda, no pudiendo esas defensas afectar el derecho que de la confesión surge para el actor. Atento lo dispuesto en el art. 448 del Cód. de Proc., el embargo era procedente.

40. La sentencia solo reconocía un derecho creditorio, subordinado á la liquidación que debían practicar los árbitros que se nombraron. No se trataba, en consecuencia, del caso de determinadas cosas litigiosas que corresponda mantener en secuestro por aparecer verosímil el derecho del actor ó vencedor en el pleito de primera instancia—art. 448 del Cód. de Proc.—No procedía tampoco determinar una cantidad arbitraria como monto aproximado del crédito reconocido, porque comprometería la regularidad del arbitraje á que había sido sometido.

42. Se alegó que el contrato bilateral que servía de base á la ejecución era nulo, por encerrar un pacto de cuotálitis. La Cám. dijo, que llenándose los requisitos del inc. 3º del art. 443 del Cód. de Proc., la medida decretada era procedente.



**43. Embargo preventivo**—La sentencia que no condena á cantidad líquida, no puede fundarlo—Civ., tom. 19, pág. 31, Ser. 5ª (tom. 66).

**44. Embargo preventivo**—No procede, si la sentencia no condena al pago de cantidad líquida—Civ., tom. 19, p. 49, Ser. 5ª (tom. 66).

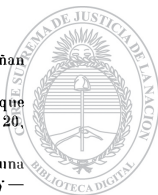
**45. Embargo preventivo**—No procede en obligaciones contraídas por los representantes legales—Civ., tom. 19, pág. 87, Ser. 5ª (tom. 66).

**46. Embargo preventivo**—Rechazado en la acción de

43. De autos resultaba comprobado que la cantidad no era líquida, pues así lo habían declarado los pronunciamientos que terminaron el juicio ejecutivo. El embargo preventivo está sujeto en cuanto á la forma de decretarlo y á la manera de ejecutarlo á las mismas reglas que el embargo del juicio ejecutivo—arts. 451 y 455 del Cód. de Proc.—En tal virtud, es preciso que el crédito que se gestiona sea por cantidad líquida, porque de otra manera no puede cumplirse con lo dispuesto por los arts. 455 y 471 del Cód. de Proc., que ordenan que el embargo se limite á los bienes necesarios para cubrir el crédito y las costas.

45. El representante reconoció que el conteso fué celebrado por su principal; pero el actor le desconoció la personería invocada por dicho apoderado. Hasta tanto no se resolviera si tenía ó no la representación invocada, la confesión del apoderado no puede ser invocada, precisamente por aquel que desconoce esa representación.

46. Después de rechazado el embargo preventivo á que se refiere el núm. 27, las partes produjeron una información para acreditar sumariamente el carácter hereditario invocado. El Juez encontró suficiente la información y otorgó el embargo, pero la Cám. lo revocó, diciendo que en la información rendida «no se ha propuesto la actora acreditar sumariamente la autenticidad de documento alguno atribuido al causante, para subsanar por ese medio la falta de recaudos con que interponía su demanda, como se hacía notar en la resolución de este Trib. Que no habiéndose modificado la situación en que la actora se encontraba entonces, pues las declaraciones de testigos prestadas todas fuera de juicio contradictorio, carecen en absoluto de todo valor probatorio, desde que no se trata del caso previsto por el art. 68 del Cód. de Proc., subsisten las mismas causas y razonamiento que obstaron para que se declarara la procedencia del embargo preventivo solicitado, no obstante equiparase la acción deducida á la de reivindicación. Que á parte de las consideraciones precedentes, bastaría observar que, rechazada la primera solicitud de embargo, no ha podido insistirse en ella sino mediando confesión expresa ó ficta de hechos que hagan presumir



petición de herencia, no puede decretarse si no se acompañan nuevos recaudos—Civ., t. 19, p. 284, Ser. 5ª (t. 66).

47. **Embargo preventivo**—Rechazada la acción en que éste se fundó, su levantamiento es ineludible—Civ., tom. 20, pág. 179, Ser. 5ª (t. 67).

48. **Embargo preventivo**—Solo puede fundarlo una deuda sin plazo, justificando los extremos de la ley—Civ., tom. 20, pág. 190, Ser. 5ª (t. 67).

49. **Embargo preventivo**—El reconocimiento judicial de la deuda, basta para decretarlo—Civ., tom. 20, pág. 206, Ser. 5ª (t. 67).

50. **Embargo preventivo**—La obligación de pagar una pensión alimenticia no puede fundarlo—Civ., tom. 20, pág. 208, Ser. 5ª (t. 67).

51. **Embargo preventivo**—Los privilegios del con-

---

verosíblemente el derecho alegado—art. 448 del Cód. de Proc.,—lo que no ocurre al presente, ó no se ha hecho al menos mérito de tales circunstancias». Esta resolución no necesita comentarios; basta su sola lectura para darse cuenta de los errores en que incurre. Decir una vez rechazado el embargo preventivo, sólo podría decretarse mediando confesión expresa ó ficta, es declarar imposible dicha medida, una vez que hubiese sido denegado, lo que es un absurdo.

47. El embargo fué solicitado y trabado con carácter de preventivo hasta tanto se resolvieran las acciones deducidas en el juicio principal, las que fueron equiparadas en sus efectos á la acción reivindicatoria; de donde se sigue que el embargo debía seguir la suerte de las acciones que lo motivaron y autorizaron, y desde que esas acciones se desestimaron por la sentencia pronunciada, es de toda evidencia que el embargo preventivo no tiene razón de ser, pues desaparecida la causa, cesa el efecto que se le atribuyó.

48. No se justificó ninguno de los extremos requeridos por el artículo 443, inc. 5º del Cód. de Proc.

49. Arts. 448 y 465, inc. 3º del Cód. de Proc.

50. Se solicitó la sustitución de un embargo decretado en un juicio ejecutivo. A parte de que es anormal el convertir un embargo definitivo, después que se ha satisfecho su importe, en preventivo, es de estricto derecho el levantamiento del embargo trabado en una ejecución, una vez que el importe de dicha ejecución ha sido pagado en su totalidad.

51. Este caso es exactamente idéntico al del nº 28. Sin embargo, allí



tractor no bastan para fundarlo si no existe cantidad líquida—Civ., tom. 20, pág. 213, Ser. 5ª (t. 67).

52. **Embargo preventivo**—La demanda de filiación natural no basta para decretarlo—Civ., tom. 20, pág. 240, Ser. 5ª (t. 67).

53. **Embargo preventivo**—Para que se dicte sobre las rentas de bienes de la esposa, una vez demandada la separación, debe existir semiplena prueba de la mala administración del esposo—Civ., tom. 20, pág. 264, Ser. 5ª (t. 67).

54. **Embargo preventivo**—Si la demanda solo versa sobre la propiedad, no procede el de los frutos—Civ., tom. 20, pág. 267, Ser. 5ª (t. 67).

55. **Embargo preventivo**—Si el cumplimiento de la sentencia apelada exige operaciones periciales, ella no basta para decretar aquella medida—Civ., tom. 20, pág. 302, Ser. 5ª (t. 67).

56. **Embargo preventivo**—Debe afianzarse éste, en cual-

---

se establecía que cuando se pide un embargo preventivo en virtud de un privilegio—art. 446 del Cód. de Proc. y 3931 del Cód. Civ.—ese embargo reposa sobre el privilegio y grava la cosa, independientemente de toda cantidad; no requiriéndose por consiguiente suma líquida para que la medida sea viable. Esta es la buena doctrina. La Cám. no se ha fijado en el caso del sumario, pues el fallo confirma «por sus fundamentos», la resolución de primera instancia.

52. De acuerdo con los núms. 27 y 46.

53. Arts. 1272, inc. 3ª; y 1295 del Cód. Civ., y art. 74 de la Ley de Mat.

54. La demanda solo versaba sobre el inmueble, no siendo motivo de la acción los frutos. No puede trabarse sobre cosas que no están en litigio, pues solo éstas son las que la ley protege cuando caen bajo su imperio. Se trataba de una demanda de simulación.

55. Porque sería necesario para esto reasumir la jurisdicción del Juzgado sobre la causa, lo que solo es permitido al Juez—art. 222 del Cód. de Proc., y ley 1, tít. 9, Part. 3ª—cuando esta medida no requiere el dictamen de peritos.

56. El fiador pidió moratorias después de haberse constituido en garante de las resultas del embargo trabado. Si bien las moratorias no son una prueba plena de insolvencia por lo menos arroja la presunción de que su responsabilidad no ofrece las garantías que exige la ley para



quier estado del juicio, si la responsabilidad del embargante ha disminuido—Civ., tom. 21, pág. 237, Ser. 5ª (t. 68).

57. **Embargo preventivo**—La contestación de la demanda en rebeldía no basta para decretarlo—Civ., tom. 21, pág. 247, Ser. 5ª (tom. 68).

58. **Embargo preventivo**—Procede en la testamentaria el de la parte indivisa que corresponde al heredero—Civ., t. 21, p. 391, S. 5ª (t. 68).

59. **Embargo preventivo**—No procede su levantamiento si se han llenado los requisitos que la ley exige para dictarlo—Civ., t. 21, p. 437, Ser. 5ª (t. 68).

60. **Embargo preventivo**—Aun declarada la incompetencia del Juzgado, el embargo preventivo debe subsistir—Civ., t. 20, p. 100, Ser. 5ª (t. 67).

**Embargo preventivo**—Véase: *Depósito*, 1; *Depositario judicial*, 4; *Acción pauliana*, 1; *Cantidad líquida*, 1; *Derechos hereditarios*, 1; *Resolución*, 1.

### 1. **Embriaguez** — Cualquiera que sea su causa, la ley

hacer efectivas las obligaciones que pudieran surgir como consecuencia del embargo preventivo dictado. En corroboración de lo expuesto, basta tener presente que el art. 444 del Cód. de Proc. establece terminantemente que aquél puede trabarse á solicitud de quien lo pida cuando fuese reconocidamente abonado. Si en la época en que dictó el embargo, el juez apreció que el fiador podría hacer frente á dichas responsabilidades, no procede con igual criterio después de las moratorias, luego entonces el cambio del fiador se impone.

57. La Cám. dijo que el auto que da por contestada en rebeldía una demanda, no produce otro efecto que el que le atribuye el art. 45 del Cód. de Proc.; esto es, perder el derecho que hubiese dejado de usar la parte interesada. Es cierto esto, y también lo es que la rebeldía que da derecho al embargo preventivo es aquella á que se refiere el art. 437 del Cód. de Proc. Pero también es cierto que, la demanda dada por contestada en rebeldía, hace presumir verosimilmente el derecho alegado—art. 448 del Cód. de Proc.;—y hasta puede decirse que á los fines de un embargo preventivo, produce todos los efectos de una confesión ficta—art. 919 del Cód. Civ., y 100, inc. 1.º, del Cód. de Proc.

60. Porque en cualquier caso sería aplicable el art. 463 del Cód. de Procedimientos.

1. Arts. 81, inc. 1.º; y 83, inc. 1.º del Cód. Pen. Para que la ebriedad constituya una causa atenuante ó eximente de pena, la ley emplea la



solo la reconoce como involuntaria, si es el hecho de un tercero que el reo no puede prever ni evitar—Crim., t. 2, p. 338, Ser. 5ª (t. 37).

2. **Embriaguez**—Completa, es circunstancia calificativa del delito, si por los antecedentes del reo y la forma en que lo cometió, no se justifica la intención criminal—Crim., t. 2, p. 338, Ser. 5ª (t. 37).

3. **Embriaguez**—Para que la embriaguez parcial pueda alegarse como circunstancia atenuante, debe justificarse que fué involuntaria—Crim., t. 5, p. 33, Ser. 5ª (t. 40).

1. **Empedrado**—Si judicialmente se ha rechazado la eje-

---

palabra involuntaria, como sinónima de casual ó accidental.—Véase Pacheco, t. 1, p. 206, núm. 25; Chauveau, t. 1, p. 543, y Haus, t. 1, núms. 685 y 686.

2. Reconocido que el delito se cometió en un estado de embriaguez completa, no es posible castigarlo como homicidio voluntario, desde que falta la base esencial para poder considerarlo tal. ¿Cuál es, entonces, la responsabilidad del que comete un delito en completo estado de embriaguez, cuando ésta no es voluntaria? La única que puede imputarse es la de culpa ó imprudencia, como lo enseña Rivarola, t. 1, números 108 y 109, y Haus, t. 1, núms. 685 y 686, y Carrara en el párrafo 342 del t. 1. Ese estado no debe tomarse como una simple circunstancia atenuante, porque, como lo observa el primero de los autores, el inc. 2.º del art. 16 del Cód. Pen., y los principios del derecho criminal, aconsejan optar en esa situación por la ley que sea más favorable para el reo.

3. Véase el núm. 1 y su nota.

1. La misma cuenta había sido materia de una ejecución anterior que fué rechazada, porque el deudor no había sido notificado de la visación hecha por la Mun., y no se habían vencido las 12 mensualidades ó períodos en que debían pagarse. Después se inició nuevo juicio cuando había transcurrido con exceso el tiempo necesario para su exigibilidad por el importe íntegro. Presentada la ejecución así, la Cám. consideró que el título era perfectamente hábil, porque decía, no es necesario que previamente se interpele privadamente al deudor por el pago de su crédito exigible para que proceda la acción ejecutiva para su cobro. Si el deudor que conoce su obligación de pagar quiere evitar el procedimiento ejecutivo, debe pagar privadamente, sin que se le cobre, ó debió, en todo caso, pagar por consignación. De acuerdo con esta resolución, véase verb. *Afirmados*, 2. Parece que el sumario estuviese en contra del caso resuelto en el verb. *Cuotas*, 1, pero no es así, por quan-



cución por no haberse fijado las cuotas por empedrado, el título es hábil después de vencido el término, sin necesidad de nuevo requerimiento—Civ., t. 16, pág. 83, Ser. 5ª (t. 63).

**1. Empedrados**—Siendo la propiedad responsable del

to allí se constató que el acreedor no había gestionado en forma alguna su cobro antes de iniciar la ejecución.

1. El actor se presentó diciendo que había comprado del demandado, libre de todo gravamen, una finca, y que después de realizada la compra se vió obligado á pagar un crédito por empedrado que dicha propiedad adeudaba; que por tal causa demanda al vendedor por cobro de la suma pagada. El demandado contestó la demanda, pidiendo su rechazo, porque el actor había pagado á quien no estaba autorizado para cobrar, pues el empresario que ejecutó la obra era distinto del que recibió el pago; porque la cuenta recién se hizo exigible, después que el vendedor dejó de ser propietario; y por fin, porque el pago debía hacerse en doce mensualidades, y el comprador, sin oponer escepción alguna, abonó el total. El pago no fué negado por el demandado, y aunque afirmó que fué hecho á quien no era acreedor, que el que lo recibió era sucesor del contratante, constructor de la obra, y expresamente facultado para reclamarlo—art. 3º, ley de 29 de Septiembre de 1882.— Aunque el crédito se hizo exigible después de la adquisición de la finca, su existencia era anterior á ésta, como se acreditó; de manera, que la causa del gravamen es de aquellas que dan lugar á la garantía por evicción—art. 2091, Cód. Civil.—En vista de estos hechos, y tratándose de un crédito que pesa sobre la propiedad misma, es indudable que con arreglo al art. 2103 del Cód. Civil, el adquirente tiene derecho á exigir el importe de lo pagado, como indemnización proporcionada á la carga con que resulta gravada la propiedad. Es verdad que no hizo citar de saneamiento al enajenante, como lo manda la ley, pero constando la existencia del crédito por un instrumento público, la presunción *juris* de verdad que encierra, constituye mientras no se acredite lo contrario, la prueba de que no había oposición justa que hacer al derecho del acreedor—art. 2111, Cód. Civil.—Aunque no se considerase á las cuentas por empedrado visadas por la Municipalidad, como instrumento público de los comprendidos en el art. 979 del Cód. Civ., de todos modos, en virtud de la fuerza ejecutiva, deben tenerse por ciertas sus enunciaciones mientras no se demuestre su falsedad. La única oposición que puede hacerse al derecho del acreedor, es la relativa á la forma del pago que debía efectuarse por los propietarios en doce mensualidades. Pero esta defensa, que no tiende á destruir el derecho del acreedor, sino á hacerlo exigible parcialmente, no es de aquellos que por haberse omitido hacen desaparecer la garantía del enajenante. Podría, en todo caso, darle derecho á pretender los mismos plazos, pero no á eximirle de su responsabilidad, y aun lo primero no había razón

importe de los empedrados, el adquirente libre de gravamen tiene derecho á repetir del vendedor las sumas pagadas por ese concepto—Civ., tom. 11, pág. 314, Ser. 3ª (tom. 58).

2. **Empedrados**—Su pago es obligatorio para los propietarios, siempre que se haya verificado con intervención de la Municipalidad—Civ., t. 14, p. 310, Ser. 3ª (t. 61).

3. **Empedrados**—Adolecen de inhabilidad las cuentas

para acordarlo, dado el término transcurrido desde la presentación de la cuenta y la iniciación del juicio. El demandado alegó también que el pago total de la cuenta daba derecho á un descuento de 8 por 100, pero tal hecho no fué probado, y como se trataba de un empedrado concluido antes de la vigencia de la ley de 1888, no es de aplicación la disposición del art. 4º de esa ley. Debe tenerse presente también, que el hecho referido no fué alegado en la contestación á la demanda, y que por lo tanto no podía ser tomado en consideración.

2. La ley de 1º de Octubre de 1888, declara obligatorio el pago de cualquier afirmado que se construya: esta obligación es impuesta á todo vecino que pague contribución directa. El cobro puede hacerse por las empresas que construyen los afirmados.

3. No puede exigirse el pago de la totalidad de la cuenta sin antes interpelar al deudor, para que haga la opción que le acuerda el art. 4º de la ley de 1888. Este art. crea una obligación alternativa. En este caso, corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los dos objetos comprendidos en la obligación—art. 637 del Cód. Civ.—Mientras la elección no se haga, el título no trae aparejada ejecución: esa elección es previa al juicio ejecutivo. En las obligaciones alternativas, el deudor no incurre en mora mientras no exista requerimiento judicial ó extrajudicial de parte del acreedor—art. 509 *ibid.*—No mediando requerimiento para la elección de la forma de pago, no hay mora. No estando en mora en el cumplimiento de la obligación, ésta no es exigible, y por consiguiente, carece de carácter ejecutivo. La ley no obliga al deudor á pagar la totalidad de la obligación, á menos que opte por el pago en forma de mensualidades. Por el contrario, el art. 4º de la ley citada, dice: «El pago del afirmado se hará por los propietarios en doce mensualidades por partes iguales, ó á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 % sobre su importe.» De aquí resulta que el pago debe ser hecho por mensualidades, á no ser que se opte por abonar la totalidad de la deuda con el descuento establecido. Por consiguiente, cuando el ejecutante exige el pago de la totalidad de la deuda, sin mediar el requerimiento previo para la opción, esa ejecución debe rechazarse, porque el título en que se funda no le confiere tal facultad. El título es inhábil. No debe olvidarse que la totalidad de la obligación







por empedrados, aun visadas por la Municipalidad, si se exige el total en vez de las cuotas que la ley fija para el pago—Civ., tom. 19, pág. 284, Ser. 5ª (t. 66).

**Empleados**—Véase: *Acarreador*, 2; *Concurso*, 9; *Regulación*, 1.

**Empresario**—Véase: *Acto de comercio*, 2; *Declaraciones*, 7.

### 1. **Empleados de policía**—De la Capital, deben obedien-

solo puede exigirse cuando hayan vencido las doce cuotas de que nos habla el art. 4º cit.; pues el término para la exigibilidad de dichas cuotas, solo empieza á correr desde la *presentación de la cuenta al deudor*, y no desde la visación hecha por la Mun.—Véase t. 17, p. 173, Ser. 6ª; t. 400, p. 268.

1. El jefe de policía de la Capital hizo presente á un juez de instrucción que en lo sucesivo, y de acuerdo con las ordenanzas policiales vigentes, cuando el juzgado deseara solicitar algo de las oficinas de la repartición á su cargo, debía hacerlo por intermedio de la jefatura, y que por no haber sido dirigida por ese conducto, le devuelve las notas que dicho juez pasó al alcaide del Departamento para que fuera conducido á la policía un preso que se encontraba en la penitenciaría. «Vista la nota del señor jefe de policía, fecha 10 del corriente, en que comunica á esta Cám. que el juez de instrucción doctor Gallegos exigía directamente á las dependencias de la repartición policial, el diligenciamiento de órdenes y de informaciones que solo pueden ser cumplidas por intermedio de la jefatura, de acuerdo con lo que dispone el art. 1º, inc. 4º del Reg. Gen. de Policía, agregando que ese proceder se notaba particularmente cuando se trataba de poner en ejecución las providencias referentes á detenidos, á las solicitudes de antecedentes sobre los mismos, y á la comunicación ó incomunicación de los presos, practicadas en la forma expresada, exponiendo al mismo tiempo que los empleados subalternos no pueden cumplir esos mandamientos toda vez que no sean recibidos por el conducto obligado del superior jerárquico, y que el proceder de que se queja menoscaba el ejercicio de las atribuciones privativas del jefe de policía, por todo lo cual pedía que la Cám. tuviera á bien adoptar las medidas que creyera más oportunas». La Cám. sostuvo y resolvió que la policía es auxiliar de la justicia según disposición expresa de la ley; y los empleados y funcionarios de ella deben dar inmediato cumplimiento á las órdenes que impartan los jueces, sin perjuicio de comunicarlas á su superior inmediato. La comunicación inmediata y directa de los funcionarios de policía con los jueces de instrucción y la subordinación de todos ellos á las órdenes que éstos impartan con motivo de la instrucción de los sumarios y en lo que



cia inmediata á las órdenes que directamente les espidan los jueces de instrucción, sin perjuicio de dar cuenta de su cumplimiento al jefe de la repartición—Crim., tom. 4, p. 366. Ser. 5º (t. 39).

#### 1. Empresa de transporte—Que como contratante ha

á ellos se refiera, se halla consignada expresamente en los arts. 183, 184, inc. 6º, y 185 del Cód. de Proc. Crim. Las resoluciones dictadas por los jueces mencionados en la instrucción de los sumarios, y cuyo cumplimiento se encomienda á la policía, no son súplicas que haya obligación de dirigir al jefe de la repartición, sino órdenes y mandatos expedidos en virtud de su jurisdicción ó imperio, que deben ser obedecidas, salvo los recursos legales y las responsabilidades en que puedan incurrir los magistrados que las dictan en caso de extralimitar sus facultades. Las órdenes dictadas por el jefe de policía no pueden trazar límites al ejercicio de la jurisdicción, de que se hallan investidos los jueces por ministerio de la ley, ni entra en las atribuciones de aquel funcionario fijar á éstas, reglas sobre el procedimiento que deben seguir para el cumplimiento de sus resoluciones, pues lo contrario estaría en pugna con la independencia de los poderes públicos y pondría en peligro la libertad de acción indispensable para la administración de la justicia. Si las órdenes emanadas de los jueces salvan los límites de la jurisdicción que invisten, ó invaden atribuciones propias del Jefe de policía, será llegado el caso de que éste ocurra á su superior gerárquico para la resolución del conflicto. Pero en manera alguna le es permitido desobedecer ó incitar á sus inferiores á que desobedezcan las resoluciones que dictan los jueces en ejercicio de sus funciones. Declarando la ley, que la policía es auxiliar de los jueces de instrucción, esa circunstancia coloca al jefe de ella como á los demás empleados y funcionarios de la misma, en condición de subordinado á los magistrados en lo relativo á las causas de que conozcan. Por otra parte, si la autoridad de los jueces es desacatada, la ley fija el procedimiento á seguir y la pena que debe imponerse á los que cometan tal delito.

1. Un pasajero tomó boleto directo, hasta la ciudad de Córdoba, en la estación central de esta Capital; fué conducido por la Empresa del Ferrocarril de B. Aires al Rosario hasta la ciudad de este último nombre. Al penetrar á la estación del Ferrocarril Central Argentino—Empresa combinada con la anterior—la puerta de un vagón de carga que se encontraba colocado en una vía lateral, cayó sobre el coche en que iba el pasajero, rompiendo los cristales y persiana del coche, é hiriéndole en la cabeza y en el rostro, circunstancia que lo obligó á ponerse en asistencia y á interrumpir su viaje, teniendo que regresar á la Capital federal á los efectos de su completa curación. El pasajero demandó por daños y perjuicios á la Empresa de B. A. y R. en virtud de haber cele-



debido abonar al pasajero los daños y perjuicios ocasionados por el hecho de un tercero, tiene derecho á repetir contra éste

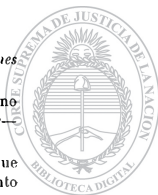
brado con ella el contrato de transporte; y no obstante las defensas que opuso, fué condenada á pagarle al damnificado por el accidente una suma cuya repetición gestiona. Se demostró que el accidente se produjo exclusivamente por culpa ó imprudencia de los empleados ó dependientes de la Empresa del Central Argentino. Las piezas que obraban en autos y en que se hacía consistir la justificación de este extremo, eran concluyentes, envolviendo algunas de ellas el reconocimiento de la responsabilidad en que dicha Empresa había incurrido por razón del hecho. A consecuencia de esto, la Empresa del Rosario tuvo que pagar á título de indemnización de perjuicios la suma demandada. ¿Es ó no justo que la primera reembolse á la segunda el importe de esa indemnización, que como se ha demostrado proviene de un hecho imputable solamente á aquélla? Evidentemente que sí. El contrato de intercambio y de empalme que existía entre la Empresa demandante y demandada en la época del accidente y cuyo testimonio corría en autos, así lo comprobaban. El art. 4º de ese contrato decía así: «La Compañía de Buenos Aires y Rosario será responsable por los perjuicios ocasionados por culpa ó negligencia de sus empleados en el ejercicio de sus funciones, mientras que estén en los terrenos de la Compañía del Central, y ésta será también responsable por las mismas culpas de sus empleados por los perjuicios que se ocasionen á las propiedades del Ferrocarril de Buenos Aires en los terrenos de la Compañía del Central». De este artículo se deduce que la Empresa del Central estaba obligada, en virtud de una convención, á indemnizar los perjuicios que por culpa de sus empleados se causaron al pasajero en el accidente de referencia—art. 1197, Cód. Civ.;—y con arreglo á la doctrina del art. 1198, Cód. cit., es evidente que por el mismo contrato las partes se obligaron á resarcirse los perjuicios que una de ellas se viese obligada á pagar por la otra, como consecuencia virtualmente comprendida en la obligación que tomaron de pagar los perjuicios que ocasionasen sus empleados respectivos. Esta interpretación dada al contrato, es racional y armónica con las disposiciones legales vigentes recordadas. Si el Central Argentino no estuviera obligado á reembolsar al Rosario lo que cobra, resultaría que éste habría soportado las consecuencias de un hecho de tercero, lo que es contrario á la doctrina que surge de los arts. 901, 902, 903, 904, 905 y 906 del Cód. Civ. El buen derecho de la Empresa demandante encuentra también sólida base en los arts. 1109 y 1113, Cód. Civ., y en los arts. 1079 y 1081 del mismo. Ya se considere el caso, del punto de vista de las convenciones existentes entre ambas empresas, ya se considere del punto de vista meramente legal, la acción interpuesta por la Empresa del Rosario era de todo punto procedente. El art. 1109 del Cód. Civ., impone á todo el

lo pagado, con intereses y costas—Civ., tom. 18, pág. 263, Ser. 5ª (t. 65).

**Empresas de transporte**—Véase: *Acarreador*, 1, 3; *Daños y perjuicios*, 1, 3, 4.

que ejecuta un hecho que por su culpa ó imprudencia ocasione un daño á otro, la obligación de reparar el perjuicio; y el art. 1113 hace pensar esta obligación sobre el autor del daño, sea que el hecho haya sido cometido directamente por él, sea que haya sido cometido por personas que estén bajo su dependencia. En presencia, pues, de estas disposiciones, y teniendo en cuenta que los perjuicios sufridos por el F. del Rosario, son á consecuencia de un hecho imputable á los empleados del Central, y del que éste es responsable, no puede ponerse en duda la obligación que la Empresa del último había contraído hacia aquélla con motivo del hecho referido. Puede alegarse que estas disposiciones del Cód. no son aplicables á este caso, debe hacerse constar que la obligación de reparar los perjuicios causados por un cuasidelito se rige por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil, y que respecto de éstos, esa obligación existe no solo respecto de aquél á quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta—arts. 1109 y 1081, Cód. Civ.—El derecho del Rosario para requerir del Central la suma pagada al pasajero, como indemnización de daños y perjuicios, resulta también de otros preceptos y doctrinas legales. Cuando un empresario de transporte tiene que valerse de otros agentes ó empresarios para cumplir el contrato, éstos no pueden ser considerados sino como dependientes ó empleados del primero en cuanto á la responsabilidad de éste respecto del pasajero ó cargador.—Véase Laurent, tom. 20, núm. 577.—Pues bien, en virtud de este principio, la Empresa del Central, en el hecho que dió margen al juicio, debe reputarse como dependiente de la del Rosario, y en tal concepto, ésta es civilmente responsable de los perjuicios ocasionados por culpa ó imprudencia de la primera ó de sus empleados—art. 1113 cit.—Ahora, resultando que la Empresa del Rosario ha indemnizado los perjuicios causados al pasajero por culpa de sus dependientes, es decir, por el hecho del Central, el derecho que tiene para repetir de éste lo que por tal razón ha pagado está expresamente consignado por el art. 1123 del Cód. Civ. La disposición de este art., y la del 1109, demuestran á la vez que la acción del demandante para reclamar las sumas pagadas por el accidente, es absolutamente independiente de la sentencia dictada en el juicio que éste siguió contra la Empresa del Rosario. La repetición, como se ha visto, no deriva de lo que dicha sentencia resuelve, sino de preceptos terminantes de la ley, y si aquella era mencionada en la demanda se hacía con el único propósito de indicar un antecedente que justificaba el pago efectuado al pasajero.





**Enajenación**—Véase: *Contrato de compraventa*, 3; *Bienes reservables*, 1; *Esposa*, 2; *Nulidad*, 28.

1<sup>a</sup>. **Encubridor**—El poseedor de objetos robados que no justifica como los hubo, debe ser considerado encubridor—Crim., tom. 3, pág. 312, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

2<sup>a</sup>. **Encubridor**—El consentimiento de la sentencia que declara encubridor al acusado, no le causa agravio en cuanto dispone la devolución al damnificado de los objetos secuestrados—Crim., tom. 4, pág. 306, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 39).

**Encubridor**—Véase: *Cómplice*, 2.

1<sup>a</sup>. **Endosante**—El endosante debe justificar el pago para responsabilizar a los demás, si no resulta del protesto—Com., tom. 2, pág. 67, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 37).

**Endosante**—Véase: *Falsedad*, 2.

1<sup>o</sup>. **Endoso**—Los endosantes de un pagaré no pueden absolver posiciones en el juicio entre tenedor y firmante—Com., tom. 9, pág. 377, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2. **Endoso**—La renovación, a nombre propio, de un pagaré recibido en garantía, hace responsable al tenedor por la diferencia, siempre que no justifique el consentimiento del endosante—Com., tom. 9, pág. 515, Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

3. **Endoso**—La presentación del testimonio de protesto,

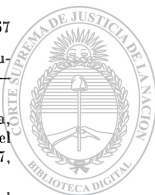
1<sup>a</sup>. Si bien las declaraciones de algunos testigos presentados por el acusado destruyan en cierto modo las presunciones que existían en contra de éste, y que lo señalaban como autor del delito de robo que se le imputaba, ellas no fueron consideradas suficientes para desvirtuar los demás indicios que autorizaban a considerarlo como encubridor de dicho delito. Las distintas diligencias que obraban en autos, constituían según la Cám., semiplena prueba, de que el querellado sabía que los objetos que compró eran robados, y en tales condiciones había mérito bastante para considerarlo encubridor, con arreglo a lo que dispone el inc. 3<sup>o</sup> del art. 42 del Cód. Pen.

2<sup>a</sup>. Porque él no puede oponerse a esa devolución, de acuerdo con los arts. 1083 y 1091 del Cód. Civ., y arts. 47, 223, 225 y 496, inc. 10, del Cód. de Proc. Crim.

1<sup>a</sup>. Arts. 624, 627 y 635 del Cód. de Com.

1<sup>o</sup>. Porque no son parte en el juicio.

3. La acción ejecutiva no se inició fundada en el testimonio del pro-



no es necesaria para ejecutar un pagaré no endosado, y la nulidad del juicio fundada en ese hecho debe ser rechazada—Com., tom. 1, pág. 346, Ser. 5ª (tom. 36).

4. **Endoso**—El endosante tenedor de la letra protestada, carece de personería para exigir su pago judicialmente, si el protesto se verificó á nombre del tenedor—Com., t. 2, p. 67, Ser. 5ª (tom. 37).

5. **Endoso**—El endoso en blanco justifica la propiedad del tenedor de la letra que puede ser el mismo endosante—Com., tom. 2, pág. 76, Ser. 5ª (tom. 37).

6. **Endoso**—En blanco, supone la propiedad en el tenedor que puede ser el mismo endosante del pagaré—Com., tom. 3, pág. 289, Ser. 5ª (t. 38).

7. **Endoso**—La prueba de haber sido antdatado el endoso

testo, sino en el reconocimiento de la firma practicado durante el juicio, para comprender que la ejecución había sido despachada de conformidad con la ley—art. 465, inc. 6º, 467 y 471, Cód. de Proc.—La presentación del testimonio de protesto, no es necesaria, tratándose de un pagaré no endosado, porque como lo observa el doctor Segovia en la nota 2483 de su obra sobre el Cód. Com., en éste no existe como en la letra de cambio una delegación de pago; no siendo, por consecuencia indispensable su protesto por falta de pago.

4. Según el art. 668 del Cód. de Com., el nuevo poseedor de una letra no tiene más derecho que el de exigir el depósito de su importe el día de su vencimiento, lo que excluye el derecho de exigir su pago.

5. Siendo en blanco el endoso del pagaré, se presume hecho á la orden del portador—art. 627 del Cód. de Com.—que puede serlo el mismo endosante sin necesidad de nuevo endoso, desde que el título es transmisible por su simple entrega, mientras el endoso en blanco no se llena—art. 742.—La posesión del documento por el endosante destruye, por consiguiente, la presunción resultante del endoso en blanco hecho por él, y hace renacer en su favor la propiedad del mismo si la transmitió, ó la presunción de propiedad según los casos, ó por lo menos la de hallarse habilitado para cobrarlo, enajenarlo y disponer de él. — Véase Segovia, notas 2110, 2117 y 2484, Cód. de Com.

6. De acuerdo en un todo con el número precedente.

7. Esta escepción que podría quizá admitirse no se refiere á la personería en el ejecutante ó su apoderado en lo relativo al procedimiento. Y aun dado el caso que fuese viable, su prueba incumbe al que afirma dicho extremo—arts. 633 y 676 del Cód. de Com.



de un pagaré, corresponde al que opone la escepción de falta de personería—Com., tom. 5, pág. 149, Ser. 5ª (t. 40).

**Endoso**—Véase: *Escep. de falta de personería*, 2; *Escep. de falsedad*, 7; *Letra*, 4.

**1. Endoso irregular**—No puede fundar la escepción de falsedad de la letra—Com., tom. 1, pág. 355, Ser. 5ª (t. 40).

4. El pagaré fué firmado en esta capital por el deudor á la orden del acreedor, y endosado en el partido de Monte, Prov. de Buenos Aires, en estos términos, en favor del ejecutante: « Páguese por mí á Videla Dorna ó á su orden ». La autenticidad del documento había sido reconocida expresamente por su firmante y la del endoso que no fué impugnada, también fué reconocida por el endosante. Sin embargo, durante la citación de remate, el ejecutado opuso la escepción de falsedad, fundándola en la irregularidad del endoso por haberse omitido en él la declaración del valor recibido, entendido, ó en cuenta, por cuya razón el endosado no adquirió la propiedad de la letra. El hecho era cierto, pero la consecuencia errónea. El endoso irregular por faltarle alguno de los requisitos exigidos por el art. 626, para que sea completo y eficaz para traspasar la propiedad de la letra—art. 624—es un acto lícito, previsto y legislado por el Cód., que le asigna efectos propios. No siendo en blanco el endoso, ó no teniendo los requisitos establecidos en el art. 626, dice el 628, valdrá como *simple mandato*, al efecto de autorizar al tenedor á exigir el pago ó hacer protestar la letra. Basta la enunciación de ese art. para persuadirse de la improcedencia de la escepción de falsedad por la circunstancia espresada, pues falta lo que es de la esencia de tal escepción, á saber: la afirmación de lo que no es verdadero ó disimulación de lo que lo es: *veritatis nutatio*. Videla Dorna pudo legalmente exigir del ejecutado el pago del documento á su vencimiento y pudo y debió hacerlo protestar por falta de él, como lo hizo, y si su mandato concluyó ahí, si la irregularidad del endoso no lo habilitaba para acudir ante los Tribs. á perseguir judicialmente su abono, ni en nombre propio ni en el del endosante, ello no autoriza á declarar que sea falso el título ó falso el endoso que se invoca como documento habilitante para deducir la acción. Podría quizás sostenerse, ante el último aparte del art. 628 del Cód. de Com., y argumentando á *contrario sensu*, que el endoso imperfecto hecho en la República no autoriza á exigir judicialmente el pago de la letra; pero la escepción que pudiera conducir á tal conclusión no sería la de falsedad que afecta á la acción ejecutiva del título, sino la de falta de personería, que por no referirse á ella y corresponder su reglamentación á las leyes de procedimiento, puede también alegarse aunque se trate de letras de cambio, á pesar de los términos del art. 676 del Cód. de Com., según lo ha resuelto la Cám.—Ser. 4ª, t. 4, p. 379.—Sin embargo, esa misma escepción



**Enfermedad**—Véase: *Detenido*, 1; *Posiciones*, 68.

**Enfiteutas**—Véase: *Impuestos*, 2; *Terreno enfiteutico*, 1.

1<sup>a</sup>. **Enmendaduras**—Sin salvar, no bastan para rechazar un pedido presentado en término oportuno—Com., tom. 3, pág. 289, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 40).

**Entre líneas**—Véase: *Notificación*, 3.

**Erario Municipal**—Véase: *Abogados*, 1.

**Error**—Véase: *Documentos privados*, 1; *Actuaciones de nulidad*, 1; *Cargo de escrito*, 1; *Domicilio*, 1; *Contrato*, 21; *Recibo ó cuenta*, 1; *Depósito judicial*, 1; *Costas*, 32, 52; *Asesor de menores*, 1; *Testigos*, 13.

1. **Escala**—El prudente árbitro judicial es la única regla á que se halla sujeto el recorrido de la escala—Crim., tom. 3, pág. 418, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 38).

1. **Escalamiento**—Se conceptúa que existió, siempre que los delinquentes hayan penetrado por las azoteas de las casas vecinas—Crim., tom. 9, pág. 520, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

**Escalamiento**—Véase: *Robo*, 2, 3.

1<sup>6</sup>. **Escarcelación**—Si el delito puede ser castigado con más de tres años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza—Crim., tom. 9, pág. 6, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

2. **Escarcelación**—Aun cuando el delito pueda ser pena-

ción sería improcedente, porque las razones aducidas en la glosa 2124 del Dr. Segovia, al párrafo final del art. 628, convencen de que la disposición de ese art. debe regir tanto en el caso de endoso hecho en el extranjero de letra pagadera en la República, como del hecho en una Prov. argentina de documento pagadero en otra ó en la Cap. de la Nación, que era el caso actual.

1<sup>a</sup>. En el escrito se pedía el término extraordinario de prueba, y las enmendaduras consistían en el nombre de unos testigos. En primer lugar este requisito del nombre no es exigido por el art. 115 del Cód. de Proc. Civ.; y en segundo término, las enmendaduras eran perfectamente inteligibles. Rechazar un escrito por causales tan fútiles sería interpretar estrechamente el art. 20 del Reg. de la Cám. de lo Civ.

1<sup>4</sup>. Art. 376 del Cód. de Proc., modificado por la ley núm. 3508. Véase verb. *Disparo de arma de fuego*, núm. 1 y su nota.

2. Esta sentencia fué dictada antes de la ley núm. 3508. El juez no hizo lugar á la escarcelación por cuanto el delito merecía dos años de





do con más de dos años, procede escarcelación si existen atenuantes—Crim., tom. 9, pág. 395, Ser. 3ª (t. 25).

3. **Escarcelación**—No procede si el delito puede ser castigado con más de dos años de prisión—Crim., tom. 9, pág. 424, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Escarcelación**—No procede si el delito puede ser castigado con más de dos años de prisión—Crim., tom. 9, pág. 430, Ser. 3ª (t. 25).

5. **Escarcelación**—Para juzgar la procedencia de la escarcelación bajo fianza, debe tenerse en cuenta el máximo de la pena que la ley determina para el delito acusado—Crim., tom. 9, pág. 571, Ser. 3ª (t. 25).

6. **Escarcelación**—Si el delito puede ser penado con

prisión, no pudiendo tenerse en cuenta, en estado de sumario, las circunstancias atenuantes, en razón de que el delito debía considerarse en abstracto, art. 376 del Cód. de Proc. Crim. Esta ha sido la jur. de la Cám. con excepción de uno que otro caso aislado que no deroga los demás. Véase *Inst.*, tom. 8, verb. *Escarcelación*, núm. 1, 6, 7 y 8. Sin embargo, no debe olvidarse que esta doctrina para el sumario: en el plenario, es otra la situación legal. Véase el verb. *Disparo de arma de fuego*, n° 1, de este tomo, é *Inst.*, tom. 8, verb. *Escarcelación*, n° 2 y su nota. En el sumario que nos ocupa la escarcelación se decretó en plenario.

5. Esta es la doctrina sentada por los tribunales que han aplicado el art. 376 del Cód. de Proc. Crim. Así la S. C. N. ha dicho que «pudiendo la pena que merezca el delito, ser mayor que la que admite la escarcelación bajo fianza, debe ser ésta negada.» Véase t. 67, p. 316. Al fundarse esta resolución se estableció que las circunstancias que caractericen la culpabilidad ó inculpabilidad del procesado, solo pueden considerarse y apreciarse en el proceso instaurado.

6. Este caso fué resuelto por la mayoría de la Cám. El asunto se hallaba ya ante el juez de sentencia, en cuyo caso las circunstancias atenuantes pueden tenerse en consideración para la escarcelación. Véase la nota del núm. 1. La mayoría se fundó en la jur. sentada en el caso publicado en el tom. 2, pág. 596, Ser. 2ª, según la cual debe estarse al título de la pena sin tomar en consideración las circunstancias que puedan existir. Pero en el caso último, citado, la Cám. ordenó la libertad bajo fianza, por cuanto el inferior no había hecho lugar á ella por concurrir circunstancias agravantes. Siendo principio de derecho criminal que en caso de duda, la interpretación debe siempre ser favorable al reo. Por otra parte, en el caso del sumario, la causa estaba en plenario, por cuya causa la minoría de la Cám., formada por el doctor

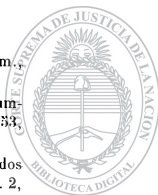


más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza, aun cuando el agente fiscal haya solicitado menor pena—Crim., tom. 9, pág. 568, Ser. 3ª (t. 25).

**7. Escarcelación.**—No procede bajo fianza, si el delito

López Cabanillas, sostuvo la procedencia de la escarcelación, diciendo: «Que esta Cám., interpretando el art. 376 del Cód. de Proc., ha establecido recientemente en las causas de Dalmiro Mendieta y otro, que lo dispuesto en dicho art. no excluye la concesión de la libertad provisional bajo fianza, cuando puesta la causa en estado de plenario se ha fijado por la acusación en menos de dos años la pena correspondiente al hecho que motiva la detención preventiva. Que la jurisprudencia debe mantener esta interpretación que se conforma con los principios generales que rigen la materia de la escarcelación bajo fianza, pues si la detención preventiva solamente se justifica por la necesidad de evitar que los presuntos delinquentes escapen, por la fuga, á la acción represiva de la ley que han violado, cuando esa necesidad desaparece por afianzamiento de las responsabilidades que nacen del hecho, la humanidad y la justicia exigen que cesen los efectos de esa injusticia necesaria, como se ha llamado á la prisión preventiva. Que una interpretación restrictiva sería opuesta á la regla consignada en el art. 13 del Cód. de Proc. Crim. que prescribe que en caso de duda debe estarse á lo que sea más favorable al procesado, siendo también regla constante de derecho, que debe restringirse toda solución contraria á la libertad; y no se inspiraría tampoco en el espíritu liberal de la ley, el que Ortolán recomienda á los magistrados no perder de vista en esta materia — *Droit penal*, núm. 1415— y que fué también el que tuvieron en cuanto tanto el autor del proyecto de nuestro Cód. de Proc., como los miembros de la comisión reformadora del mismo, según puede verse en las respectivas notas de remisión. Que en el caso *sub judice*, la causa se halla ya en estado de plenario, sin que haya acusador particular, y la pena que solicitó el Min. Púb. para la represión del hecho que ha motivado la prisión preventiva del encausado, es solamente de un año de prisión, conforme al art. 120, inc. 1.º, Cód. Pen., que no excede, por consiguiente, del maximum fijado en el art. 376, y en consecuencia, atendiendo al título de la acusación que debe servir para conceder ó denegar la escarcelación — Manglin, *De l'instruction écrite*, núm. 172— debe concederse la solicitada».

7. En este caso la Cám. dijo: «Que tanto el querellante como el Ministerio Púb. acusan al procesado de una defraudación cuyo monto excede de dos mil pesos. Que estando castigado este delito con una pena cuyo maximum es superior á dos años de prisión—art. 202, inc. 5º, Cód. Pen.—la escarcelación bajo fianza no procede, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 376, Cód. de Proc.—Que esta conclusión no puede ser modificada por las pruebas de descargo producidas por el proce-



puede ser penado con más de dos años de prisión — Crim., tom. 2, pág. 49, Ser. 5ª (tom. 37).

8. **Escarcelación**—El auto que la concede, no puede cumplirse mientras no esté consentido—Crim., tom. 2 pág. 53, Ser. 5ª (tom. 37).

9. **Escarcelación**—Si el máximo de la pena es de dos años, procede la escarcelación bajo fianza — Crim., tom. 2, pág. 65, Ser. 5ª (tom. 37).

10. **Escarcelación** — No procede la escarcelación bajo fianza, si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión—Crim., tom. 2, pág. 79, Ser. 5ª (tom. 37).

11. **Escarcelación**—El superior no puede resolver sobre la procedencia de la escarcelación bajo fianza, si el decreto que la concede no ha sido materia del recurso en esa parte—Crim., tom. 2, pág. 145, Ser. 5ª (tom. 37).

12. **Escarcelación**—El monto de la fianza para la escarcelación debe ser fijado en proporción á las responsabilidades civiles de que pueda ser pasible el acusado—Crim., tom. 2, pág. 145, Ser. 5ª (tom. 37).

13. **Escarcelación** — No procede la escarcelación bajo

sado, desde que ellas no pueden ser tomadas en cuenta en este incidente, el cual solo tiene por objeto decidir si el hecho que ha motivado la prisión merece ó no pena pecuniaria ó corporal cuyo máximo no exceda de dos años de prisión—art. cit., Cód. de Proc.»

8. El art. 305 del Cód. de Proc. Crim., establece que la apelación de los autos interlocutorios se concederá en un solo efecto. Es decir que al solo efecto devolutivo. Si la apelación no tiene efecto suspensivo, no vemos cual puede ser el fundamento para exigir que la escarcelación esté consentida para que pueda ejecutarse. En el caso del sumario la Cám. no declaró espresamente la necesidad de que el auto estuviese consentido para llevarse á cumplido efecto.

10. Este caso fué resuelto estando la causa en estado de sumario. Véase los n.ºs 4 y 6.

11. Art. 508 del Cód. de Proc. Crim.

12. De acuerdo con otro caso resuelto.—Véase INST., t. 1, verb. *Escarcelación*, n.º 1016; y argumento del art. 496 del Cód. de Proc. Crim., aplicable por analogía.

13. De acuerdo con el art. 376 del Cód. de Proc. Crim., modificado por la ley n.º 3508 de 22 de Sept. de 1897, que dice así: «Queda reformado



fianza, si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión—Crim., tom. 2, pág. 178, Ser. 5ª (tom. 37).

14. **Escarcelación**—La causas eximentes de pena no pueden ser juzgadas y resueltas en el incidente sobre escarcelación—Crim., tom. 4, pág. 251, Ser. 5ª (tom. 39).

15. **Escarcelación**—Las escepciones eximentes ó atenuantes no pueden ser juzgadas en el incidente sobre escarcelación, si el delito no es escarcelable *prima facie*—Crim., tom. 4, pág. 268, Ser. 5ª (tom. 39).

16. **Escarcelación**—La existencia ó inexistencia de reiteración y reincidencia puede ser juzgada en el incidente sobre escarcelación bajo fianza—Crim., t. 4, p. 279, S. 5ª (t. 39).

17. **Escarcelación**—No procede bajo fianza si el delito puede ser castigado con más de dos años—Crim., tom. 4, pág. 314, Ser. 5ª (tom. 39).

18. **Escarcelación**—Para la resolución del incidente sobre escarcelación del fallido, no es indispensable la audiencia del síndico—Com. tom. 4, pag. 316, Ser. 5ª (t. 39).

19. **Escarcelación**—Procede, si el máximo de la pena no excede del que la ley fija—Crim., tom. 4, pág. 385, Ser. 5ª (tom. 39).

20. **Escarcelación**—No procede la libertad bajo fianza,

---

el art. 376 del Cód. de Proc. Crim. Cuando el hecho que motive la prisión del procesado tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo promedio no exceda de dos años de prisión, ó una y otra conjuntamente, podrá declararse su libertad provisoria, siempre que preste alguna de las cauciones determinadas en el presente título».

14. Véase los n.ºs 1, 6 y 10; verb. *Disparo de arma de fuego*, 1. La escarcelación fué denegada por el juez de instrucción y por consiguiente en estado de sumario.

16. No autorizando la ley la escarcelación bajo fianza en caso de reiteración de delitos, ó de reincidencia, es forzoso decidir si ellas existen ó no para juzgar de la procedencia de aquélla.

17. Aquí fué el juez de sentencia quien denegó la apelación.

18. La ley núm. 2739, de 6 de Octubre de 1890, dice así: «En los casos en que fuere ordenado el arresto del fallido, con arreglo al inc. 6º del art. 1396 del Cód. de Com., procederá la escarcelación mediante fianza de cárcel segura, por una suma que arbitrará el Juez, según los casos.» Esta ley no establece la necesidad de oír al síndico.



si el máximo de la pena á imponer sobrepasa el límite que determina la ley de escarcelación—Crim., tom. 4, pág. 401, Ser. 5ª (t. 39).

**21. Escarcelación**—No procede la escarcelación bajo fianza, si la pena puede ser mayor de la que la ley fija para permitirla—Crim., tom. 5, pág. 305, Ser. 5ª (tom. 40).

**Escarcelación**—Véase: *Amenazas*, 2; *Disparo de arma de fuego*, 1; *Fianza*, 1; *Cosa juzgada*, 1; *Defraudación*, 2; *Delito de escarcelación*, 1; *Acusación fiscal*, 3; *Escarcelación*, 13; *Escrito*, 2.

**1ª. Escarcelación bajo fianza**—Decretada la improcedencia de la prisión, la suma depositada como fianza para la escarcelación debe ser devuelta al interesado, sin que pueda ser afectada por la causa que motivó la prisión—Com., t. 1, pág. 104, Ser. 5ª (t. 36).

**2. Escarcelación bajo fianza**—Los antecedentes que han servido para calificar la quiebra, no pueden ser tenidos en consideración al tratarse de la escarcelación bajo fianza—Crim., tom. 1, pág. 221, Ser. 5ª (t. 36).

**1ª. Excepción**—Aun cuando el ejecutado califique erró-

21. El Juez de Instrucción no había hecho lugar á la escarcelación, porque al delito correspondía más de dos años de prisión. Elevado el expediente al Juez de sentencia, se reiteró el pedido de escarcelación, teniendo en cuenta las circunstancias del delito que aminoraban la pena: en 1ª Instancia, se hizo lugar; pero la Cám. lo revocó, porque la pena era mayor de dos años de prisión.

1ª. En un juicio ejecutivo se decretó la prisión de un depositario á quien se imputó haber sido infiel. El depositario fué escarcelado bajo fianza. Resuelto el incidente en sentido favorable al encausado, se pidió la devolución del depósito: el ejecutante se opuso, alegando que el depósito fué aceptado en garantía del valor de los bienes embargados. No constando ese extremo, y habiendo terminado el incidente, que dió motivo á la prisión, de una manera favorable para el depositario, se ordenó la entrega de la fianza.

2. Porque ellos, cualquiera que sea su importancia y eficacia jurídica, solo pueden servir para juzgar de la responsabilidad criminal que pueda corresponder al procesado; pero no para decidir si el procesado tiene ó no derecho á ser escarcelado en estado de sumario.

1ª. El Juez Dr. Peyret, rechazó la ejecución, porque el deudor había



neamente la excepción, el Juzgado debe recibir prueba sobre la que legalmente resulte de los hechos en que la funde—Com., tom. 9, pág. 204, Ser. 3ª (t. 25).

2. **Excepción**—Si la opuesta no es de las permitidas, no procede la recepción de la causa á prueba—Com., tom. 9, pág. 218, Ser. 3ª (t. 25).

3. **Excepción**—Si de autos resulta su improcedencia, la omisión de la prueba no puede fundar la nulidad del juicio—Com., tom. 2, pág. 153, Ser. 5ª (t. 37).

4. **Excepción**—La resolución, como previa, del Juzgado, sobre una excepción opuesta al demandante como razón general, no puede fundar la nulidad de la sentencia—Com., tom. 3, pág. 90, Ser. 5ª (tom. 38).

5. **Excepción**—Su oposición fuera de oportunidad, no suspende el término para contestar la demanda—Com., t. 3, pág. 302, Ser. 5ª (t. 38).

6. **Excepción**—La resolución de una, no opuesta por el

---

calificado equivocadamente la excepción. La Cám. revocó la sentencia, porque los jueces deben administrar justicia, teniendo en cuenta los hechos alegados como generadores de derecho, independientemente de la calificación más ó menos errónea que los interesados les den.—Véase INST., t. 6, verb. *Excepción*, núm. 3.

2. Arts. 490 y 491 del Cód. de Proc.

3. Se opuso la excepción de litispendencia; pero de los mismos hechos alegados como fundamento resultaba claramente la improcedencia de la excepción: en tal caso, era innecesario imprimirle el procedimiento marcado por los arts. 89 y 91 del Cód. de Proc., pues no se necesita probar aquello que está demostrado en el expediente, y por consiguiente, esa omisión no puede ser causa de nulidad.

4. En virtud del principio de derecho *utile per inutile non vitiatur*. La forma vaga é incongruente en que el litigante opuso su defensa, parecía cohonestar la resolución del Juez en la forma del sumario. Se cumplió en la sentencia el precepto del art. 218 del Cód. de Proc., haciendo en el pronunciamiento la debida separación correspondiente á ese punto litigioso.

5. Se opuso la excepción dilatoria de incompetencia, que fué rechazada: ejecutoriada esta resolución, se pretendió oponerla nuevamente, siendo también rechazada. En este estado, se acusó rebeldía, á lo que se hizo lugar de acuerdo con los arts. 46, 83, 98 y 99 del Cód. de Proc.

6. Las resoluciones *ultra petita* que pueden autorizar el recurso de



demandado, rechazándola, no puede fundar la nulidad de la sentencia—Com., tom. 4, pág. 50, Ser. 5ª (tom. 39).

7. **Escepción**—Cualquiera que sea el término transcurrido entre la deuda y la demanda, la prescripción es improcedente, si en las posiciones se reconoció la existencia sin alegar la escepción—Com., t. 4, pág. 57, Ser. 5ª (t. 39).

8. **Escepción**—Al que confiesa la prestación de servicios, afirmando la existencia de un contrato de locación con un tercero, corresponde la prueba de la escepción—Civ., tom. 9, pág. 97, Ser. 5ª (tom. 56).

9. **Escepción**—Si la opuesta fuese de hecho y la parte no produjese prueba sobre ella, el Juzgado no debe tomarla en consideración—Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 5ª (tom. 56).

10. **Escepción**—La diversa responsabilidad de los demandados por daños y perjuicios, no puede ser opuesta como escepción y hace procedente la acumulación—Civ., tom. 17, pág. 291, Ser. 5ª (tom. 64).

11. **Escepción**—La disposición de la ley que prohíbe fa-

---

nulidad, son las que irrogan perjuicio al que las deduce. Pero declarar improcedente una escepción no alegada, ni bonifica la condición del actor, ni empeora la del demandado. No trae gravamen alguno.

7. La prescripción se opuso en 2.ª instancia fundada en el artículo 3962 del Cód. Civ. Se dijo que la prescripción había sido interrumpida por el reconocimiento de la deuda hecha por el demandado al absolver posiciones en 1.ª instancia — art. 3989. — El deudor reconocía la deuda pero no el monto que se le cobraba: esta restricción no puede tener por efecto el de quitar al acto su carácter interruptivo, puesto que siempre queda en pie un reconocimiento que, como enseña Vazeille, no se concilia con la prescripción—Véase *Tratado de la Prescripción*, núm. 345.

8. En la confesión calificada, como la de que se trata, la prueba de la calificación corresponde al que la aduce. De acuerdo con la doctrina del sumario—véase t. 44, p. 180; t. 56, p. 403; t. 63, p. 62; t. 66, p. 310; t. 98, p. 141, de la Jur. Civ. Puede verse asimismo el verb. *Escepción*, núm. 2, del t. 5 de la *Inst.*

9. Ley 8, tit. 3, Part. 3.ª

10. Véase verb. *Daños y perjuicios*, núm. 35.

11. Los arts. 84 y 85 del Cód. de Proc. no la incluyen entre las dilatorias, que son de interpretación restrictiva. Además el art. 1101 del



llar la acción civil de daños y perjuicios en tanto se resuelva la causa criminal, no puede fundar una excepción ni paralizar la secuela del juicio—Civ., t. 18, p. 233, Ser. 5ª (t. 65).

**12. Excepción**—La negativa absoluta del demandado, que desconoce que la obligación haya existido, no puede en ningún caso ser calificada como excepción que lo obligue á la prueba de haberla extinguido—Civ., tom. 18, pág. 292, Ser. 5ª (t. 65).

**Excepción**—Véase: *Costas*, 5, 9, 23, 49; *Citación de remate*, 2.

**1. Excepciones**—Las ilegales deben ser rechazadas sin substanciación—Com., t. 9, pág. 91, Ser. 3ª (t. 25).

**2. Excepciones**—Corresponde se lleve adelante la ejecución si no se han opuesto excepciones—Com., tom. 9, p. 265, Ser. 3ª (t. 25).

**3. Excepciones**—Si el ejecutado no justifica las opuestas, debe llevarse adelante la ejecución—Com., tom. 3, pág. 78, Ser. 5ª (tom. 38).

**4. Excepciones**—Si el ejecutado no justifica las opuestas, debe llevarse adelante la ejecución—Com., tom. 4, pág. 62, Ser. 5ª (tom. 39).

Cód. Civ. si bien obsta al pronunciamiento del juicio civil, hasta que se falle el criminal, no impide que aquél se lleve adelante para ser resuelto en la oportunidad preceptuada por la ley.

12. La defensa es el género, la excepción la especie. Todas las excepciones son defensas, pero no todas las defensas son excepciones. El que niega la existencia de una obligación, no opone excepciones, simplemente se defiende. Por eso, las Partidas nos enseñan perfectamente en sus frases culminantes, el verdadero carácter de las excepciones, y la diferencia que éstas tienen con la simple defensa, cuando expresan «tal niego como este, *non ha in sí de todo en todo natura de negamiento*, mas encubrirlo con el fecho que dicen que lo fizo aquel contra quien razonan. Aquel que fare este niego, razona por sí ley é derecho». Habiendo, pues, de todo en todo natura de negamiento, existe una defensa que traducida á nuestro lenguaje de la época, quiere decir una negativa absoluta de la obligación y de la deuda.

1. De acuerdo con el número 2 del verb. *Excepción*.
2. Art. 486 del Cód. de Proc.
3. Art. 498 del Cód. de Proc.





5. **Escepciones**—Su interposición durante el plenario, suspende la tramitación del juicio principal—Crim., tom. 4, pág. 249, Ser. 5ª (tom. 39).

6. **Escepciones**—Si no son permitidas por la ley, deben rechazarse sin recibir la causa á prueba—Com., tom. 4, pág. 324, Ser. 5ª (tom. 39).

7. **Escepciones**—Deben rechazarse las escepciones no permitidas por la ley sin recibirse á prueba—Com., tom. 4, pág. 328, Ser. 5ª (tom. 39).

8. **Escepciones**—Injustificadas, corresponde se lleve adelante la ejecución—Com., tom. 5, pág. 22, Ser. 5ª (tom. 40).

9. **Escepciones**—Deben rechazarse si son inadmisibles por la ley—Com., tom. 5, pág. 49, Ser. 5ª (tom. 40).

10. **Escepciones**—Las rechazadas en un juicio no pueden admitirse en el subsiguiente, iniciado por hallarse declarado y justificada en el primero la escepción de espera—Civ., tom. 9, pág. 71, Ser. 5ª (tom. 56).

11. **Escepciones**—Para que las opuestas por el ejecutado puedan ser tomadas en consideración, deben ser debidamente fundadas—Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 5ª (tom. 56).

---

5. Art. 456, 2ª parte, del Cód. de Proc. Crim.

6. Art. 490 *in fine*, y 491 del Cód. de Proc.

7. Contra un pagaré, se opuso la escepción de inhabilidad de título, la que según el art. 676 del Cód. de Com., no es admisible; en este caso no procede la recepción de prueba.—Véase art. 490 *in fine* y 491 del Cód. de Proc.

8. Art. 498 del Cód. de Proc.

10. En el juicio anterior se habían opuesto las escepciones de falsedad é inhabilidad del título y espera, declarándose procedente esta última. Iniciado un nuevo juicio después de vencido el término de la espera, se volvieron á oponer las mismas escepciones, declarándose que respecto de la primera había cosa juzgada.

11. El art. 490 del Cód. de Proc., autoriza al ejecutado á pedir que el ejecutado especifique detalladamente las escepciones opuestas y *los hechos en que se funden*; pero no establece ningún apercibimiento. Sin embargo, la Cám. en el caso del sumario dijo: «Respecto de las otras escepciones nada se dice por el ejecutado para fundarlas, y como no basta oponerlas para que sean admisibles, pienso que el inferior ha procedido correctamente no ocupándose de ellas».



12. **Escepciones**—El derecho á oponerlas, se pierde por el vencimiento del término, sin que sea necesario acusar rebeldía—Civ., tom. 10, pág. 353, Ser. 5ª (tom. 57).

13. **Escepciones**—El escrito oponiéndolas fuera del término, debe devolverse sin sustanciación—Civ., t. 10, p. 419, Ser. 5ª (tom. 57).

14. **Escepciones**—Las opuestas antes de la citación de remate, no pueden ser sustanciadas—Civ., tom. 10, p. 434, Ser. 5ª (t. 57).

15. **Escepciones**—Solo pueden sustanciarse las opuestas en el término que la ley señala—Civ., tom. 11, pág. 397, Ser. 5ª (t. 57).

16. **Escepciones**—Al que las opone corresponde justificarlas; si no lo hace, debe llevarse adelante la ejecución—Civ., tom. 12, pág. 75, Ser. 5ª (t. 59).

17. **Escepciones**—No corre término para evacuar el traslado de ellas en tanto no se presenten las copias—Civ., t. 14, pág. 183, Ser. 5ª (tom. 61).

18. **Escepciones**—No proceden al ser citado, para diligencias preparatorias del juicio—Civ., tom. 14, pág. 255, Ser. 5ª (tom. 61).

12. El término señalado por el art. 490 del Cód. de Proc., para oponer escepciones, es perentorio, según el art. 485. En esta clase de términos, basta el vencimiento para perder el derecho de que no se hace uso—art. 45, *ibid*.

13. Como consecuencia de la doctrina espuesta en el núm. precedente. Sin embargo, en el presente sumario se trataba de un juicio ordinario—arts. 86 y 93 del Cód. de Proc.

14. Arts. 471, 465 y 485 del Cód. de Proc.

15. Se opusieron escepciones dilatorias después de vencido el término—art. 83 Cód. de Proc.—que es fatal,—art. 46, inc. 1.º, *ibid*.

16. Es regla de derecho procesal que el demandado, en la escepción se hace actor; y de acuerdo con la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª, al actor incumbe la prueba. Si no la establece debe llevarse la ejecución adelante—art. 498 del Cód. de Proc.

17. Art. 21 del Cód. de Proc. Civ.

18. Se trataba de preparar la vía ejecutiva por medio del reconocimiento de firma. Ninguna escepción ó defensa puede admitirse al demandarlo antes de la citación de remate—art. 485 del Cod de Proc.



19. **Escepciones**—Opuestas por uno de los demandados, no interrumpen el término que los demás tienen para contestar la demanda—Civ., tom. 13, pág. 83, Ser. 5ª, (tom. 62).

20. **Escepciones**—Vencido el término para oponerlas, no puede admitirse observación sobre la inhabilidad del título, sin perjuicio de ser declarado en la sentencia—Civ., tom. 13, pág. 118, Ser. 5ª (tom. 62).

21. **Escepciones**—La contestación de la demanda en rebeldía, impide que la sentencia resuelva sobre las escepciones, aunque resulten justificadas, sin perjuicio del derecho que a hacerlas valer en juicio por separado tenga el vencido—Civ., tom. 13, pág. 246, Ser. 5ª (tom. 62).

22. **Escepciones**—Son improcedentes contra la ejecución de pensiones alimenticias, las que la ley admite en el juicio ejecutivo—Civ., tom. 13, pág. 337, Ser. 5ª (tom. 62).

23. **Escepciones**—Si por la vaguedad de los escritos con

---

19. Véase verb. *Demanda*, n.º 2.

20. Porque el término para oponerlas es perentorio. Sin embargo, como el juez debe, según el art. 471 del Cód. de Proc., examinar *cuidadosamente* si el documento es hábil, el hecho de haberlo considerado tal al ordenar el mandamiento, no le inhibe de volver, sobre ese modo de pensar, después al sentenciar de remate, declarando la inhabilidad del título.

21. Incontestada la demanda, no puede producirse prueba sino sobre lo principal—argumento de los arts. 400, inc. 1º, y 408 del Cód. de Proc.—y si se produjeran algunas probanzas impertinentes, deben ser desechadas al dictarse sentencia. Cualquier capítulo rechazado por esta causa debe ser tenido como no producido, y por consiguiente, puede ser materia de nuevo juicio.

22. Porque se trata de la ejecución de una sentencia dictada en juicio de alimentos—art. 539 del Cód. de Proc.—Se argumenta, sin embargo, que este art. no es aplicable, por tratarse aquí de un juicio sumario; esta razón no es atendible: 1º, porque la ley no distingue en el Tit. XV, y se refiere á toda clase de sentencias; y 2º, porque el art. 605, dice que interpuesta apelación «se sacará testimonio de la sentencia, reservándose en el Juzgado para su ejecución».

23. Dictada una sentencia, en juicio ordinario, con costas, el abogado vencedor se presentó cobrando su honorario al vencido; éste opuso escepciones que no están admitidas por el art. 539 del Cód. de Proc., que trata de la ejecución de sentencia. El Juez las rechazó por esta cau-



que se inicia la ejecución puede el ejecutado confundir la forma del juicio, debe anularse la sentencia á fin de que pueda oponer las excepciones que á su derecho correspondan—Civ., tom. 16, pág. 88, Ser. 3ª (t. 63).

24. **Excepciones**—El término para oponer las dilatorias es perentorio—Civ., t. 20, pág. 155, Ser. 3ª (t. 67).

25. **Excepciones**—Librado mandamiento, el ejecutado solo debe ser oído al oponer excepciones; no procede la nulidad de lo actuado, antes de ese estado—Civ., tom. 21, p. 411, Ser. 3ª (tom. 68).

26. **Excepciones**—El recurso interpuesto por el desposeído sin audiencia, no puede conceptuarse demanda, ni en consecuencia, puede oponérsele excepciones—Civ., tom. 22, pág. 436, Ser. 3ª (t. 69).

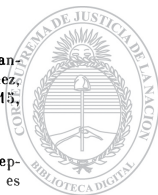
**Excepciones**—Véase: *Documento al portador*, 1; *Escarcelación*, 15; *Nulidad de resolución*, 1; *Nulidad*, 33.

sa, mandando llevar adelante la ejecución. La Cám. anuló la sentencia de trance y remate, por cuanto teniendo en cuenta la ambigüedad de los términos de la demanda, no se podía saber si se iniciaba como juicio ejecutivo ó como ejecución de sentencia. No podía suponerse que se iniciara este último procedimiento, por cuanto la sentencia no había sido dictada en favor del actor, sino de su cliente vencedor. Dadas estas circunstancias especiales, no sería justo privar, al ejecutado, de los medios de defensa, que con igual eficacia y por los mismos fundamentos, aunque en distinta forma, habría podido hacer valer el ejecutado, si hubiera sido evidente que se trataba de ejecución de sentencia. Se declaró nula la ejecución, con agregación de que el procedimiento á seguirse era el marcado en el tít. XIV, que trata del juicio ejecutivo, pero sin resolver la cuestión de si el abogado puede cobrar sus honorarios del vencido por su cliente, lo que se ha declarado siempre improcedente.

24. Arts. 46, inc. 1ª y 83 del Cód. de Proc. Civ.

25. El ejecutado no tiene otra oportunidad para ser oído en sus defensas, que al ser citado de remate—arts. 485 y 488 del Cód. de Proc.

26. Se mandó dar posesión de un inmueble; el poseedor, que no había sido oído, se opuso; de dicha oposición se dió traslado á la otra parte, la que á su vez formuló excepciones. Se declaró que no procedían, porque no se trataba de una demanda nueva, único caso en que el art. 84 del Cód. de Proc., autoriza esas excepciones dilatorias.



1ª. **Escepción de arraigo**—No procede, si el demandante tiene su domicilio de familia en la jurisdicción del Juez, aun cuando otorgue poder desde país extranjero—Civ., t. 15, pág. 156, Ser. 5ª (tom. 62).

**Escepción de arraigo**—Véase: *Divorcio*, 15.

1b. **Escepción de caducidad**—Debe rechazarse esta escepción por falta de protesto de una letra, si el que la opone es librador ó aceptante—Com., t. 3, p. 169, Ser. 5ª (t. 38).

2ª. **Escepción de caducidad**—No procede, fundada en la falsa causa que dió origen á la obligación—Com., t. 5, pág. 379, Ser. 5ª (t. 40).

1c. **Escepción de compensación**—Es improcedente en la ejecución de sentencia—Civ., t. 19, p. 171, Ser. 5ª, (t. 66).

2b. **Escepción de compensación**—Para que esta escepción pueda prosperar, debe fundarse en deuda líquida y exigible—Civ., t. 21, p. 110, Ser. 5ª (t. 68).

1d. **Escepción de cosa juzgada**—La sentencia que declara prescripto el derecho de acusar por quiebra culpable, no puede fundar la escepción de cosa juzgada en las acciones que por defraudación inicien los acreedores—Crim., tom. 4, pág. 353, Ser. 5ª (t. 39).

---

1a. El art. 85 del Cód. de Proc., no puede referirse á otro domicilio que al establecido por el Cód. Civ., cuyo art. 94 sienta el principio de que si una persona tiene su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio.

1b. El tenedor del documento, siempre conservaría su acción contra el librador ó aceptante, no obstante la falta de protesto—art. 666 del Cód. de Com.

2a. Esta escepción solo procede cuando se omiten las formalidades que el Cód. de Com. exige relativamente á la presentación de las letras y pagarés para su aceptación y pago; ó para el pago solamente, si se tratare de pagarés, protesto y su notificación para conservar expeditas las acciones que el mismo confiere á esa clase de documentos.

1c. Se trataba de la ejecución de los honorarios regulados en una sentencia de trance y remate. A esta resolución el art. 498, le da el carácter de sentencia, y el art. 339 no admite aquella escepción contra la ejecución de sentencia.

2b. Art. 488, inc. 8.º del Cód. de Proc.; 818, 819 y 820 del Cód. Civ.

1d. Véase verb. *Cosa juzgada*, núm. 2.



**2ª. Excepción de cosa juzgada**—Cualesquiera que sean los defectos del procedimiento seguido en el juicio ejecutivo, no pueden fundar una excepción de cosa juzgada, si no reúnen los requisitos esenciales del juicio ordinario—Civ., tom. 18, p. 238, Ser. 5ª (t. 65).

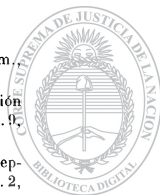
**1. Excepción de defecto legal**—Debe rechazarse si la demanda llena los requisitos de la ley—Com., t. 9, pág. 10, Ser. 3ª (t. 25).

**2ª. Excepción de defecto legal**—Si la demanda llena

2ª. Deducida una demanda ordinaria, el demandado opuso esta excepción, fundándose en que el mismo asunto había sido materia de una sentencia anterior: el actor alegó que dicha excepción no era procedente—art. 95 del Cód. de Proc.—por cuanto el juicio anterior fué ejecutivo; siendo así que juicios de esta naturaleza no producen cosa juzgada—art. 500 del Cód. de Proc.—A su vez el escpcionante replicó que el juicio anterior no había sido ejecutivo sino ordinario, por cuanto en él no se había librado mandamiento, ni hubo citación de remate, trámites esenciales del juicio ejecutivo. Se comprobó la exactitud de estos hechos; pero se demostró asimismo que en dicho juicio se había iniciado un juicio ejecutivo, se había dictado sentencia mandando llevar la ejecución adelante y que no había habido contestación á la demanda, trámite también esencial este último para la existencia de juicio ordinario. La ley 3, tit. 40, Part. 3ª, fijando las reglas con las cuales deben tomar origen los pleitos, dice: «Comenzamiento e raiz de todo pleito, sobre que deve ser dado juyzio, es quando entran en el por demanda é por respuesta, delante del juzgador». Esto debe hacerse, dice esta ley, presentando su demanda el actor de palabra ó por escrito, y respondiendo el demandado lisa y llanamente ó presentando excepciones. Sin litiscontestación no hay pleito ordinario. Como en el caso del sumario no hubo contestación, tampoco hubo juicio ordinario. Habrá habido un juicio ejecutivo irregular en su tramitación pero toda esa irregularidad quedó consentida con el pronunciamiento de la sentencia de trance y remate pasada en autoridad de cosa juzgada. Si el juicio anterior debía considerarse como ejecutivo, la cosa juzgada no existía.

1. La demanda no venía fundada en derecho, lo que constituye defecto legal—art. 71, inc. 5.ª; y 84, inc. 4.º del Cód. de Proc.—Sin embargo la jur. va contra la ley expresa, cuando establece que basta que el derecho surja de los hechos expuestos en la demanda. Es conveniente hacer constar que, la tesis del sumario puede considerarse como una excepción en las innumerables resoluciones de nuestros tribunales.

2ª. Este caso es igual al precedente. «En virtud de la naturaleza de a demanda interpuesta»—decía el fallo—no se considera que ésta sea



los extremos de la ley, debe rechazarse esta escepción—Com., tom. 9, pág. 15, Ser. 3ª (t. 25).

3. **Escepción de defecto legal**—Procede la escepción si la cuenta no contiene el detalle de cada partida—Com., t. 9, pág. 428, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Escepción de defecto legal**—No procede esta escepción, si la demanda espresa claramente su objeto—Com., t. 2, pág. 74, Ser. 5ª (t. 37).

5. **Escepción de defecto legal**—Si la demanda llena los requisitos de la ley, esta escepción es improcedente—Com., tom. 3, p. 69, Ser. 5ª (t. 38).

6. **Escepción de defecto legal**—Si de la exposición de los hechos surge el derecho del demandante, no procede esta excepción—Com., tom. 3, pág. 392, Ser. 5ª (t. 38).

7. **Escepción de defecto legal**—Debe rechazarse, si la demanda reúne los requisitos que la ley estatuye—Civ., t. 9, pág. 339, Ser. 5ª (t. 56).

8. **Escepción de defecto legal**—No procede, si la petición del síndico solo importa un acto de administración—Civ., tom. 11, pág. 47, Ser. 5ª (t. 58).

---

defectuosa en su forma, porque no se haya señalado la disposición de la ley que declara el derecho del actor, desde que éste surge claramente de los mismos hechos que sirven de base á la acción.

3. Véase verb. *Cuenta detallada*, núm. 1.

4. El defecto se hizo consistir en que el actor no acompañó unos títulos de propiedad en que fundaba su derecho, ni mencionó el archivo donde se encontraban. En esta omisión no hay defecto, pues ella tiene su sanción penal en el art. 73 del Cód. de Proc., que no los admite después.

6. Tampoco en este caso se citó la disposición legal en que el actor fundaba su demanda. Véase los núms. 1 y 2.

7. El actor había fundado su demanda en ley, pero el demandado dijo que ese fundamento no era claro.

8. Solicitada por un síndico una medida de administración, se dió audiencia á los acreedores quienes se opusieran á ella: éstos creyeron que se trataba de una demanda en forma, opusieron la excepción, la que fué rechazada por la propia razón de que no se trataba de una demanda.



9. **Excepción de defecto legal**—El que amplía la demanda al contestar esta excepción debe ser condenado en las costas—Civ., tom. 14, pág. 252, Ser. 5ª (t. 61).

10. **Excepción de defecto legal**—Es improcedente si la demanda llena los extremos que la ley exige—Civ., tom. 15, pág. 64, Ser. 5ª (t. 62).

11. **Excepción de defecto legal**—Debe rechazarse, con costas, si se espresan claramente los extremos que la ley exige—Civ., tom. 16, pág. 336, Ser. 5ª (t. 63).

12. **Excepción de defecto legal**—Debe desecharse si de los hechos surge el derecho—Civ., tom. 16, pág. 375, Ser. 5ª (t. 63).

13. **Excepción de defecto legal**—Procede, si la de-

---

9. Por cuanto la modificación ó ampliación de la demanda, después de opuesta la excepción, implica reconocer la razón que asista á la parte para oponerla, siendo así de aplicación el precepto del art. 221 del Cód. de Proc.

12. Es el mismo caso de los núms. 1, 2.

13. Aquí la Cám. vuelve sobre sus pasos consagrando la buena doctrina, que protege al litigante de buena fe. Se dijo que: «la omisión de los requisitos que debe llenar la demanda, según el art. 71 del Cód. de Proc., es lo que autoriza al demandado á oponer la excepción dilatoria de defecto legal. Que entre esos requisitos se encuentra la de exponer los hechos, con claridad y precisión, en que el actor funda su demanda, así como determinar la acción que deduce. Que en el caso *sub judice*, y de acuerdo con la prescripción recordada, debe entenderse que son todas aquellas circunstancias esenciales que pueden influir en la decisión del caso, habilitando al demandado á defenderse con entero conocimiento de causa. Que no exponiendo claramente los hechos y el derecho que de ellos surge, así como no determinando la acción que inicia ni el derecho que le ampara, la excepción de defecto legal es procedente, según lo tiene así resuelto la jurisprudencia, entre otros fallos, véase el tom. 5, pág. 309, Ser. 2ª y tom. 8, pág. 384, Ser. 2ª. Que en el escrito de demanda no se determina la parte que el actor se atribuye en la sociedad que dice existía; tampoco se dice que clase de sociedad era la que habían formado, el aporte de cada uno de los socios y la parte que les correspondía en las ganancias ó pérdidas; por consiguiente, faltando estos fundamentos, el Juzgado no puede estar habilitado para fallar, declarando consocio al actor, y condenando á la sucesión á abonarle su parte, ni el demandado tiene base para fundar su defensa contestando la demanda.»





manda no contiene los requisitos de la ley — Civ., tom. 16, pág. 382, Ser. 5ª (t. 63).

14. **Escepción de defecto legal**—Debe rechazarse, si la demanda llena los requisitos de la ley — Civ., tom. 17, página 374, Ser. 5ª (t. 64).

15. **Escepción de defecto legal**—La falta de presentación de los documentos no puede fundarla — Civ., tom. 18, pág. 132, Ser. 5ª (t. 65).

16. **Escepción de defecto legal** — Debe rechazarse la escepción, si la demanda espresa claramente su objeto—Civ., tom. 19, pág. 13, Ser. 5ª (t. 66).

17. **Escepción de defecto legal**—La falta de cantidad líquida no puede fundarla—Civ., t. 19, p. 29, Ser. 5ª (t. 66).

18. **Escepción de defecto legal**—Debe ser rechazada, si de los hechos espuestos surge el derecho — Civ., tom. 19, pág. 94, Ser. 5ª (t. 66).

19. **Escepción de defecto legal**—Determinándose en la demanda la oficina pública en que existen los títulos, no procede aquélla—Civ., tom. 20, pág. 293, Ser. 5ª (t. 67).

20. **Escepción de defecto legal** — Espresado el objeto de la demanda, debe desecharse la escepción—Civ., tom. 21, pág. 302, Ser. 5ª (t. 68).

---

15. De acuerdo con el verb. *Documentos*, núm. 13.

16. Se dijo que si bien no se citaba el derecho, «ello no es necesario desde que surge de que todo acreedor tiene el de cobrar á su deudor lo que éste le debe».

17. Se demandó el cobro de una suma de dinero que se determinó, debiendo deducirse de ella otra que debían fijar peritos. No podía exigirse del actor la determinación de la suma líquida cobrada, desde el momento que él mismo confesaba no serle posible hacerlo en virtud de que la convención originaria de la obligación, no le daba base para ello. Si tal cosa se exigiera en procedimiento, se imposibilitaría el ejercicio de los derechos.

19. Art 72, última parte, del Cód. de Proc.

20. Se presentó escrito, iniciando un juicio ejecutivo: no habiéndose podido preparar esta vía, se ordinariizó. El actor llenando los requisitos del art. 71, pidió se confiriera traslado de la demanda. Se declaró que la demanda no era defectuosa.



**Excepción de defecto legal**—Véase: *Cosa demandada*, 1; *Costas*, 18.

1<sup>a</sup>. **Excepciones dilatorias**—Opuestas fuera del término, deben ser rechazadas—Com., t. 2, p. 108, S. 3<sup>a</sup> (t. 37).

1<sup>b</sup>. **Excepciones dilatorias**—No pueden oponerse en la prórroga para contestar la demanda—Civ., tom. 18, pág. 107, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 63).

2<sup>a</sup>. **Excepciones dilatorias**—Deben oponerse conjuntamente y en un mismo escrito—Com., tom. 3, pág. 26, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 38).

3. **Excepciones dilatorias**—Si ellas hacen al derecho, deben rechazarse como dilatorias—Civ., tom. 10, pág. 379, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 37).

4. **Excepciones dilatorias**—La falta de acción no puede ser resuelta como excepción dilatoria—Civ., tom. 20, pág. 161, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 67).

**Excepciones dilatorias**—Véase: *Editor*, 2; *Excep. de falta de personería*, 9; *Falta de personería*, 2; *Término extraordinario*, 4.

1<sup>c</sup>. **Excepción de espera**—Debe rechazarse si dependiendo de una condición, el excepcionante no justifica haberla cumplido—Com., tom. 3, pág. 379, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 40).

2<sup>b</sup>. **Excepción de espera**—Debe ser rechazada si se fun-

1<sup>a</sup>. Arts. 83, 84 y 46, inc. 1<sup>o</sup> del Cód. de Proc., y art. 4<sup>o</sup> de la ley número 4428.

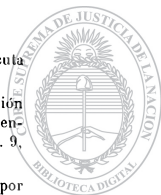
2<sup>a</sup>. Art. 86 del Cód. de Proc. Civ.

3. Se alegó como dilatoria la circunstancia de que el demandado no era deudor del actor. Este carácter depende de la prueba sobre lo principal: no justificándolo termina el juicio rechazándose la demanda, lo que demuestra que la defensa no es dilatoria, art. 84 del Código de Proc.

4. La falta de acción hace al fondo de la cuestión: declarada procedente termina el pleito. La excepción dilatoria, solo produce el efecto de diferir la entrada al juicio, hasta que se llenen ciertos requisitos. Véase la nota núm. 3 precedente.

1<sup>c</sup>. Véase verb. *Condición*, 2.

2<sup>b</sup>. Un convenio celebrado no puede afectar en manera alguna á un



da en hechos anteriores á la fecha de la letra que se ejecuta—Com., tom. 5, pág. 410, Ser. 5ª (t. 40).

3. **Escepción de espera**—La aceptación de la escepción de espera, no obliga el otorgamiento de nuevo título; y vencido el término puede ejecutarse el primitivo—Civ., tom. 9, pág. 71, Ser. 5ª (t. 56).

4. **Escepción de espera**—Solo puede ser probada por instrumento público ó privado, debidamente reconocido en juicio—Civ., tom. 14, pág. 396, Ser. 5ª (t. 61).

5. **Escepción de espera**—La falta de plazo en la obligación no puede fundarla—Civ., t. 16, p. 40, Ser. 5ª (t. 63).

6. **Escepción de espera**—La fijación de intereses por la

---

documento de fecha posterior; á no ser que se compruebe que el convenio se refería á ese documento.

3. Declarada, por sentencia ejecutoriada, procedente esta escepción, y vencido el término, se presentó el acreedor prosiguiendo la ejecución. El deudor volvió á oponerse á ella alegando no haberse otorgado el nuevo documento de obligación. Fué rechazada la escepción por considerarla desprovista de todo fundamento legal.

4. Atendiendo á la naturaleza de la escepción de espera que es en su acepción jurídica «el beneficio de algún plazo que los deudores consiguen de sus acreedores para poder pagar sus deudas»—ley 5ª, tít. 15, part. 5ª—debe necesariamente probarse por documento, ya sea público ó privado, reconocido en juicio. Así lo determinan los arts. 539 del Cód. de Proc. y 676 del Cód. de Com., aplicables por analogía á las escepciones del juicio ejecutivo. Véase art. 1468 de la Ley de Enj. Civ. de España. Se declaró asimismo improcedente la prueba testimonial, por cuanto el documento que se decía la había modificado era por una suma mayor de § 200, art. 1191 á 1193 del Cód. Civ., y 180 del Código de Proc.

5. El ejecutado opuso esta escepción, fundándose en que había celebrado arreglos con el acreedor con motivo de un juicio que había seguido con él. Nada dijo respecto de la exigibilidad del título: tampoco comprobó la escepción de espera, como era de su deber. Por consiguiente, la falta de plazo en la obligación no podía enervar su carácter ejecutivo, desde que no se alegó esta deficiencia del título. Influyó en el ánimo de la Cám., para darle carácter ejecutivo á la obligación, la circunstancia de haber sido otorgado hacía ya cuatro años, cuando se inició la ejecución.

6. Iniciada una ejecución hipotecaria, el demandado dijo que había

falta de pago en época determinada, no puede fundar una

comprado del actor entregando al contado la mitad del precio, y obligándose á pagar la otra mitad al plazo de un año, con garantía hipotecaria del mismo bien y bajo la condición de que si no abonaba el saldo dentro de dicho plazo, debería pagar al acreedor el interés de Banco; que dadas estas circunstancias, no era exigible el crédito, como documento de plazo vencido, desde que facultaba la designación, por parte del juez, del plazo en que la obligación debía cumplirse, pues de los términos mismos de la escritura se deducía claramente que la intención de las partes no era propiamente hacer exigible la obligación al vencimiento del año estipulado. El actor pidió el rechazo de la excepción, por considerar inaplicable al caso la prescripción de los artículos 618 del Cód. Civ., y 448, incs. 4º y 9º del de Proc., invocados por el demandado, aparte de ser falsos los hechos alegados, sosteniendo que el interés del Banco, establecido en la obligación, era un interés punitivo, previendo la circunstancia de que el deudor incurriese en mora, no cumpliendo en el término del año convenido como plazo para el pago. El documento decía así: «el saldo de igual suma que integra la totalidad se los abonará el comprador dentro del término de un año, contado desde hoy, quedando gravada con hipoteca en garantía de este crédito la misma propiedad que por ésta se enajena. Es además convenido entre los contratantes que si el demandado no efectuase el pago del saldo que adeuda dentro del plazo dicho, abonará el interés que cobre el Banco de la Provincia». Otra cláusula complementaria decía: «que estaba conforme, obligándose en consecuencia á abonar el saldo de precio que adeuda, dentro del plazo de un año de la fecha, á cuya seguridad queda gravado con hipoteca el mismo inmueble que adquiere, etc.» De estas transcripciones precedentes, se desprende claramente que lo que se estableció en la escritura fué pura y simplemente una obligación á plazo cierto para el ejecutado, con relación al saldo de precio que quedaba debiendo—artículo 367 del Cód. Civ.—sin que sus términos autoricen á afirmar que en ellos se contiene una convención ó estipulación de espera. La cláusula en que se habla de los intereses, no importa, ni puede importar una espera. Ella no tiene otro alcance que el de fijar de antemano el tipo de los intereses punitivos que debía pagar el deudor, ó sea el ejecutado en caso de incurrir en mora, art. 508 del Cod. Civ. No es lógico suponer que la mente de las partes fué convenir en una espera al establecer la cláusula sobre intereses. La espera presupone un plazo vencido, mientras que el señalado en la escritura recién iba á empezar á correr. Un deudor que se halla en la imposibilidad de pagar sus deudas en la época en que éstas se hacen exigibles, pide espera á sus acreedores para que le concedan un plazo para poder hacer el pago de sus créditos.—Escriche, *verbo* «Espera».





excepción de espera por tiempo indefinido — Civ., tom. 16, pág. 54, Ser. 5ª (t. 63).

**7. Excepción de espera—Para fundarla basta la pre-**

7. Para enervar la acción ejecutiva de un crédito hipotecario se presentó un documento privado que acordaba la espera alegada. El juez fué de opinión que el documento privado no era bastante por cuanto el art. 1184, incs. 1.º y 10 del Cód. Civ., requerían documento público al efecto. La Cám. revocó la sentencia, por cuanto la prórroga del plazo, no es un acto accesorio del contrato de mutuo ó préstamo redactado originariamente en escritura pública, y aun siéndolo, su constatación en forma privada dejaría de producir efectos jurídicos, en todo caso, contra terceros, pero en manera alguna entre los contratantes, con arreglo á las prescripciones de los arts. 996 y 1194. El error proviene de considerar como un solo acto jurídico el préstamo y la hipoteca constituida para garantirlo, cuando en realidad son dos actos perfectamente separables y subordinados, en cuanto á su fondo y forma á reglas diversas. El préstamo puede válidamente celebrarse en forma privada — art. 2246 — y privadamente pudo también constituirse una fianza en su favor — art. 2006. — La circunstancia de haberse afianzado con hipoteca, obligaba á otorgar ésta por escritura pública, sin que por ello fuera obligatorio adoptar igual forma para el préstamo, desde que pudo celebrarse independientemente en la forma legal que correspondiera, según su monto — art. 3128. — Ahora bien, la prórroga no se relaciona con la hipoteca, sino con el contrato de préstamo, y nada se oponía entonces á que se hiciera constar por escritura privada, esto es, en la misma forma en que pudo otorgarse el préstamo mismo. Con ó sin prórroga del plazo para el pago de la obligación principal, y de que la hipoteca solo es un accesorio, la hipoteca queda incólume, garantiendo con igual eficacia, y por el término de diez años, el cumplimiento de aquella obligación — arts. 3151, 3155 y 3187. — Aun cuando la ley hubiera exigido que el préstamo y la hipoteca se constituyeran en un solo acto y por instrumento público, no por eso podría sostenerse que las modificaciones posteriores que las partes introdujeran á las convenciones estipuladas, deberían consignarse igualmente por escritura pública, so pena de nulidad, porque el inc. 10 del art. 1184, en que pudiera apoyarse esta doctrina, tendría su aplicación en las obligaciones accesorias determinadas en el art. 524, que no comprende las alteraciones ó modificaciones de las obligaciones principales. Por otra parte, si una obligación consignada en escritura pública, no pudiera alterarse ó modificarse sino por otra escritura pública, ni aun con efecto limitado á las partes, ¿á qué quedaría reducido el art. 996 que expresamente consagra esa facultad? Sencillamente, á letra muerta, y esto basta para demostrar cuán errónea es la interpretación y alcance que se quiere atribuir al citado inc. 10 del art. 1184.



sentación de documento privado, sin que sea necesaria la escritura pública, aun cuando en esa forma conste la deuda—Civ., tom. 17, pág. 184, Ser. 5ª (t. 64).

8. **Excepción de espera**—Solo puede ser probada por documento que expresamente consigne el hecho—Civ., t. 20, pág. 47, Ser. 5ª (t. 67).

9. **Excepción de espera**—Solo puede justificarse por escritura pública, si el crédito y el plazo tienen esa forma—Civ., tom. 20, pág. 109, Ser. 5ª (t. 67).

**Excepción de espera**—Véase: *Documento público*, 1.

1. **Excepción de falsedad**—Fundada en la simulación, no es admisible en el juicio ejecutivo—Civ., tom. 14, p. 372, Ser. 5ª (tom. 61).

2. **Excepción de falsedad**—La sustitución otorgada con un poder vigente, no puede fundarla—Com., tom. 1, p. 383, Ser. 5ª (t. 36).

2<sup>b</sup>. **Excepción de falsedad**—Del pagaré, por representar

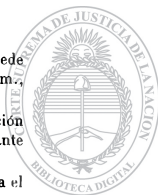
8. Se trataba de la ejecución de una sentencia, en cuyo caso, el art. 539 exige, para que la espera sea viable, que la prueba se haga «precisamente por documentos que se acompañarán al deducir la excepción, con exclusión de todo otro medio probatorio».

9. El Juez dijo: «tratándose de obligación consagrada en escritura pública, cualquiera modificación debe redactarse lo mismo»—art. 1184 del Cód. Civ.—La Cám. confirmó la sentencia «por sus fundamentos».—Véase en contra el núm. 7.

1. El esceptonante no produjo prueba alguna, tendiente á comprobar la simulación.

2. La excepción de falsedad se refiere al título con que se inicia la ejecución. La opuesta por el ejecutado, no se refería á lo substancial del título, sino á la falta de personería en el apoderado sustituido, en el momento de instaurar la acción. Se dijo que el poder del sustituyente había caducado por fallecimiento de uno de los socios que lo otorgaron. De acuerdo con el art. 1982 del Cód. Civ., y porque el mandato fué verificado por el sucesor del causante.

2<sup>b</sup>. El art. 212 del Cód. de Com., así lo establece. Comentando el Dr. Segovia este artículo, en su nota 778, explica con toda exactitud el alcance de esa disposición legal, cuando dice: «En toda obligación, la simple falta de expresión de la causa y la expresión misma de una causa falsa, con tal que haya una causa verdadera, no anula la deuda»



una obligación sin causa, como excepción personal, no puede prosperar, si se opone al tercero tenedor de buena fe—Com., tom. 1, pág. 392, Ser. 5ª (t. 36).

**3. Excepción de falsedad**—La prueba de esta excepción por ser sin causa la obligación, corresponde al esceptonante—Com., tom. 2, pág. 26, Ser. 5ª (tom. 37).

**4. Excepción de falsedad**—Si la sentencia ordenaba el pago de lo que determinasen peritos, procede la excepción, por el excedente de la tasación sobre lo pedido en la demanda—Com., tom. 2, pág. 181, Ser. 5ª (tom. 37).

**5. Excepción de falsedad**—Debe ser desechada si se re-

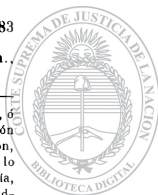
---

—Cód. Civ., arts. 500 á 512. — De modo, que para que la defensa constituya una disposición peculiar á los documentos endosables, debe entenderse como *que ni aun la falta absoluta de causa* puede oponerse al tercero de buena fe—Massé, tom. 3, núm. 564—agrega: «Esto no es más que la consecuencia del principio que el portador de buena fe no es pasible jamás de las excepciones personales de los endosantes anteriores». Los arts. 602 y 736, inc. 2ª, del mismo Cód. de Com., confirman la doctrina expuesta en cuanto se refiere á las letras de cambio, cuyas disposiciones se aplican también á los documentos á la orden, como el que dió lugar á la ejecución de que se trata—art. 740.

3. En virtud del principio de procedimiento, que el reo en la excepción se hace actor; siendo de derecho que al actor incumbe la prueba. Además debe tenerse presente, que todo aquel que alega un hecho nuevo en juicio debe comprobarlo.

4. El precio fijado por los peritos no podía, en ningún caso, exceder de la suma reclama por el actor, porque de otro modo se violaría la regla de que la sentencia no puede condenar á más de lo pedido en la demanda—art. 216, Cód. de Proc., y ley 16, tít. 22, part. 3ª, con la glosa de Gregorio López.—Ahora bien, la tasación efectuada tiene que considerarse como la suma á que condena la sentencia misma, y desde que ésta no podía fijar cantidad mayor que la reclamada, es evidente que si la fijación excede de ella, debe reducirse á los límites en que es permitida la condenación por el juez. De la diligencia pericial resultó que no había exageración en los precios asignados por el actor, y que por el contrario eran reducidos: el importe reclamado en la demanda es la verdadera suma que se puede ejecutar en virtud de la sentencia respectiva.

5. Se trataba de la ejecución de un papel de comercio, para el que rige los arts. 676 y 741 del Cód. de Com. «La excepción de falsedad, admitida por aquel art., se refiere á lo sustancial del título con



fiere exclusivamente á la falsa causa de la obligación—Com. tom. 3, pág. 81, Ser. 5ª (tom. 38).

que se ejecuta, ya sea que el contenido del documento sea falso, ó que la firma no sea auténtica. El ejecutado no fundó esta excepción en ninguna de estas causales, sino en la falsa causa de la obligación, por ser el documento firmado por complacencia para el ejecutante lo descontase en un banco, y por este medio conseguir dinero. Reconocía, por lo tanto, la autenticidad del documento. Esta excepción no es admisible en el juicio ejecutivo, pudiendo dar motivo á un juicio ordinario para repetir lo que haya pagado indebidamente en caso se pruebe la falsa causa de la obligación». Así decía uno de los camaristas. Otro dijo: «La excepción de falsedad es admisible según la disposición del citado art. 676. Para decidir si es procedente, es necesario examinar los hechos en que se funda y las relaciones jurídicas que de ellos puedan resultar entre el actor y el ejecutado. Se sostiene que es falsa la designación de *valor recibido*, hecha en la letra, y que ha sido una aceptación de mero favor ó complacencia que no representaba ninguna obligación por parte del aceptante. Si la letra que motiva esta ejecución hubiese sido endosada por la persona á cuyo favor se otorgó, no sería procedente la excepción, por cuanto, aun en el caso de probarla, el aceptante estaría obligado á pagar su importe al endosatario de buena fe, pero en el caso presente el actor es la misma persona á cuya orden ha sido girada la letra; no se ha hecho respecto de ella ningún endoso ni operación bancaria, y desde luego, es procedente la excepción de falsedad opuesta por el ejecutado. Tal es la doctrina que resulta bien clara del Cód. de Com., de conformidad con los principios generales de derecho y con la opinión de los autores. «Las firmas de favor—dice Vidari, núm. 6736—pueden darse tanto en el carácter de girante ó de emisor como en el de aceptante, etc. Pero, mientras que el que así se obliga tiene que satisfacer la deuda al acreedor cambiario, extraño á ese juego, entre el que obtiene la firma, y el que la da, no surge ningún vínculo cambiario, porque falta la causa de la obligación y conoce el tenedor el juego ó la falta de fundamento de sus relaciones jurídicas». Y agrega el mismo autor—núm. 736, párraf. 2—después de establecer la procedencia de tal excepción con cargo de su prueba al que la opone, que «lo mismo corresponde en las firmas de favor siempre que se trate de las relaciones directas entre quien dió y quien recibió la firma, y que tales personas sean actualmente el actor y el ejecutado, porque respecto de las personas que han quedado extrañas á tales acuerdos, el que firmó por favor está siempre igualmente obligado». A mi juicio, la excepción de falsedad es procedente, pero el ejecutado debía probar los hechos en que la fundaba, y la prueba producida no es suficiente, aunque existan algunas presunciones resultantes de las posiciones y de una declaración. No habiéndose probado la excep-





6. **Excepción de falsedad**—Improbada la de la letra de cambio por carecer de causa la obligación, procede su rechazo—Com., tom. 3, pág. 264, Ser. 5ª (tom. 38).

7. **Excepción de falsedad**—Fundada en la causa de la obligación, es improcedente en los documentos transmisibles por endoso, si los ejecuta un tercero—Com., tom. 5, pág. 149, Ser. 5ª (t. 40).

8. **Excepción de falsedad**—Debe declararse improcedente la ejecución, si se justifica esta excepción—Com., t. 5, pág. 337, Ser. 5ª (t. 40).

9. **Excepción de falsedad**—Deben rechazarse las excepciones de falsedad é inhabilidad del título, si se fundan en la

ción opuesta, voto por la negativa». Esta última es la verdadera doctrina; la que nosotros hemos sostenido siempre. Véase Inst., t. 5, verb. *Excepción de falsedad*, 1; y *Excepción de inhabilidad de título*. t. 7, verb. *Inhabilidad de título*, 4.

6. Aquí el ejecutado no comprobó la falsedad de la causa de la obligación. Tanto el juez como la Cám. establecieron, que aun cuando fuese procedente esta excepción fundada en la falsa causa de la obligación, la defensa tendría siempre que rechazarse por cuanto no fué comprobada en autos.

7. Es el mismo caso del sumario precedente—arts. 212, 602 y 736 del Cód. de Com.

8. La falsedad se refería á enmendaduras y agregaciones que se hicieron al documento, las que fueron comprobadas en forma.

9. La Mun. demandó ejecutivamente á una empresa de tranvías por multas aplicadas. Citada de remate, la empresa opuso la excepción de inhabilidad del título. Servían de base de la ejecución las boletas visadas sobre imposición de multas y con el visto bueno del intendente. El art. 64 de la ley org. Mun. dice así: «El cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales, se hará efectivo por la vía de apremio judicial, sirviendo de título suficiente para la ejecución, la boleta respectiva, con el visto bueno del intendente municipal». Las boletas llevaban todas el visto bueno del intendente, luego ellas traen aparejada ejecución. Se suscitó la duda de si el importe que se cobraba en las boletas importaba un impuesto ó recurso municipal, pero toda vacilación desaparece en presencia del art. 65 de la ley org. que dice: «Se declaran impuestos y rentas municipales: inc. 15, el producido de los derechos de oficina y el de las multas establecidas por esta ley y por las ordenanzas municipales». Las multas son impuestos y rentas municipales, pues, según esta ley.

inexistencia de causa de la obligación—Civ., tom. 9, p. 76, Ser. 5ª (t. 56).

#### 10. **Excepción de falsedad**—Procede esta excepción con-

10. Nombrado rematador en la ejecución de una sentencia de trance y remate, éste no se realizó por falta de licitadores. La propiedad fué adjudicada al ejecutante por las dos terceras partes de la tasación. El martillero se presentó pidiendo que se declarara de legítimo abono la cuenta que presentaba. Corrido traslado de esta petición el ejecutante sostuvo no estar obligado á pagar dicha cuenta, fundándose en que la ejecutoria que servía de base al procedimiento, no contenía condenación ni determinaba quien era la persona obligada á abonar el crédito del martillero, por cuya circunstancia había falsedad intrínseca en la ejecutoria, pues carecía de este elemento substancial, que debía contener toda sentencia, según disposiciones del Cód. de Proc. La cuenta fué declarada de legítimo abono: el auto quedó ejecutoriado. No obstante esto el acreedor opuso la excepción de falsedad de la ejecutoria. Tanto por la doctrina, como por los precedentes judiciales, se ha establecido ya el carácter, ó más bien dicho, el alcance que tiene esta excepción. La falsedad de la ejecutoria no está circunscripta á las adulteraciones materiales ó falsificaciones de la sentencia, sino también á todos aquellos defectos que la nulifican ante la ley, y que, por consiguiente, le prestan su eficacia ejecutoria. El ilustrado Dr. González Garraño, cuya autoridad y nombre me complace recordar, después de admitir la falsedad de la ejecutoria por no contenerse en ella las solemnidades que la ley requiere para que una sentencia tenga fuerza ejecutiva, dice textualmente lo siguiente: «Estos últimos autores—refiriéndose á Manresa, Miguel y Reus,—expresan que no solo en los casos de las leyes de Partida puede ser redarguido de criminalmente falso un documento, sino también en cualquier otro en que se haya cometido falsedad en un documento público ó privado, y que, con más razón y lógica cualquier documento puede ser redarguido de civilmente falso, enunciando entre las causales la de no haberse observado todas las solemnidades y circunstancias exigidas por las leyes en su formación. La doctrina profesada por prácticos tan renombrados, demuestra que la excepción de falsedad no tiene el único alcance que se le atribuye. Ella, además de las adulteraciones materiales ó falsificaciones en la sentencia ó laudo comprende los casos que quedan expresados».—Fallos de la Cám. de lo Civ., t. 6, p. 431 y siguientes, Ser. 1ª; Caravantes, t. 3, número 1200.—Ahora bien: aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, la excepción es procedente porque la ejecutoria que le sirve de base adolece de vicios que la hacen legalmente ineficaz para tener fuerza ejecutiva, contra el ejecutado. Después se promueve esta ejecución, sin que en el título conste quien sea la persona obligada, no obstante tratarse de un punto que era materia de un pleito; pero que está aun pen-





tra la ejecución de una sentencia, si ella no determina expresamente que el ejecutado está obligado á la prestación que impone—Civ., tom. 10, pág. 43, Ser. 5ª (t. 37).

**11. Excepción de falsedad.**—Aun cuando se oponga esta excepción á la ejecución de una sentencia, debe rechazarse, si los hechos en que se funda no pueden dar margen á ese calificativo—Civ., tom. 12, pág. 92, Ser. 5ª (t. 39).

**12. Excepción de falsedad.**—Solo puede referirse al tí-

diente de resolución por no haber sido definido en la ejecutoria. En este juicio no se trataba de un crédito reconocido que traía aparejada ejecución. El actor hoy ejecutado no había reconocido el crédito; por el contrario, desconoció, manifestando que no se considera deudor del actor, fundándose en las consideraciones apuntadas. Desde que en el título de la ejecución no se expresa quién sea el obligado á satisfacer el crédito declarado de legítimo abono, él no podía servir de base á la ejecutoria.

11. La excepción la hacía fundar el ejecutado en que de la suma que se le había condenado á pagar, debía descontarse el importe de una cuenta proveniente de gastos que le adeudaba el ejecutante. Estos hechos solo podían fundar la excepción de compensación, no admitida por el art. 539 del Cód. de Proc.

12. Gestionado el cobro de afirmados, el ejecutado opuso la falsedad del título, fundándose en que el afirmado no había sido construído con arreglo á las condiciones convenidas con la Mun. Ésta se había recibido de las obras, en cuyo caso, sus deficiencias solo pueden autorizar el ejercicio de acciones distintas para exigir su reparación, pero no la de falsedad establecida para casos muy distintos. Las cuentas estaban visadas por la Mun. de acuerdo con el art. 5.º de la ley de 1.º de Oct. de 1888. Como la Cám. tiene establecido, la excepción de falsedad que autoriza el art. 488, inc. 4.º del Cód. de Proc., se refiere al título con que se pide la ejecución, que no es según aquel Tribunal la de falsa causa de la obligación. Un instrumento público ó privado puede revestir todas las formas requeridas por la ley para que lleve aparejada ejecución, y contener no obstante, una obligación sin causa ó con falsa causa; y á la inversa, un crédito por una suma de dinero puede existir válidamente en cuanto á la causa de la obligación de pagar, y no obstante, no ser cobrable ejecutivamente. Son cosas muy diferentes, la falsedad del título ejecutivo, que es el documento; y la falsedad de la obligación. La primera se refiere á las formas externas del documento en que se funda la ejecución, y la segunda se refiere á la ineficacia de la obligación misma. No habiéndose redarguido de falsas las cuentas y habiéndose reconocido, por el contrario, su autenticidad, la excepción de falsedad no procedía. Compárese con el núm. 10.



tulo con que se ejecuta; la falsedad de la causa no puede ser tenida en consideración—Civ., tom. 16, pág. 83, S. 5ª (t. 63).

13. **Escepción de falsedad**—Aun cuando se justifique el fallecimiento del mandante con fecha anterior á la aceptación de la letra por el mandatario, la escepción no puede prosperar, si no se justifica que éste conocía la cesación del mandato—Civ., tom., 19, pág. 135, Ser. 5ª (t. 66).

**Escepción de falsedad**—Véase: *Cláusula expresa*, 1; *Endoso irregular*, 1; *Adulteración*, 1.

1. **Escepción de falta de personería**—Procede si el indicado como representante del demandado niega su carácter de mandatario—Com., tom. 9, pág. 62, Ser. 3ª (t. 25).

1ª. **Escepción de falta de personería**—La personería jurídica de las sociedades anónimas solo cesa por resolución en forma; las condiciones que pudieran fundar tal declaración, no bastan para hacer prosperar la escepción—Com., tom. 1, pág. 227, Ser. 5ª (t. 36).

2. **Escepción de falta de personería**—Es procedente

13. El fallecimiento tuvo lugar en Córdoba, horas antes de firmarse la obligación en la Cap. federal. Aun en la hipótesis de que se hubiera tenido noticia de aquel acontecimiento, y por consiguiente de la cesación de mandato, esto debe probarse para eximirse á la sucesión de las responsabilidades que establecen los arts. 1966 y 1967 del Cód. Civ.

1. El pretendido apoderado negó la representación que se le atribuía, y el actor no lo desconoció al evacuarse el traslado de la escepción—art. 84, inc. 2.º del Cód. de Proc.

1ª. Si bien la escepción opuesta se refería á la falta de personería de una sociedad anónima que era la demandante, no en la de su apoderado, hecho en que se fundaba era la imposibilidad de llenar el fin para que fué creada; esto no puede autorizarla, aunque sea suficiente por la ley para resolver la disolución ó retirar la autorización gubernativa, esencial para su existencia. El hecho en que se fundaba la escepción opuesta debía resultar demostrado del modo que establece el art. 370, Cód. de Com. La existencia y capacidad de las personas jurídicas continúa hasta que su fin haya sido declarado, con sujeción al art. 48, Cód. Civ., con el cual concuerda el 370 cit.

2. Al endoso le faltaba el requisito exigido por el inc. 5.º del art. 626 del Cód. de Com., no siendo título bastante para transmitir la propiedad del pagaré—art. 629 *ibid*.



si el pagaré ha sido endosado por quien carecía de poder para ello—Com., tom. 9, p. 130, Ser. 3ª (t. 25).

3. **Excepción de falta de personería**—El protesto ó nombre del ejecutante hace inadmisibles esta excepción—Com., tom. 9, pág. 247, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Excepción de falta de personería**—Es improcedente, si el mandante ratifica todos los actos del mandatario, cualesquiera que fueren las deficiencias del mandato—Com., tom. 1, pág. 5, Ser. 5ª (t. 36).

5. **Excepción de falta de personería**—El fallecimiento de uno de los socios, no anula los poderes conferidos á nombre de la razón social, y no puede, en consecuencia, hacer viable la excepción de falta de personería—Com., tom. 1, pág. 385, Ser. 5ª (tom. 36).

6. **Excepción de falta de personería**—Es improcedente, si ella se funda en la falta de derecho—Com., tom. 2, pág. 96. Ser. 5ª (tom. 37).

7. **Excepción de falta de personería**—En el demandado, como dilatoria que es, debe rechazarse si ella se refiere al fondo de la acción—Com., t. 2, pág. 98, Ser. 5ª (t. 37).

8. **Excepción de falta de personería**—Fundada en la

4. El poder en cuya virtud se presentó en un principio el apoderado, se ratificó por un nuevo mandato general y por un escrito presentado por el mandante. Esta ratificación puede hacerse, de acuerdo con la Jur.—Véase Instr., tom. 8, verb. *Mandato*, 4; *Nulidad*, 4; y *Excepción de falta de personería*, 25.—El verdadero alcance de la ratificación lo hemos dejado establecido en el verb. *Nulidad del procedimiento*, 9, del tom. 8. En contra, véase verb. *Nulidad*, 4, de este mismo tom. de la Instr., cuya nota combate la doctrina sentada en el presente sumario.

5. Véase la nota del verb. *Excepción de falsedad*, 1.

6. El escepcionante fundó su defensa en la falta de derecho del demandante para exigirle rendición de cuentas, por no existir contrato escrito de sociedad. Esta defensa hace al fondo de la causa, mientras que la excepción dilatoria de falta de personería, solo puede fundarse en la falta de capacidad legal para estar en juicio.

8. La doctrina y la jurisprudencia han dejado plenamente establecido, el de que la excepción de falta de personería para que pueda ser opuesta en forma de art. dilatorio, debe referirse á la incapacidad personal de la parte para estar en juicio, por sí ó por otro, ó en la



falta de derecho, debe desecharse, si se opone como dilatoria—Com., tom. 2, pág. 169, Ser. 5ª (t. 37).

9. **Escepción de falta de personería**—Del editor de la publicación, por no ser el autor, es improcedente como dilatoria—Crim., tom. 5, pág. 244, Ser. 5ª (t. 40).

10. **Escepción de falta de personería**—Debe rechazarse, si ella se opone á la ejecución de un pagaré otorgado á favor de la testamentaria, si por la declaratoria se justifica que los ejecutantes son los herederos del causante—Civ., t. 9, pág. 269, Ser. 5ª (t. 56).

11. **Escepción de falta de personería**—Es procedente

---

falta ó defectos de la procuración del apoderado del actor, ó demandado—ley 1ª, tit. 3º, Part. 3ª; Esteves Sagui, Tratado de Proc., núms. 237 y 238; Malaver, núms. 266 y 627; y Caravantes, núm. 607, y Fallos de esta Cám. que se registran en el tom. 4º, pág. 175 y 185, Ser. 4ª.—En el caso que nos ocupa, no se trataba de discutir la capacidad ó incapacidad del demandado para estar en juicio, sino que sin desconocérsele su carácter de persona *sui juris*, se le demandaba con el fin de hacer efectivas en él responsabilidades que el actor sostenía incumbirle personalmente. Uno de los hechos que servían de fundamento á la demanda, era precisamente el de que era ó había sido miembro del directorio ó administración de una sociedad, y en tal caso, si se hubiera de resolver por art. de previo pronunciamiento, si efectivamente tenía ó no tal cualidad, se habría decidido un punto capital del litigio, que afectaría fundamentalmente al derecho invocado por el actor, sin los trámites y discusiones prescriptas por la ley para la decisión definitiva del litigio. No puede decirse que sea indiferente para el actor la eliminación previa del excepcionante por el hecho de quedar solidariamente obligadas otras personas, pues el número y responsabilidad efectiva de los obligados, no puede menos de interesar á la eficacia de los derechos del acreedor, sobre todo si se tiene en cuenta que los demás demandados pueden alegar causas legales de exclusión de la solidaridad, ó en fin, cualquiera otra escepción perentoria que destruya toda vinculación jurídica respecto del actor.

9. Véase el verb. *Editor*, núm. 2.

10. Los herederos continúan la persona del causante—art. 3417 del Cód. Civ.

11. Aquí se juzga de esta escepción como perentoria por tratarse de un juicio ejecutivo, en el que nada importa que la escepción tenga uno ú otro carácter, pues en definitiva, solo puede resolverse ordenando que se lleve ó no la ejecución adelante. El ejecutante se había



en la ejecución por honorarios, si por convenio el ejecutante se comprometió á no cobrarlos—Civ., tom. 9, pág. 308, Ser. 5ª (t. 56).

**12. Excepción de falta de personería**—Esta excepción, por ser casada la demandada, debe justificarse para que se declare procedente—Civ., tom. 12, pág. 437, Ser. 5ª (tom. 59).

**13. Excepción de falta de personería**—La presentación de nuevo poder importa reconocer la procedencia de la excepción; las costas deben ser á cargo del demandante—Civ., tom. 13, pág. 274, Ser. 5ª (t. 60).

**14. Excepción de falta de personería**—Es improcedente si se funda en la falta de derecho—Civ., tom. 15, pág. 66, Ser. 5ª (t. 62).

**15. Excepción de falta de personería**—El término de prueba no puede exceder de veinte días—Civ., tom. 15, pág. 84, Ser. 5ª (t. 62).

**16. Excepción de falta de personería**—El directa-

comprometido á no cobrar honorarios, sino en el caso de que sus gestiones tuvieran éxito. Como dichas gestiones fueran negativas, se declaró que no procedía la ejecución en virtud del compromiso contraído.

12. El escepcionante debe comprobar su excepción, en virtud del principio de que el que demanda, en la excepción se hace actor—ley 8, tít. 3º, Part. 3ª.

13. La presentación del nuevo poder implica reconocer la insuficiencia del anterior, siendo de toda justicia la imposición de las costas. Véase de acuerdo con el sumario, tom. 105, p. 298; t. 37, p. 84; t. 61, p. 252; t. 35, p. 54. En contra, tom. 107, p. 376.

14. Ya se ha visto que esta excepción solo puede basarse en razones de forma, que hagan inhábiles los pedidos ó representaciones invocadas por el que demanda, y no en razones de fondo que importen una negación del derecho mismo, *sine actione agis*.

15. Arts. 89 y 111 del Cód. de Proc. Civ.

16. Demandada una persona, opuso la excepción de falta de personería en él mismo, por cuanto el contrato que motivó la demanda había sido celebrado con una sociedad de la que él era gerente, sosteniendo que la acción debía dirigirse contra la sociedad. Es claro que esta defensa hace al fondo de la cuestión, pues resuelta en sentido favorable para el demandado, terminaría el pleito. Se ha visto ya que estas defensas no pueden oponerse como dilatorias.



mente demandado, no puede oponerla, fundado en su carácter de gerente—Civ., tom. 15, pág. 87, Ser. 5ª (t. 62).

17. **Escepción de falta de personería**—Justificada la defunción del marido, debe desecharse esta escepción opuesta á la viuda—Civ., tom. 15, pág. 180, Ser. 5ª (t. 62).

18. **Escepción de falta de personería**—Si la opuesta como previa se refiere al fondo, debe ser rechazada—Civ., tom. 17, pág. 368, Ser. 5ª (t. 64).

19. **Escepción de falta de personería**—La inexistencia de testamentaria no puede fundar esta escepción en los herederos demandados personalmente—Civ., tom. 17, pág. 374, Ser. 5ª (t. 64).

20. **Escepción de falta de personería**—Reconocido el carácter de propietario y locador del demandante, no puede prosperar esta escepción en el juicio por cobro de alquileres—Civ., tom. 19, pág. 161, Ser. 5ª (t. 66).

21. **Escepción de falta de personería**—Aun cuando el ejecutado no sea obligado á pagar la cantidad que espresa el título, esta escepción es improcedente—Civ., tom. 19, pág. 163, Ser. 5ª (t. 66).

22. **Escepción de falta de personería**—Solo es procedente, si existe incapacidad en el demandante ó demandado—Civ., tom. 19, pág. 369, Ser. 5ª (tom. 66).

23. **Escepción de falta de personería**—Es procedente

17. El art. 83 de la ley de mat. civ. dice que «mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente ó desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto».

18. Véase los núms. 14 y 16.

19. No se alegó la incapacidad de los herederos para estar en juicio, única causa fundamento legal de esta escepción.

21. Porque la falta de personería no hace al fondo del juicio, mientras que el hecho de no ser el ejecutado el deudor de la obligación que se ejecuta, se relaciona con el fondo. Una defensa de forma, no puede emplearse para hacer valer una de fondo.

22. Véase los números 14, 16 y 19.

23. En este sumario se confunde la falta de acción con la falta de personería. Del hecho de no ser el ejecutado propietario del inmueble empedrado, no se desprende que carezca de personería. En el caso del





en el ejecutado, si el pago de las cuentas de afirmados se intimó al que no es propietario del inmueble—Civ., tom. 20, pág. 113, Ser. 5ª (t. 67).

**24. Excepción de falta de personería**—En el ejecutado ó ejecutado no es aceptable, si no se alega la falta de capacidad civil—Civ., tom. 20, pág. 396, Ser. 5ª (tom. 67).

**25. Excepción de falta de personería**—La ratificación equivale al mandato, y en consecuencia, después de producida, debe rechazarse la excepción de falta de personería, aun cuando fuera procedente cuando fué opuesta—Civ., tom. 22, pág. 353, Ser. 5ª (tom. 69).

**26. Excepción de falta de personería**—La presenta-

sumario, el ejecutado fundó la excepción en que él no era el deudor del empedrado sino su esposa, que había dejado sucesores que tenían sus representantes en el juicio sucesorio y que era contra la sucesión que debía entenderse la ejecución. Como se ve, se opuso como excepción de falta de personería, la de falta de acción que hace al fondo. Sin embargo, la Cám. dijo: «Que la excepción de falta de personalidad opuesta se halla debidamente justificada en autos, en cuyo caso, se impone el rechazo de la ejecución». Puede escusarse esta confusión, teniendo en cuenta la circunstancia de tratarse de un juicio ejecutivo, en el que cualquiera que sea la naturaleza de la excepción, siempre produce el mismo resultado en la sentencia.

24. Se trataba de un juicio ejecutivo, cuyo art. 488 autoriza en el inc. 2.º esta excepción, la que se refiere exclusivamente á la que resulta de la incapacidad de los litigantes para estar en juicio, ó á la insuficiencia del mandato convencional ó legal de las personas que los representan. Esta excepción es la misma autorizada como excepción dilatoria en el juicio ordinario. Véase Caravantes, t. 3, párr. 1231; Manresa y Reus, t. 4, comentario al art. 963 de la ley española.

25. Véase los núms. 4 y 13. El poder insuficiente fué cubierto por otra escritura de mandato para salvar las deficiencias de la anterior. Esta nueva escritura pública, importa una verdadera ratificación y tiene la misma importancia que el mandato con efecto retroactivo al día del acto, sin que los terceros puedan oponer el exceso ó inobservancia del mandato, una vez que el mandante haya ratificado ó quiera ratificar lo que hubiese hecho el mandatario—arts. 1936 y 1937 del Cód. Civ.

26. Un poder insuficiente fué completado por una segunda escritura de mandato que carecía de la deficiencia del anterior. Véase la nota precedente.



ción de poder en forma después de opuesta esta escepción, basta para rechazarla—Civ., tom. 22, p. 358, Ser. 5ª (t. 69).

**27. Escepción de falta de personería**—La escepción de falta de personería en el demandado por interdicto, solo puede fundarse en la incapacidad; la negación de propiedad no impide entrar al juicio—Civ. t. 22, p. 453, Ser. 5ª (t. 69).

**Escepción de falta de personería**—Véase: *Contrato privado*, 1; *Endoso*, 7; *Afirmado*, 1; *Comunero*, 1; *Esposo*, 3; *Caducidad*, 2; *Cesión de derecho*, 1.

**1ª. Escepciones inadmisibles**—Deben rechazarse sin prueba las escepciones inadmisibles en la ejecución de sentencia—Civ., tom. 13, pág. 261, Ser. 5ª (tom. 60).

**1ª. Escepción de incompetencia**—La omisión de audiencia fiscal en las escepciones de incompetencia, afecta de nulidad la resolución—Crim., tom. 9, pág. 34, Ser. 3ª (t. 25).

**2. Escepción de incompetencia**—Debe rechazarse por corresponder al fuero federal, si el ejecutado es argentino—Com., tom. 9, pág. 146, Ser. 3ª (tom. 25).

**3. Escepción de incompetencia**—Sea por razón de las

---

27. En un juicio de interdicto, el demandado opuso la escepción de falta de personería, fundándose en que él no era, ni propietario ni poseedor del inmueble. No se hizo lugar á la escepción por cuanto los hechos alegados como base, hacen al fondo de la acción, no á personería del litigante.

1ª. El art. 539 del Cód. de Proc. exige que la prueba se haga precisamente por documentos que se acompañarán al deducir la escepción, con exclusión de todo otro medio probatorio. Y agrega, que si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la escepción sin más recurso.

1ª. La audiencia fiscal en estas cuestiones, es de estricto derecho—arts. 51, 52 y 509 del Cód. de Proc. Crim.

2. Según el art. 12, inc. 4º de la Ley de 14 de Sept. de 1863, cuando un extranjero demanda á un argentino ante la justicia ordinaria, hay prórroga de jurisdicción, pues ésta acepta el fuero del demandado.

3. Así parece resultar de los arts. 83 y 87 del Cód. de Proc. Pero, cuando la incompetencia es por razón de la naturaleza de la causa, ella puede prosperar aun en 2ª Inst. De acuerdo con el sumario. Véase t. 3, p. 65; t. 24, p. 109; t. 38, p. 302; t. 9, p. 95; t. 36, p. 129; t. 51, p. 194. En contra, cuando la incompetencia es por razón de la materia,



personas ó de la materia, debe interponerse en el término perentorio que fija la ley—Com., t. 1, p. 129, S. 3ª (t. 36).

4. **Escepción de incompetencia**—Ejecutoriado el auto que rechaza la escepción de incompetencia, no procede su discusión ulterior—Com., tom. 3, pág. 302, Ser. 5ª (t. 38).

5. **Escepción de incompetencia**—La alteración del turno no puede fundarla—Civ., t. 9, pág. 71, Ser. 5ª (t. 56).

6. **Escepción de incompetencia**—Cualquiera que sea el carácter de los otorgantes de la obligación, esta escepción es improcedente si se ejecuta ante la jurisdicción civil una obligación que tenga ese carácter—Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 5ª (tom. 56).

7. **Escepción de incompetencia**—Debe rechazarse la incompetencia por corresponder al fuero federal, si el escepccionante no justifica su carácter de extranjero—Civ., tom. 10, pág. 233, Ser. 5ª (tom. 57).

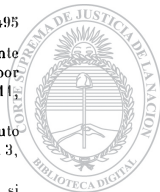
---

que como cuestión de orden público, procede en cualquier estado del juicio. Véase: t. 3, p. 189; t. 37, p. 116; t. 73, p. 174; t. 50, p. 10. Todo de la jur. com.

5. De acuerdo con la jur. Véase *Isrr.* tom. 8, verb. *Escepción de incompetencia*, n.º 8 y 10. Los jueces en lo civil de la Capital, tienen jurisdicción para conocer de todos los asuntos regidos por las leyes civiles—art. 46 de la ley org. de los trib.—La fijación de los turnos es una medida puramente reglamentaria, que en nada afecta la jurisdicción que la ley confiere á los jueces.

6. Se alegó que tanto el deudor como el acreedor, habían sido comerciantes al otorgarse la obligación. El ejecutado no comprobó este extremo; y aunque lo hubiese demostrado, nada habría adelantado, por cuanto el acto era esencialmente civil, siendo de derecho que también los comerciantes pueden celebrar actos civiles—art. 5 del Cód. de Com.

7. La aplicación de la regla de derecho procesal de que la prueba incumbe al que se escepcciona, se hace más clara en el caso del sumario, por cuanto la jurisdicción federal es un fuero de escepción y como tal debe previamente acreditarse. El ejecutado presentó su partida de bautismo, verificado en Montevideo, pero el juez y la Cám. consideraron insuficiente esa prueba para acreditar el nacimiento. Lo que resulta de una partida, es que la persona fué bautizada en el lugar que indica; pero no comprueba el lugar donde ha nacido, cuando esta circunstancia no se expresa en ella. El lugar del nacimiento, puede muy bien ser distinto del lugar del bautizo.



8<sup>a</sup>. **Excepción de incompetencia**—El demandado ante sus jueces naturales, no puede oponer esta excepción por corresponder el litigio á la jurisdicción federal—Civ., t. 11, pág. 224, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 58).

8<sup>b</sup>. **Excepción de incompetencia**—Ejecutoriado el auto que la rechaza, no procede su discusión ulterior—Com., t. 3, pág. 302, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 38).

9. **Excepción de incompetencia**—Es improcedente, si exigido el cumplimiento en el lugar del contrato se justifica que en él se encontraba el demandado al iniciarse el juicio—Civ., tom. 15, pág. 216, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 62).

10. **Excepción de incompetencia**—Debe desecharse, si el pago debe hacerse en el lugar del contrato, aun cuando el demandado no tenga en él su domicilio—Civ. t. 16, p. 51, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

11. **Excepción de incompetencia**—Es improcedente, si el demandante acude á los jueces naturales del demandado—Civ., tom. 17, pág. 351, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 64).

12. **Excepción de incompetencia**—Debe rechazarse, si el heredero es demandado en el domicilio del causante—Civ., tom. 17, pág. 356, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 64).

13. **Excepción de incompetencia**—Debe rechazarse, si

---

8<sup>a</sup>. El fuero federal, establecido á favor de un litigante, es un privilegio que la ley le acuerda y que puede renunciarlo. Véase el n.º 7.

8<sup>b</sup>. La Cám. dijo: «estando ejecutoriado el auto que rechazó la excepción de incompetencia, no es posible volver sobre la misma con igual carácter—arts. 46, 83, 98 y 99 del Cód. de Proc.» Esta doctrina es equivocada. Véase el núm. 3.

9. Art. 4 del Cód. de Proc.

10. Art. 4 del Cód. de Proc. Se trataba de una ejecución hipotecaria. El préstamo fué hecho por el Bco. Hip. de la Cap., según cuyos estatutos los pagos deben hacerse aquí; habiendo, por otra parte, el ejecutado hecho manifestación de conocerlos. El art. 747 del Cód. Civ., es el que rige. Para que sea de aplicación el último párrafo de este art., es necesaria la comprobación de que el deudor tenía su domicilio en otra parte al tiempo del cumplimiento de la obligación.

11. Véase los n.ºs 2, 7 y 8.

12. Art. 634 del Cód. de Proc. Civ.

13. Art. 4 del Cód. de Proc. Civ.



el demandado se encontraba en la jurisdicción del juez accidentalmente—Civ., tom. 17, pág. 374, Ser. 5ª (t. 64).

**14. Excepción de incompetencia**—Es procedente en el interdicto de retener, si la desposesión ha sido decretada por otro Juzgado—Civ., tom. 18, pág. 325, Ser. 5ª (t. 65).

**15. Excepción de incompetencia**—Es procedente, si se justifica que el demandado reside fuera de la jurisdicción del Juzgado—Civ., tom. 19, pág. 77, Ser. 5ª (t. 66).

**16. Excepción de incompetencia**—Fundada en que

14. De acuerdo con los casos siguientes: t. 69, p. 456; t. 1, p. 570. Los interdictos son ciertos medios legales de rápida ejecución que tienen por principal objeto evitar ó reparar las violencias y vías de hecho que perturban el orden social; afectan hasta cierto punto el carácter de medidas del orden policial, y cualquiera que haya sido en el concepto del legislador ó del magistrado la naturaleza del derecho de que emana el conocimiento de los juicios de interdicto, ha sido atribuido al juez del lugar donde se encuentra situado el inmueble que se trata de retener ó de recuperar. La Cám. así lo resolvió en el caso que se registra en el tom. 1, Ser. 1ª, pág. 570, de sus *Fallos*, y ha continuado resolviéndolo en los casos análogos que se han presentado. Si la desposesión ó inquietud en la posesión, ha sido la obra de un juez de lo civ., ante él debe ocurrirse, porque, las medidas que adoptan los jueces en el ejercicio de sus funciones, no pueden considerarse actos materiales ni violentos que den lugar á interdictos, sino á recursos. Así muy acertadamente lo dijo el doctor Damianovich en el fallo que se registra en la Ser. 2ª, tom. 4, pág. 244, con este encabezamiento: «Contra el auto judicial que ordena la posesión, no procede el interdicto de retener».

15. Se trataba de una demanda de escrituración de un contrato de compraventa de inmuebles, que es personal. La jurisdicción competente es la del domicilio del demandado—art. 4 del Cod. de Proc. Civ.

16. Porque del hecho ó de la circunstancia de que hubiera pleito pendiente ó resuelto entre las partes, no se deduce que un Juzgado sea incompetente para declararlo así, ó para resolver que no existe la litispendencia que se oponga al progreso de la acción instaurada. Los efectos de la litispendencia consisten en evitar que se siga un pleito que ya se ha iniciado en otro Juzgado, á fin de que las partes no tramiten inútilmente dos juicios idénticos, y á objeto de evitar que las sentencias puedan ser contradictorias, neutralizando así los derechos que por ellas se definan. Pero esta excepción no funda la incompetencia del Juzgado, no obstante poder impedir, cuando sea procedente, el progreso del nuevo juicio que se inicia, porque aún cuando haya com-



existe litispendencia, no puede prosperar — Civ., tom. 19, pág. 274, Ser. 5ª (t. 66).

**17. Excepción de incompetencia**—Aun cuando no se haya opuesto esta excepción, el Juzgado debe declarar si se considera incompetente antes de resolver las demás opuestas—Civ., tom. 20, pág. 147, Ser. 5ª (t. 67).

**Excepción de incompetencia**—Véase: *Contrato civil*, 1; *De oficio*, 3; *Demanda contestada en rebeldía*, 1; *Arbitros*, 2; *Embargo*, 5; *Bienes*, 6; *Incompetencia*, 7; *Indemnización*, 1; *Competencia potestativa*, 1; *Contrato*, 11.

**1ª. Excepción de inhabilidad**—De título, debe ser rechazada si la ejecución se funda en una letra de cambio—Com., tom. 1, pág. 403, Ser. 3ª (t. 36).

**1ª. Excepción de inhabilidad**—De título, el reconocimiento de la firma en rebeldía no basta para fundarla—Com., tom. 9, pág. 173, Ser. 3ª (t. 25).

**2ª. Excepción de inhabilidad**—De título, es inaceptable

petencia, el Trib. debe abstenerse de conocer en el asunto, toda vez que se está discutiendo el objeto del pleito ó se ha resuelto ya en definitiva.

17. Al estudiar los autos, el Juez, para resolver la excepción de defecto legal, notó que el asunto caía bajo la sanción del art. 8.º del Cód. de Com. Se declaró incompetente de oficio, en atención á la materia de que se trataba. Véase la nota del verb. *De oficio*, 3.

1ª. Se alegó que el título era inhábil por cuanto habíase dado en pago de mercaderías que no se entregaron. El pagaré establecía de una manera pura y simple, sin condición alguna, que en el día determinado se abonaría su importe: esa fecha había pasado y por consiguiente la obligación era exigible: el hecho de la no entrega no podía obstar al progreso del juicio ejecutivo, pues ese extremo solo podía discutirse en juicio ordinario. Por otra parte, esta excepción no está comprendida entre las declaradas admisibles por el art. 676 del Cód. de Com., tratándose de un documento mercantil.

1ª. Arts. 463 y 468 del Cód. de Proc. Civ. Además se trataba de la ejecución de un papel de comercio, en cuyo caso, es de aplicación el art. 676 del Cód. de Com., que no la enumera entre las únicas admisibles.

2ª. Entre las excepciones admitidas por el art. 676 del Cód. de Com., contra la acción ejecutiva de una letra de cambio, no se encuentra la de inhabilidad. Los papeles de comercio son equiparados por el art. 740



si la ejecución se funda en una letra de cambio—Com., tom. 9, pág. 218, Ser. 3ª (t. 25).

2<sup>6</sup>. **Escepción de inhabilidad**—Es procedente, opuesta a una regulación, siempre que el ejecutado no está obligado al pago—Civ., tom. 14, pág. 65, Ser. 5ª (t. 61).

3ª. **Escepción de inhabilidad**—Es improcedente, si el título arroja cantidad líquida de plazo vencido y su autenticidad está plenamente justificada—Civ., tom. 16, pág. 80, Ser. 5ª (t. 63).

3<sup>6</sup>. **Escepción de inhabilidad**—De título, es improcedente, si la ejecución se funda en una letra de cambio—Com., tom. 9, pág. 526, Ser. 3ª (t. 25).

4. **Escepción de inhabilidad**—De título, es improcedente, si se opone á la ejecución fundada en un pagaré equiparado por la ley á la letra de cambio—Com., tom. 2, pág. 9, Ser. 5ª (t. 37).

4ª. **Escepción de inhabilidad**—La ejecución por menor

á la letra de cambio. El art. 813 del Cód. de Proc. Civ., dice que solo son aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan al Cód. de Com. En este caso la ley de fondo prima entre la de forma.

2<sup>6</sup>. Se opuso asimismo la escepción de falsedad, pues es sabido que la de inhabilidad no procede tratándose de la ejecución de sentencia. En un juicio de alimentos y litisespensas, se fijó la suma para este último. Regulados los honorarios del abogado y procurador del que pedía los alimentos, se inició ejecución contra el demandante, alegando que la suma fijada en la sentencia no había alcanzado á cubrirlas. Se rechazó la ejecución porque el ejecutado no había sido condenado al pago de los honorarios que se le cobraban por el abogado y procurador de la actora. En efecto, la sentencia, no había condenado en costas al demandado, y por consiguiente no existía título para fundar la ejecución. No habiendo el ejecutado contratado los servicios que se le cobraban, mal puede ser obligado á pagarlos. Por otra parte, la misma sentencia había fijado una suma para litisespensas, y si con ella la parte actora no alcanzó á pagar los gastos del pleito, debió ocurrir oportunamente solicitando los medios para hacer frente al pago de los honorarios originados en aquél.

3ª. Arts. 464 y 465 del Cód. de Proc.

3<sup>6</sup>. De acuerdo con el núm. 2ª.

4ª. Se cobraba una cuenta de afirmados que había sido visada por una suma mayor, pero por menor suma, porque la primera había sido



valor del que espresa la obligación, no puede fundarla—Civ., tom. 16, pág. 83, Ser. 5ª (t. 63).

5. **Excepción de inhabilidad**—De título, es improcedente, si se opone á la ejecución de un pagaré—Com., tom. 2, pág. 211, Ser. 5ª (t. 37).

6. **Excepción de inhabilidad**—De título, no procede contra la ejecución de una letra de cambio—Com., tom. 3, pág. 78, Ser. 5ª (t. 38).

7. **Excepción de inhabilidad**—De título, es improcedente si la ejecución se funda en una letra de cambio—Com., tom. 3, pág. 81, Ser. 5ª (t. 38).

8. **Excepción de inhabilidad**—De título, si se funda en la falsedad del mismo, es admisible en la ejecución de la letra de cambio—Com., tom. 3, pág. 358, Ser. 5ª (tom. 38).

9. **Excepción de inhabilidad**—De título, ó falsedad, es procedente contra una regulación de honorarios, si ella comprende diligencias no pedidas por el querellante—Crim., tom. 4, pág. 253, Ser. 5ª (tom. 39).

10. **Excepción de inhabilidad**—De título, debe pros-

impugnada por algunos propietarios. Quien puede cobrar lo más puede cobrar lo menos.

7. Arts. 676 y 741 del Cód. de Com., y 813 del Cód. de Proc. Civ.

8. Si bien la inhabilidad no es admisible contra la ejecución de una letra de cambio—art. 676 del Cód. de Com.,—debe tenerse presente que los hechos en que se fundaba, importaban alegar la falsedad del título, defensa que es admitida por el art. citado.

9. Se trataba de los honorarios de dos contadores, que practicaron unidos dos pericias; en una procedieron propuestos por el querellante, en otra por los querellados; la regulación se hizo por las dos pericias. Con esa regulación iniciaron ejecución contra el querellante por la totalidad. El título era inhábil: en primer lugar, porque no se había declarado quién estaba obligado á su pago; y en segundo, porque era indispensable para que procediese la ejecución, que previamente se liquidase y determinase cuál era la parte que de la suma regulada corresponde ser abonada por cada una de ellas. No habiéndose hecho dicha liquidación, el título con que se dedujo la ejecución era inhábil.

10. Celebrado un contrato de arrendamiento con una persona, bajo ciertas bases, después se celebró otro contrato del mismo campo con una razón social de la que el primitivo arrendatario formaba parte. El





perar, si del documento presentado no resulta clara y espresa la obligación del ejecutado—Civ., t. 9, pág. 5, Ser. 5ª (t. 56).

**11. Excepción de inhabilidad**—De título, si la deuda es mancomunada, esta excepción solo es procedente en la parte que indebidamente se exija al ejecutado—Civ., tom. 9, pág. 81, Ser. 5ª (t. 56).

**12. Excepción de inhabilidad**—De título, el reconocimiento de la obligación por el fiador, no basta para darle carácter ejecutivo contra el fiador, y en consecuencia, procede de aquella excepción—Civ., tom. 9, pág. 311, Ser. 5ª (t. 56).

**13. Excepción de inhabilidad**—De título, debe recha-

---

primer contrato contenía cláusulas penales en caso de incumplimiento. El propietario quiso hacer efectiva la cláusula penal establecida en el primer contrato, contra los nuevos arrendatarios, creyendo que esa cláusula penal regía para éstos. Se declaró que el título era inhábil, por cuanto no resultaba, de todos los antecedentes acumulados, que las cláusulas penales del contrato primitivo obligara a los nuevos arrendatarios.

11. Dos personas tomaron en arrendamiento un inmueble, y no habiendo cumplido con el contrato, el propietario inició ejecución por cobro de alquileres contra uno solo de los inquilinos y por la totalidad del alquiler. Se declaró que el título solo era hábil para ejecutar la mitad del alquiler, en virtud de lo dispuesto en los arts. 691, 693, 701 y 1747 del Cód. Civ.

12. La habilidad ó inhabilidad de un título para demandar con él ejecutivamente, es relativa. Un instrumento público, una cuenta aprobada, una letra de cambio ó otro título semejante, tiene aparejada ejecución contra una ó más personas, pero no contra otras; es entonces título hábil para demandar ejecutivamente a las primeras, pero es inhábil para demandar en la misma forma á las segundas. La fianza solidaria, no implica que el deudor afianzado pueda reconocer la existencia de la deuda, y aun su importe líquido, sin intervención alguna del fiador, obligando á éste, pues quedaría así despojado de los derechos que le acuerdan los arts. 2020 y sig. del Cód. Civ. Y no se diga que el fiador puede oponer todas las excepciones que tenga para oponerse al pago de la deuda, porque esas excepciones son limitadísimas en el juicio ejecutivo, y porque la naturaleza de éste no le permite defenderse con toda la amplitud á que tiene derecho y de que puede usar en el juicio ordinario.

13. Se trataba de la ejecución de honorarios, á que había sido condenada, en un juicio la parte vencida. El art. 539 del Cód. de Proc., rige



zarse sin substanciación, si se opone á la ejecución de una sentencia—Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 3ª (tom. 67).

14. **Excepción de inhabilidad**—De título, es procedente si la ejecución por afirmado comprende la totalidad del crédito y no las cuotas fijadas con anticipación—Civ., tom. 11., pág. 320, Ser. 3ª (tom. 58).

15. **Excepción de inhabilidad**—De título, debe rechazarse si la escritura pública contiene todos los requisitos necesarios para su validez—Civ., t. 14, p. 372, Ser. 3ª (t. 61).

16. **Excepción de inhabilidad**—De título, es proceden-

---

el caso. La Cám. agregó que la excepción «debió ser rechazada *in limine*, sin dar siquiera lugar á sustanciación alguna, como está autorizado por el art. 491 del citado código». El art. 540, autoriza al Juez á mandar llevar la ejecución adelante, si la excepción no fuese admisible, ó si siéndolo, la parte no acompaña los documentos que constituyen su prueba—última parte del art. 539.

14. Véase la nota del verb. *Cuotas*, 1.

15. El art. 465 establece en su inc. 1.º que los instrumentos públicos presentados en forma, traen aparejada ejecución. Además la inhabilidad no consiste nunca, según jur. de la Cám., que nosotros combatimos, en cuestiones que se refieran al fondo de la operación origen de la deuda, sino á las formas esternas y extrínsecas del documento. Véase la nota del verb.

16. Un procurador se presentó cobrando sus emolumentos, en un juicio seguido por cobro de honorarios, como apoderado de la Mun. para el cobro de afirmados. Regulados esos honorarios y citada de remate la Mun., opuso la excepción de inhabilidad, fundándose en que el ejecutante carecía de derecho para exigirle honorarios, por haber convenido recibir como única retribución de sus trabajos el diez por ciento de las cuentas que cobrase. Si bien en el instrumento de poder otorgado por la Mun., nada se expresaba al respecto, el ejecutado estableció suficientemente la exactitud de aquel hecho, «con las pruebas de testigos concordantes con las enunciaciones de los documentos testimoniados, que constituyen principio de prueba por escrito y determinan, por consiguiente, la procedencia de la testimonial y la admisión de las mismas declaraciones, no obstante la tacha relativa que se las ha puesto, desde que con las enunciaciones de esos documentos se demuestra la sinceridad de los testimonios tachados—art. 204 del Cód. de Proc.»—decía textualmente la Cám. Además constaba de los recaudos producidos en juicio, que el ejecutante había solicitado en diversas épocas y en varios juicios, le fuese liquidada la comisión del diez por ciento que le



te la opuesta á una regulaci3n de honorarios, si el mandante ejecutado justifica la existencia de un convenio de remuneraci3n en forma determinada—Civ., t. 13, p. 289, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 62).

**17. Excepci3n de inhabilidad.**—De t3tulo, aun cuando el documento sea h3bil por su origen y forma, es procedente la excepci3n, si la ejecuci3n se dirige contra el que no est3 obligado al pago—Civ., tom. 19, p3g. 163, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 66).

**Excepci3n de inhabilidad del t3tulo.**—V3ase: *Caduci-  
dad*, 1; *Escep. de falsedad*, 9; *Contrato bilateral*, 1; *Embargo*,  
9; *Documentos*, 12; *Inhabilidad de t3tulo*, 5.

**1<sup>a</sup>. Excepci3n legal.**—Los hechos que no importan excepci3n legal no bastan, aun justificados, para suspender la ejecuci3n—Com. tom. 9, p3g. 202, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 25).

**1<sup>b</sup>. Excepci3n de leg3tima defensa.**—Si se justifica la repetic3n del ataque de la v3ctima, es presunci3n de la ley

correspondia por las sumas cobradas judicialmente por afirmado, como tambi3n que hab3a percibido el importe de esas liquidaciones. «Este antecedente es decisivo, en cuanto 3l demuestra la existencia de una convenci3n que es ley para las partes, y la cual regl3 la forma 3 condiciones en que deb3a ser retribuido el servicio del ejecutante». Esta resoluci3n de la C3m. es completamente equivocada, pues la excepci3n de inhabilidad no es de las enumeradas en el art. 539 del C3d. de Proc. La regulaci3n de honorarios es una sentencia, como lo tiene resuelto esta misma C3m. de lo Civ., 3 igualmente la de lo Com. Si la Mun. ten3a esa defensa que oponer, deb3o impugnar 3 la regulaci3n, de acuerdo con los arts. 66 y 67 del Ap3ndice al C3d. de Proc. La regulaci3n de honorarios en forma sumaria solo es permitida cuando no hay convenci3n escrita.

17. Si bien por regla general 3lla solo procede cuando el t3tulo en que se funda la demanda no reune las formas que la ley requiere para acordarle fuerza ejecutiva, no debe olvidarse que la aparejada ejecuci3n es siempre relativa contra el deudor resultante del t3tulo mismo, 3 de los antecedentes en que se origina, y en manera absoluta contra cualquier persona.

1<sup>a</sup>. Un deudor del Bco. de la Prov., se opuso 3 la ejecuci3n, alegando que entre los bienes embargados se hab3an incluido algunos que est3n esceptuados por la ley. Al mismo tiempo se acog3 3 una ley que dec3a haber sido dictada, y por la cual los deudores del Bco. pod3an suspender las amortizaciones trimestrales y pagar solamente los intereses. No se comprob3 la existencia de la ley.

1<sup>b</sup>. V3ase: *Acto ineludible*.



que el homicidio perpetrado sin testigos, ha sido un acto ineludible, y en consecuencia, procede la escepción—Crim., t. 1, pág. 267, Ser. 5ª (tom. 36).

1. **Escepción de litispendencia**—Declarada procedente esta escepción, debe archivar el último expediente—Com., tom. 9, pág. 39, Ser. 3ª (tom. 25).

2. **Escepción de litispendencia**—Si la primera deman-

1. Se pidió que el segundo expediente se acumulara al primero, lo que no procede, porque si se accediera á tal pretensión ello importaría dejar sin efecto el procedimiento seguido en el otro juicio; importaría reabrir un debate que ha quedado cerrado con la espiración de los términos en que una de las partes declarada en rebeldía, pudo hacer valer sus defensas, ya oponiendo las escepciones á que se hubiere creído con derecho, ya deduciendo la reconvección, y tal cosa en manera alguna puede hacerse. Jamás podría un demandante aprovechar las ventajas que le hubiera creado el hecho de darse por contestada la demanda al reo; de nada habría servido que la ley reglamentando el procedimiento á que deben ceñirse los juicios, haya fijado los términos en que las partes pueden usar de sus derechos con las consecuencias que la inacción de ellas produce, si con solo promover el demandado otro juicio contra su demandante sobre el mismo asunto y á propósito de la litispendencia que este último dedujera, habría de conseguir la incorporación de sus defensas al primitivo juicio para que fueran tenidas en cuenta, volviéndolo al estado del emplazamiento, ya que el juez no podría pronunciarse sobre ellas sin oírse al demandante. Los efectos de la litispendencia son precisamente contrarios á estas pretensiones, el segundo juicio debe cesar en sus procedimientos por completo y seguir adelante el primitivo, según el estado en que se halle. La acumulación solo sería procedente si se tratara de juicios que se encontrasen en el mismo estado: si por ejemplo en el otro no estuviera aun contestada la demanda, lo que no sucedía en este caso; y entonces ella no tiene objeto desde que en aquel no se han de tomar en cuenta las defensas en que se funda la acción del nuevo juicio.

2. Entablada una demanda, se opuso la escepción de defecto legal, declarándose procedente. En este estado el actor presentó nueva demanda por separado, dando así por terminadas las primeras actuaciones. A la segunda demanda se opuso la escepción de litispendencia, la que fué rechazada, porque para que exista litispendencia, según los términos de la ley; esto es, para que pueda decirse que un asunto pende en un trib., es necesario que el reo haya sido citado é instruido plenamente de la demanda y que ésta se encuentre trabada por demanda y contestación, lo que no sucedía aquí, desde que como se ha visto fué rechazada la primera demanda por defecto legal sin haber sido contes-



da no ha sido contestada, debe rechazarse la excepción de litispendencia—Com., tom. 9, pág. 381, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Excepción de litispendencia**—Es improcedente, si no existe identidad de objeto—Com., tom. 2, pág. 153, Ser. 5ª (tom. 57).

4. **Excepción de litispendencia**—Para que un juicio pueda fundarla, debe existir identidad de causa—Com. t. 5, pág. 379, Ser. 5ª (tom. 40).

5. **Excepción de litispendencia**—Es improcedente, si no existe identidad de partes—Civ., t. 10, p. 403, S. 5ª (t. 57).

6. **Excepción de litispendencia**—Para que proceda, debe existir identidad de partes, causa y objeto—Civ., tom. 11, p. 47, Ser. 5ª (tom. 58).

7. **Excepción de litispendencia**—Debe rechazarse, si no produce prueba el oponente—Civ., tom. 11, pág. 426, Ser. 5ª (tom. 58).

8. **Excepción de litispendencia**—Debe rechazarse, si no existe identidad de personas—Civ., tom. 14, pág. 180, Ser. 5ª (t. 61).

9. **Excepción de litispendencia**—Para que pueda pros-

---

tada, y de consiguiente, los demandantes pudieron legalmente entablar la nueva acción.

3. Solo es viable esta excepción cuando concurren en ambos juicios, identidad de causa, persona, objeto y calidad.

4. Se trataba de la ejecución de un papel de comercio; entre las excepciones admitidas por el art. 676 del Cód. de Com. no está comprendida esta.

6. Se hizo consistir la litispendencia en la igualdad de objeto, mas no sucedía tal, por cuanto en uno de los juicios, la actora trataba de reivindicar su propiedad ejercitando la acción de dominio—art. 2858 del Cód. Civ.—mientras que en el otro se trataba de ejercer el derecho que el comprador con pacto de retroventa tomó para proceder á la enajenación del derecho de retrotraer el mismo inmueble; ambas acciones tenían un objeto distinto.

7. El demandado alegó la existencia de otro juicio igual; en la estación de prueba no produjo ninguna, por lo que fué rechazada la excepción—Ley 8, tít. 3, Part. 3ª.

9. Uno de los juicios era por rescisión de un contrato de locación;



perar, ambos juicios deben tener idéntico objeto—Civ., t. 14, pág. 164, Ser. 5ª (t. 61).

10. **Excepción de litispendencia**—No procede, fundada en juicio ejecutivo — Civ., tom. 14, pág. 164, Ser. 5ª (t. 61).

11. **Excepción de litispendencia**—Fundada en el juicio por rescisión del contrato de locación, es improcedente en la ejecución por cobro de alquileres — Civ., t. 14, pág. 355, Ser. 5ª (t. 61).

12. **Excepción de litispendencia**—Un juicio desistido, no puede fundarla—Civ., tom. 16, pág. 44, Ser. 5ª (t. 63).

en el otro se trataba de compeler al propietario para que abonase la contribución directa de la finca arrendada por los años anteriores á la fecha en que se inició el juicio de rescisión. Cualquier que sea el resultado del pleito sobre rescisión del contrato, sus efectos no pueden retrotraerse á una época anterior á la de la demanda que motivó ese juicio, desde que la rescisión importa declarar caduco para lo futuro un contrato que ha existido y que debe producir sus efectos hasta la oportunidad en que se declare rescindido. No es entonces inútil la prosecución del nuevo juicio, ni hay razón para que las dos sentencias que en definitiva deban resolver los dos litigios, puedan ser contradictorias, neutralizando los derechos de las partes que es precisamente lo que la ley ha querido evitar y lo que motiva ó funda la excepción de litispendencia.

10. Porque la sentencia de trance y remate que termina un juicio ejecutivo, no causa ejecutoria—art. 500 del Cód. de Proc.—por cuya razón, no puede haber temor de que el resultado de ambas sentencias sea contrario, pues el objeto del juicio ordinario que la ley autoriza, después de finiquitado el ejecutivo tiene precisamente por objeto reparar el perjuicio causado en este último á causa de la limitación que la ley impone á los medios de defensa en las ejecuciones. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia.—Véase: t. 1, p. 513; t. 7, p. 257; t. 9, p. 257; t. 12, p. 367 y 382; t. 13, p. 320; t. 36, p. 41; t. 43, p. 190; t. 55, p. 255; t. 74, p. 219.

11. No concurre uno de los requisitos exigidos para que ella sea viable. No tienen el mismo objeto. Por otra parte hemos visto que no procede cuando uno de los juicios es ejecutivo y el otro es ordinario.—Véase el núm. 9.

12. Se ejecutaba el impuesto de cloacas. El juicio anterior se había iniciado efectivamente; pero el actor había desistido archivándose el expediente. El archivo había sido procedente por cuanto no había intervenido aun la parte demandada. Es sabido que el actor puede desis-



**13. Excepción de litispendencia**—Una demanda no contestada no puede fundarla—Civ., tom. 18, pág. 93, Ser. 5ª (t. 65).

**14. Excepción de litispendencia**—No procede si no existe identidad de causa—Civ., t. 18, p. 114, Ser. 5ª (t. 65).

**15. Excepción de litispendencia**—Es improcedente si el juicio en que se funda ha terminado por sentencia definitiva—Civ., tom. 19, pág. 274, Ser. 5ª (t. 66).

**Excepción de litispendencia**—Véase: *Divorcio*, 17.

**1. Excepción de minoridad**—Si del informe asertivo de los peritos resulta la mayor edad del acusado, la prueba de

---

tir de una demanda mientras ella no haya sido contestada. Habiéndose archivado el expediente no había pleito pendiente.

13. El demandado opuso la excepción fundándose en que el actor lo había demandado por la misma cantidad, objeto de la demanda, ante la extinguida justicia de paz letrada, produciéndose algunas actuaciones en dicho expediente, que pasó con motivo de la nueva ley de justicia de paz, al Juzgado de lo Civ. El actor negó que hubiera litispendencia y pidió su rechazo. De las pruebas rendidas resultó que el actor demandó por la misma causa motivo del nuevo juicio, al reo, ante el Juez de paz; que corrido traslado de la demanda, fué notificado en forma al demandado, pidiendo éste que sin que le corriese término ni le parase perjuicio se convocara á las partes á un juicio verbal, á fin de arreglar definitivamente el asunto, á lo que el Juzgado proveyó de conformidad. Desde entonces quedó paralizado el expediente, sin producirse actuación alguna posterior. De los hechos que se dejan relacionados, se desprende que la demanda iniciada ante el Juzgado de paz no había sido contestada, suspendiéndose el traslado conferido por resolución judicial consentida por las partes. Hasta tanto no se corriese traslado en forma de dicha demanda, es indudable que el demandado no estaba obligado á contestarla, no habiéndose, por consiguiente, trabado propiamente el juicio. No existe litispendencia en otro juzgado ó tribunal competente, pues como se deja dicho, para ello sería necesario que no se hubiese dejado sin efecto la notificación de la demanda y que existiese para el demandado la obligación de contestarla una vez corrido el traslado correspondiente.

1. Se alegaba que teniendo en cuenta la indivisibilidad de la confesión—art. 318 del Cód. de Proc. Crim.—la afirmación del criminal de ser menor de edad, tenía fuerza de prueba legal; pero de un informe médico expedido resultaba que el encausado tenía más de 18 años: esa prueba pericial tiene fuerza de prueba supletoria—art. 87 del Cód. Civ.



la escepción de minoridad es á cargo del escepcionante—Crim., tom. 2, pág. 244, Ser. 3ª (t. 37).

1ª. **Escepción de novación**—Debe rechazarse si no resulta la voluntad espresa de las partes, y la nueva obligación podía coexistir con la anterior—Civ., t. 9, p. 269, S. 3ª (t. 56).

1ª. **Escepción de nulidad**—Resuelta y consentida la in-

1ª. La novación es la transformación de una obligación en otra, de tal manera, que la primera queda extinguida por la segunda. Para que la novación se opere es preciso, como regla general, que la voluntad de las partes se espresé claramente en la nueva convención, y en este caso siempre se producirá, cualquiera que sea el cambio que se observe en el objeto de la obligación. Hay, sin embargo, casos en que la novación no es espresa sino tácita, como sucedería en la hipótesis de que se observara una clara incompatibilidad entre la existencia de la obligación primitiva y la nueva obligación. No existiendo esa incompatibilidad y pudiendo guardar relación una obligación con otra, no es posible admitir la novación, siempre que no surja de la voluntad espresa de los contratantes, pues si la hay, de esta voluntad depende su existencia. Por eso es que el art. 812 del Cód. Civ. establece, que la novación no se presume y que es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención ó que la existencia de la antigua obligación sea incompatible con la nueva. Por igual motivo, agrega el mismo art., las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, ó á su causa, como respecto al tiempo, lugar ó modo del cumplimiento, serán consideradas como que solo modifican la obligación, pero que no la extinguen. El Dr. Llerena, recordando á Laurent, al explicar el art. 812 del Cód. Civ., dice: «La voluntad de las partes puede hacer cambiar la obligación en la forma que se quiera; puede la convención reunir todos los requisitos necesarios para la novación, y sin embargo, no existir ésta, porque tal es la voluntad de las partes. Para que esta voluntad sea indudable y clara, es necesario que fuera de los casos espresamente declarados por la ley, se manifieste por escrito. Si la intención no se espresa por escrito, quedaría en tal caso á la apreciación del juez interpretar la mente de las partes, lo cual sería contrario á la regla de que la novación no se presume. Esto no implica, agrega el Dr. Llerena, que en los casos en que la ley presume la intención de las partes, como en el de incompatibilidad que prevé el art. 812 del Cód. Civ., no puedan los jueces apreciar los hechos y juzgar según su criterio si hay ó no novación».—Autor cit., n.º 2, pág. 10.—Además, la ley no autoriza la novación parcial de una obligación, sino la transformación de ella en otra, para que así la extinga.

1ª. La resolución de la nulidad no tiene objeto una vez declarada la incompetencia. No trae gravamen irreparable.





competencia del Juzgado, el rechazo de la excepción de nulidad es inapelable—Com., tom. 9, pág. 378, Ser. 3ª (t. 25).

2ª. **Excepción de nulidad**—La falta de protesto no puede fundarla, si para el reconocimiento se llenaron las formalidades que la ley determina—Com., tom. 3, pág. 169, Ser. 5ª (t. 38).

3. **Excepción de nulidad**—La prueba de la nulidad por defectos en las notificaciones, es de cargo del escepionante—Com., tom. 4, pág. 198, Ser. 5ª (t. 39).

4. **Excepción de nulidad**—Debe rechazarse si se funda en la inexistencia de bienes embargados—Com., tom. 5, pág. 408, Ser. 5ª (t. 40).

5. **Excepción de nulidad**—La falta de entrega de las copias no puede fundar una excepción—Civ., tom. 13, pág. 305, Ser. 5ª (t. 60).

**Excepción de nulidad**—Véase: *Días señalados*, 1.

1. **Excepción de pago**—Para que el recibo por honorarios pueda justificarla, debe referirse espresamente á los que han dado origen á la ejecución—Com., tom. 1, pág. 303, Ser. 5ª (t. 36).

2ª. **Excepción de pago**—Debe rechazarse, si se funda en

---

2ª. Cuando la letra no ha sido protestada, no llena los requisitos del inc. 6º del art. 465 del Cód. de Proc. para que tenga acción ejecutiva; pero reconocida la firma del documento, la ejecución procede en virtud de lo dispuesto en el inc. 2º del citado art.

3. Ley 8, tit. 3, part. 3ª.

4. No es necesaria la traba del embargo para poder continuar el juicio ejecutivo, citarse de remate y dictar sentencia. Así lo tiene resuelto la jurisprudencia, porque el acreedor puede renunciar á ese beneficio. Véase *Ixsr.*, tom. 6 verb. *Bienes embargados* núms. 3 y 7, y *Citación de remate*, 2. En contra véase *Ixsr.*, t. 8 verb. *Bienes embargados*, núms. 1 y 6; t. 7, mismo verbo, núms. 3 y 9, y *Citación de remate*, 4 y 2.

5. La ley solo autoriza al emplazado para reclamar la copia cuando lo creyere conveniente, sin perjuicio de correr el término desde la notificación, art. 23 del Cód. de Proc.

2ª. Deducida ejecución por un pagaré personalmente protestado contra su suscriptor ejecutado, éste opuso en la debida oportunidad la



entregas hechas antes del vencimiento de la letra, y no se hizo constar tal circunstancia—Com., t. 1, p. 333, Ser. 3ª (t. 36).

excepción de pago. Fundándola, sostuvo que en Enero de 1890, toda su deuda al ejecutante ascendía á 250.000 libras esterlinas «más una suma líquida que no puede precisar, por intereses, comisiones, etc.»; que para cancelar toda esa deuda, en la cual se hallaban comprendidos los 250.000 pesosoros sellado del otro pagaré, negoció con la garantía del mismo ejecutante, y con hipoteca sobre diversos bienes de su propiedad, un empréstito de 300.000 libras esterlinas con varias casas de Banco alemanas, entregando al acreedor en 21 de Enero de 1890, el producido íntegro de dicho empréstito, y quedando así por ese hecho extinguidas todas sus obligaciones procedentes del referido pagaré, como del resto de su deuda líquida, por el pago, ó por lo menos mediante la compensación de deudas. Debe, desde luego, observarse, que las partes estaban conformes en reconocer que la negociación de las 300.000 libras del empréstito antes mencionado y pago al ejecutante, se efectuó en la fecha última indicada en que el deudor otorgó á favor del ejecutante la escritura hipotecaria á que le obligaba el convenio celebrado con el representante de los banqueros prestamistas. Ahora bien; en esa fecha, el pagaré por 250.000 pesos oro sellado, tenía la de 23 de Diciembre de 1889, y vencía recién en 10 de Marzo del 90; y es claro entonces, que el ejecutante no pudo imputar á dicha deuda el pago que decía haber hecho; pues según lo dispuesto en el art. 774 del Cód. Civ., el deudor no puede hacer la imputación de pago sobre deuda no vencida aún, como lo era el referido pagaré, y menos podía pretender hacer tal imputación al capital de deudas con intereses, sin satisfacer ó imputarlas previamente á éstos, sin el consentimiento del acreedor, que en este caso no se manifestó en tal sentido, ó al menos no había prueba de ello. *Primo in usuras, id quod salvetur, deinde in sortem acceptur feretur*, decía la ley 1ª, lit. 39, lib. 11 del Cód. Rom., y lo repiten el art. 943 del Cód. de Com., vigente en la época referida, y el 776 del Cód. Civ. Á parte de esto, el art. 942 del Cód. de Com. y el 773 Civ., prescriben que el deudor que paga una cantidad á persona con quien tiene pendientes diversas deudas, debe declarar *al tiempo de hacer el pago*, á que deuda haya de imputarse éste, declaración que ni se pretendía haber sido hecha en tal ocasión en el caso presente. Y no se diga que el deudor, al entregar las 300.000 libras abonaba capital é intereses, pues él mismo manifestó, contestando á una posición, que su deuda, descontado el documento de las 400.000 libras de 2 de Noviembre de 1889, «quedaría reducida con el pago de las comisiones, más ó menos á trescientos mil libras. Quiere decir, pues, que no puede afirmarse con toda seguridad que las 300.000 libras del empréstito cancelaran *toda la deuda* reconocida por el deudor, y que según él, podía ser aun *más* de esa suma. Era un hecho de la mayor importan-



3. **Excepción de pago**—Procede si el ejecutado justifica que el pagaré que funda la ejecución fué renovado y que la renovación fué pagada en oportunidad—Com., tom. 3, pág. 7; Ser. 5ª (t. 40).

4. **Excepción de pago**—Aun cuando el ejecutado justifica que el ejecutante le es deudor, no procede la excepción, si la deuda no es exigible—Civ., tom. 9, pág. 288, S. 5ª (t. 56).

cia, el que se encontraba reconocido por el deudor contestando á otra posición, y estaba corroborado por un informe de contador, que el pagaré de 250.000 pesos oro sellado, que vencía el 10 de Marzo siguiente al pago de las 300.000 libras, fué renovado por el deudor á su vencimiento, suscribiendo esa, y cada una de seis renovaciones que con posterioridad se hicieron del mismo, hasta llegar á aquél que por falta de pago le fué protestado á su vencimiento en 19 de Oct. de 1891. En efecto, no se explica que el deudor, que según él había ya pagado esa deuda, siguiera por año y medio más, renovando el documento destinado á constatar su subsistencia, y en virtud del cual podía ser obligado al pago de una suma tan considerable, lo mismo por el acreedor que por cualquier otro tenedor de buena fe á quien éste lo transmitiera por simple endoso. Alegó el ejecutado haber seguido suscribiendo las renovaciones «hasta tanto se liquidara el negocio». Pero esto no satisface porque no se ve, que necesidad pudiera presentar para la liquidación del negocio á que se refiere, el hacer revivir ficticiamente deudas ya extinguidas por el pago; y menos se explica si se tiene en cuenta que cada renovación presupone el pago de los intereses correspondientes, desde que ellos no aparecían acumulados al capital, razón por la cual la suma debida por el pagaré ejecutado, era la misma del primitivo de dos años antes. Todo esto no puede admitirse así, porque nadie se impone obligaciones de tal magnitud, sino cuando existe una verdadera y legítima causa de deber. La simulación, porque tal cosa importaría el mantener aparentemente viva y en toda su fuerza una obligación ya cancelada, no ocurre sino en casos muy extraordinarios, y debe ser suficientemente acreditada en los autos su existencia, ya sea por el contradocumento que en tales casos las partes suelen reservarse, ó en su defecto, por los demás medios que la ley autoriza, art. 1191, Cód. Civ. Esta prueba que debe ser rendida por quien está interesado en que lo aparente y ficticio cede su plaza á lo real y verdadero, no fué ofrecida por el ejecutado, que es quien alegaba la inexistencia de la deuda constatada por el documento impugnado.

4. La existencia de una obligación á favor del ejecutado podrá dar lugar á cualquiera otra defensa—como la de compensación por ejemplo—pero nunca á la de pago. El art. 725 del Cód. Civ. dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación.



5. **Escepción de pago**—Para que el recibo pueda fundarla, debe referirse expresamente á la deuda que origina la ejecución—Civ., tom. 9, p. 296, Ser. 5ª (t. 56).

6. **Escepción de pago**—Para que pueda prosperar, es requisito indispensable que el recibo se reliera expresamente á la obligación ejecutada—Civ., t. 10, p. 247, Ser. 5ª (t. 57).

7. **Escepción de pago**—El reconocimiento hecho por el demandado, de adeudar un saldo, importa una escepción de pago que deja á su cargo la prueba—Civ., tom. 13, pág. 210, Ser. 5ª (t. 60).

8. **Escepción de pago**—No basta para fundarla, en la ejecución por honorarios del mandatario, el recibo de una cantidad espresando que fué entregada para gastos—Civ., tom. 15, pág. 299, Ser. 5ª (t. 62).

9. **Escepción de pago**—Al que alega la falsedad del re-

---

5. De acuerdo con el núm. 1.

7. Al contestar la acción el demandado dijo: «Que, como lo justificaré en el transcurso de este juicio, no debo al demandante más que la suma de 20 pesos moneda nacional, los cuales no tengo inconveniente en abonar». Y agrega: «El demandante, señor Juez, creo que se olvidó de las sumas que le entregué, cuyos recibos de ellas obran en mi poder, y creo que es esa la causa por la cual hoy me demanda». En el primer párrafo transcripto, el demandado afirmaba que solo debía al actor la suma de 20 pesos, y explicando en el segundo el motivo de tal aserción, decía haber pagado el excedente que se le cobraba sobre los 20 pesos. Es evidente que el demandado opuso como defensa la escepción de pago. Y entonces, sobre él pesaba la obligación de probar dicha escepción, de conformidad con el principio según el cual la prueba incumbe al litigante que afirma un derecho pertinente al caso en litigio—Ley 8, tit. 3, Part. 3ª.

9. Reconocida la firma de un documento privado, el cuerpo de dicho instrumento queda también reconocido—art. 1028 del Cód. Civ.—esta es la prescripción legal. Reconocido dicho instrumento tiene el mismo valor que el instrumento público—art. 1026—y como éste hace plena fe—art. 993—lo mismo la tiene el documento privado, pero ambos por la misma razón, hasta que sean argüidos de falsos por acción civil ó crim. de la existencia material de los hechos que atestigüen otros documentos. Sentado lo que queda expuesto, de ello se deduce con evidencia, que el peso de la prueba corresponde al que ha opuesto la falsedad. Para justificar la falsedad de un documento, no está prohibido otro género de prueba, aparte de la escrita—arts. 1033 del Cód. Civ.



cibo en que se funda la escepción de pago, corresponde la prueba de la adulteración por habérsele agregado palabras y cifras para aumentar su valor—Civ., t. 20, p. 74, S. 5ª (t. 67).

**Escepción de pago**—Véase: *Depósito*, 1.

**1. Escepción de pago parcial**—Si fuese justificada,

y 144 del Cód. de Proc. Civ.—Tratándose de justificar dicha falsedad, son admisibles todos los medios de prueba, según resulta de dichas disposiciones legales. El informe pericial que se produjo llegó á esta conclusión, que hace prueba legal, por ser completamente asertivo: «que la parte del documento argüido de falso ha sido escrito con la misma mano y la misma tinta; pero que la parte argüida de falsa se ha escrito después de la escritura del documento, aunque con poco tiempo de diferencia». Para que en virtud de este informe pudiese imputarse al ejecutado la falsedad, hubiera sido menester que el ejecutante hubiese demostrado quien escribió ese documento, y este punto fundamental quedó en el misterio, por falta de prueba. Una misma mano y con una misma tinta se escribió el documento, y poco después se escribió la parte redargüida; pero sin saberse quien hizo la escritura, no puede saberse quien hizo el agregado, si éste ha existido, y mucho menos indicarse, que ha habido dolo en dicho agregado. El deudor sostuvo que el ejecutante llevó ya escrito el documento, y éste pretendió que lo escribió el ejecutado, pero ni siquiera se preocupó de esclarecer su aseveración, cuando este ha debido ser el punto principal de su prueba. En el vacío al respecto, ninguna importancia para la decisión de la cuestión puede tener el que sepa que la parte argüida ha sido escrita después, si se ignora la mano que la escribió, pues entonces ignorándose quien hizo la escritura, ninguna deducción puede sacarse lógicamente, y menos en contra del ejecutado.

1. Se inició ejecución por cobro de 1.500 \$. En el curso del juicio, el actor reconoció haber recibido á cuenta 1.000 \$. La Cám., por mayoría de votos, rechazó la ejecución *in totum*, fundándose en que cuando se dedujo la demanda ya había recibido el acreedor 1.000 \$ á cuenta, que por lo tanto, su crédito por razón de capital solo ascendía á 500 \$, y no debió el actor ocultar ese hecho, ocurriendo ante el juzgado de 1.ª Inst. en lo Com., que no era competente para entender en el asunto. La minoría dijo: «El actor conoció la verdad del pago parcial hecho por el ejecutado, pero al instaurar su demanda protestó espresamente que admitiría «en cuenta justos y legítimos abonos». Los efectos de esta cláusula son según lo enseñan uniformemente los autores, evitar el incurrir en la pena de la *plus petitio*, en que con arreglo á la ley 43, tít. 2º, part. 3ª, habría incurrido en el caso de que el deudor acreditara haber pagado algunas cantidades á cuenta del crédito que se le reclamaba,—Caravantes, núm. 1148, y Manresa y Reus sobre el art. 945 de la



procede el rechazo de la ejecución pedida por el total de la deuda—Com., tom. 3, pág. 394, Ser. 5ª (tom. 38).

2. **Excepción de pago parcial**—Es improcedente si al trabarse el embargo se ha tenido solo en cuenta el saldo de la deuda—Com., tom. 4, pág. 186, Ser. 5ª (tom. 39).

**Excepción personal**—Véase: *Excepción de falsedad*, 2.

1. **Excepción de prescripción**—Debe rechazarse si no ha transcurrido el término que la ley fija—Crim., tom. 9, página 21, Ser. 3ª (t. 25).

2ª. **Excepción de prescripción**—Es procedente si la acción se deduce después de vencido el término que la ley fija—Com., tom. 4, pág. 65, Ser. 5ª (t. 39).

3. **Excepción de prescripción**—Procede la de la querrela por injuria iniciada después del año de cometido el delito—Crim., tom. 5, pág. 226, Ser. 5ª (t. 40).

4. **Excepción de prescripción**—La inacción del acree-

---

Ley de Enj. española.—Consecuente con esa falsedad, el actor reconoció el pago de 1.000 g hecho por el demandado, y tal reconocimiento, si bien es bastante para acreditar el pago parcial de los referidos 1.000 g, no puede enervar la acción del acreedor para perseguir el saldo. En tal caso, la solución más acertada era mandar llevar la ejecución adelante por el saldo no pagado.

2ª. La excepción de prescripción era admisible en atención á la naturaleza del documento que motivó la ejecución, arts. 676 y 741, Cód. de Com.; y el término para la prescripción fijado por el inc. 2º del art. 848, había corrido desde el vencimiento de la obligación hasta la iniciación de la demanda, sin que se hubiese justificado ni alegado la producción de actos que la hayan interrumpido.

3. Conforme al art. 182 del Cod. Pen., la pena aplicable sería la de arresto, la cual se prescribe por un año. Según el art. 89, inc. 3º, el derecho de acusar por delito que merezca pena de arresto se prescribe al año, contándose este término desde el día en que se cometa el delito, art. 91.

4. Se trataba del cobro de honorarios regulados, el que está regido por el tít. de la ejecución de sentencias, pero la Cám. consideró que debía regirse por la ley del juicio ejecutivo. El término de dos años fijado por el art. 4032 del Cód. Civ. se había operado desde el día que la tasación fué aprobada, hasta aquel en que se presentó el interesado gestionando su cobro. El deudor había quedado liberado por inacción del acreedor—art. 3947 *ibid.*



dor por honorarios de una tasación durante dos años, hace procedente aquella—Civ., tom. 19, pág. 279, Ser. 5ª (t. 66).

**Excepción de prescripción**—Véase: *Delitos*, 1.

1ª. **Excepción de quita**—Debe rechazarse, si el ejecutado no produce prueba para justificarla—Com., tom. 2, pág. 9, Ser. 5ª (t. 37).

1ª. **Excepción de transacción**—Opuesta después de iniciado el juicio, no puede prosperar si no ha sido presentada al juez ó consta en escritura pública—Civ., tom. 20, p. 109, Ser. 5ª (t. 67).

1ª. **Excepcionante**—La jurisdicción federal solo procede si el excepcionante es el extranjero—Com., tom. 1, pág. 231, Ser. 5ª (t. 36).

**Excepcionante**—Véase: *Excepción de nulidad*, 3; *Excepción de falsedad*, 3.

1. **Escribano**—Los trabajos hechos por éste para obtener los certificados, pueden ser regulados por el juez que conoce en la testamentaria—Civ., tom. 21, pág. 293, Ser. 5ª (t. 68).

**Escribano**—Véase: *Árbitros*, 6; *Alegato*, 8; *Término*, 5; *Delito de falsedad*, 1; *Mandamiento*, 6; *Culpa*, 1.

1ª. **Escrito**—El presentado después de acusada rebeldía, debe ser devuelto—Com., tom. 9, pág. 375, Ser. 5ª (t. 25).

---

1ª. Ley 8, tit. 3, Part. 3ª.

1ª. El Cód. Civ. dispone en su art. 838, que si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos, no podrá hacerse válidamente sin presentarla al juez de la causa, firmada por los interesados, y que antes de esto ó antes de que acompañen la escritura en que ella consta, la transacción no se tendrá por concluida.

1ª. El art. 2.º de la ley de 14 de Sept. de 1863, determina la competencia de los trib. fed., para entender en los juicios entre un ciudadano argentino y un extranjero, estableciendo un privilegio á favor del extranjero, que en el caso del sumario había renunciado siguiendo al demandado en este fuero. No puede este privilegio ser invocado sino por la parte en favor de quien se ha establecido. Pero cuando éste demanda ante la jur. del reo, se presume que renuncia á ese privilegio—art. 12, inc. 4.º de la misma ley del 63.

1ª. Art. 45 del Cód. de Proc. Civ.



2. **Escrito**—El auto que concede la escarcelación bajo fianza en incidente, puede ser apelado en escrito presentado en el sumario—Crim., tom. 4, pág. 279, Ser. 5ª (t. 39).

3. **Escrito**—Debe devolverse el presentado después de vencido el término y acusada rebeldía—Civ., t. 9, p. 360, Ser. 5ª (t. 56).

4. **Escrito**—Debe devolverse el presentado después de acusada rebeldía—Civ., tom. 10, pág. 378, Ser. 5ª (t. 57).

5. **Escrito**—El escribano que ha puesto cargo á un escri-

2. La apelación fué deducida dentro del término señalado en el art. 398 del Cód. de Proc. Crim., y la circunstancia de formularse en un otrosí del escrito presentado en el cuerpo principal del sumario, no puede autorizar su improcedencia, porque los incidentes no son causas distintas é independientes de los autos principales, sino accesorios del mismo que si se separan de ellos, es únicamente para no entorpecer su substanciación; y este propósito no se impide por el hecho de apelar en los autos principales de una resolución dictada en el incidente, porque basta ordenar se ponga constancia en éste de la interposición del recurso, como sucede cuando se funda y se manda devolver el escrito por esa circunstancia—art. 303, Cód. de Proc. Crim.

3. En el mismo día en que se acusó rebeldía, pero con posterioridad, fué presentado el escrito del contrario. El juez Centeno, uno de los mejores magistrados que hemos tenido en la Cap., no hizo lugar á la rebeldía porque fué acusada el mismo día en que se presentaba el escrito de contestación á la demanda; y si bien en este caso el demandado había evacuado el traslado de la demanda cuando estaba ya vencido el término y la prórroga concedida al efecto, y horas después de acusada la correspondiente rebeldía, tal rebeldía no puede ser atendible porque debe reputarse acusada en el mismo momento legal en que el demandado hacía uso de sus derechos, pues para la ley los términos no se cuentan por horas ni por instantes, sino por días, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 del Cód. Civ. Si el magistrado incurrió en error fué debido á la misma Cám. de lo Civ., que tiene sentada esta misma doctrina en el t. 6, p. 433, Ser. 2ª.—Véase *Inst.*, t. 3, verb. *Rebeldía*, núm. 1, en cuya nota criticamos esta opinión contraria á la ley.

5. La noche del vencimiento del término para alegar, el interesado entregó el alegato á un escribano de registro: éste no hizo constar si recibió solo el escrito, ó si conjuntamente recibió el expediente. Entonces la Cám. ordenó que el escribano certificara sobre este punto. Por supuesto que el informe se espidió afirmativamente. Hemos sostenido que el cargo puesto por un escribano de registro, carece de efica-





to, puede informar sobre los puntos que no haya creído necesario hacer constar al recibirlo—Civ., tom. 14, pág. 106, Ser. 5ª (t. 61).

6. **Escrito**—La recepción del escrito por el secretario hace imposible su devolución, aun cuando fuera obligatorio acompañar copia—Civ., t. 17, p. 330, Ser. 5ª (t. 64).

7. **Escrito**—Si ha sido admitido en secretaría, la falta de copia no es causa legal para tenerlo por no presentado—Civ., t. 19, p. 52, Ser. 5ª (t. 66).

**Escrito**—Véase: *Delito*, 1; *Honorarios*, 3, 6, 21, 23; *Costas*, 7; *Escep. dilatoria*, 2; *Abogado*, 3; *Auto inapelable*, 1; *Cargo*, 1; *Sociedad*, 4; *Rebeldía*, 5, 13; *Revocatoria*, 1; *Término*, 3; *Copia*, 1; *Excepciones*, 13, 23; *Recusación*, 11; *Apelación*, 6; *Alegato*, 5, 7; *Apelable*, 2.

1ª. **Escrito testado**—Procede la testación íntegra del escrito si todo su contesto resulta deprimente é irrespetuoso—Com., t. 1, p. 108, Ser. 5ª (t. 36).

1ª. **Escritura**—Al que alega la falsedad de la escritura de venta por existir dolo ó fraude, corresponde justificarla—Civ., tom. 12, pág. 22, Ser. 5ª (tom. 59).

**Escritura**—Véase: *Disolución de sociedad*, 1; *Boleto de compraventa*, 1; *Contrato*, 32; *Defraudación*, 4; *Registro de comercio*, 1.

1ª. **Escritura de hipoteca**—La promesa de otorgarla sociedad legal; lo propio sostenemos respecto del informe, por las razones aducidas en el verb. *Actuario*, núm. 1, IXST. t. 7.

6. Art. 24 del Cód. de Proc. De acuerdo con la jur. Véase IXST., t. 8, verb. *Copias*, nº 6; t. 7, mismo verb., nº 1; t. 6, mismo verb., nº 1; t. 5, verb. *Copia*, nº 1, *Rebeldía*, nº 1, *Escrito*, nº 3, 4 y 5; t. 4, verb. *Copias*, nº 1.

1ª. Art. 56 del Cód. de Proc.

1ª. Arts. 993, 994 y 995 del Cód. Civ.

1ª. El actor se presentó diciendo que el demandado había recibido de él, una suma de dinero, para levantar un pacto de retroventa, con la condición de constituir sobre el mismo inmueble una hipoteca por la suma recibida. Se demandó el cumplimiento de la obligación, esto es, el otorgamiento de la escritura pública de hipoteca. El demandado se opuso fundándose en que lo que correspondía, era pedir la elevación á escritura del boleto acompañado, y no la del otorgamiento de la escri-



bre determinados bienes, importa una obligación de hacer la escritura de hipoteca, sin que sea necesario la previa escrituración del documento privado—Civ., tom. 18, pág. 167, Ser. 5ª (tom. 65).

#### 1. **Escritura pública**—La simulación de una escritura

tura hipotecaria. Se resolvió que procedía esto último porque los contratos que tengan por objeto establecer un gravamen sobre bienes inmuebles, como la hipoteca, por ejemplo, deben otorgarse en escritura pública, bajo pena de nulidad, con arreglo á los arts. 1148, inc. 1º, y 3128 Cód. Civ. El documento no establecía ningún gravamen, no es un contrato de hipoteca; en él se promete simplemente constituir una hipoteca en la oportunidad que se indica. No envuelve más que una obligación de hacer. Si el documento fuese un contrato de hipoteca, caería bajo la sanción de los arts. 1184 y 3128, Cód. Civ., que prescriben la forma pública. Siendo, como es el acto, una mera obligación de hacer, ha podido adoptarse la forma privada, sin incurrir en la sanción antes apuntada; siendo de notarse que en estos casos la forma verbal misma es admisible—arts. 1185, 1187, 1189 y 974, Cód. Civ. Tal convenio no es, pues, repugnante á la ley, y él debe cumplirse con sujeción al principio consagrado por el art. 1197, según el cual las convenciones hechas en los contratos ligan á las partes tanto como la ley misma. La jurisprudencia de la Cám., con que argumentaba el demandado, no es aplicable al caso. Esa jurisprudencia se basa en la disposición del art. 1184 principalmente, y ya hemos visto que este art. no rige al presente. La Cám. decía: «Cuando un contrato de compraventa se hace en forma privada, dicho contrato es nulo, con arreglo al art. 1184, inc. 1.º, Cód. Civ., y solo vale como obligación de hacer escritura pública del mismo contrato—arts. 1185 y 1187.—Mientras no se reduzca á escritura pública el contrato, no puede exigirse su cumplimiento, ó sea la escrituración á que se refiere el mismo art. 1184, inc. 11. Tales son los antecedentes legales que fundan la jurisprudencia de este Trib., en el sentido de que un contrato de compraventa otorgado en instrumento privado no vale sino como obligación de hacer, y de que no da á los contrayentes acción para pedir su cumplimiento, sin que antes se llene el requisito de forma señalado».

1. Seguida una ejecución contra un deudor, el hermano de éste se presentó deduciendo tercera sobre los bienes embargados. Á la que los ejecutantes contestaron alegando la nulidad de las escrituras por haber sido la enajenación hecha en fraude de sus derechos. Tratándose de la nulidad de actos simulados, la ley y la jurisprudencia han decidido, que para dar por probada la simulación, sólo se requieren presunciones que sean graves, precisas y concordantes, por lo que puede llamarse esta clase de prueba privilegiada. En el caso actual, se tenía



pública de venta de cosas muebles, que continúan en poder del vendedor, puede ser declarada por presunciones siendo ellas graves, precisas y concordantes, si la acción es deducida por terceros perjudicados por el acto—Com., tom. 4, pág. 120, Ser. 5ª (tom. 39).

## 2. Escritura pública—La existencia de la escritura ta-

primeramente que el comprador y vendedor eran hermanos. Las ventas hechas entre personas que reúnen estos vínculos de parentesco, no son generales por no ser presumible que entre ellos se trate de lucrar en esta clase de operaciones, porque sucede generalmente que las personas apuradas en sus negocios se valen de ellas ó de amigos íntimos para sustraer sus bienes á las responsabilidades de sus créditos pasivos—*inter proximos presumitur fraus*.—Constaba también, que el ejecutado había continuado como inquilino de la casa después de efectuada la escritura, y que seguía trabajando con las máquinas y herramientas que también se había vendido. El Dr. López Cabanillas decía: «Tal arrendamiento no se ha probado, ni intentado probar, y él no es más que uno de tantos subterfugios á que la simulación apela. En muchas circunstancias, dice Bedarride, núm. 1453, y para mejor colorar el fraude, la retención de la posesión se cubrirá con el pretexto de un arrendamiento consentido por el adquirente mismo ó por un intermediario que se habrá interpuesto para acreditar mejor la sinceridad de la operación. Pero la sublocación, como la locación misma, es rechazada por un motivo que nada tiene de legal, pero que sin embargo está fundado en la naturaleza de las cosas. En general, á nadie agrada verse á título mercenario sobre un bien que se posee á título de propietario y cuya vista incesante mantiene y aumenta el recuerdo de las contradicciones y sinsabores que lo han hecho salir de sus propias manos. La conducta contraria indica una dosis de filosofía que no á todo el mundo es dado poseer. Todo lo que no es natural, no es verosímil. Así, la existencia del arrendamiento en circunstancias semejantes, le hará sospechoso de no ser otra que el complemento necesario del fraude.» Hay también que tener en consideración el apresuramiento con que se procedió para vender las cosas, pues resultaba de las escrituras mencionadas que dichas ventas se habían efectuado el mismo día, recibiendo el vendedor una suma crecida de dinero, según se decía en la escritura. Estas ventas se efectuaban cuando las letras que servían de base á la tercera y la seguida en otro juicio estarían vencidas, si no hubiera sido por una moratoria solicitada, y que hubiera venido á demostrar que el ejecutado hacía una preferencia en favor de su hermano, en perjuicio de otros acreedores.

2. Se alegó de nulidad de una escritura celebrada en el año 1888, mientras que en la estación de prueba se presentó como tal una escri-

chada de falsedad, es requisito indispensable para que los tribunales puedan pronunciarse sobre la acción deducida—Civ., tom. 10, pág. 61, Ser. 5ª (tom. 57).

### 3. Escritura pública—La prueba testimonial no puede

tura de 1889, que comprendía otras prestaciones distintas de las expresadas en la demanda. Se trataba de escritura distinta de la que motivó la acción, y que no había sido materia de la litiscontestación, circunstancia que hacía de todo punto inútil, por no estar en tela de juicio dicha escritura. El sumario no expresa lo resuelto por la Cám.

3. Este sumario está equivocado, no sienta el principio resuelto por la Cám. Enablada una acción reivindicatoria de un inmueble, fundándose en la nulidad de la escritura de venta que decía haberse otorgado falsamente á su nombre, haciéndola aparecer como concurrente al acto, lo que era falso, pues no había estado presente, y porque sabiendo firmar, aparecía como que no sabía. El Dr. Saavedra, como Juez de lo Civ., decía al fundar su fallo, que fué confirmado por la Cám., por sus fundamentos, lo siguiente: «La procedencia de la acción deducida, depende de la prueba de la falsedad de la escritura de venta otorgada por la demandante á favor de D. Roque Bustinza, antecesor de la demandada, en la propiedad de la finca objeto del juicio. Si dicha escritura no es falsa, la actora ha perdido el dominio y, por consecuencia, carece del derecho de reivindicar—arts. 2609 y 2758 del Cód. Civ.—Ahora bien; toda la prueba producida para acreditar la falsedad de aquella escritura, consiste en los testimonios que obran en autos, y en la declaración del testigo Bustinza. Esta lejos de contribuir á acreditar el hecho alegado; sirve para demostrar su falsedad, puesto que el testigo asegura la efectividad de la venta y la concurrencia de la actora al otorgamiento de la escritura. Los testimonios referidos tampoco constituyen pruebas de la falsedad de la escritura. Todo lo que resulta de ellos es, que en la escritura de división de condominio efectuada por la actora, ésta aparece firmando, mientras que en la venta hecha á favor de Bustinza, ella declara no saber firmar. Pero, ¿la persona que concurrió á otorgar esa escritura era vendedor? Así lo asegura el escribano autorizando al dar fe del conocimiento de las partes. Luego, si ella fué quien efectuó la venta, ¿puede ésta dejarse sin efecto por no haber puesto su firma, cuando declaró ante el escribano que no sabía firmar? La negativa no es siquiera susceptible de duda. Al funcionario encargado de redactar la escritura, le bastaba conocer á las partes y aceptar su declaración de que no sabía firmar, porque es evidente que no estaba obligado á levantar informaciones para acreditar ese hecho. Constanto, pues, plenamente que la señora de Alvarado concurrió al otorgamiento de la escritura, y que declaró no saber firmar, como asimismo las demás enunciaciones que aquélla contiene—arts. 993 á 995 del





destruir la atestación del escribano público que afirma estar presente, la parte vendedora, al otorgamiento de la escritura de venta—Civ., tom. 13, pág. 203, Ser. 5ª (tom. 60).

4. **Escritura pública**—Si el obligado no comparece á firmar la escritura, el Juzgado no puede otorgarla—Civ., tom. 14, pág. 179, Ser. 5ª (t. 61).

5. **Escritura pública**—Las enunciaciones que sobre asis-

Cód. Civ.,—su validez no puede discutirse por la sola circunstancia á que antes me he referido. No habiéndose, pues, justificado la falsedad de la escritura en cuestión, resulta que la demandante carece de todo derecho sobre el bien que reivindica».

4. El demandado fué condenado á cumplir un contrato de compra-venta de un inmueble que había comprado. Pidiéndose la ejecución de la sentencia, se solicitó, se le intimara al comprador designara el escribano que debía otorgar la escritura dentro del plazo estipulado. El comprador no se presentó, entonces pidió el actor que de acuerdo con los arts. 626 del Cód. Civil, el juez designara el escribano, pues para la ejecución en la forma propuesta no es necesario violencia en el obligado —art. 629 del Cód. Civ. El juez no hizo lugar «por no ser procedente». La Cám. confirmó la resolución «por sus fundamentos». Es de ley que los fallos sobre cumplimiento de una obligación de hacer solo da nacimiento á daños y perjuicios.—Véase *IXST.*, t. 8, verb. *Daños y perjuicios*, n.º 8 y 27. Pueden verse además, t. 44, p. 361; t. 48, p. 125; t. 76, p. 206.

5. También este sumario está equivocado, pues la Cám. declaró lo que más adelante se verá. Se pidió la nulidad de una escritura pública, porque el escribano aseveraba falsamente que ella había sido redactada y firmada en presencia de las partes que concurrieron al acto, siendo así que ella fué firmada sin hallarse presente el escribano, ni los testigos del acto. El art. 993 del Cód. Civ., dispone que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil ó criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese denunciado como cumplidos por él mismo, ó que han pasado en su presencia. Según este art., un instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, circunstancia esta última que no ocurrió al presente. En efecto, el actor no había argüido de falsa la escritura pública. Por consecuencia, la escritura hace plena fe, debe producir todos los efectos que las partes tuviesen en mira, y subsisten en toda su integridad las obligaciones que por razón de ella contrajo el actor. Se objetó que la escritura adolecía de vicios de forma que causaban su nulidad. Pero, ocurre proponer esta cuestión: ¿Puede legalmente el demandante alegar en su beneficio esas irregularidades á cuya existencia contribuyó como actor del acto jurídico? Es evidente que no,



tencia de las partes contenga la escritura pública, no pueden ser destruidas por prueba testimonial, ni aun por las mismas partes que en ella han intervenido—Civ., tom. 15, pág. 254, Ser. 5ª (t. 62).

6. **Escritura pública**—El que ha concurrido á la formación de la escritura pública, no puede accionar contra su validez por falta de causa, en tanto no alegue las causales que determina la ley para declarar la nulidad—Civ., tom. 15, pág. 254, Ser. 5ª (t. 62).

7. **Escritura pública**—Al que alega su nulidad por existir dolo ó fraude en sus constancias, corresponde justificar plenamente su acción—Civ., t. 16, p. 112, S. 5ª (t. 63).

así resulta de la doctrina que fluye del art. 992 del Cód. Civ. En la nota que ilustra tal disposición, el codificador se expresa en estos términos: «Por otra parte, cuando las partes hacen extender un acto, es de la primera importancia que ellas y el oficial público lo redacten de manera que más tarde no venga á ser el origen de un proceso». Al lado de este deber de orden público, está la sanción de la ley, que no permite probar con las mismas personas que dan formas al acto, que no ha sido ejecutado fielmente, lo que pudo evitar el autor del acto, el oficial público y los testigos, si hubiesen cumplido sus primeros deberes. No era permitido, pues, probar con las mismas personas que dan forma al acto, que éste no había sido ejecutado fielmente; cuando el demandante contribuyó á dar forma al acto como autor de él. Resulta, pues, que mientras el instrumento no sea argüido de falso—art. 993, Cód. Civil—lo que no había ocurrido en el caso presente, hace plena fe de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplido por él mismo, ó que han pasado en su presencia perteneciendo á esta categoría precisamente, entre otras, las enunciaci-ones que se refieren á la existencia de las partes y de los testigos instrumentales.

6. Los arts. 499 y 501 del Cód. Civ. declaran que una obligación que carezca de causa no puede tenerse por válida; pero el art. 500 dispone que debe presumirse que la causa existe mientras el deudor no prueba lo contrario, aun cuando ella no se haya expresado; pero como se encontraba manifestada implícitamente la causa de la obligación en el instrumento relativo, se comprende hasta que punto débese ser exigente con el actor respecto á la prueba que debía producir.

7. Arts. 993, 994 y 995 del Cód. Civ.; Ley 1.ª, tit. 14, Part. 3.ª. La fe sobre ser desconocidos los hechos afirmados por el oficial público, no puede ser desconocida sino mediante prueba en contrario que acredite la falsedad y el fraude de las enunciaci-ones contenidas en la escritura.



**Escritura pública**—Véase: *Bienes embargados*, 2; *Muebles*, 1; *Contrato*, 21, 23, 28, 39, 41, 42, 45, 50; *Boleto*, 1; *Contrato de compraventa*, 6; *Boleto de compraventa*, 2, 3; *Obligación de hacer*, 3; *Simulación*, 5; *Escepción de espera*, 7, 9; *Pensión alimenticia*, 4; *Terceña*, 6; *Título*, 7; *Usufructo*, 1; *Boleto privado*, 2, 3; *Escepción de transacción*, 1; *Papel sellado*, 14.

1<sup>a</sup>. **Escrituración**—No procede la contratada por el causante, si alguno de los interesados en la herencia se opone—Civ., tom. 14, pág. 132, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 61).

2<sup>a</sup>. **Escrituración**—Si el demandado por escrituración manifiesta su conformidad, debe archivar el expediente—Civ., tom. 21, pág. 398 Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 68).

**Escrituración**—Véase: *Boleto de compraventa*, 1; *Contrato de compraventa*, 8; *Contrato*, 34; *Nulidad*, 23.

1<sup>b</sup>. **Escusación**—La recusación del juez debe ser expresa; no basta que las cuestiones á resolver puedan afectar subsidiariamente sus intereses para que proceda escusación—Com., tom. 9, pág. 365 Ser. 3<sup>a</sup> (tom. 25).

2<sup>b</sup>. **Escusación**—El parentesco entre el agente fiscal y un

1<sup>a</sup>. Porque mientras está indivisa la sucesión, también es indivisible la obligación, bastando para que no se cumpla, la oposición de uno de los codeudores solidarios—arts. 680 y 681 del Cód. Civ.—salvo las relaciones entre los deudores solidarios—art. 689.

2<sup>a</sup>. El demandado manifestóse conforme con la escrituración, indicando la oficina donde se encontraban los títulos de propiedad. El juez resolvió: «Hágase saber, sin perjuicio de proveerse lo que corresponda, y archívese». Existiendo perfecto acuerdo respecto del cumplimiento de lo pactado, no puede haber juicio.

1<sup>b</sup>. Las causas de escusación de un juez, son las mismas que las de recusación, y ésta debe ser deducida dentro de los términos fijados perentoriamente por el art. 369 del Cód. de Proc. Es doctrina corriente en esta materia, la de que, cuando la parte interesada no hace uso del derecho de recusación y consiente que el juez que se encuentra en uno de esos casos, falle y decida el pleito, no puede decir de nulidad de él, porque esto sería hacer revivir un derecho al que ha renunciado y del que ha podido desistir por ser introducido en su beneficio.

2<sup>b</sup>. Véase verb. *Agente Fiscal*, 1.

vocal de la Cám., no es causa de escusación en materia criminal—Crim., tom. 9, p. 48, Ser. 3ª (tom. 25).

3. **Escusación**—Solo procede con relación á los que son parte directa en el juicio—Civ., t. 10, p. 352, S. 5ª (t. 57).

4. **Escusación**—Puede tener lugar en cualquier estado

3. La escusación autorizada por el inc. 11 del art. 368 del Cód. de Proc., solo es de aplicación respecto de la parte directamente interesada.

4. Después de llamado «autos para sentencia», el juez se escusó alegando interés en el pleito por haber tenido conocimiento de ello con posterioridad á ese llamamiento. Pasado el expediente al juez que seguía en turno, éste se opuso alegando que las causas de escusación son las mismas de recusación—art. 368, Cód. de Proc.,—y no pudiendo deducirse esta última sino antes del llamamiento de autos para sentencia, tampoco podía hacerse uso de la primera después de dictado ese decreto, así lo tiene resuelto la Exma. Cám. en el juicio seguido por el Banco Constructor con don Pedro Gortlaud. La Cám. resolvió la cuestión en el sentido del sumario, porque el art. 384 del Cód. de Proc. prescribe, en términos generales, que todo juez que se halle en algunos de los casos de legítima escusación, se inhibirá, manifestando la causa. No puede obstar á la procedencia de la escusación, la circunstancia de haberse ella producido con posterioridad al llamamiento de autos, desde que el art. 384 citado no contiene limitación alguna. La restricción puesta por el art. 369, según la cual solo puede recusarse por las partes, con causa, hasta la citación para sentencia, es armónica con las disposiciones contenidas en los arts. 214, 215, 244, 245, 251, 268 y 269, Cód. de Proc., los que declaran cerrado el debate con el llamamiento de autos, de manera que los litigantes ya no pueden hacerse oír. Dada la inaplicabilidad de estos arts. á este caso, y atenta la generalidad de los términos en que está concebido el recordado art. 384, es indiscutible que los jueces están habilitados para escusarse hasta el momento de dictar su fallo. Sin embargo hay causales que no puede alegarse después del llamamiento de autos para sentencia. Así el hecho de emitir opinión un juez cuando la causa está en estado de sentencia, no es procedente, porque desde el momento en que un juez llama autos para resolver la cuestión debatida, empieza á estudiar el fondo de ella, formando su criterio judicial y fijando su opinión respecto del punto jurídico que tiene bajo su imperio; recién después de haber formado verdadera conciencia, emite su opinión respecto del caso *sub judice*, y procede á escribir su sentencia. Si esa opinión que tiene el juez respecto del litigio sometido á su imperio, y que la adquiere después de llamar autos para resolver, fuese bastante para escusarse de continuar conociendo, no habría ningún juez que no se encontrase en la obliga-







del juicio antes de la sentencia—Civ., tom. 18, pág. 108, Ser. 5ª (t. 65).

5. **Excusación**—La causal con relación al esposo, debe admitirse en los juicios en que la esposa sea parte—Civ., t. 19, pág. 65, Ser. 5ª (tom. 66).

6. **Excusación**—El haber intervenido como letrado uno de los secretarios del juez, no es causal de excusación del juez—Civ., t. 19, pág. 152, Ser. 5ª (t. 66).

7. **Excusación**—El hecho de ser el juez deudor de un Banco del Estado, no es causal de excusación—Civ., tom. 20, p. 152 y 153, Ser. 5ª (t. 67).

8. **Excusación**—El ser deudor de un Banco del Estado, no es causal de excusación—Civ., t. 21, p. 300, S. 5ª (t. 68).

9. **Excusación**—Procede, aun cuando las partes se manifiesten conformes en que continúe entendiendo el juez—Civ., tom. 22, pág. 451, Ser. 5ª (tom. 69).

**Excusación**—Véase: *Agente fiscal*, 1; *Recusación*, 6; *Sociedad anónima*, 3.

---

ción de excusarse, lo que imposibilitaría la solución de la cuestión en este caso.

5. Así se resolvió en atención á la especialidad del caso y á las vinculaciones que ante la naturaleza y el derecho existen entre marido y mujer.

6. Una vez que el secretario actuario ha cesado en su intervención, no hay base para la excusación. Un secretario puede influir en un sentido ó en otro, durante la tramitación de la causa. Pero una vez cerrada toda discusión, el secret. no tiene intervención alguna. No puede creerse tampoco que el juez pueda ser influenciado por el secret. respecto de la sentencia.

7. De acuerdo con la jur. Véase el núm. siguiente, y t. 79, p. 58; t. 91, p. 356. En contra, véase t. 66, p. 28.

9. En el juicio había menores interesados. A las causas enumeradas en el art. 368 del Cód. de Proc., no puede atribuírseles el carácter de relativas; legal y moralmente el juez no puede intervenir en un expediente, puesto que la prescripción del art. 384 es terminante é impone á los jueces el deber de inhibirse cuando se encuentran comprendidos en alguna de las causas enumeradas en el art. 368, y esta obligación no puede desaparecer por conformidad de partes, mucho menos cuando existen menores interesados.



1ª. **Escusión**—El firmante de un aval, no puede alegar el derecho de escusión—Com., tom. 4, pág. 193, Ser. 5ª (t. 39).

**Escusión**—Véase: *Aquileres*, 2.

16. **Espediente**—Declarada la incompetencia del fuero ordinario, no debe pasarse el expediente sino devolverse el documento—Com., tom. 3, pág. 304, Ser. 5ª (t. 38).

2ª. **Espediente**—Puede remitirse el expediente *ad effectum videndi*, si no existe punto pendiente de resolución—Civ., tom. 17, pág. 298, Ser. 5ª (t. 64).

3ª. **Espediente**—Si bien puede aceptarse de común acuerdo la incompetencia, no debe remitirse el expediente—Civ., tom. 20, pág. 160, Ser. 5ª (t. 67).

1c. **Espedientes**—No procede su agregación como parte de prueba—Civ., tom. 12, pág. 438, Ser. 5ª (t. 59).

2. **Espedientes**—No procede su agregación como prueba—Civ., tom. 14, pág. 143, Ser. 5ª (t. 61).

36. **Espedientes**—No pueden agregarse, aun cuando se haya accedido á la petición—Civ., t. 14, p. 262, Ser. 5ª (t. 61).

1ª. Citado de remate el ejecutado alegó que la acción no puede dirigirse contra él, mientras no se ejecuten los bienes del deudor y que la obligación había sido novada. El título ejecutivo era un pagaré á la orden suscripto por el ejecutado en calidad de fiador. Este era, pues, firmante del aval y por tanto responsable solidariamente del pago del documento. Por ello no puede invocar en su favor el beneficio de escusión que la ley civ. acuerda por regla general á los fiadores—art. 2012.

16. La remisión de los autos solo procede en los casos en que se produzca contienda de competencia—arts. 418 y 422 del Cód. de Proc.

2ª. Se ordenó la remisión de un expediente que no se tramitaba, aunque un incidente de él se encontraba en apelación ante el superior; ordenándose al propio tiempo que inmediatamente de que el estado del incidente lo requiera se pidiera la devolución del expediente principal.

3ª. De acuerdo con la jur. Véase *Ixsr.*, t. 7, verb. *Espediente*, n° 1 y 2.

1c. De acuerdo con algunos casos resueltos.—Véase t. 71, p. 262; t. 113, p. 158; t. 117, p. 40; t. 1, p. 499. *Ixsr.*, t. 8, verb. *Espediente*, n° 5. En contra: Véase t. 55, p. 282; t. 19, p. 277; t. 67, p. 209; t. 64, p. 298.

36. Solicitada la remisión, el Juez informó que no podía por hallarse en tramitación. Reiterada la petición por el interesado, algún tiempo después, no se hizo lugar, «sin perjuicio de que el Juzgado pueda ordenar en su oportunidad, la agregación del expediente, si lo estimase ne-



**Espedientes**—Véase: *Avaluación*, 2; *Firma*, 4; *Hurto*, 5; *Multa*, 2; *Tercería de dominio*, 1; *Transacción*, 2; *Delito*, 18; *Agente Fiscal*, 5; *Acusación*, 5; *Acumulación*, 1; *Recusación*, 11; *Prueba*, 24.

1<sup>a</sup>. **Espediente archivado**—Si el carácter que se invoca consta en él, debe pedirse testimonio—Civ., tom. 11, p. 356, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 58).

**Espensas**—Véase: *Divorcio*, 23.

1<sup>b</sup>. **Esperas**—Concedidas al deudor en la ejecución hipotecaria, están sujetas al impuesto de papel sellado—Civ., tom. 13, pág. 285, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 60).

**Esperas**—Véase: *Documentos*, 7.

1<sup>c</sup>. **Esposa**—Las injurias á la esposa son acusables por el

cesario, y en ejercicio de la facultad que le acuerda el art. 57, inc. 4.<sup>o</sup> del Cód. de Proc.»

1<sup>a</sup>. El expediente pedido se encontraba en el archivo. De la letra y el espíritu de los arts. 304 y 305 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., se desprende que los expedientes archivados no deben salir del archivo sino en casos especiales, bastando en lo general la expedición de testimonio de las piezas que los litigantes necesitaren en los juicios.

1<sup>b</sup>. La ley de sellos no grava con impuestos á las esperas, como no grava expresamente á las transacciones, pero no puede negarse que aquélla grava á los actos, contratos, documentos y obligaciones—art. 1.<sup>o</sup> de la Ley de 1893—entre los cuales debe contarse necesaria é indiscutiblemente las esperas, pues que ellas importan una obligación. La argumentaba diciendo de que, aplicar un impuesto á las esperas es contrario al espíritu de las leyes generales que tienden á evitar ó aminorar los pleitos, pues esto es tan insubsistente como el anterior, pues con la misma razón podría sostenerse que la ley de sellos es atentatoria de las relaciones civiles de los hombres en sociedad, por cuanto grava con impuesto á todas las obligaciones y á todos los contratos. La ley de sellos preceptúa que se extiendan en papel sellado correspondiente, todos los actos, contratos, documentos ú obligaciones, sin distinguir si éstos son ó no consecuencia de una obligación anterior.

1<sup>c</sup>. Se alegó que la facultad que el poder confería al apoderado se limitaba á las injurias inferidas al poderdante y no á su esposa é hija. Pero en el escrito de querrela se determina la naturaleza de dichas injurias, las que consistían en haberse propalado que esas personas eran prostitutas y su domicilio casa de prostitución. Es innegable que esta clase de injurias ofenden igualmente al marido y á su mujer é hija,



representante del marido, sin necesidad de poder directo de la ofendida—Crim., tom. 1, pág. 207, Ser. 5ª (tom. 36).

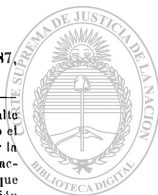
2. **Esposa**—Para que pueda concederse venia judicial para vender, la esposa debe justificar la imposibilidad de conseguir la marital y la necesidad de la enajenación—Civ. tom. 9, pág. 357, Ser. 5ª (tom. 56).

3. **Esposa**—Separada de hecho, no puede exigir del ma-

pues la honra y buena fama de éstas le interesan tanto ó más que la propia. En lo referente al calificativo del domicilio conyugal, el esposo es el más directamente ofendido, pues él es la cabeza del hogar, al que da su nombre, y el encargado de velar por su decencia. El apoderado, pues, que deducía en la forma espresada en la querella, la correspondiente acción contra los que hayan injuriado en los mencionados términos á la mujer é hija del poderdante, y designado el domicilio de éstas con un nombre que denigra la familia entera, obra dentro de las facultades y espíritu del mandato, pues tales injurias deben considerarse como inferidas directamente al querellante.

2. La venia que conceden los jueces es supletoria, viéndose por consiguiente, la mujer que pide semejante venia, obligada á probar la imposibilidad de conseguir la marital; esto se desprende de lo preceptuado en el art. 60 de la ley de mat.

3. Esta cuestión fué resuelta por la mayoría de la Cám. constituida en Trib. de interlocutorias, la que dijo: "Aun cuando no se trata de un juicio propiamente dicho, puesto que no se demandan alimentos definitivos, sino provisorios, y que en consecuencia bastan observarse trámites sumarisísimos; esto no obstante, es indudable que para decretarse una pensión alimenticia, aunque sea con carácter de provisorio, debe acreditarse plenamente el título ó derecho de quien lo solicita. Este es, al menos, un requisito exigido por el art. 602 del Cód. de Proc., y por consiguiente, debemos preocuparnos, ante todo, del título invocado por la peticionante. ¿Cuál es el título en cuya virtud la actora pide alimentos? La de ser esposa del demandado y estar separada de hecho. Pero un hecho ó varios hechos, no constituyen derecho sino en tanto que lo consagre la ley. ¿Y qué ley se cita que acuerde el derecho de pedir alimentos á la mujer voluntariamente separada de su marido? Ninguna, absolutamente ninguna, ni por parte de la actora, ni por parte del inferior, que más que aquélla, estaba obligado á citar la ley en que funda su resolución—art. 63, Cód. de Proc. La actora y el inferior no citan ley alguna porque en realidad no existe ninguna en que apoyarse, pues la separación voluntaria no es un estado legal que engendre derechos y obligaciones especiales. El marido y la mujer están recíprocamente obligados á vivir en una misma casa, en donde aquél fije



rido el pago de una pensión alimenticia—Civ., t. 9, p. 387, Ser. 5ª (tom. 56).

su residencia—art. 51 de la ley de mat.—y solo cuando el marido falta á esa obligación, la mujer tiene derecho á pedirle alimentos, pero el marido, á su vez, puede negarle esos alimentos cuando sea la mujer la que resista á vivir juntos—Véase, pues, como el único título que la actora pudiera invocar para pedir alimentos á su esposo, sería el de que éste no cumpla la obligación mencionada, y de su propia exposición resulta que es ella la que no se allana á vivir con su marido, obligación que no puede eludir sino mediante divorcio ó peligro para su vida, circunstancias ambas que no existen y que no han sido siquiera alegadas, ó que, en todo caso, han debido ser previamente declaradas en juicio diverso al instaurado. Y bien; desde que la actora no ha justificado el título en cuya virtud pide los alimentos, no puede sostenerse que se ha dado cumplimiento á lo preceptuado por el art. 602 del Cód. de Proc., y en consecuencia, la sentencia apelada que así lo declara, debe ser revocada. La minorfa sostuvo que: «Según resulta de autos, se han justificado los extremos requeridos por la ley—arts. 602 á 604, Cód. de Proc.—para la prestación de alimentos solicitados por la demandante. Todas aquellas personas que por la ley tengan derecho á pedir alimentos, dice el art. 602 cit., deberán presentarse al juez con los recaudos siguientes: 1.ª, justificación del título en cuya virtud los pida; 2.ª, justificación, aproximadamente, por lo menos, del caudal del que deba darlos. No exige la ley otra justificación, como no permite tampoco que en juicios de esta naturaleza, completamente sumarios, se admitan discusiones sobre el derecho á percibir los alimentos, desde que, por el contrario, expresamente dispone que cualquiera reclamación al respecto deberá ventilarse en el ordinario, debiendo entre tanto suministrarse los alimentos provisorios que se hubieran señalado, dice en el art. 607. Y bien; en el presente caso se ha justificado el título; es decir, la calidad de legítimo esposo de la demandante y los bienes de que dispone el demandado; y si bien de los autos resulta también una separación de hecho desde largo tiempo consentida por el marido, pienso que esta circunstancia no puede ni debe tomarse en consideración en este juicio á objeto de discutirse el derecho de la demandante, porque ello importaría contrariar abiertamente una disposición legal tan terminante é imperativa como la del art. 607 ya cit. Y debe agregarse, que el título en el presente caso, lo constituye la calidad de esposa que crea por la ley derechos y obligaciones recíprocas, entre ellas el de exigirse alimentos,—art. 51, ley de mat.—sin que aparezca entre las disposiciones de ésta, absolutamente ninguna, que establezca que cuando se ha producido una separación de hecho entre los esposos cese esa obligación, y mucho menos, cuando el marido teniendo el derecho de obligar á la mujer á habitar en su hogar donde quiera que fije



4. **Esposa**—La existencia de testamento á favor de la esposa, hace innecesaria la declaratoria judicial y la justificación del fallecimiento de los padres del causante—Civ., t. 10, pág. 400, Ser. 5ª (tom. 57).

5. **Esposa**—Si ha sido demandada está obligada á absolver posiciones—Civ., t. 10, pág. 405, Ser. 5ª (t. 57).

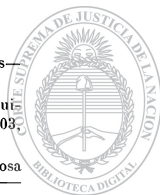
6. **Esposa**—Para que el juez conceda venia á la esposa

su residencia—art. 53—ha dejado de usar de las acciones que le correspondían al efecto, lo que bien podría constituir el abandono de la esposa». Estamos de perfecto acuerdo con esta última opinión. El art. 607 del Cód. de Proc., dice terminantemente: «No se admitirá en el juicio sumario sobre alimentos, discusión alguna sobre el derecho á percibirlos, ni sobre su entidad. Cualquiera reclamación sobre el particular deberá ventilarse en juicio ordinario, debiendo entre tanto suministrarse los alimentos provisorios señalados». Sin embargo, la jur. se ha manifestado indecisa acerca de este punto de derecho. De acuerdo con el sumario, puede verse: t. 4, p. 51; t. 69, p. 50; INST., t. 1, verb. *Separación de hecho*, núm. 2248.

4. El marido, en su testamento, instituyó á su esposa su única y universal heredera, institución que hace innecesaria la declaratoria de herederos, porque este requisito procede cuando no hay testamento.

5. De acuerdo con la jur. Véase INST., t. 8, verb. *Esposa*, núm. 3. Puede verse además, de acuerdo con el sumario: t. 135, p. 279 y 305; t. 78, p. 68; t. 58, p. 403, t. 71, p. 170; t. 94, p. 319; t. 57, p. 350 y 405; t. 52, p. 258; t. 122, p. 300; t. 85, p. 436. En contra: t. 124, p. 317; t. 129, p. 196; t. 20, p. 10; t. 19, p. 6; t. 18, p. 199; t. 13, p. 505; t. 4, p. 9; t. 13, pág. 6.

6. Según lo prescriben los arts. 59 y 60, ley de mat. civ., los jueces están facultados para suplir la autorización del marido con conocimiento de causa, cuando éste se hallare ausente ó impedido para darla á su esposa, en los casos que tal requisito es requerido por la ley. De tales disposiciones no se desprende que los jueces deban previamente mandar tasar los inmuebles para decidir de la venia que solicite la mujer casada á objeto de enajenar inmuebles de su propiedad. No son aplicables al caso las disposiciones contenidas en los arts. 441 y 442 del Cód. Civ., referentes á la enajenación de bienes de menores bajo tutela. Cuando de los bienes raíces de menores bajo tutela se trata, se explica y se justifica la formalidad de la transacción, como diligencia previa á la enajenación, supuesto que la venta se hace siempre en remate público con intervención del juez—art. 441—salvo la excepción prevista por el art. 442.



para vender, no es necesaria la tasación de los inmuebles—Civ., tom. 11, pág. 44, Ser. 5ª (tom. 58).

7. **Esposa**—Está obligada á absolver posiciones, si el juicio se ha iniciado contra ella—Civ., tom. 11, pág. 403, Ser. 5ª (tom. 68).

8. **Esposa**—Las medidas tendientes á conducir á la esposa

7. De conformidad con el núm. 5.

8. Esta cuestión fué resuelta por mayoría, fundándose ella en que la disposición contenida en el art. 67, inc. 7.º de la ley de mat. civ., esto es, en el abandono voluntario y malicioso que decía había hecho de ella el marido. La acción fué desestimada, absolviéndose al demandado. Antes de la promoción del juicio, los esposos se encontraban separados de hecho, situación que no se modificó por la sentencia, pues ésta se limitaba á decidir sobre el punto fundamental de la demanda de divorcio, es decir, sobre el abandono voluntario y malicioso alegado por la esposa, sin tratar, ni menos resolver nada acerca de la separación. Por manera, que el pedido tendiente á obtener que se intime á la señora la vuelta al hogar marital, no puede tomarse en manera alguna como una solicitud de ejecución de la sentencia. Esta resolvió que el marido no abandonó voluntaria y maliciosamente á su esposa, mientras que el escrito pide que la señora sea compelida á constituirse en el hogar marital. Según esto, ¿puede un juez dictar sin más trámite el auto haciendo lugar á ese pedido del esposo con prescindencia de la esposa? La negativa se impone en presencia de las disposiciones legales que rigen el caso. Las leyes que organizan el matrimonio han investido al marido, sin duda alguna, de una autoridad dirigente sobre su consorte, errándole á ésta una relación de dependencia para con aquél. Pero esa superioridad del marido sobre la mujer, establecida por razones que fácilmente se comprenden en el orden de la familia, no es ciertamente un despotismo odioso, antes bien tiene limitaciones que son otras tantas garantías para la esposa. Efectivamente, el art. 53 de la ley de mat. civ., dice: «La mujer está obligada á habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia. Si faltase á esta obligación, el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias y tendrá derecho á negarle alimentos. Los Tribs. con conocimiento de causa, pueden eximir á la mujer de esta obligación, cuando de su ejecución resulte peligro para su vida». Del contenido textual de este art., resulta: 1.º, que la mujer está obligada á habitar con su marido donde éste fije su residencia; 2.º, que si la esposa faltare á esta obligación, el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias; 3.º, que los Tribs., con conocimiento de causa, pueden eximir á la mujer de la obligación predicha, cuando de su ejecución resulte peligro para su vida. Así, si bien es verdad que la ley impone á la mujer la obligación de habitar con su mari-



al hogar conyugal, sólo pueden decretarse en el juicio correspondiente y con su intervención—Civ., tom. 14, p. 413, Ser. 5ª (t. 58).

9. **Esposa**.—No puede decretarse la detención de la esposa que abandona el hogar conyugal, sin su audiencia—Civ., tom. 13, pág. 132, Ser. 5ª (t. 62).

**Esposa**.—Véase: *Adulterio*, 2, 6; *Bienes de la esposa*, 1;

do, no es menos exacto que la exime de ella cuando de su ejecución resulte peligro para su vida. Ahora, cuando el art. cit. de la ley de mat. civ. consigna que el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias, toda vez que la mujer abandone el hogar, no le concede el privilegio de ser atendido sin citación de la esposa; ésta puede tener motivos para resistirse á cumplir con la obligación de referencia por existir en la ejecución peligro para su vida; entonces es imprescindible su intervención. Presentada la petición por el marido, debe dar intervención á la señora, oír sus defensas y excepciones, resolviendo en su caso, según correspondiese en justicia, el incidente. El art. 187 del Cód. Civ., disponía en su segundo inc., que el marido podía pedir las medidas policiales necesarias para obligar á la esposa á reintegrar el hogar marital; pero ese inc. ha sido reformado en el art. 53 de la ley de mat. civ., pues como se ha visto, éste establece que el marido puede solicitar medidas judiciales. De lo que antes era un mero procedimiento policial, el legislador ha hecho, por decirlo así, un procedimiento judicial, lo que vale decir que ha sometido la cuestión, sobre que dichas disposiciones legislan, á solemnidades y trámites congruentes con las seguridades y garantías acordadas á la esposa. «Juzgando el punto *sub judice*», decía la mayoría, sin previa sustanciación ó citación de la señora, se compromete un principio esencialísimo en materia procesal, cual es el derecho de la defensa». La minoría dijo: «Que aun cuando por regla general si la mujer se niega á dar cumplimiento á la obligación que le impone el art. 53 de la ley de mat., alegando hechos que justifiquen su resistencia, en los términos de la disposición citada, los Tribs. para proceder con conocimiento de causa, bien que sumariamente, deben oír á las partes recibiendo las pruebas que respectivamente presenten, esta última formalidad no es indispensable en el caso corriente, toda vez que, no se ha alegado ningún hecho nuevo que dé mérito á la resistencia de la esposa, puesto que únicamente se invocan los que han sido ya considerados en el juicio de divorcio definitivamente fallado. Que de consiguiente, el auto que ordena á la esposa constituirse en el hogar conyugal, es perfectamente arreglado, desde que él tiene por objeto hacer efectivo el derecho que el cit. art. acuerda al esposo». Véase *Insr.*, t. 7, ver. *Captura de la esposa*, 1.

9. De conformidad con la doctrina del núm. precedente.





*Abandono voluntario*, 1; *Alimentos provisorios*, 2, 3; *Depositorio*, 12, 16; *Depósito*, 2; *Divorcio*, 23, 27, 28, 41; *Domicilio*, 10; *Excepción de falta de personería*, 17; *Ausencia temporal*, 1; *Curatela provisoria*, 1; *Sociedad conyugal*, 3; *Embargo preventivo*, 38; *Separación de hecho*, 1; *Administración*, 10, 11; *Honorarios*, 31, 34; *Posiciones*, 72; *Documentos*, 23; *Inhabilitación de título*, 9; *Venia*, 2; *Alimentos*, 13.

1. **Esposo**—Que ha concedido venia, está obligado á absolver posiciones conjuntas con la esposa — Civ., tom. 10, pág. 330, Ser. 5ª (tom. 37).

2. **Esposo**—Para la declaratoria de único heredero á su favor, es indispensable justificar el fallecimiento de los padres de la causante—Civ., tom. 10, pág. 372, Ser. 5ª (tom. 37).

3. **Esposo**—Debe contestar por la esposa; la excepción de falta de personería en la demandada, es improcedente—Civ., tom. 10, pág. 399, Ser. 5ª (tom. 37).

**Esposo**—Véase: *Adulterio*, 2; *Curador provisorio*, 1; *Curador «ad-litem»*, 1; *Divorcio*, 6, 44, 47, 48; *Desistimiento*, 4;

1. El propósito de todo juicio debe encaminarse al averiguamiento de la verdad, siendo indiscutible el derecho de los litigantes para usar de todos los medios legales de defensa, á fin de obtener aquel resultado. En tal sentido, y dados los antecedentes expuestos del litigio, teniendo presente que el marido podía haber ejecutado actos como representante legal de la mujer; y por otra parte, que la acción fué dirigida contra ésta, no puede desconocerse el derecho de la parte para exigir que el primero absuelva posiciones, como asimismo la segunda con la venia de su esposo, ó la supletoria del juez en caso de oposición.

2. Porque si vivieran los padres, heredarían juntamente con el esposo: éste no sería *único* y universal heredero. Puede verse en el mismo sentido: t. 18, p. 208; t. 114, p. 158; t. 51, p. 132; t. 17, p. 124; t. 31, p. 395. En contra, véase t. 126, p. 393.

3. El esposo alegó la excepción, fundándose en que siendo dirigida la acción contra una mujer casada, no puede ella estar en juicio sin la venia de su marido. Basta enunciar este argumento, para comprender que no puede prosperar. En efecto, tratándose de una demanda contra una mujer casada, la cual puede ser contestada por ésta con la venia de su esposo ó por el mismo esposo en su carácter de representante legal, no importa dirigir la demanda contra ella obligándola á que comparezca personalmente en juicio, sino que sea contestada en la forma que establece la ley.



*Administración*, 5, 8, 10, 11; *Excusación*, 5; *Posiciones*, 67; *Venia*, 1.

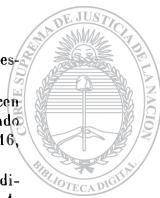
1<sup>a</sup>. **Esposos**—No debe prestarse aprobación judicial al convenio entre ellos, si por la ley son nulos—Civ., tom. 16, pág. 361, Ser. 5<sup>a</sup> (tom. 63).

**Esposos**—Véase: *Autenticación de documentos*, 1; *Divorcio*, 8, 24, 27; *Separación de hecho*, 3.

1<sup>b</sup>. **Esposa sobreviviente**—El acreedor de la sociedad

1<sup>a</sup>. El marido se presentó diciendo que en el testamento otorgado por su señora madre política, se le había hecho á él un legado de 10.000 nacionales, siendo instituida heredera en el remanente de los bienes la hija de la causante, esposa del peticionante. Que á fin de evitar gastos, había convenido con su esposa que en pago del legado se le entregara en propiedad una casa. Pedía aprobación judicial del convenio y posesión de la finca. No se hizo lugar, por oponerse á ello el art. 1213 del Cód. Civ.

1<sup>b</sup>. Suscripto un pagaré por ambos esposos se ejecutó á la esposa: en el momento de venderse los bienes embargados, fallece el esposo. El juez resolvió que la ejecución debía proseguirse contra la testamentaria del esposo, por tratarse de una deuda de la sociedad conyugal. La Cám. revocó la resolución fundándose en que la sociedad conyugal es una relación de derecho entre los esposos, pero no es una entidad que contrate y se obligue con terceros, aunque subsidiariamente los bienes que constituyen su capital estén afectados á determinadas responsabilidades. Cuando el marido ha contratado y se ha obligado, lo que es la regla general por ser el administrador legítimo de los bienes del matrimonio, producido el fallecimiento de la mujer, rara vez se ha ocurrido exigir que sus acreedores gestionen sus derechos en el juicio testamentario, y cuando lo han hecho, los Trib. han desestimado tal pretensión, como sucedió, en la testamentaria de Iriondo de Baraldo. Si esto sucede cuando el obligado es el hombre, por qué habría de procederse de distinta manera cuando la obligada es la mujer? Los arts. 1291 y 3284 del Cód. Civ. sobre cargas de la sociedad conyugal, sobre disolución de la misma y jurisdicción competente para el ejercicio de las acciones personales de los acreedores del difunto, no se refieren á este caso, en que se trata de un acreedor personal de la cónyuge sobreviviente, sin perjuicio de las acciones y derechos de la ejecutada emergentes del inc. 5º del art. 1275, Cód. Civ., para cargar á la sociedad conyugal las obligaciones cuyo cumplimiento se le exige personalmente y con sus bienes propios. Esta fué la opinión de la mayoría, la minoría sostuvo: «Que según resulta del documento se trata de una deuda contraída de mancomún por los esposos durante el matrimonio. Por lo tanto, dada



conyugal está obligado á continuar la ejecución contra la testamentaria—Civ., tom. 21, pág. 432, Ser. 3<sup>a</sup> (t. 48).

1<sup>a</sup>. **Espropiación**—Los Tribunales de la Capital carecen de jurisdicción para conocer en estos juicios, aun cuando exista conformidad de partes—Civ., tom. 21, pág. 16, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 58).

1<sup>a</sup>. **Estado civil**—La viuda, compradora en remate judicial, no está obligada á justificar el que invoca—Com., t. 1, pág. 134, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 36).

2. **Estado civil**—No procede información, sin justificar

la naturaleza de esta obligación, debe considerarse á cargo de la sociedad conyugal, con arreglo á lo dispuesto por el art. 1275 del Cód. Civ., y en tal virtud, habiendo fallecido uno de los deudores de esa obligación, es incuestionable la competencia del Juez de la sucesión para conocer de la gestión que se ha deducido por el acreedor, dado lo dispuesto por el art. 3284 del mismo Cód. Los antecedentes recordados por la mayoría ó sea el fallo pronunciado en los autos testamentarios de Iriondo de Baraldo, no son de aplicación, desde que en esa causa se trató de un crédito personal del esposo. El que contrata con un hombre casado, se dijo entonces, no contrata con la sociedad conyugal y no hay ley ni razón que obligue á los acreedores del marido á gestionar sus derechos contra la sucesión de su esposa. En el caso presente se trata de un crédito á cargo de la sociedad».

1<sup>a</sup>. Se trataba de una espropiación en que era parte el Ferrocarril del Oeste, que según ley de 24 de Nov. de 1891, debe ser considerado como nacional. Ahora bien, esta ley somete espresamente á la decisión de los Trib. federales las diferencias que con motivo de su aplicación se susciten. Por lo demás, el art. 2<sup>o</sup> de la ley de 14 de Sept. de 1863, dispone que los jueces nacionales de sección conocerán en las causas regidas por la Const. Nac. y por las leyes que sancionase el Congreso. Igual disposición se contiene en el art. 111 de la Ley Org. de los Trib., con la sola escepción de las leyes que se refieran al gobierno y administración de la Cap., entre las que ciertamente no se encuentra la relativa á espropiación de bienes, ley de carácter general obligatoria en todo el territorio de la Rep., y que, por consiguiente, el Congreso no la ha dictado procediendo como legislatura local.

1<sup>a</sup>. Se presentó la partida de defunción del esposo; pero el Juez quiso que también presentara la partida de matrimonio. La Cám. dijo que no había motivo para dudar de la capacidad civil para contratar de la que se decía viuda.

2. Para los efectos de constatar la filiación legítima, la ley consigna en primer término la prueba instrumental, no admitiendo la informa-



previamente la imposibilidad de presentar las partidas del estado civil—Civ., tom. 9, pág. 334, Ser. 5ª (t. 56).

3. **Estado civil**—Para reconocerlo, se requiere facultad especial en el poder—Civ., tom. 13, p. 146, Ser. 5ª (tom. 62).

1ª. **Estafa**—Por medio de falsificación de firmas, por mayor valor, debe ser castigado con cinco años de penitenciaría, si existe la agravante de tentativa de otra estafa—Crim., tom. 5, pág. 156, Ser. 5ª (tom. 40).

**Estafa**—Véase: *Cheque*, 1.

1ª. **Estampilla**—Debe inutilizarse con la fecha, ó se tiene por infringida la ley de sellos—Civ., t. 16, p. 312, S. 5ª (t. 63).

**Estampilla**—Véase: *Abogado*, 6; *Abogados*, 2; *Sellos*, 5.

1ª. **Estatutos**—La publicación de los de una sociedad anónima, solo es obligatoria en un diario—Com., tom. 5, p. 279, Ser. 5ª (t. 40).

**Estatutos**—Véase: *Defraudación*, 10.

**Estracción**—Véase: *Depósito judicial*, 1.

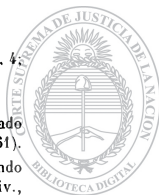
**Estranjero**—Véase: *Escepcionante*, 1; *Competencia*, 8;

ción de testigos, sino como supletoria, ó sea en defecto de aquélla—art. 114 de la ley de mat. civ.—En el caso del sumario no se había justificado la falta ó imposibilidad de presentar ó producir la prueba instrumental del caso.

1ª. Arts. 86 y 202, inc. 2º del Cód. Pen. Eran dos delitos de la misma especie cometidos contra la misma persona: se castigó el mayor, sirviendo el otro de circunstancia agravante.

1ª. La ley de papel sellado establece que los recibos por mayor suma de 20 § llevarán una estampilla de 5 cts. El decreto reglamentario dice que la estampilla debe inutilizarse con la firma ó con la fecha. Se ha suscitado la cuestión de saber, si se incurre en multa cuando la estampilla que lleva el recibo no se inutiliza en la forma prescripta por el decreto reglamentario. La resolución afirmativa se impone: 1º Porque la misma ley de papel sellado faculta al Poder Ejecutivo para reglamentarla. Luego el decreto tiene la misma fuerza legal que la propia ley. 2º Porque el P. E. tiene atribución para expedir «reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con escepciones reglamentarias»—art. 86, inciso 2º de la Const. Nac.—De aquí resulta, que el decreto reglamentario es tan obligatorio para todo ciudadano como la misma ley.

1ª. Véase verb. *Diario*, núm. 1.



*Contrato, 9; Excepción de incompetencia, 7; Jurisdicción, 4; Fuero federal, 2.*

**Evasiva**—Véase: *Demanda, 5.*

1. **Evicción**—El citado de evicción no puede ser obligado á intervenir en el juicio—Civ., t. 14, p. 250, Ser. 5ª (t. 61).

2. **Evicción**—Procede la citación de evicción, aun cuando la demanda de tercero no sea sobre reivindicación—Civ., tom. 20, pág. 164, Ser. 3ª (tom. 67).

1. La citación de evicción no es la demanda de evicción, sino el aviso formal de una demanda contra el que se pretende con derecho á reclamar en caso de ser vencido en el juicio. Esa citación no tiene otro objeto que llenar la formalidad prescripta por el art. 2110 del Cód. Civ., á fin de que el demandado, si fuere vencido, pueda hacer efectivos sus derechos por la evicción. Por consiguiente, los jueces no pueden resolver, en la citación de evicción, si el citado está ó no obligado á defender, porque esto es materia del juicio de evicción si llega á producirse. Manifestando el demandado que no se hace parte en el juicio, no puede obligársele á que intervenga, cuando no es la parte demandada; sin perjuicio de hacer efectivas en oportunidad sus obligaciones, como enajenante, si el demandado fuese vencido y él estuviera obligado á responder de la evicción que sufra.

2. Hubo disidencia al resolver este punto en la Cám. La mayoría sostuvo que uno de los principales objetos de la citación de evicción es salvar los derechos del adquirente para que pueda ejercitarlos contra su enajenante, si fuese vencido en el juicio que se le promueva. Estos derechos, por identidad de razón, puede á su vez ejercitarlos el adquirente demandado contra los que le hubieran transmitido la cosa sobre que versa el pleito, para prevenir la sanción que determina el art. 2110 del Cód. Civ. Por otra parte, la disposición del art. 2108 del mismo Cód. no se limita á los casos que en la misma se enumeran, pues si así fuera, la limitación debería constar espresamente. La minoría alegó: «Que la obligación impuesta por la ley de citar de evicción al enajenante, solo se refiere al adquirente demandado en juicio por terceros—art. 2108 del Cód. Civ.—Que esa obligación ya ha sido cumplida por el demandado al citar al enajenante, encontrándose, por consiguiente, llenado el propósito de la ley, aun con respecto á los anteriores enajenantes, por las responsabilidades emergentes de la evicción. Por otra parte, el alcance del art. 2108 está explicado por el codificador con la nota ilustrativa del art. 2109, dándole un carácter taxativo, por lo que no puede estenderse la facultad de citar de evicción al que lo es por el comprador, como se pretende, sin caer en las dificultades de las que el codificador se ha aportado espresamente y que menciona en la citada nota».



**Evicción**—Véase: *Acarreador*, 3; *Citación de evicción*, 1.

**Excedente**—Véase: *Contrato*, 49.

1. **Exhorto**—Debe librarse para la declaración del testigo que se ausenta, aun después de vencido el término—Civ., tom. 17, pág. 288, Ser. 5ª (tom. 64).

2. **Exhorto**—No debe reiterarse el exhorto después de vencido el término, si no se justifica que la falta de diligenciamiento no es imputable al que lo solicita—Civ., t. 21, p. 290, Ser. 5ª (tom. 68).

3. **Exhorto**—Si no contiene los recaudos necesarios, no

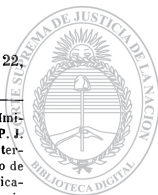
1. El testigo fué presentado dentro del término y citado en el domicilio denunciado. Después se ausentó. Parece obvio que no pueda privarse de esta declaración á la parte, pues es un hecho que no puede imputarse á nadie, y ajeno en absoluto á la voluntad del que lo presentó.

2. Se denegó la reiteración, porque no constaba en autos que la parte hubiese urgido el diligenciamiento, ó puesto en conocimiento del juez, en tiempo oportuno, las causas que obstaban á dicho diligenciamiento—art. 418 del Cód. de Proc.

3. El juez de 1.ª Inst. del Uruguay, provincia de Entre Ríos, dirigió un exhorto, en el que se leían estas palabras: «Saluda y hace saber: Que en cumplimiento de resolución recaída en esta fecha en un escrito de demanda presentado, se ha resuelto dirigir á V. S. el presente exhorto para que se sirva ordenar se mande tomar razón en la oficina respectiva, de haber sido inhibido de poder disponer de sus bienes el demandado, á los fines de responder con ellos á las resultas del juicio.» El demandado, así que tuvo noticia de que se había mandado dar cumplimiento al exhorto de la referencia, solicitó que se dejara sin efecto la inhibición ya anotada, alegando que una medida de tal gravedad no debía mandarse cumplir cuando se había omitido circunstanciar los hechos que servían de base á la demanda; de modo que no podía saberse si se trataba de una acción real ó personal que hiciera procedente la inhibición, ni por consiguiente apreciarse por el juez exhortado si afectaba ó no en alguna manera la jurisdicción de que está investido. Esta petición fué desestimada, invocando el precepto del art. 4.º de la ley de 26 de Octubre de 1863, que establece que los actos públicos, procedimientos, sentencias y demás documentos de se habla en los arts. anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, merecerán tal fe y crédito y surtirán tales efectos ante los Tribs. y autoridades de la provincia de donde procedan. No puede entenderse que tenga tan vasto alcance el precepto relacionado como para obligar á los jueces á admitir sin discusión ni examen cualquiera orden ema-

puede ordenarse la inhibición en él pedida — Civ., tom. 22, pág. 427, Ser. 5ª (tom. 69).

nada de los Tribs. de otra localidad que deba tener efecto en los límites de la jurisdicción que les está asignada por las leyes org. del P. J. La jurisdicción es la potestad de administrar justicia dentro de determinada extensión territorial, y ha sido instituida, no en beneficio de los magistrados, sino de las personas que viven y se encuentran radicadas dentro del territorio á que esa potestad alcanza; crea un privilegio en el que los habitantes deben ser amparados, y este concepto ha sido elevado á la categoría de cláusula constitucional, pues en el art. 18 se establece que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Aunque se diga que esto concierne al orden penal, nunca podrá demostrarse que en el orden civil pueda procederse de distinta manera. Si tal es la jurisdicción, si ella radica en razones de orden público, ninguna ley prudente y bien inspirada ha podido tener el propósito de hacerla ineficaz, y anulada quedaría si los jueces no pudieran defender y amparar á las personas que se encuentran sometidas á su jurisdicción contra los avances que magistrados de otros territorios pudieran por error cometer en detrimento de esas personas. Si se pensara que dentro de los límites de la Nación no es requerida la división de los poderes que la jurisdicción implica, se incurriría en un error, porque nuestra carta fundamental ha reconocido que existen jurisdicciones locales, como lo prueba el art. 67, inc. 11, de la Const. Nac., que establece que el Congreso dictará los Cód. Civ., Com., Pen. y de Minería, sin que altere las jurisdicciones locales, como lo confirma el art. 105, que prescribe que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, y como lo corrobora el art. 5.º, que exige como condición para que el Gobierno Federal garantice el régimen institucional de las provincias, que éstas dicten una Const. que asegure, entre otros beneficios, la administración de justicia. El art. 4.º de la ley del 63, debe entenderse entonces con la limitación que impone este orden de ideas, es decir, que los procedimientos, sentencias y demás documentos de que hablan los arts. que le preceden, surtirán tales efectos ante los Trib. y autoridades existentes dentro del territorio de la Nación, en cuanto no afecten á las atribuciones de los Trib. solicitados para darles efecto y cumplimiento. Por eso es de práctica mandarse cumplir los exhortos en cuanto no afectan la jurisdicción del juez ó Trib. exhortado. Esto es lo esencial; y tratadistas y leyes positivas recomiendan, siempre que de actos de esta naturaleza se ocupan, que lo primero que ha de observar el juez á quien se le encomienda una diligencia, es investigar si su jurisdicción no se encuentra perjudicada. Ahora bien; ¿cómo podrá resolverse tan capital cuestión? Únicamente consignándose en el exhorto, no solo el nombre de los litigantes, sino también



**Exhorto**—Véase: *Domicilio*, 6; *Apoderado*, 6; *Posiciones*, 37, 64.

1<sup>a</sup>. **Exhortos**—No deben librarse, si la parte no presenta los datos necesarios—Civ., tom. 14, pág. 257, Ser. 5<sup>a</sup> (t. 61).

1<sup>b</sup>. **Exhorto librado**—Puede fijarse término á la parte para su presentación—Crim., t. 9, p. 109, S. 3<sup>a</sup> (t. 25).

la índole del juicio y naturaleza de la acción deducida. Generalmente se exige algo más, y ello consiste en la transcripción literal del auto cuyo cumplimiento se requiere,—véase art. 309, inc. 2.º, Proyecto de Cód. de Proc.—lo que parece muy oportuno. Los jueces deben fundar sus autos en la ley, y en defecto de ésta, en la doctrina jurídica aplicable al caso. Transcribiéndose un auto que llene estos requisitos, es como puede saberse si la medida que se trata de cumplir produciría efectos en el lugar donde ha sido dictada, y esta es circunstancia que el art. 4.º de la ley antes citada prescribe como condición de su eficacia. Si el exhorto que debe diligenciarse no deja ver si por él se afecta la jurisdicción de los Trib. de la Cap., ni los efectos que podría producir en las provincias, no puede él cumplirse.

1<sup>a</sup>. El interesado pidió el término extraordinario, sin espresar el nombre de los testigos, el domicilio fijo en el extranjero, el interrogatorio y demás recaudos. Estos antecedentes no son necesarios cuando se pide dicho término—art. 114 del Cód. de Proc.—Pero son de absoluta necesidad para que el exhorto pueda librarse, pues las partes deben sujetarse para esto, á todas las formalidades y procedimientos exigidos para la prueba en general: siendo esta así, es necesario dar cumplimiento á lo dispuesto en los arts. 181 y 184 del Cód. de Proc.

1<sup>b</sup>. Con el objeto de no demorar indefinidamente la sustanciación del pleito.

